PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 12

Tomo IV

Noviembre de 2014

Tribunales Colegiados de Circuito
y Normativa y Acuerdos Relevantes

México 2014

Impreso en México
Printed in Mexico

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

La compilación y edición de esta Gaceta estuvieron a cargo
de la Coordinación de Compilación y
Sistematización de Tesis de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 12

Tomo IV

Noviembre de 2014

Tribunales Colegiados de Circuito
y Normativa y Acuerdos Relevantes

México 2014

DIRECTORIO

Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis:

Cielito Bolívar Galindo
Coordinadora

Erika Arellano Hobelsberger
Subdirectora General de Compilación
del Semanario Judicial de la Federación

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Presidente: Ministro Juan N. Silva Meza

PRIMERA SALA

Presidente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministros José Ramón Cossío Díaz
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

SEGUNDA SALA

Presidente: Ministro Luis María Aguilar Morales

Ministros José Fernando Franco González Salas
Margarita Beatriz Luna Ramos
Alberto Pérez Dayán
Sergio A. Valls Hernández

QUINTA PARTE
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

SECCIÓN PRIMERA
JURISPRUDENCIA

Subsección 1.
POR REITERACIÓN

ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

AMPARO DIRECTO 109/2014. 29 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUADALUPE OLGA MEJÍA SÁNCHEZ. SECRETARIO: LUIS MANUEL FIESCO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Bajo esa estructura, previamente al análisis de los conceptos de violación expresados por la solicitante del amparo, atento a lo dispuesto por el normativo 189, párrafo último, de la ley de la materia, no se aprecia algún vicio de fondo del que pudiera derivar la extinción de la acción persecutoria o la inocencia de aquélla, que sea de estudio preferente.

Precisado lo anterior, los conceptos de violación que hace valer la quejosa, son infundados.

En principio, debe decirse a la disconforme que no está justificada y, por tanto, es infundada la solicitud de interpretación directa de las normas convencionales que pide en el concepto de violación destacado con el inciso a).

Ello es así, porque si bien es cierto que, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con ésta y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas

la protección más amplia, principio en materia convencional, que está previsto en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual reconoce que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como sustento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional, coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos.

También lo es que como se ha referido en líneas precedentes y se itera, la aplicación del control *ex officio* en materia de derechos humanos, es una herramienta de interpretación subsidiaria o complementaria del sistema jurídico mexicano, cuyo uso está condicionado a mejorar la norma que la integra, para maximizar la defensa de los ciudadanos, pero únicamente cuando el derecho interno no alcanza para ese fin.

Lo que significa que la aplicación del mencionado control se realiza en suplencia de la deficiencia de la normativa interna; por lo que, evidentemente el juzgador no debe acudir directamente a la norma internacional para buscar respuesta al asunto, en virtud de que, antes, por elemental lógica y preferencia del derecho interno, tiene que analizar cómo está regulado el derecho humano cuestionado en los contenidos que existen en las reglas y principios constitucionales, así como en la legislación doméstica, para que, una vez que se determine mediante los razonamientos respectivos que el derecho fundamental no está protegido o, si lo está, no es suficiente en favor de la persona, se justifique que proceda a realizar el control de convencionalidad *ex officio*.

De no concebirse así el método, aquél podría aplicarse sin restricción alguna y entonces, acudir de manera directa a la normativa internacional para resolver el caso, sin antes ponderar y justificar la insuficiencia o imperfección del derecho interno, esto es, sin considerar siquiera el sistema jurídico de cada Estado y, por ende, dar una connotación absurda a la figura jurídica del control de convencionalidad *ex officio*, con una alta probabilidad de excluir la optimización de los derechos humanos a que se refiere el propio artículo 1o. constitucional, ante el abuso en el empleo de esa institución.

Inclusive, porque generalmente los sistemas jurídicos nacionales prevén una serie de formalidades e instancias para que el gobernado haga valer sus derechos y se reparen sus posibles violaciones; de modo que de acudirse directamente al control directo de convencionalidad, tácitamente se estaría desconociendo el sistema de derecho existente.

En este orden de ideas, debe decirse a la quejosa que el derecho fundamental al debido proceso encuentra tutela en nuestro marco jurídico nacional,

precisamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 14 indica que: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."

Y resulta que el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, norma materialmente aplicable al caso, data de mil novecientos treinta y uno (antes de que ocurrieran los hechos imputados a la aquí quejosa), establece una serie de formalidades esenciales que habrán de tener lugar en la integración de una averiguación previa.

Por lo tanto, al estar preservado el referido derecho humano en nuestra legislación, es innecesario acudir directamente a la interpretación que al respecto ofrece el derecho internacional, porque primeramente debe ponderarse la transgresión o no al derecho fundamental que la quejosa considera quebrantado, bajo el tamiz de la legislación nacional.

Máxime que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 138/2011,[1] pronunciada por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, definió que en la etapa de averiguación previa, las transgresiones cometidas durante esta fase constituyen violaciones procesales; por lo tanto, bajo la perspectiva anotada, corresponde su análisis a la luz del juicio de amparo, en términos del vigente artículo 173, en relación con el diverso 77, de la ley de la materia, considerando que los indicados numerales tienen como finalidad reparar, en el amparo directo, la transgresión a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución General de la República.

Sentado lo anterior, por cuestión de método, en virtud de que la solicitante del amparo se duele de violaciones procesales que aduce se cometieron en la averiguación previa, su estudio es preferente porque de acuerdo con el principio de mayor beneficio que tutela el juicio de amparo, de resultar ello fundado, haría innecesario el análisis de sus demás argumentaciones.

Así, en acatamiento a lo que establece el criterio emitido por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, citado con antelación, en primer término se

---

[1] "AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.", página 2056; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época; Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011, registro IUS 160612.

analiza el concepto de violación, en donde la peticionaria de garantías expone que las actuaciones del Ministerio Público están viciadas porque se extendieron en papel carta y no en oficio, como dice, lo dispone el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por lo que afirma, son nulas de pleno derecho.

Pues acorde a tal criterio, las violaciones que se lleguen a producir en la fase de averiguación previa se encuentran contenidas dentro de la categoría de "violaciones procesales", en términos del vigente artículo 173, antes 160 de la Ley de Amparo, de acuerdo a la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado a tal disposición, a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, y el tres de julio de mil novecientos noventa y seis; para lo que dijo atender a que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue precisamente que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de averiguación previa, al haber hecho alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de los derechos contenidos en el artículo 20 constitucional.

Ello en tanto fue una intención meramente garantista lo que movió al legislador federal a establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del anterior artículo 160, hoy XXII del dispositivo 173, los casos análogos a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, y que en dicho supuesto pueden ubicarse las violaciones a derechos fundamentales observables en la averiguación previa, consistentes, según enuncia, en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión al derecho de defensa adecuada.

Se transcribe al efecto el invocado criterio, con el rubro y texto:

"AVERIGUACIÓN PREVIA. LAS TRANSGRESIONES COMETIDAS DURANTE ESTA FASE CONSTITUYEN VIOLACIONES PROCESALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 160 DE LA LEY DE AMPARO.—Para determinar si la categoría de 'violaciones procesales' contenida en el artículo 160 de la Ley de Amparo es aplicable a las cometidas durante la averiguación previa, es necesario interpretar tal disposición a la luz de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993 y el 3 de julio de 1996; de las que se colige que la intención del Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue que dentro de la indicada categoría se comprendieran las violaciones cometidas durante la fase de ave-

riguación previa. Ello es así, toda vez que dicho órgano hizo alusión a un concepto amplio de juicio de orden penal para efectos de las garantías contenidas en el artículo 20 constitucional, señalando que éste prevé tanto la fase jurisdiccional (ante el Juez) como la previa (ante el Ministerio Público). Por lo anterior algunas de las garantías antes reservadas para la etapa jurisdiccional ahora deben observarse en la averiguación previa, criterio que se refuerza si se toma en cuenta que el indicado artículo 160 tiene como finalidad reparar, en el amparo directo, la violación a las garantías individuales contenidas en los artículos 14 y 20 constitucionales, pues todo el listado de violaciones se traduce en la vulneración de aquéllas. Además, no debe pasarse por alto la intención garantista del legislador federal, al establecer como violaciones procesales en la fracción XVII del citado artículo 160, los casos análogos precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, supuesto en el que pueden ubicarse las violaciones a las garantías individuales observables en la averiguación previa, consistentes en la obtención de pruebas ilícitas, la negativa para facilitar al inculpado los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso, así como la transgresión a la garantía de defensa adecuada, violaciones que no ameritarían la reposición del procedimiento, sino la invalidez de la declaración obtenida en su perjuicio o la de la prueba recabada ilegalmente, en tanto que su estudio necesariamente implicaría la interpretación directa de preceptos constitucionales."

En esa virtud, se impone señalar que los argumentos que al respecto se hacen en la primera parte del concepto de violación que se atiende, destacado con el inciso a), resultan infundados por lo siguiente:

Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto al debido proceso que en el caso se traduce a observar las formalidades esenciales del procedimiento; el derecho de que los Jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional; el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, se tiene en cuenta que la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional, en tanto que el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en su interpretación a contrario sensu, prevé que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida.

Sin embargo, de la interpretación armónica del artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal –dispositivo en el que la que-

josa pretende fundar su derecho y demostrar que las actuaciones del Ministerio Público son nulas de pleno derecho porque no se plasmaron en papel oficio, sino en carta y que por esto no se les puede otorgar valor probatorio–, con el resto de los artículos que se encuentran en el capítulo segundo, denominado "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", se puede advertir de manera natural que éste se refiere propiamente a las formalidades de las actas que en auxilio del Ministerio Público lleva a cabo la Policía Judicial al recibir, en los casos que ahí se contemplan, las denuncias correspondientes cuando tengan conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio; por ello, la interpretación que hace la quejosa no tiene el alcance que pretende.

En efecto, el título segundo denominado "Diligencias de averiguación previa e instrucción", Sección segunda "Diligencias de averiguación previa", Capítulo II "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", contiene los artículos del 274 al 286 bis; ordenamientos que respecto del tema que interesa, establecen lo siguiente:

"Artículo 274. Cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, levantará una (sic) acta, de la cual informará inmediatamente al Ministerio Público, en la que consignará:

"I. El parte de la policía, o en su caso, la denuncia que ante ella se haga, asentando minuciosamente todos los datos proporcionados por uno u otra;

"II. Las pruebas que suministren las personas que rindan el parte o hagan la denuncia, así como las que se recojan en el lugar de los hechos, ya sea que se refieran al cuerpo del delito o a la probable responsabilidad de sus autores; cómplices o encubridores, y

"III. Las medidas que dictaren para completar la investigación."

"Artículo 275. Cuando el delito que se ponga en conocimiento de la Policía Judicial sea de aquellos que menciona el artículo 263, aquella orientará al querellante para que acuda a presentar la querella ante el agente del Ministerio Público que corresponda."

"Artículo 277. Las actas se extenderán en papel de oficio, autorizándose cada hoja con el sello de la oficina e insertándose en ellas las constancias enumeradas en el artículo 274, las diligencias de ratificación o de reconocimiento de firma y de todas las determinaciones o certificaciones relativas. Además, se agregarán los documentos y papeles que se presenten."

"Artículo 278. En las oficinas de Policía Judicial, se llevarán los libros necesarios para dar entrada a los asuntos que se tramiten y se formará expediente con copia de cada acta y con los demás documentos que se reciban, dejando copia de éstos últimos cuando fuere necesaria la remisión de los originales."

"Artículo 281. Las diligencias que se practiquen deberán ser breves y concisas, evitándose vacíos y narraciones superfluas que alarguen los procedimientos."

"Artículo 282. Cerrada el acta, se tomará razón de ella y el agente del Ministerio Público procederá con arreglo a sus atribuciones."

"Artículo 284. El Ministerio Público o sus auxiliares asentarán, en el acta que levanten, todas las observaciones que puedan recoger acerca de las modalidades empleadas al cometer el delito."

"Artículo 285. Los mismos servidores asentarán también en dicha acta todas las observaciones que acerca del carácter del probable responsable hubieren recogido, ya sea en el momento de cometer el delito, ya durante la detención, o bien durante la práctica de las diligencias en que hubieren intervenido, incluyendo el grupo étnico indígena al que pertenecen, en su caso."

"Artículo 286. Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la Policía Judicial, tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de este código."

Del artículo 277 del ordenamiento legal en cita, no se advierte una formalidad relativa al tipo de papel (oficio) en que se realizarán las actas ante el Ministerio Público como lo pretende hacer valer la quejosa, sino al proceder de la Policía Judicial al levantar actas, cuando en determinadas condiciones ello le incumbe.

En efecto, la transcripción anterior muestra que cuando la Policía Judicial tenga conocimiento de la comisión de un delito que se persiga de oficio, y sólo cuando por las circunstancias del caso, la denuncia no puede ser formulada directamente ante el Ministerio Público, esa autoridad de seguridad está facultada para levantar una acta con los requisitos que precisa el numeral 274 del código adjetivo de la materia, de la cual debe informar inmediatamente al Ministerio Público.

En cambio, si se trata de un delito perseguible por querella de parte ofendida, el numeral 275 del propio código procesal, prevé que la Policía Judicial debe orientar al querellante para que acuda a presentar el aludido requisito de procedibilidad, ante el agente del Ministerio Público que corresponda.

Ahora bien, en secuencia lógica de procedimiento, el dispositivo 277 del código adjetivo de la materia y fuero dispone el modo en que las actas que levante la Policía Judicial en los supuestos legales respectivos (en tratándose delitos que se persiguen de oficio) deben llevarse a cabo, esto es, extenderse en papel "de oficio", lo que en armonía con lo previsto por el dispositivo 274, quiere decir que se trata de un trámite que debe realizar la autoridad (Policía Judicial), sin que medie actividad de parte interesada.

Mas no como señala la quejosa, que tal frase significa que las actuaciones se tienen que inscribir sólo en papel tamaño oficio.

Lo cual se corrobora con lo que se establece en el capítulo segundo, denominado "Reglas especiales para la práctica de diligencias y levantamiento de actas de policía", y el numeral 278 de la citada ley, que expresa que en las oficinas de la Policía Judicial se llevarán los libros necesarios para dar entrada a los asuntos que se tramiten y se formará expediente con "copia de cada acta" y con los demás documentos que se reciban, dejando copia de estos últimos cuando fuere necesaria la remisión de los originales.

Además, la interpretación que da la quejosa al dispositivo citado tampoco tiene el alcance que aduce, porque las actuaciones a que se refiere como "las actas", como se dijo, son aquellas que levante la Policía Judicial cuando reciba las denuncias correspondientes, no el Ministerio Público.

No obstante lo anterior, aun en el hipotético caso en que asistiera razón a la peticionaria de garantías, es decir, que por "las actas" a que se refiere el artículo 277 del código adjetivo de la materia y fuero, también se quiera aludir a las actuaciones que realice el Ministerio Público en la averiguación previa, y si en el caso, el resultado de ellas se estampó en hojas tamaño carta, tal formalidad, por sí misma, no tiene el alcance para determinar que lo ahí asentado es nulo de pleno derecho ni que las actuaciones así efectuadas se trate de prueba ilícita, porque el valor probatorio de las diligencias realizadas por el Ministerio Público no depende del tipo o tamaño del papel en que éste las deje plasmadas, sino que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para llevar a cabo su desahogo; máxime que en las actuaciones que realizó el representante social, consta el sello de la dependencia, la fecha en que se desarrollaron las diligencias y la firma de las personas que las autorizan.

De ahí que, por el hecho de que tales actuaciones ministeriales se encuentren asentadas en papel tamaño carta, carezcan de validez legal o contravengan las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del párrafo segundo del artículo 14 constitucional, pues además de no estar consideradas

así por los artículos 173 de la Ley de Amparo, y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tampoco transgrede la garantía de defensa contemplada en el artículo 20, fracción X, de la Constitución General de la República.

En cambio, ese hecho puede entenderse lógicamente como una cuestión meramente administrativa y no legal que pueda llegar al extremo de declarar inválida una actuación ministerial en atención al tamaño del papel en que fue plasmada.

Por tanto, resultan inaplicables las tesis que cita para apoyar sus razonamientos.

Es aplicable a lo anterior la tesis I.9o.P.80 P, pronunciada por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 2243, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, de rubro y texto:

"ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS GARANTÍAS DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY O DEFENSA ADECUADA PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 14, PÁRRAFO TERCERO Y 20, APARTADO A, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, POR EL HECHO DE QUE SEAN ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO OFICIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).—Las actuaciones del Ministerio Público anotadas en papel tamaño carta no pueden constituir violaciones procesales en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues además de no estar consideradas así por los preceptos 160 de la Ley de Amparo y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, el hecho de que estén asentadas en hojas tamaño carta y no oficio como lo establece el numeral 277 de dicho código, que dispone que las actas deben extenderse en ese tamaño, lo cual se refiere a las actas de Policía Judicial por así preverlo los numerales 274 al 277 del citado código, de ninguna manera les resta valor probatorio a dichas actuaciones, si además de su contenido que es jurídicamente trascendente, cumplen con las demás formalidades establecidas en ese ordenamiento procesal, como son, entre otras, la firma y rúbrica del funcionario que las practique, así como el sello de la autoridad correspondiente. Por tanto, el hecho de que tales actuaciones se encuentren asentadas en el formato anotado no quiere decir que carezcan de validez o contravengan las garantías de exacta aplicación de la ley o defensa adecuada establecidas, respectivamente, en los artícu-

los 14, párrafo tercero y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, pues no puede llegarse al extremo de declarar inválida una actuación ministerial en atención al tamaño del papel."

En diverso orden de ideas, este tribunal estima que contrario a lo señalado en el concepto de violación destacado en el inciso b), del análisis de los autos no se advierte violación a los derechos humanos y sus garantías consagrados en el primero de los arábigos en comento, en armonía con lo dispuesto en el ordinal 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; numerales 7, punto 2, 8, punto 1 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); y los diversos 9, punto 1, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque en el caso se cumplieron las formalidades del procedimiento, ya que con motivo de la comisión de los hechos imputados se integró una averiguación previa, se puso a disposición del Ministerio Público a la inculpada; la representación social dictó acuerdo de retención (fojas 35 a 37 de la causa penal); después de hacerle saber sus derechos a la ahora quejosa, asistida del defensor de oficio que nombró **********, rindió su declaración ministerial (foja 62 a 66 de la causa penal); dentro del plazo constitucional se ejerció acción penal (fojas 1 a 8 y 85 a 87 de la causa penal).

La autoridad judicial ratificó la detención al actualizarse la figura de flagrancia (foja 88 de la causa penal), le recabó su declaración preparatoria, en la que le hizo saber el inicio del procedimiento instaurado en su contra y de sus consecuencias, además de las garantías que le otorga la Constitución y designó como su defensor al de oficio adscrito al órgano jurisdiccional; dentro del término constitucional se le decretó auto de formal prisión por el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero (hipótesis de al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena), 15 (supuesto de acción), 17, fracción I (instantáneo), 18 (hipótesis de dolo), y 22, fracción I (quienes lo realicen por sí), todos del Código Penal para el Distrito Federal, así como la agravante señalada en el numeral 224, fracción III (supuesto de encontrándose el objeto del apoderamiento en un vehículo particular) y la diversa a que se refiere el ordinal 225, fracción I (premisa de cuando se ejerza violencia para defender lo robado), todos del Código Penal para el Distrito Federal este último aspecto modificado por la Sala responsable en la sentencia que se impugna, determinando no tener por acreditada la referida calificativa, lo cual beneficia al aquí quejoso; se ordenó la apertura del procedimiento sumario (foja 118 vuelta de la causa penal) de la que fue notificada, y de conformidad

con lo solicitado por su defensa particular, con la anuencia del aquí quejosa, se ordenó la revocación de la apertura del procedimiento sumario para continuarse en la vía ordinaria (fojas 142 a 148 de la causa).

Durante la instrucción se desahogaron las pruebas pertinentes ofrecidas por las partes; cerrada la instrucción y hecha la acusación del Ministerio Público se dictó sentencia en la que se condenó a ********** por la comisión del delito en cita. Previa apelación de la sentenciada, su defensor particular y del Ministerio Público, se tramitó la segunda instancia y mediante sentencia emitida por ese tribunal el dieciséis de enero de dos mil trece, se modificó la resolución en comento, en los términos previamente destacados.

Por lo que, se concluye, no fueron vulneradas en perjuicio del inconforme las garantías previstas en el artículo 14 de la Carta Magna, puesto que fueron cumplidas las formalidades sustanciales del procedimiento.

Al respecto, es de citarse la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, de rubro y textos siguientes:

FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.—La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga 'se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado."

Por otra parte, este órgano colegiado observa que, contrariamente a lo manifestado en el concepto de violación que se atiende, se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, pues la autoridad responsable cumplió con la garantía establecida en el numeral mencionado, en

cuanto a la suficiente fundamentación y motivación, ya que en la sentencia reclamada se citaron los preceptos legales que sirvieron de apoyo y se expresaron los razonamientos que llevaron a dicha autoridad a concluir como lo hizo, que el asunto que nos ocupa encuadra exactamente en los preceptos de las normas que se invocan respecto al delito, por lo que el fallo que se combate se encuentra fundado y motivado.

Lo anterior es así, en atención a que la Sala penal señaló los motivos que influyeron para concederles valor convictivo a los diversos elementos probatorios que tomó en cuenta, con la expresión a través de razones particulares de su contenido, así como la valoración probatoria que les corresponde, apoyada en los dispositivos legales aplicables en cada caso, invocó los artículos relativos a la individualización de la sanción, y expuso de manera razonada los motivos por los que estimó acreditadas todas y cada una de las hipótesis normativas de referencia; como en adelante se detalla.

Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 143, Volúmenes 97-102, enero-junio de 1977, Tercera Parte, del *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, de rubro y texto:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

En efecto, la autoridad responsable, sin vulnerar los principios reguladores del valor de la prueba, ajustándose a las constancias procesales existentes en autos y haciendo una adecuada y justa valoración, legalmente tuvo por comprobado el delito de robo calificado, previsto y sancionado en el artículo 220, párrafo primero (hipótesis de al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena), 15 (supuesto de acción), 17, fracción I (instantáneo), 18 (hipótesis de dolo) y 22, fracción I (quienes lo realicen por sí), todos del Código Penal para el Distrito Federal, así como la agravante señalada en el numeral 224, fracción III (supuesto de encontrándose el objeto del apoderamiento en un vehículo particular), todos del Código Penal para el Distrito Federal.

Se afirma lo anterior, debido a que la autoridad responsable justificó los elementos constitutivos de dicho ilícito con los medios de prueba previamente reseñados en que se fundó la sentencia que ahora se reclama, a los cuales correctamente les confirió valor convictivo en términos de los artículos 245, 246, 253, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al haberse obtenido cumpliendo con los requisitos legales en cada caso; los cuales le permitieron determinar que el veintiuno de mayo de dos mil doce, **********, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, se apoderó con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, de una cadena metálica, propiedad de **********, encontrándose dicho objeto en el interior del vehículo Nissan, Sentra, dos mil cuatro, color arena, placas **********, propiedad de la ofendida, estando dicho automotor estacionado en su domicilio, ubicado en **********, colonia **********; momento en que la ofendida a través del balcón de su departamento el cual tiene vista hacia el estacionamiento, observó que ********** merodeaba alrededor del referido vehículo, entró a él, se sentó en el lugar del copiloto, tomó una caja negra de piel que estaba en el portavasos, la cual contenía la cadena afecta y salió del auto con la cadena en su poder; acto seguido la ofendida pidió ********** le regresara la cadena, ésta la insultó, le respondió que "no le iba a devolver ni madres, y que le hiciera como quisiera, percatándose que ********** estaba en estado de ebriedad; en ese momento llegó **********, quien escuchó cómo le seguía gritando "no te devolveré tu pinche cadena", "ya me tienes hasta la madre", éste le dijo "no te enfrentes más con tu vecina, vamos a pedir apoyo de la policía"; pidió apoyo a una patrulla, ésta llegó veinte minutos después, la inculpada seguía agrediéndola, por lo que los policías preventivos le pidieron que los acompañara, momento en que ********** arrojó la cadena hacia el terreno contiguo que está sobre la calle **********, al parecer número **********; la indiciada accedió a subir a la patrulla para remitirla a las oficinas ministeriales, lugar en el que continuó insultando a la ofendida; conducta con la que se lesionó el bien jurídico tutelado que lo es el patrimonio de las personas, en la especie, de la citada ofendida.

Por otra parte, la autoridad responsable con apoyo en el material probatorio previamente aludido, correctamente tuvo por acreditada la calificativa prevista y sancionada en el artículo 224, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, por la que el representante social formuló acusación, como se advierte a fojas trescientas uno a trescientas dieciséis de la causa penal **********, del índice del Juzgado Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, al quedar de manifiesto que la quejosa llevó a cabo la conducta encontrándose el objeto del apoderamiento en un vehículo particular, dado que la acción ilícita se perpetró estando la cadena metálica en el interior del vehículo **********, **********, dos mil cuatro, color arena, placas **********, pro-

piedad de la ofendida, hallándose dicho automotor estacionado en el domicilio de ésta, ubicado en **********, número **********, colonia **********, en esta ciudad, al que se introdujo la quejosa, el cual estaba abierto porque delante de éste se estaciona el de otra vecina y cuando ésta quiere salir y la ofendida no puede bajar a mover su vehículo, su vecina lo hace.

En lo concerniente a la responsabilidad penal de la impetrante de garantías, fue legal la determinación de la responsable al tenerla por demostrada en forma plena, pues en atención al material probatorio que analizó, pudo apreciar que la quejosa intervino en la ejecución del evento en su carácter de autor material, en términos del artículo 22, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, dado que por sí desarrolló la conducta dolosa capaz de producir el resultado típico.

Lo anterior es así, debido a que para demostrar la plena responsabilidad penal de la ahora quejosa, la responsable valoró los medios de convicción previamente reseñados, entre los que destacaron las declaraciones de la denunciante y ofendida **********, de los testigos **********, **********; de los agentes de la policía remitentes **********, ********** y **********; probanzas que al concatenarlas de manera lógica y natural con las diligencias practicadas por el agente del Ministerio Público y el dictamen oficial en materia de criminalística, emitido por el perito oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, permitieron conducirle de la verdad conocida a la que se busca hasta integrar la prueba plena requerida por el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el entendido de que la prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene como punto de partida hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, un dato por complementar, una incógnita por determinar, una hipótesis por verificar sobre la materialidad del delito, la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado.

Resulta aplicable la jurisprudencia pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 268, aparece publicada en la página 150, Tomo II, del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, del contenido siguiente:

"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.—La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar,

lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."

Por otra parte, también se demostró la realización dolosa de la acción en términos del artículo 18, párrafo segundo, del Código Penal para el Distrito Federal, al denotar la autoridad responsable que **********, al cometer el antijurídico en comento actuó de manera voluntaria, toda vez que conociendo la ilicitud de su conducta, quiso el resultado típico descrito en la norma penal, al apoderarse con ánimo de dominio de la cadena metálica, propiedad de **********, sin el consentimiento de la persona que legalmente podía otorgarlo, esto es, de su propietaria; finalmente, también se demostró su culpabilidad, debido a que en su favor, tal y como lo señaló la Sala en el fallo que se combate, no se actualizó alguna causa de justificación que hiciera lícito su proceder.

En estas condiciones, el concepto de violación sintetizado en el inciso c) es infundado.

Contrario a lo expuesto por la quejosa, la responsable no erró en la valoración de las pruebas, ni ésta fue subjetiva o parcial, ni solamente aludió a los aspectos que le perjudicaban; ya que como se precisó con antelación, justipreció cada uno de los medios de información que constan en el sumario, a los cuales les confirió el valor convictivo que de acuerdo con la ley adjetiva de la materia y fuero les correspondió; y los cuales le permitieron arribar a la conclusión de que, en las circunstancias descritas, cometió el delito de robo agravado que se le atribuyó, y por el que resultó penalmente responsable.

En efecto, adverso a lo que afirma la solicitante del amparo en el punto identificado con el arábigo 1 del concepto de violación que se atiende, de los autos se desprende que la denunciante no realizó tres versiones de los hechos.

Ciertamente, ante la autoridad ministerial el veintiuno de mayo de dos mil doce, al dar la noticia criminal, en lo que trasciende expresó que **********, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, se apoderó de una cadena de oro de su propiedad, la cual tomó del interior de su vehículo **********, **********, dos mil cuatro, color arena, placas **********, estando dicho automotor estacionado en su domicilio, ubicado en **********, número **********, colonia **********; momento en que a través del balcón de su departamento, el cual tiene vista hacia el estacionamiento, observó que aquélla merodeaba alrededor del referido vehículo, entró a él, se sentó en el lugar del copiloto, tomó una caja negra de piel que estaba en el portavasos, la cual contenía la cadena afecta y salió del auto con la cadena en su poder; enseguida le

pidió le regresara la cadena, le profirió insultos y respondió que "no le iba a devolver ni madres, y que le hiciera como quisiera", percatándose que ********** estaba en estado de ebriedad; momento en que llegó **********, quien escuchó cómo le seguía gritando "no te devolveré tu pinche cadena", "ya me tienes hasta la madre", éste le dijo "no te enfrentes más con tu vecina, vamos a pedir apoyo de la policía"; por lo que pidió apoyo a una patrulla, ésta llegó veinte minutos después, y la inculpada seguía agrediéndola, por lo que los policías preventivos le pidieron que los acompañara, momento en que ********** arrojó la cadena hacia el terreno contiguo que está sobre la calle **********, al parecer número **********, y la indiciada accedió a subir a la patrulla para remitirla a las oficinas ministeriales, lugar en el que continuó insultando a la ofendida (fojas 11 a 13 de la causa penal).

En su siguiente aparición ante el propio representante social el veintidós de mayo de dos mil doce, ratificó su anterior deposado e hizo una aclaración en el sentido de que en su declaración inicial había manifestado al Ministerio Público que el día de los hechos se encontraba preparando el almuerzo, sin embargo se anotó el desayuno; asimismo, solicitó la devolución de su vehículo (fojas 76 y 77 de la causa penal).

Ante el Juez de la causa, el veintisiete de junio de dos mil doce, expresó ratificar sus anteriores deposados; asimismo, dio contestación a las preguntas realizadas por las partes, las cuales, de conformidad con lo establecido en los artículos 189, 190 y 191 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, fueron formuladas en relación con lo manifestado en sus deposados ministeriales, como se advierte a fojas 213 a 231 de la causa penal.

De lo anterior se desprende que la ofendida no dio tres versiones de los hechos, como lo pretende hacer ver la quejosa; por el contrario, en las tres ocasiones en que apareció ante la autoridad que respectivamente conoció de los mismos, fue conteste en manifestar las circunstancias de tiempo, modo y ocasión en que éstos sucedieron. De ahí que, se itera, fue correcto que le asignara el valor probatorio que le otorga el artículo 245, en relación con el 255 del código adjetivo de la materia y fuero; y, por lo tanto, no le asiste la razón a la peticionaria del amparo.

Igualmente, el argumento reseñado en el numeral 2 del concepto de violación que se atiende es infundado.

En efecto, contrariamente a lo que aduce la quejosa, no fue erróneo el valor probatorio asignado al deposado del testigo ********** ni ********** al de los policías remitentes **********, **********; testimonios a los que

justamente la responsable les confirió eficacia indiciaria conforme al numeral 245 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al ponderar que satisfacen los requisitos previstos en el diverso 255 del invocado ordenamiento adjetivo, pues tienen la edad y capacidad para juzgar el evento delictivo, por su probidad e independencia de su posición denotan imparcialidad, amén de que el hecho sobre el que declararon, lo conocieron por sí mismos y no por inducciones ni referencias de otro, además, sus declaraciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias, sin advertir de autos que hayan sido compelidos a declarar en tal sentido por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, o que tuvieran algún motivo de enemistad.

Máxime, que sus dichos no fueron desvirtuados con algún elemento de prueba en contrario; y sí como lo destacó la ad quem, robustecidos fundamentalmente con la fe ministerial del vehículo **********, ********** en cuyo interior se encontraba el objeto material del delito (cadena metálica), la inspección ministerial en el lugar de los hechos y el dictamen oficial en materia de criminalística; elementos de prueba que como se dijo, fueron fundada y motivadamente justipreciados por la Sala; mismos que le permitieron arribar a la conclusión de que, en las circunstancias descritas, la quejosa cometió el delito de robo agravado que se le atribuyó, y por el que resultó penalmente responsable.

Sin que sea óbice para demeritar la versión del testigo ********** el hecho de que éste haya llegado al sitio en donde ocurrió el apoderamiento ilegal imputado a la quejosa, diez minutos después de aquella acción, como lo aduce la inconforme; porque lo relevante para el caso es que dicho ateste declaró en relación con lo que él presenció, que fue haber arribado al domicilio de la ofendida el día de los hechos, minutos después de ocurridos y percatarse que aquélla se encontraba en el estacionamiento de ese sitio, conversando con **********, a quien le pedía que le devolviera la cadena de metal que había sustraído del interior de su vehículo (**********, arena, placas **********), respondiéndole ********** a ********** "no te devolveré tu pinche cadena, ya me tienes hasta la madre"; por lo que le refirió a ********** "no te enfrentes más con tu vecina, mejor vamos a pedir apoyo de la policía", por lo que ********** pidió auxilio policial y después de veinte minutos aproximadamente, llegaron los policías preventivos remitentes; ********** les informó lo que había sucedido, pero como ********** seguía insultándola y tratando de agredirla, los policías le pidieron a la inculpada los acompañara, momento en el que la indiciada arrojó la cadena de metal hacia el terreno contiguo al edificio donde vive **********, ubicado en la calle **********; sabiendo y constándole que ********** era propietaria de la cadena porque se la llegó a ver puesta en el cuello (fojas 14 y 15 de la causa penal).

Esto es, su deposado no fue considerado respecto del momento en que la aquí quejosa se apoderó del bien mueble objeto material del robo, sino en relación con el lugar donde ocurrió el evento, así como el instante en que aquélla arrojó aquél hacia un inmueble contiguo al domicilio de la ofendida.

Idéntica circunstancia ocurre en el caso de los agentes de la policía remitentes, quienes en sus deposados visibles a fojas dieciséis a diecinueve de la causa penal, también refieren haber llegado al lugar del suceso (domicilio de la ofendida), y haberse percatado del momento en que la aquí quejosa arrojó hacia un inmueble contiguo al sitio, la cadena de metal respecto de la cual se le atribuía que minutos antes se había apoderado ilegalmente.

No escapa decir a la quejosa que tampoco resta valor convictivo a la declaración del testigo ********** el hecho de que pertenezca a la misma congregación religiosa de la ofendida, ya que tal circunstancia por sí sola no evidencia falta de probidad o independencia en su deposición que haga presumir parcialidad en su deposado; y sí por el contrario, por las razones antes dichas, fue acertado el alcance probatorio que la Sala de ejecución le confirió a sus deposados al reunir los requisitos legales para ello.

De ahí que tampoco le asista razón al aducir que las versiones de esos testigos, fueron modificadas sustancialmente, puesto que eso no ocurrió.

También el argumento vertido en el ordinal 3 del concepto de violación que se atiende, es infundado. La quejosa manifiesta que la autoridad responsable pasó por alto que no existe elemento de prueba en el sumario para demostrar la existencia del objeto material del delito de robo que se le imputó (cadena de metal), y por tal causa, el peritaje realizado para valuar ese bien, carece de eficacia convincente.

Contrario a lo dicho, como lo destacó la Sala penal, únicamente con los testimonios de la ofendida, del testigo **********, así como los de los agentes de la policía remitentes ********** y ********** a los que correctamente se les confirió eficacia demostrativa, se comprobó la existencia del objeto material del apoderamiento (cadena metálica); máxime que como se refirió en líneas precedentes, aquéllos fueron firmes en manifestar que el día de los hechos se percataron de cómo la aquí quejosa se deshizo de la cadena metálica, objeto del apoderamiento ilegal que momentos antes había realizado, lanzándola hacia un terreno contiguo al lugar de los hechos.

Y en relación con el dictamen pericial para establecer el posible costo del objeto materia del apoderamiento; de la sentencia reclamada se desprende

que aunque fue justipreciado por la responsable, ningún valor probatorio le mereció; inclusive cabe destacar que fue absuelta del pago de la reparación del daño material, bajo el argumento de que no existen pruebas que le asistieran a la responsable para sentenciar al respecto, como se advierte a fojas setenta y nueve vuelta del toca de apelación **********, del índice de la Sala responsable; de ahí que lo manifestado por la disconforme ningún perjuicio le ocasione.

En este orden de ideas, la manifestación destacada con el ordinal 4 del concepto de violación que se atiende, es igualmente infundada.

En efecto, a fojas sesenta vuelta, del toca de apelación ********** remitido, se advierte que contrariamente a lo estimado por la solicitante del amparo, la responsable sí consideró el dictamen pericial oficial en materia de criminología, inclusive al respecto la Sala destacó cuál fue el resultado de éste, que pudiera beneficiar a la quejosa; al efecto transcribió la siguiente conclusión: "E) Asimismo, no es posible distinguir qué maniobras puede realizar una persona con las extremidades inferiores o superiores que se encuentren fuera del rango de visibilidad, por debajo de la parte visible del tablero."

Sin embargo, por sí solo ese resultado fue insuficiente para desvirtuar lo demostrado con el restante material probatorio que obra en los autos, en relación con la conducta de apoderamiento ilícito llevada a cabo por la aquí quejosa.

Inclusive, cabe resaltar que el propio dictamen pericial sentó en otros de sus puntos, la factibilidad de ser posible la observación sin ninguna dificultad, desde el interior del departamento de la ofendida, hacia la parte de los cajones de estacionamiento inferiores, ubicados en la parte frontal de la ventana, al existir buenas condiciones de luz natural exterior; así como también que es posible distinguir a alguna persona o personas, cuando deambulan entre los vehículos con esas condiciones de iluminación; de igual forma es posible observar cuándo una persona o personas se introducen a un vehículo por las puertas frontales, en la posición que señaló la denunciante estaba su vehículo; también el ser posible observar a través del ventanal y del parabrisas del vehículo, pese al reflejo solar que pudiera tener éste entre las catorce y quince horas de la tarde, cuándo una persona o personas en los asientos delanteros del conductor y acompañante, realizan movimientos para desplazarse en el interior del mismo (fojas 280 a 283 de la causa penal).

Lo anterior, como se ha venido reiterando, unido al restante material probatorio que obra en los autos y el cual no fue desvirtuado, otorgaron a la Sala

de apelación la posibilidad de, en las circunstancias de tiempo, modo y ocasión destacadas previamente, afirmar la existencia del delito de robo agravado que se imputó a la aquí quejosa, así como la plena responsabilidad en su comisión.

En este orden de ideas, de igual forma el argumento destacado con el ordinal 4, del concepto de violación que se atiende, deviene infundado, en donde refiere que se le vulneró el principio de igualdad procesal, porque el Juez de primera instancia no solicitó la bitácora de los policías remitentes, con la cual, dice que se demostraría que existió colusión entre éstos y la ofendida para perjudicarle.

Ello es así porque como ya se refirió, una vez abierto el proceso a prueba, tanto su defensa, como la propia quejosa, tuvieron circunstancias equivalentes de oportunidad para aportar los elementos de prueba que considerasen necesarios a efecto de sostener su posición; sin que fuera obligación del juzgador ni de la Sala penal allegarlos al sumario, en virtud de que la carga de la prueba, corresponde enteramente a las partes, no al juzgador, quien es el rector del proceso.

Estimarlo como lo sugiere la quejosa, provocaría convertir al Juez en una parte más dentro de éste, inclusive con el riesgo de trastocar el principio de igualdad entre las partes a que se refiere, lo cual es legalmente inadmisible.

Igualmente, el argumento que efectúa la quejosa, en el que afirma que el Juez de primera instancia y la Sala de apelación, tuvieron en su poder el resultado de la búsqueda dentro del libro electrónico de gobierno en que se encuentran nueve averiguaciones previas en su contra, cuya denunciante es **********, las cuales no prosperaron, lo que bajo su opinión, demuestra dolo y fijación que dicha persona alberga en su contra, pero no se valoró, es infundado.

Lo anterior es así, porque ni del escrito de pruebas de la defensa particular de la quejosa que obra a fojas ciento cuarenta y uno a ciento cuarenta y seis de la causa penal **********, del índice del Juzgado Sexagésimo Octavo Penal del Distrito Federal, ni de los diversos que obran a fojas ciento sesenta y siete, y ciento noventa, ni en la diligencia de ampliación de declaración de la aquí quejosa que obra a fojas doscientos veintiuno y doscientos veintidós, todas de la referida causa penal, se advierte que haya aportado como prueba el medio que refiere; de ahí que por ello ni el Juez de primera instancia ni la Sala penal estuvieron en la oportunidad de pronunciarse al respecto.

Como tampoco era obligación del juzgador ni de la Sala allegarlos al sumario, por las razones referidas con antelación.

De ahí que adverso a lo que afirmó, como ya se precisó, la ad quem no vulneró el principio de igualdad en el proceso ni realizó una justipreciación subjetiva de los medios de prueba glosados al sumario.

Máxime que tanto la defensa de la quejosa y ella misma, así como el Ministerio Público, tuvieron igual ocasión de aportar los elementos de prueba que consideraron oportunos a cada una de sus posturas en el asunto; los que en los términos previamente referidos, fueron pertinentemente desahogados y tasados equitativamente.

De igual forma, el concepto de violación que se atiende es infundado, en cuanto a que la Sala responsable no consideró el peritaje de criminalística ofrecido por su defensa, ni su declaración preparatoria en la que negó los hechos; elementos que dice, le favorecen para demostrar que no cometió el delito que se le atribuyó.

Contrario a lo afirmado por la solicitante del amparo, la Sala penal sí observó tanto el contenido del dictamen pericial en materia de criminalística, aportado por su defensa, como la declaración preparatoria que vertió ante el Juez de la causa, como se advierte a fojas veintiocho y veintinueve, y treinta y tres, del toca de apelación **********, del índice de la autoridad responsable.

Sin embargo, como lo refirió la Sala, esos elementos de prueba no se encuentran fortalecidos con algún otro que los haga factibles y sí, por el contrario, en los términos que se ha venido relatando, contradichos con el restante material probatorio que se adjuntó al proceso; de ahí que no le asiste razón en lo que manifiesta.

Por tanto, las tesis de rubros: "CUERPO DEL DELITO. CUANDO FALTA ALGUNO DE SUS ELEMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", "PRUEBA TESTIMONIAL. SU VALORACIÓN.", "TESTIMONIAL. VALORACIÓN DE LA PRUEBA.", "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS DE QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES.", "ARBITRIO JUDICIAL." e "INTEGRACIÓN DE LA FORMA DE VALORACIÓN A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 261 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL.", que

citó como sustento de los argumentos atendidos, no resultan benéficas para los fines pretendidos por la solicitante del amparo.

También el concepto de violación destacado en el inciso d) es infundado. Contrariamente a lo afirmado por la solicitante del amparo, en el caso la Sala penal correctamente tuvo por demostrado el nexo causal, esto es, la relación existente entre el resultado y la acción perpetrada, que permite afirmar que aquélla ha sido producida por ésta.

Pues como acertadamente lo refirió, con el material probatorio que obra en la causa se demostró plenamente que el veintiuno de mayo de dos mil doce, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos, la aquí quejosa **********, se apoderó con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente podía otorgarlo, de una cadena metálica, propiedad de **********, que se encontraba en el interior del vehículo Nissan, **********, dos mil cuatro, color arena, placas **********, propiedad de la ofendida, estando dicho automotor estacionado en su domicilio, ubicado en **********, número **********, colonia **********; conducta con la que se lesionó el bien jurídico tutelado que lo es el patrimonio de las personas, en la especie, de la citada ofendida; ya que de no haberse apoderado del objeto material sobre el que recayó la acción (cadena metálica), no se hubiera disminuido el haber patrimonial de ********** resultado que con base en las pruebas del proceso, objetivamente resultó atribuible a la solicitante del amparo.

OCTAVO.—La Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para imponer las penas correspondientes a **********, consideró lo siguiente:

[...]

De la transcripción anterior, se advierte que la Sala de apelación, estimó a la ahora quejosa de una temibilidad mínima y de acuerdo con ella, le impuso la pena mínima establecida en la norma aplicable al caso. Esto es, seis meses de prisión y sesenta días multa, por la comisión del delito de robo, previsto y sancionado por el artículo 220, párrafo primero, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, cuyo margen de punibilidad es de seis meses a dos años de prisión y de sesenta a ciento cincuenta días multa; a lo cual se aumentaron dos años de prisión por la calificativa de haberse cometido el robo encontrándose el objeto del apoderamiento en un vehículo particular, prevista y sancionada en el artículo 224, fracción III, del citado código represivo de la capital, cuyo margen de punición es de dos a seis años; lo que hizo un total de dos años seis meses de prisión y sesenta días multa, equivalente esta última a la cantidad de tres mil setecientos treinta y nueve pesos con ochenta centa-

vos, tomando en consideración el salario mínimo vigente en la ciudad al momento de cometer los hechos, que era de sesenta y dos pesos con treinta y tres centavos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 247 del Código Penal para el Distrito Federal.

Así, el concepto de violación sintetizado en el inciso f), es infundado, porque la autoridad responsable determinó imponer la pena mínima que contempla la ley para el delito, lo cual es evidente que no viola garantías de la quejosa.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o. J/315, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página ochenta y dos, Número 80, agosto de mil novecientos noventa y cuatro de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, que este tribunal comparte, de rubro y texto:

"PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.—El incumplimiento de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido.

Fue correcto que la autoridad responsable considerara que a la pena privativa de libertad debía descontarse el tiempo que la quejosa permaneció preventivamente detenida con motivo de la causa penal que se le siguió, esto es, a partir del veintiuno de mayo de dos mil doce.

Es legal la determinación del tribunal de apelación en torno a que la sanción restrictiva de libertad deberá compurgarla en el centro penitenciario a cargo de la Secretaría de Gobierno o la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, todos del Distrito Federal (lugar designado por el Juez de origen) conforme a los Acuerdos Generales 59-28/2011 y 62-48/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, con abono de la preventiva sufrida desde el veintiuno de mayo de dos mil doce, tiempo que la quejosa permaneció preventivamente detenida con motivo de la causa penal que se le siguió.

No infringe los derechos fundamentales de la quejosa, lo relativo a que la sanción pecuniaria impuesta deberá enterarla a la Dirección para el Cobro de Multas Judiciales, y en el supuesto de que se negare a pagar, se aplicará el procedimiento económico coactivo, pues al efecto se fundó en lo establecido en el artículo 41 del código sustantivo aplicable, lo cual es además acorde con el artículo 5, inciso i), fracción I, de la Ley de Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal.

Fue acertado que la resolutora, considerando lo previsto en los artículos 36, párrafos segundo y cuarto y 39, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, en relación con el 66 de la Ley Federal del Trabajo, sustituyera la multa de sesenta días impuesta al impetrante de garantías para el caso de insolvencia comprobada, por treinta jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, en virtud a que cada jornada de trabajo salda dos días multa; además de ser acorde con el criterio jurisprudencial pronunciado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 84/2007, publicada en la página trescientas cuarenta y uno, Tomo XXVI, agosto de 2007 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, de rubro: "SUSTITUCIÓN DE LA PENA PECUNIARIA POR JORNADAS DE TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD. EN CASO DE INSOLVENCIA DEL SENTENCIADO, LA AUTORIDAD JUDICIAL PUEDE DECRETARLA PARCIAL O TOTALMENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO LA SOLICITE O NO EN SU PLIEGO DE CONCLUSIONES."

Respecto a la absolución de la reparación del daño, material, moral y los perjuicios ocasionados derivados del delito en trato, no se hace consideración en virtud de que la quejosa fue absuelta y, por tanto, son aspectos que le benefician.

Tampoco causa agravio a las garantías de la solicitante del amparo, la determinación de la autoridad de alzada de conceder los sustitutivos de la pena de prisión por jornadas de trabajo en favor de la comunidad a razón de novecientas diez jornadas, en virtud a que la cuantificación de ello corresponde con la sanción privativa de libertad impuesta; y alternativamente el diverso de tratamiento en libertad; lo anterior, al haber reunido los requisitos establecidos en los artículos 84 y 86, en relación con los diversos 34 y 36 del Código Penal para el Distrito Federal; además de ser un aspecto que beneficia a la quejosa.

No causa perjuicio a la solicitante del amparo la decisión de la autoridad responsable de concederle la suspensión condicional de la ejecución de la pena, previa exhibición de una garantía de cuatro mil pesos; toda vez que para ello reunió las exigencias legales a que se refiere el ordinal 89 del código sustantivo de la materia y fuero, además de ser la garantía, un presupuesto legal para gozar de dicho beneficio sustitutivo.

Fue adecuada la decisión de la Sala penal de ordenar la suspensión de los derechos políticos de la quejosa porque de conformidad con lo establecido en el artículo 38, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57, fracción I, del Código Penal para el Distrito Federal, tal sanción

de índole administrativo es una consecuencia necesaria de la prisión impuesta, además de así disponerlo el ordinal 58 del Código Penal para el Distrito Federal.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 67/2005, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento veintiocho, Tomo XXII, julio de dos mil cinco del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, de rubro y texto:

"DERECHOS POLÍTICOS. PARA QUE SE SUSPENDAN CON MOTIVO DEL DICTADO DE UNA SENTENCIA QUE IMPONGA UNA SANCIÓN O LA PENA DE PRISIÓN, NO ES NECESARIO QUE ASÍ LO HAYA SOLICITADO EL MINISTERIO PÚBLICO.—Los derechos políticos del ciudadano señalados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encuentran su limitación en las hipótesis suspensivas contempladas en las fracciones II, III y VI del artículo 38 constitucional, de manera que cuando se suspenden los derechos políticos durante la extinción de una pena privativa de libertad en términos de la citada fracción III, se está en presencia de una pena regulada en los artículos 24, inciso 12, 45, fracción I y 46 del Código Penal Federal, así como en los diversos 30, 56, 57, fracción I y 58 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, al prever, como una de las clases de suspensión de derechos, la que se establece por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena de prisión. Ahora bien, la circunstancia de que la suspensión de derechos políticos, se imponga por ministerio de ley como consecuencia necesaria de la citada imposición, implica que una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis constitucional –como cuando se extingue una pena privativa de libertad–, no se requiere un acto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino que operan de manera inmediata. De esta forma, la suspensión de derechos por ministerio de ley, es la que de manera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuenta ineludiblemente al dictar sentencia; por lo que es innecesario que en estos casos el Ministerio Público (del fuero común o del fuero federal) solicite la indicada suspensión en la etapa procedimental en la que formula sus conclusiones acusatorias. En consecuencia, si el órgano jurisdiccional, al momento de dictar la sentencia respectiva y en ejercicio de sus facultades, suspende los derechos políticos del sentenciado, no rebasa la acusación, ya que dicha suspensión no está supeditada a la solicitud del Ministerio Público, sino a lo dispuesto por una norma constitucional, la cual se desarrolla por otra de carácter secundario en los términos apuntados."

En tales condiciones, al ser infundados los conceptos de violación expresados y al no advertirse motivo por el cual deba suplirse la deficiencia, en

términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, debe negarse a la quejosa la protección constitucional solicitada.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1o., fracción I, 73, 74, 75, 170, 184, 185, 186, 188 y 189, de la Ley de Amparo en vigor, y 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra el acto que reclamó de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que actuó de manera unitaria, precisado en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; remítase testimonio de la presente resolución, así como los autos enviados a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Miguel Ángel Aguilar López (presidente), Emma Meza Fonseca y Guadalupe Olga Mejía Sánchez (ponente).

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, VI, XIII y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, fracción IV, 14, fracción I, 18, fracciones I y II, 19, 20, fracción VI, 21 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL). Las actuaciones practicadas por el Ministerio Público en la averiguación previa, asentadas en papel tamaño carta y no en oficio, no carecen de validez ni contravienen las formalidades esenciales del procedimiento, en términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o

el derecho de defensa adecuada, establecido en su artículo 20, apartado A, fracción IX. Lo anterior, por no estar considerado así por los artículos 160 de la Ley de Amparo abrogada y 12 a 17 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. En efecto, el hecho de que las mencionadas diligencias ministeriales estén elaboradas en hojas tamaño carta y no en oficio, como lo establece el numeral 277 del código mencionado (que dispone que las actas deben extenderse en ese tamaño), no tiene el alcance para determinar que lo asentado en ellas es nulo de pleno derecho o que se trate de prueba ilícita, pues el valor probatorio de las diligencias realizadas por la representación social no depende del tamaño del papel en que ésta las deja plasmadas, sino de que aquéllas no sean contrarias a las reglas establecidas en la ley para llevar a cabo su desahogo. Ello, toda vez que el citado artículo 277, al disponer que "las actas se extenderán en papel de oficio", se refiere propiamente a las formalidades de las actas llevadas a cabo por la Policía Judicial en auxilio del Ministerio Público, para recibir, en los supuestos que ahí se contemplan, las denuncias correspondientes, por así señalarlo los artículos 274, 275 y 277 del propio código. Por tanto, no puede llegarse al extremo de declarar inválida o restarle valor probatorio a una actuación ministerial en atención al tamaño del papel en el que fue asentada; máxime si su contenido –que es jurídicamente trascendente–, cumple con las demás formalidades establecidas en ese ordenamiento procesal, como son, entre otras, la firma y rúbrica del funcionario que la practicó, así como el sello de la autoridad que la autoriza.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P. J/14 (10a.)

Amparo directo 441/2010. 28 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Hernández Piña. Secretario: Daniel Dámaso Castro Vera.

Amparo directo 569/2010. 24 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretaria: María del Carmen Campos Bedolla.

Amparo directo 567/2010. 24 de marzo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Daniel Guzmán Aguado.

Amparo directo 69/2011. 9 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Gerardo Domínguez Romo.

Amparo directo 109/2014. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Secretario: Luis Manuel Fiesco Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 25/2014. 28 DE MARZO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO ESTEBAN GONZÁLEZ CHÁVEZ. SECRETARIO: CARLOS REYES FLORES.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—Estudio del asunto. Para mayor comprensión del asunto, deben traerse a colación diversas disposiciones contenidas en el capítulo I, denominado: "Cumplimiento e inejecución" ubicado dentro del título tercero de rubro: "Cumplimiento y ejecución" de la Ley de Amparo.

"Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

"En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

"Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

"El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga."

"Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

"Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

"En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.

"En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.

"Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

"El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

"Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto

de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico."

Ahora bien, en términos del artículo 192, se desprende que el a quo deberá realizar lo siguiente:

1. Cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito la notificarán sin demora a las partes.

2. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que, de no hacerlo así sin causa justificada:

a) Se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego; y,

b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

3. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en la ley de la materia, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.

4. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

Ahora bien, de los antecedentes relacionados se desprende que no se cumplió con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo.

En efecto, por un lado se tiene que si bien es cierto que en acuerdo de ********** se declaró que la sentencia dictada en el juicio de amparo causó

ejecutoria por no haber sido recurrida por las partes y se requirió a la autoridad responsable para que en el plazo de cuarenta y ocho horas diera cumplimiento; sin embargo, ni en ése ni en los subsecuentes requerimientos, se apercibió debidamente al tribunal responsable para el caso de que no lo hiciera dentro del citado plazo.

Lo anterior es así, toda vez que se apercibió a la autoridad que, de no cumplir con la ejecutoria de amparo dentro del término concedido, se le impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitiría el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo para que se continuara con el trámite de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación de su cargo y su consignación; sin embargo, el apercibimiento de multa debió hacerse de una manera más específica, esto es, debió precisarse que se impondría a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de Magistrados presidente, representante de trabajadores y representante del Estado que integran dicho órgano.

En efecto, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado,[1] el Tribunal de Arbitraje del Estado se integra de manera tripartita por un Magistrado representante del Estado, un Magistrado representante de los trabajadores al servicio del Estado y un Magistrado tercer árbitro.

En ese orden de ideas, fue incorrecto que únicamente se haya apercibido de manera genérica con multa a la autoridad responsable, si no cumplía con la ejecutoria de amparo, puesto que al conformarse con los tres integrantes ya mencionados, lo que significa que le compete al tribunal como órgano colegiado, cumplir con la ejecutoria de amparo, entonces se debió apercibir con multa a cada uno de los integrantes de la Junta especial, es decir, a las personas físicas que ocupan el cargo de Magistrado representante del Estado, Magistrado representante de los trabajadores al servicio del Estado y Magistrado tercer árbitro.

Lo anterior es así, puesto que la contumacia de la autoridad de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conlleva la imposición de la multa con que se le apercibió, la cual no se impone al ente público en sí mismo, sino a la

[1] Artículo 76. Para los efectos de esta ley se crea un Tribunal Colegiado, que se denominará Tribunal de Arbitraje y que se integra con un Magistrado, representante del Estado, designado por el Gobernador; un Magistrado, representante de los Trabajadores al Servicio del Estado, designado por el Sindicato, un Magistrado tercer árbitro, nombrado por los dos representantes anteriormente citados. Este último fungirá como presidente.

persona física que ocupa el cargo o puesto de la autoridad obligada a cumplir; de ahí que el apercibimiento de multa debe ser preciso y determinado a fin de que la persona física conozca la importancia y la trascendencia de su actitud para el caso de que decida omitir el cumplimiento cabal de la sentencia.

Máxime que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria.

Por tanto, era necesario que el apercibimiento de multa de que se trata se hiciera a cada una de las personas físicas que ocupan los cargos de Magistrado representante del Estado, Magistrado representante de los trabajadores al servicio del Estado y Magistrado tercer árbitro del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a fin de que, en caso de incumplimiento, se esté en aptitud de multar a cada una de dichas personas.

En tal virtud, se revoca el acuerdo de ********** y, en consecuencia, el a quo debe dejar sin efecto la multa impuesta al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla y debe realizar lo siguiente:

En términos de los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiera nuevamente al Tribunal de Arbitraje del Estado para que dentro del término de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo, y lo aperciba que, de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ocupan los cargos de Magistrado representante del Estado, Magistrado representante de los trabajadores al servicio del Estado y Magistrado tercer árbitro del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; en el entendido de que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de dicha ley, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupen el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria; debiendo recabar el a quo la información necesaria a fin de determinar los nombres y apellidos de los aludidos Magistrados.

Asimismo, se les aperciba que, en caso de incumplimiento, se remitirá también el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación.

Cabe señalar que para el caso de que se hagan efectivas las multas respectivas, deben constar en autos, previo a remitir los autos al Tribunal Colegiado que corresponda para la tramitación del incidente de inejecución, la notificación de dichas multas a los integrantes a quienes se hayan impuesto, así como a la autoridad recaudadora que corresponda.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca el acuerdo de doce de marzo de dos mil catorce dictado en el juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

SEGUNDO.—Se ordena reponer el procedimiento de ejecución en los autos del mencionado juicio de amparo **********, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

TERCERO.—Devuélvanse los autos del aludido juicio de amparo ********** al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese.

Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Miguel Mendoza Montes, Francisco Esteban González Chávez y la Juez de Distrito Emma Herlinda Villagómez Ordóñez, comisionada temporalmente en el cargo de Magistrada de Circuito, con efectos a partir del seis de junio de dos mil once, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de uno de junio de esa anualidad, según oficio SEPLE./ADS./010/2228/2011, de esa misma fecha, suscrito por el secretario ejecutivo del Pleno mencionado; siendo relator el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A

CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO. El artículo 192 de la Ley de Amparo prevé el procedimiento para el cumplimiento de una ejecutoria en la que se otorga la protección de la Justicia Federal. Inicialmente, establece que una vez que la sentencia protectora haya adquirido firmeza, la autoridad federal la notificará a la autoridad responsable y le requerirá que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibiéndola que, de no hacerlo sin causa justificada, le impondrá a su titular una multa de cien a mil días de salario, de acuerdo con el artículo 258 de la ley de la materia, y remitirá el expediente a la superioridad (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación) para seguir el trámite de inejecución. Conforme a esta disposición, cuando la autoridad responsable es un órgano integrado por más de un titular, el apercibimiento de multa no debe hacerse a dicho órgano en abstracto, sino a cada una de las personas físicas que lo integran, especificando el nombre y apellidos de cada una de ellas, en el entendido de que, en términos de la última parte del primer párrafo del artículo 193 de la citada ley, los titulares a quienes se les imponga la multa seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y las personas físicas que los sustituyan tendrán responsabilidad, si durante el ejercicio de sus funciones debe darse cumplimiento a la ejecutoria.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T. J/2 (10a.)

Incidente de inejecución de sentencia 11/2014. Dolores López Genis. 21 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Esteban González Chávez. Secretario: Carlos Reyes Flores.

Incidente de inejecución de sentencia 15/2014. Silvano de la Rosa Rodríguez. 28 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Benito Arnulfo Zurita Infante.

Incidente de inejecución de sentencia 19/2014. Tiburcio Vega Gómez. 18 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretario: León Darío Morice López.

Incidente de inejecución de sentencia 22/2014. María del Rosario Victoria Sánchez. 18 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Esteban González Chávez. Secretaria: Lorena Ortuño Yáñez.

Incidente de inejecución de sentencia 25/2014. 28 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Esteban González Chávez. Secretario: Carlos Reyes Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).

AMPARO DIRECTO 854/2013. 16 DE ENERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ISIDRO PEDRO ALCÁNTARA VALDÉS. SECRETARIA: ANDREA MARTÍNEZ GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Son infundados en parte y fundados en otra los conceptos de violación, acorde con las consideraciones que se expondrán en párrafos subsecuentes.

Tales argumentos consisten –en síntesis– en lo siguiente:

a) Violación al artículo 16 constitucional, bajo la premisa de que la autoridad responsable no señala las circunstancias particulares del caso concreto, sino sólo se limita a precisar que las pruebas ofrecidas por la actora resultan insuficientes para tener por demostrada la procedencia de la acción principal, sin que ello esté debidamente motivado.

b) Ilegalidad del fallo combatido, al no haberse considerado que en el caso a estudio se encuentran involucrados los intereses de una menor de edad, cuya facultad para allegarse los medios adecuados que logren su desarrollo integral, está siendo vulnerada.

c) No debió pasarse inadvertido el respeto a los derechos humanos de la menor, garantizándole el derecho a la vida, integridad física y mental, salud, identidad, familia y convivencia con sus padres, así como la comprensión de sus aptitudes físicas y mentales y el fomento a su libre expresión.

d) En atención al interés superior de la menor debieron recabarse de oficio las pruebas necesarias para conocer la verdad de los hechos involucrados, a fin de resolver la cuestión planteada.

Se afirma que es infundado el concepto de violación resumido en el inciso a), porque el fallo reclamado cumple con la debida fundamentación y motivación.

Pues, si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y, por lo segundo, el señalamiento de las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas consideradas por el juzgador para la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la referida sentencia para percatarse que la misma sí se encuentra debidamente fundada y motivada, pues contiene la expresión de todas las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que llevaron al tribunal de alzada a confirmarla.

Ello, en virtud de que –contrario a lo sostenido por la impetrante del amparo– dicha autoridad no sólo se limitó a desestimar las pruebas sin motivación alguna, sino que calificó de infundados e improcedentes los agravios planteados, al tenor de las siguientes consideraciones:

*El a quo sí valoró todas y cada una de las probanzas ofrecidas por la actora; quien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, debía demostrar la procedencia del incremento en el porcentaje fijado como pensión alimenticia definitiva.

*Para la procedencia de la referida acción, es necesario que el acreedor demuestre –además de su necesidad de percibir alimentos–, que el grado de capacidad económica del deudor alimentario se ha incrementado en tal magnitud que pueda soportar un aumento en la pensión, en observancia al principio contenido en el numeral 242 del código local sustantivo civil en vigor.

*De las constancias procesales no se desprende que la actora hubiere justificado el cambio de circunstancias, desde la fecha en que se decretó una pensión alimenticia a favor de su menor hija en el juicio ordinario civil **********, pues el que actualmente cuente con una edad aproximada de catorce años y que, por ello, erogue gastos por pago de colegiatura, transporte y útiles escolares, no significa que hayan variado las circunstancias por las cuales se fijó la pensión alimenticia de la cual se solicita su incremento, en virtud de que la misma se estableció atendiendo a lo previsto en el cardinal 239 del citado cuerpo normativo.

*La inconforme omitió demostrar que la suma que percibe por concepto de pensión alimenticia, a favor de su menor hija, no le alcanza para cubrir sus necesidades alimentarias; aunado a que las notas expedidas por la refaccionaria no se encuentran comprendidas dentro del concepto de alimentos, ni tampoco probó que dichos pagos se hayan efectuado para beneficiar a la aludida menor.

*No quedó demostrado en el sumario, que las posibilidades del deudor se hayan incrementado como para soportar un aumento en la referida pensión alimenticia; a más de que, si ahora se desempeña como subdirector de la institución bancaria para la cual labora y que, por ello, percibe un sueldo más elevado, en esa proporción se verá beneficiada su menor hija, si se considera que al haberse fijado la pensión alimenticia en porcentaje, éste incrementará conforme lo haga el sueldo y las percepciones del deudor.

*Por lo anterior, no es motivo suficiente para acceder a las pretensiones de la accionante el alto costo de la vida, que afecta tanto a la acreedora alimentaria como al deudor.

*No se justificó que las posibilidades del deudor se hayan incrementado como para que pueda soportar un descuento superior al fijado a favor de la menor, dentro de los autos del juicio ordinario civil número **********.

*El principio de suplencia de la queja no tiene el alcance de declarar procedentes las pretensiones de la actora sin las bases para ello.

Luego, si lo anteriormente sintetizado pone de manifiesto que el tribunal de alzada no se limitó a señalar que las pruebas ofrecidas por la actora resultan insuficientes para tener por demostrada la acción principal, sino que fundó y motivó las razones por las cuales no era procedente aumentar la pensión alimenticia definitiva fijada en el juicio ordinario civil ********** del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Veracruz, Veracruz; entonces, deviene inconcuso que la sentencia combatida no contraviene en perjuicio de la quejosa las garantías de legalidad y seguridad jurídica contempladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"Registro No. 176546
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXII, diciembre de 2005
"Tesis: 1a./J. 139/2005
"Página: 162
"Jurisprudencia

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

Asimismo, se afirma que resultan infundados los conceptos de violación resumidos en los incisos b) y c), para lo cual es pertinente hacer las siguientes precisiones.

El artículo 239 del Código Civil vigente en el Estado, prevé que el concepto de alimentos comprende la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad y, respecto de los menores, además, los gastos

necesarios para su educación básica y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales; debiendo ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad económica del deudor, y en función de la necesidad del acreedor alimentario, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 242 del citado cuerpo normativo.

Por su parte, cabe destacar que para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógico y jurídicamente necesario que la parte actora exponga en su demanda y pruebe durante el procedimiento –atendiendo al artículo 228 del código procesal civil– las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor, para que se justifique así el incremento solicitado.

En tal virtud, no asiste razón a la impetrante del amparo en cuanto sostiene que, atendiendo al interés superior de su menor hija, debió considerarse que el monto del que actualmente goza como pensión alimenticia definitiva, se contrapone con su desarrollo integral, aunado a que no es dable garantizar con el mismo su salud e integridad física y mental.

Pues, si bien es cierto que del artículo 4o. constitucional, se colige que en atención al interés superior del menor, todas las autoridades están obligadas a proveer lo necesario para respetar la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, entre los cuales no sólo se encuentran los mencionados en el referido precepto, sino todos aquellos derivados de los tratados internacionales en favor de los menores; también lo es que, en el caso a estudio, no se han vulnerado tales derechos, porque –como lo sostuvo el tribunal de alzada– de las constancias procesales no se desprende que la actora hubiere justificado el cambio de circunstancias desde la fecha en que se decretó la pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija en el juicio ordinario civil **********.

A más de que, si dicha pensión se convino en el pago del veinticinco por ciento del sueldo y demás prestaciones percibidas por el deudor, lo cual fue aprobado mediante resolución dictada el diecisiete de noviembre de dos mil; entonces, resulta inconcuso que al no haberse demostrado que tal porcentaje deviene insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de la aludida menor, conforme a los artículos 239 y 242 del Código Civil vigente en el Estado, y que aun cuando el ahora demandado perciba mayores ingresos por ocupar un mejor puesto dentro de su centro de trabajo, dicho porcentaje se incrementa en armonía con éstos y, por ende, que la actora efectivamente estaba obligada a probar durante la secuela procedimental correspondiente, que las posibilidades del deudor alimentario se incrementaron de tal manera que sea

dable aumentar el monto fijado como pensión alimenticia definitiva, en el referido juicio ordinario civil **********.

Máxime si tomamos en consideración que a pesar de que actualmente la aludida menor eroga gastos distintos de aquéllos cuando se fijó la referida pensión, tales como el pago de colegiatura, transporte y útiles escolares, ello no implica que las circunstancias por las cuales se estableció la pensión alimenticia de la cual se solicita su incremento cambiaron, toda vez que la misma alcanza lo preceptuado por el numeral 239 del citado cuerpo normativo, en cuanto prevé que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en casos de enfermedad; y, respecto de los menores, los gastos necesarios para su educación básica, y para proporcionarles algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales.

Y, si bien es cierto que el alto costo de la vida es un hecho evidente, conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia firme, como lo que es público y sabido de todos, también lo es que –como ya se dijo– para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógica y jurídicamente necesario que la parte actora exponga y pruebe las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor para justificarse el incremento solicitado; lo cual en el caso que nos ocupa no sucedió.

Sin que obste a lo anterior, que aun cuando se encuentran involucrados los intereses de una menor de edad, lo cierto es que la institución de alimentos no fue creada por el legislador para enriquecer al acreedor o para darle una vida holgada y dedicada al ocio, sino simplemente para que pueda vivir con decoro y atender a sus necesidades; de ahí que, contrario a lo argumentado por la quejosa, el monto fijado como pensión alimenticia definitiva a favor de su menor hija, se encuentra apegado al principio de proporcionalidad a que nos hemos referido con antelación.

Apoyan lo antes expuesto, por sus alcances jurídicos, los criterios sostenidos por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito –que este órgano federal comparte–, cuyos datos de localización, rubro y texto son:

"Quinta Época
"Registro: 343732
"Instancia: Tercera Sala
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*

"Tomo: CV
"Materia(s): Civil
"Página: 2333

"ALIMENTOS, AUMENTO DE LAS PENSIONES DE.—La elevación del costo de la vida afecta lo mismo al acreedor que al deudor de los alimentos, y aunque demuestre que las necesidades de aquél han aumentado, no prueba que hayan mejorado las posibilidades del deudor, por lo que no basta esa circunstancia para justificar la elevación del monto de la pensión alimenticia, por no satisfacerse los extremos del artículo 311 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales."

"Séptima Época
"Registro: 248299
"Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Circuito
"Tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación*
"Volúmenes: 205-216, Sexta Parte
"Materia(s): Civil
"Página: 593

"PENSIÓN ALIMENTICIA, AUMENTO DE LA. HECHOS NOTORIOS.—El alto costo de la vida es un hecho evidente, conceptuado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de jurisprudencia firme, como lo que es público y sabido de todos; y de acuerdo a lo estatuido por el artículo 280 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, como lo que no requiere ser probado. Sin embargo, para obtener el aumento de una pensión alimenticia decretada en juicio, es lógica y jurídicamente necesario que la parte actora exponga en su demanda y pruebe durante el procedimiento las causas que alteraron la proporcionalidad entre las percepciones económicas del deudor y las necesidades del acreedor, para que se justifique así el incremento solicitado; pero si estas cuestiones no se demuestran y la resolución del juicio anterior fijó a favor del acreedor alimentario el pago de una pensión en porcentaje, cuyo monto se acreditó indudablemente con los sucesivos aumentos del salario y demás prestaciones que ha obtenido el deudor, adiciones económicas que se originan casi paralelamente con el aumento del costo de la vida, como éste, aquéllos tampoco requieren ser probados por ser evidentes."

Igualmente se afirma que es infundado el motivo de inconformidad resumido en el inciso d), porque si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia citada por la quejosa, el tribunal de alzada puede recabar oficiosamente pruebas, también lo es que ello se traduce en una facultad de la que goza el juzgador

para resolver la cuestión planteada cuando advierta del expediente, incluyendo los hechos y las particularidades del caso, algún dato que le permita suponer que ésta no puede ser dilucidada conforme a derecho, por estimar que debieron desahogarse medios de convicción distintos de aquellos ofrecidos por las partes; y no como sucede en el caso a estudio, en el que una vez que se analizó y ponderó la totalidad del material probatorio, la autoridad responsable llegó a la convicción de que no quedó probada la acción principal, al no haberse demostrado que: i) La suma recibida por la actora por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hija no le alcanza para cubrir las necesidades alimentarias de ésta; y, ii) Las posibilidades del deudor alimentario se hayan incrementado como para soportar un aumento en la referida pensión alimenticia.

Y, aunado a ello, porque si el deudor ahora se desempeña como subdirector de la institución bancaria para la cual labora, percibiendo un sueldo más elevado, lo consiguiente es que en esa proporción se verá beneficiada su menor hija, considerando que la multirreferida pensión alimenticia está fijada en porcentaje; lo cual conlleva a la determinación de que se incrementará conforme lo haga el sueldo y las percepciones del deudor.

Por otra parte, suplidos en su ausencia y deficiencia, según ordena el numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, resultan parcialmente fundados los conceptos de violación.

En efecto, este tribunal en ausencia de conceptos de violación, pero con base en el interés superior de la menor involucrada y el beneficio de suplencia de la queja, estima que la Sala responsable no debió condenar a la apelante al pago de costas en la segunda instancia.

Se llega a esta conclusión sin desconocer que no obtuvo fallo favorable. Aquí se sostiene el criterio de que la teoría del vencimiento que inspira el contenido del artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no debe ser aplicada en los asuntos donde se ventilen derechos de menores de edad, cuando éstos no obtengan fallo acorde a sus intereses.

En este aspecto se estima conveniente, tal como se hizo al resolver el amparo directo **********, traer a colación lo siguiente:

Marco teórico normativo.

Antes de entrar al estudio del caso concreto, se considera necesario hacer referencia a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 199/2010, de la que

derivó la jurisprudencia 1a./J. 5/2011, referente a la caducidad de la instancia cuando se encuentren involucrados derechos de menores, que en su parte considerativa precisó lo siguiente:

"… De conformidad con el texto del cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal, en nuestro sistema jurídico tratándose de los juicios de naturaleza civil la sentencia que se dicte será conforme a la letra de la ley, a la interpretación jurídica de ésta y a falta de ella se recurrirá a los principios generales del derecho, disposiciones que rigen lo que en la doctrina se conoce como el 'estricto derecho', consistente en que el juzgador sólo resolverá respecto a los hechos y planteamientos lógico-jurídicos en los que se expresen y funden las pretensiones y excepciones de los litigantes, sin que el juzgador realice un pronunciamiento de manera oficiosa respecto de los hechos o planteamientos no invocados en la demanda ni en su contestación, en esa tesitura se identifica también con el principio de congruencia que rige toda resolución judicial en la que los Jueces al pronunciar la sentencia que decida el juicio en lo principal no pueden ocuparse de puntos o cuestiones no comprendidas en la litis.

"Sin embargo, de la interpretación armónica y sistemática del propio Texto Constitucional, específicamente en su artículo 4o., se advierte que ese principio rígido que preside en los juicios de naturaleza civil, se ha flexibilizado tratándose de asuntos de índole familiar, como se advierte del texto del citado artículo, que es del tenor literal siguiente:

"'Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

"'... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

"'Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.

"'El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.'

"Previo a la interpretación literal del artículo que, antecede, resulta conveniente esclarecer la *ratio legis* del referido precepto legal, a partir del dictamen de la Cámara de Origen con motivo de la reforma y adición del último

párrafo del artículo 4o. de la Constitución Federal, publicada el siete de abril de dos mil, en el Diario Oficial de la Federación. Efectivamente, el legislador expresó, en lo que interesa, lo siguiente:

"'... El texto constitucional, no obstante coincidir con los postulados internacionales sobre los derechos del niño, no resulta suficiente en la actualidad para satisfacer las exigencias de una realidad cambiante, ya que la misma revela nuevas necesidades de los niños y de las niñas.

"'Resultaría lógico pensar y promover la protección de sus derechos en el desarrollo de su núcleo familiar como hasta ahora ha acontecido, pero evidentemente la realidad actual supera en mucho la citada expectativa, ya que un porcentaje muy alto de menores, además de graves insuficiencias, carecen hasta de este seno familiar.

"'Por tanto, la responsabilidad de protegerlos debe hacerse extensiva como una asistencia a los niños y las niñas, que carecen de un medio familiar, o que teniéndolo, requieran de acciones adicionales del Estado para asegurar su desarrollo integral.'

"... Del precepto anterior y de su *ratio legis*, se infiere que el Poder Reformador de la Constitución reconoce la organización y el desarrollo de la familia, misma que ocupa un lugar preponderante en el sistema jurídico nacional, al ser ésta la célula primigenia del Estado, y dentro de su núcleo, la niñez cobra un factor relevante de carácter superior que no sólo corresponde a los integrantes de la familia, sino que es un deber compartido que traspasa del interés privado al público, abarcando a la sociedad y al Estado, en todos sus ámbitos y niveles.

"Por su parte, en el plano del derecho internacional, se ha otorgado un reconocimiento preponderante en la vida del Estado a la familia, y en especial a la niñez, considerada un periodo del desarrollo humano comprendido desde el nacimiento de la persona, hasta que ésta cumple dieciocho años, salvo que conforme al derecho interno haya adquirido la capacidad plena de autodeterminarse, por lo que teniendo en cuenta la situación biológica, cultural, económica y social en la que se encuentran los menores y la equiparación de los mayores de dieciocho años declarados incapaces, por tener únicamente capacidad de goce de derechos, se les considera como un grupo vulnerable dentro de la sociedad y, en razón a ello, la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar la satisfacción de sus necesidades. En ese sentido el Estado mexicano ha asumido los siguientes compromisos internacionales que señalan lo siguiente:

"'Declaración de los derechos del niño.

"'Principio 2, El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño ...'

"'Principio 8, El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.'

"'Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos.

"'Artículo 24.

"'1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.'

"'Convención Americana sobre Derechos Humanos.

"'Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal.

"'...

"'5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento ...'

"'Artículo 19. Derechos del niño.

"'Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.'

"Convención sobre los Derechos del Niño.

"'Artículo 3.

"'1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

"'2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.'

"Este principio que históricamente se ha reflejado en un primer periodo desde el terreno del derecho internacional hacia nuestro derecho interno, y en un segundo, de la Constitución Federal hacia las leyes federales y locales, consiste en que ese interés superior de la niñez implica que frente a toda medida en la que se vean involucrados los menores de dieciocho años, deberá ser ponderado dicho interés frente a las decisiones tomadas por entidades privadas o públicas, de modo que se busque el beneficio directo del niño o adolescente a quien van dirigidos.

"En relación a lo anterior, esta Primera Sala ha sustentado la tesis aislada que a continuación se transcribe:

"'INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. …'

"Así como la tesis sustentada por el Pleno de este Máximo Tribunal, que a la letra señala:

"'MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. …'

"Por tanto, se considera que en todos los actos que involucren intereses de menores de edad e incapaces, el Estado Mexicano deberá velar porque prevalezca el interés superior de la niñez y la adolescencia, respecto de los intereses de otras personas con capacidad plena. Tratándose de procesos formal y/o materialmente jurisdiccionales, ese principio del interés superior del menor, ha sido acogido en diversas instituciones jurídicas, por ejemplo, la suplencia de la queja deficiente, que consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el actor o recurrente en sus conceptos de violación o en sus agravios y en la recabación oficiosa de pruebas por parte del juzgador, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio para el esclarecimiento de los hechos litigiosos, sin que puedan variar los hechos, criterio que ha sido sostenido por esta Primera Sala en la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:

"'MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. …'

"Como se puede observar, el Estado Mexicano ha creado instituciones que permiten proteger los derechos de los niños e incapaces, tendencia establecida tanto en la Constitución, tratados internacionales y leyes federales, por lo que entonces es claro que en todos los actos jurídicos en donde se involucren derechos de menores de edad e incapaces, el Estado Mexicano en toda su amplitud deberá ponderar su interés superior.

"Lo anterior sirve de marco para el estudio de la institución procesal de la caducidad o perención de la instancia, que doctrinariamente se ha considerado como una sanción de naturaleza procesal por el desinterés manifiesto de las partes sometidas a juicio al no promover durante la sustanciación del proceso, durante cierto tiempo, susceptible de interrupción; por lo que se equipara a una presunción racional de que no es su deseo llevarlo adelante y han perdido interés en la contienda, procediendo a decretarla a petición de parte interesada o de oficio por el juzgador.

"Como es sabido, uno de los principios que rigen los juicios civiles es el principio dispositivo que consiste básicamente en que el ejercicio de la acción procesal está a cargo tanto en su forma activa como en su forma pasiva a las partes y no al Juez.

"Este principio se manifiesta en diferentes aspectos del proceso civil y sus principales características son, que el proceso comience por iniciativa de parte; que el impulso del proceso quede confiado a la actividad de las partes; las partes tienen el poder de disponer del derecho material controvertido de manera unilateral o bilateral; así también, las partes fijan el objeto del proceso mediante las afirmaciones hechas valer en sus escritos de demanda y contestación de la misma; y, el objeto de la prueba es fijado por las partes y, por tanto, la actividad probatoria debe limitarse a lo discutido por ellas.

"En este sentido, debe tenerse en cuenta que el impulso del proceso por los litigantes es una carga que pesa sobre ellos, y ésta se define como el acto o actos fijados en la norma procesal, que deben efectuar las partes como condición para que se desencadenen los distintos estadíos que componen el juicio, por lo que el impulso del proceso se traduce en el requerimiento a las partes de presentar promociones tendentes a seguir el desarrollo del juicio, para que éste pueda seguir su curso, no bastando la presentación de cualquier escrito para interrumpir la caducidad.

"Así, en ese orden de ideas, la caducidad o perención de la instancia cumple una función importante en el derecho procesal, en razón a que los juicios no pueden quedar sub júdice de manera indeterminada, lo que origi-

naría que los juicios quedaran abiertos a discreción de las partes, generando incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los derechos ventilados; asimismo, en los juicios deben respetarse las formalidades esenciales de acuerdo con las normas de carácter procesal, siendo una de ellas el interés manifiesto en la contienda, por lo que se garantizan los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de seguridad jurídica.

"En esa inteligencia, la caducidad de la instancia produce como consecuencia la nulidad de los actos procesales constitutivos de la instancia, no implicando la extinción de derechos subjetivos, sino los de carácter puramente procesal que se hayan adquirido durante la secuela, por tanto, no involucra la prescripción de la acción, puesto que si ésta no ha perecido se puede volver a ejercer ante autoridad competente.

"Ahora bien, en el caso concreto, el precepto legal 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en la parte que interesa, establece:

"'Artículo 11. ... Se tendrá por abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no promueven durante ciento ochenta días naturales en la primera instancia o noventa días naturales en la segunda, salvo los casos de fuerza mayor. El abandono en la segunda instancia, sólo da lugar a la pérdida del recurso y a la devolución de los autos.

"'Por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela legal del procedimiento. La caducidad de la instancia sólo opera en los juicios, siempre y cuando hayan sido emplazados todos los demandados y no se haya citado a las partes para oír sentencia.

"'La caducidad será declarada de oficio o a petición de parte interesada.'

"Del numeral en cita se advierte que la caducidad de la instancia en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, tiene los siguientes elementos:

"Elemento subjetivo

"*Sólo las partes sometidas a juicio son susceptibles de verse afectadas por la caducidad. En razón a que ellas tienen la carga de impulsar el proceso.

"Elemento objetivo

"*Inactividad bilateral, referente a la falta de presentación de promociones tendentes a impulsar la secuela procesal, imputable a las partes involucradas, durante ciento ochenta días en la primera instancia y noventa días en la segunda instancia. La caducidad opera automáticamente en los plazos señalados, a partir de la fecha de la última promoción, y no desde la última actuación.

"*La única manera de interrumpir la caducidad es mediante la presentación de promociones referidas.

"Elemento temporal acotado

"*El plazo referido en el párrafo anterior, comenzará a contarse a partir del momento en que sean debidamente emplazados todos los demandados y hasta antes de que sean citadas las partes para dictar sentencia.

"Excepción

"*No operará la caducidad de la instancia si la inactividad de las partes durante los periodos referidos se produce a consecuencia de causas de fuerza mayor.

"Declaración

"*Corresponde decretarla al juzgador de oficio o a petición de la parte interesada.

"Una vez dicho lo anterior, se procede a estudiar si el interés superior del menor a que se hizo referencia en los párrafos que anteceden, debe ser observado por el juzgador en los casos de caducidad de la instancia.

"La exposición de motivos que dio origen a la promulgación y modificación del artículo 4o. de la Constitución Federal, hacen patente la finalidad que el Poder Reformador de la Constitución persigue mediante la protección al desarrollo y organización del núcleo familiar, que fue establecer un sistema en el cual la familia ocupa un lugar preponderante en la actuación del Estado frente a ésta, así como dotar de un interés superior de la niñez y la adolescencia.

"A saber, el Órgano Revisor de la Constitución creó esa norma con el objeto de establecer verdaderos derechos fundamentales, considerando necesario crear un sistema integral que incluyera a todos los entes del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias para regular la protección de la

institución de la familia y en especial la niñez y la adolescencia, como sector vulnerable de la sociedad.

"En ese mismo sentido, el legislador del Estado de Veracruz, mediante decreto del uno de febrero de mil novecientos noventa y uno, adicionó un último párrafo al artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el que reconoce la necesidad de protección a menores e incapaces, al establecer:

"'Artículo 210 …'

"De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 11 y 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; 4o. y 14 de la Constitución General de la República, los instrumentos internacionales a que se ha hecho referencia y la jurisprudencia de este Alto Tribunal, se arriba a la conclusión que si bien la caducidad de la instancia establecida en la citada ley adjetiva no prevé de manera expresa como causa de excepción a la perención procesal respecto a juicios en los que se diriman derechos de menores de edad e incapaces, ésta no procede cuando se afecten en el juicio intereses de menores e incapaces al ser una excepción al principio dispositivo en el que se sustenta la caducidad de la instancia, que es la sanción por inactividad procesal de las partes.

"Sin que lo anterior rija con el principio de igualdad entre las partes, el cual es una manifestación del principio general de igualdad de los ciudadanos ante la ley que implica la igualdad de oportunidades procesales para las partes y surge del supuesto de que todos los individuos son iguales y deben serlo también ante la ley y en el proceso, principio que también opera en tratándose de procesos de naturaleza civil.

"En esa inteligencia, la persona con capacidad plena debe asumir la responsabilidad de su actuación en el juicio, porque tuvo la potestad de haber comparecido en la forma que convino a sus intereses, no así el menor de edad que por su condición de persona en desarrollo no está legitimado para promover por sí mismo, sino a través de su representante; por tanto, cuando en una contienda judicial concurren por una parte una persona con capacidad plena a dirimir conflictos que involucren los derechos y/o intereses de menores de edad e incapaces, se estima que no se está ante situaciones de hecho similares; pues tratándose de juicios donde involucren alimentos, patria potestad, guardia y custodia, entre otros, se pone de por medio la subsistencia del menor, que se encuentra tutelada por el citado artículo 4o. constitucional, los tratados internacionales y las leyes de la materia, al no ser juicios en donde se

hace patente el principio de estricto derecho, sino más bien de interés social y de orden público.

"Como se ha hecho mención, la caducidad, por regla general, es una sanción que deriva del incumplimiento de la carga del impulso procesal que recae sobre los litigantes con capacidad plena, por ser ellos los interesados en obtener una resolución favorable a sus intereses; situación que no ocurre cuando en los juicios involucren los derechos de menores e incapaces, que concurren a juicio a través de representante, y si por la inactividad procesal de este último, el Estado atendiendo el interés superior de la niñez, tiene prioridad interés en la prosecución del juicio, debiendo garantizar el referido derecho fundamental, consistente en proteger y satisfacer los derechos, libertades y necesidades de los menores e incapaces.

"Consecuentemente, los juzgadores no podrán decretar la caducidad de la instancia aun ante la inactividad de las partes, cuando en el juicio se encuentren en debate cuestiones relativas a menores o incapaces, esto en atención al interés superior de la niñez ..."

Con base en ello dicha Sala del Más Alto Tribunal estableció la tesis jurisprudencial:

"Novena Época
"Registro: 162642
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XXXIII, marzo de 2011
"Materia(s): Constitucional, Civil
"Tesis: 1a./J. 5/2011
"Página: 159

"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—El artículo 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz prevé la procedencia de la caducidad de la instancia imputable sólo a las partes, ante un motivo manifiesto de desinterés del desarrollo del juicio, si durante 180 días naturales en la primera instancia o 90 días naturales en la segunda instancia, dejan de presentar promociones tendentes al impulso del proceso, contados a partir del emplazamiento de todos los demandados y hasta antes de llamar a las partes para escuchar la sentencia, salvo en los casos de fuerza mayor, pues se parte de la premisa de que en aquéllas recae la carga de impulsar el proceso, al ser las únicas interesa-

das en obtener una resolución favorable. Por otra parte, cuando en los juicios se diriman cuestiones sobre derechos de menores de 18 años o incapaces conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, que establecen el derecho fundamental del interés superior de la niñez, se constriñe a que el Estado en todos sus niveles y poderes –en el ámbito de sus respectivas competencias–, pondere ese derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena. Por tanto, es improcedente la caducidad de la instancia respecto de juicios en los que se involucren derechos de menores de 18 años e incapaces, en atención al interés superior de la niñez."

El anterior criterio ha sido constante y se refleja en las determinaciones dictadas en los amparos en revisión sustentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se ha establecido como cuestión destacada que no es el caso sancionar al recurrente, cuando se trate de menores en su carácter de deudores alimentarios, ello con el afán de no dañar su situación económica, tal como se advierte de los acuerdos emitidos por dicho Órgano Supremo al dirimir los amparos directos en revisión **********.

Así las cosas, de la exposición del marco normativo expuesto, se considera que, en el caso, la aplicación del artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se debe hacer en relación con una interpretación conforme de lo dispuesto por el precepto 4o. constitucional. Ello es así, en atención a lo siguiente.

El artículo en mención establece –en la parte a interés– lo siguiente:

"Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

"...

"... Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. ...

"...

"Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos estos derechos y principios.

"El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. ..."

De su *ratio legis*, se infiere que el Poder Reformador de la Constitución reconoce en todo momento la organización y el desarrollo de la familia, misma que ocupa un lugar preponderante en el sistema jurídico nacional al ser ésta la célula primigenia del Estado, y dentro de su núcleo, la niñez cobra un factor relevante de carácter superior que no sólo corresponde a los integrantes de la familia, sino que es un deber compartido que traspasa del interés privado al público, abarcando a la sociedad y al Estado, en todos sus ámbitos y niveles que, incluso, ha sido reconocido también en el marco del derecho internacional otorgándose un reconocimiento preponderante en la vida del Estado a la familia, y en especial a la niñez, considerada un periodo del desarrollo humano comprendido desde el nacimiento de la persona, hasta que ésta cumple dieciocho años, salvo que conforme al derecho interno haya adquirido la capacidad plena de autodeterminarse, por lo que teniendo en cuenta la situación biológica, cultural, económica y social en la que se encuentran los menores y la equiparación de los mayores de dieciocho años declarados incapaces, por tener únicamente capacidad de goce de derechos, se les considera como un grupo vulnerable dentro de la sociedad y, en razón a ello, la familia, la sociedad y el Estado deben garantizar la satisfacción de sus necesidades. En tal sentido, el Estado Mexicano asumió compromisos internacionales.

Por tanto, se considera que en todos los actos que involucren intereses de menores de edad e incapaces, el Estado Mexicano deberá velar porque prevalezca el interés superior de la niñez y la adolescencia, respecto de los intereses de otras personas con capacidad plena.

Lo anterior sirve de marco para el estudio de la institución procesal denominada teoría del vencimiento "pago de gastos y costas originados en un juicio", regulados en el artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que establece:

"Artículo 104. Siempre será condenado al pago de gastos y costas que incluirán los honorarios del abogado patrono de la contraparte, el litigante que no obtuviere resolución favorable, ya en lo principal, ya en los incidentes que surgieren.

"Esta condenación no comprenderá los honorarios y gastos ocasionados por promociones, pruebas y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, las cuales debe pagar el funcionario responsable de ellas, en los términos de este código.

"Para determinar los honorarios de los abogados patronos se estará al contrato sobre prestación de servicios profesionales respectivo, siempre que

el mismo haya sido exhibido anexo a la demanda, contestación y reconvención en su caso, y su monto no exceda al veinte por ciento sobre la suerte principal del negocio. A falta de contrato se estará al arancel. En caso de allanamiento a la demanda no habrá condenación en gastos y costas.

"La condenación en gastos y costas no se hará efectiva en Segunda Instancia cuando se modifique la resolución recurrida. Cuando el superior revoque la resolución del inferior, se estará a lo dispuesto, en el primer párrafo de este precepto."

De tal precepto legal se advierte, que la sanción establecida se rige –como se ha indicado– por la teoría del vencimiento, la cual se determina por el resultado del proceso o del incidente. Es este resultado del proceso o del vencimiento el que determina la condición de vencido. El vencimiento se produce cuando existe estimación de las pretensiones de un litigante contra su adversario; o sea, cuando una de las partes obtiene del órgano jurisdiccional la protección jurídica de sus pretensiones frente al adversario, sea mediante una sentencia definitiva o una interlocutoria que decida el incidente con fuerza de definitiva.

En tal precepto el legislador adoptó el sistema o la teoría del vencimiento con un criterio de aplicación estricta o absoluta, que no da al órgano jurisdiccional facultad para ponderar cuándo aplicar o no la condena de pago de costas, pues para la imposición no atiende a elementos subjetivos como el dolo o la culpa, sino únicamente al hecho objetivo del vencimiento.

Establecido lo anterior, se procederá a estudiar si el interés superior del menor a que se hizo referencia, debe ser observado por el juzgador en los casos de la teoría del vencimiento.

Como quedó precisado, si el legislador hizo patente que el menor de edad cuenta con un derecho que debe ser tutelado nacional e internacionalmente por ser considerado como un grupo vulnerable de la sociedad, entonces de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 210 y 514 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz y, 4o. y 14 de la Constitución General de la República puede arribarse a la conclusión de que si bien la teoría del vencimiento prevista en el artículo 104 del citado código, prevé como sanción a la parte perdidosa del juicio el pago de gastos y costas generados por su contraria, la misma no debe ser aplicada de manera tajante cuando se afecten en el juicio intereses de menores e incapaces, pues el hecho de que en el Estado de Veracruz no exista un código de procedimientos familiares, no releva a los juzgadores de aplicar los principios fundamentales del derecho procesal familiar, como lo son el realizar el análisis de los casos con espíritu

humano, altruista y justo procurando conciliar los intereses superiores de la familia.

Sobre esa base, se considera que no debe aplicarse de manera estricta lo estatuido por el numeral 104 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para determinar los gastos y costas, pues debe atenderse a los principios que rigen en materia familiar y, por ende, aplicar la teoría del vencimiento que se contempla en el citado precepto que puede producir desarmonía con el orden constitucional que consagra el referido artículo 4o. constitucional.

En efecto, no puede soslayarse que en los procesos de familia se ventilan cuestiones que afectan a la filiación, a la capacidad de obrar, al estado civil de las personas y en general a cuestiones que requieren un pronunciamiento que las partes no pueden conseguir en el ámbito extraprocesal, puesto que exigen una declaración judicial, aun en el caso de que no exista controversia.

Así, aun cuando este grupo vulnerable que reclama el pago de alimentos a diversa persona, no obtenga sentencia favorable, el tribunal debe apreciar y razonar que se trata de derechos de menores quienes no cuentan con percepción de ingresos, y que su gestión se hace basándose en todo momento en un demérito en su capacidad contributiva para su sostenimiento, lo cual orilla a demandar los alimentos de persona diversa, pudiendo absolver del pago de condena en costas; es decir, acudir al criterio de compensación no haciendo imposición de las costas a ninguna de las partes, o lo que es lo mismo, con declaración de que cada parte cargará con las causadas en su instancia y las comunes serán satisfechas por mitad, y menos si se está en las particularidades a que nos hemos referido.

Finalmente, debemos indicar que en los Estados en los cuales se han promulgado códigos de procedimientos familiares no se ha establecido el pago de gastos y costas, con lo cual se señala en los mismos la diferencia entre la materia civil y familiar.

Con base en lo anterior, el análisis de este asunto, en relación con las "costas", debe hacerse bajo la óptica anotada, pues la condena efectuada no debe apoyarse con base en la teoría del vencimiento en la cual se sustenta, sino en los criterios de excepción al vencimiento y de compensación, pues el criterio de excepción al vencimiento tiene que ver en relación con las particularidades del caso, lo cual hace suponer que la solución técnica-jurídica del litigio sea compleja, de tal forma que las partes no tengan más remedio que acudir a los tribunales avocados por la dificultad que el asunto presenta, ante la imposibilidad de una solución extraprocesal.

Como conclusión al marco referido, debemos indicar que si nuestro Máximo Tribunal del País, ha emitido criterio en el sentido de dispensar a los menores ante supuestos jurídicos contemplados en las legislaciones de manera genérica, como ha sido el referente a la improcedencia de la caducidad de la instancia en los juicios donde se dirimen derechos de menores e incapaces e, incluso, es del criterio de no sancionarlos cuando hicieren valer ante su potestad el amparo directo en revisión, por considerar que se dañaría su situación económica; el tema que nos ocupa válidamente encuadra en dichas hipótesis, pues se insiste, se apoya en todo momento con base al interés superior del menor salvaguardado en el numeral 4o. constitucional en relación con los tratados internacionales, tema sobre el cual ya hemos referido su importancia.

En esa guisa y analizando los aspectos de carácter económico y social de la menor en cuestión y el entorno en que se desenvuelve, lo que procede en el presente caso es aplicar esa excepción a que hemos hecho referencia sobre la teoría del vencimiento.

Similares consideraciones sostuvo por unanimidad de votos este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver los citados juicios de amparo directo **********, en sesiones celebradas –respectivamente– el quince de agosto y diez de octubre de dos mil trece, en cuanto al tema de costas.

Se cita la tesis aprobada por el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito en sesión celebrada el quince de agosto de dos mil trece, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3038, cuyos título y subtítulo establecen:

"COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—El artículo 104 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz establece la condena al pago de costas con base en la teoría del vencimiento; ahora bien, tratándose de juicios en los que se diriman derechos de menores e incapaces y el resultado del juicio no les resulte favorable, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que prevén el derecho fundamental del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos sus niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena; por tanto, es improcedente la condena al pago de costas en los juicios en que se diriman sus derechos, si no obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido a la teoría de la compensación."

Sentado lo anterior, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que:

a. La Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado deje insubsistente la resolución pronunciada el trece de agosto de dos mil trece, en el toca de apelación **********; y,

b. Dicte otra siguiendo los lineamientos expresados en la presente sentencia de amparo; esto es, con base en las consideraciones plasmadas por este tribunal, reitere e inserte en la nueva sentencia los argumentos relativos a la improcedencia del aumento de la pensión alimenticia fijada en el juicio ordinario civil **********, pero absuelva a la parte apelante de la condena al pago de costas de la segunda instancia; a fin de restituir a la quejosa en el goce de los derechos humanos considerados violados.

Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o., deberá entregarse copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite y se encuentre autorizada para ello, previa razón actuarial.

Por lo expuesto y fundado; con apoyo, además, en lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado de Circuito,

RESUELVE QUE:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a la menor de edad representada por su madre **********, contra la sentencia dictada el trece de agosto de dos mil trece, por la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca de apelación número **********.

Notifíquese; anótese en el libro de gobierno; remítase ********** de la presente sentencia a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados: Isidro Pedro Alcántara Valdés, José Manuel de Alba de Alba y Ezequiel Neri Osorio. Fue relator el primero de los Magistrados antes mencionados.

En términos de lo previsto en los artículos 14, fracción I y 18, fracciones I y II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental, en esa versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). El citado artículo 104 establece la condena al pago de costas con base en la teoría del vencimiento. Ahora bien, tratándose de juicios en los que se diriman derechos de menores e incapaces y el resultado del juicio no les resulte favorable al ser un grupo vulnerable de la sociedad, debe interpretarse conforme al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales que prevén el derecho fundamental del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, el cual constriñe a que el Estado, en todos sus niveles y poderes, pondere ese derecho subjetivo frente a personas con capacidad plena; por tanto, la condena al pago de costas en los juicios en que se diriman sus derechos es improcedente, si no obtuvieron sentencia favorable, acudiendo en ese sentido al criterio de la compensación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C. J/6 (10a.)

Amparo directo 454/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Griselda Sujey Liévanos Ruiz.

Amparo directo 414/2013. 29 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo Robles.

Amparo directo 443/2013. 12 de septiembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Eduardo Castillo Robles.

Amparo directo 580/2013. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretario: Mario de la Medina Soto.

Amparo directo 854/2013. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Andrea Martínez García.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.

NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.

AMPARO DIRECTO 99/2014. 2 DE JULIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: GUSTAVO VALDOVINOS PÉREZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Notificación del amparo directo al Ministerio Público de la Federación. En el presente caso, de conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, solamente tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.

Es así, porque el precepto mencionado dispone que tendrá tal calidad el representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.[1]

---

[1] "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
"...
"III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter:

Ahora, acorde con el artículo 1o. del Código Federal de Procedimientos Penales,[2] el proceso penal federal está conformado por los siguientes procedimientos:

1. Averiguación previa a la consignación a los tribunales. Este procedimiento, seguido en forma de juicio ante la institución del Ministerio Público de la Federación en su carácter de autoridad administrativa, inicia a partir de que el representante social investigador tiene conocimiento, por denuncia o querella, de hechos que pueden constituir delito y su objeto es que se practiquen las diligencias necesarias para determinar si procede o no la acción penal.

2. Preinstrucción. En este procedimiento, que se sigue ante la autoridad jurisdiccional que conozca de la causa penal, se realizan las actuaciones para que aquélla determine en el auto de formal prisión los hechos materia del proceso, su clasificación conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, emita un auto de libertad al inculpado por falta de elementos para procesar. En este procedimiento, el Ministerio Público de la Federación ya no tiene el carácter de autoridad, sino de parte en el proceso penal.

3. Instrucción. Este procedimiento inicia con el auto de formal prisión y concluye con el auto que declara cerrada la instrucción, esto es, antes de

---

"…
"e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. …"

2. "Artículo 1o.. El presente código comprende los siguientes procedimientos:
"I. El de averiguación previa a la consignación a los tribunales, que establece las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público pueda resolver si ejercita o no la acción penal;
"II. El de preinstrucción, en que se realizan las actuaciones para determinar los hechos materia del proceso, la clasificación de éstos conforme al tipo penal aplicable y la probable responsabilidad del inculpado, o bien, en su caso, la libertad de éste por falta de elementos para procesar;
"III. El de instrucción, que abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o irresponsabilidad penal de éste;
"IV. El de primera instancia, durante el cual el Ministerio Público precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, y éste valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva;
"V. El de segunda instancia ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos;
"VI. El de ejecución, que comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales hasta la extinción de las sanciones aplicadas;
"VII. Los relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos. …"

que la institución ministerial federal concrete su acusación (en su caso) en su escrito de conclusiones. Abarca las diligencias practicadas ante y por los tribunales con el fin de averiguar y probar la existencia del delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del inculpado, así como la responsabilidad o no responsabilidad penal de éste.

4. Primera instancia. A este procedimiento también se le llama juicio y, en él, el Ministerio Público Federal precisa su pretensión y el procesado su defensa ante el tribunal, quien valora las pruebas y pronuncia sentencia definitiva.

5. Segunda instancia. Es el procedimiento ante el tribunal de apelación, en que se efectúan las diligencias y actos tendientes a resolver los recursos. Existe incluso la posibilidad para las partes (inculpado, Ministerio Público de la Federación y víctima u ofendido) de ofrecer pruebas ante el órgano revisor.[3]

6. Ejecución. Este procedimiento comprende desde el momento en que cause ejecutoria la sentencia de los tribunales, hasta la extinción de las sanciones aplicadas.

7. Especiales. Son los procedimientos relativos a inimputables, a menores y a quienes tienen el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.

En cada uno de tales procedimientos, el orden jurídico nacional prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público). Si bien la institución ministerial tiene injerencia en cada procedimiento de los antes aludidos, materialmente no es un solo agente de la representación social quien participa en cada etapa del proceso penal federal, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción a los agentes encargados de solventar las facultades legales que corresponden al Ministerio Público de la Federación en cada procedimiento.

---

[3] "Artículo 373. Recibido el proceso, el duplicado autorizado de constancias o el testimonio, en su caso, el tribunal lo pondrá a la vista de las partes por el plazo de tres días; y si dentro de ellos no promovieren prueba se señalará día para la vista, que se efectuará dentro de los treinta siguientes a la conclusión del primer plazo, si se tratare de sentencias definitivas, y dentro de cinco días si se tratare de autos.
"Para ella serán citados el Ministerio Público, el inculpado si estuviere en el lugar y el defensor nombrado. Si no se hubiere nombrado a éste para la instancia, el tribunal lo nombrará de oficio."

Por ello, aun cuando de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[4] y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,[5] corresponde al procurador general de la República presidir al Ministerio Público de la Federación, no es el procurador general en persona quien interviene en cada procedimiento mencionado en cada uno de los procesos penales federales, sino que las atribuciones legales de la institución se realizan por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la propia institución.

Así pues, como la Ley de Amparo dispone que tendrá la calidad de tercero interesado, el representante social que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado.

Por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en la primera instancia ante el Juez de Distrito, cuando la ley no prevea recurso alguno en contra de la sentencia pronunciada en tal fase, pues es en ese procedimiento que se genera el acto reclamado.

Pero corresponderá tal carácter al representante social federal que intervino en la fase de apelación, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, pues en el procedimiento seguido ante el tribunal revisor que se genera, en su caso, la afectación a las partes del proceso penal federal.

Es así, porque cuando el acto reclamado proviene de un proceso penal federal biinstancial, en el juicio de amparo directo es innecesaria la notificación al Ministerio Público Federal adscrito a la autoridad de primera instancia, pues la sentencia dictada en tal fase se encuentra superada procesalmente por la de la segunda instancia.

---

[4] "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público …"

[5] "Artículo 2. Al frente de la Procuraduría General de la República estará el procurador general de la República, quien presidirá al Ministerio Público de la Federación.
"Artículo 3. El procurador general de la República intervendrá por sí o por conducto de agentes del Ministerio Público de la Federación en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente ley y las demás disposiciones aplicables."

De este modo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, pues es el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tiene la calidad de autoridad responsable en el presente juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practicó a la agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción (folio 16 del cuaderno de amparo) para tener por satisfecho el emplazamiento de la institución ministerial en su carácter de parte tercera interesada.

Encuentra aplicación la tesis XXVII.3o.3 P (10a.),[6] de este propio órgano colegiado, de rubro y texto siguientes:

"NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.—De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notifica-

[6] *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*. Décima Época, publicada el viernes 4 de julio de 2014, registro 2006927.

ción que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia."

QUINTO.—Violaciones procesales. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal vigente, así como del artículo 174 de la Ley de Amparo, en el primer amparo directo que promueva un justiciable en relación con un proceso ordinario, debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y, de aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

El presente juicio constitucional es el primero que promueve la parte quejosa con motivo del juicio natural. Por tanto, a fin de evidenciar el cumplimento de la precitada norma constitucional y legal, conviene destacar lo siguiente:

a) Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no formuló conceptos de violación procesales;

b) No se advierte que se actualice alguno de los supuestos de suplencia de la queja previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, ni tampoco trasgresión manifiesta a los derechos fundamentales del quejoso durante la secuela del procedimiento que lo hubiese dejado sin defensa.

Por tanto, se decreta que han quedado firmes e intocadas todas las cuestiones relativas al procedimiento penal de origen.

SEXTO.—Diferencias entre el cuerpo del delito y el delito en sí. Es menester mencionar que los artículos 14, párrafo segundo y 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,[7] señalan que

[7] "Artículo 14.
"…
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que

el cuerpo del delito es un concepto procesal que deberá acreditarse para el libramiento de la orden de aprehensión u orden de comparecencia dictada por la autoridad jurisdiccional, previa denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito sancionado cuando menos con pena privativa de libertad; de ahí que el cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo.

Por su parte, los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales,[8] señalan que el Ministerio Público ejercitará acción penal cuando se encuentre acreditada en la averiguación previa el cuerpo del delito (conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera) y la probable responsabilidad (su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad) del indiciado.

Ello es así, ya que el proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que en definitiva se ha cometido un ilícito.

---

deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ..."

[8] "Artículo 134. En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea.
"No obstante lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y, en su caso, las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo, serán analizados por el juzgador después de que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a proceso según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la inexistencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo.
"Para el libramiento de la orden de aprehensión, los tribunales se ajustarán a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 16 constitucional y en el 195 del presente código. ..."
"Artículo 168. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.
"Por cuerpo del delito se entiende el conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como delito, así como los normativos, en el caso de que la descripción típica lo requiera.
"La probable responsabilidad del indiciado se tendrá por acreditada cuando, de los medios probatorios existentes, se deduzca su participación en el delito, la comisión dolosa o culposa del mismo y no exista acreditada a favor del indiciado alguna causa de licitud o alguna excluyente de culpabilidad.
"El cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad se acreditarán por cualquier medio probatorio que señale la ley."

Por otra parte, en relación con el estudio relativo a la acreditación del delito, éste comprende un estándar probatorio mucho más estricto que el relativo al cuerpo del delito, pues tal acreditación (que sólo puede darse en sentencia definitiva) implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable.

Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.),[9] de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.—Conforme a los artículos 134 y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el ejercicio de la acción penal el Ministerio Público debe acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, lo cual significa que debe justificar por qué en la causa en cuestión se advierte la probable existencia del conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho delictivo. Así, el análisis del cuerpo del delito sólo tiene un carácter presuntivo. El proceso no tendría sentido si se considerara que la acreditación del cuerpo del delito indica que, en definitiva, se ha cometido un ilícito. Por tanto, durante el proceso –fase preparatoria para el dictado de la sentencia– el Juez cuenta con la facultad de revocar esa acreditación prima facie, esto es, el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, y el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, deben argumentar sólidamente por qué, prima facie, se acredita la comisión de determinado delito, analizando si se acredita la tipicidad a partir de la reunión de sus elementos objetivos y normativos. Por su parte, el estudio relativo a la acreditación del delito comprende un estándar probatorio mucho más estricto, pues tal acreditación –que sólo puede darse en sentencia definitiva– implica la corroboración de que en los hechos existió una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. El principio de presunción de inocencia implica que el juzgador, al dictar el auto de término constitucional, únicamente puede señalar la presencia de condiciones suficientes para, en su caso, iniciar un proceso, pero no confirmar la actualización de un delito. La verdad que pretende alcanzarse sólo puede ser producto de un proceso donde la vigencia de la garantía de defensa adecuada permite refutar las pruebas aportadas por ambas partes. En efecto, antes del dictado de la sentencia el inculpado debe considerarse inocente, por tanto,

[9] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Primera Sala, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, registro 160621.

la emisión del auto de término constitucional, en lo que se refiere a la acreditación del cuerpo del delito, es el acto que justifica que el Estado inicie un proceso contra una persona aun considerada inocente, y el propio acto tiene el objeto de dar seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una motivación concreta, lo cual sólo se logra a través de los indicios que obran en el momento, sin que tengan el carácter de prueba."

El tipo penal hace una descripción objetiva, normativa y subjetiva del delito, mientras que el cuerpo del delito es únicamente la descripción del hecho mismo, con independencia del sujeto que lo realiza, es decir, los elementos subjetivos se refieren al autor del delito, lo cual tiene que ver con la voluntad del sujeto, elemento que únicamente puede ser constatado con un análisis interno de la voluntad del sujeto y no de forma externa como lo es en el caso de la materialidad del hecho estudiado en el cuerpo del delito.

En esa virtud, acreditar el cuerpo del delito, no es más que demostrar la existencia de un hecho, el cual está conformado por elementos corpóreos comprobables a través de los sentidos y que, asimismo, conforma la parte objetiva, normativa y subjetiva específica del tipo penal establecido en un ordenamiento legal, con independencia de la culpabilidad del acusado.

Así, se entiende que para poder establecer la responsabilidad de un sujeto en específico, primero deben existir indicios suficientes para la acreditación del cuerpo del delito, esto es, la demostración de la existencia de un hecho con todos sus elementos constitutivos, como lo defina la ley, al considerarlo como delito y señalar la pena correspondiente.

Por ello, se entiende que al reunir dichos elementos objetivos, no se establece aún la responsabilidad plena del inculpado, sino por el contrario, se acredita únicamente una probable responsabilidad, siendo ésta la justificación del Estado para iniciar el proceso penal tendente a comprobar fehacientemente la plena culpabilidad del acusado.

Es importante reiterar que, dentro de la acreditación del cuerpo del delito, no se incluye la intencionalidad en la comisión del ilícito, es decir, la voluntad del autor no es tomada en consideración al momento de analizar dicha figura.

Por ello, es claro que al dictar sentencia definitiva, el nivel de exigencia probatoria para la comprobación de la responsabilidad plena del inculpado

debe ser mucho más estricto, de esta forma, el juzgador puede tener la total certeza de que ha obtenido la verdad jurídica respecto al hecho delictivo.

De modo tal que el análisis de dicha institución procesal, cuerpo del delito, no debe hacerse en las sentencias definitivas.

Ahora, las sentencias en materia penal se estructuran de dos formas:[10]

a) En los considerandos se analiza la existencia del cuerpo del delito y plena responsabilidad, pasando después a la punición. Esta postura lleva los conceptos procesales de "cuerpo del delito" y "probable responsabilidad", previstos en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 168 del Código Federal de Procedimientos Penales, al ámbito de la sentencia cambiando la "probable" por la "plena" responsabilidad, tal y como se demuestra en el siguiente recuadro:

Estándar de Prueba (Derecho procesal penal federal)	
Sentencia Grado de convicción pleno	
1. DELITO* (16-2oP, 19-1oP y 14-3oP CF, 17 CPF y 168CFPP)	
Conducta	**Ausencia de conducta** (15-I CPF)
Tipicidad (1a. parte) Objetivos Normativos Subjetivos específicos	Atipicidad No adecuación de conducta al tipo (15-II CPF)
2. RESPONSABILIDAD* (16-2oP, 19-1oP y 14-3oP CF, 17 CPF y 168 CFPP)	
Tipicidad (2a. parte)	**Atipicidad**
Autoría y participación Subjetivos genéricos (dolo y culpa)	Error de Tipo (15-VIII-a) CPF) Caso fortuito (no imputación objetiva) (15-X CPF)

[10] Juan Ramón Rodríguez Minaya. Amparo directo, cuaderno de trabajo 1. Cuarta edición. México, Porrúa, 2008, página 468.

Antijuridicidad	**Causa de justificación o licitud** 1) Consentimiento titular bien jurídico (15-III CPF) 2) Legítima defensa (15-IV CPF) 3) Estado de necesidad justificante (15-V CPF) 4) Ejercicio derecho y cumplimiento deber (15-VI CPF)
Culpabilidad	**Causas excluyen culpabilidad** 1) Inimputabilidad (15-VII CPF) 2) Error de justificación (15-VIII-b) CPF) 3) Error de prohibición (15-VIII-b) CPF) 4) Estado de necesidad exculpante (15-V CPF) 5) No exigibilidad de otra conducta (15-IX CPF)
* El cuerpo del delito y la probable responsabilidad no modifican la estructura de la teoría del delito. Sólo se trata de un estándar de prueba, entendido como un grado de convicción que se exige al Juez para librar una orden de aprehensión o comparecencia o para dictar un auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Ese estándar de prueba es menor al grado de convicción que se exige para dictar una sentencia.	
Cita del recuadro: Saúl Cota Murillo. **Proceso penal federal, cuaderno de trabajo 6**. Primera edición. México, Porrúa, 2009, página 495.	

b) En los considerandos se realizan los juicios de la existencia de la conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pasando después a la punición. Esta postura parte de considerar que el concepto de cuerpo del delito es propio de las órdenes de aprehensión, comparecencia y autos de plazo constitucional, no para la sentencia, en donde deben analizarse los juicios apuntados, con base en la interpretación sistemática de varios preceptos de la ley sustantiva penal. Postura que se retoma con la jurisprudencia supracitada y que se representa en la siguiente tabla:

Delito	Excluyentes del delito
I. Conducta a) Acción. b) Omisión propia o impropia (artículo 7o. del CPF).	**I. Ausencia de conducta** Cuando el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente (artículo 15, fracción I, del CPF), como la fuerza irresistible y los movimientos reflejos.

II. Tipicidad	II. Atipicidad
a) Elementos objetivos.	a) Inexistencia de alguno de los elementos objetivos que integran la descripción típica del delito (artículo 15, fracción II, del CPF)
b) Elementos normativos, si el tipo los exige. ➢ Que requieren valoración jurídica. ➢ Que requieren valoración cultural.	b) Inexistencia de alguno de los elementos normativos que integran la descripción típica (artículo 15, fracción II, del CPF)
c) Elementos subjetivos específicos (artículo 134 del CFPP).	c) El autor no se condujo conforme a los elementos subjetivos específicos de la descripción típica (artículo 15, fracción II, del CPF)
d) Autoría y participación (artículo 13 del CPF).	d) No es autor o partícipe (artículo 13 del CPF a contrario sensu)
e) Elementos subjetivos genéricos. ➢ Dolo: directo o eventual (artículo 8o. y 9o. del CPF) ➢ Culpa: con representación y sin representación (artículos 8o. y 9o. del CPF).	e) Se excluyen cuando: ➢ Existe error de tipo invencible (artículo 15, fracción VIII, inciso A del CPF), esto es, que se realice la acción o la omisión bajo un error invencible sobre alguno de los elementos que integran el tipo penal, se excluye el dolo y la culpa. Si es vencible, se excluye el dolo, pero subsiste la culpa si el código permite la comisión culposa. ➢ No existía un deber de cuidado, no era previsible.

III. Antijuridicidad	**III. Juridicidad** (causa de licitud)
➢ Formal. ➢ Material.	a) Consentimiento del titular del bien jurídico afectado: expreso o presunto (artículo 15, fracción III, del CPF). b) Defensa legítima: expresa o presunta (artículo 15, fracción IV, del CPF). c) Estado de necesidad justificante, se lesiona bien jurídico de menor jerarquía (artículo 15, fracción V, del CPF). d) Cumplimiento de un deber jurídico o ejercicio de un derecho (artículo 15, fracción IV, del CPF).
IV. Culpabilidad	**IV. Inculpabilidad** (causas excluyentes de culpabilidad)
a) La **imputabilidad**: que al momento de realizar el hecho típico, el agente tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión (artículo 15, fracción VII, del CPF a contrario sensu). b) **Conocimiento de la antijuridicidad**.	a) La **inimputabilidad**: que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado (artículo 15, fracción VII, del CPF). b) Se excluye por **error de prohibición invencible** (artículo 15, fracción VII, inciso b) del CPF), esto es, si se realiza la acción o la omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o

	porque crea que está justificada su conducta, se excluye la culpabilidad. Si el error es vencible, subsiste la culpabilidad pero disminuye la punibilidad.
c) **Exigibilidad de otra conducta**: cuando atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó (artículo 15, fracción IX, del CPF a contrario sensu).	c) **Inexigibilidad de otra conducta**: cuando atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho (artículo 15, fracción IX, del CPF). Por ejemplo: el estado de necesidad exculpante, cuando se lesione un bien jurídico de igual valor (artículo 15, fracción V, del CPF).
V. Punibilidad (consecuencia)	**V. Inaplicabilidad de punibilidad**
El artículo 7o. del Código Penal Federal menciona que el delito es la acción u omisión que "sanciona las leyes penales"	a) Ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. b) Excusas absolutorias.

Por lo tanto, si bien es cierto que, por costumbre todavía muchos juzgadores estructuran sus sentencias a partir del cuerpo del delito y plena responsabilidad, también lo es que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, mediante tres juicios de valoración: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

CONDUCTA

La conducta puede expresarse en forma de acción (actividad voluntaria o involuntaria) y de omisión, comprendiendo esta última la omisión simple y la comisión por omisión.[11]

[11] Jiménez Martínez Javier. Elementos de Derecho Penal Mexicano. Primera edición. México, Porrúa, 2006, página 332.

Por otra parte, el delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.[12]

Es aplicable la tesis XXVII.3o.4 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro y texto siguientes:

"DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL).—En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.', se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Por tanto, en la sentencia debe analizarse como presupuesto la existencia de una conducta, la cual en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal Federal, exige que se realice con la intervención de la 'voluntad' del agente. Lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante, en casos en que el sujeto no ha tenido la capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corporales por recaerle una fuerza física irresistible o porque el hecho se realizó por movimientos reflejos."

JUICIO DE TIPICIDAD

1. Elementos de la descripción típica

1.1. Elementos objetivos o externos. Son aquellos que delinean sólo la parte exterior de la conducta y que no requieren de una especial valoración jurídica y cultural del hecho concreto para constatar su existencia.[13]

1.2. Elementos normativos. Se trata de presupuestos del injusto típico que sólo pueden ser determinados mediante una especial valoración de la situación de hecho.[14]

Son aquellos ingredientes especiales que se contienen en cada figura delictiva y que requieren de una especial valoración objetiva por parte del juzgador.[15]

---

[12] "Artículo 7o. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales."
[13] Alejandro Sosa Ortiz. El dolo penal. Primera edición. México, Porrúa, 2010, página 67.
[14] Ídem, página 136.
[15] Javier Jiménez Martínez. Elementos de Derecho Penal Mexicano. Primera edición. México, Porrúa, 2006. Páginas 526 a 529.

Pueden ser de dos clases:

a) Los que requieren valoración jurídica. Se trata de conceptos que pertenecen al ámbito del derecho, al cual debe recurrir el intérprete para fijar su alcance.

b) Los que requieren valoración cultural. Son aquellos que tiene un contenido cultural y en los que se requiere una valoración de orden ético o social, la operación mental que sobre ellos realiza el Juez debe ajustarse a normas y concepciones vigentes que no pertenecen a la esfera del derecho.

1.3. Elementos subjetivos específicos (artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales).[16] Son aquellas finalidades que el autor del hecho persigue en forma trascendente, con respecto a la finalidad del resultado, se trata de especiales tendencias y motivos que el legislador exige en algunos casos, aparte del dolo, para constituir el tipo de algún delito como requisitos de carácter subjetivo distintos al dolo.[17]

2. Autoría y participación (artículo 13 del Código Penal Federal)[18]

2.1. Autor es el que realiza por su propia persona todos los elementos del tipo del hecho punible. La autoría puede ser ejecutada algunas veces

---

[16] "Artículo 134. En cuanto aparezca de la averiguación previa que se han acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, en los términos del artículo 168, el Ministerio Público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará, sin necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realización de la conducta, los elementos subjetivos específicos cuando la descripción típica lo requiera, así como las demás circunstancias que la ley prevea. …"

[17] Javier Jiménez Martínez. Elementos de Derecho Penal Mexicano. Primera edición. México, Porrúa, 2006. Página 552.

[18] "Artículo 13. Son autores o partícipes del delito:
"I. Los que acuerden o preparen su realización;
"II. Los que los realicen por sí;
"III. Los que lo realicen conjuntamente;
"IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;
"V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
"VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión;
"VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito y
"VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo.

directa o indirectamente por el agente y otras por intermediario o de un tercero, se distingue, por tanto, entre la autoría material, intelectual y autoría mediata. La autoría comprende:[19]

- Intelectual
- Material
- Coautoría
- Indeterminada
- Mediata

2.2. La participación es un concepto de referencia –un concepto que necesita de otro– en relación con otro delito principal. Participación significa intervención dolosa en un delito doloso ajeno. Partícipe es el sujeto que contribuye al hecho ajeno.[20] El referido artículo establece como formas de participación la instigación, la complicidad primaria, la complicidad secundaria y la complicidad correspectiva.

2.3. Como corolario a lo anterior, el autor es quien tiene el dominio del hecho, es decir, quien puede decidir preponderantemente sobre el curso de la conducta típica. El partícipe no domina el hecho, sino que interviene en él con un grado de decisión menor. Además, su intervención es accesoria, pues supone la existencia de un autor principal.[21]

"Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
"Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este código."

[19] Javier Jiménez Martínez. Elementos de Derecho Penal Mexicano. Primera edición. México, Porrúa, 2006, página 386.

[20] Ídem, páginas 386 y 387.

[21] "En una palabra, la participación es accesoria; la autoría, principal.
"…
"La distinción entre una y otra forma de intervención en el delito tiene que buscarse con un criterio objetivo-material. Este criterio … es el del dominio del hecho. Según este criterio, es autor quien domina finalmente la realización del delito, es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización.". Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. Derecho Penal. Parte General. 5a. ed. Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, página 435 y 436.

3. Elementos subjetivos genéricos

3.1. Dolo. Puede ser directo o eventual (artículos 8o. y 9o. del Código Penal Federal).[22] Es el conocer y querer los elementos del tipo.[23] Sus elementos son el conocimiento y la voluntad. Existen las siguientes clases de dolo:

I) De primer grado. Es cuando el autor sabe lo que hace y quiere realizar precisamente el resultado prohibido en el tipo penal (en los delitos de resultado) o la acción típica (en los delitos de simple actividad).[24]

II) Eventual. El autor considera seriamente como posible que su conducta ha de producir la realización del tipo penal y se conforma con esta posibilidad, en efecto, hay dolo eventual si el autor no ha desistido de la ejecución del hecho por la posibilidad cercana de la producción del resultado y su conducta se arguya que se ha conformado con el riesgo de la realización del tipo para conseguir el fin propuesto.[25]

3.2. Culpa. Se caracteriza por la existencia de un deber de cuidado exigible al activo y la inobservancia de ese deber. De acuerdo con el artículo 9o. del Código Penal Federal, las especies de la culpa son las siguientes:

a) Culpa con representación, la cual ocurre cuando se produce el resultado típico que el activo previó y confío que no se produciría; y

b) Culpa sin representación, que ocurre cuando el activo produce el resultado típico que no previó, siendo previsible.

Tiene aplicación al caso, la tesis XXVII.3o.5 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que a la letra reza:

---

[22] "Artículo 8o. Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente."
"Artículo 9o. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y
"Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales."
[23] Javier Jiménez Martínez. Elementos de Derecho Penal Mexicano. Primera edición. México, Porrúa, 2006. Página 603.
[24] Ídem, página 542.
[25] Ídem, página 545.

"DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL).—En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.', se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo del tipo penal. De la interpretación sistemática de los artículos 7, 8, 9, 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a), 17 del Código Penal Federal, se desprende que los elementos del tipo penal que deben analizarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación)."

JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD

1. Definición. Una conducta es antijurídica cuando está en contra del orden normativo, y tal conducta se encuentra en contra del orden normativo cuando no está amparada por una causa de justificación.[26]

2. Causas de justificación[27]

2.1. Consentimiento del titular del bien jurídico. El consentimiento es la manifestación de la voluntad, mediante la cual quien es capaz de actuar renuncia a su interés jurídicamente protegido, del cual puede disponer válidamente.

2.2. Legítima defensa. Este elemento negativo del delito, se define como la conducta que se realiza en ejercicio del derecho, que se tiene para preservar intereses propios o de un tercero que se encuentran jurídicamente protegidos y que son víctimas de un ataque legítimo.

2.3. Estado de necesidad justificante. Existe un estado de necesidad cuando se actúa por una situación de peligro actual de intereses protegidos

[26] Ídem, página 632.
[27] Ídem, páginas 627-669.

por el derecho, en el cual no queda otro remedio que la violación de los intereses de otro jurídicamente protegido.

2.4. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. Es una causa de justificación que tiene que ver con la ofensa de un bien jurídico por parte de un sujeto que realiza legítimamente sus funciones.

En la especie es aplicable la tesis XXVII.3o.6 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que es del tenor literal siguiente:

"DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL).—En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.', se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos (antijuridicidad material). De los artículos 15, fracciones III, IV, V y VI y 17 del Código Penal Federal, se desprende que la antijuridicidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el consentimiento del titular del bien jurídico protegido (expreso o presunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el estado de necesidad justificante, y iv) el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho."

JUICIO DE CULPABILIDAD

1. Definición. Es el conjunto de presupuestos o caracteres que debe tener una conducta para que le sea reprochada jurídicamente a su autor, ésta se entiende como el elemento subjetivo del delito que comprende el juicio de reproche por la ejecución de un hecho contrario a lo mandado por la ley.

2. Elementos

2.1. Imputabilidad. De conformidad con el artículo 15, fracción VII, del Código Penal Federal,[28] este elemento se señala que al momento de realizar

[28] "Artículo 15. El delito se excluye cuando:
"…

el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado.

2.2. Conocimiento de la antijuridicidad. Conocer la antijuridicidad del hecho implica que el sujeto conozca que el hecho que está realizando es reprochable y prohibido por la norma. Para que un sujeto tenga conciencia de la antijuridicidad de su acto se necesita lo siguiente:

i) Comprensión de la ilicitud del hecho, no en sentido técnico jurídico, sino en la valoración general propia;

ii) No requiere ni el conocimiento de la punibilidad ni el conocimiento de la prescripción legal que contiene la prohibición; y,

iii) Requiere el conocimiento "actual" de la contradicción, precisamente, referido a aquella norma cuya lesión se reprocha al autor.

2.2.1. El error de prohibición. Es el aspecto negativo de la conciencia de la antijuridicidad. De conformidad con la teoría de la culpabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad no es un elemento del dolo, sino un elemento independiente dentro de la culpabilidad. El dolo, como conocimiento y voluntad de realizar elementos del tipo, se concibe como un dolo natural, que no incluye el conocimiento de la antijuridicidad. Éste como elemento independiente se traslada a la culpabilidad y se rige por los principios que inspiran la categoría del delito, es decir, graduando la mayor o menor gravedad de la misma según el grado de reprochabilidad del autor.[29]

Del artículo 15, fracción VIII, inciso B), del Código Penal Federal[30] se advierte que el error de prohibición excluye a la conciencia de antijuridicidad de forma directa o indirecta.

"VII. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible.
"Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el artículo 69 bis de este código; …"

[29] Ídem, páginas 730 a 735.

[30] "Artículo 15. El delito se excluye cuando:
"…

La primera ocurre cuando el autor i) no conoce la norma prohibitiva; ii) conoce la norma prohibitiva pero la considera no vigente; y, iii) conoce la norma y la interpreta equivocadamente y la segunda sucede cuando el autor tiene la creencia de estar justificada una conducta.

3. Exigibilidad de otra conducta. Es la posibilidad determinada por el ordenamiento jurídico de obrar en una forma distinta que aquella por la que el sujeto se decidió.[31]

Robustece lo anterior, la tesis XXVII.3o.7 P (10a.), de este propio órgano colegiado, pendiente de publicación en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que a la letra dice:

"DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA (CÓDIGO PENAL FEDERAL).—En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 'ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.', se estableció que en toda sentencia debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica, antijurídica es culpable cuando al autor o participe del delito le resulta reprochable el haber contravenido el orden jurídico. Del artículo 15, fracciones V, VII, VIII, inciso b) y IX del Código Penal Federal, se desprende que el autor o partícipe del delito es culpable cuando: i) es imputable (capacidad de culpabilidad); ii) conocía la antijuridicidad de su conducta, y iii) le resultaba exigible otra conducta. Los anteriores elementos se excluyen por: a) La inimputablidad. Consiste en que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente hubiere provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo haya previsto o le fuere previsible; b) El error de prohibición invencible. Se presenta cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma (error directo), o porque crea que está justificada su conducta (error indirecto o sobre las causas de justificación); c) El estado de necesidad incul-

"VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible:
"B) Respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque crea que está justificada su conducta. …"
[31] Idem, página 744.

pante. En este supuesto el sujeto activo obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo, y d) La inexigibilidad de otra conducta. Existe cuando atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho."

PUNIBILIDAD

La regla es que, toda persona que ha cometido un hecho típico, antijurídico y culpable, merece pena. El artículo 7 del Código Penal Federal menciona que el delito es la acción u omisión que "sancionan las leyes penales".

1. Pena. Es la consecuencia que se pone al sujeto que, además de merecerla por haber emitido un comportamiento típico, antijurídico y culpable, la necesita desde el punto de vista de la prevención general y especial.[32]

1.1. Pena contra la libertad (prisión o privación de la libertad corporal de conformidad con el artículo 25 del Código Penal Federal).[33] La prisión es una pena que mantiene el sujeto recluido en un establecimiento con fines de castigo. Se trata de internamiento del delincuente en un centro de reclusión impidiéndole en forma absoluta su libertad.[34]

1.2. Pena pecuniaria. Son aquellas que significan una disminución o total entrega del patrimonio del reo, por exigencia de la ley, a causa de la comisión de un delito, en beneficio del Estado.[35] El artículo 29 del Código Penal Federal[36] contempla como sanción pecuniaria a la multa y a la reparación del daño.

---

[32] Ídem, página 931.
[33] "Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a sesenta años, y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva."
[34] Ídem, páginas 944 y 945.
[35] Ídem, página 1004.
[36] "Artículo 29. La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño.
"La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a

1.2.1. Multa. Consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de mil, salvo los casos que la propia ley señale. El día multa equivale a la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos.

1.2.2. Reparación del daño. De conformidad con el artículo 30 del Código Penal Federal, la reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación sufrida, comprenderá cuando menos:

I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible, el pago del precio de la misma, a su valor actualizado;

II. La indemnización del daño material y moral causado, incluyendo la atención médica y psicológica, de los servicios sociales y de rehabilitación o tratamientos curativos necesarios para la recuperación de la salud, que hubiere requerido o requiera la víctima, como consecuencia del delito. En los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, la libertad y el normal desarrollo psicosexual y en su salud mental, así como de violencia familiar, además comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos que sean necesarios para la víctima;

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados;

IV. El pago de la pérdida de ingreso económico y lucro cesante, para ello se tomará como base el salario que en el momento de sufrir el delito tenía la víctima y en caso de no contar con esa información, será conforme al salario mínimo vigente en el lugar en que ocurra el hecho;

V. El costo de la pérdida de oportunidades, en particular el empleo, educación y prestaciones sociales, acorde a sus circunstancias;

VI. La declaración que restablezca la dignidad y reputación de la víctima, a través de medios electrónicos o escritos;

VII. La disculpa pública, la aceptación de responsabilidad, así como la garantía de no repetición, cuando el delito se cometa por servidores públicos.

---

la percepción neta diaria del sentenciado en el momento de consumar el delito, tomando en cuenta todos sus ingresos."

2. Inaplicabilidad de punibilidad

2.1. Ausencia de condiciones objetivas de punibilidad. Son circunstancias o exigencias que se encuentran en relación inmediata con el hecho y que de manera ocasional son establecidas por el legislador para que la pena tenga aplicación y que no pertenecen a ni al tipo de injusto ni a la culpabilidad.[37]

2.2. Excusas absolutorias. Son causales en cuya virtud no obstante concurrir todos los elementos del delito, el derecho deja de imponer pena por razones variadas de utilidad pública.[38]

PUNIBILIDAD O INDIVIDUALIZACIÓN LEGISLATIVA

1. Definición. Es la comunicación de privación o restricción de bienes del autor del delito, formulada por el legislador para la prevención general, y determinada cualitativamente por la clase de bien tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y del ataque sobre dicho bien.[39]

PUNICIÓN O INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL

1. Definición. Es aquella que realiza el Juez a partir de los parámetros mínimos y máximos que establece la ley tomando en cuenta, además, las características particulares tanto del hecho, como del autor del delito.[40]

PENA O INDIVIDUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

1. Definición. Es la fase que comprende a partir del momento en que el reo es puesto a disposición de las autoridades encargadas de ejecutar la pena.[41]

BENEFICIOS

Sustitución de la sanción. La sustitución implica que, en lugar de imponer la pena que se establece para el hecho en particular motivo del proceso y por la que se sentencia, se impone otra, según las circunstancias del delito y de sus autos.[42]

---

[37] Ídem, página 817.
[38] Ídem, página 825.
[39] Ídem, página 1033.
[40] Ídem, páginas 1044 y 1045.
[41] Ídem, página 1060.
[42] Ídem, página 992.

1.1. Beneficio de la sustitución total de la multa (artículo 29 del Código Penal Federal).

1.1.1. Trabajo en favor de la comunidad. Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial podrá sustituirla, total o parcialmente, por prestación del trabajo en favor de la comunidad. Cada jornada de trabajo saldará un día multa.

1.1.2. Libertad bajo vigilancia. Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación de servicios, la autoridad judicial podrá colocar al sentenciado en libertad bajo vigilancia, que no excederá del número de días multa sustituidos.

1.2. Beneficios sustitutivos de la pena de prisión (artículo 70 del Código Penal Federal). La pena de prisión podrá ser sustituida por las siguientes sanciones:

- Trabajo a favor de la comunidad
- Semilibertad
- Tratamiento en libertad
- Multa
- Medida de seguridad

En efecto, el precepto 70 del referido código sustantivo señala los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, a decir:

- Trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años (fracción I);
- Tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años (fracción II).
- Multa, si la prisión no excede de dos años (fracción III).
- El último párrafo de dicho artículo indica que la sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.

1.3. Beneficios de la condena condicional o suspensión de la ejecución de la pena. En términos del artículo 90, fracciones I y III, del Código Penal Federal el Juez al dictar sentencia de condena, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren las siguientes condiciones:

• Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;

• Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 85 de este código, y

• Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.

Este último tema se representa en la siguiente gráfica:

Beneficios	Se sustituye por:	Requisitos
Beneficio de la sustitución total de la multa (artículo 29 del Código Penal Federal).	Trabajo en favor de la comunidad.	Se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella.
	Libertad bajo vigilancia.	Cuando no sea posible o conveniente la sustitución de la multa por la prestación de servicios.
Beneficios sustitutivos de la pena de prisión (artículo 70 del Código Penal Federal).	Trabajo en favor de la comunidad o semilibertad.	La pena impuesta no exceda de cuatro años (fracción I).
	Tratamiento en libertad.	Si la prisión no excede de tres años (fracción II).
	Multa.	Si la prisión no excede de dos años (fracción III).
Nota. La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.		

Beneficios de la condena condicional o suspensión de la ejecución de la pena (artículo 90, fracciones I y III, del Código Penal Federal).	Suspensión de la pena.	1. La condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; 2. Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso. 2.2. Haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible. 2.3. La condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 85 del código sustantivo federal, y 3. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.

En ese tenor, la presente resolución se analizará al delito mediante los juicios de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.

SÉPTIMO.—Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Dado que el quejoso expresa diversos motivos de inconformidad en contra de la sentencia reclamada, las manifestaciones de disenso se estudiarán cuando se aborden los temas que en ellas se refieren, a fin de resolver lo que efectivamente plantea.

Ahora, la responsable resolvió que existen medios de convicción suficientes para tener por probados los delitos de:

a) Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 bis, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

b) Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y reprimido en el artículo 83 quat, fracciones I y II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el numeral 11 de dicha ley especial, en sus incisos b) y c); y,

c) Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de marihuana, tipificado y castigado en el arábigo 477, primer párrafo, en relación con la tabla establecida en el numeral 479, ambos de la Ley General de Salud.

De igual forma, estimó que hay datos suficientemente confirmados para tener por probado que tales delitos fueron cometidos por el quejoso.

A fin de contrastar lo anterior, en primer lugar, en esta instancia se determinará cuáles son los hechos que se encuentran plenamente acreditados con el caudal probatorio.

Después, mediante un examen de subsunción de los hechos probados a las normas punitivas, se determinará si es correcto que la autoridad responsable haya tenido por probados los delitos cometidos por **********.

1. Garantías de legalidad y seguridad jurídica

Alega el quejoso que la sentencia reclamada afectó sus garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 1o., 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, porque la responsable no fundó ni motivó la sentencia reclamada.

El anterior concepto de violación es infundado, como se demostrará enseguida.

En primer lugar, de autos se advierte que, como quedó relatado en los resultandos de esta sentencia, durante el proceso el quejoso gozó de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección.

En segundo lugar, el quejoso fue juzgado por un tribunal previamente establecido, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, se le dio el derecho de audiencia y de defensa, ya que se recibió oportunamente su declaración preparatoria, se le designó un defensor para que lo asistiera durante el proceso y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento.

En tercer lugar, la sentencia reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, es decir, que contiene la cita de los preceptos legales de los Códigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Ley General de Salud, que son aplicables al caso concreto y además se plasmaron las razones particulares y las causas inmediatas que tuvo en cuenta la responsable para confirmar la sentencia que condenó al ahora quejoso.

En efecto, en la sentencia reclamada el Magistrados responsable expresó los artículos en los que fundó su competencia legal, así como los motivos que por razón de territorio actualizaron tal competencia (considerando primero). Después, hizo una relación de las constancias que tuvo a su alcance en el expediente y que le sirvieron de base probatoria para dictar su resolución (considerando cuarto). Posteriormente determinó cuáles eran los elementos de los delitos que tuvo por acreditados, con expresión de los artículos que resultaron aplicables a las conductas enjuiciadas (considerando quinto) y, en este mismo apartado expuso el alcance probatorio de los elementos de prueba, donde hizo manifiesto tanto los artículos que estimó aplicables como los motivos por los que consideró se actualizaban. También realizó los correspondientes juicios de antijuridicidad y culpabilidad de la conducta enjuiciada (considerandos sexto y séptimo), así como el de individualización de la pena (considerandos octavo al décimo quinto).

Por último, la responsable dedicó un considerando específico para resolver los agravios planteados en la apelación (considerando décimo sexto), sin que de la solución a la que arribó se desprenda alguna transgresión a derechos fundamentales del quejoso, pues se expresaron razones y motivos para justificar lo infundado de los agravios.

2. Pruebas y hechos acreditados

Al analizar el acervo probatorio, tanto el Juez primario como el tribunal responsable estimaron acreditados los siguientes hechos:

1. Aproximadamente, a las cinco horas con treinta minutos del quince de septiembre de dos mil diez, en el interior del inmueble ubicado en la colonia del **********, manzana **********, lote **********, en la franja de ********** (circunstancias de tiempo, lugar y ocasión), el quejoso y otras personas, sin pertenecer a las fuerzas armadas de nuestro país, ni contar con permiso o autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, poseyeron (acción) más de cinco armas (acopio), en el interior del domicilio descrito.

2. En la misma circunstancia de tiempo y lugar poseyeron (acción) cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

3. Y también poseyeron (acción) dentro de su radio de acción y ámbito de disponibilidad inmediata, el narcótico consistente en treinta gramos de marihuana (objeto material), sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud, conducta que desplegaron sin contar con la autorización legal respectiva por la Secretaría de Salud (elemento normativo).

2.1. Elementos de prueba

El tribunal responsable tuvo por acreditados tales hechos, con apoyo en las siguientes probanzas:

1. Oficio ********** de puesta a disposición (folios 13 a 15, tomo I de la causa penal), de quince de septiembre de dos mil diez, firmado por el agente aprehensor **********, en el que asentó:

"Siendo aproximadamente las 05:30 horas del día de hoy, cuando el suscrito se encontraba en compañía de los agentes de la Policía Judicial del Estado ********** y ********** circulando a bordo del vehículo oficial ********** de color ********** con placas de circulación **********, del Estado de Quintana Roo, efectuando patrullaje de rutina por la avenida ********** con avenida **********, se recibió un reporte de la central de personas armadas a bordo de un vehículo tipo **********, de color **********, con placas de circulación **********, del Estado de Baja California, a la altura de la región **********, sobre la avenida **********, por lo que se implementó un operativo de localización y búsqueda de dicho vehículo y personas, localizando dicho vehículo sobre la avenida **********, por lo que se le marcó el alto para efectuarle una revisión y las personas que iban en el mencionado vehículo nos apuntaron con unas armas de fuego, indicándonos las personas que viajaban a bordo de dicho vehículo con insultos diciéndonos que nos abriéramos a la verga porque nos iban a quebrar (matar), por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los demás compañeros de la Policía Judicial del Estado,

así como de personal militar, quienes de inmediato se dieron a la tarea de la persecución del mencionado vehículo, siendo que se dirigieron a la colonia el **********, **********, **********, en la franja de **********, la cual es una casa de material de color ********** de dos niveles y se introdujeron al fondo del garaje de dicho domicilio, ya que la reja estaba abierta y posteriormente, las personas descendieron del vehículo corriendo con las armas en las manos, por lo que se rodeó las inmediaciones de dicho domicilio y, posteriormente, al llegar los refuerzos de más compañeros se verificó el interior de dicho domicilio, en el cual fueron aseguradas las personas antes mencionadas y en el interior del domicilio también se encontraron diferentes armas de diferentes tipos que estaban tiradas y unas sobre el sillón de la planta baja. Asimismo, le describo el siguiente armamento:—Tres armas largas tipo 'AR-15', calibre .223" con un cargador abastecido cada una.—Un 'AK-47' (cuerno de chivo) con cargador abastecido.—Dos pistolas una de la marca '**********', calibre .45" y una de la marca '**********' del mismo calibre, ambas con un cargador abastecido.—Una pistola marca '**********' calibre 40 MM, con un cargador abastecido.—Tres granadas de fragmentación de color negro.—Dos cargadores para fusil AR-15 abastecidos.—Un cargador para pistola tipo ********** abastecido.—Tres cargadores para pistola calibre .45 MM (dos abastecidos y uno desabastecido).—Una bolsa con cartuchos de diferentes calibres.—Un par de esposas sin marca.—Un chaleco antibalas de color negro.—Ocho radios de comunicación marca ********** de color negro con tres cargadores para los mismos.—Un radio ********** con su respectivo cargador color negro. Mismos objetos y vehículo que fueron asegurados por la licenciada **********, agente del Ministerio Público del fuero común en turno.—No omito manifestar a usted que también se solicitó la presencia del personal del Ejército de la guarnición militar de esta ciudad, quienes arribaron a bordo de tres vehículos militares, quienes realizaron el levantamiento de las tres granadas de fragmentación."

2. Inspección ministerial (folios 10 a 11, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la que se hizo constar que al constituirse el representante social en el inmueble referido, tuvo a la vista una camioneta tipo **********, color blanco, sin placas de circulación, y en el interior del domicilio, entre otras cosas, una billetera que contenía "una bolsita de nylon con una piedra color blanco", en la "barra desayunadora" de la cocina "una caja de cristal con hierba color verde al parecer marihuana", un "objeto en forma de granada", así como los radios de corto alcance; al subir al segundo nivel, las "armas largas" con sus cargadores y las "armas cortas" con sus cargadores, granadas de fragmentación, así como diversos cargadores y cartuchos de varios calibres.

3. Declaraciones del procesado ********** alias "**********":

3.1. Ministerial (folios 35 a 37, tomo I), de quince de septiembre de dos mil nueve (sic), en la que básicamente dijo que se encontraba dormido en el domicilio referido. Pero a preguntas del Ministerio Público de la Federación dijo conocer a sus coacusados y aceptó que las armas fueron encontradas en el domicilio, aunque negó saber que las guardaban allí.

3.2. Preparatoria (folios 805 a 807, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la que se reservó su derecho a rendir mi declaración.

3.3. Ampliación de declaración (folios 828 y 829, tomo I), de veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que ante la Jueza del proceso manifestó que no ratificaba su declaración ministerial pero reconoció las firmas al margen y calce de la indicada actuación. Y dijo que los hechos sucedieron de la siguiente manera:

"… el día catorce de septiembre de dos mil diez, llegué a esta ciudad proveniente de **********, a donde fui a buscar las armas que fueron aseguradas, ya que a mí me pagaron cuatro mil pesos por ir a recogerlas y depositarlas en el lugar donde me detuvieron; que la indicación que se me dio fue que éstas (las armas) iban a estar en una camioneta **********, de color **********, que estaba estacionada a la entrada de esa ciudad; que al recoger las armas las traje junto con la camioneta que he referido hasta el domicilio donde aconteció mi detención; que aproximadamente eran las seis de la tarde cuando llegué al domicilio referido, y en él se encontraban tres sujetos, de los cuales desconozco sus nombres, pero se encuentran detenidos junto conmigo, entre ellos, se encontraba un conocido mío al que lo apodan '**********' de nombre **********, quien me había pedido permiso para llevar unos amigos a tomar; ellos no sabían nada de las armas, ya que éstas las había dejado en la planta alta de la casa y ellos estaban tomando las cervezas en el patio que se encuentra a un lado de la morada; asimismo, en el interior de la casa había una cajita como 'alhajero', que contenía aproximadamente tres gramos de marihuana, los cuales eran de mi propiedad, y que me servían para mi consumo; recalcando que no es verdad que hubiera cocaína dentro del predio como refieren los elementos aprehensores. … A continuación, en uso de la voz que le es conferida a la representación social manifiesta que desea formular las siguientes preguntas al indiciado: Primera: Que diga el inculpado quién era la persona con la cual se puso de acuerdo en relación con la entrega de las armas que ha referido. Contestó: '**********', **********, me pagó para que fuera a recoger las armas a ********** y las depositara en esa casa. … Quinta: Que diga el inculpado quiénes tenían conocimiento de que

las armas se encontraban en el domicilio ubicado en **********. Contestó: Solamente 'el **********' y yo. ..."

4. Declaraciones del procesado ********** alias "el **********" o "**********":

4.1. Ministerial (folios 39 a 42, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la que fundamentalmente manifestó que no son ciertos los hechos, pues se dedica a descargar los tráilers de frutas y abarrotes para el supermercado ********** de Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero aceptó que "pasaron por él" a su domicilio en una camioneta de la marca **********, **********, de color plateado, sin placas de circulación y al subirse a la camioneta fue a la ciudad de Playa del Carmen y luego regresó a la ciudad de Cancún, al domicilio donde se encontraron las armas y en donde estaban sus coacusados, en el que se quedó a dormir. Hasta que el quince de septiembre, en la madrugada llegaron los militares y derribaron la puerta. Además, aceptó que las armas aseguradas se encontraron en el segundo nivel.

A preguntas de la representación social del fuero común, respondió saber que las armas se "guardaban" en el domicilio donde fueron halladas.

4.2. Preparatoria (folios 807 reverso a 809, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la que se reservó su derecho a declarar.

4.3. Ampliación de declaración (folios 830 y 831, tomo I), de veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que ante la Jueza del proceso no ratificó su declaración ministerial, pero reconoció las firmas al margen y calce de la indicada actuación y manifestó que los hechos sucedieron de la siguiente manera:

"... el día catorce de septiembre de dos mil diez, me encontraba tomando con un amigo de nombre **********, y él me dijo que fuéramos a tomar a otra casa donde se encontraba un sujeto al que apodan '**********', por lo que fuimos a ese lugar donde aconteció mi detención; que al llegar aproximadamente a las seis u ocho de la noche de ese día, continuamos tomando los tragos, quedé muy tomado, les pedí permiso para bañarme y luego me quedé dormido, siendo que hasta las cuatro de la mañana aproximadamente, escuché que alguien aporreó la puerta; yo me encontraba en la planta baja, acostado en un sillón, cuando entraron soldados a la casa, nos vendaron los ojos, y se pusieron a revisarla, siendo que no pude ver nada, desconozco si se encontró algo ilícito en ese lugar, lo único raro que vi fue una cajita en la mesa de la cocina que contenía un poco de marihuana. Finalmente, deseo

agregar, que cuando llegamos a ese domicilio ya se encontraban ahí '**********' y un sujeto al que le dicen '**********', integrándonos a ellos mis amigos ********** y yo, desconociendo el nombre completo de cada uno de ellos, y nosotros cinco somos las únicas personas que fuimos detenidas ese día en ese lugar. Siendo todo cuanto tengo que manifestar. A continuación, en uso de la voz que le es conferida a la representación social, manifiesta que desea formular las siguientes preguntas al indiciado: … Tercera. Que diga el inculpado si tenía conocimiento sobre la existencia de las armas, granadas y cartuchos que fueron encontrados en el domicilio donde fue asegurado. Contestó: No sabía de la existencia de ellas, sino hasta que nos llevaron a la Procuraduría General de la República, nos dijeron que ahí habían encontrado armamento. … Quinta: Que diga mi patrocinado si en el momento en que los agentes entraron al domicilio en que fue detenido, se encontraba en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga. Contestó: Como había dormido, ya se me había quitado lo borracho, así que me encontraba consciente, y aunque en la noche había fumado marihuana, ya no me encontraba bajo sus efectos. Sexta: Que diga mi defendido si recibió algún tipo de presión o amenaza al momento de rendir su declaración ministerial. Contestó: Los agentes que me estaban custodiando me amenazaron con que iban a continuar golpeándome para que firmara la declaración, pero lo que está plasmado en ella no lo dije de viva voz, ya que sólo me la dieron para firmar."

4.4. Ampliación de declaración (folios 1064 reverso y 1065, tomo I), de diez de noviembre de dos mil diez, ante la Jueza de Distrito, en la que manifestó que ratificaba la declaración que rindió en diligencia de ampliación de preparatoria de veintiuno de septiembre y agregó que el día de los hechos acudió al lugar de la detención "a tomar unas cervezas con unos amigos" y que después de un rato, se bañó y se acostó a dormir, y cuando despertó, los militares habían ingresado al predio.

A preguntas del Ministerio Público de la Federación dijo, en lo que interesa: "… Tercera: Que diga mi defendido si ya había estado en alguna otra ocasión en el domicilio en que fue detenido. Contestó: No, era la primera vez que iba."

5. Declaraciones del procesado **********:

5.1. Ministerial (folios 44 y 45, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la que manifestó que fue detenido en las inmediaciones de la avenida ********** cuando comenzaron a pasar varias patrullas, así como vehículos del Ejército Mexicano y se percataron que ********** alias "**********" estaba comunicándose "con el mando" y los detuvieron para ser puestos a disposición de la autoridad.

Asimismo, manifestó no tener conocimiento en relación con las armas.

5.2. Preparatoria (folios 809 reverso a 811, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la que se reservó rendir su declaración.

5.3. Ampliación (folios 832 y 833, tomo I), de veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que ante la Juez del proceso manifestó que, no ratificaba su declaración ministerial, pero reconoció las firmas al margen y calce de la indicada actuación. También manifestó que los hechos sucedieron de la siguiente manera:

"… el día catorce de septiembre de dos mil diez, me encontraba tomando con unos sujetos de nombre ********** y otro de apellido **********, y aproximadamente a las seis de la tarde, fuimos a casa de un amigo a quien conozco únicamente con el apodo de '**********', ya que él me había invitado a su casa, por lo que acudimos allí junto con ********** y **********, y allí continuamos tomando, al caer la noche, me encontraba muy tomado, y me quedé dormido en un sofá que se encontraba en la planta baja, siendo que en la madrugada escuché un ruido que me despertó, y vi que unos soldados entraron a la casa, a nosotros nos agacharon, y vendaron los ojos y ya no supe que más pasó; que desconozco si en el interior de ese domicilio había armas, granadas o cartuchos, y durante el tiempo que estuve allí tomando no vi nada de eso, lo único ilícito que vi fue un poco de marihuana que estaba dentro de una cajita; …"

5.4. Ampliación de declaración (folio 1064, tomo I), de diez de noviembre de dos mil diez, ante la Jueza de Distrito, en la que manifestó que ratificaba su declaración de ampliación de preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez, y agregó que no era cierto lo afirmado en el parte informativo, porque en ningún momento estuvo en una camioneta, ni tampoco portaba un arma ni amenazó a ningún policía. Pero reconoció estar en la casa en que fue detenido.

6. Declaraciones de **********, "**********":

6.1. Ministerial (folios 47 a 49, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la que manifestó que se encontró con un amigo al que le apodan la "**********", al cual le dijo que no tenía trabajo, y le respondió que le ofrecía trabajo, y en ese momento lo llevó a **********, en una casa de dos pisos, de color blanco, rejas de color negro, y muy grande. Agregó que con respecto a los hechos por los cuales fue detenido, se encontraba durmiendo en la planta baja en la casa antes mencionada y acompañado, entre otros, de **********,

cuando escucharon ruidos, de gente que se introducía a la casa y al momento de levantarse y fijarse por la ventana de quienes eran, vieron que eran los soldados, los cuales se introdujeron a la casa y les dijeron que se tiraran al piso, y "al momento de la detención en la planta baja en la que estábamos dormidos, no había armas, ni cartuchos, ni granadas, las cuales estaban en la parte alta de la casa, en un cuarto, que sirve como estudio."

6.2. Declaración preparatoria (folios 803 a 805, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la que se reservó su derecho a rendir declaración.

6.3. Ampliación de declaración (folios 826 y 827, tomo I), de veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que ante la Jueza del proceso manifestó que no ratificaba su declaración ministerial, pero reconoció las firmas que obran al margen y calce de la indicada actuación; y manifestó que los hechos sucedieron de la siguiente manera:

"... el día que éstos acontecieron '**********', **********, ********** y ********** y el suscrito, nos juntamos en la casa donde fuimos detenidos para tomarnos unas cervezas, lugar donde nos quedamos dormidos, y posteriormente arribaron los soldados y nos detuvieron; que acudimos a ese lugar porque lo sugirió **********, ya que allí se encontraba **********, amigo de él a quien conocí hasta ese día."

A preguntas de la representación social manifestó: "... Segunda: Que diga el inculpado cuánto tiempo aproximadamente permaneció en la casa en la cual fue detenido. Contestó: Llegamos a la casa aproximadamente a las seis u ocho de la noche del catorce de septiembre del año en curso y empezamos a tomar las cervezas, hasta que nos quedamos dormidos y llegaron los militares aproximadamente a las cuatro de la mañana. ... Quinta: Que diga el inculpado a quién le pertenecía el narcótico asegurado en ese lugar. Contestó: Recuerdo que en una barra que había en la cocina vi marihuana dentro de una cajita como alhajero, al parecer pertenecía a un sujeto de nombre **********, que también se encontraba en esa casa y era amigo del '**********', **********, siendo ésa la única droga que vi en ese lugar."

6.4. Ampliación de declaración (folios 1066 y 1067, tomo I), de once de noviembre de dos mil diez, ante la Jueza de Distrito, en la que manifestó que ratificaba su declaración de ampliación de preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez, y agregó que los policías judiciales en ningún momento lo detuvieron y que nunca estuvo en la camioneta que se menciona en el parte informativo; que se encontraba en la casa donde fue detenido.

También manifestó que desconocía la existencia de las armas, granadas y cartuchos cuyo acopio se le atribuyó.

7. Declaraciones de **********, "**********":

7.1. Ministerial (folios 57 y 58, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la que refirió que alrededor de las diez de la mañana platicaba con ********** en la calle principal de ********** y vieron movimiento de corporaciones policiacas, del Ejército y de la Policía Judicial del Estado, tomó su teléfono y le marcó a su compañero "**********" que es a quien le reporta los movimientos de patrullas del área, ya que el declarante tiene funciones de "**********", y al reportarle ese día lo detuvieron. También manifestó no tener conocimiento en relación con las armas ni conocer a los demás detenidos.

7.2. Preparatoria (folios 811 reverso a 814, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, en la que se reservó su derecho a rendir declaración.

7.3. Ampliación de declaración (folios 834 y 835, tomo I), de veintiuno de septiembre de dos mil diez, en la que ante la Jueza del proceso manifestó que no ratificaba su declaración ministerial pero reconoció las firmas al margen y al calce de la indicada actuación, y declaró que los hechos sucedieron de la siguiente forma:

"… aproximadamente, el trece de este mes, un sujeto a quien únicamente conozco como '**********', me contactó para que le consiguiera armas de fuego, ya que tengo un conocido en **********, a quien también sólo conozco como '**********', quien las adquiere, de hecho al contactarlo así lo hizo, y me dijo que me las iba a dejar en las afueras de la ciudad de **********, pero que consiguiera un contacto que supiera manejar bien para que las pudiera trasladar hasta esta ciudad de **********; casualmente, en esos días me encontré en **********, a un conocido de nombre **********, de apodo '**********', que en esos días se encontraba corto de dinero, por lo que le propuse que a cambio de dinero fuera por las armas a **********, y que las llevara hasta una casa en **********, que '**********' me indicó, e incluso este último me dijo que me podía quedar por un tiempo en esa casa; que el día catorce de septiembre del año en curso, me encontraba en la casa de **********, con un amigo de nombre **********, y éste a su vez invitó a otros dos amigos que no conocía, y "**********", quien ese día llegó de Chetumal; que nosotros cinco, nos pusimos a tomar toda la tarde, quedamos todos tomados, y aproximadamente a las cuatro de la mañana, me encontraba en la planta baja de la casa en un área habilitada como sala, cuando entraron los militares y nos esposaron, y ya no pude ver más porque nos

vendaron los ojos. Asimismo, como ese día había llegado '**********' de Chetumal, las armas las depositamos en la planta alta de la casa; de igual modo, en una mesa de la cocina había marihuana dentro de una cajita, y ésa era la única droga que había dentro la casa, y era de '**********', la cual iba a utilizar para su consumo. Por último, quiero recalcar que solamente conozco a **********, pero a sus amigos no, no obstante, se encuentran detenidos junto conmigo, no tenían conocimiento de las armas, ni mi amigo **********, de ellas sólo sabíamos '**********' y yo, finalmente, cabe precisar que desconozco quién es el propietario de la camioneta marca **********, de la línea **********, encontrada en el domicilio donde fui; y desconozco el destino que se le iba a dar a ese armamento, puesto que no eran para mí, sino que eran un encargo de '**********', y que es mentira todo lo que salió en la prensa en relación con que planeábamos realizar, un atentado en la Plaza **********, el día quince de septiembre de este año, y no es mi deseo dar contestación a ningún cuestionamiento que me formulen las demás partes".

7.4 Ampliación de declaración (folios 1067 reverso y 1068, tomo I), de once de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que manifestó que ratificaba su declaración de ampliación de preparatoria, y agregó que el parte informativo era mentira, porque nunca circuló en el vehículo descrito allí y no fue detenido por la Policía Judicial sino por el Ejército, que las otras personas detenidas no tenían conocimiento sobre el acopio de armas, y que fue torturado.

8. Declaraciones de **********:

8.1. Ministerial (folios 61 y 62, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en la cual, manifestó que eran ciertos los hechos que le imputan, que tenía como un mes que trabajaba para "**********" sólo en funciones de limpieza de la casa y hacer la comida.

8.2. Testimonial (folios 1093 a 1096, tomo I), de veintinueve de noviembre de dos mil diez, ante la Juez del proceso, en la que manifestó que como una semana antes del día de los hechos una persona del sexo masculino le ofreció trabajo para hacer limpieza en una casa y que el quince de septiembre, en la mañana fue a la casa y cuando casi llegaba personas vestidos de militares, le preguntaron que a dónde se dirigía y al decirles la golpearon y la introdujeron en la casa y refirió haber sufrido actos de tortura con la intención de obtener una declaración.

9. Dictamen de criminalística de campo, fotografía, encuadre de armas e identificación vehicular (folios 63 a 80, tomo I), de quince de septiembre de dos mil diez, en el que el perito concluyó:

9.1. Del arma: Que las armas puestas a disposición sí se pueden considerar como armas prohibidas; sin embargo, su portación y posesión sí se encuentran permitidos dentro de los cuerpos policiacos, debido a la naturaleza del rango al que pertenecen, siempre y cuando se cuente con los permisos necesarios, expedidos por las dependencias oficiales que tengan jurisdicción para este fin. Los cartuchos útiles puestos a disposición sí se encuentran en condiciones de ser disparados por un arma que corresponda al rango de los mismos.

9.2. Del vehículo: Que los medios de identificación del vehículo no se encuentran alterados o modificados por algún agente externo ajeno al propio vehículo.

9.3. Del inmueble: Se puede inferir que el inmueble fue utilizado para la planeación y realización de actividades ilícitas.

10. Inspecciones ministeriales de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en las que se hizo constar la existencia, entre otras cosas, de las armas, los cartuchos y "una bolsa de material sintético transparente conteniendo un estuche transparente que a su vez contiene un vegetal seco y verde".

11. Dictamen de integridad física de los inculpados (folios 199 a 204, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito médico oficial concluyó, en el correspondiente al quejoso, que presentaba una lesión que no ponía en peligro la vida y tardaba en sanar más de quince días.

12. Inspección de libreta (folio 254 a 292, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el agente del Ministerio Público de la Federación, tuvo a la vista la libreta asegurada a los inculpados.

13. Dictamen en dactiloscopia forense (folios 300 y 301, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que la perito concluyó que no se encontraron datos registrales del quejoso en la base de datos del sistema AFIS.

14. Declaraciones del agente de la Policía Judicial en el Estado **********:

14.1. Comparecencia (folios 303 a 307, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en la que ratificó la puesta a disposición, reiteró el contenido de ese oficio y agregó que el día de los hechos, al solicitar el apoyo después de la persecución llegaron elementos de la Policía Judicial del Estado, personal del Ejército y la agente del Ministerio Público del fuero común.

14.2. Testimonial (folios 1076 reverso y 1077, tomo I), de dieciséis de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que ratificó el oficio de puesta a disposición y la declaración ministerial.

15. Dictamen de tránsito terrestre (folios 315 a 317, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito concluyó:

"El vehículo para transporte de pasajeros, tipo vagoneta deportiva de propósitos múltiples, 4 puertas laterales, color **********, transmisión automática (4X4), sin placas de circulación y número de identificación vehicular **********; es de manufactura ********** (**********), de fabricación extranjera, fabricado como año modelo **********".

16. Dictamen en materia de química (folios 320 a 328, tomo I) de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que la especialista oficial concluyó:

"Primera. La sustancia sólida ligeramente amarillenta, marcada como muestra a, descrita con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponde a clorhidrato de cocaína, sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud.

"Segunda. El vegetal verde y seco, marcado como muestra B, descrito con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponde a *cannabis sativa l.*, conocida comúnmente como marihuana, considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud."

TABLA DE PESOS

MUESTRA	PESO BRUTO RECIBIDO	PESO NETO RECIBIDO	PESO NETO ENTREGADO	PESO BRUTO ENTREGADO	MUESTRA JUEZ
A	1.5 g	0.4 g	0.2 g	2.1 g	-
B	6012 g	30.0 g	29.6 g	616.6 g	0.2 g

17. Dictamen químico (folios 326 a 329, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito oficial concluyó:

"Primera. En las muestras recabadas de la recámara y del anima del cañón de las armas de fuego marcadas como 1 y 7, descritas con anterioridad y motivo del presente dictamen, no se identificó la presencia de nitritos.—Segunda. En las muestras recabadas de la recámara y del anima del cañón de las armas de fuego cuestionadas, marcadas como 2, 3, 4, 5 y 6, descritas

con anterioridad y motivo del presente dictamen, sí se identificó la presencia de nitritos."

18. Dictamen químico (folios 330 y 331, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito oficial concluyó:

"Primera. En las zonas palmar y dorsal de ambas manos de las personas que dijeron llamarse: **********, **********, **********, ********** y **********, no se identificó la presencia de plomo y bario elementos provenientes de la deflagración de los cartuchos, cuando se hacen disparos con arma de fuego.—Segunda. En las zonas de cara y cuello de las personas que dijeron llamarse: **********, **********, **********, ********** y **********, no se identificó la presencia de plomo y bario, elementos provenientes de la deflagración de los cartuchos, cuando se hacen disparos con arma de fuego."

19. Dictamen de electrónica (folios 344 a 371, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, sobre los teléfonos asegurados.

20. Dictamen de medicina forense (folios 385 a 391, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito oficial concluyó:

"Primera: Quien dijo llamarse **********, no es farmacodependiente de clorhidrato de cocaína, y la cantidad de 0.4 (cero punto cuatro) gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, no excede para su estricto consumo personal e inmediato, aun considerando que sea para su consumo por primera vez.

"Segunda: Quien dijo llamarse **********, sí presenta el cuadro clínico de ser farmacodependiente al consumo del enervante denominado marihuana y la cantidad de 30.0 (treinta punto cero) gramos peso neto de *cannabis sativa l.*; conocida comúnmente como marihuana, sí excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Tercera: Quien dijo llamarse **********, sí es farmacodependiente de clorhidrato de cocaína, y la cantidad de 0.4 (cero punto cuatro) gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, no excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Cuarta: Quien dijo llamarse **********, sí presenta el cuadro clínico de ser farmacodependiente al consumo del enervante denominado marihuana y la cantidad de 30.0 (treinta punto cero) gramos peso neto de *cannabis sativa l.*; conocida comúnmente como marihuana, sí excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Quinta: Quien dijo llamarse **********, sí es farmacodependiente de clorhidrato de cocaína, y la cantidad de 0.4 (cero punto cuatro) gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, no excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Sexta: Quien dijo llamarse **********, sí presenta el cuadro clínico de ser farmacodependiente al consumo del enervante denominado marihuana y la cantidad de 30.0 (treinta punto cero) gramos peso neto de *cannabis sativa l.*; conocida comúnmente como marihuana, sí excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Séptima: Quien dijo llamarse **********, no es farmacodependiente de clorhidrato de cocaína, y la cantidad de 0.4 (cero punto cuatro) gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, no excede para su estricto consumo personal e inmediato, aun considerando que sea para su consumo por primera vez.

"Octava: Quien dijo llamarse **********, sí presenta el cuadro clínico de ser farmacodependiente al consumo del enervante denominado marihuana y la cantidad de 30.0 (treinta punto cero) gramos peso neto de *cannabis sativa l.*; conocida comúnmente como marihuana, sí excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Novena: Quien dijo llamarse **********, sí es farmacodependiente de clorhidrato de cocaína, y la cantidad de 0.4 (cero punto cuatro) gramos peso neto de clorhidrato de cocaína, no excede para su estricto consumo personal e inmediato.

"Décima: Quien dijo llamarse **********, no presenta el cuadro clínico de ser farmacodependiente al consumo del enervante denominado marihuana y la cantidad de 30.0 (treinta punto cero) gramos peso neto de *cannabis sativa l.*; conocida comúnmente como marihuana, sí excede para su estricto consumo personal e inmediato."

21. Dictamen de representación gráfica (folios 427 a 506, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito oficial en la materia presentó las respectivas placas fotográficas de los procesados, narcótico, armas de fuego, cartuchos y objetos asegurados.

22. Dictamen de balística forense (folios 530 a 541, tomo I), de dieciséis de septiembre de dos mil diez, en el que el perito oficial adscrito a la Procuraduría General de la República concluyó especialista, concluyó que las armas

aseguradas sí corresponden a las reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, al igual que la mayoría de los cartuchos asegurados.

23. Dictamen de medicina forense (folios 779 a 784, tomo I), de diecisiete de septiembre de dos mil diez, suscrito por el médico oficial, en el que concluyó que el quejoso presentaba lesión que no pone en peligro la vida y tarda en sanar menos de quince días.

24. Oficio ********** (folios 957 a 961, tomo I), de veintisiete de septiembre de dos mil diez, firmado por el perito en dactiloscopia, mediante el cual remite las fichas signaléticas de ********** alias "**********", ********** alias "**********", ********** alias "**********" y **********, e informó que ********** alias "**********" tiene un proceso penal por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, instruido en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, y ********** alias "**********" tiene un proceso penal por el delito contra la salud, instruido en el citado órgano jurisdiccional.

25. Oficio ********** (folio 962, tomo I), de veintisiete de septiembre de dos mil diez, firmado por el perito en dactiloscopia, en el que informó que **********, alias "**********", falleció el veintidós de septiembre de ese año.

26. Telegrama ********** (folio 979, tomo I), del jefe del Departamento de Registro Nacional de Identificación de Sentenciados de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, en el que informó que en los archivos de esa dependencia ********** cuenta con registro de antecedente penal derivado de la causa penal ********** instruido en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, por el delito contra la salud; y, por lo que respecta a **********, **********, ********** y **********, no se encontró registro de antecedentes penales.

27. Oficio ********** (folios 997 y 998, tomo I), de siete de octubre de dos mil diez, firmado por el director del Registro Civil, remite copia certificada del registro de defunción a nombre de ********** de veintisiete de septiembre de dos mil diez y señaló que en dicho registro el finado no cuenta con el segundo apellido.

28. Testimonial del agente policial ********** (folios 1075 y 1076, tomo I), de dieciséis de noviembre de dos mil diez, rendida ante la Juez de Distrito, en la que manifestó:

"Que ratifico tanto el oficio de puesta a disposición de fecha quince de septiembre de dos mil diez, como mi declaración ministerial de esa misma fecha que rendí ante el agente del Ministerio Público del fuero común; y que no tengo nada más que agregar al respecto. En uso de la voz que le fue conferido a la agente del Ministerio Público Federal manifiesta que desea formular las siguientes preguntas: Primera. Que diga el agente si puede especificar en qué parte de la planta baja del domicilio en el que fueron asegurados mis patrocinados **********, **********, ********** y **********, fueron encontradas las armas y la droga afectas a la causa. Contestó: Quiero manifestar que las armas las vimos en ambos niveles; en la planta de abajo, sobre el sofá, me acuerdo que había un arma corta, y las demás armas, en el clóset de un cuarto de la planta de arriba. Nosotros entramos en segundo grupo, ya que primeramente por medida de seguridad, tuvo que intervenir un grupo especial de la Policía Judicial apoyado por elementos del Ejército. Segunda. Que diga el agente por qué en su oficio de puesta a disposición de fecha quince de diciembre del presente año señaló únicamente que las diferentes armas de diferentes tipos estaban tiradas, y unas sobre el sillón de la planta baja. Contestó: Efectivamente, al mencionar que estaban tiradas, era porque estaban tiradas en el piso del clóset de un cuarto de la planta de arriba, y ese clóset va del piso hasta el techo, que sólo tiene una división hasta arriba, al parecer para guardar maletas, que no tiene puerta ni cortina; y respecto al sillón, en la respuesta anterior mencioné que un arma corta estaba sobre un sofá de la planta baja. Tercera. Que diga el agente por qué en el oficio de puesta a disposición no hace el señalamiento de que unas armas fueron localizadas en la planta alta del domicilio en comento y en esta diligencia hace ese señalamiento. Contestó: Hago el señalamiento porque me están preguntando si vi las armas y en dónde las vi; en mi puesta a disposición yo señalo que dichas armas y los diferentes objetos, los asegura el Ministerio Público; yo solamente hago mención en mi puesta a disposición de los objetos que se encontraron en ese lugar, y quien los asegura es el Ministerio Público. Cuarta.- Que diga el compareciente cuál era el primer grupo de agentes que dice entraron al domicilio donde fueron asegurados mis patrocinados. Contestó: El grupo que tenemos en la Policía Judicial, que es el denominado FRAI, junto con elementos del Ejército Mexicano; quiero aclarar que los que iban a la cabeza, son los elementos del Ejército. El grupo FRAI significa Fuerza de Reacción de Apoyo Inmediato, y su función consiste en las intervenciones delicadas de alto impacto; este grupo, ese día de su función era, al igual que el Ejército, en conjunto, detener y asegurar a las personas que estuvieran en el lugar de los hechos. Quinta. Que precise el agente en qué consistió la participación de ********** y **********, agentes de la Policía Judicial del Estado, en la detención de los procesados. Contestó: En la puesta a disposición se especifica que ellos venían

conmigo cuando atendí a dicho reporte, porque son parte de mi grupo, y al momento de la detención, como retaguardia del primer grupo que entró al domicilio, por medida de seguridad."

29. Testimonial a cargo del agente policial ********** (folios 1076 reverso y 177, tomo I), de dieciséis de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que manifestó, en lo que importa:

"Ratifico el oficio de puesta a disposición de quince de octubre de dos mil diez, así como mi declaración ministerial de dieciséis de septiembre del año actual; y es todo lo que tengo que decir. En uso de la voz que le fue conferido a la defensora pública federal, manifiesta que desea formular las siguientes preguntas: Primera: Que diga el agente, cuál fue su participación en la detención de los procesados, **********, **********, ********** y **********. Contestó: Mi participación fue proporcionar seguridad en las inmediaciones de la casa. Segunda: Que diga el agente si en algún momento ingresó en el domicilio en donde fueron detenidos mis patrocinados. Contestó: Una vez que fueron asegurados los procesados, se ingresó al domicilio para buscar a los detenidos para luego ser trasladados a la subprocuraduría, a lo cual apoyé. Tercera: Que diga el agente si presenció el momento en que se aseguraron las armas, objetos y droga afectas a esta causa. Contestó: Una vez cuando ya estaban aseguradas, vi armas en la planta baja; en la planta alta, una bolsa con radios de comunicación, una bolsa con cartuchos y granadas, así como diversas armas, las cuales aseguró el Ministerio Público. …"

30. Testimonial a cargo del agente policial ********** (folios 1077 reverso y 1078, tomo I), de dieciséis de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que manifestó, en lo que interesa:

"Ratifico el oficio de puesta a disposición de quince de octubre de dos mil diez, firmado por mis compañeros ********** y **********, ya que como ahí se menciona, estuve con ellos cuando se suscitaron los hechos ahí consignados; y es todo lo que tengo que decir. En uso de la voz que le fue conferido a la defensora pública federal, manifiesta que desea formular las siguientes preguntas: … Quinta: Que diga el agente si puede precisar cuántas personas iban a bordo del vehículo tipo **********, color **********, sobre la cual implementaron una persecución. Contestó: En el vehículo tipo **********, color ********** con **********, yo alcancé a ver al conductor y a una persona más. A continuación, en uso de la palabra que se concedió a la agente del Ministerio Público de la Federación, formuló la siguiente pregunta: Que

diga el agente en relación con la pregunta cuarta formulada por la defensa, especifique qué diligencias comprende el tiempo que señaló respecto al operativo realizado en cuanto a los inculpados. Contestó: Comprende de persecución del vehículo, llegada de apoyos, aseguramiento de las personas y de inmueble por el Ministerio Público."

31. Testimonial a cargo de ********** (folio 1087, tomo I), de veintitrés de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que afirmó que el día antes de los hechos bebió unas cervezas en compañía de **********.

32. Careo constitucional entre el procesado ********** y ********** (folios 1089 y 1090), de veintiséis de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, el que resultó:

"**********, manifiesta: Que ratifico el contenido de mis declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y judicial, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce de las referidas actuaciones, por haber sido puesta de mi puño y letra. Por su parte, el agente **********, manifestó: Que ratifico tanto el oficio de puesta a disposición, como mi declaración rendida ante el agente del Ministerio Público Federal, ambas de quince de septiembre de este año, así como mi declaración rendida ante esta autoridad judicial, el dieciséis de noviembre de dos mil diez, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce por haber sido puesta de mi puño y letra. A lo que en uso de la voz el procesado **********, manifestó: Que no conozco a mi careado, nunca lo había visto, y que es la primera vez que lo veo. En uso de la voz el agente aprehensor **********, señaló: Que lo vi por vez primera el día de los hechos, lo reconozco como una de las personas que fueron detenidas en la casa el día de la detención, como señalo en mi oficio de puesta a disposición. En uso de la voz el procesado **********, manifestó: Que yo fui detenido por elementos del Ejército, no por los elementos de la FRAI ni de la Policía Judicial, como se menciona en el parte informativo; asimismo, quiero que se asiente que lo que se dice en el parte informativo es falso, respecto de la persecución que dice el agente de la Policía Judicial, nunca supe de eso; la camioneta jamás se movió de la casa; de las armas que dicen fueron encontradas en la parte de abajo de la casa, yo nunca vi ningún arma, desconocía su existencia; y digo esto, porque él dice que las encontraron dentro de la casa; y de la persecución que él dice, no sé si él haya participado en la misma, y quiero recalcar que los que nos detuvieron fueron elementos del Ejército y no los elementos de la FRAI, y que yo únicamente me encontraba en esa casa ingiriendo bebidas embriagantes, estaba de fiesta, se puede

decir; y eso es todo lo que deseo manifestar. A su vez, el agente aprehensor **********, señaló: Que como mencioné en mi declaración judicial, en el operativo participaron elementos de la Policía Judicial del Estado, del grupo de reacción FRAI y del Ejército Mexicano; respecto de que fue detenido por elementos del Ejército, quiero manifestar que ellos participaron en el operativo, y quizá a él lo detuvieron ellos; además, quiero mencionar que en nuestro parte, o en nuestro informe, se menciona que en el interior del vehículo habían unas personas del sexo masculino, pero no describimos o señalamos persona alguna; y respecto de las armas, éstas fueron aseguradas y encontradas por elementos del Ejército y del Ministerio Público. El procesado **********, expresó: Quiero manifestar que en relación con lo que dice mi careado, no es cierto, en virtud de que como ya manifesté, la camioneta nunca salió de la casa, y él dice que efectuando un rondín en la noche, le marcaron el alto a dicha camioneta, y que se bajaron unas personas con armas de fuego, gritando, 'ábranse a la verga o nos los vamos a quebrar', por lo que no es posible que si la camioneta nunca salió de la casa, se hayan topado con ella en la calle. Siendo todo lo que los declarantes tienen que manifestar. En uso de la voz la defensora público federal, formuló la siguiente pregunta al agente compareciente: Que diga el compareciente quién realizó la detención de mi patrocinado **********, el día quince de septiembre del presente año. Contestó: Elementos del Ejército Mexicano en conjunto con elementos de la FRAI, al mismo tiempo. En uso de la voz, el procesado preguntó a su careado: Cómo me reconoció ahora como una de las personas que se encontraba en la casa el día de los hechos, si yo me encontraba vendado de la cara; el elemento aprehensor **********, contestó: Quiero manifestar que vi a todas las personas que fueron detenidas dentro del domicilio, entre las que se encontraba mi careado, todos nosotros hicimos el traslado de estas personas a nuestras oficinas, ahí fueron fichados por la PGR y fotografiados por la prensa, por lo que todo el mundo los vio."

33. Careo constitucional entre el procesado ********** (folios 1090 reverso a 1092), de veintiséis de noviembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, el que resultó:

"**********, manifiesta: Que ratifico el contenido de mis declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y judicial, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce de las referidas actuaciones, por haber sido puesta de mi puño y letra. Por su parte, el agente **********, manifestó: Que ratifico tanto el oficio de puesta a disposición, como mi declaración rendida ante el agente del Ministerio Público Federal, ambas de quince

de septiembre de este año, así como mi declaración rendida ante esta autoridad judicial, el dieciséis de noviembre de dos mil diez, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce por haber sido puesta de mi puño y letra. A lo que en uso de la voz el procesado **********, manifestó: Que no conozco a mi careado, nunca lo había visto. En uso de la voz el agente aprehensor **********, señaló: Que reconozco a mi careado como a una de las personas que fueron detenidas el día de los hechos, y que menciono en el parte informativo. En uso de la voz el procesado **********, manifestó: Que no estoy de acuerdo en el oficio de puesta a disposición, es decir, en el contenido del mismo, pues parece una película de 'Hollywood', lo que narra acerca de una persecución, y deseo preguntar a mi careado: A qué hora se inició la persecución de la camioneta que se narra en el oficio de puesta a disposición. En uso de la voz al agente aprehensor **********, contestó: En este momento no recuerdo exactamente la hora, pero lo afirmé en el oficio de puesta a disposición. El procesado **********, preguntó nuevamente a su careado: Cómo me reconoció ahora como una de las personas que se encontraba en la casa el día de los hechos, si yo me encontraba vendado de la cara, ya que él no se encontraba en la casa porque los que nos detuvieron fueron los elementos del Ejército. El agente aprehensor **********, contestó: El señor fue detenido dentro de la casa, a mi careado lo detuvieron dentro de la casa, junto con una muchacha, fue trasladado en un operativo a nuestras oficinas, ahí fue fichado por la PGR y fotografiados por la prensa, por lo que todo el mundo nos vio. El procesado **********, manifiesta a su careado que efectivamente no puede asegurar si estaba vendado o no, sencillamente porque él no lo detuvo, sino que fue detenido por elementos del Ejército; reitero que es falso lo que manifiesta mi careado en el sentido de que hubo una persecución, ya que esto solamente lo manifiesta para justificar mi detención en un domicilio sin contar con una orden de cateo."

34. Testimonial de ********** (folios 1116 a 1118, tomo I), de quince de diciembre de dos mil diez, ante la Juez de Distrito, en la que ratificó la constancia de fe ministerial.

35. Testimonial de ********** (folios 1199 a 1201, tomo II), de dieciocho de enero de dos mil once, ante la Juez de Distrito, en la que afirmó que el día antes de los hechos bebió unas cervezas en compañía de **********.

36. Careo constitucional entre el procesado ********** y ********** (folios 1208 y 1209, tomo II), de veintiséis de enero de dos mil once, el que resultó:

"**********, manifiesta que ratifica el contenido de mis declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y judicial, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce de las referidas actuaciones, por haber sido puesta de mi puño y letra; asimismo, deseo agregar que no conozco a mi careado, nunca lo había visto, y que es la primera vez que lo veo. Por su parte, el agente **********, manifestó: Que ratifico tanto el oficio de puesta a disposición, como mi declaración rendida ante el agente del Ministerio Público, ambas de quince de septiembre de este año, así como mi declaración rendida ante esta autoridad judicial, el dieciséis de noviembre de dos mil diez, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce por haber sido puesta de mi puño y letra; y que a mi careado la primera vez que lo vi, fue el día de los hechos cuando fue detenido. En nuevo uso de la voz el procesado **********, preguntó: Cómo me reconoces, si yo traía los ojos vendados ese día, además fueron los soldados los que entraron a la casa; a lo que el elemento aprehensor contestó: Desconozco lo de la venda, y reconozco a mi careado porque ese día él estaba en el lugar de los hechos cuando fue detenido, así como cuando fue llevado a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado Zona Norte, y por las fotos de la prensa. El procesado ********** expresó: Quiero reiterar que fui detenido por elementos del Ejército Mexicano, los que entraron a la casa el día de los hechos, y no fue mi careado el que me detuvo acompañado de otros policías judiciales; a lo que su careado manifestó: Ratifico mis declaraciones que constan en el sumario. El procesado ********** pregunta: Cómo sabe mi careado que yo estaba en la camioneta de la marca ********** el día de mi detención; a lo que contesta su careado: Sólo tengo que decir que ratifico mi oficio de puesta a disposición, ahí se detalla lo concerniente a los hechos. El agente **********, manifestó: Quiero agregar que a mi careado lo vi por primera vez el día de los hechos, dentro del domicilio donde fue detenido junto con otras personas."

37. Careo constitucional entre el procesado ********** y ********** (folios 1209 y 1210), de veintiséis de enero de dos mil once, ante la Juez de Distrito, el que resultó:

"**********, manifiesta: Que ratifico el contenido de mis declaraciones rendidas ante la autoridad ministerial y judicial, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce de las referidas actuaciones, por haber sido puesta de mi puño y letra; que no conozco a mi careado, sin embargo, lo vi en las instalaciones de la Policía Judicial del Estado, el día que nos llevaron a firmar nuestra declaración ministerial; estábamos vendados y nos golpeaban para que firmáramos. Por su parte, el agente **********, manifestó: Que ratifico tanto el oficio de puesta a disposición, como mi decla-

ración rendida ante el agente del Ministerio Público Federal, ambas de quince de septiembre de este año, así como mi declaración rendida ante esta autoridad judicial, el dieciséis de noviembre de dos mil diez, reconociendo como mía una de las firmas que obran al margen y al calce por haber sido puesta de mi puño y letra; que no lo conozco, pero ya lo había visto antes, eso fue el día de los hechos, cuando fue detenido. En nuevo uso de la voz el procesado **********, manifestó: Reitero que fui detenido por elementos del Ejército Mexicano, no por elementos de la Policía Judicial del Estado, como menciona mi careado en sus declaraciones emitidas en esta causa penal. En uso de la voz el agente aprehensor **********, contestó: Al respecto, quiero reiterar lo dicho en mi oficio de puesta a disposición."

38. Testimonial a cargo de ********** (folios 1241 y 1242, tomo II), de diez de marzo de dos mil once, ante la Juez de Distrito, en la que a preguntas de la defensa contestó que conocía a ********** como una persona honesta, sin vicios y con un trabajo legal.

39. Testimonial a cargo de ********** (folios 1241 y 1243, tomo II), de diez de marzo de dos mil once, ante la Juez de Distrito, en la que a preguntas de la defensa contestó que conocía a ********** como una persona honesta, sin vicios y con un trabajo legal.

40. Dictamen en dactiloscopia (folio 1373, tomo II), de cuatro de abril de dos mil once, en la que el perito concluyó:

"No se efectuó el levantamiento de ningún fragmento dactilar debido al mal embalaje de éstas, por lo que no se puede realizar una confronta dactiloscópica."

41. Ratificación de dictamen en dactiloscopia (folios 1425 y 1426, tomo II), de veintisiete de abril de dos mil once, ante la Juez de Distrito, en la que el perito ratificó su dictamen y contestó las preguntas de la defensa y afirmó que no era posible encontrar huellas dactilares en la armas.

42. Documentales privadas (folios 1430 y 1431, tomo II), consistentes en dos reconocimientos expedidos en favor de **********, por participar en diversas actividades deportivas.

43. Documentales privadas (folios 1463 y 1464, tomo II), consistentes en dos cartas de recomendación expedidas en favor de **********.

44. Testimonial de ********** (folios 1499 a 1501, tomo II), de veintinueve de junio de dos mil once, ante la Jueza de Distrito, en el que afirmó que el quince de septiembre convivió con ********** y después éste se fue a una fiesta con unos amigos.

45. Documental pública (folio 1507, tomo II), consistente en constancia de conducta expedida en favor de **********.

46. Testimonial de ********** (folios 1512 a 1514, tomo II), de veintiuno de julio de dos mil once, ante la Juez de Distrito, en la que manifestó que el quince de septiembre de dos mil diez, tomó unas cervezas con el quejoso hasta las siete de la noche y después el quejoso se fue con un amigo.

47. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1869 a 1871, tomo II), de nueve de octubre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez ante esta propia autoridad, asimismo, quiero señalar que a mi careado es la primera vez que lo veo, no lo vi ni siquiera cuando me detuvieron. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración rendida ante la autoridad ministerial el dieciséis de septiembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Que identifico a mi careado como una de las personas que iban a bordo del vehículo que refiero y mi careado iba en la parte de atrás del vehículo y fue una de las personas que nos apuntó con un arma de fuego corta, sin poder precisar las características porque en el momento que sucedieron los hechos íbamos ambos en movimiento y al ver la actitud de estas personas, decidimos darle seguimiento a distancia, hasta que llegó el apoyo consistente en compañeros de la Policía Judicial y personal del Ejército. Es de aclarar que ambos, es decir, el suscrito, compañeros de la Policía Judicial y algún elemento del Ejército para reforzar la seguridad, nos metimos al domicilio para asegurar a mi careado y demás personas. También quiero aclarar que nosotros no controlamos a los elementos del Ejército pero entraron tres o cuatro al domicilio y de la Policía Judicial éramos cinco, incluyéndome. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado en qué punto de la avenida ********** nos marcaron el alto, después de haber implementado su operativo. A lo que el agente policiaco responde: Fue pasando la avenida ********** con dirección hacia el **********. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me conteste cuántas personas estaban a bordo de la camioneta y quiénes eran. A lo que el agente policiaco responde: El número preciso de personas, por las circunstancias y el horario, es decir,

eran entre cinco y seis de la mañana y como había poca luz, no recuerdo exactamente, pero sí eran más de cuatro; y recuerdo quiénes eran hasta que fueron asegurados y son los mismos que están señalados en la puesta a disposición. Asimismo, quiero agregar que eran cinco personas las que estaban adentro del domicilio; la detención la hicimos en conjunto yo fui una de las personas que aseguramos a los detenidos. Yo detuve a ********** él estaba en la planta baja de la casa escondido detrás la puerta. Aclaro que no fui el primero en entrar a la casa porque ya habían entrado mis demás compañeros y los del Ejército. Y no me percaté en qué lugar estaba mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado quiénes de los que iban a bordo de la camioneta, traían armas. A lo que el agente policiaco responde: Todos, ya que todos cuando descendieron del vehículo lo hicieron con las armas en la mano. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero (sic) mi careado me diga quién es el que le apuntó con el arma al momento de marcarnos el alto. A lo que el agente policiaco responde: Por las circunstancias, el horario no sé exactamente, ya que únicamente sacaron el cañón de las armas por la ventanilla del vehículo. A lo que el inculpado manifiesta: Que me diga mi careado qué arma es la que yo poseía cuando estaba en la camioneta. A lo que el agente policiaco responde: En la camioneta no puedo precisar el arma, en virtud de que los que andaban en la camioneta son ellos, lo que sí puedo decir es que mi careado bajó de la camioneta con un arma corta en la mano. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga en qué parte del vehículo yo me encontraba. A lo que el agente policiaco responde: En la parte trasera. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga quién de los tripulantes le dijo '… que se abriera a la verga porque los iban a matar'. A lo que el agente policiaco responde: Los que viajaban en la parte de atrás, pero por las circunstancias que se dieron no es posible precisar, quién lo hizo, porque al mostrarnos el cañón de las armas tuvimos miedo y temimos por nuestras vidas y es por eso que continuamos a distancia. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga el tiempo aproximado que nos persiguieron desde el punto en el que nos marcaron el alto hasta el domicilio donde nos introdujimos. A lo que el agente policiaco responde: No más de veinte minutos. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado (sic) qué tiempo transcurrió aproximadamente desde el momento en que rodearon el predio hasta que llegaron sus compañeros de la Policía Judicial. A lo que el agente policiaco responde: Quizás fue una media hora, porque en el momento del operativo no pude medir el tiempo. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga quiénes fueron las personas que se introdujeron al predio para su revisión. A lo que el agente policiaco responde: La Policía Judicial, el Ministerio Público, los peritos y alguno que otro elemento del Ejército. A lo que el inculpado manifiesta: Mi careado dice puras mentiras porque yo simplemente estaba en la casa en ningún momento salí en la

camioneta y él no entró a la casa porque cuando yo desperté vi a los soldados. A lo que el agente policiaco manifiesta: No tengo más que declarar."

48. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1872 a 1874, tomo II), de diez de octubre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado, manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración de veintiuno de septiembre de dos mil diez emitida ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que no reconozco a mi careado; no lo vi cuando me detuvieron porque eran soldados los que entraron a la casa. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración testimonial rendida ante esta autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Reconozco a mi careado como una de las personas que mis compañeros sacaron del interior del domicilio. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado en qué punto de la avenida **********, nos marcaron el alto después de haber implementado el operativo. A lo que el agente policiaco responde: Es en avenida ********** con dirección a ********** hacia el fondo, con dirección a lo que ahora se le conoce como **********, hay una gasolinera en el cruzamiento de la avenida ********** camino a **********, en ese cruzamiento. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga cuántas personas iban a bordo de la camioneta. A lo que el agente policiaco responde: Yo en ese momento al interceptar o al verlos por primera vez en el cruzamiento, vimos a dos personas, pero después de seguir el vehículo a distancia, cuando llegamos al domicilio, me percaté de que bajaron cuatro personas del vehículo, entre ellos mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado quiénes de los que iban en la camioneta traían armas. A lo que el agente policiaco responde: En ese momento, es decir, cuando nos emparejamos vehículo con vehículo hacia a ellos y les dijimos que éramos agentes de la Policía Judicial, sacaron un cañón, bajando una parte del cristal, del lado del copiloto. A lo que el inculpado manifiesta: Que me diga mi careado quién es quien le apuntó con el arma. A lo que el agente policiaco responde: No preciso quién fue, pues no pude percibir sus características ya que al ver el arma mi compañero también frenó el vehículo. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado quién de los tripulantes les dijo que 'se abrieran a la verga, si no los iban a matar'. A lo que el agente policiaco responde: No lo preciso, pero la voz vino del interior de dicho vehículo. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado qué tiempo aproximado nos persiguieron desde el punto que nos marcaron el alto, hasta el domicilio donde según estuvimos. A lo que el agente policiaco

responde: Como de veinticinco a treinta minutos, porque no es la distancia del lugar, sino que llevábamos nuestra distancia del vehículo. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado a qué distancia nos persiguieron el día de la detención y a qué velocidad circulaban al hacerlo. A lo que el agente policiaco responde: La verdad no la puedo precisar porque yo no era quien conducía y la distancia fue de doscientos a doscientos cincuenta metros y al aproximarnos al domicilio la distancia ya fue más corta. A lo que el inculpado manifiesta: Qué tiempo transcurrió aproximadamente desde que rodearon el predio hasta que llegaron sus compañeros de la Policía Judicial. A lo que el agente policiaco responde: No le tomé mucha importancia pero si mal lo (sic) recuerdo fue de veinticinco a treinta minutos, ya que hubieron compañeros que llegaron de inmediato y otros que llegaron paulatinamente. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que diga mi careado quiénes eran los que descendieron del vehículo, introduciéndose al predio que mencionan en el parte informativo y cuántas personas eran. A lo que el agente policiaco responde: Yo vi a mi careado y a tres personas más, desconozco si bajaron más personas. A lo que el inculpado manifiesta: Que diga mi careado qué arma era la que yo tenía en la mano cuando dice que descendí del vehículo con mis coacusados. A lo que el agente policiaco responde: A mi careado le vi un arma larga, así como sus coacusados también traían armas, había uno de ellos que llevaban arma corta, pero no puedo precisar cuál de ellos. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado quiénes fueron las personas que se introdujeron al predio para la revisión y detención. A lo que el agente policiaco responde: Fueron mis compañeros que participaron en la puesta a disposición y tres compañeros más agentes de la Policía Judicial sin poder precisar sus nombres de estos últimos porque traían pasamontañas y también militares, sin poder precisar el número de éstos pero aclaro que los militares no iban con pasamontañas, pero eran aproximadamente catorce elementos militares, sin poder precisar cuántos militares entraron al predio. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero agregar que lo que dice mi careado son puras mentiras porque en ningún momento anduve en una camioneta o tuve un arma en la mano; lo único que hice fue llegar a la casa y estar medio tomado hasta que entraron los soldados; en ningún momento vi a mi careado ni a algún judicial porque a los que vi eran puros soldados. De lo que me acusa no sé nada de las armas porque no he tenido alguna en mi mano. Siendo todo lo que tengo que manifestar. A lo que el agente policiaco responde: Sin temor a equivocarme, señalo a mi careado como una de las personas que estuvo relacionado en el informe rendido ante el superior; asimismo, quiero precisar que dentro del domicilio donde se realizó la detención había cinco personas, es decir, estaba mi careado, tres varones más y una mujer."

49. Diligencia de careo procesal entre la menor ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1875 y 1877, tomo II), de quince de octubre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"La testigo manifiesta: Ratifico la declaración de veintinueve de noviembre de dos mil diez ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que no identifico a mi careado, él no estuvo en la detención. Por su parte ,el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración rendida ante esta autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil diez, y dirigiéndose a la menor careada manifiesta: Que sí reconoce a su careada aun cuando ya ha pasado algún tipo (sic) y se ve un poco cambiada, ella es una de las personas que fueron aseguradas en el interior del domicilio, sin que yo pueda precisar en qué parte porque ahora no lo recuerdo, pero en la parte de arriba en un cuarto había una maleta de mujer, donde nos dimos cuenta que allá dormía, y cuando hubo la detención tanto los inculpados estaban arriba o abajo, y el lugar del domicilio donde ella estaba, puedo decir que es en la parte de arriba. A lo que la menor testigo manifiesta: Cuando yo me acerqué a la casa donde fueron detenidos los ahora procesados sólo había agentes militares en el interior, es decir, alrededor de la casa estaban los militares, porque afuera, en la calle, no había nadie y no vi a mi careado; desconozco lo que dice que había ropa de mujer, yo no vivía en ese cuarto, porque era la primera (sic) que llegaba a ese domicilio, por lo que desconozco a lo que se refiere mi careado; cuando yo llegué me introdujeron a la casa, en la que había cinco personas del sexo masculino tiradas en el piso del domicilio esposadas y vendadas, esto en la planta baja; dos militares fueron los que me introdujeron en el domicilio y ya en el interior había como quince militares, así como personas encapuchadas, e incluso uno de ellos me golpeó, pero estaban vestidos con pantalón de color azul, con manchas, la camisa recuerdo que era color negro. Desconozco si (sic) las personas que estaban esposadas en el suelo, las habían perseguido antes, porque ellas ya estaban en el interior del domicilio cuando yo llegué, sin que logre precisar quiénes eran porque en mi vida los había visto. A lo que el agente policiaco manifiesta: Quiero mencionar que lo (sic) mi careada menciona es muy raro porque cuando se hace ese tipo de operativos a un domicilio donde se encuentran personas armadas se acordona un área de aproximadamente una cuadra a la redonda y se cuida que no intervengan, pasen personas civiles que puedan ser víctimas de alguna agresión si se llegare a dar el momento o el caso, todo un perímetro de asegura (sic), esto para asegurarnos de detener a las personas involucradas y evitar que alguien invada el operativo. A lo que la menor testigo manifiesta: Yo pasé por la calle porque me habían comentado que era una casa de tres pisos y era la única de ahí y no había alguien que me impidiera que yo llegara a la casa, no había vehículos militares; al llegar me preguntaron qué hacía

allá y les contesté que iba a hacer limpieza; la reja de la casa estaba cerrada donde estaba la cochera también y había una camioneta ********** en el interior de la casa cerrada y cuando yo me asomé, los militares me preguntaron qué era lo que hacía yo ahí y les respondí que había ido a hacer la limpieza por lo que los militares me introdujeron a la casa, jalándome de los brazos y pude ver en el interior a las cinco personas a que me he referido. Finalmente, aseguro que mi careado no estuvo ni en el interior o exterior de la casa el día de los hechos a que me he referido."

50. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1905 y 1907, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado, manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que a mi careado es la primera vez que lo veo, no lo vi cuando me detuvieron. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración rendida ante la autoridad ministerial el dieciséis de septiembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Que identifico a mi careado como una de las personas que vi bajar de la camioneta que refiero en mi declaración; la versión que utiliza mi careado es para defenderse, pero la verdad histórica es la que he manifestado en la puesta a disposición; pues el día de los hechos mi careado viajaba en el vehículo, por la avenida ********** y **********, y se les dio seguimiento hasta el domicilio donde se dirigieron, descendió con otras personas del vehículo, con las armas en las manos y en donde posteriormente se pidió refuerzo para su detención. Aclaro que mi careado descendió con un arma larga, por la distancia no puedo precisar con exactitud la marca o tipo, tomando en cuenta además de que fue a las cinco y media o seis de la mañana la detención. También quiero agregar que yo no detuve a mi careado y tampoco me percaté quién lo hizo, ni en qué parte de la casa estaba, ya que lo primero que hice fue resguardar las inmediaciones de la casa; luego, como hubo una persona de cabello corto delgado, de tez clara, que estaba saliendo sola, lo conduje al camión de los militares, aclarando que esa persona no se trata de mi careado. A continuación, llegaron el Ministerio Público, elementos del grupo de reacción de la Policía Judicial del Estado y elementos militares, quienes entraron a la casa; mientras me encontraba brindando seguridad al domicilio, sin lograr percatarme quién sacó del domicilio a mi careado. También quiero agregar que del domicilio sacaron a más de cinco personas, entre éstas, una mujer. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero ratificar que mi careado no me detuvo, los que se introdujeron a la casa y nos detuvieron fueron soldados o militares; es mentira lo que dice mi careado en el sentido

de que a las cinco y media me haya visto descender del vehículo, porque en su informe de puesta a disposición dice que precisamente a esa hora iniciaron con la supuesta persecución sobre la avenida **********, por eso quiero que me diga mi careado la hora y el lugar donde se encontraba cuando recibió el reporte del vehículo con personas armadas. A lo que el agente policiaco, responde: La respuesta está en la puesta a disposición donde dice que eran aproximadamente las cinco treinta de la mañana cuando recibimos el reporte de personas a bordo de un vehículo con armas adentro, cuando nosotros estábamos sobre la avenida ********** de esta ciudad. Esto es, a partir de que recibimos el reporte iniciamos la persecución y ésta no duró más de veinte minutos. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que me diga mi careado cuánto tiempo tardaron en ubicar la camioneta. A lo que el agente policiaco responde: Aproximadamente, seis u ocho minutos. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que mi careado dice, porque tal parece que ya nos estaban esperando en la supuesta persecución, pues cómo es posible que les reporten a las cinco y media, y a los seis minutos empiecen con la persecución. A lo que el agente policiaco responde: Nos encontrábamos cerca de la avenida **********. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que mi careado dice en el sentido de que me ve bajar de la camioneta con un arma, ya que nunca hubo persecución alguna, nunca me bajé de algún vehículo ya que me encontraba en el interior de la casa como lo declaré, que llegamos a la casa donde fui detenido desde el catorce de septiembre de dos mil diez y nos la pasamos ingiriendo bebidas alcohólicas toda la noche; sin salir del domicilio en ningún momento. A lo que el agente policiaco responde: Mi careado de alguna manera se tiene que defender, pero yo no tengo porqué inventar una persecución como mi careado trata de insinuar, ya que yo no lo conozco y no es mi intención perjudicar a alguien, simplemente cumplo con mi trabajo. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado en el sentido de que me reconoce como una de las personas que bajó del vehículo si él mismo mencionó que estaba a una distancia considerable y la casa está bardeada con una reja de herrería al frente y en los colindantes, tiene una barda de aproximadamente un metro con veinte centímetros de altura. A lo que el agente policiaco responde: La reja estaba abierta y cuando ellos entraron a la casa no la cerraron por lo que se podía advertir el momento en que mi careado descendió del vehículo para introducirse a la casa. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado, porque siendo una persecución pueda supuestamente la camioneta meterse a la casa y él sabiendo que hay gente armada en la camioneta, tenga la oportunidad y confianza de pararse enfrente de la reja y observar todos los movimientos que hizo la gente, supuestamente armada, ya que en el parte informativo mi careado dice que nos marcaron el alto y le apuntaron con un arma de fuego y ellos por proteger su integridad frenan y es cuando

empezó la persecución, cómo es posible que se paren detrás de la camioneta cuando terminó la supuesta persecución si supuestamente sabían que había gente armada. A lo que el agente policiaco responde: En cuanto a la persecución, fue un seguimiento a distancia y pararme enfrente como mi careado menciona, no fue así, porque de alguna forma tenía que proteger mi identidad y cuando estaba pasando por enfrente del portón, fue que vi a mi careado descender con el arma en la mano. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque en el parte informativo dijo una cosa y acá otra, ahora dice que pasó con el carro y vio toda la acción que realizaron las personas supuestamente armadas y en el parte informativo dijo y especificó que cuando la camioneta se metió a la casa, mi careado dio seguridad perimetral, no creo que den seguridad perimetral arriba del auto. A lo que el agente policiaco manifiesta: Yo en ningún momento dije que pasé con el carro, yo dije que pasé por enfrente del portón, pero pasé caminando para dirigirme a mi posición que era en la parte de enfrente de la casa para asegurarlo, porque el auto oficial lo habíamos dejado poco antes de llegar, esto es, como a dos metros. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque no tiene congruencia que haya pasado caminando enfrente de las personas que supuestamente minutos antes de iniciarse una supuesta persecución, las personas que iban en la camioneta le habían gritado que se abrieran porque los iban a matar; cómo es posible que cuando se terminó la supuesta persecución, mi careado se baje del vehículo y pase con toda la confianza del mundo por enfrente. A lo que el agente policiaco responde: Pues no es como dice mi careado, uno es policía de carrera y tiene sus técnicas para dar seguridad a un domicilio y yo tenía que pasar de alguna forma caminando para pasar por la reja donde entró mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga si me reconoce como a una de las personas que detuvieron en ese domicilio. A lo que el agente policiaco responde: Sí, porque ya cuando estaban arriba del vehículo de los militares lo vi. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque cómo dice que me conoce si nos sacaron del domicilio vendados con toallas en la cabeza. A lo que el agente policiaco responde: No es cierto lo que dice mi careado, al momento de salir del domicilio ninguna de las personas que fueron detenidas, tenían la cabeza cubierta. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque si nos hubieran sacado como él dice, yo lo reconocería como una de las personas que participaron en mi detención. Por otra parte, quiero preguntarle a mi careado si observó cuando se introdujeron sus compañeros a la casa para hacer la supuesta detención. A lo que el agente policiaco responde: Sí, y para tomar control del inmueble, entró la Policía Judicial, el Ejército, el Ministerio Público, esto es, aproximadamente se introdujeron diez o doce personas

y tardaron aproximadamente dos horas. Aclarando que no todos llegaron juntos. Asimismo, quiero aclarar que no me percaté si mis compañeros ********** y ********** entraron al domicilio porque yo tenía mi área de responsabilidad. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque los que estaban adentro de la casa eran los soldados y quiero que mi careado me diga si observó a qué hora llegaron los militares al domicilio. A lo que el agente policiaco responde: No me percaté de la hora exacta, pero llegaron como en veinte o veinticinco minutos aproximadamente, después de que llegamos al domicilio. A lo que el inculpado manifiesta: Es todo cuanto tengo que manifestar. A lo que el agente policiaco responde: No tengo más que declarar."

51. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1908 y 1909, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración de veintiuno de septiembre de dos mil diez emitida ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que no reconozco a mi careado y nunca lo he visto, ya que los que nos detuvieron fueron soldados. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración testimonial rendida ante esta autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Yo sí reconozco a mi careado de vista, ya que el lugar donde se le aseguró desde su detención y en los careos que se han llevado a cabo lo he visto. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado; cómo lo asegura si no estuvo en el lugar de los hechos y no me detuvo. A lo que el agente policiaco responde: En parte lo que dice mi careado es cierto, pues yo no lo detuve, sino que otros agentes de la Policía Judicial, sin lograr precisar cuál de ellos y el hecho de que no me haya visto no quiere decir que no haya estado en el lugar; lo anterior, porque yo me dediqué a brindar seguridad perimetral al domicilio, esto fue, en la calle enfrente como a ocho metros del portón que tenía la casa. También quiero agregar que yo me percaté de que en dicho lugar fueron detenidos una mujer y cuatro personas del sexo masculino, por lo que reconozco a mi careado como una de las personas que sacaron del domicilio detenido. A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado, porque nos sacaron vendados del rostro, quiero que me diga mi careado cómo es que me reconoce. A lo que el agente policiaco responde: En ningún momento los cubrieron (sic) la cabeza, sino que únicamente les alzaron sus camisas, ésto para que la prensa no les tome fotos, sin cubrirles completamente el rostro. A lo que el inculpado manifiesta: Lo que dice mi careado no es cierto, porque si fuera como él dice, yo lo reconocería como una de las personas que

se encontraban en el lugar de los hechos. A lo que el agente policiaco manifiesta: Por lo que respecta a la persecución, a mi careado no lo vi en la camioneta tipo ********** que refiero en mi parte informativo, sino que fue hasta que lo sacan del domicilio. Aclaro que cuando llegó la camioneta vi a cuatro personas del sexo masculino descender con armas, sin lograr precisar si entre ellos estaba mi careado, porque todo fue muy rápido. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga a qué hora supuestamente me sacaron del domicilio. A lo que el agente policiaco responde: Aproximadamente a las seis horas con cuarenta minutos. A lo que el inculpado manifiesta: Es todo lo que tengo que manifestar. A lo que el agente policiaco manifiesta: No tengo más que manifestar."

52. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1909 reverso y 1910, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado, manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez (sic) ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que a mi careado no lo reconozco, no lo vi cuando me detuvieron. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración rendida ante la autoridad ministerial el dieciséis de septiembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Que identifico a mi careado como una de las personas que llevando consigo un arma corta, descendió del vehículo tipo ********** que refiero en mi puesta a disposición. A lo que el inculpado manifiesta: No es cierto lo que dice mi careado, él no me detuvo ni tenía un arma ni mucho menos descendía de la camioneta. Yo estaba adentro de la casa durmiendo cuando se introdujeron elementos militares y ellos fueron los que nos detuvieron; nos pusieron vendas y toallas para luego sacarnos de la casa. A lo que el agente policiaco responde: Algo tiene que alegar mi careado en su defensa, a ellos los sacaron con el rostro descubierto. Aclaro que fueron más de cinco los que sacaron del domicilio, entre ellos había una mujer. A lo que el inculpado manifiesta: Respecto a la persecución que menciona mi careado, yo nunca me subí a alguna camioneta. A lo que el agente policiaco responde: Yo vi a mi careado descender de la camioneta, durante la persecución no pude verlo porque estábamos en movimiento, pero luego de la persecución pasé por frente del domicilio para tomar mi posición para asegurar el inmueble y logré verlo. Asimismo, aclaro que fueron aproximadamente cuatro personas las que descendieron del vehículo y se introdujeron al domicilio. También quiero aclarar que no logré ver que sacaron del domicilio a mi careado, porque lo vi hasta el momento en que estaba arriba del camión de los militares. Asimismo, quiero precisar que no me percaté si mis compañeros ********** y

********** se introdujeron al domicilio. A lo que el inculpado manifiesta: No es cierto lo que dice mi careado porque a mí me subieron a una camioneta del grupo especial de la Policía Judicial con siglas FRAI y no a un vehículo militar. A lo que el agente policiaco manifiesta: No tengo más que agregar."

53. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1910 reverso y 1911, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración de veintiuno de septiembre de dos mil diez emitida ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que no reconozco a mi careado. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración testimonial rendida ante esta autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Reconozco a mi careado como una de las personas que iba en el vehículo tipo ********** y que se introdujeron al domicilio que mencioné en mi informe. A lo que el inculpado manifiesta: No es cierto lo que dice mi careado, nunca estuve a bordo de esa camioneta. A lo que el agente policiaco responde: Durante la persecución, uno de los compañeros de mi careado bajó el cristal del vehículo para amenazarnos y logré ver a mi careado sentado en la parte de atrás del conductor. También vi a mi careado cuando llegó al domicilio y descendió del vehículo con un arma larga. Asimismo, logré ver a mi careado cuando los estaban sacando del domicilio. A lo que el inculpado manifiesta: No es cierto lo que dice mi careado, cómo es que me reconoció cuando me sacaron del domicilio si yo estaba vendado y llevaba una toalla encima. A lo que el agente policiaco responde: Lo de la toalla sí es cierto, pero lo de las bandas no es cierto; siendo que la toalla la tenía en una posición que sí se le permitía ver el rostro, pues no llevaba el rostro envuelto sino que la toalla estaba encima de su cabeza dejando ver su rostro. A lo que el inculpado manifiesta: No es cierto lo que dice mi careado porque sí tenía el rostro vendado. A lo que el agente policiaco responde: No tengo más que manifestar."

54. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1912 y 1913, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado, manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración preparatoria de veintiuno de septiembre de dos mil diez ante esta propia autoridad, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Que no lo reconoce porque no es quien me detuvo. Por su parte, el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración rendida ante la autoridad

ministerial el dieciséis de septiembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta que identifico a mi careado como una de las personas que descendió del vehículo que refiero en mi parte informativo con un arma, sin poder precisar sus características porque no lo recuerdo, pues por el tiempo que ya pasó no puedo asegurar qué tipo de arma tenía mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Mi careado miente porque nunca me detuvo, a mí quien me detuvo fue personal del Ejército; además de que nunca hubo la supuesta persecución que él afirma; en ningún momento vi a los policías judiciales ni a mi careado. A lo que el agente policiaco responde: Quiero aclarar que sí hubo un seguimiento y los militares llegaron porque nosotros pedimos apoyo. Aclaro que durante el seguimiento del vehículo tipo ********** no logré ver a mi careado, pero logré verlo detenido ya a bordo de un vehículo, sin recordar si fue el del grupo de reacción inmediata conocido por sus siglas FRAI, o a bordo del vehículo del ejército, pues nunca ingresé al domicilio ya que mi función fue brindar seguridad perimetral, ya que los elementos militares y el grupo de reacción de la Policía Judicial conocido por sus siglas FRAI, son los que se introdujeron al domicilio; sin lograr percatarme si mis compañeros ********** y ********** se introdujeron al inmueble. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga por qué dice que era una de las personas que iba en el vehículo si acaba de decir que no me vio durante la persecución a bordo de él. A lo que el agente policiaco responde: Mi careado bajó del vehículo, todos bajaron al mismo tiempo y se introdujeron al domicilio. También quiero aclarar que fueron los militares y los elementos de reacción de la Policía Judicial quienes sacaron a las cinco personas de dicho inmueble, sin poder precisar quién sacó a mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Que no estoy de acuerdo con lo que dice mi careado porque únicamente en el lugar de la detención participaron elementos militares, quienes me sacaron con el rostro vendado y una toalla que me cubría en la cabeza. A lo que el agente policiaco responde: No tengo más que declarar."

55. Diligencia de careo procesal entre el sentenciado ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1913 reverso y 1914, tomo II), de veinte de noviembre de dos mil doce, la que dio como resultado:

"El procesado manifiesta: Ratifico la ampliación de declaración de veintiuno de septiembre de dos mil diez emitida ante esta propia autoridad; asimismo, quiero señalar que no reconozco a mi careado. Por su parte el agente policiaco **********, manifestó: Ratifico en todas y cada una de sus partes la declaración testimonial rendida ante esta autoridad el dieciséis de noviembre de dos mil diez, y dirigiéndose a su careado manifiesta: Reconozco a mi careado porque es una de las personas que (sic) detuvieron en el domicilio y una de las personas que descendió del vehículo que refiero en mi declaración.

A lo que el inculpado manifiesta: No estoy de acuerdo con lo que dice mi careado, porque él no me detuvo, sino que fueron elementos militares cuando estaba durmiendo en el domicilio, y su intromisión fue lo que me despertó. También mi careado miente porque nunca estuve en la camioneta tipo ********** y mucho menos en una persecución; quiero que me diga mi careado si me vio durante la persecución a que hace alusión en su parte informativo. A lo que el agente policiaco responde: Durante la persecución no vi a mi careado, pero sí lo vi al llegar al domicilio en el momento en que descendió con un arma larga, precisamente de esa camioneta tipo ********** que perseguíamos. A lo que el inculpado manifiesta: Quiero que mi careado me diga qué tiempo transcurrió desde el momento en que supuestamente llegamos al domicilio y en el que llegó mi careado. A lo que el agente policiaco responde: Nosotros íbamos detrás de la camioneta y mientras avanzábamos pedimos el apoyo de las demás corporaciones; los íbamos siguiendo y cuando llegamos al domicilio habían pasado aproximadamente quince minutos. A lo que el inculpado manifiesta: Es mentira lo que dice mi careado porque lo hace para justificar su intromisión al domicilio sin una orden, porque nunca hubo tal persecución. Asimismo, quiero que mi careado me diga cuál fue su participación en mi detención el día de los hechos. A lo que el agente policiaco responde: Yo no detuve a mi careado, sino que fueron agentes de la Policía Judicial del grupo de reacción conocida por las siglas FRAI y elementos militares en un operativo conjunto; mi participación fue el seguimiento de la persecución y, posteriormente, dar seguridad perimetral en el domicilio. Asimismo, quiero precisar que pude percatarme que fueron cinco personas a quienes sacaron del domicilio, cuatro del sexo masculino y una mujer, siendo que entre ellas se encontraba mi careado. A lo que el inculpado manifiesta: Que sí es verdad que me sacaron del domicilio, precisando que únicamente fueron elementos militares. Asimismo, quiero preguntar a mi careado si se percató del momento en que fueron aseguradas las armas afectas a la causa. A lo que el agente policiaco responde: No me percaté de ello, porque no ingresé al domicilio, ya que es trabajo del Ministerio Público y peritos."

56. Diligencia de careo procesal de la testigo ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1931 y 1932, tomo II), de trece de diciembre de dos mil doce, la que dio como resultado que ratificaran sus declaraciones previas.

57. Diligencia de careo procesal entre la testigo ********** y el agente aprehensor ********** (folios 1932 y 1933, tomo II), de trece de diciembre de dos mil doce, la que dio como resultado la ratificación de sus declaraciones previamente rendidas.

2.2. Valor de las pruebas

1) Pues bien, es correcto que el tribunal responsable reconociera eficacia probatoria a las diligencias ministeriales de inspección que practicó el representante social sobre los objetos asegurados en la indagatoria.

Tales medios demostrativos cuentan con pleno valor, al tratarse de diligencias en cuyo desahogo no se advierte la comisión de violaciones procesales, ya que se efectuaron en concordancia con los requisitos que establecen los artículos 208 y 209 del Código Federal de Procedimientos Penales[43], en virtud de que se practicaron por el órgano técnico acusatorio constitucionalmente facultado para integrar la averiguación previa y fue precisamente en esa etapa, donde la practicó, en compañía de testigos, quienes dieron fe del acto que presenciaron, de acuerdo con el numeral 16 y en atención a lo establecido en el numeral 2, fracción II, ambos de la referida codificación procesal.[44] Lo anterior de conformidad con el diverso 284 del mismo cuerpo legal.[45]

2) Por otra parte, también es acertado que la autoridad responsable atribuyera valor pleno al dictamen de química, al de balística forense, de integridad física, de dactiloscopia forense, de tránsito terrestre, a los de química, al de electrónica, al de medicina forense, y al de representación gráfica, rendidos cada uno por el correspondiente perito en la materia adscrito a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.

---

[43] "Artículo 208. Es materia de inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por la autoridad que la realice. …"
"Artículo 209. Para la descripción de lo inspeccionado se emplearán, según el caso, dibujos, planos topográficos, fotografías ordinarias o métricas, moldeados, o cualquier otro medio para reproducir las cosas, haciéndose constar en el acta cuál o cuáles de aquéllos, en qué forma y con qué objeto se emplearon.
"Se hará la descripción por escrito de todo lo que no hubiere sido posible efectuar por los medios anteriores, procurándose fijar con claridad los caracteres, señales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que probablemente se haya empleado y la forma en que se hubiere usado."

[44] "Artículo 16. El Juez, el Ministerio Público y la policía estarán acompañados, en las diligencias que practiquen, de sus secretarios, si los tuvieren, o de dos testigos de asistencia, que darán fe de todo lo que en aquéllas pase."
"Artículo 2o. Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales.
En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público:
"…
II. Practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como a la reparación del daño;"

[45] "Artículo 284. La inspección, así como el resultado de los cateos, harán prueba plena siempre que se practiquen con los requisitos legales."

Lo anterior es así, porque en principio tienen valor indiciario, pero alcanzan eficacia demostrativa plena, en términos del artículo 288, en concordancia con los diversos 220, 221, 225, 234 y 235, todos del Código Federal de Procedimientos Penales,[46] en virtud de que fueron elaborados por personas con conocimientos especiales en las diversas materias que a cada uno corresponde y no contradichos a través de diverso medio probatorio, además, señalaron las operaciones, experimentos, hechos y circunstancias que les sirvieron de fundamento a sus opiniones respecto de los objetos a estudio, así como la metodología empleada, los resultados obtenidos una vez aplicada la misma, las conclusiones a las que arribaron, de ahí que se les otorgó pleno valor probatorio en términos de los numerales citados.

3) Por otro lado, la responsable fue correcta al reconocer valor probatorio de indicio al oficio de puesta a disposición o parte informativo ratificado durante la averiguación previa por los elementos aprehensores.

En efecto, dicho documento constituye una prueba instrumental de actuaciones por tratarse de pieza informativa, al no ser documento público, por no reunir las características ni requisitos extrínsecos de publicidad, ni documento privado, dado el ejercicio y carácter de quienes lo suscriben, por lo que en términos del precepto 285 del Código Federal de Procedimientos Penales,[47] tiene el valor de indicio, ya que se asienta la actuación de los agentes aprehensores.

Probanza que al haber sido ratificada por sus suscriptores ante la autoridad ministerial, alcanza la categoría de testimonio, en el caso de cargo, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Penales,[48] con el valor indiciario que le atribuye el

---

[46] "Artículo 220. Siempre que para el examen de personas, hechos u objetos, se requieran conocimientos especiales se procederá con intervención de peritos."
"Artículo 221. Los peritos que dictaminen serán dos o más; pero bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando el caso sea urgente."
"Artículo 225. La designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público deberá recaer en las personas que desempeñen ese empleo por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del Gobierno Federal, en universidades del país, o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República."
"Artículo 234. Los peritos practicarán todas las operaciones y experimentos que su ciencia o arte les sugiera y expresarán los hechos y circunstancias que sirvan de fundamento a su opinión."
"Artículo 288. Los tribunales apreciarán los dictámenes periciales, aun los de los peritos científicos, según las circunstancias del caso."
[47] "Artículo 285. Todos los demás medios de prueba o de investigación y la confesión, salvo lo previsto en el segundo párrafo del artículo 279, constituyen meros indicios."
[48] "Artículo 287.

numeral 285 del código procesal en consulta, lo anterior, ya que les consta a título personal los hechos que narran; las deposiciones fueron realizadas por personas que en razón de su edad, capacidad e instrucción tienen el criterio necesario para juzgar el acto; por su probidad e independencia de posición y antecedentes personales, se advierte que tienen completa imparcialidad, aunado a que no obra en el sumario prueba en contrario; además, sus manifestaciones fueron claras, precisas, sin dudas ni reticencias sobre la sustancia del acto y versaron sobre hechos que conocieron por sí mismos en el desempeño de sus funciones y no por inferencias de terceros, sin que se advierta que hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, a declarar en el sentido que lo hicieron; con lo que se colman los requisitos exigidos por el diverso numeral 289 del código adjetivo de referencia.[49]

Es aplicable, la jurisprudencia 255 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[50] de rubro y texto siguientes:

"POLICÍAS APREHENSORES, VALOR PROBATORIO DE TESTIMONIOS DE.—Por cuanto hace a las declaraciones de los agentes aprehensores del acusado de un delito, lejos de estimarse que carecen de independencia para atestiguar en un proceso penal, debe darse a sus declaraciones el valor probatorio que la ley les atribuye, como testigos de los hechos ilícitos que conocieron."

4) En otro orden de ideas, el juzgador valoró como indicio tanto las declaraciones ministeriales, como las preparatorias, los careos y los informes de antecedentes delictivos y de buena conducta.

"...
Las diligencias practicadas por agentes de la Policía Judicial Federal o local, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación, pero en ningún caso se podrán tomar como confesión lo asentado en aquéllas."

[49] "Artículo 289. Para apreciar la declaración de un testigo el tribunal tendrá en consideración:
"I. Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar del acto;
"II. Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;
"III. Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro;
"IV. Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales; y
"V. Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio judicial no se reputará fuerza."

[50] *Apéndice de 1995*, Tomo II, Parte SCJN, página 144.

En efecto, los anteriores medios de convicción tienen valor de indicio ya que no reúnen los requisitos para ser una prueba plena, es decir, si se adminicula con otros medios de convicción adquiere eficacia probatoria plena de un hecho.[51]

Un indicio no podrá producir convicción en el juzgador sino que hasta después de comparar su contenido con el texto general de los hechos y el acervo probatorio del expediente, no deje dudas de que lo presentado sea verdadero.

Por todo lo expuesto, resulta infundado el argumento que esgrime la defensa del quejoso al señalar que las pruebas que formaron parte del proceso penal, no fueron analizadas y valoradas en relación con los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues como se vio, sí se realizó un estudio de las probanzas que obran en la causa penal de origen ya que se determinaron los elementos de prueba y luego se señaló su valor de acuerdo con los preceptos correspondientes del código adjetivo referido.

2.3 Alcance demostrativo

Establecido el valor de las pruebas, corresponde ahora fijar su alcance demostrativo.

1) Las inspecciones ministeriales acreditan la existencia del domicilio, de las armas y de la "hierba verde y seca", "al parecer marihuana".

2) En armonía con lo anterior, en el dictamen de química, se determinó que la sustancia antes descrita resultó ser *cannabis sativa l.*, conocida comúnmente como marihuana, sustancia considerada como estupefaciente por la Ley General de Salud, con un peso neto total de treinta gramos.

3) Por otra parte, de los dictámenes de criminalística de campo y balística forense, se obtiene que las armas y cartuchos asegurados son de uso

---

[51] "Definimos al indicio, pues, como la circunstancia, hecho o acta que sirve de antecedente o base para presumir la existencia de otro hechos.
"...
"Consecuentemente, el indicio es un hecho probado que sirve de medio de prueba, ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho. Es decir, el dato indicio, ya demostrado, no es apto para probar, ni inmediata (inspección) ni mediante (testimonio o confesión), un hecho, sino que es útil para apoyar hechos que no se pueden demostrar de manera directa a través de los medios de prueba conocidos, como la confesión, testimonio o la inspección, sino sólo a través del esfuerzo de la razón que parte de datos aislados, de 'cabos sueltos' cuyo único requisito es que se encuentren probados antes del silogismo, son indicios.". Código Federal de Procedimientos Penales Forense Comentado. Libros Técnicos de Capital Variable. Primera edición, México, 2011, página 493.

exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y que estaban en condiciones de ser usados.

4) Además, de la declaración contenida en la puesta a disposición o parte informativo, se advierten los siguientes hechos:

1. Aproximadamente, a las cinco treinta horas del quince de septiembre de dos mil diez, agentes de la Policía Judicial del Estado que circulaban a bordo de un vehículo oficial en patrullaje de rutina por la avenida ********** con avenida **********, recibieron un reporte de la central, de personas armadas a bordo de un vehículo tipo **********, de color **********, a la altura de la región **********, sobre la avenida **********.

2. Con motivo de lo anterior, se implementó un operativo de localización y búsqueda de dicho vehículo y personas, que fue localizado sobre la avenida **********, por lo que se le marcó el alto para efectuarle una revisión.

3. Las personas que iban en el mencionado vehículo apuntaron con armas de fuego a los policías y, con insultos, amenazaron con matarlos, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de compañeros de la Policía Judicial del Estado así como de personal militar.

4. Se persiguió el mencionado vehículo, el cual se introdujo en la colonia el **********, manzana **********, lote **********, en la **********, **********, en una casa de material de color ********** de dos niveles se introdujeron al fondo del estacionamiento, ya que la reja estaba abierta y posteriormente, las personas descendieron del vehículo con las armas en las manos, por lo que se rodeó las inmediaciones de dicho domicilio.

5. Posteriormente, al llegar los refuerzos se verificó el interior de dicho domicilio, en el cual fueron aseguradas las personas antes mencionadas y en el interior del domicilio también se encontraron diferentes armas y cartuchos de diferentes tipos y treinta gramos de marihuana.

4) En otro orden de ideas, de las declaraciones ministeriales, preparatorias, ampliaciones de declaraciones y de los diversos testimonios y careos, se advierte que el quejoso negó la versión de sus aprehensores y relató que aun cuando sí se encontraba en el domicilio desconocía que allí se almacenaran armas, aunque admitió conocer que se encontraba la marihuana. También negó que existiera una persecución de los agentes aprehensores.

Empero, su versión no encontró corroboración con medio de prueba alguno, suficiente para desvirtuar las imputaciones que le dirigen los elemen-

tos aprehensores que realizaron su detención y el aseguramiento de los objetos del delito.

5) También, en relación con los careos, los participantes se sostuvieron en sus planteamientos y prevalecieron las versiones de los elementos aprehensores ya que son coherentes entre sí y encuentran sustento con el material probatorio de cargo existente, por lo tanto se reiteró el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de los delitos de mérito.

Lo anterior es así, en virtud de que en realidad no se advierten versiones discrepantes de los hechos por cuanto a las conductas desplegadas por el ahora quejoso, pues tanto los aprehensores como el quejoso coinciden en las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

6) En otro orden de ideas, del telegrama enviado por el jefe del departamento del Registro Nacional de Identificación de Sentenciados con residencia en México, Distrito Federal, se advierte que el quejoso no tiene registros de ingresos a centros penitenciarios ni antecedentes penales.

Así las cosas, resulta acertado que a través del enlace razonable de los medios de prueba, el tribunal responsable haya tenido por acreditado lo siguiente:

1. Aproximadamente a las cinco treinta horas del quince de septiembre de dos mil diez, agentes de la Policía Judicial del Estado que circulaban a bordo de un vehículo oficial en patrullaje de rutina por la avenida ********** con avenida **********, recibieron un reporte de la central, de personas armadas a bordo de un vehículo tipo **********, de color ********** con **********, a la altura de la región **********, sobre la avenida **********.

2. Con motivo de lo anterior, se implementó un operativo de localización y búsqueda de dicho vehículo y personas, que fue localizado sobre la avenida **********, por lo que se le marcó el alto para efectuarle una revisión.

3. Las personas que iban en el mencionado vehículo apuntaron con armas de fuego a los policías y, con insultos, amenazaron con matarlos, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de compañeros de la Policía Judicial del Estado, así como de personal militar.

4. Se persiguió el mencionado vehículo, y en la colonia el **********, manzana **********, lote **********, en la **********, **********, en una casa de material de color ********** de dos niveles se introdujeron al fondo

del estacionamiento, ya que la reja estaba abierta y posteriormente, las personas descendieron del vehículo con las armas en las manos, por lo que se rodeó las inmediaciones de dicho domicilio.

5. Posteriormente, al llegar los refuerzos se verificó el interior de dicho domicilio, en el cual fueron aseguradas las personas antes mencionadas y en el interior del domicilio también se encontraron diferentes armas y cartuchos de diferentes tipos y treinta gramos de marihuana.

7. Por tanto, el quince de septiembre de dos mil diez, en la colonia el **********, manzana **********, lote **********, en la **********, **********, en una casa de material de color blanco de dos niveles, el activo, conjuntamente con otras personas, tuvo dentro de su radio de acción y disponibilidad, más de cinco armas, setenta y cinco cartuchos útiles y treinta gramos de marihuana.

2.4. Detención en flagrancia

Con relación a lo anterior, el quejoso afirma que la detención en flagrancia es inverosímil y que no fue confirmada porque el oficio de puesta a disposición no se concatenó con otros medios de prueba y por eso la supuesta flagrancia se basó en el solo dicho de los aprehensores.

Además de que, dice, en los careos entre ********** y **********, el primero se contradice al decir que el coacusado llevaba un arma corta en el momento de la persecución y después simplemente ya no lo identifica con ninguna arma. Agrega que entre el careo del coacusado ********** y el aprehensor ********** también hay inconsistencias de éste, porque dice que ********** sacó un arma del lado del copiloto y el aprehensor ********** dice que el mismo coacusado sacó un arma de la parte de atrás de la camioneta. Además, afirma, ********** dice haber visto al quejoso descender con un arma larga y ********** dice que fue con un arma corta.

A su juicio, las inconsistencias mencionadas ponen en duda que haya existido la persecución que relatan los aprehensores y, por tanto, la flagrancia.

Resulta infundado la manifestado, como se verá enseguida.

En efecto, respecto a la detención en flagrancia, es menester mencionar que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"...

"En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a la del Ministerio Público.

"...

"En casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley."

De la anterior transcripción se advierte que cuando una persona es detenida al momento de cometer un ilícito, o inmediatamente después de cometido éste, por cualquier persona, ésta tendrá la obligación de poner al indiciado a disposición de la autoridad más cercana y ésta, con la misma prontitud, a disposición del Ministerio Público.

La misma Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1236/2004,[52] consideró que en el derecho procesal penal mexicano, se distinguen tres supuestos en los que procede la detención por flagrante delito:

1. La flagrancia en sentido estricto, que ocurre cuando el indiciado es sorprendido en el momento de la comisión del delito,

2. La cuasiflagrancia, que se manifiesta cuando inmediatamente después de ejecutado el hecho delictuoso, el indiciado es perseguido materialmente, y

3. La presunción de flagrancia, que se actualiza cuando también inmediatamente después de cometido el delito, alguna persona señala al indiciado

[52] Criterio que fue reiterado y del cual surgió la jurisprudencia 1a./J. 23/2006, de rubro: "DEFENSA ADECUADA. ALCANCE DE DICHA GARANTÍA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN II, EN RELACIÓN CON LAS DIVERSAS IX Y X DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."; visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 132, registro IUS 175110.

como responsable y se encuentra en su poder el objeto del delito, el instrumento con que se haya cometido, o huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención en la comisión del delito.

Así pues, debe entenderse que cuando se detenga a una persona en cualquiera de estos supuestos de flagrancia, el juzgador deberá ratificar inmediatamente la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. De este modo, es el juzgador quien en definitiva debe resolver si la detención se llevó a cabo en alguno de los supuestos de flagrancia que la ley prevé.

Ahora, de las constancias que tuvo a su alcance la responsable, aparece que los elementos aprehensores irrumpieron en un inmueble en el que el quejoso y otras personas ingresaron, al acudir a un reporte anónimo de que había un vehículo con personas armadas, y al hacerlo localizaron y persiguieron a los activos del ilícito. También se advierte que existe señalamiento expreso de los aprehensores hacia el ahora quejoso, ya que lo reconocen sin lugar a duda como una de las personas que se introdujo en la casa en donde se les detuvo con los objetos afectos a los ilícitos que se le atribuye.

Por ende, la actuación de dichos agentes no fue una detención que requiriera de un mandamiento escrito sino que se realizó en flagrancia.

Es así, porque los delitos de acopio de armas, posesión de cartuchos reservados y posesión simple de marihuana, son ilícitos que se prolongan, esto es, son continuos o permanentes, es decir, cada momento de su duración se señala como consumación.

De ahí que, tratándose de la comisión flagrante de delitos permanentes no es necesario, para proceder a la detención del infractor, según el artículo 16 constitucional, contar con una orden de aprehensión, ni oír previamente en juicio al inculpado; sobre todo si los agentes aprehensores ingresan al domicilio en el que se encuentran los activos en virtud de una persecución.

Efectivamente, el texto del artículo 16 constitucional no señala específicamente la prohibición de la detención en el interior del domicilio en caso de delito flagrante; por lo que si se está cometiendo algún ilícito dentro de un domicilio, el activo puede ser detenido por cualquier persona o por los elementos policiacos, ante la existencia de una denuncia y de datos que la refuercen.

Así, cuando se trate de un delito de resultado formal y los agentes policiacos se encuentren en la posibilidad de impedir que se produzca o continúe produciéndose ese resultado, están obligados a intervenir, como en el caso.

Sin que sea obstáculo que en su caso existan las referidas inconsistencias entre los aprehensores y el coacusado **********, ya que dichas circunstancias no demuestran el dicho del quejoso, porque en lo sustancial los policías coinciden en cómo sucedieron los hechos (después de recibir el informe de que personas armadas circulaban en una camioneta, la buscaron, la encontraron y sus tripulantes los encañonaron y amenazaron de muerte, emprendiendo la huida, se introdujeron al domicilio con armas y los detuvieron allí, en un operativo conjunto con los elementos de las fuerzas castrenses), por tanto, dicha discrepancia, en su caso, resulta accesoria y no sustancial. De ahí lo infundado del disenso.

Sentado lo anterior, enseguida se realizará un examen de subsunción de los hechos a las normas punitivas, con lo que se pondrá en evidencia que se encuentra plenamente acreditada la existencia de los delitos de:

a) Acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 bis, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

b) Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, contemplado y reprimido en el artículo 83 quat, fracciones I y II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el numeral 11 de dicha ley especial, en sus incisos b) y c); y,

c) Contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de marihuana, tipificado y castigado en el arábigo 477, primer párrafo, en relación con la tabla establecida en el numeral 479, ambos de la Ley General de Salud.

3. Delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

JUICIO DE TIPICIDAD

Ahora, en la especie el juzgador de Distrito y el tribunal responsable acertaron al considerar probado el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Bis, fracciones I y II, en correlación con el artículo 11, incisos b), c) y h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los artículos 83 bis, fracciones I y II, y 11, incisos b), c) y h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, literalmente dicen:

"Artículo 83 Bis. Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionará:

"I. Con prisión de dos a nueve años y de diez a trescientos días multa, si las armas están comprendidas en los incisos a) o b), del artículo 11, de esta ley. En el caso del inciso i) del mismo artículo, se impondrá de uno a tres años de prisión y de cinco a quince días multa; y

"II. Con prisión de cinco a treinta años y de cien a quinientos días multa, si se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artículo 11 de esta ley.

"Por acopio debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

"Para la aplicación de la sanción por delitos de portación o acopio de armas, el Juez deberá tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido."

"Artículo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

"...

"b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super y Comando, y las de calibres superiores;

"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos;

"…

"h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento; …"

En atención a los numerales transcritos, la descripción típica puede analizarse al tenor de los siguientes temas.

3.1. Elementos de la descripción típica.

3.1.1. La existencia de más de cinco armas de fuego reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales (objeto material).

El primer elemento objetivo está demostrado con lo siguiente:

a) Inspección ministerial de quince de septiembre de dos mil diez.

b) Inspección ministerial de dieciséis de septiembre de dos mil diez.

c) Inspección ministerial de dieciséis de septiembre de dos mil diez.

d) Dictamen de balística forense.

Diligencias y pericial que demuestran la presencia física de más de cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, es decir, el objeto material sobre el que recayó la conducta ilícita.

Asimismo, está demostrado que esas armas se ubican en los incisos b), c) y h) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los términos siguientes:

Inciso c):

• Fusil calibre 7.62x39mm, marca **********, modelo ********** Sporter, matrícula **********, (**********), país de fabricación China, con un cargador con veintiséis cartuchos útiles calibre 7.62.

• Fusil, calibre .223mm, marca **********, modelo **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A., con un cargador con veintiséis proyectiles útiles calibre .223".

• Fusil, calibre .223x56mm, marca **********, modelo **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A., con cargador con veintitrés proyectiles útiles calibre .223".

• Carabina, calibre 5.56mm, marca **********, matrícula **********, con cargador con veinte proyectiles útiles calibre .223".

Inciso b):

• Pistola, calibre .45" ACP, marca **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A.

• Pistola, calibre .40", marca **********, matrícula **********, país de fabricación Austria.

• Pistola, calibre .45" Auto, marca **********, matrícula **********.

Inciso h):

• Tres granadas de fragmentación, sin lote, marca, modelo ni país de fabricación.

3.1.2. Los sujetos activos realicen la acción de acopio de dichas armas, es decir, sean objeto de posesión (conducta realizada).

El segundo elemento objetivo, consistente en que los sujetos activos realicen el acopio de armas de fuego, es decir, posean más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, está demostrado con las pruebas anteriores y las siguientes:

a) Oficio ********** de puesta a disposición.

b) Comparecencia del agente de la Policía Judicial en el Estado **********.

c) Testimonial del agente policial **********.

d) Testimonio rendido por el policía **********.

e) Testimonial a cargo del agente policial **********.

De esos medios de prueba se pone de manifiesto que los agentes aprehensores fueron quienes al detectar el vehículo tipo **********, color ********** con **********, sobre la **********, cuyos tripulantes les apuntaron con armas de fuego y amenazaron de muerte, solicitaron apoyo e iniciaron la persecución hasta el domicilio ubicado en la colonia el **********, manzana **********, lote **********, en la **********, donde ingresó dicho vehículo y sus tripulantes con armas en las manos se introdujeron al domicilio, una vez rodeado el lugar con el apoyo de diversos compañeros, entre ellos elementos del Ejército Mexicano y de Fuerza de Reacción de Apoyo Inmediato (FRAI), en el interior de ese domicilio se logró la detención del quejoso y sus coacusados, así como el aseguramiento de las siguientes armas:

Arma	Ubicación
Fusil calibre 7.62x39mm, marca **********, modelo **********, matrícula **********, (**********), país de fabricación China, con un cargador con veintiséis cartuchos útiles calibre 7.62.	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Fusil, calibre .223mm, marca **********, modelo **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A., con un cargador con veintiséis proyectiles útiles calibre .223".	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Fusil, calibre .223x56mm, marca **********, modelo **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A., con cargador con veintitrés proyectiles útiles calibre .223".	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Carabina, calibre 5.56mm, marca **********, matrícula **********, con cargador con veinte proyectiles útiles calibre .223.	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Pistola, calibre .45" ACP, marca **********, matrícula **********, país de fabricación U.S.A.	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Pistola, calibre .40", marca **********, matrícula **********, país de fabricación Austria.	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Pistola, calibre .45" Auto, marca **********, matrícula **********.	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.
Tres granadas de fragmentación, sin lote, marca, modelo ni país de fabricación	Closet de una de las recámaras del segundo nivel.

3.1.3. La conducta se realice sin pertenecer a las fuerzas armadas de nuestro país y sin contar con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El elemento de carácter normativo está acreditado, pues dentro de las constancias que integran la causa penal no existe prueba alguna que demuestre que el quejoso pertenezca a las instituciones castrenses, o bien, tenga la autorización expedida por dichas autoridades para poseer más de cinco armas de fuego reservadas; por tanto, al no existir en autos constancia alguna que demuestre alguna de las dos hipótesis mencionadas, es por ello que se actualiza tal elemento.

4. Posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea

JUICIO DE TIPICIDAD

También es correcto que tanto el juzgador de Distrito y el tribunal responsable acertaron al considerar probado el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el diverso 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los artículos 83 Quat, fracciones I y II, y 11, incisos b), c) y f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, literalmente dicen:

"Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

"I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta ley, y

"II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley."

"Artículo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

"...

"b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Súper y Comando, y las de calibres superiores.

"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.

"…

"f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta. …"

En atención a los numerales transcritos, la descripción típica puede analizarse al tenor de los siguientes temas.

4.1. Elementos de la descripción típica

4.1.1. La existencia de cartuchos (objeto material). Este elemento está demostrado con lo siguiente:

a) Inspección ministerial de quince de septiembre de dos mil diez.

b) Inspección ministerial de dieciséis de septiembre de dos mil diez.

c) Dictamen de balística forense.

Diligencias y pericial que demuestran la presencia física de cartuchos para armas de fuego, es decir, el objeto material sobre el que recayó la conducta ilícita.

Asimismo, está demostrado que esos cartuchos se ubican en el inciso f) del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en los términos siguientes:

Sesenta y cinco cartuchos calibre .223" Rem (inciso c del artículo 11) y diez cartuchos calibre 9mm Parabellum (inciso b del artículo 11), acorde con lo previsto por el artículo 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

4.1.2. Los sujetos activos realicen la acción de "poseerlos" (conducta realizada). Este elemento está demostrado con las pruebas anteriores y las siguientes:

a) Oficio ********** de puesta a disposición de quince de septiembre de dos mil diez, suscrito y ratificado por el agente aprehensor **********.

b) Comparecencia del agente de la Policía Judicial en el Estado **********.

c) Testimonial del agente policial **********.

d) Testimonio rendido por el policía **********.

e) Testimonial a cargo del agente policial **********.

De tales pruebas se obtiene que el quejoso y sus coacusados, en el interior del domicilio referido, tuvieron dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata los cartuchos afectos a la causa.

4.1.3. La posesión de tales cartuchos se realice sin que los activos pertenezcan a las fuerzas armadas, o sin contar con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Este elemento de carácter normativo está acreditado, pues dentro de las constancias que integran la causa penal en estudio, no existe prueba alguna que demuestre que el quejoso pertenezca a las instituciones castrenses, o bien, tenga la autorización expedida por dichas autoridades para poseer los cartuchos para armas de fuego reservadas; por tanto, al no existir en autos constancia alguna que demuestre alguna de las dos hipótesis mencionadas, es por ello que se actualiza tal elemento.

5. Delito contra la salud (narcomenudeo), en el tipo de posesión simple de marihuana.

JUICIO DE TIPICIDAD

Ahora, en la especie el juzgador de Distrito y el tribunal responsable acertaron al considerar probado el delito contra la salud en su modalidad de posesión simple de marihuana, previsto y sancionado por el artículo 477, primer párrafo, en relación con el 479 de la Ley General de Salud, que establecen:

"Artículo 477. Se aplicará pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, sin la autorización a que se refiere esta ley, cuando por las

circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aun gratuitamente. …"

"Artículo 479. Para los efectos de este capítulo se entiende que el narcótico está destinado para su estricto e inmediato consumo personal, cuando la cantidad del mismo, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones no exceda de las previstas en el listado siguiente:

Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato	
Narcótico	**Dosis máxima de consumo personal e inmediato**
…	…
***Cannabis sativa, Indica* o Mariguana**	**5 gr.**
…	…"

En atención a los numerales transcritos, la descripción típica puede analizarse al tenor de los siguientes temas.

5.1. Elementos de la descripción típica.

5.1.1. La existencia de algún narcótico determinado así por la Ley General de Salud u otras disposiciones aplicables en materia de éstos, en el caso concreto, marihuana, en una cantidad específica inferior a cinco kilogramos.

Este primer elemento objetivo, se demuestra con:

a) Inspección ministerial de quince de septiembre de dos mil diez.

b) Inspección ministerial de dieciséis de septiembre de dos mil diez.

c) Dictamen pericial en química, del que se obtuvo no sólo la conclusión de la existencia del narcótico, sino también que la cantidad de tal sustancia era de treinta gramos.

Diligencias y pericial que demuestran la presencia física del estupefaciente en un total de treinta gramos de *cannabis sativa l.*, conocida común-

mente como marihuana, es decir, el objeto material sobre el que recayó la conducta ilícita.

5.1.2. El sujeto activo posea dentro del radio de acción de su disponibilidad y control personal, el citado narcótico.

El segundo elemento objetivo consistente en que esa sustancia se haya tenido dentro de su radio de acción, se demuestra con lo siguiente:

a) Ampliación de declaración de ********** alias "**********".

b) Inspección ministerial.

c) Oficio ********** de puesta a disposición.

d) Comparecencia del agente de la Policía Judicial en el Estado **********.

e) Testimonial del agente policial **********.

De esas pruebas se obtiene que el día, hora y en el lugar (interior del domicilio) de los hechos precisados con antelación, fue detenido en compañía del quejoso y otras personas y les aseguraron entre otras cosas, la droga afecta a la causa. De ahí que el quejoso tuvo en el interior del citado domicilio, dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata el narcótico afecto a la causa.

Y por ello es infundado que el quejoso no tenía disponibilidad sobre tal narcótico, ya que aun cuando ********** alias "**********" aceptó que él fue quien llevaba la marihuana, al dejarla sobre la barra de la cocina, ésta se encontraba al alcance de cualquiera de las personas que se estaban dentro del domicilio referido, sobre todo cuando de los dictámenes periciales se obtiene que varios de ellos, incluido el quejoso, resultaron ser adictos a la marihuana.

5.1.3. Que la conducta se realice sin contar con la autorización de la Secretaría de Salud.

Este elemento normativo está acreditado, ya que dentro de las constancias que integran la causa penal en estudio, no existe prueba alguna que demuestre que el quejoso tuviera el permiso de la Secretaría de Salud, para poseer el citado narcótico; lo que evidencia que, su actuar estaba fuera de los

márgenes legales, al llevar a cabo su conducta en contravención a las disposiciones que establece tanto la Ley General de Salud como el Código Penal Federal.

En este tenor, es de concluirse que, contrario a lo sostenido por el quejoso, en la causa penal sí existen elementos suficientes para tener por acreditados los delitos que se le imputaron.

6. Autoría y participación.

Como lo consideró la autoridad responsable, debe estimarse que la participación del quejoso, en la comisión de los delitos, actualiza la hipótesis prevista por el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal,[53] esto es, a título de coautor material, ya que fue el impetrante quien de manera personal realizó conjuntamente con otros las conductas previamente estudiadas.

Por otra parte, se estima correcto que tanto el a quo como el ad quem consideraran que no obstan las manifestaciones del inculpado en el sentido que niega los actos imputados y por ello no es responsable de los hechos delictivos en que fue sorprendido.

En efecto, de las declaraciones ministerial y preparatoria del quejoso, se aprecia que se reservó su derecho a declarar, sin embargo, ello sólo constituye un ejercicio de su garantía de defensa, específicamente la denominada como no autoincriminación, que contempla en su favor el artículo 20, apartado A, fracción II, de nuestra Carta Magna.[54]

Por otro lado, respecto a sus ampliaciones de declaración sólo se advierte que negó la versión de sus agentes aprehensores y afirmó desconocer que había armas, aunque reconoció que sabía de la marihuana.

En efecto, en sus declaraciones el quejoso señaló que son falsos los hechos, pues en el domicilio se encontraba con ********** y **********,

---

[53] "Artículo 13. Son autores o partícipes del delito:
"…
"II. Los que los realicen por sí; …"

[54] Al respecto se cita por ilustrativa la tesis 1a. CXXIV/2004, de rubro: "DERECHO DE DEFENSA. SUS CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS CON LA GARANTÍA DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 414, registro IUS 179608.

quien tres días antes le ordenó subir una pistola al segundo nivel y ********** lo regañó "que no debía subir allá"; también dijo que las armas aseguradas se encontraban en el segundo nivel, en el cuarto "donde dormía **********"; afirmó además que su función era vigilar desde el techo "que no llegaran los judiciales, marinos, encapuchados o cualquier vehículo sospechoso". Por último, dijo desconocer a ********** y a **********.

Empero, en ampliación dijo que el catorce de septiembre estaba "tomando con ********** y **********", y que el primero le refirió que fueran al domicilio donde se encontraban los sujetos de apodo "**********" y "**********", que llegaron aproximadamente a las "seis u ocho de la noche" y se quedó dormido y a las cuatro de la mañana entraron los soldados. Dijo no saber si encontraron algo ilícito, sólo "vio una cajita con marihuana"; y que cuando llegó a ese lugar ya estaba la camioneta; afirmó que no sabía de la existencia de las armas, granadas y cartuchos; y aseguró que sólo detuvieron a **********, **********, **********, ********** y a él, sin referir que "**********" fuera detenida con ellos.

No obstante lo antes declarado, en diversa ampliación de declaración, agregó que él no estuvo en la camioneta, ni portó armas, incluso, que no disparó pues salió negativo en el dictamen pericial; que "los militares estuvieron de una hora y media a dos en el domicilio"; y aseveró que "**********" fue detenida con ellos, pero que "ignoraba de donde salió".

Como se advierte, el quejoso incurre al menos en las siguientes contradicciones:

i. Aseguró saber y no saber de la existencia de las armas y que éstas se encontraban en el segundo nivel, "en el cuarto donde dormía **********".

ii. Afirmó no conocer a **********, pero afirmó que estuvo "tomando con ********** y **********" el catorce de septiembre.

iii. Aseveró que "**********" fue y no fue detenida con él y sus coinculpados.

Lo anterior pone en evidencia que dichas aseveraciones resultan insuficientes para desvirtuar su autoría en la comisión de los delitos que se le reprochan, pues estimar lo contrario equivaldría a destruir todo el mecanismo de la prueba y facilitar la impunibilidad de cualquier inculpado, ya que toda una

cadena de indicios se volvería ineficaz por la sola manifestación del acusado, situación jurídicamente inadmisible.

Aunado a que no hay probanzas suficientes para acreditar la versión del sentenciado ya que no se encuentra corroborada en el sumario y sí controvertida con el señalamiento firme y categórico de los elementos aprehensores, quienes además se sostuvieron en su dicho al carearse con los encausados, precisando su participación.

De ahí que resulte infundado el concepto de violación que argumenta la defensa del peticionario consistente en que el sentenciado se limitó a negar los hechos y que esa negativa encierra una afirmación la cual corresponde al Ministerio Público probar.

Por otro lado, también refuta la defensa del quejoso que no se tomó en cuenta el principio de presunción de inocencia contenido en el Máximo Ordenamiento del País.

Lo anterior resulta infundado.

Respeto al principio de presunción de inocencia es menester mencionar que conforme a lo dispuesto en los ordinales 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, numeral 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el diverso 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y de acuerdo con la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado en torno a dicho principio, también reconocido por nuestra Carta Magna en su redacción vigente, al realizar la interpretación sistemática de los ordinales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, así como los criterios establecidos en diversos casos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es criterio general que la presunción de inocencia constituye el fundamento de las prerrogativas judiciales al tratarse del elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa que acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme.

Se cita por ilustrativa, la tesis aislada 1a. I/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:[55]

[55] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2917, registro IUS 2000124.

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO ESTÁ CONSIGNADO EXPRESAMENTE EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008.—La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos que el principio de presunción de inocencia es un derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta que se dicte sentencia definitiva con base en el material probatorio existente en los autos. Por otra parte, el Tribunal en Pleno sustentó la tesis aislada P. XXXV/2002, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 14, con el rubro: 'PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EL PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLÍCITA EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.', en la que estableció que en la Ley Suprema, vigente en ese entonces, no estaba expresamente establecido el principio de presunción de inocencia, pero de la interpretación armónica y sistemática de sus artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 19, primer párrafo, 21, primer párrafo, y 102, apartado A, segundo párrafo, se advertía que los principios constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardaban implícitamente el diverso de presunción de inocencia. De ahí que el perfeccionamiento de la justicia penal en nuestro país ha incidido en que este principio se eleve expresamente a rango constitucional a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para quedar ahora contenido en el artículo 20, apartado B, denominado: 'De los derechos de toda persona imputada', que en su fracción I, establece: 'I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Juez de la causa'."

Ahora, contrario a lo expuesto en el concepto de violación, este Tribunal Colegiado advierte que en el caso no se transgrede el principio de presunción de inocencia, ya que como se ha señalado, existen diversas pruebas que demuestran la comisión del delito y sin que se aprecie que de los medios de convicción ofrecidos por el quejoso durante el proceso, desvirtúen el caudal probatorio presentado por el órgano técnico ministerial.

En efecto, como se ha puesto en evidencia, las autoridades jurisdiccionales, al emitir sus respectivas sentencias condenatorias tomaron en consideración el material probatorio que existe en autos. Y esos elementos de prueba, que ya han sido detallados, son aptos y suficientes para tener por demostrado la comisión de los delitos por el quejoso en esos ilícitos por los que fue condenado.

Al respecto, conviene aclarar que la prueba indiciaria es una vía demostrativa sustentada en la concurrencia de una pluralidad de datos demostrados, concordantes e interrelacionados, de cuyo engarce razonable se obtiene la convicción sobre un hecho. En esa vía demostrativa, los indicios deben entrelazarse a través de un razonamiento inferencial regido por la lógica del rompecabezas, conforme al cual cada pieza aislada no refleja necesariamente la imagen completa de los hechos, puesto que esa imagen resulta del debido acomodo de todas las partes.

Así, no puede desconocerse eficacia a los elementos probatorios, pues, debe insistirse en que su eficacia radica, no en que acrediten directamente y por sí mismos el hecho atribuido al quejoso, sino en que, en la medida en la que son congruentes entre sí, en conjunto, integran una prueba que acredita la versión de cargo. Expuesto en otro modo, adquieren relevancia y credibilidad, fundamentalmente, porque se confirman y robustecen entre sí respecto a las circunstancias del hecho imputado.

7. Elementos subjetivos genéricos. Dolo directo.

De acuerdo con lo sustentado por las autoridades judiciales en sus correspondientes instancias, es de estimarse que el procesado conocía los elementos objetivos y normativos de la descripción típica y tuvo la voluntad de realizar los injustos penales. Por tanto, al concurrir los elementos cognitivo y volitivo, está acreditado que el quejoso actuó con dolo directo, en términos del artículo 9, párrafo primero, del Código Penal Federal.[56]

JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD

En la especie, de las constancias de autos no se advierte que obren pruebas que permitan advertir que el sentenciado ejecutó las conductas delictivas al amparo de alguna causa de justificación, de acuerdo con lo establecido en las fracciones III (consentimiento del titular del bien jurídico), IV (legítima defensa), V (estado de necesidad justificante) y VI (cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho) del artículo 15 del Código Penal Federal.[57]

---

[56] "Artículo 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley."

[57] "Artículo 15. El delito se excluye cuando:

"…

"III. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos:

"a) Que el bien jurídico sea disponible;

"b) Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo; y

1. Consentimiento del titular del bien jurídico. No aconteció.

2. Legítima defensa. No se advierte que el quejoso haya actuado en legítima defensa pues los actos imputados no salvaguardan intereses propios o de un tercero, verbigracia, la vida, la integridad física, la seguridad personal, la libertad, etcétera.

3. Estado de necesidad justificante. En el caso no se encuentra acreditado que el activo haya realizado las conductas reprochadas bajo un estado de necesidad, pues no existe prueba de que alguno de sus intereses jurídicos peligrara ni que para salvaguardarlo se hubiese visto en la necesidad de realizar los ilícitos por los que se le juzgó.

4. Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. No existe en autos un ordenamiento jurídico que le requiera al activo la realización de las conductas ilícitas estudiadas.

JUICIO DE CULPABILIDAD

1. Imputabilidad. En lo particular, del caudal probatorio no se advierte que, al realizar las conductas, el agente haya sufrido algún estado de inimputabilidad.

2. Conocimiento de la antijuridicidad. En este sentido, del expediente de marras se aprecia que el activo no realizó las acciones típicas bajo un error inven-

---

"c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio; o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al titular, éste hubiese otorgado el mismo;
"IV. Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.
"Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;
"V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;
"VI. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de perjudicar a otro; …"

cible sobre la ilicitud de sus conductas. Esto es, no se advierte que hubiese obrado por desconocimiento de la existencia de la ley o de su alcance, o bien, con la creencia de que estaban justificadas sus acciones.

3. Exigibilidad de otra conducta. No se aprecia de autos que el encausado actuó en un estado de necesidad del exculpante, por miedo grave, por temor fundado o por obediencia jerárquica.

En tales condiciones, resulta acertado que la responsable estimara que se configuró la culpabilidad del sentenciado, en tanto que, al realizar las conductas, éste era imputable, conocía la antijuridicidad de sus conductas y le era exigible un diverso actuar.

4. Punición.

1. Grado de culpabilidad. En efecto, el juzgador para determinar el grado de culpabilidad del quejoso atendió a lo establecido en los artículos 51 y 52 del Código Penal Federal, para imponer las penas de prisión y multa, esto es, consideró las circunstancias exteriores de ejecución del delito, como lo es la magnitud del peligro a que se expuso el bien jurídico tutelado, la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, la forma y grado de intervención del agente, calidades del agente del delito y de la víctima, el comportamiento posterior del acusado en relación con el delito cometido.

Asimismo, consideró las circunstancias personales del acusado, como lo es la edad, grado de educación e ilustración, costumbre, condiciones sociales y económicas, motivos que lo impulsaron a delinquir, antecedentes delictivos e informes de buena conducta; todo ello para determinar que tenía un grado de culpabilidad mínimo.

Grado de culpabilidad que el tribunal responsable compartió, haciendo suyas las consideraciones emitidas por el Juez de la causa.

Anterior determinación que este órgano colegiado considera que no le irroga perjuicio alguno al quejoso, pues al haberle señalado un grado de culpabilidad mínimo, no puede obtener un mayor beneficio.

Al caso, es aplicable la jurisprudencia 247 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguientes:[58]

[58] *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, página 183.

"PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.—El incumplimiento de las reglas para la individualización de la penas no causa agravios que amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo de la sanción que la ley señala para el delito cometido."

2. Individualización de la pena.

Alega el quejoso que la posesión de los cartuchos actualiza un concurso ideal, ya que existe una unidad delictiva en la posesión. Es así, dice, porque el ánimo de poseer determinado cartucho es indisoluble aunque se trate de calibres diferentes, además de que el hallazgo fue en un espacio común y en un mismo tiempo.

Es fundado en parte el anterior motivo de desacuerdo, como se verá enseguida.

2.1. Concurso de delitos. El concurso de delitos sólo es posible cuando existen dos o más ilícitos, acorde con lo establecido por el artículo 18 del Código Penal Federal.[59]

Esto es, el concurso real de delitos se presenta si existen varias acciones u omisiones que transgreden varias normas penales, y el concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se originan diversas violaciones a las normas penales.[60]

Para dilucidar si el concurso es real o ideal, debe atenderse a las características o cualidades propias de los delitos (acción u omisión) y al momento de consumación (instantáneo, continuo y continuado), pues resulta necesario comprender cómo y cuándo se configuró cada delito en sí mismo considerado.

Así, para un concurso real no es necesario un punto de intersección entre las conductas sancionables, ya que cada delito se consuma de modo independiente.

---

[59] "Artículo 18. Existe concurso ideal, cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. Existe concurso real, cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos."

[60] "ACUMULACIÓN REAL Y ACUMULACIÓN IDEAL. CONCEPTO DE.—En la acumulación real o concurso material de delitos éstos son producto de varias acciones u omisiones, mientras que la característica esencial de la acumulación ideal o concurso formal es que con una sola acción u omisión se originan diversas violaciones a las normas penales." *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo II, Penal, jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 20, página 18, registro IUS 904,001.

En cambio, para que exista concurso ideal se requiere que los delitos presenten una relación de interdependencia (unidad delictiva) con relación a la conducta (acción u omisión).

Entonces, resulta claro que en el caso en concreto no se actualiza ni un concurso ideal de delitos ni uno real, porque la norma que prevé como supuesto de hecho la conducta consistente en poseer cartuchos enlaza dos parámetros diversos de penalidad, en atención a la mayor o menor peligrosidad y temibilidad de los cartuchos acopiados.

En efecto el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dispone:

"Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará:

"I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta ley, y

"II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley."

Por su parte, los artículos 9, 10 y 11 de esa misma ley prevén lo siguiente:

"Artículo 9. Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las características siguientes:

"I. Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Súper y .38" Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.

"II. Revólveres en calibres no superiores al .38" especial, quedando exceptuado el calibre .357" Magnum.

"Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle de calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre,

excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm.).

"III. Las que menciona el artículo 10 de esta ley.

"IV. Las que integren colecciones de armas, en los términos de los artículos 21 y 22."

"Artículo 10. Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las siguientes:

"I. Pistolas, revólveres y rifles calibre .22", de fuego circular.

"II. Pistolas de calibre .38" con fines de tiro olímpico o de competencia.

"III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.).

"IV. Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.

"V. Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semi-automático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7.62 mm. y fusiles Garand calibre .30".

"VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.

"VII. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería, aplicables por las secretarías de Estado u organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.

"A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo 9o. de esta ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados."

"Artículo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:

"a) Revólveres calibre .357" Magnum y los superiores a .38" Especial.

"b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Súper y Comando, y las de calibres superiores.

"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm., 7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.

"d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, sub-ametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.

"e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), las de calibre superior al 12 (.729" ó 18.5 mm) y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial.

"f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos, de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro) para escopeta.

"g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.

"h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.

"i) Bayonetas, sables y lanzas.

"j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento.

"k) Aeronaves de guerra y su armamento.

"l) Artificios de guerra, gases y substancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las fuerzas armadas.

"En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.

"Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios (subrayados añadidos)."

Del análisis de los preceptos legales transcritos, se advierte que el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tratándose de cartuchos o municiones de uso exclusivo del Ejército, no contempla dos tipos penales distintos, sino uno solo, al que corresponden dos diversos parámetros de penalidad, en atención a la menor o mayor peligrosidad y temibilidad de los cartuchos acopiados.

Se afirma lo anterior en virtud de que la posesión prevista por la fracción I corresponde preponderantemente a los cartuchos para armas de fuego que no son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y para los calibres inferiores de cartuchos que sí son para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea (incisos a) y b) del artículo 11).

En cambio, la posesión prevista por la fracción II corresponde por completo a cartuchos para armas y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.

De lo anterior, se sigue que el delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, es uno solo, pero para efectos de su punición, debe atenderse al grado de temibilidad y peligrosidad que representan para el orden interior del Estado, así como para la seguridad pública, los diversos tipos de cartuchos que se encuentran especificados en las dos fracciones del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En consecuencia, debe entenderse que la sanción del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales varía en función del mayor o menor grado de temibilidad o peligrosidad de los cartuchos que se posean.

Por tanto, si entre esos artefactos se encuentra uno o más que sean para armas de las contempladas en los incisos del c) en adelante del artículo 11 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entonces debe aplicarse la sanción prevista por el artículo 83 Quat, fracción II. Pero si la posesión no se integra con ningún cartucho que sea para esas armas, entonces se aplicará la fracción I, en el que se sanciona la posesión indicada para cartuchos

que sean para armas comprendidas en el artículo 11, incisos a) y b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Si esto es así, resulta que la conducta por la que fue juzgado el quejoso es una sola y no dos, como lo estimaron tanto el Juez como los Magistrados responsables. Es decir, en relación con la posesión de los cartuchos no hay varias acciones sino una sola acción que origina una sola violación a una sola norma penal.

En efecto, la posesión de cartuchos de diferentes calibres de uso exclusivo del Ejército, revela ser un solo acto de exteriorización de una sola conducta, consistente en la posesión de cartuchos para armas cortas (diez cartuchos para pistola calibre 9 mm. Parabellum) y para armas largas (setenta y cinco cartuchos para fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223" Rem).

Luego, como el quejoso poseyó, conjuntamente con sus coacusados, diez cartuchos para un arma comprendida en el inciso b) del artículo 11, y setenta y cinco cartuchos para un arma comprendida en el inciso c) del artículo 11, entonces la punibilidad aplicable debe ser únicamente la prevista en la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en atención a la peligrosidad de los cartuchos poseídos en mayor número. De ahí lo fundado del concepto de violación.

Encuentra aplicación, por igualdad de razones, el criterio jurisprudencial III.2o.P.157 P,[61] del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que este órgano colegiado comparte, cuyos rubro y texto son:

"ACOPIO DE ARMAS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES. PARA LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO NO SE REQUIERE QUE LAS ARMAS QUE EN NÚMERO MAYOR DE CINCO POSEA EL ACTIVO, DEBAN ENCONTRARSE CATEGORIZADAS EN DETERMINADO INCISO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.—De la interpretación integral y sistemática de los artículos 11 y 83 bis, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se advierte que este último no contempla tres tipos penales distintos, sino uno solo al que corresponden tres diversos parámetros de penalidad, en atención a la menor o mayor peligrosidad y temibilidad de las armas de fuego acopiadas por el activo. Lo anterior, toda vez que el citado artículo 83 bis define el acopio de armas como la posesión de más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin hacer

[61] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 1058, registro IUS 179139.

distinción alguna respecto de si las que en número mayor de cinco se posean, deben encontrarse categorizadas en determinados incisos del artículo 11 del mismo ordenamiento legal, sino que simplemente prescribe que tales artefactos deben ser de los de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales. Sostener lo contrario llevaría a que una persona pudiera poseer hasta quince armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas indicadas en el invocado artículo 11 con lo que, desde luego, quedaría burlada la ley, pues el activo podría poseer más de cinco armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales, sin que en el caso se configurara el delito de acopio de armas de dicha naturaleza."

2.2. Fijación particular de la pena. Acorde con el artículo 64 del Código Penal Federal,[62] la imposición de la pena difiere, en función del tipo de concurso que se presente; esto es:

i. Cuando exista concurso real de delitos, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que pueda exceder de sesenta años.

ii. Cuando exista concurso ideal de delitos, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de sesenta años.

De lo anterior se advierte que el concurso de delitos es un criterio de determinación de la pena distinto al grado de culpabilidad, puesto que primero debe determinarse éste y, después, aplicar aquél para fijar la extensión de la pena.

De ahí que, al existir concurso real de delitos, debió aplicarse la pena prevista para cada uno de ellos y adicionarlas.

---

[62] "Artículo 64. En caso de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero, con excepción de los casos en que uno de los delitos por los que exista concurso ideal sea de los contemplados en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto en el cual se aplicarán las reglas de concurso real.
"En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el título segundo del libro primero. Si las penas se impusieran en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos, o similares, o derivado uno del otro, en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privó de libertad por el primer delito."

Ahora, como la responsable estimó actualizado el concurso real de delitos por lo que toca a la posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales cuando no existe tal concurso, como ya quedó demostrado, resulta que la fijación de la pena es incorrecta en este aspecto.

En efecto, al quejoso se le impuso, además de la pena de dos años de prisión y veinticinco días multa, prevista por la fracción II del artículo 83 Quat, la consistente en un año de prisión y diez días multa, prevista en la fracción I del mismo artículo. Pena esta última que no le corresponde al no existir ningún tipo de concurso en cuanto al delito de posesión de cartuchos.

De ahí que la fijación de la pena de un año de prisión y diez días multa, prevista en la fracción I del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos debe dejarse sin efecto, pues de lo contrario se impondría una doble pena para una sola conducta.

2.3. Penas impuestas. Consecuentemente, con lo determinado respecto del delito de posesión de cartuchos, es desacertado que se haya impuesto al ahora quejoso las siguientes penas:

a) Prisión por ocho años diez meses, pues debió imponérsele una menor.

b) Multa equivalente a ciento treinta y seis días, ya que la que le corresponde es menor.

Pero resulta acertado que se haya impuesto al ahora quejoso las siguientes penas:

c) El decomiso del objeto del delito, de acuerdo con el artículo 40 del referido código sustantivo.[63]

d) Suspensión de derechos políticos, de conformidad con los artículos 38, fracción III, de la Constitución Federal[64] y 162, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.[65]

---

[63] "Artículo 40. Los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objeto o producto de él, se decomisarán si son de uso prohibido. Si son de uso lícito, se decomisarán cuando el delito sea intencional. …"

[64] "Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
"…
"III. Durante la extinción de una pena corporal."

[65] "Artículo 162.

e) Suspensión de derechos civiles, con fundamento en el artículo 46 del Código Penal Federal.[66]

f) La amonestación, de conformidad con el artículo 42 del Código Penal Federal[67] y el numeral 528 del Código Federal de Procedimientos Penales.[68]

3. Quántum de las penas de prisión y multa. Las penas de prisión y multa impuestas al quejoso son congruentes con el grado mínimo de culpabilidad que le fue determinado.

4. Cómputo de la pena de prisión. El tribunal responsable determinó correctamente que la pena de prisión debe computarse desde el quince de septiembre de dos mil diez, fecha en que el sentenciado fue privado de su libertad por el delito materia de la condena.

Esa determinación se encuentra ajustada al artículo 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho).[69] Tal precepto establece el derecho constitucional del sentenciado de

---

"1. Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate.
"2. Vencido este plazo, los partidos que no hayan acreditado a sus representantes no formarán parte del consejo respectivo durante el proceso electoral.
"3. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes en los consejos del instituto."

[66] "Artículo 46. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos y los de tutela, curatela, ser apoderado, defensor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndico o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representante de ausentes.
"La suspensión comenzará desde que cause ejecutoria la sentencia respectiva y durará todo el tiempo de la condena."

[67] "Artículo 42. La amonestación consiste: en la advertencia que el Juez dirige al acusado, haciéndole ver las consecuencias del delito que cometió, excitándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si reincidiere.
"Esta amonestación se hará en público o en lo privado, según parezca prudente al Juez."

[68] "Artículo 528. En toda sentencia condenatoria el tribunal que la dicte prevendrá que se amoneste al sentenciado para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone, lo que se hará en diligencia con las formalidades que señala el artículo 42 del Código Penal Federal. La falta de esa diligencia no impedirá que se hagan efectivas las sanciones de reincidencia y de habitualidad que fueren procedentes."

[69] "Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado:
"...
"X. ... En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención."

que en toda pena de prisión se compute el tiempo de la detención, esto es, de la prisión preventiva.

De ahí que resulte acertado que la pena de prisión empiece a correr a partir de que el quejoso fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial con motivo de los hechos delictivos que se le imputaron.

5. Sanción pecuniaria. Por otra parte, es incorrecto que el monto de la multa ascienda a $********** (********** pesos ********** moneda nacional), que es el resultado de multiplicar los cien días multa impuestos por el salario mínimo vigente en la época y lugar de los hechos, pues como se determinó la multa consistente ********** días, prevista por la fracción I del artículo 83 Quat no es una pena que le corresponda al quejoso. Y por tanto, debe dejarse sin efecto.

Finalmente, cabe mencionar que es benéfico para el quejoso que se haya considerado como día multa el equivalente al salario mínimo diario en el lugar y momento en el que se consumó el delito. Es así, porque tal cantidad constituye el límite inferior del día multa, de conformidad con el artículo 29, párrafo tercero, del Código Penal Federal.[70]

6. Beneficios.

6.1. Beneficio de la sustitución total de la multa. Favorece al quejoso que en el acto reclamado se haya considerado que puede acogerse al beneficio de la sustitución total de la multa. Pero resulta incorrecto que se le haya fijado por ciento treinta y seis jornadas de trabajo no remuneradas a favor de la comunidad, si se acredita que el sentenciado no puede pagarla. Lo anterior, porque en esa sustitución se considera a la multa consistente ********** días, prevista por la fracción I del artículo 83 Quat, lo cual ya se dijo no es una pena que le corresponda al quejoso.

En consecuencia, debe dejarse sin efecto, no el beneficio de la sustitución, pero sí la fijación de las ciento treinta y seis jornadas de trabajo no remunera-

[70] "Artículo 29. … Para los efectos de este código, el límite inferior del día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se consumó el delito. Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al salario mínimo vigente en el momento consumativo de la última conducta. Para el permanente, se considerará el salario mínimo en vigor en el momento en que cesó la consumación."

das a favor de la comunidad, y ajustarlas a las que resulten una vez descontada la multa de diez días que no es una pena que deba imponerse al quejoso.

6.2. Beneficios sustitutivos de la pena de prisión y de la condena condicional. Por otra parte, este órgano colegiado considera acertado que el tribunal responsable confirmara que en la especie no procedía otorgar al quejoso los beneficios sustitutivos de la pena de prisión previstos en el artículo 70 del Código Penal Federal, ni el diverso de condena condicional, establecido en el numeral 90 de ese propio ordenamiento legal.

En efecto, el precepto 70 del referido código sustantivo señala los beneficios sustitutivos de la pena de prisión, a decir:

a) Trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años (fracción I);

b) Tratamiento en libertad, si la prisión no excede de tres años (fracción II).

c) Multa, si la prisión no excede de dos años (fracción III).

El último párrafo de dicho artículo indica que la sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio.

Por su parte, el arábigo 90, fracción I, del citado cuerpo legal, menciona que el Juez al dictar sentencia de condena, suspenderá motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren las siguientes condiciones:

a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años;

b) Que el sentenciado no sea reincidente por delito doloso, haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho punible y que la condena no se refiera a alguno de los delitos señalados en la fracción I del artículo 85 de este código, y

c) Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades y móviles del delito, se presuma que el sentenciado no volverá a delinquir.

De lo anterior se colige que, de conformidad con los artículos 70, último párrafo, y 90, fracción I, inciso a) de la citada legislación sustantiva,[71] no se podrán aplicar los beneficios sustitutivos de la pena de prisión y de la condena condicional, si la pena privativa de la libertad impuesta, excede del monto de dos, tres y cuatro años, que se prevé para su otorgamiento, lo que en el caso no acontece en virtud de que la punición, incluso después del ajuste en la fijación particular de la pena, rebasará esa cantidad de años, ya que si fue sentenciado a ocho años diez meses de prisión y debe descontarse a esa pena un año de prisión, entonces es patente que la pena será mayor a dos, tres y cuatro años.

En esas condiciones, ante lo fundado de uno de los conceptos de violación y no advirtiéndose queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo solicitado.

OCTAVO.—Efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, debe otorgarse la protección de la Justicia Federal al quejoso para efecto de que la responsable realice lo siguiente:

Deje insubsistente la sentencia reclamada.

Reitere los aspectos definidos o intocados de la litis.

Estime que el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tratándose de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, no contempla dos tipos penales distintos, sino uno solo, al que corresponden dos diversos parámetros de punibilidad, en atención a la menor o mayor peligrosidad y temibilidad de los cartuchos poseídos.

---

[71] "Artículo 70. La prisión podrá ser sustituida, a juicio del juzgador, apreciando lo dispuesto en los artículos 51 y 52 en los términos siguientes:
"…
"La sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiere sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. Tampoco se aplicará a quien sea condenado por algún delito de los señalados en la fracción I del artículo 85 de este código."
"Artículo 90. El otorgamiento y disfrute de los beneficios de la condena condicional, se sujetarán a las siguientes normas:
"I. El Juez o tribunal, en su caso, al dictar sentencia de condena o en la hipótesis que establece la fracción X de este artículo, suspenderán motivadamente la ejecución de las penas, a petición de parte o de oficio, si concurren estas condiciones:
"a) Que la condena se refiera a pena de prisión que no exceda de cuatro años; …"

Estime que la sanción que corresponde al delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales es únicamente la prevista en la fracción II del artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en atención a la peligrosidad de los cartuchos poseídos.

5. Con base en lo anterior ajuste las penas de prisión y multa.

Tal concesión se hace extensiva al acto de ejecución que se le atribuye al Juez Tercero de Distrito en el Estado de Quintana Roo.

Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 91 de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,[72] cuyos rubro y texto dicen:

"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS.—Si la sentencia de amparo considera violatoria de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios de ésta."

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ********** contra el acto reclamado del Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, consistente en la sentencia dictada el doce de agosto de dos mil trece, en el toca penal **********; y su ejecución. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta ejecutoria y para los efectos precisados en el último considerando.

Notifíquese; y con testimonio devuélvanse los autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y libro electrónico de registro de este tribunal; y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, por unanimidad de votos de los Magistrados Livia Lizbeth Larumbe Radilla (presidenta) y Juan Ramón Rodríguez Minaya, así como de Edgar Bruno Castrezana Moro (ponente) secretario de

---

[72] *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de* 1917-2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 70.

tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal,[73] con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta (acción u omisión) típica, antijurídica y culpable. Por tanto, en aquélla debe analizarse, como presupuesto, la existencia de una conducta, la cual, en términos del artículo 15, fracción I, del Código Penal Federal, exige que se realice con la intervención de la "voluntad" del agente. Lo anterior implica que se excluye el delito por faltar la conducta penalmente relevante, en casos en que el sujeto no ha tenido la capacidad de autodeterminar libremente sus movimientos corporales por recaerle una fuerza física irresistible o porque el hecho se realizó por movimientos reflejos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/4 (10a.)

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

---

[73] Sesión de dieciséis de abril de dos mil trece, según oficio CCJ/ST/1444/2013 de la propia fecha, signado por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 78/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Adam Azcorra Puc.

Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica, antijurídica es culpable cuando al autor o partícipe del delito le es reprochable el haber contravenido el orden jurídico. Luego, del artículo 15, fracciones V, VII, VIII, inciso B) y IX del Código Penal Federal, se advierte que el autor o partícipe del delito es culpable cuando: i) es imputable (capacidad de culpabilidad); ii) conocía la antijuridicidad de su conducta; y, iii) le resultaba exigible otra conducta. Los anteriores elementos se excluyen por: a) La inimputablidad. Consiste en que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender su carácter ilícito o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente lo hubiere provocado dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre que lo haya previsto o le fuere previsible; b) El error de prohibición invencible. Se presenta cuando se realice la

acción u omisión bajo un error invencible respecto de la ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o su alcance (error directo), o porque crea que está justificada su conducta (error indirecto o sobre las causas de justificación); c) El estado de necesidad inculpante; en él, el sujeto activo obra por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo; y, d) La inexigibilidad de otra conducta. Cuando en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar a actuar conforme a derecho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/7 (10a.)

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: i) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; ii) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); iii) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, iv) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación).

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/5 (10a.)

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. En la jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 2, diciembre de 2011, página 912, de rubro: "ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta típica es antijurídica cuando contraviene el orden jurídico en su conjunto (antijuridicidad formal) reafirmando la lesión o puesta en peligro de los bienes jurídicos protegidos (antijuridicidad material). Así, de los artículos 15, fracciones III a VI y 17 del Código Penal Federal, se advierte que la antijuridicidad se excluye oficiosamente cuando la conducta se justifica por el orden jurídico al desplegarse para salvaguardar bienes jurídicos propios o ajenos de mayor valor al lesionado, siendo las causas de justificación enunciadas por el legislador las siguientes: i) el consentimiento del titular del bien jurídico protegido (expreso o presunto); ii) la defensa legítima (expresa o presunta); iii) el estado de necesidad justificante; y, iv) el cumplimiento de un deber o el ejercicio de un derecho.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/6 (10a.)

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 152/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 251/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.

De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está

acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o. J/3 (10a.)

Amparo directo 14/2013. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 84/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 141/2014. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Amparo directo 78/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Adam Azcorra Puc.

Amparo directo 99/2014. 2 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.

QUEJA 55/2014. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HORACIO ARMANDO HERNÁNDEZ OROZCO. SECRETARIA: LILIANA ELIZABETH SEGURA ESQUIVEL.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—En síntesis, dichos motivos de inconformidad acotan que la Jueza de amparo:

• El inconforme señaló que el "30 de enero de 2014" se le notificó que la autoridad responsable había cumplido con la ejecutoria concesoria de amparo, sin embargo, la Jueza de garantías omitió dar al hoy recurrente copia certificada o cuando menos simple del acto reclamado, lo cual impidió conocer el contenido del auto de formal prisión hasta el veintiuno de mayo de dos mil catorce, cuando el Juez castrense estimó que el cumplimiento se encontraba firme; luego, el cinco de marzo de la presente anualidad interpuso el recurso de inconformidad contra dicho cumplimiento, el cual fue resuelto por este órgano colegiado, en el sentido de declararlo "inoperante"; así, el Juez militar le notificó el "nuevo auto de formal prisión hasta el 21 de mayo de 2014".

De ahí que, es a partir de esta última data, en la que comenzó el plazo para interponer el juicio de garantías en contra de dicho acto reclamado, ya que el Juez castrense refirió que el auto que tuvo por cumplido el fallo protector no causaba estado, sino hasta que se resolviera el recurso de inconformidad aludido, por lo que una vez que se resolvió éste, se le notificó en su integridad el nuevo auto de plazo constitucional.

Por lo que, la Jueza de Distrito parte de una apreciación equívoca cuando refiere que desde el seis de marzo del presente año (fecha en que interpuso el recurso multicitado) tuvo conocimiento del acto reclamado, lo cual acreditó con las constancias que existen en el diverso juicio de amparo 777/2013-III, lo cual es incorrecto, dado que de las mismas no se advierte que se le haya hecho del conocimiento por parte del juzgado federal o militar el auto de formal prisión. Máxime que, en ningún momento consintió el acto, como lo adujo la Jueza de amparo, pues incluso interpuso el medio de impugnación multireferido.

• Al existir duda sobre la fecha de notificación del acto de autoridad, la juzgadora constitucional debió abstenerse de desechar de plano la demanda,

pues al hacerlo, vedó la posibilidad de ofrecer pruebas y demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, impidiendo con ello el acceso a una defensa adecuada, pues la Jueza señaló una data y el Juez castrense indicó que una vez que causara estado.

"Amén de que, al existir litispendencia había un impedimento real para interponer el juicio de garantías, e inclusive la apelación."

• Determinó extemporánea la demanda de amparo, dado que, al derivar el acto reclamado del cumplimiento de un diverso juicio constitucional, se debió interponer dicha demanda contra el auto que la tuvo por cumplida y no, contra el "auto que notifica personalmente el nuevo auto de formal prisión, al momento de resolverse el recurso de inconformidad."

Dichos motivos de agravio resultan infundados y el último inoperante, pero previo a establecer las razones por las que se sostiene lo anterior, resulta necesario apuntar los siguientes antecedentes del caso, para lo cual, se invocan diversos datos como hechos notorios[1] que se encuentran plasmados en la resolución de la inconformidad 7/2014 del índice de este órgano colegiado, dado que, tiene íntima relación con el presente asunto, tal como se asienta a continuación:

---

[1] Con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, junio de 2007, página 285, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.—Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista."
Así como en la diversa VI.1o.P. J/25, que este tribunal comparte, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XV, marzo de 2002, página 1199, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO.—Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento."

• El 1 de agosto de 2013, el hoy recurrente promovió demanda de amparo contra el auto de formal prisión de veintiuno de julio de dos mil trece, emitido por el Juez Cuarto Militar adscrito a la Primera Región Militar, en la causa 594/2012.

• El 8 de enero de 2014, la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Primer Circuito (a quien le tocó conocer de la citada demanda), resolvió en el juicio de amparo biinstancial 777/2013-III, conceder el amparo para efectos (por falta de fundamentación y motivación).

• El 27 de enero de 2014, el secretario encargado del despacho, por vacaciones de la titular del Juzgado de Distrito aludido, señaló que dicha resolución había causado ejecutoria y requirió al Juez castrense, para que en el término de tres días comunicara el cumplimiento que diera al fallo protector.

• El 29 de enero de 2014, el Juez militar dictó el nuevo auto de plazo constitucional, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

• El 30 de enero de 2014, el secretario encargado del despacho del juzgado constitucional, ordenó dar vista a la parte quejosa con dichas constancias para que, en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera, quien hizo diversas manifestaciones al respecto.

• El 13 de febrero de 2014, la titular del Juzgado de Distrito emitió pronunciamiento en el que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Lo que se notificó personalmente al autorizado del hoy recurrente al día siguiente, esto es, el catorce del citado mes y año.

• El 5 de marzo de 2014, el peticionario de amparo interpuso recurso de inconformidad contra el auto que declaró cumplida el fallo protector.

• El 24 de abril de 2014, este órgano colegiado (a quien por razón de turno correspondió conocer del citado medio de impugnación) resolvió en la inconformidad 7/2014, declarar infundado dicho recurso.

• El 7 de mayo de 2014, la secretaria de Acuerdos de este tribunal constitucional hizo del conocimiento tanto del juzgador de amparo como del Juez castrense la resolución aludida con antelación, tal como se constata de los sellos de recepción de dichos órganos jurisdiccionales a fojas 86 y 87 del cuaderno de inconformidad 7/2014.

• El 8 de mayo de 2014, la juzgadora de garantías dictó un proveído en el que tuvo por recibidos los autos originales del juicio biinstancial 777/2013-III de su índice; asimismo, acusó el testimonio de la resolución pronunciada por este órgano colegiado en la inconformidad multireferida y ordenó el archivo del expediente. Lo cual fue notificado a las partes por lista el nueve del citado mes y año y, en la misma data a la autoridad responsable castrense (fojas 255 y 256 del cuaderno en que se actúa).

• El 11 de junio de 2014, el quejoso promovió demanda de amparo indirecto contra el auto de plazo constitucional de veintinueve de enero de dos mil catorce, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 89 a 120 del presente expediente).

• El 13 de junio de 2014, la Jueza Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad (de la cual tocó conocer de la citada demanda), la registró bajo el número 560/2014-III y determinó desechar de plano la demanda de garantías, al estimar actualizada de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV (contra actos consentidos tácitamente), en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, ello al establecerse que la demanda fue presentada en forma extemporánea (fojas 166 a 170 del cuaderno de queja). Lo cual fue notificado al quejoso por conducto de su autorizado el dieciséis siguiente (foja 171).

• El 24 de junio de 2014, el peticionario de garantías interpuso el presente recurso de queja en contra del proveído anterior.

Narrado lo anterior, es preciso señalar que el acto reclamado[2] se trata del auto de formal prisión emitido el veintinueve de enero de dos mil catorce, esto es, en fecha posterior a la entrada en vigor de la Ley de Amparo –tres de abril de dos mil trece– que deroga la ley anterior (fojas 182 a 250), mientras que la demanda de amparo se presentó el once de junio del mismo año, esto es, bajo la vigencia de la nueva ley.

De ahí que, la autoridad recurrida desechó la demanda de garantías al determinar que ésta fue presentada fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, determinación que es correcta (aunque

[2] Así como diversos que son consecuencia del principal que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria.

con la precisión que se hará más adelante), ello es así, pues de conformidad con lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 371/2013, de la cual emanó la jurisprudencia P./J. 45/2014[3], que establece:

"ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO.—El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio –excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo–, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento –como lo es el auto de formal prisión– pueden ser impugnados a

[3] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación*, publicada el viernes 13 de junio de 2014, la cual es de aplicación obligatoria a partir del lunes 16 del citado mes y año. Pendiente de integrar al módulo de sistematización.

través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate."

De dicho contenido se advierte que, en tratándose de actos privativos de libertad dictados dentro de un procedimiento judicial bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, pueden ser impugnados en cualquier tiempo; situación que no acontece en el caso particular, pues el acto reclamado en el juicio de amparo del que emana este recurso, se dictó bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, pues se emitió el veintinueve de enero de dos mil catorce, por ende, la temporalidad para promover el juicio de amparo contra dicho acto debe regirse bajo el plazo de quince días, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor.

Puntualizado lo anterior, debe señalarse que el punto de controversia en el presente asunto, es establecer la fecha que se debe tomar para efectos de realizar el cómputo de quince días para promover el juicio de amparo, para lo cual, se debe atender a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo que señala:

"Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor."

Del contenido de dicho ordinal se advierten diversos supuestos, pues señala que el plazo para la promoción de la demanda de amparo se computará a partir del día siguiente a:

• Aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o;

• Aquel en que haya tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución.

Ahora bien, con base en lo anterior y tomando en cuenta que el acto reclamado de que se duele el quejoso fue dictado en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, este órgano de decisión estima oportuno aclarar que el plazo de quince días para la promoción del juicio de amparo, comenzó a correr, a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación realizada al quejoso respecto de la determinación dictada por la Jueza de Distrito en el juicio de amparo primigenio 777/2013-III, en la que declaró cumplida la sentencia concesoria dictada al efecto, esto es, a partir del catorce de febrero de dos mil catorce y no así, a partir del "seis de marzo" del mismo año, en que el hoy recurrente interpuso el recurso de inconformidad en contra de dicha declaratoria de cumplimiento, como lo aduce la juzgadora constitucional (que es la misma que conoció del citado juicio) en el amparo biinstancial de que se trata, razonando que a partir de esa data tuvo conocimiento del auto de plazo constitucional reclamado.

Ello es así, pues este órgano de control constitucional estima que, en tratándose de actos dictados en cumplimiento a una sentencia concesoria, en que se haya otorgado libertad de jurisdicción total o parcial a la autoridad responsable para emitir el nuevo acto, el plazo para instar un nuevo juicio de garantías comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso de la determinación que declaró cumplida la sentencia protectora, o bien, a aquel en que el justiciable haya tenido conocimiento, o se ostente sabedor del acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, pues de actuar en contrario, se dejaría al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que antes de la declaración de cumplimiento, no podría saber con precisión, cuáles son las violaciones que deben combatirse en la nueva demanda de garantías.

Además, sería un desatino computar el plazo para la promoción de un juicio de amparo contra un acto dictado en cumplimiento a una sentencia concesoria de amparo, sin existir pronunciamiento previo sobre su cumplimiento, pues ello implicaría soslayar:

• Que las resoluciones dictadas en cumplimiento a una ejecutoria de amparo en la que se devolvió a la autoridad responsable libertad de jurisdicción total o parcial, encuentran su razón y medida en la propia sentencia de amparo; y

• Que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y, por tanto, el órgano de control constitucional debe realizar todas las gestiones que resulten necesarias para lograr tal cometido.

En ese orden de ideas, cabe mencionar que no le asiste la razón al inconforme en el sentido de que éste no conocía el contenido del auto de formal prisión dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, porque la Jueza constitucional, al notificárselo el "30 de enero de 2014" (data incorrecta, pues la notificación se llevó a cabo el catorce de febrero de dicha anualidad, como quedó asentado en párrafos precedentes), omitió darle copia simple o certificada de éste, motivo por el cual conoció del mismo en su integridad hasta el veintiuno de mayo de dos mil catorce; manifestación que resulta incorrecta, pues tan tenía conocimiento del mismo que realizó diversas manifestaciones al respecto; para con posterioridad interponer el recurso de inconformidad en contra de la determinación de cumplimiento, como así lo señala en sus motivos de agravio.

En consecuencia, no puede considerarse como fecha para iniciar el cómputo de quince días para la promoción de la demanda de garantías el veintiuno de mayo del presente año, como lo pretende hacer valer el recurrente, porque en primer lugar, no es hasta esa data en donde tuvo conocimiento del contenido del acto reclamado, como ya quedó asentado en líneas precedentes; además, aduce que el Juez castrense le refirió que el auto que tuvo por cumplido el fallo protector no causaba estado, sino hasta que se resolviera el recurso de inconformidad planteado, ello resulta incorrecto, pues la validez y eficacia de la resolución dictada en cumplimiento de un fallo protector, se encuentra sujeta a la determinación del órgano de control constitucional que declare cumplida la sentencia concesoria, pues aun cuando es existente, el acto reclamado dictado en cumplimiento cobrará firmeza a propósito de esta última determinación.

Máxime que, cuando una sentencia de amparo no se encuentra cumplida, el órgano de amparo realiza dicho pronunciamiento y ordena a la autoridad responsable dejar insubsistente la determinación con la que se pretendió dar cumplimiento de la sentencia de amparo, así como emitir otra en la que con libertad de jurisdicción, se cumplan los lineamientos apuntados en el fallo protector, ello en atención a la naturaleza de orden público que reviste el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos de lo dispuesto en el precepto 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto por el artículo 25, numeral 2, inciso c) de la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos, el cual precisa que los Estados Parte se comprometen a garantizar el cumplimiento (por las autoridades competentes) de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; pues acorde con dichos numerales, el órgano de control constitucional debe realizar todas las diligencias que resulten necesarias para lograr que la ejecutoria de amparo se observe en sus términos.[4]

En mérito de lo expuesto, sostener que el plazo para la promoción del juicio de amparo contra una determinación dictada en cumplimiento a una sentencia concesoria comienza a correr a partir del día siguiente a aquel en surta efectos la notificación realizada a la parte quejosa de la determinación que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, encuentra su fundamento último en los artículos 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues ello otorga certeza jurídica al quejoso, de que el juicio de amparo será promovido contra un acto respecto del cual conoce su contenido.

Actuar en contrario genera inseguridad para el peticionario de amparo, así como promoción innecesaria de juicios de amparo y saturación del aparato judicial, pues ningún sentido tiene instar la acción constitucional contra una determinación que a la postre podrá ser declarada insubsistente por la autoridad responsable, virtud a que el órgano de control constitucional decretará eventualmente, que no cumple lo ordenado en la ejecutoria de amparo.

Bajo esta tesitura, no existe algún impedimento legal como lo aduce el quejoso en el sentido de que debía esperarse hasta la resolución del recurso de inconformidad planteado, pues de lo contrario existiría "litispendencia", pues, como ya quedó asentado, será el dictado del auto que declara cumplida una ejecutora de amparo, el que permitirá al quejoso conocer y tener certeza de la materia sobre la cual podría promoverse el nuevo juicio constitucional, con independencia de los medios de defensa que eventualmente hiciera valer para inconformarse contra dicho auto.

De lo expuesto se advierte que, si bien es cierto, la data que tomó en cuenta la Jueza constitucional para desechar la demanda de amparo es incorrecta, por las razones señaladas, también lo es que, no existe duda respecto a la fecha de notificación del acto de autoridad que se debe tomar en cuenta

---

[4] Es ilustrativa la tesis 3a. XCI/91, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, página 99, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO ES DE ORDEN PÚBLICO DEBIÉNDOSE EVITAR ACTUACIONES O DECISIONES QUE LO DIFICULTEN O IMPIDAN."

para efectos del inicio del cómputo de quince días para la promoción del juicio de garantías, pues de los autos que integran el diverso juicio de amparo 777/2013-III del índice de la autoridad recurrida, se advierte que el proveído que declaró cumplida la sentencia de amparo en relación con el acto reclamado al Juez militar, fue notificada personalmente al autorizado del quejoso, el catorce de febrero de dos mil catorce, el plazo para la promoción de la demanda de amparo transcurrió del dieciocho del citado mes al diez de marzo de dicha anualidad, con excepción de los días veintidós y veintitrés del mes mencionado en primer término; así como el uno, dos, ocho y nueve del segundo mes, por ser inhábiles.

Luego, si el controvertido constitucional, ahora sujeto a revisión, fue promovido el once de junio del presente año, según se advierte del sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, es evidente que aquél resultó extemporáneo, pues rebasó en exceso el término genérico de quince días.

En consecuencia, fue correcta la determinación del órgano de control constitucional al desechar la demanda de amparo, por estimar actualizada de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV (contra actos consentidos tácitamente), en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, pero no por las consideraciones plasmadas en el auto que hoy se recurre.

Finalmente, por todo lo expuesto resulta inoperante el argumento del hoy recurrente en el sentido de que la Jueza constitucional determinó extemporánea la demanda de amparo, dado que, al derivar el acto reclamado del cumplimiento de un diverso juicio constitucional, se debió interponer dicha demanda contra el auto que la tuvo por cumplida y no, contra el "auto que notifica personalmente el nuevo auto de formal prisión, al momento de resolverse el recurso de inconformidad"; pues, del análisis del auto recurrido no se advierte dicha manifestación por parte del órgano de amparo.

Por lo expuesto; se resuelve:

ÚNICO.—Con las precisiones anotadas, es infundado el recurso de queja a que este toca se refiere.

Notifíquese, con testimonio de esta ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido.

Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz (presidente), Silvia Carrasco Corona y Horacio Armando Hernández Orozco (ponente).

Esta ejecutoria se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Tratándose de actos dictados en cumplimiento a una sentencia concesoria, el plazo para instar un nuevo juicio de amparo comenzará a correr a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del auto que declaró cumplida la sentencia protectora, o bien, a aquel en que el justiciable haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acuerdo que declaró cumplida la ejecutoria de amparo (conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo) pues será en este punto en donde el acto reclamado dictado en cumplimiento otorgará certeza jurídica al quejoso sobre su contenido; de actuar en contrario, se dejaría al quejoso en estado de indefensión e incertidumbre jurídica, ya que antes de la declaración de cumplimiento, no podría saber con precisión cuáles son las violaciones que deben combatirse en la nueva demanda; ello con independencia de los medios de defensa que eventualmente hiciera valer para inconformarse contra dicho auto.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P. J/2 (10a.)

Amparo en revisión 173/2013. 10 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretaria: María Isabel Reyes Servín.

Amparo en revisión 80/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretaria: María Isabel Reyes Servín.

Queja 71/2014. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretario: Arturo García Gil.

Queja 61/2014. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. Secretaria: Romana Nieto Chávez.

Queja 55/2014. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Liliana Elizabeth Segura Esquivel.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA.

AMPARO DIRECTO 110/2014 (CUADERNO AUXILIAR 345/2014) DEL ÍNDICE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN. 24 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MAYRA GONZÁLEZ SOLÍS. SECRETARIA: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio de fondo. El estudio de los conceptos de violación conduce a emitir las siguientes consideraciones.

A manera de preámbulo, es de señalarse que mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil trece, ********** en su carácter de apoderada legal del **********, ejerció la acción prevista en el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito contra ********** en su carácter de deudor principal y ********** como deudora solidaria, reclamando el pago de la cantidad de $232,807.45 (doscientos treinta y dos mil ochocientos siete pesos 45/100 moneda nacional) por concepto de capital dispuesto no pagado, así como el pago de intereses ordinarios, comisiones, gastos y costas.

Emplazada que fue la demandada, dio contestación al libelo inicial instaurado en su contra, negando las prestaciones reclamadas y oponiendo las excepciones que estimó pertinentes, entre las que destaca, la de incompetencia por declinatoria.

En atención a lo anterior, por resolución de seis de agosto de dos mil trece, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, resolvió la incompetencia planteada por la parte demandada, declarándola improcedente y, por ende, competente el Juez natural para conocer y resolver el asunto sometido a su potestad.

Así, seguido que fue el juicio en su trámite legal, el diez de enero de dos mil catorce, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, dictó sentencia definitiva, declarando procedente la acción intentada y, en ese sentido, condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Este fallo es la materia del presente juicio de control constitucional.

Por su parte, los quejosos aducen que les causa perjuicio la determinación de la responsable de declarar infundada la excepción de incompetencia, toda vez que contraviene lo previsto en los artículos 104, fracción I, de la Carta Magna y 1090 del Código de Comercio, puesto que como se desprende de la cláusula trigésima segunda del contrato basal, relativa a la legislación, jurisdicción y competencia, específicamente se señala: "Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal …" y que por ello, no quedaba al arbitrio de la parte actora entablar la demanda ante los tribunales de Campeche, sino era una exigencia derivada del propio documento base de la acción de someter la competencia y jurisdicción a los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual no fue debidamente valorado por la responsable.

Para estar en condiciones de examinar el planteamiento sintetizado, es menester puntualizar que de conformidad con la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos 107, fracción VIII y 172, fracción X, ambos de la Ley de Amparo,[1] permite colegir que procede el juicio biinstancial, cuando se reclama la determinación que resuelve una excepción de incompetencia de la autoridad responsable, siempre y cuando se surtan dos hipótesis, a saber: a) que dicha determinación sea la definitiva; y, b) que la declare fundada, supuesto en el cual, la autoridad se inhibe o declina la competencia o el conocimiento del asunto, por lo que, por exclusión, cuando la excepción se desecha, no se tramita el incidente, o se declara infundada, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, bajo las reglas del artículo 171 de la Ley de Amparo, porque en estos últimos supuestos no se estaría determinando la inhibición o declinación de la competencia o el conocimiento del asunto; sino que se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, lo que implica que se trataría de casos análogos a los previstos en la fracción XII del artículo 172, en relación con la diversa fracción X de la Ley de la materia.

---

[1] "Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"…
"VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto."
"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:
"…
"X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello; …"

En la especie, la resolución de la que se duelen los quejosos en el concepto de violación sintetizado, consiste en la determinación definitiva que dictó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, en la cual declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria hecha valer por la parte demandada, por tanto, es factible reclamarla en la vía directa como violación procesal conforme a las reglas del juicio de amparo directo.

Precisado lo anterior, cabe decir que resulta inoperante el planteamiento de los quejosos frente a la determinación que desestimó la excepción de incompetencia por declinatoria, porque en esencia reiteran que de la cláusula trigésima segunda del contrato basal, relativa a la legislación, jurisdicción y competencia, se advierte que las partes se sometieron a la competencia y jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, Distrito Federal y que ello no fue debidamente valorado por la responsable; esto es, redundan en el mismo argumento que hicieron valer al oponer la excepción de que se trata.

Así es, se estima que los quejosos omiten atacar argumentativamente la consideración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, bajo la cual se desestimó dicha excepción, en razón de que dicha autoridad señaló que si bien la cláusula a la que aluden los quejosos estipula que las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal, también lo es que señala "o los que correspondan al lugar de firma del mismo", es decir, que contempla dos alternativas de competencia o jurisdicción.

Que por lo anterior, para que existiera el sometimiento de las partes y se generara la sumisión a los tribunales designados, era necesaria la renuncia expresa, clara y terminante al fuero que la ley concede, lo cual no aconteció en la especie.

Asimismo, expuso que como el lugar donde se celebró el contrato base de la acción, resulta ser el mismo donde se encuentra ubicado el domicilio del deudor, y atendiendo a las reglas de competencia territorial, entonces, el Juez natural es quien tiene la competencia para conocer del negocio, por ser la autoridad jurisdiccional que se encuentra dentro de la circunscripción en la que se suscribió el contrato mercantil y porque en esa ciudad se encuentra el domicilio del deudor; de ese modo, declaró infundada la excepción de incompetencia por declinatoria planteada.

Luego, si los quejosos se concretan a señalar vía conceptos de violación que en la cláusula trigésima segunda del contrato basal, se advierte que las partes se sometieron a la competencia y jurisdicción de los tribunales de la

Ciudad de México, Distrito Federal, empero, omiten combatir lo sostenido en la determinación impugnada en cuanto a que en esa propia cláusula se contemplan dos alternativas de competencia o jurisdicción, por lo cual, para que existiera el sometimiento de las partes y se generara la sumisión a los tribunales designados, era necesaria la renuncia expresa, clara y terminante al fuero que la ley concede, lo cual no aconteció en la especie; asimismo, tampoco dicen nada de que el Juez natural es quien tiene la competencia para conocer del negocio, por ser la autoridad jurisdiccional que se encuentra dentro de la circunscripción en la que se suscribió el contrato mercantil y porque en la ciudad donde se ubica su residencia, se encuentra el domicilio del deudor; es inconcuso que, los conceptos de violación que al efecto formulan devienen inoperantes por insuficientes.

En otro aspecto, la parte quejosa argumenta que el Juez natural vulneró lo dispuesto en los artículos 14 de la Carta Magna; 1324 y 1325 del Código de Comercio, ya que la sentencia impugnada no se encuentra debidamente fundada y motivada, y tampoco fue dictada conforme a la letra, a la interpretación de la ley o conforme a los principios generales del derecho.

Lo así expuesto es infundado.

Con la finalidad de demostrar el anterior aserto, conviene definir en primer lugar lo que en términos generales debe entenderse por fundamentación y motivación.

El artículo 16 de la Constitución Federal establece:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. …"

La norma supratranscrita consagra como derecho fundamental que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que por fundamentación ha de entenderse que en el acto de autoridad debe expresarse con exactitud el precepto legal aplicable al caso, y por motivación, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. El mencionado criterio es del contenido siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."[2]

Ahora bien, sobre el tema de la fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, en la tesis P. CXVI/2000, el Pleno del propio Máximo Tribunal, ha dicho:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.—La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que

[2] *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Tercera Parte, página ciento cuarenta y tres.

involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."[3]

Del criterio reproducido se desprende que la garantía de fundamentación y motivación en una resolución jurisdiccional, se cumple sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que la fundan, cuando de ella se advierte con claridad el dispositivo legal en que se basa.

Asimismo, que la fundamentación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate.

Ello, en virtud de que las resoluciones jurisdiccionales presuponen el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, y corresponde al juzgador analizar esas cuestiones jurídicas y resolver si se ha probado la acción, si ésta no existe, o bien, si se han demostrado las excepciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido son:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones funda-

[3] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de dos mil, página ciento cuarenta y tres.

mentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."[4]

Por su parte el artículo 14 de la Carta Magna alberga, entre otros, el derecho de legalidad jurídica, al establecer lo siguiente:

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

---

[4] *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página ciento sesenta y dos.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

De lo que se deduce que tratándose como es el caso de un juicio de naturaleza civil, la sentencia que se dicte debe ser conforme al texto de la ley, y a falta de un ordenamiento expreso, se fundará en los principios generales de derecho.

En tanto, los numerales 1324 y 1325 del Código de Comercio establecen:

"Artículo 1,324. Toda sentencia debe ser fundada en ley, y si ni por el sentido natural, ni por el espíritu de ésta, se puede decidir la controversia, se atenderá a los principios generales de derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso."

"Artículo 1,325. La sentencia debe ser clara, y al establecer el derecho, debe absolver o condenar."

De lo que se infiere que las sentencias mercantiles deben ser fundadas en la ley, y a falta de un ordenamiento expreso, se fundarán en los principios generales de derecho; además, deben ser claras, y al establecer el derecho, deben absolver o condenar.

Expuesto lo anterior, se observa que la responsable sí cumplió las formalidades descritas al emitir su fallo, pues se observa que en la sentencia impugnada examinó las excepciones hechas valer por la parte demandada, seguida de la acción planteada por la parte actora, expresando los motivos por los cuales desestimó las primeras y declaró procedente la última.

Aunado a ello, se observa que la responsable fundó su proceder, entre otros, en los preceptos 450 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 1056 y 1194 del Código de Comercio, 8o. y 150, fracción II, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como en la cita de las jurisprudencias de rubros: "PAGO O CUMPLIMIENTO, CARGA DE LA PRUEBA."; "EXCEPCIONES DEBEN PRECISARSE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN."; "ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS CERTIFICADOS POR EL CONTADOR AUTORIZADO DE LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. SUS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES." y

"COSTAS EN JUICIO MERCANTIL, PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE."

En esa tesitura, se puede advertir que la autoridad responsable al dictar la sentencia que se combate, se ciñó a lo establecido en los dispositivos 14 y 16 constitucionales, ajustando su actuar a las normas previamente establecidas, tesis jurisprudenciales y principios de derecho, que citó e hizo referencia al momento de emitir las consideraciones en que fundó su fallo.

Además, no se advierte de qué modo el fallo reclamado no sea claro, por el contrario, se colige que contiene en forma clara la exposición de resultandos, considerandos y puntos resolutivos, aunado a que también se observa en forma clara la condena a las respectivas prestaciones reclamadas. De ahí lo infundado del concepto de violación aquí analizado.

Finalmente, los impetrantes refieren que la sentencia recurrida les causa perjuicio, debido a que la responsable no fundó ni motivó la condena al pago de gastos y costas, vulnerando con ello lo dispuesto en los artículos 1081, 1082, 1083 y 1084 del Código de Comercio; aunado a que dicen, no actuaron con dolo ni mala fe, por lo que estiman que al no haberse hecho un razonamiento jurídico en el que se justificara la condena a gastos y costas o bajo qué supuestos de las fracciones del artículo 1084 del Código de Comercio encuadraba dicha condena, se vulneraron en su perjuicio las garantías de legalidad y exacta aplicación de la ley.

Al efecto, es infundada dicha manifestación, pues contrario a lo argumentado por los quejosos, en la sentencia impugnada, la autoridad responsable sí fundo y motivó la condena al pago de gastos y costas, pues después de que condenó al pago de la suerte principal y accesorios, determinó lo siguiente:

"XII. En idéntica forma, se condena a los ciudadanos **********, como deudor principal y ********** como obligada solidaria, a pagarle a la licenciada **********, en su carácter de apoderada legal de la institución bancaria "**********", los gastos y costas, que el presente juicio le haya ocasionado, mismos que deberán ser fehacientemente acreditados mediante el incidente de liquidación respectivo en la etapa de ejecución de la sentencia, como indica el artículo 1348 del Código de Comercio en vigor. En tal mérito, se previene a la apoderada de la **********, para que se sirva dar cumplimiento a lo estipulado en el capítulo VII, libro V del ya citado Código de Comercio, a efecto de regular las costas que conforme a derecho procedan. Sirve de apoyo a lo ante-

rior, la jurisprudencia que a continuación se transcribe. … 'COSTAS EN JUICIO MERCANTIL PROCEDENCIA DE LA CONDENA AL PAGO DE.—El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio contiene una de las hipótesis en que la condena al pago de las costas debe establecerse con absoluta independencia de la temeridad o mala fe del litigante, pues basta para fundar esa condena el hecho de que se dicte sentencia condenatoria contra el demandado, aun cuando el importe de esa condena no corresponda a la totalidad de las prestaciones reclamadas, pues esa circunstancia no la toma en cuenta la ley para liberar del pago de costas a quien resulta condenado en juicio mercantil ejecutivo.' …"

Lo anterior, permite colegir que contrario a lo expuesto en los conceptos de violación, la autoridad del conocimiento sí fundó y motivó la condena de que se trata, pues al efecto citó un criterio del que se advierte que la condena a la que refiere la sentencia es la obligatoria o absoluta, prevista en la fracción III, del numeral 1084, del Código de Comercio,[5] es decir, cuando se es condenado en forma total en el juicio natural, como así aconteció en el caso particular.

En ese sentido, la autoridad del conocimiento no tenía que examinar la temeridad o mala fe a que aluden los impetrantes, ya que ello surge únicamente cuando la condena es parcial y, por tanto, queda al arbitrio del juzgador a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento; luego, reiterase, si en el caso se condenó en forma total a los aquí quejosos, entonces, es inconcuso que no se actualiza este último supuesto y en ese sentido, el juzgador natural no tenía por qué examinar tal extremo; aunado a que como se adujo, la responsable sí fundó y motivó la condena de que se trata citando al efecto un criterio del que se advierte la comentada condena obligatoria a que alude la fracción III del citado precepto 1084 del código de los comerciantes, de ahí lo infundado de este planteamiento.

Es ilustrativa al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y texto, siguientes:

---

[5] "Artículo 1,084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.
Siempre serán condenados:
"…
"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente; …"

"COSTAS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SU PROCEDENCIA CUANDO LA CONDENA EN EL JUICIO FUE ÚNICAMENTE PARCIAL, DEPENDERÁ DEL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR.—El artículo 1084 del Código de Comercio, en su primer párrafo, establece dos presupuestos para el pago de costas en el juicio, el primero de ellos se refiere a la condena obligatoria cuando la prevenga la ley y la segunda deja al prudente arbitrio del juzgador dicha condena, a la luz de la temeridad o mala fe que se advierta en la sustanciación del procedimiento. El propio numeral en comento describe, en su tercera fracción, que pagará las costas 'el que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable ...' en donde el término condenado debe entenderse en su acepción absoluta o total, pues cuando se trata de una condena parcial, ésta dependerá del arbitrio judicial, y será el juzgador quien debe analizar el caso concreto para desentrañar las motivaciones que tuvieron las partes para concurrir al juicio y advertir si en alguna de ellas existió una conducta temeraria o de mala fe que deba ser castigada a través del pago de las costas."[6]

Así, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación expuestos por los quejosos, procede negar el amparo y protección constitucional solicitados, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja.

Por lo antes expuesto y fundado; se resuelve

ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** y **********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese a las partes por conducto del tribunal auxiliado; engrósese la presente ejecutoria al original del cuaderno auxiliar 345/2014, así como éste a su vez al amparo directo 110/2014 del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con sede en San Francisco de Campeche, Campeche; háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico de registro; glósese testimonio autorizado de esta sentencia al duplicado del cuaderno auxiliar en mención, que quedará en este tribunal; devuélvase por conducto de la Secretaría de Acuerdos de este Tribunal Colegiado, el amparo directo civil 110/2014 del índice del aludido tribunal y el juicio ejecutivo mercantil

[6] Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, Materia(s): Civil, tesis: 1a./J. 14/98, Primera Sala de la SCJN, página 206.

471/12-2013/1M-I, del orden del Juzgado Primero Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Campeche, con sede en San Francisco de Campeche; asimismo, remítase al tribunal auxiliado el archivo del fallo en cuestión por cualquier medio de almacenamiento electrónico; solicítese acuse de recibo.

Así, lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, por unanimidad de votos, con las modificaciones y adiciones correspondientes de los Magistrados Iván Benigno Larios Velázquez, Mayra González Solís y José Atanacio Alpuche Marrufo.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA. De la intelección sistemática y en uso del argumento a rúbrica de los artículos 107, fracción VIII y 172, fracción X, de la Ley de Amparo, se colige que el juicio de amparo indirecto procede cuando se reclama la determinación que resuelve una excepción de incompetencia de la autoridad responsable, siempre que se surtan las dos hipótesis siguientes: a) que la determinación sea definitiva; y, b) que la declare fundada, supuesto en el cual, la autoridad se inhibe o declina la competencia o el conocimiento del asunto, y esta determinación adquiere firmeza. Por lo que, por exclusión, cuando la excepción se desecha, no se tramita el incidente relativo o se declara infundada, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, bajo las reglas del artículo 171 de la ley de la materia, porque en estos supuestos no se estaría determinando la inhibición o declinación de la competencia o el conocimiento del asunto, sino que se continuaría el procedimiento después de haberse promovido una competencia, lo que implica que se trataría de casos análogos a los previstos en la fracción XII del artículo 172 mencionado, en relación con su fracción X.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

(VIII Región)2o. J/1 (10a.)

Amparo directo 110/2014 (cuaderno auxiliar 345/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretaria: Graciela Bonilla González.

Amparo en revisión 100/2014 (cuaderno auxiliar 401/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Danny Alberto Góngora Moo. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Iván Benigno Larios Velázquez. Secretaria: Adriana Rafaela Ramírez Arias.

Amparo en revisión 91/2014 (cuaderno auxiliar 395/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Luz Elena Sánchez López. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Iván Benigno Larios Velázquez. Secretaria: Adriana Rafaela Ramírez Arias.

Amparo en revisión 75/2014 (cuaderno auxiliar 422/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Universidad Autónoma de Guerrero. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Arturo Carrera López.

Amparo en revisión 252/2014 (cuaderno auxiliar 760/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Renfro Campeche, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Atanacio Alpuche Marrufo. Secretario: Arturo Carrera López.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 24 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL.

AMPARO DIRECTO 121/2014. 26 DE JUNIO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ HERIBERTO PÉREZ GARCÍA. SECRETARIO: EDUARDO JAVIER SÁENZ TORRES.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Del estudio de los conceptos de violación.

Resulta infundado el motivo de disenso hecho valer, pero en suplencia de la queja habrá de otorgarse para efectos el amparo al quejoso ********** o ********** o **********, no así al diverso agraviado **********.

Cierto, los quejosos reclaman la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil once, emitida dentro del toca penal **********, por la Sexta Sala Unitaria Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En esa resolución se les condenó a nueve años y tres días de prisión, así como al pago de una multa de doscientas siete cuotas, equivalente a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos, al considerárseles responsables en la comisión de los delitos de:

- Robo calificado ejecutado con violencia;

- Robo ejecutado con violencia, y

- Daño en propiedad ajena.

Ahora bien, los artículos 364, 371 y 374, fracción VIII, estipulan:

"Artículo 364. Comete el delito de robo: el que se apodere de una cosa mueble, ajena, sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella."

"Artículo 371. Si el robo se ejecuta con violencia, a la pena que corresponda por delito de robo se agregarán de seis meses a doce años de prisión.

"Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas del concurso.

"La violencia de las personas se distingue en física o moral.

"Se entiende por violencia física en el robo, la fuerza material que para cometerlo se hace a una persona.

"Hay violencia moral cuando el ladrón amague o amenace a una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarlo."

"Artículo 374. Además de la pena que le corresponda por el robo, se aplicarán al delincuente de dos a seis años de prisión, en los siguientes casos:

"…

"VIII. Cuando el robo se cometa en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros o de cualquiera que preste un servicio similar. …"

Del primero de esos preceptos legales, la autoridad responsable advirtió los siguientes elementos constitutivos del delito de robo:

• Una acción de apoderamiento;

• Que la misma se realice respecto a una cosa mueble y ajena, y

• Que dicha acción se ejecute sin el consentimiento de quien tenga derecho a disponer de ella.

Asimismo, consideró que conforme al artículo 371 del Código Penal del Estado, se elevará la pena por el delito de robo, al que lo ejecute con violencia física o moral; y que en términos del numeral 374, fracción VIII, del mismo ordenamiento legal, se incrementará la sanción privativa de libertad, entre otros supuestos, cuando el robo se cometa en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros o de cualquiera que preste un servicio similar.

Por otra parte, el artículo 402 del Código Penal del Estado dice:

"Artículo 402. Cuando por cualquier medio se cause daño, destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de tercero, se aplicará la sanción de robo simple."

Del anterior numeral, la responsable desprendió los siguientes elementos constitutivos del ilícito de daño en propiedad ajena:

• Que se cause un daño, destrucción o deterioro de una cosa;

• Que dicho resultado recaiga en cosa ajena al activo o propia en perjuicio de un tercero; y

• Que dicha conducta se realice por cualquier medio.

Esos delitos y la responsabilidad penal de los quejosos en su comisión, atinadamente se tuvieron por demostrados con las pruebas siguientes:

I. Declaración ministerial del quejoso **********, en la que sustancialmente manifestó que el veintinueve de junio de dos mil nueve, estaba ebrio y drogado con su hermano **********, pero se les acabó el dinero y decidieron robar para conseguir, por lo cual se dirigieron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, y aproximadamente a las veinte horas abordaron un camión urbano de la ruta 312, donde observaron un muchacho que iba escuchando música en su teléfono celular, a quien su hermano se acercó y amagó con un cuchillo, mientras él lo desapoderaba del teléfono celular y setecientos pesos en efectivo.

Que al día siguiente, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, su hermano y él se dirigieron nuevamente a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde abordaron un camión urbano de la ruta 312, en el que amagaron al chofer, su hermano con un cuchillo casero y él con una navaja tipo "exacto", luego ambos tomaron el dinero en efectivo que llevaba el conductor.

Agregó, que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al encontrarse ambos nuevamente en la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, abordaron un diverso camión urbano de la ruta 312, en el que su hermano golpeó con el puño cerrado al chofer en el rostro y él lo amagó con un cuchillo, desapoderándolo aproximadamente de mil pesos.

Que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, alrededor de las catorce horas con cincuenta minutos, regresaron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde esperaron otro camión de la ruta 312, pero cuando pasó no se detuvo, por lo cual se molestaron y le lanzaron piedras a las ventanas.

Por último, mencionó que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, su hermano y él se dirigieron a la colonia La Alianza, donde abordaron otro camión urbano de la ruta 312 y, al encontrarse otra vez a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, su hermano amagó con un cuchillo al chofer y él lo golpeó con el puño cerrado, luego se apoderó del dinero en efectivo que llevaba.

II. Declaración ministerial del quejoso ********** o ********** o **********, en la que sustancialmente manifestó que el veintinueve de junio de dos mil nueve estaba ebrio y drogado con su hermano **********, y decidieron robar, por lo cual se dirigieron a la colonia **********, y aproximadamente a las veinte horas abordaron un camión urbano de la ruta 312, donde observaron un muchacho que iba escuchando música en su teléfono celular, a quien se acercó y amagó con un cuchillo, mientras su hermano lo desapoderaba del teléfono celular y setecientos pesos en efectivo.

Que al día siguiente, treinta de junio de dos mil nueve, querían consumir nuevamente droga, por lo cual decidieron robar y se dirigieron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde abordaron un camión urbano de la ruta 312, en el que amagaron al chofer, él con un cuchillo casero y su hermano con una navaja tipo "exacto", luego ambos tomaron el dinero en efectivo que llevaba el conductor, siendo alrededor de mil doscientos pesos.

Agregó, que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al encontrarse ambos nuevamente en la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, abordaron un diverso camión urbano de la ruta 312, en el que golpeó con el puño cerrado al chofer en el rostro y su hermano lo amagó con un cuchillo, desapoderándolo del efectivo que tenía.

Que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, alrededor de las catorce horas con cincuenta minutos, regresaron a la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, donde esperaron otro camión de la ruta 312, pero cuando pasó no se detuvo, por lo cual se molestaron y le lanzaron piedras a las ventanas.

Por último, mencionó que ese mismo día, treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, su hermano y él se dirigieron a la colonia La Alianza, donde abordaron otro camión urbano de la ruta 312 y, al encontrarse otra vez a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, amagó con un cuchillo al chofer y su hermano lo golpeó con el puño cerrado en el rostro, luego éste se apoderó del dinero en efectivo que llevaba el chofer.

Declaraciones que se catalogaron como confesiones, en términos de los artículos 219, fracción I, 222, 223, 310 y 311 del Código de Procedimientos

Penales del Estado, al considerarse que los declarantes eran personas mayores de edad, capaces de querer y entender, con pleno conocimiento de la causa, quienes manifestaron hechos propios y en su contra ante la autoridad investigadora, asistidos por defensor oficial, aunado a que no existía dato alguno que demostrara que hubieren sido incomunicados, intimidados, torturados o coaccionados de cualquier otra forma.

III. Denuncia del menor **********, en la que, en lo que importa, mencionó que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, mientras viajaba en el camión urbano de la ruta 312, por una calle de la colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, dos sujetos que al parecer estaban drogados se le acercaron, uno le colocó un cuchillo a la altura de las costillas y otro le arrebató su celular marca Motorola, así como setecientos pesos en efectivo.

IV. Denuncia de **********, en la que, en lo que interesa, señaló laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 21, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, al circular por la avenida ********** se subieron los ahora quejosos, momento en el que ********** sacó un cuchillo y le dijo "caite con la feria" y ********** sacó una navaja tipo "cúter", luego ambos se apoderaron del dinero que llevaba, siendo alrededor de mil doscientos pesos.

V. Denuncia de **********, en la que medularmente expresó laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 2, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, al circular por la avenida ********** se subieron los ahora quejosos, luego ********** lo golpeó con su mano en la boca y ********** lo amenazó con una especie de "puntilla", momento en el que ********** tomó el dinero que traía, siendo alrededor de mil pesos.

VI. Denuncia de **********, en la que fundamentalmente indicó laborar para la ruta 312 y tener asignado el microbús número 27, y que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cincuenta minutos, al estar trabajando observó a los ahora quejosos cuando le solicitaban que los abordara, pero una señora le refirió que momentos antes habían asaltado otra ruta, motivo por el que no se detuvo y los agraviados le lanzaron piedras, las cuales quebraron varias ventanas del automotor.

VII. Denuncia de **********, en la que sustancialmente expuso laborar en la ruta 312 y tener asignado el microbús número 10, y que el treinta

de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, los ahora quejosos abordaron la citada unidad de transporte urbano y sacaron objetos punzocortantes, pidiéndole que les diera el dinero, razón por la que les entregó alrededor de mil doscientos pesos.

Denuncias a las que se otorgó valor probatorio en términos de los artículos 128, 219, fracción V, 275, 310 y 323 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al estimarse que a los declarantes les constaban personalmente los hechos sobre los que declararon, sus declaraciones eran claras y precisas, sin dudas ni reticencias, y no se advertía dato alguno que demostrara que hubiesen sido obligados a declarar por la fuerza o miedo, o impulsados por engaño, error o soborno.

VIII. Declaración de **********, en la que, en esencia, expresó laborar en la ruta 312 y que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, llevaba entre quince y veinte pasajeros, cuando a la altura de la calle Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, los ahora quejosos abordaron el camión y rodearon a un joven que iba de pasajero, a quien amagaron con un cuchillo y lo desapoderaron de un teléfono celular y varios billetes.

Testimonio al que se confirió valor demostrativo en términos de los artículos 219, fracción V, 275, 310 y 323 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que el declarante era una persona mayor de edad, capaz de juzgar los hechos sobre los que declaró, los cuales le constaban personalmente; además de que su declaración era clara y precisa, sin dudas ni reticencias, y no existía dato alguno que demostrara que hubiese sido obligado a declarar por fuerza o miedo, o impulsado por engaño, error o soborno.

IX. Declaraciones de Juan Alejandro Arrambide Olivares y Jonathan Roberto Rodríguez Murillo, policías de General Escobedo, Nuevo León, en las que esencial y coincidentemente manifestaron que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las dieciséis horas, ********** los interceptó en la colonia ********** y les expresó que minutos antes había sido robado por los quejosos, razón por la que se abocaron a la búsqueda de dichos sujetos y los encontraron en la calle de Unidad Agraria y la avenida Unidad, alrededor de las cuatro horas con cinco minutos, encontrándole a uno de ellos una navaja tipo "exacto" y al otro un cuchillo con mango color café.

X. Declaraciones de Eloy Ortega Ibarra y Juan Francisco Limón Gámez, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en las que se concretaron a reseñar lo que les manifestaron los quejosos durante su detención.

XI. Declaración de **********, apoderado legal de "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", en la que hizo suya la denuncia formulada por **********.

Testimonios a los que se otorgó valor probatorio en términos de los artículos 324 y 325 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que, si bien a los declarantes no les constaban de manera personal los hechos atribuidos a los sujetos activos, lo cierto era que aportaban datos sucesivos a los eventos delictivos. Además, se estimó que el último justificó debidamente su carácter de apoderado legal de la empresa afectada.

XII. Diligencia de inspección ministerial de uno de julio de dos mil nueve, en la que se hizo constar la existencia de un cuchillo con mango de madera color café y una navaja tipo "exacto" con empuñadura de plástico color naranja.

XIII. Diligencias de inspección ministerial de uno de julio de dos mil nueve, en las que se hizo constar la existencia de los camiones relativos a la ruta 312, con números económicos 2, 21 y 10. Asimismo, se precisó que el camión con número económico 21 presentaba los siguientes daños: (1) ventana del lado derecho estrellada; (2) ventana de la puerta trasera quebrada; (3) ventana de la parte trasera estrellada y (4) vidrio parabrisas quebrado.

Inspecciones a las que se les confirió valor probatorio en términos de los artículos 219, fracción IV, 310, 321 y 322 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al considerarse que fueron practicadas con los requisitos de ley.

XIV. Dictamen de valuación de daños elaborado por Ubaldo Vázquez Rodríguez, perito adscrito a la Dirección de Criminalística y Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que concluyó que los daños ocasionados al microbús afecto tenían un costo de reparación de cinco mil trescientos pesos.

Experticia a la que se le confirió valor demostrativo conforme a los artículos 219, fracción III, 239 y 319 del Código de Procedimientos Penales del Estado, al estimarse que la persona que lo emitió contaba con conocimientos necesarios para ello, dado su carácter de perito en el área de valuación.

Medios de convicción que correctamente llevaron a la responsable a tener por demostrados los delitos motivo de la acusación, como la responsabilidad de los quejosos en su comisión.

Así es, la autoridad responsable de manera acertada concluyó que ese material probatorio ponía de manifiesto que el veintinueve de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las veinte horas, en el interior de una unidad de transporte urbano (ruta 312), los quejosos desapoderaron al menor ********** de setecientos pesos en efectivo y un celular marca Motorola K1, color negro, para lo cual uno de ellos lo amagó con un cuchillo.

Asimismo, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas, los quejosos abordaron el camión urbano con el número económico 21 de la ruta 312, en el cual amagaron con un cuchillo al chofer ********** y lo desapoderaron de mil doscientos pesos en efectivo.

Igualmente, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cuarenta minutos, los quejosos abordaron el diverso camión urbano con el número económico número 2 de la ruta 312, en el cual golpearon al chofer **********, lo amagaron con un cuchillo y lo desapoderaron de mil pesos.

De igual manera, el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las catorce horas con cincuenta minutos, en la avenida Unidad Magisterial, colonia **********, en General Escobedo, Nuevo León, los quejosos arrojaron piedras al camión urbano con el número económico 27 de la ruta 312, razón por la que le causaron daños en las ventanas.

Por último, que el treinta de junio de dos mil nueve, aproximadamente a las quince horas, los quejosos abordaron el camión urbano con número económico 10 de la ruta 312, en el que amagaron con objetos punzocortantes al chofer ********** y lo desapoderaron de mil doscientos pesos.

Hechos constitutivos de los delitos de robo y daño en propiedad ajena; el primero ejecutado con violencia física y moral, en tanto que los quejosos amagaron con armas punzocortantes a los pasivos, además de golpear a uno de ellos.

Asimismo, se considera acertado que se tuviera por acreditada la calificativa prevista en el artículo 364, fracción VIII, del Código Penal del Estado, en tanto que el robo perpetrado contra ********** se cometió en el interior de una unidad de servicio público de transporte de pasajeros.

Luego, en preparatoria, los quejosos omitieron verter declaración; sin embargo, como bien lo consideró la responsable, esa actitud pasiva no les

beneficia ni les perjudica, sólo constituye el uso de un derecho constitucional consagrado a su favor.

Ahora bien, como único concepto de violación, los quejosos alegan que existió detención prolongada en su perjuicio, por lo que debe demeritarse su confesión ministerial.

Resulta infundado lo anterior.

En efecto, de autos consta que la detención de los quejosos se verificó a las dieciséis horas con cinco minutos del treinta de junio de dos mil nueve, así como que fue puesto a disposición del Ministerio Público en General Escobedo, Nuevo León, a las veintidós horas con siete minutos de la propia data; por lo que transcurrieron alrededor de seis horas entre ambos momentos.

Sin embargo, se estima que ese tiempo que duró la detención antes de ser puestos a disposición de la autoridad investigadora, fue el racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias del caso.

Cierto, debe ponderarse que durante la detención se acercaron vecinos con los policías preventivos, quienes les manifestaron los asaltos que habían sufrido por parte de los detenidos; luego, se les informó a aquéllos el procedimiento a seguir para denunciar los robos que decían.

Después, los policías preventivos llevaron a los detenidos a practicarles el examen médico correspondiente, el cual se verificó a las dieciséis horas con treinta minutos, por parte del médico de guardia de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de General Escobedo, Nuevo León.

Seguidamente, los pusieron a disposición del Juez calificador en turno de aquella localidad, quien tuvo que recibir la versión de los policías y los afectados, para posteriormente elaborar el parte informativo y ponerlos a disposición del fiscal investigador, lo cual se concretó a las veintidós horas con siete minutos.

Esas acciones, sin duda, conllevan su tiempo a fin de entregar datos suficientes y bastos al Ministerio Público, junto con los detenidos, que faciliten la integración de la averiguación previa.

Así es, el examen médico sirve para justificar el estado físico de los detenidos en que se entregan al Ministerio Público; en tanto, el parte informativo suscrito por el Juez calificador facilita al fiscal la comprensión de los hechos que se atribuyen a los sujetos, pues se concreta el evento que se les reprocha.

En esas condiciones, se estima que el tiempo que duró la retención de los agraviados antes de ser puestos a disposición de la autoridad investigadora, fue el racionalmente necesario, en atención a las circunstancias propias del caso.

No pasa inadvertido que el agente del Ministerio Público de General Escobedo, Nuevo León, posteriormente puso a los detenidos a disposición del diverso fiscal investigador especializado en robos, con sede en Monterrey, concretamente a las once horas con veinte minutos del uno de julio de dos mil nueve; sin embargo, de modo alguno puede considerarse esta última hora, como lo pretenden los quejosos, como el momento en que fueron puestos a disposición de la autoridad investigadora, pues lo cierto es que desde antes estaban a disposición de la fiscalía, la que incluso recabó distintos medios de convicción, pero presumiblemente por cuestión de especialidad, luego remitió la indagatoria a su homólogo de esta ciudad.

De ahí lo infundado del concepto de violación.

Incluso, otro motivo para no desestimar la confesión ministerial es que ésta encuentra plena corroboración con las denuncias de los pasivos, al igual que con las diligencias de inspección practicadas sobre los objetos punzocortantes que se les localizaron; de modo que la autoridad responsable actuó con apego a derecho al otorgarles valor probatorio.

Así las cosas, es incuestionable que los apartados de delitos y responsabilidad resultan respetuosos de los derechos fundamentales de los agraviados, sin que al respecto se hayan hecho valer diversos conceptos de violación.

Por otra parte, debe decirse que la clasificación de los delitos ningún perjuicio causa a los quejosos, toda vez que se les sancionó con las penas mínimas aplicables; esto es, en términos del artículo 367, fracción I, del Código Penal del Estado.

En otro aspecto, la responsable actuó acertadamente al tener por actualizado un concurso real de delitos, de acuerdo con los artículos 36 y 76

del Código Penal del Estado, bajo el argumento de que los quejosos cometieron ilícitos en actos distintos, en los que no se ha pronunciado sentencia ejecutoria y no está prescrita la acción para perseguirlos.

En efecto, los artículos 36 y 37 del Código Penal del Estado estatuyen:

"Artículo 36. Hay concurso real o material cuando se cometen varios delitos en actos u omisiones distintos, si no se ha pronunciado antes sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no está prescrita."

"Artículo 37. Hay concurso ideal o formal, cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales conexas que señalen sanciones diversas, o varias veces una disposición penal de idéntico contenido."

De los anteriores preceptos legales, se advierte que existe concurso real cuando se cometen varios delitos en actos u omisiones distintos, siempre y cuando no se haya pronunciado antes sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no esté prescrita; en tanto, hay concurso ideal cuando con una sola conducta se violan varias disposiciones penales conexas que señalen sanciones diversas, o varias veces una disposición penal de idéntico contenido.

Ahora bien, en la especie, se sentenció a los quejosos porque en actos distintos robaron diversas unidades de transporte urbano y a un pasajero, además de dañar una de ellas al arrojarle piedras; hechos que configuran los delitos de daño en propiedad ajena y robo.

De lo que se sigue que los agraviados cometieron cada delito mediante una acción distinta, pues los robos se ejecutaron en circunstancias de tiempo, modo y lugar distintas, y los daños ocasionados a ********** de pasajeros no fue el medio para ejecutar alguno de esos robos, sino que resultó independiente.

En otras palabras, al cometer uno de los delitos bien pudieron abstenerse de ejecutar el otro, pues no son una consecuencia necesaria del primero.

En lo que corresponde a las sanciones impuestas al quejoso **********, de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos, se consideran ajustadas a derecho, al resultar acordes al

grado de culpabilidad que le fue determinado, entre la mínima y la media con tendencia a la primera, pues éste es correcto.

Cierto, después de ponderar los parámetros que contiene el artículo 47 del Código Penal del Estado de Nuevo León y de analizar los agravios sobre la graduación realizada por el Juez de Primera Instancia, la responsable estimó como atenuantes de **********, las siguientes:

1. Que es una persona joven;

2. Que es obrero;

3. El carácter de primo-delincuencia;

4. Que confesó los hechos.

Asimismo, estableció como agravantes de **********:

1. Su afección a las bebidas embriagantes y las drogas;

2. Que pudo lesionar a algún pasajero del camión urbano al que lanzó piedras;

3. La superioridad numérica para cometer los robos.

En ese tenor, los aspectos señalados por el Magistrado responsable, lo llevaron a concluir correctamente que el quejoso ********** tenía un grado de culpabilidad entre la mínima y la media con tendencia a la primera, por lo que se decidió que las penas a imponerle por la comisión de los delitos en estudio eran de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.

Cierto, se le impusieron siete meses y veintiséis días de prisión, así como multa de cuarenta y tres cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio del menor **********, estimado como ilícito de mayor entidad; pena privativa de libertad que se aumentó en un año, dos meses y dieciocho días, a raíz de la violencia moral, así como dos años y tres meses con motivo de la calificativa prevista en el artículo 374, fracción VIII, del Código Penal del Estado, lo que dio un total de cuatro años, un mes y catorce días de prisión, así como multa de cuarenta y tres cuotas.

Asimismo, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.

Igualmente, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.

De la misma forma, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de robo cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", el cual fuera denunciado por **********; pena privativa de libertad que por la violencia se aumentó en diez meses y nueve días, lo que dio un total de un año, cuatro meses y veintisiete días de prisión.

Por último, se le impusieron seis meses y veintiocho días de prisión, así como multa de cuarenta y un cuotas, respecto al delito de daño en propiedad ajena cometido en perjuicio de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil".

En consecuencia, resulta acertada la determinación de la responsable de imponer las penas a **********, de nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.

En cambio, en cuanto al quejoso ********** o ********** o **********, la autoridad responsable estableció que debían subsistir como atenuantes:

a) Su joven edad;

b) Que es obrero;

c) Que confesó los hechos.

Mientras que como agravantes señaló como tal:

1) Su afección a las bebidas embriagantes y las drogas;

2) Que cuenta con antecedentes penales;

3) Que pudo lesionar a algún pasajero del camión urbano que dañó;

4) Su superioridad numérica para ejecutar los robos.

Así, ponderando las circunstancias atenuantes y agravantes detectadas, la responsable le determinó un grado de culpabilidad entre la mínima y la media con tendencia a la primera, por lo que le impuso nueve años y tres días de prisión, así como multa de doscientas siete cuotas, equivalentes a diez mil setecientos cincuenta y tres pesos con sesenta y cinco centavos.

Sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado, no es dable tener como agravante en perjuicio del reo, la circunstancia de que hubiese sido sentenciado con anterioridad a los hechos que motivaron la causa de donde deriva el acto reclamado, de acuerdo a los siguientes razonamientos.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1562/2011, luego de realizar una interpretación de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, arribó al convencimiento de que los derechos protegidos en las disposiciones citadas permiten concluir que el "derecho penal del acto" es el modelo protegido por nuestra Constitución.

En dicha ejecutoria, sostuvo la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, era imprescindible incluir al artículo 1o. constitucional[1] como parte del

[1] "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de uni-

fundamento constitucional del paradigma del derecho penal del acto. Esto, en virtud de que la dignidad humana protegida por dicha disposición es la condición y base de todos los derechos humanos.

Agregó, que la Constitución al proteger la autonomía de la persona, rechaza un modelo de Estado autoritario en el que éste puede proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. El régimen constitucional mexicano –sostuvo– respeta las diferencias entre particulares y prohíbe que los órganos del Estado promuevan coactivamente un determinado modelo de virtud personal.

Asimismo, señaló que la autonomía de la persona, protegida por el artículo 1o. constitucional, confirma que el derecho penal no puede juzgar personalidades, sino que se limita a juzgar actos (afirmación que enlazó con el principio de legalidad y taxatividad, protegido por el artículo 14 de la Constitución Federal).

Sostuvo también, que el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela del modo más claro y literal posible, que la materia susceptible de ser prohibida por el derecho penal se refiere exclusivamente al delito, previamente establecido en ley; además, la definición del delito como conducta típica, antijurídica y culpable, conduce a la conclusión de que nuestro orden constitucional prohíbe que algo distinto a ello (una actitud o una personalidad) pueda ser motivo de punición.

La protección constitucional del principio de legalidad, confirma la convicción de que los órganos del Estado Mexicano se hayan vinculados a escindir los juicios jurídicos de deber ser, de los juicios morales de deber ser. Sólo aquel acto que se encuentra prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción.

---

versalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Respecto al texto del artículo 18 de la Constitución Federal,[2] la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia señaló que esa disposición es resultado de la reforma de justicia penal de dieciocho de junio de dos mil ocho, el cual anteriormente disponía: "Los gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.".

Con base en ello, señaló que el abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción" tenían un impacto crucial en sus conclusiones, ya que se readapta a quien es inadaptado, de modo que el hecho de que la Constitución elimine la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, ayuda a fundar la convicción de que nuestro sistema actual se decanta por un derecho penal sancionador de actos, de delitos y no de personalidades.

Además, que el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del Constituyente Permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito.

Como sustento de sus afirmaciones, citó el contenido de una de las manifestaciones expresadas en la discusión de doce de diciembre de dos mil siete en la Cámara de Diputados (debate que integra el proceso de reforma constitucional en materia penal de junio de dos mil ocho), en la que señala:

"… Otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad."

---

[2] "Artículo 18. … El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto."

Finalmente, del análisis del artículo 22 constitucional,[3] se sostuvo que la prohibición de penas inusitadas claramente reafirmaba la convicción de que nuestro Ordenamiento Constitucional prohíbe cualquier clase de estigmatización contra la persona que ha cometido un delito y, por supuesto, la generación de consecuencias punitivas en razón de una etiqueta a la personalidad.

Concluyó que, cualquier pena que basa su justificación en la personalidad del sujeto, es inusitada porque va más allá de aquello que el mismo artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que es posible penar, a saber: hechos concretos, subsumibles en normas penales definidas previamente por un legislador. De este modo, un ejemplo de pena inusitada es aquella que penaliza al sujeto por quien es, no por lo que ha hecho –cuestión claramente contraria a la lógica del derecho penal del acto–.

Tales razonamientos se encuentran reflejados en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2014 (10a.) y 1a./J. 19/2014 (10a.), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, publicadas el veintiuno y catorce de marzo de este año, respectivamente, que a la letra dicen:

"DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).—A fin de determinar por qué el paradigma del derecho penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede sancionar la ausencia de determinadas

[3] "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado."

cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas (no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 constitucional. El abandono del término 'readaptación' y su sustitución por el de 'reinserción', a partir de la reforma constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término 'delincuente' también exhibe la intención del constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un 'derecho penal de autor', permisivo de la estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición."

"DERECHO PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS.—De la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo, y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que nuestro orden jurídico se decanta por el paradigma conocido como 'derecho penal del acto' y rechaza a su opuesto, el 'derecho penal del autor'. Entender las implicaciones de ello, requiere identificar sus rasgos caracterizadores y compararlos entre sí. El modelo del autor asume que las características personales del inculpado son un factor que se debe considerar para justificar la imposición de la pena. Al sujeto activo del delito (que en esta teoría suele ser llamado delincuente) puede adscribírsele la categoría de persona desviada, enferma, desadaptada, ignorante, entre otros calificativos. Esta categorización no es gratuita: cumple la función de impactar en la imposición, el aumento o el decremento de la pena; incluso permite castigar al sujeto por sus cualidades morales, su personalidad o su comportamiento precedente frente a la sociedad. Así, la pena suele concebirse como un tratamiento que preten-

de curar, rehabilitar, reeducar, sanar, normalizar o modificar coactivamente la identidad del sujeto; también como un medio que pretende corregir al individuo 'peligroso' o 'patológico', bajo el argumento de que ello redunda en su beneficio. Por ello, el quántum está en función del grado de disfuncionalidad que se percibe en el individuo. Ese modelo se basa en la falaz premisa de que existe una asociación lógico-necesaria entre el 'delincuente' y el delito, para asumir que quien ha delinquido probablemente lo hará en el futuro, como si la personalidad 'peligrosa' o 'conflictiva' fuera connatural a quien ha cometido un acto contrario a la ley. Además, el derecho penal de autor asume que el Estado –actuando a través de sus órganos– está legitimado para castigar la ausencia de determinadas cualidades o virtudes en la persona (o, por lo menos, utilizarla en su perjuicio). En cambio, el derecho penal del acto no justifica la imposición de la pena en una idea rehabilitadora, ni busca el arrepentimiento del infractor; lo asume como un sujeto de derechos y, en esa medida, presupone que puede y debe hacerse responsable por sus actos. Por ello, la forma en que el individuo lidia en términos personales con su responsabilidad penal, queda fuera del ámbito sancionador del Estado."

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llegado a la conclusión de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al proteger el principio de legalidad, acoge el paradigma del derecho penal del acto, pues en el caso Fermín Ramírez vs. Guatemala, determinó que la introducción en el texto penal de la peligrosidad del agente, como criterio para la calificación típica de los hechos y la aplicación de ciertas sanciones, era incompatible con el principio de legalidad criminal y, por ende, contrario a la Convención, específicamente, a lo dispuesto por su artículo 9 (que protege el principio de legalidad).[4]

En los párrafos 94 y 95 de dicha sentencia se encuentra el principal razonamiento de la Corte en este sentido:

"94. En concepto de esta Corte, el problema que plantea la invocación de la peligrosidad no sólo puede ser analizado a la luz de las garantías del debido proceso, dentro del artículo 8 de la convención. Esa invocación tiene mayor alcance y gravedad. En efecto, constituye claramente una expresión

[4] "Artículo 9. Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello."

del ejercicio del *ius puniendi* estatal sobre la base de las características personales del agente y no del hecho cometido, es decir, sustituye el derecho penal del acto o de hecho, propio del sistema penal de una sociedad democrática, por el derecho penal de autor, que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos de mayor jerarquía.

"95. La valoración de la peligrosidad del agente implica la apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que el imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la imputación por los hechos realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo –con pena de muerte inclusive– no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es. Sobra ponderar las implicaciones, que son evidentes, de este retorno al pasado, absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. ..."

En conclusión, de acuerdo con la interpretación sistemática de los artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ordenamiento constitucional mexicano se decanta por el paradigma de "derecho penal del acto".

Ahora bien, siendo nuestra Constitución Federal la norma superior de todo el ordenamiento jurídico del país, cuyos contenidos funcionan como límites materiales del resto de las normas del ordenamiento, es incuestionable que toda disposición que se aparte de sus postulados, debe ser expulsada del sistema.

En relación con ello, es pertinente mencionar que mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1o. de la Constitución, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano debían ejercer el control de constitucionalidad, pues a partir de la misma todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano sea parte, lo que también comprende el control de convencionalidad.

Ahora bien, el ejercicio de ese control de convencionalidad por parte de las autoridades del Poder Judicial, según sostuvo el Tribunal Pleno de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al fallar el expediente varios 912/2010, debe seguir las siguientes directrices: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

Lo señalado se encuentra en la tesis P. LXIX/2011 (9a.), de rubro y texto:

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO* EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.—La posibilidad de inaplicación de leyes por los Jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad *ex officio* en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los Jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los dere-

chos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."[5]

Atento a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Colegiado procede a realizar un control de convencionalidad *ex officio* sobre el artículo 47, fracción V, del Código Penal vigente en el Estado, para determinar si es correcto incluir los antecedentes penales del inculpado como parte del estudio de la individualización de la pena.

De este modo, al realizar una interpretación conforme en sentido amplio del precepto legal en cita, a la luz de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, concretamente en sus artículos 1o., 14, tercer párrafo, 18, segundo párrafo y 22, primer párrafo, de cuyo análisis sistemático se dedujo que el ordenamiento constitucional mexicano se decanta por el paradigma de "derecho penal del acto", es factible arribar a la convicción de que el numeral en consulta, al señalar que el Juez al momento de graduar la pena a imponer al acusado, debe considerar "sus antecedentes personales", está haciendo referencia únicamente a aquellos datos inherentes a la persona del autor del delito, que permitan formar una idea de los motivos que lo impulsaron o llevaron a delinquir, como pudiera ser su estado familiar, psicológico, de salud, su nivel socio económico, cultural, laboral, creencias religiosas, entre otros, pero siempre que éstos hayan influido en la realización del delito.

Pues no debe sancionarse igual, por ejemplo, a quien roba para sufragar los gastos médicos de su hijo gravemente enfermo, que aquel que lo hace para hacerse de dinero que le permita disfrutar una vida licenciosa; de este modo, los antecedentes personales del inculpado se convierten en un factor que permite al juzgador conocer los motivos que orillaron o motivaron a una persona a delinquir y así, contar con mejores elementos para graduar de manera justa la pena que le corresponde.

En mérito de lo señalado, no es factible interpretar dicho precepto en el sentido de considerar a los antecedentes penales del acusado como un factor para agravar la pena, pues aceptar esta postura implicaría sancionar al reo no por el delito que cometió, sino por quien es o lo que ha hecho en el pasado, lo cual es contrario a los postulados de nuestro Ordenamiento Supremo.

Esta conclusión, además, es congruente con el propio texto del artículo 47, fracción V, del Código Penal cuando señala que los antecedentes perso-

---

[5] Visible en la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011, página 552.

nales del activo, entre otros datos, serán tomados en cuenta al momento de individualizar la sanción, en la medida que hayan influido en la realización de la conducta, calidad de la que no gozan los "antecedentes penales", pues se considera que éstos, en todo caso, serán útiles para verificar si la prevención y readaptación han funcionado en él, pero en modo alguno constituyen una circunstancia que pueda tener inferencia para la comisión de un nuevo ilícito.

En esas condiciones, es claro que de acuerdo con una interpretación conforme en sentido amplio del artículo 47, fracción V, del Código Penal local, la conducta delictiva previa del inculpado no debe considerarse como parte de sus antecedentes personales, ya que la individualización de las penas y medidas de seguridad, debe determinarse con base en los aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello.

Entonces, se reitera, los antecedentes penales no deben considerarse para graduar la pena o sanción, pues ésta ha de establecerse con base en la culpabilidad del acto concreto por el que se juzga. Lo anterior no implica que, para efectos de la punición, se dejen de estimar los antecedentes penales en los casos de reincidencia.

Bajo ese contexto, se estima incorrecto el actuar de la Sala responsable al considerar como un factor agravante de la culpabilidad del reo ********** o ********** o **********, el hecho de que cuente con antecedentes penales, por lo que habrá de concederse el amparo solicitado a efecto de que se repare esta violación a sus derechos fundamentales.

Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 110/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:

"CULPABILIDAD. PARA DETERMINAR SU GRADO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES DEL PROCESADO.—A través de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1994, al artículo 52 del entonces Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, para efectos de la individualización de la pena, se abandonó el criterio de peligrosidad adoptándose el de determinación del grado de culpabilidad, acorde con el cual la pena debe imponerse por lo que el delincuente ha hecho y no por lo que es o por lo que se crea que va a hacer, pues se trata de un derecho penal de hecho y no de autor. Por otra parte, el artículo 51 del Código Penal Federal (vigente) establece la regla general para la aplicación de san-

ciones, al prever que los juzgadores deben tener en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución y las peculiares del procesado; en tanto que el numeral 52 del mismo ordenamiento prevé la regla específica para la individualización de sanciones, señalando los elementos que los juzgadores deben considerar para realizarla, esto es, la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad, así como los factores que deben tener en cuenta a fin de individualizar las penas y medidas de seguridad con base en dichos elementos. Ahora bien, las circunstancias exteriores de ejecución, referidas en la regla general de aplicación de sanciones corresponde, en la regla específica de individualización de penas y medidas de seguridad, a los factores por los que se precisa la gravedad del ilícito, los cuales se contienen en las fracciones I a IV de dicho artículo 52, y las circunstancias peculiares del delincuente, también señaladas en la mencionada regla general, en la individualización de penas y medidas de seguridad, se observan al verificarse los factores contenidos en sus fracciones V a VII, y así fijar el grado de culpabilidad del agente. Así, son circunstancias peculiares del procesado, su edad, educación, ilustración, costumbres, condiciones sociales y económicas (fracción V); y si bien es cierto que los motivos que lo impulsaron a delinquir (fracción V), su comportamiento posterior al hecho ilícito (fracción VI) y las demás condiciones en que se encontraba en el momento de cometer el delito (fracción VII), pueden ser circunstancias peculiares reveladoras de su personalidad –que pudieran conducir a establecer que la individualización de las penas y medidas de seguridad atiende a un derecho penal de autor–, también lo es que tal revelación de la personalidad únicamente puede considerarse en relación con el hecho cometido, ya que la individualización de las penas y medidas de seguridad, con base en el grado de culpabilidad, implica la relación del autor del hecho ilícito con éste, lo cual conduce a establecer dicho grado de culpabilidad con base en aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso, sin que deban considerarse circunstancias ajenas a ello. Por tanto, los antecedentes penales no pueden incluirse entre los factores que los juzgadores deben atender para determinar el grado de culpabilidad, pues no tienen la naturaleza de circunstancias peculiares del delincuente, ya que no corresponden a una característica propia de él, además de que entre esos factores no se hace alusión a conductas anteriores al hecho delictivo."[6]

Por las anteriores razones, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que había sustentado con anterioridad, en el sentido de que era factible considerar los antecedentes penales para efectos de la individualización de la pena,

[6] Visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, Tomo 1, febrero de 2012, página 643.

por considerar que el mismo no es compatible con el contenido actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Similar criterio sostuvo este órgano colegiado al resolver los juicios de amparo directo 46/2014 y 449/2013, en sesiones de dos y quince de mayo de dos mil catorce.

Finalmente, al existir sentencia de condena, resulta acertado que el ad quem los haya condenado a pagar solidaria y mancomunadamente a favor de la persona moral denominada "Unión de Permisionarios Ruta 312, Sociedad Civil", ocho mil setecientos pesos; así como mil quinientos pesos en favor del menor **********, por concepto de reparación del daño.

Se afirma lo anterior, pues como de manera correcta dijo la responsable, tres mil cuatrocientos pesos corresponden a los robos de la empresa; cinco mil trescientos pesos a los daños ocasionados al camión urbano; setecientos pesos que le robaron al menor y ochocientos pesos al valor intrínseco del celular que le robaron a este último.

Asimismo, se estima que la determinación de dejar para ejecución de sentencia la cuantificación de los gastos por tratamiento psicológico en favor de la parte afectada, ningún perjuicio les causa a los quejosos.

Bajo ese contexto, es evidente que deviene ajustada a derecho la condena impuesta a los acusados por concepto de reparación del daño.

En esa tesitura, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso **********.

En tanto, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal al agraviado ********** o ********** o **********, para el efecto de que:

1. La autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y dicte una nueva, en la que reitere la demostración de los delitos, su clasificación legal, la plena responsabilidad que en su comisión le resulta al justiciable y la condena a la reparación del daño; y,

2. Posteriormente, en el capítulo atinente a la individualización de la pena, prescinda de considerar como circunstancia agravante de culpabilidad los antecedentes penales que tiene el quejoso, individualice de nueva cuenta su grado de culpabilidad y proceda a imponerle las penas correspondientes, sin agravar su situación actual.

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, se resuelve:

PRIMERO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO.—Para los efectos precisados en la parte final de esta sentencia, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** o ********** o **********, contra la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en la parte considerativa de este fallo.

Notifíquese; con testimonio autorizado de esta resolución devuélvanse los autos a su lugar de procedencia y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, Juan Manuel Rodríguez Gámez, José Heriberto Pérez García y Ramón Ojeda Haro, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL. Acorde con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los artículos 1o., 14, párrafo tercero, 18, párrafo segundo, y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el "derecho penal del acto" es el modelo protegido por nuestro Magno Ordenamiento, lo cual se encuentra reflejado en las jurisprudencias 1a./J. 19/2014 (10a.) y 1a./J. 21/2014 (10a.), publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* los viernes 14 y 21 de marzo de 2014, así como en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, páginas 374 y 354, de títulos y subtítulos: "DERECHO

PENAL DEL AUTOR Y DERECHO PENAL DEL ACTO. RASGOS CARACTERIZADORES Y DIFERENCIAS." y "DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO).", respectivamente. En esa medida, al ejercer un control de convencionalidad *ex officio* sobre el artículo 47, fracción V, del Código Penal para el Estado de Nuevo León; esto es, interpretándolo a la luz del orden jurídico y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, favoreciendo en todo momento la protección más amplia al gobernado, se concluye que dicho numeral, en la porción normativa que establece que el Juez, al momento de graduar la pena, debe considerar "los antecedentes personales del sujeto activo" es inconvencional, pues propicia sancionar al reo no por el delito que cometió, sino por quien es o lo que ha hecho en el pasado, lo cual es contrario a los postulados del "derecho penal de acto", por el cual se decanta el Ordenamiento Supremo; conclusión que, además, es congruente con el propio artículo, que señala que dichos antecedentes serán tomados en cuenta en la medida en que hayan influido en la realización de la conducta; de ahí que el comportamiento delictivo previo del inculpado, no deba considerarse como factor de culpabilidad, ya que la individualización de las penas y medidas de seguridad, deben determinarse sólo con base en los aspectos objetivos que concurrieron al hecho delictuoso.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
IV.1o.P. J/4 (10a.)

Amparo directo 46/2014. 2 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretario: Ernesto Vladimir Tavera Villegas.

Amparo directo 449/2013. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: David Acosta Huerta.

Amparo directo 139/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretario: Víctor Hugo Herrera Cañizales.

Amparo directo 6/2014. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Ojeda Haro. Secretario: David Acosta Huerta.

Amparo directo 121/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretario: Eduardo Javier Sáenz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).

AMPARO DIRECTO 330/2013. 14 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE ENRIQUE EDEN WYNTER GARCÍA. SECRETARIO: LUIS ARMANDO COAÑA Y POLANCO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Estudio de fondo: Los conceptos de violación que vierte **********, son infundados, inatendibles y fundados, estos últimos, suplidos en su deficiencia como autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, según pasa a exponerse.

Constituye materia de reclamo en este amparo, la sentencia de segundo grado que la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán pronunció en el toca **********, relativo al recurso de apelación que el hoy quejoso interpuso para impugnar el fallo condenatorio pronunciado en el proceso incoado en su contra como penalmente responsable de daño en propiedad ajena (2) y lesiones (2) cometidos en forma culposa con motivo del tránsito de vehículos.

En la sentencia materia de reclamo, el tribunal de alzada responsable confirmó el sentido condenatorio del fallo apelado, modificándolo sólo en cuanto al pago a la indemnización a ********** (a quien igualmente se nombró en la causa penal como ********** o **********), por la pérdida del falange distal del primer ortejo (dedo) del pie izquierdo, cuyo monto redujo de treinta y siete mil novecientos cuarenta y uno mil pesos con setenta y cinco centavos ($37,941.75), a tres mil setecientos noventa y cuatro pesos con diecisiete centavos ($3,794.17), quedando firmes por ende las sanciones impuestas referentes a cinco meses y diecisiete días de prisión, trece días-multa, equivalentes a seiscientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos ($643.50), el pago de la reparación por los daños materiales y las lesiones producidas y la amonestación.

Del análisis a las constancias del proceso penal de origen se obtiene que la conducta culposa atribuida al hoy impetrante **********, consistió en que aproximadamente a las **********, violó el deber de cuidado que personalmente le incumbía como conductor del vehículo que transportaba perso-

nas, marca "**********", modelo **********, tipo **********, color ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, pues al estar transitando de noreste a suroeste sobre el carril de circulación de la carretera estatal **********-********** (de 2 carriles útiles de circulación), y llegar a la altura del kilómetro 10+800, perdió el control del vehículo, debido al exceso de velocidad con el que conducía, e invadió el carril opuesto de circulación de la misma carretera, lo que ocasionó que colisionara con el camión de transporte de pasajeros marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación ********** del servicio público federal, que transitaba en sentido opuesto, lo que produjo alteraciones en la salud que dejaron huella material en la humanidad de ********** y de **********, y daños materiales en ambos vehículos.

Pues bien, contrario a lo que se alega en los conceptos de violación, en el dictado de la resolución reclamada se advierte una correcta valoración de los elementos de prueba que conforman el sumario penal de origen, pues justipreciados conforme a las reglas que sobre el particular prevé el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, demuestran en su integridad el delito culposo que produjo daño en propiedad ajena (2) y lesiones (2), previsto por los artículos 350, párrafo primero y 357, en relación con el 9, todos del Código Penal de esa entidad, vigente en la época del evento (enero de 2008), que dicen:

"Artículo 350. Cuando por cualquier medio distinto de los anteriores, se causen daños, destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en perjuicio de tercero, se impondrán las sanciones del robo simple ... .

"..."

"Artículo 357. Para los efectos de este código, bajo el nombre de lesión se comprenden, no solamente las heridas, excoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones y quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si estos efectos son producidos por una causa externa."

"Artículo 9. Obra culposamente quien no provee el cuidado posible y adecuado para no producir o, en su caso evitar, la posible lesión típica del bien jurídico."

Como se advierte, un delito causado por imprudencia o a título de culpa se actualiza cuando la acción u omisión desprovista de cuidado consti-

tuye el factor determinante para la producción del daño causado; es decir, se requiere demostrar que el agente produjo el resultado típico previsto en la norma penal, por haber incurrido en imprevisión de lo que humanamente es previsible (falta de reflexión, negligencia, falta de cuidado e imprudencia).

En efecto, al apreciarse los datos de convicción en que se apoyó la Sala mixta responsable para sustentar el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, se advierte que en su conjunto patentizan que el resultado típico que se atribuye al quejoso fue producto de una acción desprovista de cuidado de su parte como conductor de un vehículo automotor que transportaba personas.

Es cierto, como adujo la Sala responsable, las contusiones en el tercio proximal del brazo derecho y cara anterior de la rodilla derecha, así como la pérdida del falange distal del primer dedo del pie izquierdo, de las querellantes ********** y **********, y los daños materiales a los vehículos marca "**********", modelo **********, tipo ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, y marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación **********, como se obtiene de los certificados relativos al examen de integridad física realizados a las nombradas ofendidas por dos galenos del Servicio Médico Forense de la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (fojas 43, 75, 120 y 246 del expediente de la causa penal de origen), así como de las inspecciones ministeriales practicadas a esos vehículos (foja 12), fueron producto de la acción desprovista de cuidado desplegada por el aquí quejoso, según el parte de tránsito terrestre, suscrito por un perito en la materia de la Secretaría de Seguridad Pública de la misma entidad (fojas 2 a 4), así como la querella que la nombrada ********** formuló ante la autoridad investigadora, en la que dijo que aproximadamente a las ********** viajaba en el interior del camión marca "**********", color ********** y placas de circulación **********, que sirve de transporte al personal que labora en la fábrica de costura denominada "**********", que transitaba sobre la carretera estatal **********-********** con rumbo a este último poblado, y al aproximarse al kilómetro 10+800, el conductor del vehículo ********** (quejoso) perdió el control del camión e invadió el carril opuesto de circulación, colisionando con el camión marca "**********", color blanco y placas de circulación **********, lo que ocasionó se lesionara (fojas 39 y 40) y la querella de ********** quien reiteró la versión anterior, añadiendo que el quejoso conducía con exceso de velocidad y que dejó el volante del camión antes de la colisión (fojas 71 y 72); manifestaciones que están robustecidas con las diligencias en las que la autoridad ministerial constató la existencia de las lesiones ocasionadas a las nom-

bradas ofendidas ********* y ********* (fojas 40 y 72), con las querellas formuladas por propietarios de los vehículos dañados ********** (a través de su gerente general) y ********** (fojas 23, 24, 49 y 50); con los testimonios vertidos ante la autoridad ministerial por ********** y **********, quienes de manera coincidente señalaron las circunstancias de tiempo, modo y ejecución del hecho imputado, que conocieron directamente como pasajeros del camión que conducía el hoy impetrante (fojas 80, 81, 83 y 84), así como con la declaración preparatoria del ahora quejoso, en la que, asistido de un defensor de oficio, expuso ante el Juez de la causa que el día del evento delictivo sí condujo el camión marca "**********", color **********, pero no con exceso de velocidad, y que todo se debió a que trató de eludir una bicicleta de la que no se percató porque ésta no llevaba "reflejantes", y porque el camión con el que colisionó transitaba con luces altas, y que al frenar para evitar la bicicleta, el volante lo jaló hacia su izquierda invadiendo el carril contrario de circulación (fojas 157 y 158), de la que se colige que fue el ahora inconforme quien invadió la vía de preferencia en la que transitaba el vehículo marca "**********", color blanco y placas de circulación **********.

Circunstancias de realización que, aunadas a las diligencias de careos que el quejoso sostuvo con la ofendida ********** (fojas 292, 293) y con los testigos de cargo ********** y ********** (fojas 295 a 299), en las que tanto aquélla como éstos ratificaron sus primigenias declaraciones, justifican el nexo de causalidad entre la conducta culposa desplegada por el ahora impetrante y los daños resultantes, estimándose aptas para concluir que la conducta que desplegó encuadra en el marco de ilicitud establecido en la descripción típica contenida en la norma punitiva que la prevé, pues se reitera, en su conjunto hacen prueba plena y demuestran en su integridad la materialidad del injusto imprudencial de que se trata, como la directa intervención del ahora impetrante ********** en su ejecución.

Así las cosas, es incuestionable que el cuadro procesal conformado con los medios de convicción reseñados, debidamente entrelazados, permite concluir que el accidente de mérito fue producto de una conducta desprovista de cuidado de parte del ahora quejoso como conductor de un vehículo motorizado en una vía pública y, por ende, que ocasionó lesiones a dos personas y daños materiales a dos vehículos; lo cual sirve de base legal para sostener el fallo condenatorio reclamado.

En el contexto anotado, contrario a lo que el quejoso afirma, no se conculcó en su perjuicio ninguno de los derechos fundamentales que invoca,

en la medida en que el proceso penal se siguió correctamente por todas sus fases procesales y se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, ya que fue llamado desde la averiguación previa; estuvo asistido jurídicamente; tuvo oportunidad de ofrecer medios probatorios y también la Sala responsable observó los principios reguladores de valoración de pruebas, dado que apreció y justipreció debidamente el material convictivo aportado a la causa penal de origen, e igualmente precisó las razones y motivos que adecuan la conducta que desplegó en la hipótesis legal considerada como típica en la legislación punitiva aplicable, con lo cual, en ese solo aspecto, el acto reclamado se fundó y motivó adecuadamente, pues en ese sentido, la aludida responsable ajustó su quehacer a las regulaciones adjetivas del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán.

Así las cosas, los datos del sumario reseñados, analizados y entrelazados, conducen a determinar, sin prueba en contrario, que con desacato del deber jurídico impuesto en la norma penal, ********** violó el deber de cuidado que personalmente le incumbía como conductor de un vehículo automotor.

Sin que obste en contrario que en su declaración preparatoria, en la que admitió haber conducido el vehículo que intervino en el evento delictivo, haya introducido elementos dirigidos a excluir la responsabilidad en la que incurrió, tales como que el siniestro ocurrió porque trató de eludir una bicicleta de la que no se percató porque ésta no llevaba "reflejantes", y porque el camión con el que colisionó transitaba con luces altas, pues se torna en una versión defensiva aislada que, al estar contradicha con otros medios de prueba que incriminan su conducta y logran acreditar en la causa la antijuricidad del hecho y la culpa de su parte, carecen de eficacia demostrativa.

Por tanto, la manifestación de rechazo en su directa responsabilidad en el delito, no permite dar el alcance jurídico que el quejoso pretende en el sentido de estimar que existe insuficiencia probatoria, pues contrario a ello, el conjunto de los datos que obran en la causa penal de origen conducen a la certeza de las imputaciones hechas: aunado a que el impetrante soslaya que en materia penal no existe compensación de culpas y, por tanto, la culpa ajena no exonera la propia; de ahí que, los datos que introdujo en su declaración preparatoria, no pueden constituir una causa que lo excluya del reproche penal al imputado.

Sin que pasen inadvertidas las declaraciones testimoniales de ********** y de **********, quienes ante el Juez natural refirieron que un día antes del

accidente de que se viene hablando (29 de enero de 2008) escucharon que el quejoso informó, a quien aparentemente suponen era el dueño del camión que condujo, que no servían los frenos ni las luces (fojas 261, 262 y 274); habida cuenta que no pueden generar convicción para excluir la plena responsabilidad del impetrante del amparo en el hecho que se le imputa, ya que omiten proporcionar elementos que justifiquen que el oferente observó el deber de cuidado al que estaba obligado como conductor del autobús –que es en sí lo que se tornaría favorable a su defensa– y, por el contrario, el hecho de que este último vehículo hubiere tenido los desperfectos mecánicos a que alude, sólo corrobora que el activo procedió con negligencia al conducirlo en una vía pública y con personas a bordo en tales condiciones.

En diverso concepto de violación, ********** refiere que el dictamen pericial en materia de valuación no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 149 del código de enjuiciamiento penal de la entidad, pues no es dable considerar que los peritos valoraron debidamente los deterioros causados a los vehículos involucrados en el hecho de tránsito, ya que omitieron relacionar las operaciones que practicaron siendo un dictamen dogmático, actualizándose por ende la hipótesis de monto indeterminado que prevé el artículo 334 del Código Penal del Estado de Yucatán.

Es inatendible el alegato expuesto, en la medida en la que no fue el dictamen de evaluación que emitieron dos peritos en la materia de la entonces denominada Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán (fojas 87 y 88), el que se tuvo en cuenta en la causa penal de origen para condenar al pago de la reparación por los daños ocasionados a los vehículos marca "**********", modelo **********, tipo ********** y placas de circulación ********** del Estado de **********, y marca "**********", tipo **********, modelo **********, y placas de circulación **********, sino los presupuestos de reparación que cada uno de los afectados por tales deterioros exhibió en el proceso para acreditar el menoscabo que sufrieron en su patrimonio.

De ese modo, no podía actualizarse la figura de monto indeterminado prevista en el numeral 334 del Código Penal local, pues como ya se apuntó, el monto de los daños materiales resultantes del accidente de mérito, se determinó con base en documentos diversos que la responsable estimó aptos para fijar el monto de los gastos que deben sufragar los ofendidos por tales daños.

En consecuencia, se estima jurídicamente correcta la determinación de la Sala Colegiada Mixta responsable atinente a confirmar la condena al pago de ochenta y nueve mil setecientos setenta pesos ($89,770.00), y de cuarenta

y nueve mil quinientos sesenta pesos ($49,560.00) en concepto de reparación del daño por los desperfectos materiales ocasionados a los aludidos vehículos, que el Juez a quo impuso en el fallo de primer grado en favor de los propietarios de los mismos, pues aun cuando no abundó respecto de la ponderación que realizó aquel juzgador para calificar o estimar el valor probatorio de los diversos instrumentos que versan sobre el monto del daño causado que obran en el sumario, tales como el antecitado dictamen de evaluación y los presupuestos y documentos que cada uno de los propietarios afectados exhibió al afecto, se cumple con el requisito de debida motivación que exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues materialmente hizo suya aquella ponderación cuando consignó que el Juez de origen fue atinado en su decisión, que no existe deficiencia de la defensa que suplir al respecto, y que ese juzgador consideró las disposiciones que contemplan los artículos 33 y 34 del código punitivo local (foja 80 del toca de apelación).

Lo anterior obedece a que la reclamada constituye una resolución jurisdiccional de segunda instancia en la que es jurídicamente posible tener por satisfecha la debida motivación, cuando el tribunal de apelación se pronuncia sobre los planteamientos hechos por las partes haciendo expresa referencia a otras cuestiones previamente dilucidadas, incluso en la propia sentencia primaria, pues ello dota de eficacia constitucional al acto de autoridad de segunda instancia en aras de la concisión y brevedad de sus resoluciones.

Igualmente correctas resultan la condena al pago a la reparación del daño ocasionado por las lesiones inferidas en el accidente a ********** y a **********, así como la determinación de fijar el monto en la etapa de ejecución del fallo reclamado, pues contrario a lo que alega el quejoso, ello no le irroga perjuicios, habida cuenta que se trata de una medida dirigida a asegurar de manera puntual y suficiente la protección a los derechos fundamentales de las víctimas en función de la facultad que la Carta Magna les confiere a obtener una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, como dispuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 145/2005, publicada en la página 170 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, que dice:

"REPARACIÓN DEL DAÑO. ES LEGAL LA SENTENCIA CONDENATORIA QUE LA IMPONE AUNQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE PUEDA FIJARSE EN EJECUCIÓN DE ÉSTA.—El artículo 20, apartado B, fracción IV, de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como garantía individual de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal; destacando la circunstancia de que el Constituyente reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de los daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal debe tutelarse como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, a fin de reconocerle la misma importancia a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. De lo anterior se concluye que la reparación del daño tiene el carácter de pena pública y, por ende, al ser parte de la condena impuesta en el procedimiento penal, deberá acreditarse en éste y no en otro; sin embargo, su quántum no es parte de la sentencia condenatoria, sino que es una consecuencia lógica y jurídica de ésta, porque lo que se acredita en el procedimiento penal es el derecho del ofendido o la víctima para obtener la reparación del daño con motivo del ilícito perpetrado en su contra; de ahí que cuando el Juez no cuente con los elementos necesarios para fijar en el fallo el monto correspondiente, podrá hacerlo en ejecución de sentencia, por así permitirlo el citado precepto constitucional."

En cuanto a la condena impuesta al hoy quejoso de pagar a ********** la cantidad de tres mil setecientos noventa y cuatro pesos con diecisiete centavos ($3,794.17), en concepto de indemnización por la pérdida del falange distal del primer ortejo (dedo) del pie izquierdo, se estima legal, pues de acuerdo al artículo 33, fracción II, del Código Penal del Estado de Yucatán, la reparación del daño también contempla a los perjuicios ocasionados a la víctima; de lo que se colige que al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez puede sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; máxime, que dicha cantidad la redujo la Sala responsable, dado que el Juez a quo dispuso que el pago por aquel concepto sea de treinta y siete mil novecientos cuarenta y un mil pesos con setenta y cinco centavos ($37,941.75), lo que fue en beneficio del hoy quejoso.

El mencionado dispositivo legal dice:

"Artículo 33. La reparación del daño comprende:

"I. La restitución de la cosa obtenida por el delito y sus frutos o, en defecto de aquélla, el pago del precio de la una y de los otros, y

"II. El resarcimiento del daño material y moral causados, así como la indemnización del perjuicio ocasionado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos médicos, psiquiátricos, de rehabilitación o de cualquier otra índole, que como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima."

Sobre el particular tema de la indemnización, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 51/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 160 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, noviembre de 2002, con el rubro y texto siguientes:

"REPARACIÓN DEL DAÑO. COMPRENDE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS DE MANERA DIRECTA POR LA COMISIÓN DEL DELITO.—En los artículos 33, fracción II, del Código Penal para el Estado de Baja California, y 27, fracción II, del Código Penal del Estado de Campeche, se regula la figura de la reparación del daño, referida también a los perjuicios sufridos por la víctima; por lo que, conforme a estos dispositivos, al resolver sobre dicha reparación, de ser procedente, el Juez deberá sentenciar al sujeto activo a la indemnización de los perjuicios causados de manera directa a la víctima por la comisión del delito; pues de considerarse que dicha indemnización debe ser reclamada en la vía civil, se limitaría la interpretación de los mencionados preceptos legales en perjuicio de la víctima, dejándose de lado la amplia protección que el legislador pretendió darle en el proceso penal; consecuentemente, si en el delito de lesiones las infligidas al sujeto pasivo fueron de tal magnitud que impidieron el desarrollo de su actividad laboral cotidiana, dejando de percibir la remuneración correspondiente, este perjuicio resulta ser un efecto directo de la comisión del ilícito, a cuya reparación debe sentenciarse al procesado, independientemente de que en la legislación ordinaria civil de esos Estados se regulen las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, toda vez que tal regulación se dirige a una relación jurídica caracterizada por exigencias entre particulares, que podrán demandarse por la víctima cuando no desee formular querella, pero tampoco se encuentre dispuesta a absorber los daños y perjuicios derivados de la conducta ilícita; o bien, en contra de terceros que tengan el carácter de subsidiarios responsables del sujeto activo; pero que de

ningún modo puede ser excluyente de la obligación que en materia penal el legislador impone al Juez y al Ministerio Público. Corrobora lo anterior, el texto vigente del artículo 20, apartado A, fracción I, y apartado B, fracción IV, de la Constitución Federal, en el que se ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía; y lograr así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; debiéndose considerar, además, que fue el propio Constituyente el que reguló, con estrecha vinculación, los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que, actualmente, en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito."

Y dado que se estima correcto el sentido condenatorio de la sentencia reclamada, es legal en consecuencia la amonestación determinada en ella, pues se trata de una sanción prevista en el artículo 43 del precitado código punitivo que deriva de la comisión de la conducta típica y punible que desplegó el agente del delito, cuya finalidad es la de exhortarlo a que no reincida en su postura.

Idéntica consideración corresponde a la concesión de los beneficios sustitutivos de la pena de prisión por multa, de semilibertad o trabajo en favor de la comunidad y de condena condicional, así como el otorgamiento de la remisión parcial de la pena.

En resumen, es obvio que las constancias procesales de que se ha hecho mérito en los párrafos que anteceden, resultan suficientes para tener por acreditado en su integridad el delito culposo que produjo daño en propiedad ajena y lesiones y la plena responsabilidad del quejoso ********** en la comisión del mismo.

En las relacionadas consideraciones, no pueden cobrar aplicación al caso concreto las tesis que el nombrado impetrante cita como apoyo a sus argumentos de queja.

En cambio, suplidos en su deficiencia como autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la vigente Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación que ********** plantea para cuestionar las sanciones que le fueron impuestas, señalando que la Sala responsable partió de supuestos errados, lo que trascendió al momento de analizar las condiciones establecidas en la ley para que se aplicaran las sanciones correspondientes.

Al respecto, importa destacar que la Sala Colegiada Mixta responsable confirmó la imposición de las sanciones referentes a cinco meses y diecisiete días de prisión, y de trece días-multa, equivalentes a seiscientos cuarenta y tres pesos con cincuenta centavos ($643.50).

Para arribar a esa conclusión, la Sala responsable, al individualizar tales sanciones, consideró la coexistencia del grado de culpabilidad y de la gravedad de la culpa, pues una vez que ubicó esta última como leve, ponderó la culpabilidad para ubicarla en un índice superior a la mínima (fojas 74 vuelta, 75 y 78 del toca de apelación), añadiendo que la gravedad de la culpa sólo puede ser leve o grave de conformidad con los artículos 73 y 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, que únicamente establecen como parámetro un mínimo y un máximo (fojas 75 vuelta y 76 ibídem).

La determinación apuntada, vulnera en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal, establecido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en el caso de la individualización de las penas y medidas de seguridad por la comisión de delitos a título de culpa, lo jurídicamente correcto es ceñirse a las reglas que en específico establece el artículo 80 del código punitivo estatal, que si bien deja al prudente arbitrio del juzgador calificar la gravedad de la culpa con base en las circunstancias generales y especiales que prevé, empero, es incuestionable que dicha calificación deberá fijarse entre un mínimo y un máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un extremo a otro pasando por un punto medio que la doctrina ha conceptuado como "medianamente grave", y no como interpretó la Sala responsable en el sentido de que "únicamente puede circunscribirse a un mínimo y a un máximo", que imposibilita individualizar congruentemente la sanción a imponer en función de la actividad o inactividad efectivamente desplegada en el caso concreto, para deducir de ello el incremento o decremento del juicio de reproche.

"Artículo 80. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio de la autoridad judicial, quien deberá tomar en consideración las circunstancias generales señaladas en el artículo 74 de este código y las especiales siguientes:

"I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó;

"II. El deber de cuidado del inculpado que le es exigible por las circunstancias y condiciones personales que el oficio o actividad que desempeñe le impongan;

"III. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes;

"IV. Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios, y

"V. El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico, tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas transportadoras y, en general, por conductores de vehículos."

De ahí que la discrecionalidad de la que goza el juzgador para cuantificar las penas por la comisión de delitos imprudenciales, contemplada en el reproducido numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpado, dentro del parámetro que oscila entre una culpa leve a una grave, pasando por una medianamente grave, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros.

Lo anterior es así, puesto que "individualizar la pena" equivale a distinguir una sanción entre el mínimo y el máximo permitido por la ley para un delito en particular por las peculiaridades en la comisión del ilícito por el sujeto activo, y no sólo con un mínimo y un máximo –como apuntó la responsable–, puesto que la individualización de la pena equivale a la cuantificación de la sanción aplicable a un caso concreto.

Por otra parte, al momento de imponer las penas y medidas de seguridad que estimen justas para los delitos cometidos por culpa, no es dable tener

en cuenta, además, el grado de culpabilidad que revela el sujeto activo, por ser esta última privativa de los delitos de intención, sino sólo la gravedad de la culpa en que incurre quien comete un ilícito de carácter imprudencial, pues la individualización debe atender a cada caso concreto, ya sea a la intensidad del dolo (delito intencional) o a la gravedad de la culpa (delito culposo) de conformidad con los parámetros que van entre el mínimo y el máximo, pero no ambos a la vez, especificando en cada caso, las razones que influyen en su ánimo para adecuarlo en cierto punto entre el mínimo y el máximo de las penas aplicables que, para el caso de los delitos causados por culpa, corresponde considerar la menor o mayor facilidad de prever y evitar el daño que resultó de la imprudencia.

Así las cosas, es incuestionable que la Sala responsable recalificó la conducta del sentenciado, ahora quejoso, pues realizó un doble reproche respecto de una misma determinación, ya que luego de apuntar que la sanción máxima aplicable era de seis años de prisión y de doscientos días multa, y que la mínima era de tres días de prisión y de un día-multa, decidió imponer dichas penas con base en el índice de culpabilidad y las reglas aplicables al concurso ideal (foja 78 del toca de apelación), lo que arrojó sanciones más elevadas a las que legalmente correspondían (5 meses y 17 días de prisión, y 13 días-multa); antes bien, debió examinar la gravedad del proceder imprudente de acuerdo a las reglas especiales que indica el comentado artículo 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, lo que significa graduar la culpa del acusado a fin de establecer la sanción que resulte aplicable.

En el contexto anotado, lo que procede es concederle a ********** el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita.

SEXTO.—Efectos de la concesión del amparo: En consecuencia, el amparo se concede para que la autoridad responsable Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, cumpla con lo siguiente:

1. Deje insubsistente la sentencia de segundo grado reclamada; y,

2. Emita otra resolución, en la que, con base en los datos del sumario de origen y las consideraciones de esta ejecutoria: a) reitere que resultan suficientes para tener por acreditado en su integridad el delito culposo que produjo daño en propiedad ajena (2) y lesiones (2) y la plena responsabilidad de ********** en la comisión del mismo, así como las condenas al pago de la reparación de los daños causados a los dos vehículos involucrados en el hecho

de tránsito, y por las lesiones inferidas a ********** o ********** o **********, y a **********, el pago de la indemnización a la nombrada **********, las medidas de seguridad impuestas, así como los beneficios concedidos; y b) con base en la gravedad de la culpa leve con que ubicó la conducta negligente que desplegó el activo hoy quejoso, así como la pluralidad de resultados que provocó esa conducta, y sin considerar algún grado de culpabilidad, individualice las sanciones de prisión y pecuniaria que legalmente corresponda imponer, que de ningún modo podrán ser mayores a las establecidas en el fallo que se deja insubsistente.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2012), se otorga a la autoridad responsable el término de quince días para que dé cumplimiento total a lo ordenado en el fallo protector, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 192 al 198 de la Ley de Amparo en vigor.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, asimismo, en los artículos 74, 75, 77 y 170 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve:

ÚNICO.—Para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra del acto que reclamó de la Sala Colegiada Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, consistente en la sentencia de segundo grado que emitió el veintisiete de marzo de dos mil trece en el toca de apelación ********** de su índice.

Notifíquese; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos, lo resolvió el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, que integran los Magistrados Luisa García Romero, Pablo Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eden Wynter García, siendo presidente y ponente el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada

legalmente como reservada o confidencial, que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Conforme a las reglas que prevé el artículo 80 del Código Penal del Estado de Yucatán, la graduación judicial de la gravedad de la culpa por la comisión de este tipo de delitos a fin de establecer la sanción que resulte aplicable, debe situarse entre un mínimo y un máximo, lo que permite considerar diversos grados que van de un extremo a otro, pasando por un punto medio conceptuado como medianamente grave. De ahí que la discrecionalidad de la que goza el juzgador para cuantificar las penas, contemplada en el invocado numeral, está sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de culpa que corresponda al sentenciado, dentro de un parámetro que oscila de leve a grave, pasando por una culpa medianamente grave, para así deducir el incremento o decremento de ésta y demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quántum de la pena resulta congruente con el grado de culpa estimado.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.P.A. J/3 (10a.)

Amparo directo 330/2013. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Luis Armando Coaña y Polanco.

Amparo directo 363/2013. 9 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Roque José Castilla Santana.

Amparo directo 425/2013. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno. Secretario: Roque José Castilla Santana.

Amparo directo 429/2013. 7 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Jorge Gabriel Tzab Campo.

Amparo directo 106/2014. 19 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luisa García Romero. Secretario: Joel Benjamín Ritto Mijangos.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA O NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA.

INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 87/2014. 21 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ALFONSO BERNABÉ MORALES ARREOLA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: HÉCTOR JAVIER CERVANTES VILLANUEVA.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Este Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, resulta competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 193 de la Ley de Amparo; 37, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, con apoyo además, en el Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, punto cuarto, fracción IV, así como el diverso Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, puntos primero, fracción XIX, segundo, fracción XIX, inciso 1), y tercero, fracción XIX; toda vez que se trata de un incidente de inejecución de sentencia formado ante el incumplimiento de una ejecutoria de amparo indirecto emitida por un Juez de Distrito que pertenece al ámbito territorial comprendido dentro de la jurisdicción de este órgano colegiado y los actos pertenecen a la materia laboral que representa una de las especialidades de este tribunal.

TERCERO.—Este Tribunal Colegiado considera que debe devolverse el expediente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, por las razones que enseguida se precisarán.

De los autos que conforman el juicio de amparo biinstancial de donde deriva el presente incidente de inejecución de sentencia se desprende que la autoridad responsable, Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Ello es así, porque de las constancias procesales se advierte que al pronunciar sentencia el Juez de Distrito en el expediente **********, otorgó la protección constitucional a la parte quejosa, en los siguientes términos:

"... En las relatadas circunstancias, y con la finalidad de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, lo cual atenta de manera directa al derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita, consagrado en el referido artículo 17 constitucional, y en estricto acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 45/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es obligatoria en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a **********, para el efecto de que la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta capital, dicte de inmediato el laudo correspondiente, en el juicio laboral 1425/2010 de su estadística ..." (foja 24 del juicio de amparo).

Derivado de que la sentencia en cuestión no fue recurrida a través del recurso de revisión por ninguna de las partes, el juzgador federal declaró que dicha determinación causó ejecutoria y ordenó requerir a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo constitucional.

En ese sentido, por acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil trece, el juzgador de amparo determinó:

"Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de diciembre de dos mil trece ... en consecuencia, con fundamento en los artículos 2o., 86, 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia causa ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; por lo tanto, háganse las anotaciones pertinentes en el libro respectivo y en los medios electrónicos adoptados para efectos estadísticos ...

"En consecuencia, se requiere a la presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, para que en el improrrogable término de veinte días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente asunto, dé cumplimiento a la eje-

cutoria de amparo, por lo que deberá remitir las constancias que justifiquen el mismo …

"Asimismo, también es necesario señalar que no se considera procedente apercibirla con multa, ya que desde luego también constituye un hecho notorio, que la presidenta de la autoridad responsable, no tiene una conducta contumaz, para el cumplimiento de las sentencias amparadoras, medida de apremio que tienen (sic) a romper dicha conducta de las responsables, sino que ello atiende precisamente al cúmulo de trabajo que tiene y el poco personal con el que cuenta para desahogarlo. Notifíquese."

El proveído de referencia se notificó a la autoridad responsable el doce de diciembre de dos mil trece (foja 33 del referido expediente).

A pesar de la prevención anterior, la autoridad responsable no cumplió con la sentencia concesoria del amparo, circunstancia que dio motivo a que por acuerdos de veintiocho de enero y cinco de marzo de dos mil catorce (fojas 35 y 38), el Juez de Distrito otorgara el plazo de veinte y tres días hábiles, respectivamente; de lo cual notificó a la Junta el treinta de enero y el seis de marzo, ambas datas del presente año.

El cinco de marzo de dos mil catorce, el Juez federal determinó que era procedente abrir el incidente de inejecución, y como consecuencia, remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito en turno, con sede en esta capital, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, constitucional; asimismo, consideró que no era procedente multar a la autoridad responsable, dado el cúmulo de trabajo que tiene y el poco personal con el que cuenta para desahogarlo (fojas 38 y 39).

Igualmente, en proveído de seis de mayo de dos mil catorce, pronunciado por el presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito, se requirió a la referida Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, demostrara ante el Juez de Distrito, y ante este propio tribunal, el acatamiento de la ejecutoria dictada el diecinueve de noviembre de dos mil trece, en el juicio de amparo **********; o en su caso, expusiera las razones que tuviera en relación con su incumplimiento, con el apercibimiento que de hacer caso omiso, se continuaría el procedimiento respectivo que podría culminar con una resolución que, en los términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenara la separación del cargo de la titular responsable y su consignación penal ante el Juez federal (fojas 3 y 4 del incidente de inejecución).

El citado auto fue notificado a la autoridad responsable el siete de mayo de este año (foja 9 del expediente de inejecución).

Derivado de que la Junta F ederal no demostró haber acatado la ejecutoria protectora, por acuerdo de cinco de junio de dos mil catorce, la presidencia turnó el asunto para formular proyecto de resolución (foja 10 del citado expediente).

Los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, a la letra dicen:

"Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

"En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

"Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

"El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejosos, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales que disponga."

"Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y si se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronun-

ciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.

"Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

"En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.

"En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto.

"Al remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

"El Tribunal Colegiado de Circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos.

"Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico."

De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente, armonizada conforme al sistema al que pertenecen, se concluye que existe la obligación del Juez de Distrito de que una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, para que cumpla

con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días, sin que se hubiere obtenido su cumplimiento, analice si la complejidad o dificultad de éste, amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso de tal manera que sea necesario ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora, por los medios oficiales que disponga.

Hecho lo cual, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el Juez a quo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito.

Sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ello dará lugar a que el Tribunal Colegiado devuelva los autos del juicio para que lo realice.

En el caso concreto, de los autos del sumario del expediente de amparo, se desprende que pese haber sido requerida para que acatara en sus términos el fallo protector, la autoridad responsable ha sido omisa en su cumplimiento; sin embargo, esa falta de cumplimiento obligaba al juzgador federal a analizar si la complejidad o dificultad del cumplimiento de la sentencia protectora amerita que se amplíe el plazo a efecto de que la responsable proceda a acatar en sus términos la ejecutoria de amparo, y solamente en el caso que concluya que existe contumacia, por parte de ésta para cumplir con lo ordenado, podría imponer las multas procedentes y enviar los autos a este cuerpo colegiado, a efecto de decidir lo procedente en derecho.

Lo anterior, porque en tratándose del amparo biinstancial, una vez transcurrido el plazo señalado, y con el propósito de garantizar que la autoridad responsable tenga el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias protectoras, para ello se podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomándose en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado.

Es cierto que la Junta responsable ha sido omisa en informar respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria o, en su caso señalar los motivos que le impiden hacerlo, empero, como se ha dicho, los Jueces de Distrito tienen la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que inicialmente hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en amparo indirecto en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural, exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo sumamente acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir

en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional que se obtuvo, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento.

Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, habitualmente se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan en forma justificada el procedimiento.

Incluso, debe tenerse presente que es público y notorio la carga de trabajo con la que cuenta la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, debido al número de amparos indirectos o de otros medios de impugnación, precisamente al retardo que existe en el dictado de sus fallos, ya sea por las cargas excesivas de trabajo, o ante la falta de alguno de sus integrantes que impide que se resuelvan oportunamente.

De consiguiente, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe estimarse que el Juez federal proceda a ejercer su atribución para extender en forma prudente el plazo del cumplimiento conforme las circunstancias propias que cada asunto le exija teniendo en cuenta su complejidad o dificultad, así como dar respuesta fundada y motivada para el caso de que la autoridad responsable le formule una ampliación de plazo, antes de declarar que ha incurrido en desacato.

Sin que pase desapercibido para este cuerpo colegiado que la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo, faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para prorrogar el plazo de cumplimiento del fallo protector cuando existen razones justificadas para ello, no existiendo distinción sobre la vía ya sea directa o indirecta en la cual puede ejercer su atribución para extender prudentemente el plazo para acatar los efectos de la protección constitucional, en los siguientes términos:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad. Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria. ..."

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 2a./J. 33/2014 (10a.), publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 926, que a la letra dice:

"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).—Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que dé inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las

diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no solo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato."

Ahora bien, en el presente asunto debe precisarse que la ampliación del plazo otorgada por el Juez de Distrito en dos ocasiones, es insuficiente para considerar que observó lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, debido a que en los acuerdos respectivos no consta el estudio de la causa que justifique que por la complejidad o dificultad del cumplimiento de la sentencia protectora amerita la extensión del plazo; y tampoco se determinó si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, de tal manera que sea necesario ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora, por los medios oficiales que disponga.

Lo cual era indispensable para considerar que dentro del trámite del cumplimiento de la sentencia de amparo el Juez federal actuó conforme a lo regulado en el precepto de referencia.

En las relatadas condiciones, lo procedente es devolver los autos al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado, a efecto de que emita un acuerdo en el que razone acerca de la ampliación del plazo de cumplimiento, empero, tomando en cuenta su complejidad o dificultad; o bien determine si se actualiza el supuesto de que el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, de tal manera que sea necesario ordenar el acatamiento inmediato de la ejecutoria protectora.

En el entendido que de ampliar el plazo, deberá fijar uno razonable para que la autoridad responsable cumpla con lo ordenado en la sentencia amparatoria y, previo a remitir los autos al Tribunal Colegiado, forme un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria.

En mérito de lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Se ordena devolver los autos del juicio de amparo indirecto número ********** al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, por las razones y para los efectos indicados en el último considerando de esta resolución.

Engrósese la presente resolución a los autos y hágase la anotación en el libro electrónico de registro correspondiente.

Notifíquese como corresponda y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, Martín Ángel Rubio Padilla, Abel Anaya García y el licenciado Alfonso Bernabé Morales Arreola, este último, secretario en funciones de Magistrado, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de mayo de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno que reglamenta la organización y funcionamiento del señalado Consejo; siendo presidente el primero y ponente el último de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II, XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, 14, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA. De la interpretación funcional de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, armonizada conforme al

sistema al que pertenecen, se concluye que es obligación del Juez de Distrito, una vez que se han notificado los requerimientos a la autoridad responsable, requerirla para que cumpla con la ejecutoria protectora dentro del plazo de tres días; no obstante, si la responsable no lo hace a pesar de haber sido prevenida, dicho juzgador federal está obligado a analizar si la complejidad o dificultad para realizarlo amerita que se amplíe el plazo para que la autoridad responsable cumpla; o bien, si el caso reviste urgencia y notorio perjuicio al quejoso, debe ordenar el cumplimiento inmediato de la ejecutoria protectora por los medios oficiales de que disponga. Luego, si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo que se fije, el juzgador de amparo hará el pronunciamiento respectivo, imponiendo las multas procedentes y remitiendo los autos al Tribunal Colegiado de Circuito; sin embargo, si el Juez de Distrito no realiza el análisis relativo a la complejidad o urgencia del cumplimiento de sentencia, ese órgano colegiado, al resolver el incidente correspondiente, le devolverá los autos del juicio para que lo haga.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.P.T. J/3 (10a.)

Incidente de inejecución de sentencia 122/2014. Álvaro López Cervantes. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: Rosalba Janeth Rodríguez Sanabria.

Incidente de inejecución de sentencia 128/2014. María Elena Sánchez Cantú. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: Hortencia Jiménez López.

Incidente de inejecución de sentencia 27/2014. Marina Camacho Viuda de López. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Bernabé Morales Arreola, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Eduardo López Fabela.

Incidente de inejecución de sentencia 97/2014. María del Rosario García Esquivel. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretario: Paulo Rolando Orozco Gallardo.

Incidente de inejecución de sentencia 87/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Bernabé Morales Arreola, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Héctor Javier Cervantes Villanueva.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SENTENCIAS PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO DE AQUELLAS DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA, CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.

AMPARO EN REVISIÓN 9/2014. 20 DE FEBRERO 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: OMAR LIÉVANOS RUIZ. SECRETARIA: YURIDIA BELLO CAMACHO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Análisis del fondo del asunto. Los conceptos de violación son fundados suplidos en su deficiencia.

Con el fin de exponer los motivos de la calificativa anunciada, para mejor comprensión del asunto se precisarán algunos antecedentes del reclamado:

I. El veintiocho de septiembre de dos mil doce, el Juez menor señalado como responsable dictó sentencia definitiva en el proceso penal **********, instruido contra el aquí tercero interesado ********** por los delitos de lesiones y daño en las cosas culposas por conducir vehículo de motor terrestre, cometido en agravio de la aquí recurrente **********, en la que, entre otras cuestiones, en el considerando octavo, se condenó a aquél al pago de la reparación del daño, a favor de la ofendida, reservándose su cuantificación para el procedimiento de ejecución de sentencia.[8]

II. Luego, mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil doce, **********, promovió ante la responsable, incidente no especificado sobre ejecución de sentencia.[9]

II. En proveído de seis de diciembre de dos mil doce, el Juez responsable se declaró legalmente incompetente para conocer del referido incidente y lo remitió al Juez de Ejecución de la Región de Morelia, Michoacán; sin embargo, mediante resolución de veintinueve de abril de dos mil trece, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, con sede en esta ciudad, no admitió la competencia planteada en su favor por las razones que expuso

[8] (fojas 400 a 420; juicio de amparo 580/2013)
[9] (fojas 440 a 445; juicio de amparo 580/2013)

y ordenó devolver los autos al Juez de origen, quien en auto de veinticuatro de mayo del año 2013 dos mil trece, se avocó al conocimiento del incidente de que se trata y ordenó requerir a la incidentista para que manifestara si insistía con el trámite de dicha petición.[10]

IV. Luego, en auto de treinta y uno de mayo de dos mil trece, se admitió a trámite dicho incidente y seguido por sus etapas correspondientes, el tres de julio de 2013, dictó la interlocutoria respectiva, la cual constituye el acto reclamado en el juicio de amparo sujeto a revisión, en la que se declaró procedente esa incidencia y se condenó al aquí tercero interesado ********** , a pagar a favor de la recurrente, catorce mil seiscientos noventa y siete pesos 68/100 M.N., por concepto de la reparación del daño.[11]

Ahora como se adelantó, de la lectura del acto reclamado, se aprecia que la autoridad responsable resolvió el incidente de que se trata (cuantificación del pago de reparación del daño), sin ser competente para ello, aspecto que necesariamente debe abordarse en esta ejecutoria.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye –en lo que interesa– que: "… Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. …"

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero, de la Carta Magna establece que: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento."

Vinculado con lo anterior, se tiene que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, por la que se reformaron los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 73, fracciones XXI y XII, 115, fracción VII y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un cambio para el mejoramiento del sistema de justicia penal, lo que impacta de manera directa en la estructura, presupuesto y organización del Poder Judicial.

---

[10] (fojas 446 a 447; 485 a 487 y 512; juicio de amparo 580/2013)
[11] (fojas 540 a 544; juicio de amparo 580/2013)

De la modificación de los diez preceptos constitucionales anteriormente referidos, destaca la reforma del artículo 18, segundo párrafo constitucional, por el que se precisa que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; así como la reforma del artículo 21, párrafo tercero, constitucional, en el que se establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial; estableciendo en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho, que el nuevo sistema de reinserción social previsto en los dispositivos constitucionales citados, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente.

En el caso del Estado de Michoacán, a través de sus respectivos órganos, en aplicación directa de los preceptos constitucionales, expidió la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, y creó la figura de Juez de Ejecución de Sanciones Penales.

Cierto, el catorce de junio de dos mil once, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, se publicó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, cuyo artículo segundo transitorio de la ley en consulta, establece: "En tanto no se nombren los Jueces de Ejecución de Sanciones la ejecución de esta ley quedará a cargo del Juez de la causa."

Sin embargo, como se advierte del acuerdo emitido por el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, mediante el cual se implementaron los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en la entidad, a partir del uno de octubre de dos mil doce, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, inició funciones, motivo por el cual el Juez menor responsable, correctamente le remitió el trámite incidental de donde emana el acto reclamado, para que fuera éste quien lo tramitara y resolviera conforme a la ley de la materia, por ser él legalmente competente para ello, sin que este último aceptara dicha competencia, cuyas razones que esgrimió no forman parte de la litis constitucional.

Ello, porque basta imponerse de la ley de ejecución en consulta, así como del acuerdo emitido por el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, para conocer que a partir del uno de octubre de dos mil doce, el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia, inició en funciones,

además el artículo sexto transitorio de la primera ley[12] abrogó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de enero de dos mil cinco, y dejó sin efecto las demás disposiciones legales y administrativas derivadas, en lo que se opusieren a la nueva legislación, siendo así, es inconcuso que el referido Juez de Ejecución es el competente para aplicar la nueva legislación especial, con base en los artículos 2, fracción X, 4 y 8, de ese ordenamiento que establecen:

"Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

"...

"X. Juez de Ejecución: Órgano jurisdiccional especializado en la aplicación de esta ley y demás legislación sobre ejecución de sanciones y medidas de seguridad;"

"Artículo 4. Son competentes en la aplicación de la ley los Jueces de Ejecución, conforme lo disponga la ley y la secretaría, conforme a sus atribuciones."

"Artículo 8. El Juez de Ejecución es la autoridad judicial encargada de la aplicación de esta ley. A éstos, les corresponde vigilar y garantizar jurisdiccionalmente el estricto cumplimiento de las normas que regulan la ejecución de las penas y medidas de seguridad, así como el respeto de los derechos de toda persona sentenciada o imputada en prisión preventiva. En todo caso, podrán contar con opiniones de profesionales especializados, cuando lo requiera la resolución que deban emitir."

Esto, sin soslayar que el Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sanciones en Michoacán en su artículo 2, fracción XII,[13] dispone que el Juez de la causa es el órgano jurisdiccional que imponga una sanción penal o medida de seguridad, entre los que se encuentra el Juez menor, en términos de los artículos 56 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

---

[12] "Artículo sexto. Se abroga la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 27 de enero de 2005, y se dejan sin efecto las demás disposiciones legales y administrativas derivadas de la misma en lo que se opongan a la presente ley."

[13] "Artículo 2. Glosario. Para los efectos de este reglamento, se entenderá por:
"...
"XII. Juez de la causa: Órgano jurisdiccional que imponga una sanción penal o medida de seguridad. Se comprenden en esta denominación los Jueces de primera instancia, especializados en materia penal o mixtos, del Estado de Michoacán;

entidad,[14] no obstante que el propio numeral del reglamento en comentario aduzca que la categoría a que se refiere comprenda a los Jueces de primera instancia, especializados en materia penal o mixtos, pues es indudable que el Juez menor no queda excluido, no obstante dicha precisión.

En efecto, el artículo 23 del Código Penal de Michoacán dispone que las sanciones o medidas de seguridad son: I. Prisión con trabajo obligatorio; II. Confinamiento; III. Prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él; IV. Multa; V. Reparación del daño; VI. Inhabilitación, suspensión y privación de derechos; VII. Destitución y suspensión de funciones o empleos; VIII. Publicación especial de sentencia; IX. Decomiso de los instrumentos del delito; X. Decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas; XI. Amonestación; XII. Apercibimiento; XIII. Caución de no ofender; XIV. Vigilancia de la autoridad; XV. Internación; y, XVI. Intervención, prohibición de realizar determinadas operaciones o negocios, y disolución de las personas jurídicas colectivas; XVII. Tratamiento en libertad, semiliberación y trabajo en favor de la comunidad. XVIII. Restricción de la comunicación o del acercamiento con la víctima; XIX. Tratamiento psicológico especializado; y, XX. Intervención especializada cuando se trate de violencia contra las mujeres por su condición de género.

Siendo así, no existe razón jurídica para que el Juez de Ejecución de sanciones se niegue a conocer del incidente de que se trata; y, por el contrario, hacerlo de otra manera, esto es, obligar al Juez menor que la resuelva, se privaría a la quejosa de interponer el recurso de apelación en su contra, al aducirse que contra las resoluciones dictadas por este, el código procesal penal en la entidad no prevé dicho recurso, sin que tampoco se pudiera argumentar que el medio de impugnación de que se trata sí procede porque el Juez menor hace funciones de Juez de Ejecución de sanciones penales, pues se insiste, la ley especial únicamente puede ser aplicada por estos últimos, por así disponerlo expresamente dicho ordenamiento legal.

---

[14] "Artículo 56. En cada distrito judicial habrá el número de juzgados menores que determine el consejo."
"Artículo 57. Los juzgados menores con sede en las ciudades de Apatzingán, Hidalgo, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, Zamora y Zitácuaro tendrán competencia para conocer y resolver:
"…
"III. En materia penal de los delitos que tengan como sanción apercibimiento; caución de no ofender; pena alternativa; multa, cuando ésta no exceda del importe de cien días de salario mínimo general vigente en el momento y lugar en que se cometió el delito, prisión; y, cuando ésta no exceda de tres años, excepto de los delitos previstos y sancionados por los artículos 105, 116 y 117 del Código Penal del Estado. Además de la diligencia de exhortos, requisitorias o despachos que reciban y sean de su competencia; y, de los demás asuntos que les encomienden las leyes.

De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que, al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria, como en el caso justiciable aconteció.

Entonces, es el Juez de Ejecución de sanciones penales quien conocerá y resolverá sobre la petición de cuantificar el pago de reparación del daño promovida vía incidental por la aquí recurrente, no obstante que dicha sanción de condena sobre el particular emane de un Juez menor, pues se insiste este último tiene la categoría de Juez de la causa, conforme lo estatuye la ley de la materia, la cual prevé el recurso ordinario, sin que deba entenderse que se vulnera la regla general destinada específicamente para los juzgadores menores del Estado, en cuanto a que contra las resoluciones dictadas por éstos, no procede el recurso de apelación en términos del artículo 431 del Código de Procedimientos Penales de Michoacán,[15] porque sólo se prevé el diverso de revocación, con excepción de los autos de formal prisión, de sujeción a proceso, de libertad por falta de pruebas para procesar, los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos y sentencias, respecto de los cuales no es admisible ningún recurso.

Esto, porque el tema central no es la procedencia del recurso ordinario (como lo hizo la Juez de Distrito y constituyó su base para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo), sino dilucidar que la autoridad competente para conocer de la solicitud de cuantificar el pago de la reparación del daño (acto reclamado) lo es el Juez de Ejecución de sanciones penales y no el Juez de la causa, en estricto respeto a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Apoya lo expuesto la jurisprudencia siguiente:

"COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.—Haciendo una interpretación armónica de las garan-

[15] "Artículo 431. Recursos. Contra los autos de los Jueces municipales, sólo procede el recurso de revocación, con excepción de los autos de formal prisión, de sujeción a proceso, de libertad por falta de pruebas para procesar, los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos y sentencias, respecto de los cuales no es admisible ningún recurso."

tías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecue exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la Ley Fundamental o la secundaria."[16]

No constituye obstáculo legal, para lo determinado en esta ejecutoria la existencia del Acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, de sesión ordinaria de ocho de mayo de dos mil trece, el que con fundamento en el artículo 67 de la Constitución Política del Estado,[17] en relación con los

---

[16] "Octava Época
"Registro: 205463
"Instancia: Pleno
"Jurisprudencia
"Fuente: *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*
"Número 77, mayo de 1994
"Materia: Común
"Tesis: P./J. 10/94
"Página: 12

[17] "Artículo 67. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, en el Consejo del Poder Judicial, en los juzgados de primera instancia, en los menores de materia civil, en los comunales, en los de justicia penal para adolescentes y en los de ejecución de sanciones penales.
"La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado está a cargo del Consejo del Poder Judicial, que posee autonomía técnica y de gestión.
"El Consejo del Poder Judicial se integra con cinco miembros, de los cuales uno es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo preside; uno electo por el Congreso del Estado; uno designado por el gobernador del Estado, un Magistrado y un Juez de primera instancia, ambos electos por sus pares, en los términos que fije la ley orgánica.
"Los consejeros no representan a quienes los eligen o designen, por lo que ejercen su función con independencia e imparcialidad. Su encargo será por cinco años, con excepción del presidente. Los requisitos y condiciones para ser consejero son los mismos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia.

preceptos 71 y 77, fracciones I, II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,[18] acordó dejar sin efectos el diverso de sesión ordinaria de veintiséis de septiembre de dos mil doce, relativo a la competencia del Juzgado de Ejecución de sanciones penales en el que se determinó: "Asimismo, en relación a su competencia, determinó que también deberá conocer de los asuntos que se substancien en los juzgados menores ubicados en los distritos judiciales que conforman la región judicial de su adscripción; por lo que, debe solicitar a dichos órganos jurisdiccionales la remisión de los expedientes respectivos y elaborar el inventario correspondiente en términos del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado aplicado por analogía."

Ello, porque como se anotó en párrafos que anteceden la Ley de Ejecución en comentario en su artículo sexto transitorio abrogó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales de Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete de enero de dos mil cinco, y dejó sin efecto las demás disposiciones legales y administrativas derivadas, en lo que se opusieren a la nueva legislación, en cuya categoría encuadra el acuerdo tomado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado, en sesión ordinaria de ocho de mayo de dos mil trece, pues desde luego un acto administrativo no puede estar por encima de la ley, ni menos de la Constitución Federal.

En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo se concede a la quejosa la protección constitucional para el efecto de que el Juez menor responsable:

A. Deje insubsistente la resolución incidental de tres de julio de dos mil trece, emitida dentro del incidente de ejecución de sentencia, respecto al pago

---

"El Consejo del Poder Judicial funciona en Pleno o en comisiones. El Pleno resuelve sobre la designación, adscripción y remoción de Jueces, emitirá su reglamento interior, los acuerdos y resoluciones para el cumplimiento de sus funciones. Cuenta con comisiones permanentes y transitorias. Las comisiones permanentes son: administración, carrera judicial y vigilancia y disciplina.
"Se establece la carrera judicial, a cargo del Consejo del Poder Judicial, en los términos que señale la ley orgánica.

[18] "Artículo 71. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, está a cargo del consejo, en los términos que establece la Constitución y esta Ley. El Consejo del Poder Judicial posee autonomía técnica y de gestión."
"Artículo 77. Son atribuciones del consejo:
"I. Conducir la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial;
"…
"II. Conocer de los impedimentos de los consejeros en los casos que establece esta ley;
"…
"V. Expedir sus reglamentos, así como los acuerdos generales y específicos que fueren necesarios para el adecuado ejercicio de sus atribuciones; …"

de la reparación del daño promovido por la ahora recurrente, en el proceso penal 80/2010, instruido contra ********** , por la comisión del delito de daño en las cosas;

B. Y, en su lugar, emita otra en la que declare su incompetencia legal para tramitar y resolver el incidente de que se trata, tal como lo había hecho con anterioridad; y remita todo lo actuado al Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región de Morelia.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia de amparo recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto y autoridad responsable precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando sexto.

Notifíquese; publíquese; con testimonio de la presente resolución, remítanse los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones en los libros de gobierno respectivos y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, presidente Carlos Alberto Zerpa Durán, J. Jesús Contreras Coria y Omar Liévanos Ruiz, siendo relator el tercero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SENTENCIAS PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO DE AQUELLAS DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA, CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE

LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN. El Estado de Michoacán, mediante decreto publicado en su Periódico Oficial el catorce de junio de dos mil once, creó la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, que derogó el diverso ordenamiento sobre la materia vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil cinco y disposiciones derivadas; en tanto se instrumentaba la reforma, los Jueces penales, en el ámbito de sus respectivas competencias, continuarían resolviendo lo concerniente al periodo ejecutivo de dichos fallos. Por su parte, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán, por Acuerdo General de veintidós de agosto de dos mil doce, estableció el inicio de funciones de los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales y, correlativamente, relevó de esa competencia a los Jueces de proceso menores y de primera instancia, para que remitieran los expedientes concluidos a la nueva potestad ejecutora; entonces, a partir de la fecha citada en último término, todo lo relacionado con la extinción, duración y modificación de las penas en etapa de ejecución de sentencias quedó dentro de la competencia de los Jueces encargados de su instrumentación material. Por tanto, firme la sentencia, su ejecución será de la exclusiva competencia de los juzgados especializados, sin que sea obstáculo que haya sido dictada por un Juez menor.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
XI.P. J/1 (10a.)

Amparo en revisión 9/2014. 20 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretaria: Yuridia Bello Camacho.

Amparo en revisión 50/2014. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alberto Zerpa Durán. Secretario: Raúl Vallejo Medina.

Amparo en revisión 64/2014. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretaria: Nadia Carolina Gatica Morales.

Amparo directo 84/2014. 8 de mayo de 2014. Mayoría de votos, unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Ponente: Jesús Contreras Coria. Secretaria: Elodia Hernández Mendoza.

Amparo directo 88/2013. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos en el sentido y mayoría en las consideraciones. Ponente: Jesús Contreras Coria. Secretaria: Rosalba Elvira Ríos.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006).

AMPARO DIRECTO 641/2013. JUAN VÍCTOR OREA CAMACHO. 6 DE DICIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ FRANCO LUNA. SECRETARIO: HÉCTOR FLORES IRENE.

CONSIDERACIONES:

QUINTA.—Estudio del asunto. Los conceptos de violación son fundados, aunque para ello deba suplirse la queja deficiente en diversas fracciones de su contenido, en términos el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo,[31] por constituirse el quejoso en la parte trabajadora.

En efecto, en un segmento del segundo concepto de violación, el peticionario de derechos aduce, en esencia, que fue incorrecta la absolución al pago del fondo de ahorro por cuanto a la parte que le corresponde aportar al patrón; pues afirma que si el patrón al contestar la demanda no la controvirtió, y por el contrario confesó que la cantidad reclamada le fue cubierta al quejoso mediante el recibo finiquito correspondiente con motivo de su renuncia el veintinueve de julio de dos mil nueve, resultaba innecesaria la exhibición por parte del accionante del juicio laboral del contrato colectivo de trabajo para acreditar la procedencia de dicha prestación.

Argumentos fundados y suficientes para conceder el amparo al quejoso para que se ordene la condena por el concepto pretendido.

Lo que es así, en tanto que aun cuando la carga de la prueba para demostrar la procedencia de la prestación atinente al pago del fondo de ahorro, por cuanto a la parte que le correspondía aportar a la patronal demandada, debió ser satisfecha por el trabajador y no así por la demandada, dado que dicha prestación es de carácter extralegal; en la especie no hubo controversia sobre si se otorgaba como prestación al trabajador, como se pasa a demostrar.

---

[31] "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:
"...
"V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;
"..."

Ciertamente, el aquí quejoso demandó como prestaciones bajo los incisos e) y f), las siguientes:

"e) El pago de la cantidad que resulte por concepto de fondo de ahorro que le era retenido por la demandada de su salario ordinario, a razón de $********** en forma semanal, a partir del 1 de enero a la fecha de sus (sic) injusta separación ocurrida el día 29 de julio del año 2009, y que se refleja en los recibos de pago de salarios, y que arroja la cantidad global de $**********.

"f) El pago de la cantidad de $**********, por concepto de fondo de ahorro que la persona moral y en términos del contrato colectivo de trabajo está obligada y pactada (sic) cubra a sus trabajadores una cantidad igual a la que éstos hayan aportado por dicho concepto."[32]

Como se ve, dicha prestación la actora la hace derivar por un lado del descuento semanal que se le hace de su salario ordinario y, por otro, de que se encuentra prevista en el contrato colectivo de trabajo, por lo que debe considerarse tal concepto como una prestación de carácter extralegal; por tanto, la carga de probar su dicho en el sentido de que en aquel pacto de trabajo se encuentra previsto que el patrón otorgue a los trabajadores una cantidad igual que la que se le descuenta de su salario ordinario a los operarios por concepto de fondo de ahorro, le correspondía al actor y no a la demandada.

Lo anterior, al tenor del contenido de los siguientes criterios que se comparten:

"Octava Época
"Registro: 1010084
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: *Apéndice* 1917-Septiembre 2011
"Tomo VI. Laboral Segunda Parte-TCC Primera Sección- Relaciones laborales ordinarias Subsección 1 - Sustantivo
"Materia(s): Laboral
"Tesis: 1289
"Página: 1316

"PRESTACIONES EXTRALEGALES. CARGA DE LA PRUEBA.—Si bien de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 784, fracción VII, de la Ley Federal del

[32] Ibídem, 3.

Trabajo, en todo caso corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia respecto del contrato de trabajo, tal exigencia se refiere a la demostración de las condiciones individuales de labores o garantías mínimas del contrato individual de trabajo, bajo las cuales el subordinado ha de prestar sus servicios, relacionados en el artículo 25 del mismo ordenamiento legal, a cuyo caso no puede asimilarse la obligación de probar las condiciones de trabajo previstas en un contrato colectivo de trabajo, porque éstas no encuentran su origen en la ley sino en el acuerdo de voluntades tenido entre el patrón y el sindicato que representa el interés profesional de sus trabajadores, así que tratándose de prestaciones previstas en el pacto colectivo, es el actor y no el demandado quien debe soportar la carga de probar.

"Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

"Amparo directo 443/92. Alejandro Soto Carrillo. 21 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 625/92. Graciela Sandoval Murillo. 20 de enero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 677/92. Francisco Zepeda Salguero. 3 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez.

"Amparo directo 43/93. Ferrocarriles Nacionales de México. 31 de marzo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

"Amparo directo 302/93. Gabriel González Macías. 23 de septiembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Armando Ernesto Pérez Hurtado.

"*Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 70, octubre de 1993, página 65, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis III.T. J/43; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo XII, octubre de 1993, página 345.

"*Apéndice* 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Tribunales Colegiados de Circuito, página 896, tesis 1029."

"Novena Época
"Registro: 190489

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis Aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XIII, enero de 2001
"Materia(s): Laboral
"Tesis: I.6o.T.77 L
"Página: 698

"CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. CUANDO SE RECLAME UNA PRESTACIÓN FUNDADA EN UNA DE SUS CLÁUSULAS QUE REMITE A OTRAS DIVERSAS, DEBEN OFRECERSE COMO PRUEBA TODAS AQUELLAS QUE SE VINCULAN CON LA CLÁUSULA EN QUE SE BASE LA RECLAMACIÓN.—La entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que aparece publicada en la página 43 del *Semanario Judicial de la Federación*, correspondiente a la Séptima Época, Volúmenes 217-228, Quinta Parte, de rubro: 'PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DE.', sostuvo el criterio de que quien alega el otorgamiento de una prestación de carácter extralegal, debe acreditar en el juicio su procedencia. Acorde con este criterio, el trabajador está obligado a aportar en el juicio la cláusula del pacto colectivo en que base sus reclamaciones por tener la carga de la prueba para ello; ahora bien, si esa cláusula remite a otras diversas para su aplicación, deben exhibirse conjuntamente por la relación que guardan entre sí, para que el juzgador esté en aptitud de determinar la existencia del derecho ejercitado.

"Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Amparo directo 7066/2000. Juan Jaime Pérez Flores. 10 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretaria: Yolanda Rodríguez Posada.

"Véase: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 594, tesis I.9o.T. J/21, de rubro: 'CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. DEBEN APORTARSE COMO PRUEBA TODAS AQUELLAS CLÁUSULAS QUE SE RELACIONEN CON LO PRETENDIDO.'.

"Nota: Este criterio ha integrado la jurisprudencia I.6o.T. J/85, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3051, con el rubro: 'PRESTACIONES EXTRALEGALES. SI EL TRABAJADOR LAS FUNDA EN UNA CLÁUSULA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE REMITE A OTRAS, POR LA RELACIÓN QUE GUARDAN ENTRE SÍ DEBE EXHIBIRLAS A EFECTO DE QUE EL JUZGADOR PUEDA DETERMINAR LA EXISTENCIA DEL DERECHO EJERCITADO.'"

Sin embargo, no obstante que el trabajador omitió exhibir el pacto colectivo de trabajo donde dijo que se consignaba el derecho a esa prestación y la consecuente obligación del patrón a proporcionarlo, lo cierto es que fue incorrecto que la Junta lo haya absuelto de su pago.

Ello, dado que como se alega, la patronal al dar contestación a ese reclamo aceptó haber otorgado dicha prestación –fondo de ahorro por cuanto a la parte que le correspondía aportar de una cantidad igual a la que le descontaba del salario ordinario a sus trabajadores, en la especie, de $********** semanales y que, por tanto, se le adeudaban $**********, por el periodo del uno de enero al veintinueve de julio de dos mil nueve–.

Lo que hizo al referir que dicho concepto le fue cubierto al trabajador y que, por ello, no se le debía cantidad alguna, al tenor de lo siguiente:

"e) y f) El pago de del (sic) concepto de fondo de ahorro en virtud de que dicho concepto le fue pagado el día 29 de julio de 2009, fecha en la que de manera voluntaria renunció firmando su renuncia, por lo cual no se le adeuda cantidad alguna …"[33]

De ahí que, como se anticipó, aun cuando era al actor a quien le correspondía la fatiga procesal de demostrar que la prestación en comentario le era entregada por el patrón, ello no fue necesario ante la aceptación por parte de la patronal, al referir al respecto, que ese adeudo era inexistente dado que le había sido cubierto en su oportunidad al trabajador, aunque no demostró tal aserto.

Lo que se sostiene, dado que de los recibos de pago exhibidos en juicio, sólo se aprecia la deducción por $********** que se le hacía al trabajador de su salario de manera catorcenal por concepto de fondo de ahorro; y del recibo finiquito no se aprecia que se haya entregado cantidad alguna bajo tal concepto; por tanto, debe concederse el amparo al quejoso para los efectos que se precisarán al final de la presente ejecutoria.

No pasa inadvertido que por cuanto al reclamo del fondo de ahorro, pero tocante al descuento semanal que hacía el patrón por la cantidad de $**********, la Junta sí emitió condena por el reclamo idéntico al que hizo el trabajador de $**********; no obstante, este órgano colegiado advierte que

[33] Ibídem, 23.

de los recibos de pago exhibidos por el propio actor se observa que el descuento que se le hacía era de manera catorcenal y no semanal, no obstante, al no haber controversia en ese aspecto por la parte a quien le perjudica, debe subsistir dicha condena.

En diverso tópico, el quejoso aduce en el tercero de sus conceptos de violación, en esencia, que fue incorrecta la absolución que decretó la Junta responsable al pago de la prima de antigüedad, bajo la consideración toral de que no se actualizó la hipótesis prevista en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo.

Argumentos fundados, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja.

Cierto, en lo atinente a la procedencia de la prima de antigüedad demandada, la Junta del conocimiento absolvió de su pago bajo la consideración de que no se actualizaba la hipótesis contenida en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, pues agregó que quedó demostrado que la relación de trabajo concluyó por decisión del actor, esto es, de manera voluntaria y no contaba con quince años de antigüedad.

Lo anterior es inconstitucional.

Previo a justiciar el anterior aserto, conviene hacer mención que en el laudo reclamado se aplicó el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo y, con fundamento en él, se determinó que no procede el pago de la prima de antigüedad, ya que el actor se retiró voluntariamente por renuncia de su empleo y sólo tenía de antigüedad en servicio para la patronal catorce años, siete meses, dos días.

El citado precepto establece:

"Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes:

"I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada año de servicios;

"II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486;

"III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de

servicios, por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o injustificación del despido; …

"V. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 501; y …"

Ahora bien, en el actual artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subyace el derecho a la igualdad, al establecer:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

Por su parte, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone:

"Artículo 24. Igualdad ante la ley.

"Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley."

La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que uno sólo no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro.

Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto.

Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente.

Luego, si los sujetos comparados no son iguales o no reciben trato desigual, no habrá violación a la garantía individual.

Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida, si es adecuada para el logro del fin legítimo buscado y si resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar.

Al respecto, se cita la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época
"Registro: 164779
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXI, abril de 2010
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: 2a./J. 42/2010
"Página: 427

"IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA.—La igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos, ya que un régimen jurídico no es discriminatorio en sí mismo, sino únicamente en relación con otro. Por ello, el control de la constitucionalidad de normas que se estiman violatorias de la garantía de igualdad no se reduce a un juicio abstracto de adecuación entre la norma impugnada y el precepto constitucional que sirve de parámetro, sino que incluye otro régimen jurídico que funciona como punto de referencia a la luz de un término de comparación relevante para el caso concreto. Por tanto, el primer criterio para analizar una norma a la luz de la garantía de igualdad consiste en elegir el término de comparación apropiado, que permita comparar a los sujetos desde un determinado punto de vista y, con base en éste, establecer si se encuentran o no en una situación de igualdad respecto de otros individuos sujetos a diverso régimen y si el trato que se les da, con base en el propio término de comparación, es diferente. En caso de que los sujetos comparados no sean iguales o no sean tratados de manera desigual, no habrá violación a la garantía individual. Así, una vez establecida la situación de igualdad y la diferencia de trato, debe determinarse si la diferenciación persigue una finalidad constitucionalmente válida. Al respecto, debe considerarse que la posición constitucional del legislador no exige que toda diferenciación normativa esté amparada en permisos de diferenciación derivados del propio texto constitucional, sino que es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable, salvo que se trate de una de las prohibiciones específicas de discriminación contenidas en el artículo 1o., primer y tercer párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues respecto de éstas no basta que el fin buscado sea constitucionalmente aceptable, sino que es imperativo. La siguiente exigencia de la garantía de igualdad es que la diferenciación cuestionada sea adecuada para el logro del fin legítimo buscado; es decir, que la medida sea capaz de causar su objetivo, bastando para ello una aptitud o posibilidad de cumplimiento, sin que sea exigible que los medios se adecuen estrechamente o estén diseñados exactamente para lograr el fin en comento. En este sentido, no se cumplirá el requisito de adecuación cuando la medida legislativa no contribuya a la obtención de su fin inmediato. Tratándose de las prohibiciones concretas de discriminación, en cambio, será necesario analizar con mayor intensidad la adecuación, siendo obligado que la medida esté directamente conectada con el fin perseguido. Finalmente, debe determinarse si la medida legislativa de que se trate resulta proporcional, es decir, si guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, lo que supone una ponderación entre sus ventajas y desventajas, a efecto de comprobar que los perjuicios ocasionados por el trato diferenciado no sean desproporcionados con

respecto a los objetivos perseguidos. De ahí que el juicio de proporcionalidad exija comprobar si el trato desigual resulta tolerable, teniendo en cuenta la importancia del fin perseguido, en el entendido de que mientras más alta sea la jerarquía del interés tutelado, mayor puede ser la diferencia.

"Amparo en revisión 1155/2008. Ramón Ernesto Jaramillo Politrón. 21 de enero de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.

"Amparo en revisión 221/2009. Wal-Mart de México, S.A. de C.V. (ahora Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.). 20 de mayo de 2009. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

"Amparo directo en revisión 1818/2008. Martha Ponce de León y otros. 24 de junio de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Amalia Tecona Silva.

"Amparo en revisión 2131/2009. Carlos Ruiz Carrillo y otros. 11 de noviembre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Blanca Lobo Domínguez.

"Amparo en revisión 50/2010. Minera Peñasquito, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2010. Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

"Tesis de jurisprudencia 42/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de abril de dos mil diez."

Asimismo, en el caso Yatama vs. Nicaragua (serie C, No. 127),[34] la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que es discriminatoria una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable.

Ahora bien, el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo prevé los siguientes supuestos de procedencia para el pago de la prima de antigüedad:

1. En caso de separación voluntaria, siempre y cuando el trabajador haya cumplido quince años de servicios.

---

[34] Sentencia de 23 de junio de 2005, consultable en la página: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_127_esp.pdf

2. Cuando el trabajador se separe por causa justificada, no importa el tiempo de servicios.

3. Cuando el patrón separe al trabajador, justificada o injustificadamente, sin importar el tiempo de servicios.

4. En caso de muerte, cualquiera que sea la antigüedad.

De los supuestos en que procede el pago de la prima de antigüedad, se da como elemento común en que se paga al trabajador cuando se concluye la relación laboral independientemente en la forma en que ocurra, esto es, (i) que el trabajador se separe de forma voluntaria; (ii) que se separe por causa justificada; (iii) que el patrón lo separe ya sea de forma justificada o injustificada; o, (iv) en caso de muerte del trabajador.

Sin embargo, se establece un trato diferenciado, pues tratándose de la separación voluntaria se exige que el trabajador tenga quince años de servicios, por lo menos, mientras que en los otros supuestos no se exige algún requisito de antigüedad, sino que se les paga independientemente del tiempo de servicios prestados.

La diferencia de trato no está justificada, ya que la prima de antigüedad surgió como una prestación legal concomitantemente con la entrada en vigor de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de mayo de mil novecientos setenta, pues anteriormente sólo constituía una prestación de naturaleza extralegal contemplada en los contratos colectivos de trabajo, por lo que el legislador lo único que hizo fue incorporar tal prestación a la ley.

En la exposición de motivos que envió el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, el doce de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho, se expuso con claridad la incorporación de ese beneficio en la nueva Ley Federal del Trabajo, en los términos siguientes:

"El artículo 162 acoge una práctica que está adoptada en diversos contratos colectivos y que constituye una aspiración legítima de los trabajadores: la permanencia en la empresa debe ser fuente de un ingreso anual, al que se da el nombre de prima de antigüedad, cuyo monto será el equivalente a doce días de salario por cada año de servicios. La prima deberá pagarse cuando el trabajador se retire voluntariamente del servicio o cuando sea separado o se separe con causa justificada. Sin embargo, en los casos de retiro voluntario de los trabajadores se estableció una modalidad, consistente en que la prima sólo se pagará si el trabajador se retira después de quince años de servicios,

modalidad que tiene por objeto evitar, en la medida de lo posible, lo que se conoce con el nombre de deserción de los trabajadores. Por tanto, los trabajadores que se retiren antes de cumplir quince años de servicios, no tendrán derecho a percibir la prima de antigüedad. En el mismo artículo 162 y para evitar que en un momento determinado la empresa se vea obligada a cubrir la prima a un número grande de trabajadores, se introdujeron ciertas reglas que permiten diferir parcialmente los pagos.

"La prima de antigüedad tiene un fundamento distinto del que corresponde a las prestaciones de la seguridad social; éstas tienen su fuente en los riesgos a que están expuestos los hombres, riesgos que son los naturales, como la vejez, la muerte, la invalidez, etcétera, o los que se relacionen con el trabajo. Se trata de una prestación que se deriva del solo hecho del trabajo, por lo que, al igual que las vacaciones, debe otorgarse a los trabajadores por el transcurso del tiempo, sin que en ella entre la idea de riesgo; o expresado en otras palabras, es una institución emparentada con la que se conoce con el nombre de fondo de ahorro, que es también independiente de las prestaciones otorgadas por el Seguro Social."

De esa forma, se colige que la finalidad que persiguió el reconocer el derecho a la prima de antigüedad por retiro voluntario hasta que se cumpla con quince años, fue la de evitar, en la medida de lo posible, la deserción de los trabajadores.

Sin embargo, este órgano de control constitucional no advierte causa objetiva y razonable para que trabajadores que tengan menos de quince años de servicio y decidan separarse voluntariamente, no reciban el pago de esta prestación.

En efecto, la prima de antigüedad es un derecho de los trabajadores por el desgaste físico que sufren durante la relación laboral que se obtiene por el solo transcurso del tiempo, la cual se genera por cada año de servicios, cuyo objetivo consiste en reconocer el esfuerzo y colaboración permanente del trabajador por los servicios prestados al concluir su relación laboral; dicha prestación no constituye un incremento al salario que se pague periódicamente, sino que se entrega en una sola ocasión cuando concluye la relación laboral.

Por ello, un derecho que se obtiene únicamente por el transcurso del tiempo no puede perderse porque el trabajador decida separarse voluntariamente de su fuente de ingresos sin haber cumplido quince años, pues con

dicha disposición se intenta obligar, aun contra la voluntad de los trabajadores, a que éstos permanezcan durante quince años en un empleo a fin de obtener el pago de un derecho que ya generaron por el simple transcurso del tiempo.

En efecto, la inconstitucionalidad de este artículo resulta porque el legislador da un trato diferente a trabajadores en igualdad de circunstancias, sin que esa diferencia de trato se encuentre justificada por el hecho de buscar que los trabajadores se abstengan de separarse voluntariamente de su trabajo; pues resulta desmedida la sanción consistente en perder un derecho que ya adquirieron.

Aunado a lo anterior, no se explica la diferencia de trato, porque en el supuesto de que el trabajador dé lugar a que el patrón lo separe de forma justificada por incurrir en alguna causal para terminar la relación sin responsabilidad para el patrón (despido justificado), éste de cualquier forma se encuentra obligado a pagar la prima de antigüedad, independientemente del tiempo de servicios.

Esto es, resulta absurdo que, por un lado, trabajadores que son separados por el patrón con causa justificada, reciban la prima de antigüedad independientemente del tiempo de servicios prestados y, por otro, trabajadores que deciden voluntariamente dejar el empleo no reciban el pago de este derecho por no contar como mínimo con los quince años establecidos en la ley.

Por ello, si el patrón está obligado a pagar esta prima de antigüedad cuando el trabajador es separado de su empleo con causa justificada, es decir, aun cuando el trabajador cometa faltas que ameriten la terminación de la relación laboral sin responsabilidad del patrón, resulta que también debe estar obligado a pagar la prima de antigüedad cuando los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, sin importar su antigüedad, pues el derecho a su pago ya se generó por el simple transcurso del tiempo.

Considerar lo contrario, ocasionaría que en caso de que el trabajador decida separarse de la fuente de trabajo, prefiriera cometer una falta para que sea despedido en forma justificada y, de esa forma, obtener el pago de la prima de antigüedad; lo que no obtendría en caso de que se separara de forma voluntaria, razón por la cual no se consigue el fin buscado con la implementación del requisito de quince años para el pago de esa prestación.

Lo mismo puede decirse de los otros supuestos, en que se paga la prima de antigüedad a los trabajadores que se separen por causa justificada;

son separados por el patrón por causa injustificada (despido injustificado) o muerte, ya que se trata de un derecho que los trabajadores generaron por el transcurso del tiempo, lo cual les genera un beneficio que indebidamente se restringe a los trabajadores que se separan voluntariamente de su empleo, para el caso de que tengan menos de quince años de servicio.

Por ello, el hecho de que a través del mencionado requisito se busque la permanencia en el empleo de los trabajadores, no puede constituir una base objetiva y razonable para privarlos del derecho de obtener el pago de una prestación que generaron por el transcurso del tiempo, ya que si la prima de antigüedad se paga por los años de servicio que presta un trabajador una vez que se termina la relación laboral, no existe ninguna razón para establecer el requisito de quince años de servicio si el trabajador decide voluntariamente dejar su empleo.

Se cita por las razones que en ella se contienen, la siguiente tesis que se comparte.

"Novena Época
"Registro: 162508
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis Aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo XXXIII, marzo de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: XV.2o.15 L
"Página: 2399

"PRIMA DE ANTIGÜEDAD. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE ESTABLECE COMO REQUISITO PARA SU PAGO QUE EL TRABAJADOR QUE SE RETIRE VOLUNTARIAMENTE DE SU EMPLEO CUENTE POR LO MENOS CON QUINCE AÑOS DE SERVICIOS, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La Ley Federal del Trabajo en su artículo 162, fracción I, dispone que la prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario por cada año de servicios, y se otorga en todos los casos de separación de la relación laboral, excepto cuando el trabajador renuncie voluntariamente, supuesto en el cual, sólo se otorgará siempre y cuando aquél cuente con quince años o más de servicios en términos de su fracción III; esto es, si un trabajador tiene catorce años y medio de servicios y se retira voluntariamente de su empleo, no tiene derecho a la prima de antigüedad, lo que se estimó en la exposición de motivos de la reforma a la Ley Federal del

Trabajo de mil novecientos sesenta y ocho, que constituía un aliciente para que el trabajador permaneciera en su empleo, se evitara la rotación en las empresas y se fortaleciera la permanencia en el empleo; no obstante ello, tal excepción constituye un trato discriminatorio para los trabajadores que se colocan en esa hipótesis, lo que transgrede la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

"Amparo directo 533/2010. Abel Humberto Guluarte Cota. 7 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela M. Landa Durán. Secretaria: María Dolores Moreno Romero.

"Nota: El criterio contenido en esta tesis no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia en términos del punto 11 del capítulo primero del título cuarto del Acuerdo Número 5/2003 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veinticinco de marzo de dos mil tres, relativo a las Reglas para la elaboración, envío y publicación de las tesis que emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación, y para la verificación de la existencia y aplicabilidad de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte."

En esa tesitura procede conceder el amparo al quejoso, para los efectos que serán precisados más adelante.

Por otra parte, el quejoso, en su primer concepto de violación, arguye esencialmente que la Junta inobservó que de la cantidad recibida en el finiquito que exhibió la patronal existe una diferencia a su favor, dado que la demandada en ningún momento controvirtió los días que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo se le demandaron; por tanto, que procedía la condena por dicha diferencia, la cual dice, debe ser cuantificada con base en el salario que señaló la parte actora en su demanda laboral.

Argumento que suplido en su deficiencia, es fundado.

Cierto, el trabajador demandó en los incisos a), b) y c) del apartado VIII de su escrito de reclamación laboral, las siguientes prestaciones:

"a) El pago de 30 días de salario por concepto de vacaciones devengadas por el último año de servicios.

"b) El pago de 15 días de salario por concepto de prima vacacional generadas por el último año de servicios prestados.

"c) El pago de 30 días de salario por concepto de aguinaldo devengado y correspondiente del 1 de enero al 29 de julio del año 2009."[35]

Al respecto, la demandada no controvirtió los días por los que se reclamaban tales conceptos, sólo que no se le adeudaba cantidad alguna por dichas prestaciones; pues al contestar esas reclamaciones, en lo conducente, refirió:

"VIII. a), b) y c): El pago de treinta días de salario por concepto de vacaciones devengadas por el último año de servicios prestado (sic), el pago de 15 días de salario por concepto de prima vacacional por el último año de servicios prestado (sic), el pago de 30 días por concepto de aguinaldo correspondiente de enero al 29 de julio del año 2009, en virtud de que al actor no se le adeudaba cantidad alguna por estos conceptos, ya que dicho (sic) concepto (sic) le fueron cubiertos en su parte proporcional hasta el día 29 de julio de 2009, fecha en la que de manera voluntaria renunció y al momento de firmar su finiquito el día 29 de abril del año 2009 (sic) por lo cual no se le adeuda cantidad alguna al hoy actor por estos conceptos como él mismo lo reconoce en la renuncia finiquito antes mencionada, y al respecto se precisa por cuanto hace a todas las prestaciones que reclama con un año de anterioridad a la presentación de la demanda, las mismas se encuentran prescritas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo, excepción ésta que se hace valer sin que implique reconocimiento alguno al reclamo del actor."[36]

Y no obstante que la patronal al final refirió que su excepción no implicaba reconocimiento alguno respecto del reclamo del actor, lo cierto es que por haber afirmado que "dichos conceptos le fueron cubiertos en su parte proporcional al 2009" y que por tanto no se le adeudaba cantidad alguna al actor, ya que así lo había manifestado en el recibo finiquito, ello conlleva el reconocimiento de que al trabajador le pagaba los días en los términos demandados; máxime, cuando el reclamo lo funda el actor en el contrato colectivo de trabajo y la demandada no expresó argumento defensivo alguno a ese respecto.

Sin embargo, no obstante dicho reconocimiento en cuanto a los días que se le pagaban por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, la Junta responsable, al momento de resolver sobre dichas prestaciones, dijo

---

[35] Ibídem, 3.
[36] Ibídem, 23.

que la patronal no demostró haberlas cubierto mediante el recibo finiquito, por lo que en términos del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, procedía a su condena.

Empero, del resultado de las operaciones aritméticas para cuantificar cada uno de esos conceptos, se advierte, arrojan un resultado diverso –en favor del trabajador–.

Ciertamente, las citadas condenas debieron haber sido pagadas, por cuanto a las vacaciones y prima vacacional por el último año de servicios, por treinta y quince días, respectivamente, y en cuanto al aguinaldo, por el periodo del uno de enero al veintinueve de julio de dos mil nueve, por treinta días, tal como la parte actora formuló en su reclamo y la demandada afirmó que ya se lo había cubierto y que, por tanto, no se le adeudaba cantidad alguna.

Así, la Junta condenó a dieciséis días de vacaciones ($**********), prima vacacional ($**********) y ocho punto setenta y cinco días de aguinaldo ($**********), a su decir, debido a la diferencia entre lo que se le había otorgado mediante el recibo finiquito al trabajador y lo que se demandó; y con base en el salario demostrado en el juicio de **********, que corresponde al salario diario conforme al estipendio catorcenal de ********** que adujo la parte actora en su demanda laboral, pues aun cuando el mismo fue controvertido, no fue probado uno diverso por la demandada, tal como lo determinó la Junta en el laudo combatido.

Sin embargo, a juicio de este tribunal, los treinta días de vacaciones por el último año demandado, corresponden a la suma de ********** (que se obtiene de la multiplicación de treinta días por el salario diario de $**********).

Los quince días por prima vacacional por el último año de servicios prestados, a ********** (resultado de multiplicar quince días por el salario diario de $**********).

Y la parte proporcional de los treinta días por concepto de aguinaldo (que por haber laborado doscientos nueve días en el año dos mil nueve, esto es, del uno al veintinueve de julio, le corresponde la parte proporcional de diecisiete punto siete días) que es de ********** (que se obtiene de la multiplicación de los 17.7 días por $********** de salario diario).

De ahí que es inconcuso, que en total debió recibir el trabajador por dichos conceptos la cantidad de **********.

Empero, si del recibo finiquito se advierte que se le pagó al trabajador por dichos conceptos únicamente:

- Vacaciones: **********.
- Prima vacacional: **********.
- Aguinaldo: **********.

Montos que en total arrojan una suma de **********, es evidente que existe una diferencia a favor del trabajador de **********; y, por tanto, habrá de conceder el amparo al quejoso para los efectos que más adelante se precisarán.

Por último, en el resto de los conceptos de violación el quejoso se duele de la absolución al pago de tiempo extra que por tres horas diarias reclamó de la demandada, pues en su concepto no es inverosímil que haya laborado en las condiciones que mencionó en su demanda laboral.

Argumento que, suplido en su deficiencia, es parcialmente fundado.

Para comprobar lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito procede, en principio, al estudio oficioso de la legalidad de las horas extras a que se absolvió a la parte demandada, en atención a la razonabilidad y circunstancias en que se desarrolló la jornada de trabajo, de acuerdo con las facultades derivadas de la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro y texto:

"Novena Época
"Registro: 1009433
"Instancia: Segunda Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Apéndice* 1917-Septiembre 2011
"Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección -Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 - Adjetivo
"Materia(s): Laboral
"Tesis: 638
"Página: 625

"HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL

TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.—Tratándose del reclamo del pago de horas extras de labores, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o sobre la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón, pero cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia.

"Contradicción de tesis 201/2005-SS. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 20 de enero de 2006. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Estela Jasso Figueroa.

"Tesis de jurisprudencia 7/2006. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de enero de dos mil seis.

"*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 708, Segunda Sala, tesis 2a./J. 7/2006; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1100."

Así, contrario a lo que se alega, sí se considera inverosímil que el trabajador, aquí quejoso, haya laborado una jornada extraordinaria de dieciocho horas semanales en un horario de trabajo que iniciaba a las diez y concluía a las veintiuna horas, de lunes a sábado de cada semana, sobre todo, cuando a decir del actor en su horario no se incluía descanso alguno para ingerir alimentos ni para reponer energías durante todo el tiempo que duró su relación laboral que, como ya se vio, fue de catorce años, siete meses, dos días.

Lo anterior, tal como, en esencia, lo estimó la Junta responsable al condenar a la parte patronal al pago de las horas extras, bajo los argumentos siguientes:

"Noveno. Si bien es cierto el patrón faltó a la obligación que le impone el numeral 784, fracción VIII, a fin de acreditar la jornada que aseguró tenía el actor, a juicio de esta Junta, la presunción legal que se surte a favor del accionante es insuficiente para condenar a las horas extras reclamadas, pues apreciando los hechos en conciencia, verdad sabida y buena fe guardada, como lo dispone el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, se estima que el horario que asevera el accionante tenía, debe ser tachado de inverosímil, pues según su dicho laboró once horas diarias (de las diez de la mañana a las nueve de la noche) por casi quince años, sin haber gozado de tiempos intermedios para reposar o tomar sus alimentos, jornada que no podría soportarse físicamente por un tiempo tan prolongado. Ante tal calificativa, se absuelve a la patronal del pago de las horas extras reclamadas ..."[37]

Sin embargo, este Tribunal Colegiado estima que no sólo se deben considerar los elementos que tomó en cuenta la Junta responsable para absolver a la demandada del pago de las horas extras, sino que también debió realizar un estudio sobre la razonabilidad de dicho horario con respecto a las actividades que desarrollaba el trabajador ante la patronal, para de esa forma advertir si es creíble que hubiese laborado tiempo extraordinario como lo manifestó en su demanda laboral la parte actora.

Así, el trabajador en el juicio de origen dijo desempeñar la función de almacenista, de cuyas actividades dio cuenta en el juicio la testigo **********, quien ofertada por el accionante del juicio laboral, en diligencia de doce de abril de dos mil diez[38] manifestó, entre otras cosas:

➢ Conocer al trabajador ********** por haber sido su auxiliar administrativo "en el proceso desde el inicio de la operación hasta el término de ella misma, bueno me ebncargaba (sic) lo primero que llegábamos (sic) era checar cuál era la demanda de las sucursales en relación a sus pedidos y de acuerdo a ellos sacábamos un listado qué mercancía teníamos (sic) y qué mercancía nos hacía falta, la cual solicitábamos al almacén general, después de ello se modificaban los pedidos, se sustituían claves y se imprimían las etiquetas para el armado de los pedidos, y a su vez se atendían a los vendedores para entregarles sus hojas de carga que eran sus notas de venta, hojas de reparto y su total de venta; también se empezaba el proceso de la operación el cual consistía en el armado de los pedidos, terminando de etiquetar se empezaban a mandar notas de venta, hojas de reparto y hojas de carga y armar los

[37] Ibídem, 292.
[38] Ibídem, 82 vuelta a 83 vuelta.

paquetes para entregar a los vendedores, después de eso por la tarde esperábamos a que llegaran los vendedores para recibirles sus pedidos y sus faltantes y nos íbamos hasta recibir el último vendedor."

Conforme a dichas actividades, es dable que el trabajador se quedara a laborar hasta las veintiuna horas que señaló en su demanda laboral, pues se advierte que conforme a su labor de almacenista, se encargaba del reparto, solicitudes y recepción de mercancía a los vendedores, por lo que debía estar presente hasta que éstos llegaran y realizara así el inventario correspondiente.

No obstante, no puede considerarse creíble la versión del trabajador en el sentido de que no contaba con algún tiempo para ingerir sus alimentos y reponer energías y que bajo esas circunstancias laboró por casi quince años.

Lo anterior, porque por simple lógica y razonablemente no se justifica una jornada laboral de once horas diarias de lunes a sábado, sin tiempo para el descanso ni la ingesta de alimentación alguna, lo cual, *per se*, hace evidente que si cualquier tipo de actividad genera un desgaste físico y en el caso mental dado que, como se dijo, el actor tenía a su cargo la administración de la mercancía que comercia la patronal, no es creíble que la desarrollara el actor por un periodo tan prolongado de casi quince años en las condiciones apuntadas.

De ahí que este tribunal considere que por la naturaleza de las actividades del actor se requiera de un esfuerzo físico y mental continuo, que permita advertir, conforme a la razonabilidad del tiempo extraordinario que dijo laborar para la patronal, inverosímil el horario pretendido, dado que no permiten estimar que el común de la gente pueda desempeñarse en ese horario sin contar con tiempo para reposar, comer y reponer sus energías.

Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

"Octava Época
"Registro: 1009435
"Instancia: Cuarta Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: *Apéndice* 1917-Septiembre 2011
"Tomo VI. Laboral Primera Parte - SCJN Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 - Adjetivo
"Materia(s): Laboral
"Tesis: 640
"Página: 627

"HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.—De acuerdo con el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo y la jurisprudencia de esta Sala, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si no demuestra que sólo se trabajó la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame, pero cuando la aplicación de esta regla conduce a resultados absurdos o inverosímiles, las Juntas deben, en la etapa de la valoración de las pruebas y con fundamento en el artículo 841 del mismo ordenamiento, apartarse del resultado formalista y fallar con apego a la verdad material deducida de la razón. Por tanto, si la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias acordes con la naturaleza humana, como cuando su número y el periodo en que se prolongó permiten estimar que el común de los hombres pueden laborar en esas condiciones, por contar con tiempo suficiente para reposar, comer y reponer sus energías, no habrá discrepancia entre el resultado formal y la razón humana, pero cuando la reclamación respectiva se funda en circunstancias inverosímiles, porque se señale una jornada excesiva que comprenda muchas horas extras diarias durante un lapso considerable, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, inclusive absolviendo de la reclamación formulada, si estiman que racionalmente no es creíble que una persona labore en esas condiciones sin disfrutar del tiempo suficiente para reposar, comer y reponer energías, pero en todo caso, deberán fundar y motivar tales consideraciones.

"Contradicción de tesis 35/92. Entre las sustentadas por el Primer y Octavo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993. Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Fernando Estrada Vázquez.

"Tesis de jurisprudencia 20/93. Aprobada por la Cuarta Sala de este Alto Tribunal en sesión privada del doce de abril de mil novecientos noventa y tres, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Carlos García Vázquez, Juan Díaz Romero, Ignacio Magaña Cárdenas, Felipe López Contreras y José Antonio Llanos Duarte.

"*Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 65, mayo de 1993, página 19, Cuarta Sala, tesis 4a./J. 20/93; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo XI, mayo de 1993, página 81.

"*Apéndice* 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 201, Cuarta Sala, tesis 251."

En tales condiciones, no se puede tener totalmente cierta la jornada de trabajo que dijo la parte obrera haber laborado para la patronal; esto es, de las diez a las veintiuna horas, de lunes a sábado, sin descanso para ingerir alimentos, reposar y reponer energías; que equivale a una jornada diaria de once horas, que incluye una extraordinaria de tres horas diarias.

Sin embargo, dicha declaratoria de inverosimilitud, en la especie, no puede tener el efecto de absolver a la parte demandada de su pago, pues no debe inadvertirse que esta última incumplió durante la instrucción del procedimiento laboral con la carga procesal que le correspondía de acreditar la jornada en la que se desempeñaba el actor; es más, ni siquiera refirió en específico cuál era la que cubría, pues se limitó a exponer que la jornada de ocho horas en que laboró lo acreditaba con el contrato individual de trabajo que celebró con el actor el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

No obstante, como bien lo expuso la Junta responsable, dicha documental es ineficaz para demostrar la jornada de la parte operaria, en tanto que con ella sólo se acredita que así fue como se pactó al momento de suscribirla, empero, con ella no se prueba la jornada a la data en que el actor renunció a su fuente de trabajo.

Lo anterior, al tenor de la jurisprudencia siguiente que es compartida por este tribunal:

"Novena Época
"Registro: 1010301
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Jurisprudencia
"Fuente: *Apéndice* 1917-Septiembre 2011
"Tomo VI. Laboral Segunda Parte - TCC Primera Sección - Relaciones laborales ordinarias Subsección 2 - Adjetivo
"Materia(s): Laboral
"Tesis: 1506
"Página: 1547

"HORARIO DE LABORES, EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO NO ES PRUEBA SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL.—El contrato individual de trabajo únicamente demuestra la jornada diaria en que fue contratado el trabajador, pero no es prueba suficiente para demostrar el horario en el que venía prestando sus servicios, pues una cosa es el horario con el que se contrata, y otra muy diferente la forma en que diariamente se desarrolla la labor,

pues no por el hecho de que se contrate un horario determinado, significa que necesariamente se va a respetar, excluyendo el trabajo en tiempo extraordinario.

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

"Amparo directo 1573/96. Automotriz Tame, S.A. de C.V. 6 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretario: Jorge Dimas Arias Vázquez.

"Amparo directo 4473/96. Mario Augusto Andrade Mortera y otro. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz.

"Amparo directo 293/97. Francisco Javier Maya Gil. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretario: Jorge Dimas Arias Vázquez.

"Amparo directo 11383/97. Salvador González García. 21 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Idalia Peña Cristo.

"Amparo directo 14183/97. Esteban Martínez Herrera. 18 de febrero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Edith Cervantes Ortiz. Secretaria: Guadalupe Hernández Jiménez.

"*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 926, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.3o.T. J/8; véase ejecutoria en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 926."

Por tal motivo, en observancia al principio de equilibrio y justicia social entre las partes, que subyace en el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo,[39] este tribunal estima justo que la parte patronal retribuya el pago de la jornada extraordinaria reclamada por el actor, a razón de nueve horas a la semana, que como máximo les está permitido laborar, según se dispone en el artículo 66 de la mencionada legislación del trabajo.[40]

Tal aseveración encuentra apoyo en las siguientes consideraciones.

---

[39] "Artículo 2o. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones.

[40] "Artículo 66. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

El artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo establece que las normas en materia laboral pretenden conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y los patrones; por su parte, el 5o., en su fracción II, de la propia legislación, señala que las disposiciones de dicha ley son de orden público, por lo que no producirá efecto alguno la estipulación que establezca una jornada mayor a la permitida por la misma contra el goce y ejercicio de derechos; y, el 66, consigna que la jornada de trabajo extraordinaria no podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.

Bajo tales premisas, este órgano de control constitucional, en observancia al principio de equilibrio y justicia social entre las partes que, como se dijo, subyace en la ley laboral en comento, estima justo que la parte patronal retribuya el pago de la jornada extraordinaria al actor por el máximo legal de nueve horas semanales; pues no puede omitirse la sanción procesal a la que se hizo merecedora con motivo de la omisión de comprobar en juicio la jornada laboral en la que adujo se desempeñaba el actor.

En efecto, no debe inadvertirse que respecto a la jornada laboral en la que dijo el actor realizaba sus actividades para la patronal, de las diez a las veintiuna horas, de lunes a sábado, sin tiempo para descansar e ingerir alimentos; la parte demandada se excepcionó bajo el argumento de que era mentira dicho horario, puesto que el citado actor sólo trabajó una jornada de ocho horas –aunque no especificó cuál era el que cubría–.

Ante la citada controversia, el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo,[41] prevé que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando se controvierta, entre otros aspectos, la duración de la jornada de trabajo; para lo cual requerirá al patrón sobre la exhibición de los documentos que demuestren dicho tópico, bajo el apercibimiento que, de no presentarlos, con tener presumiblemente cierto el horario que aduzca el trabajador en su demanda laboral.

---

[41] "Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:
"…
"VIII. Duración de la jornada de trabajo;
"…"

En el particular, el patrón, no obstante que controvirtió la jornada de trabajo, fue omiso en acreditar con sus medios de convicción el horario en el que afirmó se desempeñaba el accionante del juicio de origen; pues como ya se dijo, y bien lo advirtió la Junta resolutora, el contrato individual de trabajo de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, no es idóneo para acreditar tal aspecto pues, como también ya se dijo, sólo demuestra la jornada que se pactó, mas no las que en realidad cubría el actor.

Asimismo, en el desahogo de la prueba confesional ofrecida a cargo del actor, éste negó haberse desempeñado en el horario indicado por la demandada; la testimonial se declaró desierta ante la incomparecencia de sus testigos; y la renuncia y finiquito sólo fueron aptos para demostrar que el actor fue quien decidió dar por terminada la relación laboral.

Y toda vez que no exhibió en la audiencia de inspección ofertada por la parte trabajadora la documentación requerida, con la que, entre otros aspectos, ésta pretendía demostrar la jornada que refirió en su demanda laboral, se hizo merecedora a la sanción procesal de tener por cierto, de manera presumible, el horario indicado por el actor, en términos del numeral 784, fracción VIII, antes invocado.

Lo anterior trajo como consecuencia que la Junta del conocimiento, de manera jurídica, determinara en el laudo combatido tener por cierto el horario indicado por el actor; sin embargo, al considerar inverosímil la jornada señalada por la parte accionante del juicio laboral, como ya se vio en parágrafos precedentes, absolvió del pago de dieciocho horas extras semanales reclamadas a **********.

En tal sentido, se colige que, si la parte demandada controvirtió la jornada de trabajo que dijo el operario en su ocurso de reclamación laboral, empero, fue omisa en demostrar el horario que aludió en su contestación, cuando tenía obligación legal de hacerlo, es inconcuso, que se hizo acreedora a la sanción procesal relativa a tener presumiblemente cierto el horario que adujo el trabajador.

Ahora bien, a fin de no desatender dicha consecuencia legal, este órgano colegiado reitera su postura, en el sentido de que aquella declaratoria de inverosimilitud de la jornada extraordinaria afirmada por el actor, no necesariamente debe llegar al extremo de absolver de manera total a la demandada de su pago, principalmente, con el fin de no hacer nugatoria la inercia legal de tener por cierta la jornada laboral que afirmó la parte trabajadora en

su escrito de reclamación, ante la falta de satisfacción por parte de la patronal de la carga procesal que pesaba en su contra para demostrar el horario que adujo al dar contestación a la demanda laboral; lo cual sin duda, redunda en perjuicio de la parte trabajadora y, en beneficio desmerecido e injustificado hacia el patrón omiso.

Dicho de otro modo, la declaratoria de inverosimilitud de la jornada a la que arribó la Junta responsable y se confirmó en la presente ejecutoria, no puede dejar sin efecto la consecuencia de la norma previsora –tener por presuntivamente cierta la jornada que afirma la parte actora en su demanda laboral– a la que se hizo acreedora la patronal, debido a su conducta omisiva de demostrar el horario del trabajador, incluso, de especificar cuál era la jornada en que se desempeñaba el actor; cuando se trata de una empresa establecida y con presencia trasnacional, y respecto de la cual no sería dable considerar que no ejerce control sobre el horario de trabajo de sus operarios –como lo afirmó la patronal–.

Lo que es así, pues si se lleva al absurdo dicha consideración, se arribaría en la incongruencia manifiesta en el actuar de las autoridades jurisdiccionales cuando, por un lado, se sancione a alguna de las partes por incumplir con la carga procesal de mérito fincada en su contra y, por otro, que beneficie a la propia parte omisa con su absolución al pago de horas extras, debido a la declaratoria de inverosimilitud de la jornada laboral.

Además, tal proceder evidentemente trastoca el aludido principio de equilibrio y justicia procesal que debe imperar entre las partes en conflicto; en tanto que, respecto al horario extraordinario de trabajo señalado por la parte accionante del juicio laboral, aun cuando la patronal lo tildó de falso –pero ni siquiera adujo cuál era el que tenía el actor– no demostró el genérico de ocho horas que afirmó en su contestación, no podría ser materia de condena, aun ante la existencia de la sanción procesal de tener por presuntivamente cierto el que señaló la parte actora.

Lo anterior, debido a la inverosimilitud con que fue calificada la jornada laboral; máxime, cuando, en la especie, dicho examen que derivó en lo inverosímil del horario, se realizó oficiosamente por la autoridad resolutora, y no a impugnación o formulación de argumento en el sentido que refirió la Junta responsable, pues si bien la parte demandada la tildó de inverosímil, lo hizo bajo la base de que era así, porque era increíble que si hasta la presentación de la demanda laboral trabajaba en horario extraordinario, nunca lo hubiera demandado, cuando inició sus labores para la patronal desde diciembre de mil novecientos noventa y cuatro; sin embargo, se limitó a controvertir

la jornada, oponer la excepción de prescripción en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo,[42] pero omitió probar el horario que produjo en su contestación.

En tal tesitura, la calificación de inverosimilitud de la jornada laboral a que nos hemos referido, no puede perjudicar sólo a la parte actora, y beneficiar a la demandada, cuando ésta no cumplió su carga procesal, con el consecuente desequilibrio que ello provoca; más aún, cuando la desatención de no llevar los controles de asistencia en el lugar de trabajo, que lógicamente le corresponde al patrón, no debería socavar derechos de la parte operaria, cuando debido a ello, fue que la patronal incumplió con su obligación procesal de probar el horario que emitió en su contestación.

Bajo la anterior argumentación, este órgano colegiado considera prudente, en plena observancia al principio de equilibrio y justicia social entre las partes, y con el fin de no hacer nugatorio aquel apercibimiento decretado a la parte demandada, en el sentido de que si no demostraba el horario del

---

[42] "Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes."
"Artículo 517. Prescriben en un mes:
"I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y
"II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo.
"En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible.
"En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación."
"Artículo 518. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo.
La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación."
"Artículo 519. Prescriben en dos años:
"I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo;
"II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y
"III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas.
"La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo."

trabajador que afirmó en su contestación, se tendría presumiblemente cierta la jornada que refirió la parte actora en su demanda laboral; empero, sin desatender que del análisis de la razonabilidad de la jornada laboral que dijo tener la parte accionante del juicio laboral, la misma se apreció inverosímil.

Sin embargo, en aras de dar solución a dicha disyuntiva en un justo medio, debe ponderarse que, si en términos del artículo 66 de la Ley Federal de Trabajo, la jornada extraordinaria máxima legal es de nueve horas a la semana, la Junta resolutora deberá emitir condena respecto al horario extraordinario que reclamó el trabajador, con base en dicha jornada máxima legal y sin desatender la excepción de prescripción opuesta por la demandada.

De ahí que si esto es así, por un lado se atiende a la sanción procesal a la que se hizo acreedora la patronal por no haber demostrado el horario en el que dijo se desempeñaba el actor; y por otro, no se le otorga a éste el pago de la totalidad de las horas extras reclamadas, dada la inverosimilitud de la jornada que señaló.

Lo anterior no pugna con las consideraciones vertidas en las jurisprudencias sustentadas por la otrora Cuarta, y actual Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL." y, "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.", transcritas en el cuerpo de la presente ejecutoria, a virtud de que en las mismas no se invocan imperativos *ex profeso* de que cuando se advierta inverosimilitud en la jornada pretendida por la parte trabajadora, indefectiblemente deba absolverse a la patronal; sino sólo imperan, por un lado, que ante un horario que se estime inverosímil, luego del estudio oficioso de la razonabilidad del mismo, tanto las Juntas como el tribunal de amparo pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos.

Y, por otro, que en la valoración de las pruebas se actúe con apego a la verdad material deducida de la razón, "inclusive absolviendo de su pago", es decir, la sanción a una aparente falsificación de los hechos o de la verdad real y material que se ventila en el proceso laboral, puede llegar a ser "inclusive" la absolución, mas no se establece en dichos criterios jurisprudenciales que tal absolución deba ser obligatoria o indefectible.

De ahí que este tribunal considera que, como en el caso particular, y dadas las características personales del trabajador, como las propias de las

funciones que desarrollaba para realizar su labor de almacenista del producto que comercia la empresa demandada; se llega a la conclusión de que resulta creíble y, por tanto posible, que dicho actor sí hubiera laborado jornada extraordinaria de trabajo, y no únicamente hasta las dieciocho horas como esencialmente lo afirmó la patronal en su contestación a la demanda, pero no en la proporción y extensión a que alude, la cual, como ya se explicó, en esas condiciones y totalidad de tiempo (tres horas extraordinarias diarias de lunes a sábado de cada semana, empero, desarrollando su jornada diaria once horas, sin contar con tiempo alguno para ingerir alimentos y reponer energías, durante casi quince años de trabajo) no resulta creíble.

Así, con el objeto de no dudar totalmente del dicho del actor, en cuanto a que laboró horas extras, tampoco creer absolutamente que durante los quince años en que se desempeñó para la patronal por once horas diarias, no contaba con tiempo alguno para ingerir alimentos y reponer energías; pero además, con el propósito de demostrar que en el caso particular, ante la falta de acreditación por parte de una empresa como la demandada, formalmente constituida, y de las dimensiones que representa en la industria mexicana, de la jornada laboral por medio de los controles de asistencia –cuando no es creíble que no lleve control sobre ese tópico– y dada la posibilidad de que los trabajadores sí hubiesen laborado horas extras, no debe eximirse al patrón de la totalidad respecto del pago extraordinario que se le reclama, y al que fue condenado; se llega a la conclusión de que lo justo es condenarlo por tal prestación, pero solamente en la proporción que como máximo establece la propia ley laboral, es decir, a nueve horas extras semanales.

Con esto se logra lo que se considera en el caso particular una justa condena para ambas partes. No todo lo que refirió el actor, pero tampoco el extremo de absolver al patrón por estimarse la inverosimilitud de la jornada extraordinaria demandada.

Se estima justo sobre todo, porque la omisión del patrón de haber demostrado un aspecto que la propia ley laboral le exige vigilar y documentar, debe generarle una consecuencia como en el caso ocurre.

Lo que encuentra justificación, porque los criterios jurisprudenciales antes aludidos, autorizan la emisión de consideraciones diversas a la absolución, siempre que se hagan con base en el estudio de la razonabilidad de la jornada laboral.

Los anteriores razonamientos dieron origen a la siguiente tesis sustentada por este tribunal.

"Época: Décima Época. Registro: 2003787. Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. Tipo Tesis: Tesis Aislada. Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Localización: Libro XX, mayo de 2013. Tomo 3. Materia(s): Laboral. Tesis: XVIII.4o.10 L (10a.). Página 2148. [TA]; Décima Época; TCC; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, página 2148.

"TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006).—Conforme a la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, la carga de la prueba para demostrar la jornada laboral corresponde al patrón, empero, si no se satisface, opera la presunción legal de tener por cierta la que sea materia de reclamo, según el diverso precepto 805 de la citada ley. Ahora bien, el Máximo Tribunal del País, al abordar estos aspectos en las jurisprudencias 4a./J. 20/93 y 2a./J. 7/2006, sostuvo que cuando el patrón incumple con la carga de demostrar la jornada laboral, y la acción de pago por concepto de tiempo extraordinario se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de los hechos, y que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, pudiendo, inclusive, absolver de su pago. Sin embargo, en cada caso deben ponderarse las actividades desempeñadas por el trabajador pues, aun cuando se advierta que el reclamo del tiempo extra es inverosímil, pero se aprecie factible que trabajó en jornada extraordinaria –aunque no en los términos reclamados– y, dependiendo de las circunstancias, pueden evitarse las soluciones radicales que implican, esto es, tanto la absolución del pago reclamado por concepto de horas extras, como la condena a su pago total. Lo anterior, debido a que la calificación de inverosimilitud de la jornada de trabajo, dada la forma en que se formuló el reclamo, no puede llegar al extremo de perjudicar sólo a la parte actora y beneficiar a la demandada, cuando ésta no cumplió con la carga procesal de demostrar la jornada de sus empleados, con el consecuente desequilibrio que ello provoca; más aún, cuando la desatención de no llevar los controles de asistencia en el lugar de trabajo, que legalmente le corresponde al patrón, no debería socavar derechos de la parte operaria, sobre todo tratándose de empresas que por su dimensión y presencia trasnacional resultara infactible considerar que carecen de sistemas de control de horario sobre su personal. Por tanto, para resolver la controversia en estricto apego a los principios de justicia y equilibrio social con el que deben observarse las normas para resolver las controversias laborales, de acuerdo con el artículo

2o. de la Ley Federal del Trabajo, debe ponderarse la viabilidad, en cada caso concreto, si fuere procedente, de condenar al pago por el tiempo extra laborado, aunque con base en la jornada máxima legal de nueve horas semanales, prevista en el artículo 66 de la mencionada legislación. Con tal proceder no se contravienen los citados criterios jurisprudenciales, porque en su aplicación es posible la toma de otras posturas, pues en aquéllas se indica que en la valoración de las pruebas las Juntas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, 'inclusive absolviendo de su pago', esto es, la absolución al patrón no es forzosa cuando se le reclama tiempo extra inverosímil, ni es la única forma de resolver respecto de dicha prestación.

"Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.

"Amparo directo 383/2012. Grupo Sabritas, S. de R.L. de C.V. 31 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Héctor Flores Irene.

"Nota: Las jurisprudencias 4a./J. 20/93 y 2a./J. 7/2006 citadas, aparecen publicadas en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 65, mayo de 1993, página 19 y *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 708, con los rubros: 'HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.' y 'HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.', respectivamente."

Cabe precisar que la postura de este tribunal no va en contra de las precitadas jurisprudencias, y que la tendencia en esta ejecutoria es fijar, cuando se trate de empresas establecidas, cuyas dimensiones comerciales y estructurales permita advertir que sí se ejerce control en el horario de sus trabajadores, el pago justo de horas extras solamente cuando el reclamo respectivo sea inverosímil en su proporción demandada, o como en la especie, se aduzca que durante un tiempo prolongado (en el caso por durante casi quince años) se desempeñe una actividad durante una jornada en su proporción inverosímil, sin contar con tiempo para ingerir alimentos y reponer energías, mas no que sea inverosímil que los trabajadores hayan laborado horas extras.

Tampoco se desconoce que cuando se reclaman jornadas extraordinarias aparentemente excesivas, deban pagarse al trabajador, siempre y cuando éste haya demostrado fehacientemente en el juicio que sí laboró tal jornada, y en apariencia excesiva.

Ante la conclusión alcanzada, si el acto reclamado es violatorio de las garantías individuales de seguridad jurídica y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y con base en las consideraciones de la presente ejecutoria, realice lo siguiente:

• Se pronuncie sobre la prestación correspondiente al pago del fondo de ahorro que demandó el actor en el inciso f) de su reclamación laboral –pago de fondo de ahorro por la cantidad que le correspondía aportar al patrón del uno de enero al veintinueve de julio de dos mil nueve– bajo la premisa de que no hay controversia sobre el derecho del trabajador a recibirla.

• Respecto a la prestación reclamada consistente en la prima de antigüedad, se abstenga de considerar como exigencia para su procedencia los quince años de servicio y, con base en ello, resuelva lo que en derecho corresponda.

• Determine que la condena al pago demandado de treinta días de vacaciones devengadas en el último año de servicios; quince días de prima vacacional por el último año de servicios; y, treinta días de aguinaldo por la parte proporcional al dos mil nueve, esto es, del uno de enero al veintinueve de julio, debe ser de la siguiente manera:

a) Vacaciones, por ********** (que se obtiene de la multiplicación de treinta días por el salario diario de $**********).

b) Prima vacacional por ********** (resultado de multiplicar quince días por el salario diario de $**********).

c) Parte proporcional de los treinta días por concepto de aguinaldo (diecisiete punto siete días) por ********** (que se obtiene de la multiplicación de los 17.7 días por $********** de salario diario).

• Asimismo, que en total debió recibir el trabajador por dichos conceptos la cantidad de **********.

• Y concluir, que si en el recibo finiquito que exhibió la patronal en el juicio laboral, sólo se le pagó al trabajador por dichos conceptos la cantidad de **********, existe una diferencia a favor del trabajador de **********; y, por tanto, habrá de emitir la condena respectiva.

• Determine que no obstante la inverosimilitud que se aprecia en la jornada extraordinaria demandada por el trabajador, emita la condena que

corresponda, respecto al pago del tiempo extraordinario, donde se tome como base la jornada máxima legal extraordinaria de nueve horas semanales, prevista en el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo; para lo cual, deberá atender a la excepción de prescripción que en términos del artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo opuso la parte demandada.

Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito (AGC 2/2009); así como del oficio **********, de catorce de junio de dos mil doce, remitido a este tribunal por la Secretaría General de Acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal; debe conservarse la integridad del presente expediente por tratarse de un amparo directo cuya sentencia contiene criterios jurídicos de relevancia respecto de los cuales, sobre el tópico de horas extras se ha pronunciado precedente en el juicio de amparo directo **********, y en lo tocante al tema de la prima de antigüedad se emitirá la tesis correspondiente; cuyos criterios eventualmente podrán integrar jurisprudencia de este órgano de control constitucional, por lo que no es susceptible de depuración.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Para los efectos precisados en el último apartado considerativo de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el laudo de veintidós de mayo de dos mil trece, dictado en el juicio laboral **********, por la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.

SEGUNDO.—Consérvese en su integridad el presente expediente por presentar relevancia.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno, con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos a la autoridad responsable; para certeza de las partes glósese copia certificada del laudo reclamado y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos, con adiciones y reformas al proyecto presentado, en términos del artículo 187 de la Ley de Amparo vigente, hasta el día de hoy veintiuno de enero de dos mil catorce, en que lo permitieron las labores de este Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, lo resolvió el mismo, integrado por los Magistrados, presidente Juan José Franco Luna, Gerardo Dávila Gaona, así como por el licenciado Efrén Mejía López, secretario en funciones de Magistrado de Circuito, autorizado en sesión celebrada el quince de octubre de dos mil trece, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la

Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por vacancia de la plaza; siendo ponente el primero de nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006). Conforme a la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, la carga de la prueba para demostrar la jornada laboral corresponde al patrón, empero, si no se satisface, opera la presunción legal de tener por cierta la que sea materia de reclamo, según el diverso precepto 805 de la citada ley. Ahora bien, el Máximo Tribunal del País, al abordar estos aspectos en las jurisprudencias 4a./J. 20/93 y 2a./J. 7/2006, sostuvo que cuando el patrón incumple con la carga de demostrar la jornada laboral, y la acción de pago por concepto de tiempo extraordinario se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, las Juntas pueden apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de los hechos, y que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, pudiendo, inclusive, absolver de su pago. Sin embargo, en cada caso deben ponderarse las actividades desempeñadas por el trabajador pues, aun cuando se advierta que el reclamo del tiempo extra es inverosímil, pero se aprecie factible que trabajó en jornada extraordinaria –aunque no en los términos reclamados– y, dependiendo de las circunstancias, pueden evitarse las soluciones radicales que implican, esto es, tanto la absolución del pago reclamado por concepto de horas extras, como la condena a su pago total. Lo anterior, debido a que la calificación de inverosimilitud de la jornada de trabajo, dada la forma en que se formuló el reclamo, no puede llegar al extremo de perjudicar sólo a la parte actora y beneficiar a la demandada, cuando ésta no cumplió con la carga procesal de demostrar la jornada de sus empleados, con el consecuente desequilibrio que ello provoca; más aún, cuando la desatención de no

llevar los controles de asistencia en el lugar de trabajo, que legalmente corresponden al patrón, no debería socavar derechos de la parte operaria, sobre todo tratándose de empresas que por su dimensión y presencia trasnacional resultara infactible considerar que carece de sistemas de control de horario sobre su personal. Por tanto, para resolver la controversia en estricto apego a los principios de justicia y equilibrio social con el que deben observarse las normas para resolver las controversias laborales, de acuerdo con el artículo 2o. de la referida ley, debe ponderarse la viabilidad, en cada caso concreto, si fuere procedente, de condenar al pago por el tiempo extra laborado, aunque con base en la jornada máxima legal de nueve horas semanales, prevista en el artículo 66 de la mencionada legislación. Con tal proceder no se contravienen los citados criterios jurisprudenciales, porque en su aplicación es posible la toma de otras posturas, pues en aquéllas se indica que en la valoración de las pruebas las Juntas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, esto es, la absolución al patrón no es forzosa cuando se le reclama tiempo extra inverosímil, ni es la única forma de resolver respecto de dicha prestación.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
XVIII.4o. J/5 (10a.)

Amparo directo 383/2012. Grupo Sabritas, S. de R.L. de C.V. 31 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Héctor Flores Irene.

Amparo directo 225/2013. Onasis Cacique Almanza. 3 de mayo de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hernández García. Secretaria: Lorena Domínguez Ávalos.

Amparo directo 456/2013. Luis Raúl López Orona. 22 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretaria: Edna Viridiana Rosales Alemán.

Amparo directo 489/2013. Juan Martínez Vázquez. 7 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Gustavo Antonio Aguilera Ortiz.

Amparo directo 641/2013. 6 de diciembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Juan José Franco Luna. Secretario: Héctor Flores Irene.

Nota: Las jurisprudencias 4a./J. 20/93 y 2a./J. 7/2006 citadas, aparecen publicadas en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 65, mayo de 1993, página 19 y *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 708, con los rubros: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES." y "HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)].

AMPARO DIRECTO 7/2013. 21 DE FEBRERO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL MENDOZA MONTES. SECRETARIA: LILIANA SANTOS GÓMEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio de los conceptos de violación.

Previo al pronunciamiento de fondo, debe precisarse que el laudo reclamado se emitió en cumplimiento de una diversa resolución protectora a favor de la parte contraria, sin que la quejosa haya promovido amparo adhesivo, situación que no impide a este tribunal el estudio de alguna violación procesal planteada por considerarla consentida, en virtud de que aquella formalidad no le era exigible a la impetrante del amparo.

Se sostiene así, en virtud de que si bien el amparo directo adhesivo se incorporó en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre de ese año, lo cierto es que se reglamentó hasta la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, cuya sanción de preclusión del derecho se plasmó de forma expresa en el párrafo penúltimo del numeral 182 de la ley citada, mas no en aquel precepto constitucional, por lo que no puede sancionarse procesalmente a la amparista, dado el desconocimiento de los términos, plazos y condiciones para la interposición del amparo directo adhesivo, en aras del principio pro persona.

Lo anterior, en términos de lo establecido en la tesis 2a. CIII/2013 (10a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE DECLARAR INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUEN VIOLACIONES PROCESALES SI NO SE PROMOVIÓ AMPARO ADHESIVO CONTRA UNA PRIMERA SENTENCIA O LAUDO FAVORABLE, EN EL PERIODO EN QUE NO EXISTÍA LEY REGLAMENTARIA QUE LO REGULARA.—El amparo directo adhesivo se

incorporó en el segundo párrafo del inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, en vigor a partir del 4 de octubre de ese año; no obstante, el legislador ordinario no lo reglamentó dentro de los 120 días como lo estableció el artículo segundo transitorio de ese decreto, sino hasta la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013. De esta manera, cuando no se promueve amparo adhesivo, pero sí un juicio de amparo principal contra la segunda sentencia o laudo que ahora perjudica al justiciable –dictada en cumplimiento de una resolución protectora a favor de la parte contraria–, no es aceptable jurídicamente declarar inoperante el concepto de violación en el que se alegue alguna violación procesal surgida desde el dictado del primer fallo y tenerla por consentida, en virtud de que la sanción de preclusión del derecho se estatuyó expresamente en el párrafo penúltimo del numeral 182 de la ley citada y no en aquel precepto constitucional, por lo que no puede sancionarse procesalmente al quejoso ante el evidente desconocimiento de los términos, plazos y condiciones en que habría de operar el amparo directo adhesivo; por ende, ante la incertidumbre jurídica que prevaleció en el periodo apuntado, en aplicación del principio pro persona resguardado en el artículo 1o. constitucional, debe realizarse el examen correspondiente en el marco de respeto al derecho de acceso a la justicia de que goza todo gobernado."[1]

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los motivos de disenso, los que son inoperantes en parte, en otra infundados y, fundados en una diversa, por las razones siguientes:

1. Violación a las formalidades del procedimiento, por indebida admisión y desahogo de la prueba de inspección.

En el primer concepto de violación se aduce que la responsable, al admitir la prueba de inspección, sin justificación alguna señaló como domicilio para su desahogo las instalaciones de la propia Junta, no obstante que en el escrito de ofrecimiento manifestó que el lugar para su desahogo sería la zona de distribución Puebla Poniente, ubicado en la calle diecisiete norte número dos mil uno de la colonia **********, de la ciudad de Puebla, específicamente en el área de personal y servicios generales.

---

[1] Tesis: 2a. CIII/2013 (10a.), Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 1, noviembre 2013, página 643.

Por lo que al llevarse a cabo dicha diligencia en un lugar distinto al ofrecido, se vulneró su derecho para elegir tal aspecto, lo que la dejó en estado de indefensión, porque la obligación de exhibir la documentación es del patrón, la cual, consiste en dos libros de nómina por catorcena, que son más de ciento cincuenta, y que debieron ser trasladados para su exhibición ante la resolutora, lo que hubiere sido innecesario de haberse señalado el domicilio de forma correcta.

La compañía inconforme cita para reforzar sus argumentos la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro: "PRUEBA DE INSPECCIÓN EN MATERIA LABORAL. EL SEÑALAMIENTO DEL LUGAR EN DONDE DEBE DESAHOGARSE ES UN DERECHO POTESTATIVO DEL OFERENTE, POR LO QUE SI SE LLEVA A CABO EN UN SITIO DISTINTO AL INDICADO, ELLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN."[2]

Las anteriores manifestaciones, según se señaló, son inoperantes.

En efecto, como se ve, la quejosa combate una violación a las leyes del procedimiento; sin embargo, no precisó la forma en que trascendió en su perjuicio al resultado del fallo, aspecto que era menester plasmarlo en su concepto de violación para que este tribunal esté en posibilidad de abordar su estudio, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo vigente, mismo que será analizado más adelante.

---

[2] Época: Novena Época, Registro IUS: 166859, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis: Jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Localización: Tomo XXX, julio de 2009, materia(s): Laboral, tesis IV.3o.T. J/79, página 1770, de texto siguiente: "La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 39/2001, visible en la página 495 del Tomo XIV, septiembre de 2001, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, de rubro: 'PRUEBA DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI SE OFRECE PARA EXAMINAR LOS DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO, PUEDE SEÑALARSE VÁLIDAMENTE PARA SU DESAHOGO EL LOCAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.', sostuvo que el oferente de la prueba de inspección debe señalar, entre otros requisitos, el lugar donde deba practicarse, y si se ofrece para examinar documentos que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, puede designar válidamente para su desahogo el local de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, de la interpretación que la Segunda Sala hizo del artículo 827 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que no contiene una obligación, sino un derecho potestativo del oferente de la prueba de inspección para elegir el lugar en donde debe efectuarse su desahogo, es decir, si en el domicilio del patrón o en otro. Consecuentemente, si se ofrece la aludida probanza y se indica el lugar en el cual debe verificarse su desahogo, pero éste se lleva a cabo en un sitio distinto al señalado, ello actualiza una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición."

Ahora, para estar en condiciones de explicar la inoperancia aludida, se hace necesario traer a contexto el artículo 158 de la anterior Ley de Amparo que disponía:

"Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados."

Su interpretación sistemática que, en este sentido, reitera lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política Federal, conducía a establecer que los requisitos a satisfacer para el análisis de los conceptos de violación, eran los siguientes:

a) Que se cometa durante el procedimiento.

b) Que afecte las defensas del quejoso.

c) Que trascienda al resultado del fallo.

Respecto del primer supuesto, se planteaban las violaciones procesales cometidas en el curso del procedimiento.

Por lo que hace al segundo caso, se estimaba que una violación a la ley adjetiva provocaba indefensión, cuando coartaba en alguna forma el derecho procesal que la parte tiene para evidenciar ante el juzgador la existencia o amplitud de su derecho sustantivo, o la inexistencia del que en su favor alega la contraria.

En cuanto a la tercera hipótesis, se consideraba que esa violación trascendía al resultado del fallo, si por su naturaleza, determina o influye en el sentido de la decisión.

Para este último supuesto, su estudio se emprendía de la siguiente forma:

En primer lugar, se debía hacer la enunciación de la violación procesal reclamada, para que se hiciera saber al lector, cuál era el tema a tratar.

En segundo lugar, debía constatarse si la violación existía, para lo cual debía realizarse una relación cuidadosa de los actos procesales correspondientes.

Si al hacer esta relatoría, se desprendía que la violación procesal aducida era inexistente, entonces, se declaraban inoperantes los conceptos de violación.

En tercer lugar, si resultaban ciertos los hechos, entonces, se constataba si se satisfacían los siguientes requisitos, que al igual que la norma que comentamos, los establece el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal.

1. Que se haya cometido en el curso del juicio, precisando preferentemente el estadio procesal respectivo;

2. Que se hayan afectado las defensas del quejoso, estableciendo la razón por la que se consideraba de esa manera; o si se quería abreviar, se establecía simplemente que ello era así, porque el caso se contenía en algunas de las fracciones de los artículos 159 o 160 de la citada Ley de Amparo; y,

3. Que trascendiera al resultado del fallo. También estableciendo la razón por la cual se estimaba de esa manera.

Tal narrativa pone de relieve que en el anterior ordenamiento no existía obligación para el quejoso de señalar en sus conceptos de violación la forma en que las violaciones procesales que alegara trascendieron al resultado del fallo; dado que no existía un sustento legal que así lo estipulara; incluso, así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 27/2013 (10a.), de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL FALLO."[3]

---

[3] Décima Época, Núm. de Registro IUS: 2003190, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, materia(s): Común, tesis: 2a./J. 27/2013 (10a.), página 1730, del texto siguiente: "Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento,

Empero el artículo 174 de la Ley de Amparo vigente –a partir del tres de abril de dos mil trece–, establece para la impugnación de las violaciones procesales lo siguiente:

"Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

De la transcripción se desprende que ahora la Ley de Amparo regula de forma distinta el planteamiento de violaciones procesales, pues se deben colmar los siguientes requisitos:

a. En la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, los promoventes del amparo deben impugnar todas las violaciones procesales que estimen se cometieron;

b. Las violaciones procesales que no se reclamen se tendrán por consentidas; y,

c. Debe precisarse la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

Como se puede advertir, uno de los cambios trascendentales para el planteamiento y estudio de las violaciones procesales se hace depender de la necesidad de que se precise la forma en que trascendieron al resultado del fallo. Esta condición es, sin duda, exigible en los supuestos en que es improcedente suplir la queja deficiente; es decir, para los casos en que el tribunal de amparo debe limitarse a estudiar los argumentos del quejoso, o del quejoso en amparo adhesivo, a la luz del principio de estricto derecho, de tal manera que en

---

afecte las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; de donde se sigue que es posible que aquél haga valer las violaciones cometidas durante el procedimiento. Sin embargo, no todas pueden ser materia de estudio, sino sólo las que afecten sus defensas y trasciendan al resultado del fallo reclamado. Ahora bien, de las disposiciones que rigen la tramitación del juicio de amparo directo y, en específico, la impugnación de violaciones procesales, no se advierte que exista obligación del quejoso de señalar en sus conceptos de violación la forma en que trascendieron al resultado del fallo, por lo que la falta de esa precisión no puede tener como consecuencia que se declare inoperante el concepto de violación respectivo. Sostener lo contrario, impondría al promovente una carga procesal sin sustento constitucional ni legal que conllevaría materialmente a la denegación de justicia, en contravención del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

aplicación de este principio, dado su rigorismo, no podrá analizarse una violación procesal, si su planteamiento carece de la explicación sobre su trascendencia al resultado del fallo.

Esta precisión se exige como condición esencial a partir de la premisa de que no todas las violaciones procesales revisten de esa singular relevancia, ya que aun cuando sea inobjetable su demostración, la prueba de su existencia, per se, haría nugatoria la posibilidad de tenerla por fundada si no incide en el resultado de la decisión definitiva, o peor aún, si tiene el impacto requerido sobre el resultado del fallo, pero por descuido, no se planteó la trascendencia.

Ahora bien, la inserción de un enunciado normativo que antes no se encontraba en la Constitución ni en la ley, que exige una condición especial para el planteamiento de las violaciones procesales, abre una brecha en que se debe dividir la doctrina y jurisprudencia que se generó antes de la reforma,[4] de la que surgirá con motivo de ella y, en este sentido, si se consideró en un tiempo que no era exigible exponer las razones de la trascendencia de una violación procesal porque la Constitución ni la Ley de Amparo fijaban este requisito, ahora que sí es exigible no pueden seguir cobrando aplicación las interpretaciones de una Constitución y de una Ley de Amparo que han sido reformadas.

En el particular, la empresa inconforme únicamente se constriñe en destacar en qué consiste la violación procesal cometida por la Junta resolutora respecto de la prueba de inspección que ofreció en la audiencia de ley. En su opinión, fue admitida de forma indebida porque para su desahogo se señaló como domicilio las instalaciones de la propia Junta, soslayando que precisó otro lugar para su desahogo, lo que vulneró su derecho potestativo de decidir el lugar, lo que la dejó en estado de indefensión.

Manifestaciones que de ninguna forma precisan o, en su caso, tienen la intención –atento a la causa de pedir– de reflejar la forma en que trascendió la violación procesal reclamada en su perjuicio al resultado del fallo.

Por lo que ante dicha omisión en precisar la trascendencia de la violación, no es factible atender las inconformidades planteadas en el motivo de disenso que nos ocupa y, en ese tenor, se reitera, es que resultó inoperante.

---

[4] Véase supra nota 3.

2. Violación en el dictado del laudo, por omisión de valorar la prueba documental aportada al juicio.

La segunda inconformidad expuesta es inoperante, como consecuencia de lo resuelto en el apartado anterior.

Se plantea que ante la consideración de rebeldía de la parte demandada de no exhibir documento alguno en la diligencia de inspección, la Junta responsable tuvo por cierto el salario diario integrado y tabulado señalados por el actor, no obstante que la patronal ofreció en el juicio la documental consistente en el recibo de pago de la tercera catorcena de marzo de dos mil siete, respecto a cada uno de los puntos de los hechos y prestaciones de la contestación de la demanda, entre ellos, el correspondiente al salario tabulado que percibía el trabajador; sin que la responsable le otorgara valor probatorio alguno.

Así es, deviene innecesario analizar la omisión alegada, en virtud de que el citado recibo data del mes de marzo de dos mil siete, cuya finalidad es desvirtuar el salario alegado por el actor percibido hasta el año de dos mil nueve; luego, como se desprende del estudio que precede, al haber resultado inoperante la violación procesal respecto de la prueba de inspección ofrecida por la quejosa, ello implica que subsistan los términos en que ésta se desahogó, consistentes en que ante la inasistencia de la demandada se le tuvieran por presuntivamente ciertos los hechos, entre ellos el salario alegado como percibido hasta el año de dos mil nueve; entonces ningún beneficio le puede aportar ya dicha probanza, puesto que sólo se limita a demostrar un sueldo dos años atrás de la fecha motivo de presunción.

De ahí que no prospere la inconformidad en comento.

3. Condena incorrecta al pago de horas extras.

Previo a dar contestación al motivo de disenso, este tribunal analizará la verosimilitud de la jornada extraordinaria por la que se condenó a la parte patronal, cuyo estudio, en principio, debe emprenderse a partir del análisis de los hechos en que se funda.

En el caso, se tiene que el actor afirmó que laboró dos horas extras diarias, cinco días a la semana, durante el tiempo que duró la relación laboral, como lo estableció en su escrito de demanda y que le generó el derecho a que se le pagaran por la prestación de sus servicios.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, determinó que cuando se reclame el pago de

horas extras, la carga de la prueba sobre su existencia o inexistencia o respecto de la duración de la jornada, siempre corresponde al patrón; sin embargo, cuando la acción de pago de ese concepto se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva, la autoridad laboral puede válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas, deberá actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive, absolver de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica, en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, dado que esa apreciación es el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de amparo, debe resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, para lo cual, puede apartarse de resultados formalistas y apreciar las circunstancias en conciencia.

Tal apreciación racional del tiempo extraordinario de trabajo debe aplicarse para estimar, tanto su inverosimilitud como si es viable y acorde con la naturaleza humana y, para ello, es menester tener en cuenta todos los aspectos involucrados con el desempeño del trabajo dentro de la jornada señalada por el trabajador, como lo son la naturaleza de la actividad desempeñada, ya sea física, intelectual o ambas; condiciones personales del trabajador, como la edad, sexo, estado físico, presencia o no de discapacidades físicas o mentales; así como factibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas del ser humano, que incumben a aspectos relativos a la necesaria actividad continua o no del trabajo, con independencia de que en el horario de trabajo se contemplen o no lapsos de descanso.

Ilustra al anterior argumento, la tesis aislada VI.3o.(II Región)1 L, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, de rubro y texto siguientes: "TIEMPO EXTRAORDINARIO. ASPECTOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA DETERMINAR RACIONALMENTE SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU RECLAMO.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 7/2006, derivada de la contradicción de tesis 201/2005-SS, publicada en la página 708 del Tomo XXIII, febrero de 2006, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, de rubro: 'HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL.', estableció, fundamentalmente, que cuando la acción de pago de horas extras se funda en circunstancias inverosímiles, por aducirse una jornada excesiva,

las Juntas y el tribunal de amparo pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación de los hechos en conciencia. Ahora bien, tal apreciación racional del tiempo extraordinario de trabajo debe aplicarse para estimar, tanto su inverosimilitud como si es viable y acorde con la naturaleza humana; para lo cual deberán tenerse en cuenta todos los aspectos involucrados con el desempeño del trabajo dentro de la jornada señalada por el trabajador, relativos a: 1. La naturaleza de la actividad desempeñada, ya sea física, intelectual o ambas; 2. Condiciones personales del trabajador, como edad, sexo, estado físico, presencia o no de discapacidades físicas o mentales; y 3. Factibilidad de satisfacción de necesidades fisiológicas del ser humano, que incumben a aspectos relativos a la necesaria actividad continua o no del trabajo, con independencia de que en el horario de trabajo se contemplen o no lapsos de descanso."[5]

Así, al examinar la jornada indicada por el trabajador, se advierte que precisó que empezó a prestar sus servicios a partir del tres de febrero de dos mil hasta el catorce de enero de dos mil nueve, ocupando el puesto de ayudante de cuadrilla y realizaba sus labores de ocho a dieciocho horas de lunes a viernes; por lo que, resulta creíble que las efectuara en una jornada de diez horas, ya que no se advierte la existencia de probanzas que demuestren que su trabajo implicaba mayor desgaste físico, pues incluso el lapso en el que desempeñó sus labores ni siquiera fue tan prolongado como para considerar que no lo hubiese podido soportar.

Por otro lado, según la reclamación de diez horas extras a la semana de lunes a viernes, se puede interpretar que la parte obrera no incluyó en el tiempo extraordinario la media hora de descanso a la que tiene derecho, en términos del artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, en concordancia con el 64 del mismo ordenamiento, lo que significa que gozó de ese tiempo para descansar y consumir alimentos, lo que hace creíble que laboró ese tiempo extraordinario.

Asimismo, el sábado y domingo no prestaba sus servicios por corresponder al descanso semanal, tiempo que lo podía utilizar para atender sus asuntos personales, sociales y convivir con su familia, aunado a que estas actividades también las podía atender después de las dieciocho horas de lunes a viernes; de ahí que sea creíble la jornada que refirió.

---

[5] Novena Época, Núm. de Registro IUS: 167158, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXIX, mayo de 2009, VI.3o.(II Región)1 L, materia (s): Laboral, página 1132.

Dadas las razones expuestas, se estima correcto el proceder de la Junta responsable.

Una vez desahogado el estudio de la verosimilitud de la jornada extraordinaria, se pasa a atender el concepto de violación en el que la moral inconforme alega que la responsable agregó una hora triple, sin que el actor realizara manifestación alguna, porque en su demanda sólo adujo haber laborado dos horas extras diarias; por lo que el cálculo, al ser erróneo, transgrede el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo y las garantías de seguridad y certeza jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Contrario a lo anterior, debe señalarse que la actora sí reclamó el pago del concepto de horas extras al trescientos por ciento, pues de su escrito de demanda se lee:

"3. El horario bajo el cual presté mis servicios en favor de los demandados fue precisamente el comprendido entre las 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes de cada semanada (sic), por lo que se deberá estimar que el suscrito en el desempeño de mi trabajo laboré durante todo el tiempo que presté mis servicios un total de 10 horas extras todas y cada una de las semanas que presté mis servicios en favor de los demandados y que ante su falta de pago se reclaman en la presente demanda. Con la finalidad de que los demandados no aleguen oscuridad en la demanda señalo que el tiempo extra que se reclama en esta demandada (sic) es el comprendido entre las dieciséis horas un minuto y las dieciocho horas de lunes a viernes de cada semana durante todo el tiempo (sic) presté servicios en favor de los demandados, es decir, que cada una de las semanas laboradas trabajé un total de diez horas en forma permanente de las cuales reclamo su pago a razón de un doscientos por ciento las primeras nueve horas y a el (sic) trescientos por ciento la última hora restante, de todas y cada una de las semanas que presté mis servicios a favor de los demandados y de las cuales se reclama su pago en la presente demanda.

"Señalando a esta Junta que de acuerdo al contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones obrero patronales en (sic) Comisión Federal de Electricidad, la jornada máxima de trabajo es de cuarenta horas a la semana." (foja 4 del expediente laboral).

Pues bien, la anterior transcripción revela con claridad que la parte trabajadora señaló haber laborado un total de diez horas extras semanales, reclamando su pago a razón de un doscientos por ciento las primeras nueve horas y al trescientos por ciento la última hora restante; por lo que la incon-

formidad planteada es errónea, con independencia de que el monto a pagar sea correcto o no, en virtud de que la operación aritmética realizada por la responsable no fue impugnada por la quejosa y, por ende, debe regir en el laudo.

4. Condena doble por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro.

Este argumento resulta fundado.

La inconforme aduce, en esencia, que de tenerse como válido el salario pretendido por el actor, no se le debieron integrar los conceptos de aguinaldo ni fondo de ahorro, ya que se duplica su pago en la condena impuesta al pago por cada una.

Que si el actor afirmó tener un salario catorcenal por la cantidad de $********** pesos, con ********** centavos, el cual se conforma, entre otras prestaciones, por el aguinaldo y el fondo de ahorro, éstas se deben restar, resultando un salario integrado catorcenal por el total de $********** pesos con ********** centavos, que arroja un salario diario integrado por el monto de $********** pesos con ********** centavos.

Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el expediente de origen, se desprende que la parte actora señaló percibir un salario de $********** pesos, ********** centavos, mismo que en el tabulador de la empresa demandada corresponde a la categoría de ayudante de cuadrilla, categoría a la cual corresponde un salario que se integra por los siguientes conceptos: a) salario, b) aguinaldo, c) ayuda de renta, d) despensa, e) transporte, f) fondo de ahorro, g) incentivo por puntualidad; y, h) energía eléctrica; resultando un salario diario integrado de $********** pesos con ********** centavos.

Mientras que en el laudo que se reclama, la responsable tuvo por cierto el salario tabulado e integrado en los términos expuestos por el trabajador y emitió las condenas con base en él, en las que se incluyó el pago de aguinaldo y fondo de ahorro.

De lo anterior, resulta fundado el concepto de violación, puesto que si el salario que le fue reconocido al actor se integra por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro, de suyo, éstos ya están tomados en cuenta y, no obstante esa decisión, se condena también a su pago como prestaciones independientes, sin que se explique en la resolución impugnada la razón para arribar a la conclusión de que deban pagarse dos veces, lo que desde luego genera un perjuicio a la patronal.

Por lo que el laudo en cuestión, incumple con el artículo 841, ya que no se dictó a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, como tampoco se expresaron los motivos y fundamentos legales para su emisión.

Motivo por el cual habrá de concederse el amparo solicitado.

OCTAVO.—Contestación de alegatos.

En otro orden de ideas, debe precisarse que el planteamiento hecho por el tercero interesado en vía de alegatos, respecto a los temas hechos valer por la moral quejosa consistentes en: a. Violación procesal alegada por indebida admisión y desahogo de la prueba de inspección; b. Omisión de la responsable de valorar la prueba documental consistente en un recibo de salario catorcenal; y, c. Condena incorrecta al pago de horas extras.

Resulta innecesario su estudio, en virtud de que los conceptos de violación expuestos al respecto en el escrito de demanda, no prosperaron para conceder el amparo solicitado; por lo que a nada práctico conduciría emprender su contestación.

Por otra parte, en relación con el alegato en que se aduce que carecen de sustento las manifestaciones de la amparista respecto a que el fondo de ahorro y el aguinaldo no integran el salario, debe precisarse que habrá de concederse el amparo peticionado, en virtud de que la responsable reconoció que el salario del actor se integra –entre otros– por los conceptos de aguinaldo y fondo de ahorro, los cuales ya están tomados en cuenta y, no obstante esa decisión, se condena también a su pago como prestaciones independientes, sin que se explique en la resolución impugnada la razón para arribar a la conclusión de que deban pagarse dos veces.

Tomando en consideración que, como se demostró, el laudo resulta ilegal, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la Junta responsable:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

2. Dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos dados en esta ejecutoria, funde y motive la condena al pago de las prestaciones de aguinaldo y fondo de ahorro de forma independiente, no obstante que forman parte del salario reclamado por el actor y que se tuvo por cierto en la secuela procesal.

Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria.

De conformidad con lo establecido por los artículos 192, 193, 258, en relación con el 238 y 239 de la Ley de Amparo, requiérase, sin demora, a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibidos sus integrantes: ********** (presidente), ********** (representante de los trabajadores) y ********** (representante de los patrones) que, de no hacerlo así sin causa justificada, una vez fenecido el término otorgado, se les impondrá a cada uno, una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en ese momento.

En la inteligencia de que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tal sanción se debe imponer al titular, es decir, a la persona física que ejerce el cargo del órgano responsable.

Asimismo, en caso de incumplimiento, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus cargos y su consignación.

Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo la Junta responsable se encuentra integrada por personas distintas a las antes referidas, cuyos nombres se obtuvieron del laudo reclamado, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos.

De la misma manera, infórmese a los integrantes de la Junta responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan el cargo con posterioridad, si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria.

En consecuencia, al haber resultado fundado uno de los conceptos de violación analizados, lo procedente es conceder el amparo solicitado.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el laudo dictado el nueve de agosto de dos mil trece por la Junta Especial Número

Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla en el juicio **********.

SEGUNDO.—Requiérase sin demora a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, en los términos indicados en la parte final del último considerando de ésta.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la Junta de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Miguel Mendoza Montes (presidente), Francisco Esteban González Chávez, y la Jueza de Distrito Emma Herlinda Villagómez Ordóñez, comisionada temporalmente en el cargo de Magistrada de Circuito, con efectos a partir del seis de junio de dos mil once, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de uno de junio del citado año, según oficio SEPLE./ADS./010/2228/2011, de esa misma fecha, suscrito por el secretario ejecutivo del Pleno; lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, siendo relator el primero de los nombrados; firmando los tres integrantes de este tribunal, en términos del artículo 188 de la Ley de Amparo, ante el secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 27/2013 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1730, de rubro: "VIOLACIONES PROCESALES. AL PLANTEARLAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, EL QUEJOSO NO ESTÁ OBLIGADO A SEÑALAR EN SUS

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN LA FORMA EN QUE TRASCENDIERON AL RESULTADO DEL FALLO.", determinó que ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni el artículo 158 de la Ley de Amparo abrogada, prevén que exista obligación del quejoso de señalar en sus conceptos de violación la forma en que las violaciones procesales que haga valer trascendieron al resultado del fallo. Sin embargo, en la actualidad ese criterio es inaplicable, en virtud de que el diverso 174 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron, pero con la condicionante de que deberá precisar la forma en que tales violaciones trascendieron en su perjuicio en el resultado del fallo. En esa medida, se obliga al quejoso a que cuando haga valer violaciones procesales explique la forma en que éstas le afectaron, por repercutir en el fallo. Por tanto, si con anterioridad no era exigible que se expusieran las razones de la trascendencia de una violación procesal, porque no estaba previsto este requisito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en la ley ordinaria, ahora que sí es obligatorio, resulta inaplicable dicho criterio jurisprudencial en relación con la forma en que deben plantearse las violaciones procesales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T. J/1 (10a.)

Amparo directo 7/2013. 21 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: Liliana Santos Gómez.

Amparo directo 56/2014. Perla Valeria Aguirre Servín. 28 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretario: León Darío Morice López.

Amparo directo 59/2014. Operadora de Recursos Universal, S.C. de R.L. de C.V. 11 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretario: Marco Martínez Meneses.

Amparo directo 181/2014. María de las Nieves Romero Trujillo. 25 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: Karla Villalba Rojas.

Amparo directo 398/2014. Nutrisa, S.A. de C.V. 5 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: Mayteé del Carmen Campos Román.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 100/2014. ADMINISTRADORA LOCAL JURÍDICA DE CELAYA, EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AUDITORÍA FISCAL DE IRAPUATO, Y EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DEL JEFE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. 28 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARIEL ALBERTO ROJAS CABALLERO. SECRETARIO: LUIS ALFONSO GUZMÁN DE LA PEÑA.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.—Estudio. Los agravios identificados como 1, 2 y 4 son fundados y, por tanto, suficientes para revocar la sentencia recurrida.

Previamente a exponer las consideraciones que sustentan la anterior determinación, se precisa tener en cuenta algunos antecedentes de la sentencia recurrida.

Mediante oficio **********, de uno de octubre de dos mil doce, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, Guanajuato, emitió orden de visita a cargo de "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a las que está afecta como sujeto directo, en materia de la contribución federal denominada impuesto al valor agregado mensual y como retenedor de los impuestos sobre la renta y al valor agregado, por el periodo comprendido del uno de mayo de dos mil diez, al treinta y uno de julio del mismo año (fojas 102 y 103 del juicio de nulidad).

Así, seguido el desarrollo de la visita, el treinta de abril de dos mil trece se levantó la última acta parcial y el veinticuatro de julio del mismo año se emitió el oficio **********, mediante el cual se determinó a "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable, un crédito por la cantidad de $**********, por concepto de impuesto al valor agregado y retenciones de los impuestos al valor agregado y sobre la renta por sueldos y salarios, recargos y multas (fojas 279 a 336).

Inconforme con la anterior determinación, "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, interpuso el juicio de nulidad **********, cuya sentencia aquí se revisa.

Asimismo, se precisa que es procedente el análisis de los agravios, en virtud de que el presunto vicio detectado por la Sala no es de forma, toda vez que involucra una actuación previa a la resolución determinante que fue la base conforme a la cual, los hechos fueron analizados en ésta.

Ahora, tal como se adelantó, resulta fundado el agravio identificado en la presente resolución como 1.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/99, determinó que en las actas de visita, por regla general, no es necesario que el visitador precise las normas jurídicas que, a su juicio, resultan aplicables, ni que exponga las razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a las hipótesis que dichas normas prevén; así como tampoco es necesario que detallen el procedimiento que se efectuó para determinar, en su caso, el monto del crédito omitido, ya que éstas no trascienden a la esfera jurídica del contribuyente visitado.

Ello, porque conforme a lo previsto por el párrafo primero del artículo 16 constitucional, la motivación y fundamentación se exige respecto de los actos de molestia, entendiéndose por tales aquellos que restringen provisional o cautelarmente un derecho, con el objeto de proteger o preservar a su vez otros derechos públicos o individuales; exigencia tal que, por mayoría de razón, se hace extensiva a los actos privativos, los cuales se definen por tener como objeto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho. Esto es, la garantía de fundamentación y motivación se exige respecto de aquellos actos de autoridad que trascienden a la esfera jurídica del gobernado, bien sea temporal o definitivamente.

Así lo precisó la Segunda Sala, en el sentido de que aun cuando la visita domiciliaria tiene por objeto comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, globalmente considerada, es un acto de molestia; lo cierto es que, por regla general, **los auditores no están obligados a fundar ni motivar su actuación durante el desarrollo de la misma, porque los actos desplegados por éstos constituyen actos de ejecución de la orden de visita respectiva**, la que conforme a lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna sí debe estar fundada y motivada, por ser el documento que da origen al procedimiento de verificación.

Esto es, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución General de la República, la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado elevado a la categoría de derecho humano, por lo que la introducción a éste con el objeto de verificar que se han cumplido las disposiciones fiscales, sólo puede ser autorizado por autoridad competente para ello, mediante un documento en el que se funde y motive la causa legal de su proceder.

Dicho documento lo constituye la orden de visita domiciliaria, la que entre otros requisitos, debe contener las causas o razones particulares por las cuales se estima procedente la visita de inspección, el sustento legal de dicha determinación y el objeto de la visita, esto último con la finalidad de dar a conocer al contribuyente visitado el periodo sujeto a revisión y las contribuciones a revisar y, en consecuencia, a constreñir a los auditores a revisar las contribuciones y periodos que fueron previamente determinados por la autoridad ordenadora.

En ese orden, resulta incuestionable que los motivos y fundamentos de los actos desplegados por los auditores durante la práctica de una visita domiciliaria, se contienen en la orden respectiva y que su actuar se limita a cumplir con lo ordenado por la autoridad fiscalizadora; situación tal que evidentemente los releva de cumplir con dichas formalidades, salvo aquellos casos en que durante el desarrollo de la visita emitan un acto en ejercicio de una facultad decisoria que les es conferida por la ley y que, por ende, constituye una potestad administrativa que puede causar una afectación al interés jurídico de quien se visita, tal como sucede cuando, de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en la fracción II del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación, se asegura la contabilidad del contribuyente visitado o, en su caso, los bienes o mercancías que se encuentran en el domicilio de éste, pues en esos supuestos, deberán expresar la causa y el sustento legal de su proceder, con el objeto de no dejar al interesado en estado de indefensión.

Así, afirmó la Segunda Sala, las actas de visita, dada su propia naturaleza, no producen una afectación temporal ni definitiva en la esfera jurídica del gobernado, ya que son de carácter transitorio o instrumental, pues son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita domiciliaria, y su único objeto es el de aportar a la autoridad competente los elementos necesarios para que, en su caso, emita la resolución mediante la cual determine la situación fiscal del visitado.

En efecto, se dice que las actas de visita son actos de carácter transitorio o instrumental, ya que únicamente ilustran o demuestran las actividades

desplegadas por los auxiliares de la autoridad fiscalizadora durante la práctica de una visita de inspección, así como las irregularidades que hayan detectado, pero no constituyen la actuación que da inicio o pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, ni determinan la situación jurídica del visitado.

Esto es, aun cuando en las actas de visita los visitadores asientan los hechos u omisiones que, a su juicio, demuestran el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente, y en ocasiones contienen la mención de las consecuencias legales de dicho incumplimiento, lo cierto es que los auditores sólo actúan como auxiliares de las autoridades fiscales ordenadoras y las actas que éstos elaboran son analizadas y calificadas por la autoridad competente para emitir la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, la cual, al apreciar los hechos u omisiones asentados en las actas, puede hacerlo en el sentido en que lo hicieron los visitadores o en uno diverso, según se desprende del artículo 63 del Código Fiscal.

Lo anterior fue robustecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la cita de la tesis aislada 2a. CXXVIII/96 y la jurisprudencia 2a./J. 16/96, de rubros: "VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES NO DETERMINAN EN DEFINITIVA LA SITUACIÓN FISCAL DEL SUJETO VISITADO." y "VISITA DOMICILIARIA, EL ACTA FINAL O EL DOCUMENTO EN EL QUE LOS VISITADORES DETERMINAN LAS PROBABLES CONSECUENCIAS LEGALES DE LOS HECHOS U OMISIONES QUE HUBIEREN CONOCIDO DURANTE EL TRANSCURSO DE AQUÉLLA, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA Y EN SU CONTRA NO PROCEDE JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN."

Asimismo, la Segunda Sala precisó que si bien es cierto que conforme a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas parciales de una visita domiciliaria, que no sean desvirtuados por el visitado dentro del plazo que debe transcurrir entre la última acta parcial y el acta final, se tendrán por consentidos, también lo es que tal consentimiento se entiende únicamente para efectos de dictar, en su caso, la resolución que determine el crédito fiscal a cargo del contribuyente visitado, pero en modo alguno puede estimarse que la presunción de certeza que deriva del consentimiento tácito de los hechos u omisiones consignados en las actas respectivas, no pueda ser desvirtuada a través de los recursos ordinarios que prevé la ley fiscal.

En apoyo a lo anterior, citó la tesis P. CXXIX/96, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA PRESUNCIÓN QUE DERIVA DE LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y

TERCERO DEL ARTÍCULO 46, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PUEDE SER DESVIRTUADA EN EL RECURSO DE REVOCACIÓN O EN EL JUICIO DE NULIDAD."

En ese orden, dado que las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de una orden de visita, y que las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, debe estimarse que en ellas no se requiere que el visitador precise las normas jurídicas que, a su juicio, resultan aplicables, ni que exponga las causas especiales o razones particulares por las cuales estima que los hechos u omisiones observados se adecuan a los supuestos que dichas normas prevén, bastando que en ellas se precisen los datos de los libros, registros y demás documentación que integren la contabilidad del contribuyente visitado, así como de los discos, cintas o cualquier medio de procesamiento de datos que éste tenga en su poder; o bien, de los objetos y mercancías que se encontraron en el domicilio visitado y de la información proporcionada por terceros que hagan posible la identificación particular de cada uno de los hechos u omisiones que conocieron los auditores durante el desarrollo de una visita domiciliaria, a efecto de que la autoridad resolutora esté en aptitud de resolver lo conducente; en síntesis, las actas de visita deben cumplir exclusivamente con una exhaustiva circunstanciación, tal como lo exigen las distintas fracciones del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.

Por tanto, dados su naturaleza y objeto, se impone concluir que las actas de visita domiciliaria no requieren cumplir con el requisito de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, pues son únicamente el reflejo de los actos ejecutados durante el desarrollo de una visita domiciliaria y simples opiniones que, en su caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora, además de que no trascienden a la esfera jurídica del gobernado.

Las anteriores consideraciones dieron origen a la siguiente tesis:

"Novena Época
"Registro IUS: 190722
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: aislada
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Materia(s): Constitucional, Administrativa
"Tesis: 2a. CLVI/2000
"Página: 440

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.—El requisito de fundamentación y motivación previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, por regla general, no es exigible para las actas de visita domiciliaria, ya que dada su naturaleza y objeto, las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden a la esfera jurídica del gobernado, temporal o definitivamente; es decir, por ser actos de carácter instrumental que únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en todo caso, servirán para la motivación de la resolución liquidadora que llegara a dictar la autoridad legalmente competente, es evidente que por sí mismas no deparan perjuicio alguno al gobernado y, por tanto, no es necesario que el auditor precise los preceptos legales que estima resultan aplicables, ni que señale las causas especiales o razones particulares por las cuales considera que los hechos u omisiones observados encuadran en el supuesto que tales preceptos prevén, salvo que el acta de visita se elabore con motivo del ejercicio de las facultades decisorias que la ley le confiere al auditor."

En el caso concreto, la Sala manifestó que la última acta parcial estaba sujeta a los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, entre los cuales se encuentra la debida fundamentación y motivación; lo anterior, por dos razones: la primera, ya que se debe notificar a los contribuyentes y, la segunda, ya que causa una afectación en la esfera jurídica del contribuyente, porque lo vincula a desvirtuar los hechos en aquélla consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo asentado, a efecto de que la autoridad no emita resolución que determine un crédito fiscal.

Al respecto citó, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

Posteriormente, analizó la competencia de la autoridad que emitió la última acta parcial, de treinta de abril de dos mil trece, de la que observó que la autoridad no había citado el artículo 17, fracción XVIII y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, el cual otorgaba facultades a las administraciones locales de auditoría fiscal para dar a conocer a los contribuyentes, responsables solidarios y demás obligados, los hechos u omisiones imputables a éstos, conocidos con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por tanto, determinó que si en dicha acta no fue fundada debidamente la competencia de la autoridad emisora, entonces no podría ser sustento de la resolución que determinó el crédito fiscal.

Luego, si de conformidad con el criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las actas de visita sólo reflejan el resultado de los actos de ejecución derivados de la orden de visita y las conclusiones en ellas asentadas no son vinculatorias ni trascienden por sí mismas a la esfera jurídica del gobernado, por lo que no es un requisito que se funden y motiven y, en el caso, la Sala hizo depender la ilegalidad de la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio **********, del hecho de que ésta tenía como precedente una última acta parcial carente de fundamentación de la competencia de la autoridad que la emitió.

Entonces, resulta claro que el actuar de la Sala es incorrecto, ya que de conformidad con el criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal, dichas actas no constituyen actos de molestia o de privación, pues sólo son el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita y simples opiniones que, en su caso, servirán para la liquidación de la resolución liquidatoria y, por ende, no es exigible el requisito de fundamentación y motivación, pues no trascienden a la esfera jurídica del gobernado.

De igual forma, resulta fundado lo señalado por la autoridad recurrente en su agravio 2, en el que aduce que la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir la sentencia recurrida transgredió lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al dejar de aplicar la jurisprudencia emitida por el tribunal fiscal.

En efecto, el precepto legal invocado establece:

"Artículo 79. Las Salas del tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia del tribunal, salvo que ésta contravenga jurisprudencia del Poder Judicial Federal.

"Cuando se conozca que una Sala del tribunal dictó una sentencia contraviniendo la jurisprudencia, el presidente del tribunal solicitará a los Magistrados que hayan votado a favor de dicha sentencia un informe, para que éste lo haga del conocimiento del Pleno y, una vez confirmado el incumplimiento, el Pleno del tribunal los apercibirá. En caso de reincidencia se les aplicará la sanción administrativa que corresponda en los términos de la ley de la materia."

Del precepto legal transcrito se advierte que las Salas del tribunal están obligadas a aplicar la jurisprudencia emitida por el tribunal fiscal.

Ahora bien, sobre el tema que nos ocupa, relativo a si las actas parciales de visita domiciliaria deben estar sujetas al requisito de fundamentación y motivación, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió la jurisprudencia VII-J-SS-125, en sesión de doce de febrero de dos mil catorce, que establece:

"ACTAS PARCIALES DE VISITA DOMICILIARIA. DADA SU NATURALEZA DE ACTOS DE CARÁCTER INSTRUMENTAL, NO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LAS ELABORA.—Al ser las actas parciales de visita domiciliaria actos de carácter transitorio o instrumental que, por sí mismos no trascienden a la esfera jurídica del gobernado, ya que al ser elaboradas por los auxiliares de la autoridad fiscalizadora durante el desarrollo de la diligencia de verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, únicamente constituyen el reflejo de los actos de ejecución de una orden de visita, dichas actas parciales no se encuentran sujetas al requisito de fundamentación de la competencia de quien las lleva a cabo, máxime que ellas contienen simples opiniones que pueden servir de motivación a la resolución que, en su caso, emita la autoridad legalmente competente para calificar su contenido y determinar la situación fiscal del contribuyente visitado."

Por tanto, si la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declaró la nulidad de la resolución reclamada en el juicio natural, con base en el argumento de que la última acta parcial, de treinta de abril de dos mil catorce, no se encontraba debidamente fundada, porque la autoridad fiscal debió citar los artículos 17, fracción XVIII y 19, apartado A, fracción I, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, dicha determinación es contraria a la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, criterio que fue adoptado el doce de febrero de dos mil catorce, esto es, con anterioridad a la emisión de la sentencia recurrida, la cual fue dictada el treinta de mayo del mismo año.

Criterio que, además, es acorde con la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 71/2003, que a continuación se transcribe:

"Novena Época
"Registro IUS: 183167
"Instancia: Segunda Sala

"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*
"Tomo: XVIII, septiembre de 2003
"Materia(s): Administrativa, Constitucional
"Tesis: 2a./J. 71/2003
"Página: 616

"VISITA DOMICILIARIA. NO ES NECESARIO PRECISAR EN EL ACTA RELATIVA LA CAUSA QUE MOTIVÓ LA SUSTITUCIÓN DE TESTIGOS EFECTUADA POR EL PROPIO VISITADO, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE CIRCUNSTANCIACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—De las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 49/99, que dieron origen a las tesis aisladas 2a. CLV/2000 y 2a. CLVI/2000, así como a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2000, se desprende que el requisito de circunstanciación respecto de las actas de visita domiciliaria previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constriñe a la autoridad fiscalizadora a precisar los hechos u omisiones de carácter concreto de los que tenga conocimiento durante el desarrollo de la visita, sin que ello implique el deber de señalar los preceptos legales que resulten aplicables ni las causas especiales o razones particulares por las que se estima que esos hechos u omisiones encuadran en el supuesto que tales numerales prevén, dado que ello atañe al requisito de fundamentación y motivación, el cual no es exigible para las actas de visita, ya que dada su naturaleza y objeto, no trascienden a la esfera jurídica del gobernado ni temporal ni definitivamente, salvo que se formulen con motivo del ejercicio de las facultades decisorias de la autoridad hacendaria. En ese sentido, al verificarse durante el desarrollo de la visita una sustitución de los testigos inicialmente propuestos, de conformidad con el artículo 44, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscalizadora está obligada a precisar tal acontecimiento en el acta relativa; sin embargo, ello no implica que necesariamente deba señalar la causa que motivó la sustitución para tener por satisfecho el requisito de circunstanciación indicado, ya que sólo es exigible cuando la sustitución es efectuada por el auditor, pues es evidente que la realiza en ejercicio de sus facultades decisorias, las cuales se traducen en una potestad administrativa que puede causar una afectación a la esfera jurídica del visitado y, por tanto, se encuentra constreñido a fundar y motivar esa determinación, máxime que la propia ley lo obliga a señalar las razones por las cuales fue él quien designó a los testigos y no así el propio visitado. Lo anterior es así, si se toma en consideración que la designación de los testigos es un derecho fundamental del contribuyente visitado y, por ende, la sustitución que él realice de los propuestos inicialmente, con independencia

de la causa que lo motivó para actuar en tal sentido, no puede depararle perjuicio alguno, en tanto que ello satisface la finalidad perseguida por el Constituyente, consistente en que sea el propio visitado el que señale qué personas habrán de intervenir en la práctica de la visita, de ahí que se estime innecesario precisar en el acta respectiva la causa que motivó la sustitución, cuando ésta es efectuada por el propio visitado." (Lo subrayado es propio).

Así, como lo manifestó la autoridad recurrente, de haberse aplicado la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Fiscal, la Sala recurrida no hubiera dictado su sentencia en el sentido en que lo hizo, pues de conformidad con el referido criterio, la emisión de la última acta parcial no requiere para su legalidad el que se encuentre fundada la competencia de la autoridad que la practique.

Asimismo, resulta fundado el agravio 4, en el que la autoridad recurrente aduce la inaplicabilidad de la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por analogía cita la Sala.

Se explica.

Los artículos 42, 44 a 46, 49 y 63 del Código Fiscal de la Federación, vigentes al momento del inicio de las facultades de comprobación, esto es, el uno de octubre de dos mil doce, en lo que interesa, disponían lo siguiente:

"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"...

"III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

"...

"V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de

comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del Registro Federal de Contribuyentes, así como para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código.

"Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente."

"Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

"I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.

"II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.

"Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.

"Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.

"En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación,

tenencia, producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías.

"III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.

"...

"IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando."

"Artículo 45. Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.

"Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:

"...

"En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial

al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este código, con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.

"Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado."

"Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas:

"I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.

"II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del artículo 44 de este código.

"III. Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos anteriores. En el caso de

que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo.

"IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita.

"**Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.**

"**Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se encuentran en poder de una autoridad.**

"Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.

"Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente podrá designar un máximo de dos

representantes, con el fin de tener acceso a la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. La designación de representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la información confidencial a que se refiere este párrafo.

"Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma de notas y apuntes.

"...

"V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal durante el desarrollo de la visita.

"VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de

la que se dejará copia al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.

"VII. Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque no se señale así expresamente. ..."

"Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de: ..."

"Artículo 47. Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se refiere el párrafo quinto del artículo 32-A de este código. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A de este código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la información o documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales.

"En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar acta en la que se señale la razón de tal hecho."

"Artículo 49. Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:

"I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías.

"II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de inspección.

"III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.

"IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este código y su reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.

"V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domiciliaria.

"VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión."

"Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales."

De lo anterior se desprende que, para la práctica de una visita domiciliaria, deben observarse las formalidades siguientes:

1. Debe existir una orden de visita, emitida por autoridad competente para ello.

2. Debe realizarse en el domicilio señalado en la orden respectiva.

3. Al inicio de la vista, los visitadores deben identificarse ante la persona con quien se entiende la diligencia; asimismo, deberán designarse dos testigos por el propio visitado o, en su caso, por la autoridad hacendaria.

A este respecto, es de señalarse que al formularse un acta de inicio, deben precisarse los pormenores del documento (o fotocopiarse) con el cual se identifican los auditores autorizados para tal efecto, en su caso, las causas o razones particulares por las cuales los testigos fueron designados por los propios auditores y no así por el visitado.

4. Durante el desarrollo de la visita:

- Los auditores tienen que levantar actas parciales, en las que, en forma circunstanciada, señalen los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de las que tengan conocimiento durante el desarrollo de la visita, como pueden ser, entre otros casos, los que entrañan el incumplimiento de las disposiciones fiscales, la sustitución de los testigos propuestos inicialmente, los hechos u omisiones de terceros, el aseguramiento de la contabilidad del contribuyente, la naturaleza y características de la información consultada por los representantes del visitado o por él mismo y los que dieron origen a la suspensión de la visita.

- El visitado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, habrá de permitir a los auditores el acceso a la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

- Los auditores tienen que sacar copias de los documentos antes precisados y, previo cotejo con los originales respectivos, certificarlas para anexarlas a las actas parciales que levanten con motivo de la visita, cuando se esté en alguno de los supuestos previstos en el artículo 45, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación.

- Si la visita se practica simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se levantarán actas parciales, en presencia de dos testigos, las

cuales serán agregadas al acta final. El acta final podrá elaborarse en cualquiera de los lugares visitados.

- En la última acta parcial, se hará constar tal circunstancia, y entre ésta y el acta final deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente puede presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones consignados en las actas parciales, o bien puede optar por corregir su situación fiscal.

- Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en las actas parciales, si antes del cierre del acta final, el contribuyente no presenta las documentales necesarias para desvirtuarlos o no demuestra que éstas se encuentran en poder de la autoridad.

El consentimiento de los hechos u omisiones asentados en las actas de visita, que se genera por las razones antes apuntadas, se entenderán únicamente para el efecto de dictar, en su caso, la resolución que determine el crédito fiscal a cargo del contribuyente, pero de modo alguno constituye una presunción que no pueda ser desvirtuada a través de los recursos ordinarios que prevé la ley fiscal para impugnar dicha resolución.

5. Al concluir la visita domiciliaria:

- Cuando no pueda concluirse una visita en el domicilio del contribuyente visitado, se levantará el acta final en las oficinas de la autoridad, previa notificación al contribuyente, salvo que éste hubiere desaparecido del domicilio fiscal.

- La conclusión anticipada de la visita deberá constar en un acta, en la que se precisará la razón de tal circunstancia.

- Si no se levanta el acta final dentro de los plazos previstos por el artículo 46-A del código tributario, la visita se entenderá concluida en la fecha en que debió terminarse y la orden respectiva y demás actos subsecuentes quedarán sin efectos.

- Si al levantarse el acta final no estuviere presente el visitado o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a determinada hora del día siguiente; si no se presentare, se levantará ante quien esté presente en el domicilio visitado.

- El acta final deberá ser firmada por cualquiera de los auditores que hayan practicado la diligencia, así como por el visitado o con quien se entiende

la misma y por los testigos. Si el visitado o los testigos se niegan a firmar el acta o a recibir copia de ésta, así se hará constar en el acta. Dicha circunstancia no afecta la validez y valor probatorio de la misma en dicho documento.

- Las actas parciales forman parte integrante del acta final de la visita, aunque no se señale expresamente.

6. Si con motivo de la visita domiciliaria se advierte el incumplimiento de las disposiciones fiscales, la autoridad procederá a emitir la resolución correspondiente, la cual se podrá motivar con base en los hechos y omisiones asentados en las actas levantadas durante la visita.

De lo expuesto se colige, fundamentalmente, lo siguiente:

A) En toda visita domiciliaria la autoridad hacendaria debe levantar "en forma circunstanciada" un acta de inicio y un acta final y, además, actas parciales o complementarias, en las que hará constar los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de las que haya tenido conocimiento durante el desarrollo de la visita, fundamentalmente, las relativas al cumplimiento de las disposiciones fiscales;

B) Los auditores deberán certificar las copias que obtengan de la contabilidad y demás papeles relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales que obran en poder del contribuyente y anexarlas a las actas parciales respectivas;

C) Entre la última acta parcial y el acta final de la visita domiciliaria deberán transcurrir cuando menos veinte días, dentro de los cuales el visitado podrá presentar los documentos necesarios para desvirtuar los hechos, omisiones o circunstancias precisadas en las actas parciales de visita, o bien corregir su situación fiscal; de lo contrario se tendrán por consentidas, únicamente para el efecto de dictar la resolución que determine la situación fiscal del visitado, ya que pueden ser desvirtuadas a través de los recursos ordinarios que procedan en contra de ésta;

D) Las actas parciales forman parte integral del acta final de visita, aunque no se señale expresamente y, en consecuencia, las copias certificadas por los auditores autorizados de la contabilidad y demás papeles relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales que obran en poder del contribuyente, también forman parte integrante del acta final de visita; y

E) Si de la práctica de la visita domiciliaria se advierte el incumplimiento a las disposiciones fiscales, la autoridad competente deberá emitir la resolución respectiva, la cual se podrá motivar con base en los hechos y omisiones asentados en las actas levantadas durante la visita.

Por otra parte, debe señalarse que toda acta de visita, ya sea inicial, parcial, complementaria o final, para su validez debe reunir los siguientes requisitos:

I. Debe estar circunstanciada;

II. Debe levantarse ante la presencia del visitado o de su representante o, en su caso, de la persona con quien se entendió la diligencia, así como ante dos testigos que deben ser propuestos por el propio visitado, o ante su negativa o ausencia, por la autoridad hacendaria;

III. Deben estar firmadas por cualquiera de los auditores autorizados para practicar la visita domiciliaria, por el visitado, su representante o por la persona con quien se haya entendido la diligencia y por los testigos; o, en su caso, asentar la razón por la cual el visitado o los testigos se negaron a firmarla o a recibir copia de la misma. Esto último no afecta la validez ni el valor probatorio de las mismas.

Los requisitos precisados en los numerales II y III que anteceden, por su objetividad, no requieren de interpretación alguna; caso contrario sucede con el señalado en el numeral I, pues la circunstanciación del acto no debe confundirse con la motivación.

Por otra parte, el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, en lo que interesa, dispone:

"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

"...

"IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o

terceros, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario.

"V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.

"VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.

"Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que se establece en el artículo 46-A de este código.

"...

"VIII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.

"**IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u**

omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción. ..."

De lo anterior se desprende que la emisión del oficio de observaciones es parte del procedimiento por el que las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, conocido comúnmente como revisión de escritorio o gabinete.

Mediante dicho oficio se dan a conocer al contribuyente o responsable solidario, los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de aquéllos, a efecto de que, dentro del plazo establecido por la propia norma, presente los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en él, o bien, corrija su situación fiscal, si opta por ello.

La consecuencia de que el contribuyente o responsable solidario no logre desvirtuar los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones dentro del plazo correspondiente, es que se tengan por consentidos.

Además, si el contribuyente o responsable solidario no desvirtúa los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones dentro del plazo correspondiente, o bien, dentro del mismo plazo, corrige totalmente su situación fiscal conforme al oficio de observaciones, se emitirá la resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos.

En relación con ese artículo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la contradicción de tesis 104/2010, que el hecho de que el oficio de observaciones no constituya la resolución en que se determina en forma definitiva la situación fiscal del contribuyente o responsable solidario, en todo caso implica que dicho oficio carecerá de la definitividad que generalmente se requiere para impugnar de manera directa un acto administrativo, mas no que no se encuentre sujeto a la garantía de fundamentación y motivación prevista por el artículo 16 constitucional.

Ello, porque esa garantía no se limita a los actos o resoluciones definitivos, sino que se debe cumplir por aquellos que causen una afectación en la esfera jurídica de los gobernados, ya sea que restrinjan de manera provisio-

nal o preventiva esos derechos (acto de molestia) o bien, que produzcan una disminución, menoscabo o supresión definitiva (acto privativo).

Así, la Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró que el oficio de observaciones previsto en el Código Fiscal de la Federación en vigor, sí causa una afectación en la esfera jurídica del gobernado, pues vincula al contribuyente o responsable solidario a desvirtuar los hechos en él consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo en él asentado, a efecto de que la autoridad no emita la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo.

Esto es, lo constriñe a realizar una determinada conducta, a efecto de evitar la emisión de la resolución liquidatoria.

Aunado a lo anterior, la oportunidad que otorga la norma en comento para desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previo a la emisión de la resolución determinante de créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni siquiera se llegue a emitir, no puede ser ejercida de manera eficaz por el afectado si la autoridad no le señala los motivos y fundamentos en los que basa su afirmación de que existieron hechos u omisiones.

Es cierto que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia, que en materia tributaria la garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa al acto privativo; sin embargo, si la propia norma en análisis prevé la oportunidad para el particular de acreditar ante la autoridad fiscal que no incumplió con sus obligaciones en esa materia, antes del dictado de la resolución en que se defina de manera definitiva su situación fiscal, dicha oportunidad sólo puede ser eficaz si se le dan a conocer los motivos y fundamentos con base en los cuales la autoridad fiscal está considerando que el contribuyente o responsable solidario incumplió con sus obligaciones en materia fiscal.

Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia citada, analógicamente, por la Sala Regional, la cual es del tenor siguiente:

"Novena Época
"Registro IUS: 161193
"Instancia: Segunda Sala
"Tipo de tesis: jurisprudencia
"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

"Tomo: XXXIV, agosto de 2011
"Materia(s): Administrativa
"Tesis: 2a./J. 18/2011
"Página: 383

"REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que acorde con el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos de molestia deben estar fundados y motivados. Por tanto, el oficio de observaciones emitido en términos del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación, al tener ese carácter, debe cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, pues causa una afectación en la esfera jurídica del contribuyente o responsable solidario al que se dirige, ya que lo vincula a desvirtuar los hechos en aquél consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo en él asentado, a efecto de que la autoridad no emita la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo. Además, si bien es cierto que es criterio reiterado de este Alto Tribunal que en materia tributaria la garantía de audiencia no necesariamente debe ser previa al acto privativo, también lo es que el citado artículo 48 prevé la oportunidad para el particular de desvirtuar lo señalado en el oficio de observaciones, previamente a la emisión de la resolución determinante de créditos fiscales, con el objeto de que ésta ni siquiera llegue a emitirse, oportunidad que sólo puede ser eficaz si se le dan a conocer los motivos y fundamentos con base en los cuales la autoridad fiscal basa su afirmación de que existieron hechos u omisiones."

En el caso, la Sala Regional estimó que la última acta parcial debía estar debidamente fundada y motivada, ya que tenía que notificarse al contribuyente; además, le causaba una afectación en su esfera jurídica, porque lo vinculó a desvirtuar los hechos consignados, o bien, a corregir su situación fiscal conforme a lo asentado, a efecto de que la autoridad no emitiera la resolución en la cual determinara créditos fiscales a su cargo; consecuentemente, aplicó analógicamente el anterior criterio.

Lo cual es incorrecto; en primer lugar, porque el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, antes reproducido, no lo exige, además, porque no observó que, como ya se dijo anteriormente, en las visitas domiciliarias los hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposicio-

nes fiscales serán consignados en la última acta parcial y, entre ésta y la final, deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados; de lo contrario se tendrán por consentidos para el efecto de dictar, en su caso, la resolución que determine el crédito fiscal a su cargo.

Esto es, aun cuando en las actas de visita los visitadores asientan los hechos u omisiones que a su juicio demuestran el incumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente y, en ocasiones, contienen la mención de las consecuencias legales de dicho incumplimiento, lo cierto es que los auditores sólo actúan como auxiliares de las autoridades fiscales ordenadoras, y las actas que éstos elaboran son analizadas y calificadas por la autoridad competente para emitir la resolución que pone fin al procedimiento administrativo de fiscalización, la cual al apreciar los hechos u omisiones asentados en las actas, puede hacerlo en el sentido en que lo hicieron los visitadores o en uno diverso, según se desprende del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación.

En cambio, el oficio de observaciones deriva del ejercicio de una facultad de comprobación diversa, regulada en el artículo 48 del Código Fiscal de la Federación y, por lo mismo, con una mecánica distinta, ya que los hechos que pudieran considerarse como omisión del pago de contribuciones se obtienen a través de la solicitud de informes, datos o documentos del contribuyente, responsables solidarios o terceros.

La propia fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la Federación antes referida, expresamente remite a su fracción I, para establecer las formalidades y requisitos del oficio de observaciones que se equiparan, por esa remisión, a la de la propia solicitud; de ahí que el oficio de observaciones debe cumplir con las formalidades de un acto de molestia previstas en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 del citado código, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, a diferencia de lo que sucede con la emisión del oficio de observaciones, donde a efecto de que no se emita la resolución determinante del crédito fiscal, se prevé la oportunidad para el particular de acreditar ante la autoridad fiscal que no incumplió con sus obligaciones en esa materia, antes

del dictado de la resolución en que se defina de manera definitiva su situación fiscal. En el caso de la última acta parcial no se da al contribuyente la oportunidad de desvirtuar los hechos u omisiones observados por la autoridad fiscalizadora, a efecto de que no se emita el respectivo crédito fiscal, pues lo asentado en las actas por los verificadores, todavía será materia de análisis por la autoridad fiscalizadora.

Por tanto, no se puede considerar que la última acta parcial se trate de un acto de molestia equiparable al oficio de observaciones, donde se constriñe al contribuyente a que desvirtúe los hechos y omisiones observados por la autoridad, so pena de emitir la resolución que determine un crédito fiscal.

Esto es, el oficio de observaciones constituye un acto de molestia porque constriñe al contribuyente a desvirtuar los hechos consignados, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal conforme a lo en él asentado, so pena de emitir la resolución que determine créditos fiscales a su cargo; contrariamente a lo que sucede en la última acta parcial, donde al no desvirtuar los hechos u omisiones asentados, si bien se tienen por consentidos, esa presunción no necesariamente conlleva la emisión de un crédito fiscal, pues sólo implica que podría tomarse en cuenta para el caso de que la autoridad fiscalizadora, al revisar lo asentado por sus auxiliares en sus actas, así lo estime. De ahí que no sea un acto de molestia.

Por lo anterior es que no le es aplicable, analógicamente, la jurisprudencia 2a./J. 18/2011, de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. EL OFICIO DE OBSERVACIONES EMITIDO DENTRO DE DICHO PROCEDIMIENTO DEBE CUMPLIR CON LAS GARANTÍAS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", ya que, a diferencia del oficio de observaciones, donde el no desvirtuar los hechos u omisiones detectados genera su consentimiento y la emisión del crédito correspondiente, en la última acta parcial esa omisión no necesariamente conlleva la emisión de un crédito fiscal en los términos ahí asentados.

Dado que el motivo que generó la nulidad ha quedado superado con las consideraciones precedentes, no es posible analizar técnicamente el agravio 3, ya que en éste se cuestiona la violación del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que la Sala consideró que no era suficiente para fundamentar la competencia de la autoridad; luego, si en la presente ejecutoria ya se dilucidó que no fue correcto el análisis realizado al respecto, entonces, su estudio sería ocioso por no depararle mayor beneficio.

Corolario de lo anterior, ante lo fundado de tres de los agravios, lo que procede es revocar la sentencia recurrida, con la finalidad de que la Sala Fiscal:

1. Deje insubsistente la sentencia recurrida;

2. Emita otra en la que prescinda de los argumentos por los cuales declaró la nulidad de la resolución impugnada y, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que conforme a derecho corresponda.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal; 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por la administradora local Jurídica de Celaya, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, y en suplencia por ausencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria.

SEGUNDO.—Se revoca la sentencia pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa el treinta de mayo de dos mil catorce, en el juicio de nulidad número **********, promovido por "**********", Sociedad Anónima de Capital Variable.

Notifíquese. Anótese en el libro de registro correspondiente y con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo y Ariel Alberto Rojas Caballero, así como por Ramón Lozano Bernal, secretario en funciones de Magistrado de Circuito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo dispuesto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Atento a la naturaleza de los actos que las autoridades fiscales pueden emitir durante el cumplimiento de sus facultades de comprobación, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a éstas el deber de cumplir con las garantías de fundamentación y motivación en aquellos actos que restringen provisional o cautelarmente un derecho o en los que éste se menoscaba o suprime definitivamente, contrario a lo que ocurre en los que no trascienden la esfera jurídica del gobernado. Así, el oficio de observaciones derivado de la revisión de escritorio o gabinete prevista en el numeral 48 del Código Fiscal de la Federación, al vincular al contribuyente o responsable solidario a desvirtuar los hechos asentados en él, o bien, a corregir totalmente su situación fiscal, a efecto de que la autoridad no los tenga por consentidos y no emita la resolución en que determine créditos fiscales a su cargo, causa una afectación en la esfera jurídica de aquél y, por tanto, en su emisión se debe cumplir con el requisito de fundamentación y motivación. En cambio, de conformidad con la tesis aislada 2a. CLVI/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 440, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA GARANTÍA RELATIVA NO ES EXIGIBLE, GENERALMENTE, RESPECTO DE LAS ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.", las actas de visita domiciliaria, dados su naturaleza y objeto, al no trascender a la esfera jurídica del gobernado, no requieren satisfacer esa exigencia constitucional, sino que, exclusivamente, deben contar con una exhaustiva circunstanciación, ya que son el reflejo de los actos ejecutados durante el desarrollo de una visita domiciliaria que, en su caso, servirá como sustento a la resolución liquidadora. Por tanto, es innecesario que en la última acta parcial se citen

los preceptos legales que la apoyan y se expresen los razonamientos jurídicos por los cuales se considera que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, pues no entraña un acto de molestia que constriña al contribuyente a desvirtuar los hechos y omisiones observados por los verificadores, ya que lo asentado en aquélla será analizado por la autoridad fiscalizadora antes de la emisión de la resolución que determine un crédito fiscal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/16 (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 74/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Jorge Alberto Rodríguez Vázquez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 76/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, unidad administrativa encarga de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Celaya. 7 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Lozano Bernal, secretario de tribunal autorizado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 96/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la Administradora Local Jurídica de Querétaro. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Lozano Bernal, secretario de tribunal autorizado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Javier Cruz Vázquez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 97/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Luis Alfonso Guzmán de la Peña.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 100/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, y en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Luis Alfonso Guzmán de la Peña.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 10 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECCIÓN SEGUNDA

EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

A

ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER. Se consideran contradictorias las acciones consistentes en la indemnización por despido y la relativa a la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, porque las causas que da lugar a una y otra son distintas, ya que mientras que en la acción de despido el trabajador pretende que se le indemnice en virtud de que no obstante existir la relación de trabajo, el patrón lo despide y no le permite la continuación de ésta; en el otro, el trabajador pone fin a la relación de trabajo y no pretende que continúe, pues lo que intenta es que se le indemnice por la infracción del patrón a alguna de las causales establecidas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012). Asimismo, el despido presupone la existencia de la relación de trabajo y que ésta fue fracturada unilateralmente por el patrón; en cambio, la rescisión implica que el trabajador, ante la conducta del patrón, decidió poner fin a ese vínculo, lo cual resulta del todo contradictorio si se exponen en una misma demanda. En otro aspecto, vale la pena destacar que, incluso, el legislador distinguió una acción de otra, al establecer un plazo diverso para que operara la prescripción respecto de cada una, puesto que, mientras el artículo 517 de la citada ley, determina que prescriben en un mes las acciones de los trabajadores que pretenden separarse del trabajo; el diverso 518 establece dos meses para que prescriban las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. También es importante destacar que la carga de la prueba en una y otra hipótesis se establece de manera diferente, puesto que en el caso del despido la carga probatoria se coloca en el patrón, quien está en la posibilidad de ofrecer el trabajo, cuya no aceptación revierte esa carga probatoria; en la rescisión sin responsabilidad para el trabajador la carga de la prueba se instala en éste, quien debe acreditar la actualización de alguna de las cau-

sales previstas en el artículo 51 citado. En ese contexto, si el trabajador en una misma demanda ejerce tanto la acción de rescisión, como la de indemnización por despido injustificado, la Junta está obligada a prevenirlo en términos del artículo 873, último párrafo, de la referida ley, para que la aclare y decida cuál de las acciones ejerce.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.P.T.6 L (10a.)

Amparo directo 316/2014. Selene Lizette de la O López. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Bernabé Morales Arreola, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo. Secretaria: Ma. Isabel Martínez Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la citada ley, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, los que se situaban como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, por lo que, debe entenderse que ante esa limitación, los referidos en segundo lugar no podrán combatirse a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que no fueron incorporados al texto del precepto en análisis. Entonces, el auto que no autoriza el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el efecto de esa decisión es la continuación del juicio,

en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva y, contra ella, puede hacerse valer en amparo directo, como violación procesal, previa impugnación de dicho auto mediante el recurso correspondiente, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el referido auto no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, en su contra es improcedente el amparo indirecto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.2o.C.20 K (10a.)

Queja 81/2014. Adriana Grappa Guzmán y otra. 31 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Alma Virgen Hernández Lobato.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente incluyó al personal que auxilia al agente del Ministerio Público en su labor de investigación y persecución de los delitos, entre los que se encuentra el actuario del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (actualmente Fiscalía General del Estado), en la relación jurídica de excepción en materia administrativa que rige entre dicho servidor público y la institución de procuración de justicia con base en sus propias leyes; lo que se corrobora de los artículos 8o., fracción I y 93 del Código de Procedimientos Penales para dicha entidad, así como del manual de puestos elaborado por la Dirección de Recursos Humanos de la procuraduría aludida, en el sentido de que el actuario tiene, entre otras funciones, las de levantar denuncias por comparecencia, recibirlas por escrito y radicarlas, trasladarse al lugar de los hechos para apoyar en la realización de la fe ministerial, solicitar informes y citar a personas que tengan que declarar. Por tanto, el actuario del Ministerio Público, a fin de ingresar y permanecer en el puesto, debe sujetarse a los exámenes de selección y evaluaciones psicosociales, así como acreditar los cursos de capacitación y actualización que prevean las normas aplicables del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.61 A (10a.)

Amparo en revisión 92/2013. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA. La Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no contempla expresamente lo relativo a la acumulación de autos y, además, suprimió por completo aquellas disposiciones de la ley abrogada que aludían a esa figura. Sin embargo, ello no conduce a la conclusión de que en caso de conexidad de causas, se trate de una figura prohibida, proscrita o no permitida, sino que simplemente se trata de una cuestión no regulada de manera expresa, pero que de ser necesaria bien puede implementarse. Al respecto, los artículos 66 y 67 de la ley en vigor regulan los incidentes, y en el primero de ellos se establece que en dicha forma de tramitación se dará curso a las cuestiones que expresamente se refiere la ley; y enseguida señala que también habrá de darse curso en la vía incidental a las cuestiones que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. Así, el citado artículo 66 debe interpretarse de manera sistemática con las demás disposiciones de la Ley de Amparo, en el sentido de que si bien no se previó expresamente tramitación incidental a la acumulación de autos, lo cierto es que se trata de una cuestión que por su propia naturaleza amerita ese tratamiento. Lo anterior, en la medida en que la omisión del legislador no debe interpretarse como una prohibición tácita, ya que el trámite y resolución de la acumulación de autos en el juicio de amparo obedece a una cuestión práctica de economía procesal y para evitar sentencias contradictorias sin que, por el contrario, se advierta la existencia de algún impedimento legal para dar curso y sustanciar el procedimiento incidental relativo a la acumulación de autos que, en su caso, procederá en las hipótesis contempladas por el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. Una razón más para arribar a la conclusión de que las reglas de conexidad son aplicables para definir cuándo dos o más litigios deben acumularse, es que no podría sostenerse que ante la inexistencia de regulación expresa en la Ley de Amparo de la separación de autos –como figura inversa a la acumulación–, los juicios en los que se reclamaran actos totalmente desvinculados entre sí, provenientes de materias jurídicas distintas, debieran resolverse en una sola sentencia, porque

esto generaría un problema competencial para el conocimiento del recurso con el que dicho fallo pretendiera impugnarse.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.19 K (10a.)

Queja 129/2014. Strassburger y López, S.A. de C.V. 9 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS. Conforme a los artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, un particular puede ser autoridad responsable para efectos de la procedencia del juicio de derechos fundamentales, siempre que: 1) Realice actos equivalentes a los de autoridad (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria u omitir actuar en determinado sentido); 2) Afecte derechos del particular, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas (en una relación de supra a subordinación); y, 3) Sus funciones estén determinadas en una norma general que le confieran atribuciones (que lo habilite), para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Consecuentemente, las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) no son autoridades responsables para los efectos señalados, cuando se les reclamen a sus encargados o directores generales actos de aplicación de una contribución de la cual son retenedoras, por ejemplo, del impuesto sobre la renta causado con motivo del retiro de su subcuenta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) prevista en la Ley del Seguro Social, pues al retener el tributo no dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar acto alguno en forma unilateral y obligatoria, ni omiten actuar en determinado sentido, sino que intervienen como auxiliares de la autoridad fiscal, dado el mecanismo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta (artículos 109, fracción X y 170, tercer párrafo), vigente hasta el 31 de diciembre de 2013, y su cercanía con el hecho imponible, ya que en términos del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de

las subcuentas que las integran, así como a administrar sociedades de inversión, máxime que acorde con el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, de no retener y enterar el monto del impuesto causado, adquieren el carácter de responsables solidarias respecto de esa contribución; circunstancias que, lejos de darles el carácter de autoridades responsables las ubican como subordinadas, pues tratándose de la recaudación del impuesto sobre la renta, su mecánica involucra, en ciertos casos, la obligación de retener el impuesto para su posterior entero, lo que queda a cargo de un tercero en la relación tributaria, permitiendo al fisco un mayor control de las contribuciones y hacer rápida y efectiva su recaudación.

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.16o.A.14 A (10a.)

Amparo en revisión 333/2013. Guadalupe Chirino Anzures. 28 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Amado Yánez. Secretario: Abel Méndez Corona.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a su interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre la contribución creada por el Estado y la capacidad contributiva de las personas, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público. Por su parte, el artículo 28 Bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León establece como obligación para aquellas personas que adquieren un inmueble en dicha entidad, pagar una contribución equivalente al 2% (tasa) del valor que resulte mayor entre el catastral y el precio de la operación de compraventa y, como excepción, el diverso 28 bis-1, primer párrafo, dispone que, en atención a las características de los sujetos y al valor del inmueble, algunos contribuyentes paguen una tasa preferencial menor a la general señalada, cuando el valor mayor de la operación no exceda de 25 cuotas elevadas al año. Consecuentemente, la norma aludida, al prever un trato diferenciado,

no viola el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que la distinción que existe entre el universo de sujetos obligados al pago del impuesto, atiende a una política fiscal y social, que incentiva la compra de inmuebles a personas que no pueden acceder a un crédito bancario, lo cual es un fin constitucionalmente válido, ya que coloca a los sujetos del gravamen en un plano de igualdad, en atención al objeto de éste, es decir, la adquisición de un inmueble para vivienda dentro del Estado de Nuevo León. Además, por tratarse de un impuesto real que grava el valor del bien y no el ingreso de los contribuyentes, no le es aplicable el principio de progresividad, aun ante la existencia de tarifas especiales, si se toma en cuenta que sobre el universo de contribuyentes opera una tasa única generalizada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.104 A (10a.)

Amparo directo 160/2014. Iberoamericana de Hidrocarburos, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Edmundo Raúl González Villaumé, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Omar Castro Zavaleta Bustos.

Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni apto para integrar jurisprudencia.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. El juicio de amparo se funda en diversos principios que lo distinguen de los restantes medios de defensa comunes, previstos en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre los que se encuentra el de definitividad, cuyo objeto es

restringir la procedencia de la acción con el propósito de que, previo a ésta, se agoten los medios de defensa ordinarios procedentes, para impedir que su promoción tenga el efecto pernicioso de obstaculizar la tramitación de aquellos procedimientos ordinarios hasta su culminación con el dictado de una resolución firme e incontrovertible, lo cual fortalece el ejercicio de las facultades que corresponden a las demás autoridades para resolver sobre las situaciones que se les presenten y genera certidumbre en el ordenamiento jurídico. Bajo esa premisa, la Ley de Amparo en su artículo 61, fracción XX, dispone que tratándose de actos distintos de los emitidos por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el juicio de amparo será improcedente mientras puedan ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que de acuerdo con las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la propia ley y sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse. Consecuentemente, esta causa de improcedencia se actualiza tratándose del amparo promovido contra actos del procedimiento de contratación a cuando menos tres personas tramitado conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público –como la convocatoria, la recepción de propuestas o el fallo que le pone fin–, pues son susceptibles de impugnarse ordinariamente mediante la inconformidad prevista en el artículo 65 de dicho ordenamiento, ante la Secretaría de la Función Pública; además de que, acorde con su artículo 70, es factible obtener la suspensión de los actos recurridos, provisional y definitivamente, con los mismos requisitos exigidos en el artículo 128 la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, consistentes en que se solicite dicha medida y que se asegure el no perjuicio al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público. Lo anterior, no obstante que el numeral 70 citado prevé, además, que el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la suspensión y la afectación que resentiría en caso de que continúen los procedimientos de contratación, sin que la Ley de Amparo señale esa exigencia y sin inadvertir la jurisprudencia 2a./J. 56/2007, donde la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 diciembre de 2010, establecía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los de la Ley de Amparo abrogada, entre ellos, la obligación de exponer las razones por las que se consideraba que debía otorgarse la

medida y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicitaba, pues, en todo caso, ese criterio quedó superado con la expedición de la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, ya que, como lo estimó este tribunal al emitir la tesis IV.2o.A.70 K (10a.), dicho ordenamiento instituye un nuevo sistema equilibrado regido por mayores elementos normativos formales y sustantivos, generales y específicos, para el dictado de las resoluciones relativas a la suspensión, donde se exige, de manera análoga, que se alegue que los actos reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por otro lado, la suspensión en la inconformidad tiene los mismos alcances que en la Ley de Amparo, porque, de resultar procedente, deberá precisarse la situación en que habrán de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto, de forma similar en cuanto a los efectos generales de la suspensión. También, la suspensión provisional instituida en el referido ordenamiento se obtiene en un plazo no mayor que el considerado para el otorgamiento de la provisional en el amparo, pues aun cuando no se prevé un término específico, sí se indica que, solicitada la suspensión, la autoridad acordará concederla o negarla provisionalmente, lo que permite advertir que, en atención a su naturaleza cautelar, debe hacerse de inmediato, cuando la Ley de Amparo prevé que dentro de las veinticuatro horas contadas a partir de que se presente la demanda, el órgano jurisdiccional debe resolver si la desecha, previene o admite, y que en este caso, tramitará el incidente de suspensión, donde deberá determinar lo conducente y, finalmente, los actos reclamados, en la especie, son susceptibles de anularse como resultado de la promoción del medio de defensa ordinario aludido, según se advierte del artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, del que se desprende que la resolución que emita la autoridad en ese recurso podrá: sobreseer en la instancia; declararla infundada o inoperantes los motivos de inconformidad; decretar la nulidad total del procedimiento o del acto impugnado para efectos de su reposición, u ordenar la firma del contrato. Máxime que este precepto establece, además, que la resolución que se emita podrá impugnarse mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o ante las instancias jurisdiccionales competentes, en la inteligencia de que dicha revisión es opcional, en términos del artículo 83, primer párrafo, de la legislación referida, y la instancia jurisdiccional relativa es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competente en términos del artículo 14, fracciones XI y XVI, de su ley orgánica. Por tanto, contra los actos indicados debe agotarse, previo al amparo, la inconformidad y, en su caso, el recurso de revisión o el juicio contencioso administrativo federal, al contener el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo menores requisitos que los consignados para obtener la suspensión definitiva

en el amparo ni un plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la provisional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.103 A (10a.)

Queja 157/2014. Swiss Hospital, S.A.P.I. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Nota: Las tesis, de jurisprudencia 2a./J. 56/2007 y aislada IV.2o.A.70 K (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1103, con el rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO CORRESPONDIENTE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL PREVER EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS." y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1918, de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE DESDE EL 3 DE ABRIL DE 2013, ESTABLECE UN NUEVO SISTEMA EQUILIBRADO, REGIDO POR MAYORES ELEMENTOS NORMATIVOS FORMALES Y SUSTANTIVOS, GENERALES Y ESPECÍFICOS, PARA EL DICTADO DE LAS RESOLUCIONES AL RESPECTO.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Cuando resulte evidente la intención del deudor alimentista de incumplir con su obligación alimentaria, deben dictarse las medidas necesarias para el aseguramiento de la pensión respectiva, mediante hipoteca, prenda, fianza o depósito de cantidad bastante y, de ser necesario, embargo y venta de bienes suficientes para cubrir su importe, de acuerdo con los artículos 27, numeral 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, 275 del Código Civil, 276 y 280 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Michoacán, abrogados, a fin de evitar que se deshaga de sus bienes y se declare en estado de insolvencia, así como para garantizar la eficacia de la determinación judicial que condena a su pago.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.C.20 C (10a.)

Amparo directo 1640/2011. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Leticia López Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL. De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 64/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 67, de rubro: "ALIMENTOS POR CONCEPTO DE EDUCACIÓN. ELEMENTOS QUE EL JUZGADOR DEBE TOMAR EN CUENTA PARA DETERMINAR SI PROCEDE SU PAGO RESPECTO DE ACREEDORES ALIMENTARIOS QUE CONCLUYERON SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PERO ESTÁ PENDIENTE SU TITULACIÓN.", y su ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que cuando los hijos se encuentran estudiando, su derecho a percibir pensión alimenticia puede prolongarse hasta cuando el acreedor requiera sufragar gastos por concepto de titulación y obtenga el título profesional, salvo cuando la prolongación del periodo no sea imputable al acreedor; por lo que no es óbice a esta conclusión el hecho de no haberse incluido la circunstancia de haber procreado un hijo en la etapa estudiantil. En ese tenor, el artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz precisa limitativamente los supuestos en los que puede cesar la obligación alimenticia, en lo que interesa, si bien es cierto que en su fracción II señala como causa para cesar la obligación alimenticia cuando el acreedor deja de necesitarlos, y algunos criterios aislados emitidos por órganos jurisdiccionales homólogos a éste, han concluido en la imposibilidad para justificar moral o jurídicamente la dependencia económica para con el deudor alimentario cuando el acreedor o acreedora mayor de edad ha procreado un hijo, también lo es que la legislación veracruzana no establece expresamente la circunstancia específica a través de la cual pudiere determinarse cuándo se actualiza este supuesto, pues sólo se refiere a "dejar de necesitarlos" situación que obliga al juzgador a atender al elemento necesidad y a las circunstancias especiales del caso para determinar la procedencia de la acción de referencia. Lo que significa que si se pretende sostener la actualización de la fracción II del artículo 251 del Código Civil para el Estado de Veracruz, debe acreditarse fehacientemente cómo ha dejado de necesitarse el cumplimiento de esa obligación legal; por eso, estimar a la procreación como elemento para justificar la falta de nece-

sidad de los alimentos resulta no tener relación lógica, ni jurídica alguna. Máxime cuando no existe ni siquiera una presunción legal que desvirtuara la diversa establecida a favor de quien ha justificado ser acreedor alimentario realizando estudios para desarrollar una profesión pues, al hacerse de esa manera, el juzgador deja de sentenciar el caso concreto con objetividad y apego a derecho, ya que al actuar así, sólo plasma una visión personal en relación con el momento y las circunstancias en las cuales una determinada persona debe procrear.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.78 C (10a.)

Amparo directo 509/2009. 16 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

Amparo directo 728/2009. 14 de enero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

Amparo directo 238/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Marcela Magaña Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ALIMENTOS. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA MATERIA DEBEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO, AUNQUE PROCEDA ALGÚN RECURSO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De acuerdo con los artículos 17 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias y, 1296 y 1297 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, las resoluciones judiciales que se dicten en materia de alimentos deben ser ejecutadas de inmediato por la autoridad competente, aun cuando en su contra proceda algún medio ordinario de defensa, a fin de que se cumpla con el objetivo de la obligación alimentaria consistente en cubrir tal necesidad que, por su naturaleza, es de atención inaplazable.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
XI.1o.C.21 C (10a.)

Amparo directo 1640/2011. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Leticia López Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). De conformidad con los artículos 261 y 318 del Código Civil y, 1291 y 1293 del de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Michoacán, abrogados, los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, cuando éstos se reclamen en la vía judicial, si se trata de hijos nacidos dentro de matrimonio, debe acreditarse el parentesco con el acta de matrimonio y con la de nacimiento, en tanto que tratándose de hijos nacidos fuera de matrimonio, la filiación del hijo con el padre sólo puede establecerse por reconocimiento voluntario o por resolución judicial que declare la paternidad; sin embargo, la sentencia que tiene por acreditada la filiación, es meramente declarativa, al afirmar y reconocer la filiación del hijo respecto del padre, porque pese a que existe desde el momento de la concepción, es declarada y reconocida hasta que se emite la resolución judicial, lo cual no debe confundirse con el derecho que tiene el hijo de recibir alimentos de sus progenitores, el cual se origina desde su concepción, con la demostración de la calidad de hijo en los juicios donde se demanda el cumplimiento de la obligación alimentaria, ya que puede darse el caso de que por circunstancias ajenas al menor (omisión o negativa del padre a reconocerlo y registrarlo) no sea posible acreditar el parentesco, sino hasta que en sentencia se declare la filiación, en cuya hipótesis, los efectos de los derechos y obligaciones que se derivan de ese nexo filial se retrotraen al momento del nacimiento, máxime que acorde con el precepto 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo; de ahí que si estos últimos tienen derecho desde que nacen a ser alimentados por sus padres, entonces, el mismo les asiste a los hijos nacidos fuera de matrimonio; siempre y cuando se acredite que la madre contrajo deudas para sufragar los alimentos pasados, ya que respecto de éstos no existe la presunción de necesidad, al haber sido satisfechos, por lo que, de no probarse esas deudas, la condena debe hacerse a partir de que se presume la necesidad, es decir, a partir de que se reclamaron, o sea, desde que se promovió el juicio natural.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.C.19 C (10a.)

Amparo directo 1640/2011. 17 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Ma. Álvaro Navarro. Secretaria: Leticia López Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al emitir las tesis III.4o.(III Región) 29 A (10a.), (III Región)4o.33 A (10a.), (III Región)4o.36 A (10a.) y (III Región)4o.39 A (10a.), interpretó el alcance de la expresión "sentencia favorable al quejoso", prevista en el numeral 170, fracción II, referido, para efectos de la procedencia del amparo directo en materia administrativa, en el sentido de que es aquella que declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo, esto es, que sea completamente favorable al quejoso. Sin embargo, el precepto citado fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 4081/2013, 4485/2013, 3856/2013 y 872/2014, donde determinó los alcances de dicha porción normativa, en cuanto a lo que debe entenderse por "sentencia favorable", en el sentido de que es suficiente con que en una resolución de los tribunales de lo contencioso administrativo se nulifique –por la razón que sea– el acto impugnado, para que se actualice dicho concepto, sin que para su aplicación deba verificarse, de momento, en qué grado se benefició al actor con la nulidad decretada. En consecuencia, este órgano se aparta del criterio sostenido en las tesis indicadas, para adoptar, por seguridad jurídica, lo considerado por el Alto Tribunal del País. Además, en los precedentes precisados, éste consideró inconstitucional el artículo señalado, porque prescribe un procedimiento complejo, por el cual, la impugnación simultánea de las sentencias favorables a través de la acción de amparo y, en su caso, del recurso de revisión que tiene a su alcance la autoridad demandada, conforma un sistema en el que la procedencia de la primera se subordina al resultado del segundo e, inclusive, a la simple falta de promoción de este último, con lo cual, ese tipo de sentencias de la jurisdicción ordinaria pueden llegar a ser inatacables en la vía de control constitucional, por cuanto a las consideraciones de mera legalidad que contengan; interpretación que se reflejó en la tesis 2a. LXXV/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 398, de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL LIMITAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO A DICHO JUICIO CONTRA SENTENCIAS PRONUNCIADAS EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.", y aun cuando dichos

asuntos fueron resueltos por mayoría de tres votos, y consecuentemente, no integran jurisprudencia en términos del numeral 223 de la Ley de Amparo, en observancia al principio de seguridad jurídica, aquélla es útil para declarar la inconstitucionalidad del precepto inicialmente mencionado, en uso del control de constitucionalidad *ex officio*. Lo anterior, pues la propia Segunda Sala, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 69/2014 (10a.), visible en el propio *Semanario* el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la *Gaceta* y Época aludidas, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 555, de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES.", determinó que el análisis *ex officio* sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio, se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con ese ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan; de otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso. En las relatadas condiciones, al declarar la inconstitucionalidad de la fracción II del artículo 170 invocado, procede inaplicarla y determinar la procedencia del amparo directo, cuando se esté ante una "sentencia favorable", esto es, un fallo definitivo de los tribunales de lo contencioso administrativo que nulifique –por la razón que sea– el acto impugnado, siempre que se pretenda obtener un beneficio mayor al alcanzado.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

(III Región)4o.53 A (10a.)

Amparo directo 201/2014 (cuaderno auxiliar 533/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Patrón Spirits México, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Abel Ascencio López.

Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal, en cuanto a lo que debe entenderse por "sentencia favorable", plasmado en las diversas III.4o.(III Región) 29 A (10a.), (III Región)4o.33 A (10a.), (III Región)4o.36 A (10a.) y (III Región)4o.39 A (10a.) citadas, publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1500, con el rubro: "SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EN SU CONTRA SE PROMUEVE EL AMPARO DIRECTO Y EN ELLAS NO SE FAVORECE DEL TODO AL QUEJOSO PORQUE DECLARAN LA NULIDAD PARCIAL

DE LOS CRÉDITOS IMPUGNADOS, ELLO NO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO)."; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1600, con los título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. SIGNIFICADO DE LA LOCUCIÓN 'SENTENCIA O RESOLUCIÓN FAVORABLE AL QUEJOSO', PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA TRATÁNDOSE DE FALLOS DEFINITIVOS EMITIDOS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."; página 1598, con los título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, SENTENCIA FAVORABLE ES AQUELLA QUE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Y, A SU VEZ, ANALIZA Y DESESTIMA LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE FONDO.", y página 1597, con los título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO PUEDE CONSIDERARSE SENTENCIA FAVORABLE A AQUELLA EN LA QUE LA SALA FISCAL DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR VICIOS FORMALES, PERO OMITE EXAMINAR LOS CONCEPTOS DE ANULACIÓN DE FONDO.", respectivamente.

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 90/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 768.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA POR MATERIA Y PONE FIN AL JUICIO SIN DECIDIRLO EN LO PRINCIPAL. El artículo 170, fracción I, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consigna que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas, entre otros, por tribunales judiciales. El referido párrafo segundo establece que "se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". De esta manera, si el acto reclamado constituye una resolución de incompetencia por materia, en la que se revocó la sentencia de primera instancia y se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer en la vía idónea, ante la autoridad competente, es claro que no decidió el juicio en lo principal, sino que lo dio por concluido, pues revocó la sentencia de primer grado que había resuelto el fondo del litigio, no ordenó la remisión de los autos a la autoridad que pudiera haber considerado competente (tribunales agrarios),

y respecto de esa resolución no existe en la ley común recurso ordinario en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, es claro que se está ante una resolución que puso fin al juicio, por lo que la demanda de amparo debe ser del conocimiento del Tribunal Colegiado de Circuito, en la vía directa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.5 K (10a.)

Amparo directo 217/2014. Antonio Sánchez Ávila. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: David Fernández Pérez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Jacqueline Juárez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN. El artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones dictadas, entre otros, por tribunales administrativos, que pongan fin al juicio; esto es, las que lo deciden en lo principal y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan recurso ordinario que permita revocarlas o modificarlas, o cuando deban agotarse previamente los medios de impugnación que se establezcan en la ley de la materia. Consecuentemente, el sobreseimiento del juicio de nulidad decretado antes del cierre de la instrucción por el pleno de una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, reviste las características de una resolución que pone fin al juicio, toda vez que, en su contra, no procede el recurso de reclamación establecido en el artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no tratarse de una determinación emitida sólo por el Magistrado instructor.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.A.61 A (10a.)

Amparo directo 965/2013. Gas Continental del Pacífico, S.A. de C.V. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretaria: Gabriela González Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS. La resolución pronunciada por el Juez de ejecución de sentencia respecto de los beneficios preliberatorios (remisión parcial de la pena y libertad condicional), si bien es un acto dictado después de concluido el juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, deriva de un mandato emitido dentro de un procedimiento. Por tanto, en este supuesto, el plazo para presentar la demanda de amparo es el de quince días, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, y no el de la excepción de su fracción IV, la cual alude a que podrá efectuarse en cualquier tiempo, pues esta hipótesis procede contra actos que no provienen de un procedimiento judicial, entendiéndose por éstos, entre otros, el peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal –fuera de procedimiento judicial–, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; de ahí que si dicha negativa se reclama en amparo fuera del plazo genérico de quince días, se considera que el quejoso habrá consentido tácitamente el acto reclamado, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la referida legislación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.12 P (10a.)

Amparo en revisión 316/2013. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretario: Fabio Alemán Monroy.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO. Para la ampliación de la demanda de amparo deben tenerse en cuenta las mismas condiciones establecidas para la presentación de aquélla, de manera que el plazo de quince días al que alude el artículo 17 de la ley de la materia, interpretado en relación con los diversos numerales 18 y 111 de la misma ley, debe computarse a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Atendiendo al último de los

dispositivos legales mencionados, la ampliación de la demanda de amparo puede hacerse siempre y cuando no transcurran los plazos para su presentación, a partir de que el quejoso tenga conocimiento de los actos de autoridad que guarden relación estrecha con los reclamados en la demanda inicial. En tal virtud, en los casos en que el Juez de amparo ordena dar vista al quejoso con el informe justificado y sus anexos, el cómputo del término para la presentación de la ampliación de la demanda no debe realizarse a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del auto que ordenó la vista, ya que el artículo 117 de la Ley de Amparo no establece un plazo para que el quejoso acuda a imponerse de dicho informe, de manera que hay que acudir, supletoriamente, al plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, en los casos en que la ampliación de la demanda de amparo se realice a partir de la rendición del informe justificado, el término de quince días para formularla debe computarse a partir del siguiente al en que culmine el plazo de tres que dure la vista que se da al quejoso con dicho informe.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.20 K (10a.)

Queja 114/2014. María de los Ángeles Otilia Olazo Campos o María de los Ángeles Olazo Campos o María de los Ángeles Olazo de Lara. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN SERVIDOR O FUNCIONARIO PÚBLICO NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HAYA SOLICITADO PREVIAMENTE, ÉSTE PODRÁ PEDIR AL JUEZ DE DISTRITO QUE REQUIERA A LOS OMISOS, ASÍ COMO EL DIFERIMIENTO DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA PETICIÓN SE HAGA CON LA ANTICIPACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 121 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Este tribunal federal considera que para ejercitar el derecho previsto en el artículo 121 de la Ley de Amparo vigente, esto es, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas que con toda oportunidad hayan solicitado a los servidores o funcionarios públicos, la parte interesada debe: 1. Acreditar haber hecho la petición de copias o documentos a la autoridad respectiva; 2. Solicitar al Juez de amparo con la anticipación debida, esto es, con cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la audiencia, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la propia audiencia, tal como lo dispone el numeral 121 de la Ley de

Amparo vigente; que requiera a los omisos y difiera la celebración de la audiencia. Satisfecho lo anterior, el órgano jurisdiccional debe ordenar a los omisos que le envíen directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez días y, diferir la audiencia. En caso de no ser enviados oportunamente los documentos o copias, previa petición de parte, se podrá diferir la audiencia hasta en tanto se envíen las referidas constancias; si las autoridades requeridas persisten en contumacia, el órgano jurisdiccional podrá hacer uso de las medidas de apremio y, en caso de incumplimiento, denunciar los hechos ante el Ministerio Público de la Federación.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.13 K (10a.)

Queja 169/2014. Ruth Noemí Cabrera Cedillo. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA). Conforme a los artículos 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia abrogada y 522 del Código de Procedimientos Penales (abrogado en virtud de la declaratoria de inicio del Código Nacional de Procedimientos Penales), ambos del Estado de Quintana Roo, el acusado puede obtener copias de la averiguación previa cuando las requiera para cumplir deberes o ejercer derechos, salvo en los casos de delitos sexuales, violencia familiar o en aquellos en que la víctima u ofendido se oponga por razones de seguridad personal. Ahora bien, no toda obligación o derecho que motive la solicitud de copias amerita que éstas sean certificadas (con el consecuente empleo de recursos humanos que significa para el Estado), por lo que, en cada caso, el Ministerio Público determinará, razonadamente, la forma en la que deberán expedirse (simples o certificadas). Así por ejemplo, si son pedidas sólo para ejercer el derecho de acceso a los datos de la indagatoria previsto en el artículo 20, apartado A, fracciones VII y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) es innecesario que se ordene su certificación, porque la finalidad de ese derecho es solamente informativa, de modo que puede satisfacerse a través de la expedición de copias simples.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.10 P (10a.)

Amparo en revisión 188/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA. En las jurisprudencias 1a./J. 52/2005 (*) y 1a./J. 117/2009 (*) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: i. El artículo 20, apartado A, fracciones VII y X, de la Constitución Federal (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) prevé el derecho del indiciado de acceder a los datos de la averiguación previa que solicite para su defensa; ii. Este precepto no exige que el acceso a las actuaciones se efectúe forzosamente mediante la entrega de copias, sino que establece que el derecho se ejercerá con los requisitos y límites previstos en la legislación secundaria; y, iii. Es constitucionalmente válido que el legislador ordinario prohíba o permita la expedición de copias de la indagatoria a favor del acusado, como parte de su derecho a una defensa adecuada. Por otra parte, el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo abrogada establece que el Ministerio Público expedirá copias de los documentos que obren en sus archivos cuando sean necesarias para el cumplimiento de deberes o el ejercicio de derechos. Ahora bien, entre los derechos cuyo ejercicio puede motivar la expedición de copias se encuentra el de acceso a los datos de la indagatoria, como lo consideró la Sala mencionada en la jurisprudencia 1a./J. 117/2009 citada, al interpretar el artículo 44 de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, similar al citado artículo 84 de la ley homóloga quintanarroense. Asimismo, el artículo 522, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Penales de la entidad (abrogado en virtud de la declaratoria de inicio del Código Nacional de Procedimientos Penales), establece implícitamente el derecho del acusado a obtener copias del procedimiento penal (incluyendo la

indagatoria), ya que sólo prohíbe su expedición en los casos de delitos sexuales, violencia familiar o en aquellos en que la víctima u ofendido se oponga por razones de seguridad personal. Sin embargo, a diferencia de los citados preceptos, el artículo 40 del Reglamento del Ministerio Público de Quintana Roo establece que "sólo" se expedirán al acusado copias de la averiguación previa cuando haya sido consignada o archivada o resulten indispensables para el cobro de un seguro. Esta antinomia debe resolverse a favor de las normas permisivas en demérito de la prohibitiva, de acuerdo con los siguientes criterios: a) Conforme al principio hermenéutico pro persona previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Federal, debe optarse por los artículos 84 de la mencionada ley orgánica y 522 del citado código procesal, ya que amplían el contenido del derecho fundamental de defensa adecuada, al proporcionar al acusado mayores elementos para conocer y desvirtuar la imputación; b) Conforme al criterio jerárquico, deben preferirse las normas legales por encima del reglamento administrativo, pues éste es inferior a aquéllas, de acuerdo con el artículo 91, fracción II, de la Constitución Estatal; c) Conforme al criterio cronológico previsto en el artículo 5 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el aludido artículo 40 del Reglamento del Ministerio Público se entiende tácitamente derogado por el diverso 84 de la ley orgánica mencionada, ya que la vigencia del primer precepto antinómico se remonta a 1984, mientras que la del segundo data de 1996; d) Conforme al criterio de especialidad de la ley, recogido en el artículo 10 del Código Penal local, tratándose de la actuación del Ministerio Público en la averiguación previa, tiene preeminencia el citado artículo 522 sobre el diverso 40 del reglamento, dado que el primero pertenece a un ordenamiento que regula específicamente las formalidades del procedimiento penal, mientras que el segundo corresponde a un ordenamiento que reglamenta la estructura orgánica de la institución ministerial. En conclusión, la antinomia debe resolverse a favor de las normas que permiten al acusado obtener copias de la indagatoria cuando las requiera para cumplir deberes o ejercer derechos, incluso el derecho fundamental a obtener los datos necesarios para esgrimir una defensa adecuada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.9 P (10a.)

Amparo en revisión 188/2014. 24 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Nota: (*) Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 52/2005 y 1a./J. 117/2009 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 42 y Tomo XXXI, marzo de 2010, página 40, con los rubros: "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL ACCESO A SUS ACTUACIONES POR LAS PARTES LEGITIMADAS PARA ELLO, NO IMPLICA EL DERECHO A QUE SE LES EXPIDAN

COPIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." y "AVERIGUACIÓN PREVIA. PROCEDE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EXPIDA COPIAS DE LAS CONSTANCIAS DE LAS ACTUACIONES, REGISTROS O DICTÁMENES QUE LA INTEGREN Y OBREN EN SU PODER, A SOLICITUD DEL INCULPADO O DE SU DEFENSOR, CUANDO EL INDICIADO HAYA COMPARECIDO ANTE ESA AUTORIDAD Y SE RESERVE SU DERECHO A DECLARAR (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, VIGENTE HASTA EL 15 DE JULIO DE 2009).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

B

BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA. El artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos y dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresen las normas legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Ahora bien, de los artículos 1, 2, fracción IV y 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se advierte que el territorio de ese Municipio deberá ceñirse a lo establecido por el citado reglamento para la regulación de las cuestiones de vialidad y tránsito que se susciten; asimismo, que los oficiales de tránsito son los servidores públicos facultados para la aplicación de dicho reglamento y los supuestos en los cuales los servidores públicos pueden imponer las multas cuando se cometan infracciones. De lo anterior se obtiene que para que una boleta de infracción se encuentre fundada y motivada, es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que así se considere, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo, pero idóneo, para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. En ese tenor, si la responsable cumple con lo anterior, no se debe exigir mayor extensión en los argumentos vertidos para sustentar el acto reclamado, además de que sus actos gozan de la presunción de legalidad, para cumplir con la garantía prevista en el numeral 16 de la Constitución Federal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.1o.A.30 A (10a.)

Amparo en revisión 17/2014. Roberto Rodríguez Garza. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss Ramos. Secretaria: Juana María Espinosa Buentello.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

C

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR LOS METROS CÚBICOS DE AGUA SUSTRAÍDA DEL SUBSUELO, LO ES EL FORMATO 10-A, AUTORIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. El artículo 225 de la Ley Federal de Derechos establece la obligación a las personas físicas y morales que usen, exploten o aprovechen aguas nacionales, de llevar un registro de las lecturas de su medidor en el formato que para tal efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Por su parte, el diverso numeral 228 de la propia ley dispone la determinación presuntiva del volumen del agua, cuando no se presente la información o documentación que solicite la Comisión Nacional del Agua, o cuando no se lleven los registros de las lecturas de sus medidores. En ese tenor, el uso obligatorio del formato 10-A, tiene sustento para tener la debida certeza de que el contribuyente lleva un registro real del agua extraída del subsuelo y, por tanto, que cumple con sus obligaciones en materia de derechos por el uso, explotación, goce o aprovechamiento de aguas nacionales, tales como la medición efectiva del líquido consumido, dado que si esta cuestión no acontece, puede prestarse a que el propio contribuyente altere los registros que supuestamente realiza, por lo que tal cuestión es una obligación que la propia ley le impone y la cual debe acatar. De ahí que el formato 10-A, sea la documental idónea, a través de la cual, justifica el volumen de líquido consumido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.1o.A.28 A (10a.)

Amparo directo 77/2014. GP Bienes Inmuebles, S.A. de C.V. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: Luis Alberto Mata Balderas.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. Los manuales de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, correspondientes a los años 2010, 2011 y 2012, en su artículo 2, fracción II, establecen que se entenderá por compensaciones, las remuneraciones complementarias al sueldo base tabular, que se cubren a los servidores públicos que corresponda y que se integran a los sueldos y salarios, las cuales no forman parte de la base de cálculo para determinar las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad social, salvo aquellas que en forma expresa determinen las disposiciones aplicables; en tanto que el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, dispone que las cuotas y aportaciones establecidas en dicha ley se efectuarán sobre el sueldo básico, fijándose como límite inferior un salario mínimo y como límite superior, el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo, entendido como el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado. De esta manera, para el cálculo de las cuotas y aportaciones de seguridad social debe tomarse exclusivamente el monto del salario establecido en el tabulador regional respectivo, porque en él ya se encuentran integrados el sueldo, sobresueldo y las compensaciones; por ende, cualquier otro concepto ajeno a los montos establecidos en dicho tabulador no puede ser tomado en cuenta para esos fines; por tanto, el hecho de que la compensación garantizada sea pagada al trabajador quincenalmente, no significa que ese concepto deba ser tomado en cuenta en el monto del salario establecido en el tabulador regional, pues al ser una cantidad adicional al sueldo presupuestal que se otorga en relación con los servicios prestados, que no forma parte del sueldo, del sobresueldo ni de la compensación, en términos del numeral 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, no debe tomarse en cuenta en el sueldo básico para la retención y entero de la cuota respectiva al instituto referido.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.15o.T.6 L (10a.)

Amparo directo 730/2014. Instituto Nacional de Cancerología. 18 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Alfonso Patiño Chávez. Secretaria: Ana Mónica González Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. SUPUESTO EN EL QUE ES INAPLICABLE PARA DESCONOCER LA VERSIÓN DEFENSIVA DEL IMPUTADO Y DEBE VALORARSE DE MANERA QUE COMPRENDA ASPECTOS QUE LE FAVOREZCAN. Cuando la única versión de los hechos proviene del inculpado, quien adopta una actitud intrapocesal de aceptación o reconocimiento de éstos, pero señala circunstancias de justificación, exclusión o atenuación del delito, las cuales no se desvirtúan por otros indicios o datos de prueba fehacientes –producto de la investigación del órgano persecutor– que vicien el principio de presunción de inocencia, el cual debe prevalecer a efecto de no revertir la carga de la prueba arbitrariamente, debe entonces atenderse íntegramente a dicha declaración del inculpado en los términos de la valoración científica y lógica del material probatorio existente, como única posibilidad de dividir la versión calificada o, en su caso, atender a dicha versión en lo conducente y racionalmente corroborado, pues de lo contrario, se estaría compensando en perjuicio del gobernado la deficiente investigación ministerial y desconociendo el aludido principio y el de la más elemental justicia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.2o.P.30 P (10a.)

Amparo directo 94/2014. 29 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Carlos Ruiz Alejandre.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA, VENCIDO PERO PRORROGABLE AUTOMÁTICA E INDEFINIDAMENTE. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO, CUANDO NO ACREDITA LA POSESIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE RESPECTIVO, QUE CONDICIONA LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA. El contrato de arrendamiento de fecha cierta, vencido al día de presentación de la demanda de amparo, pero prorrogable automática e indefinidamente acorde con sus propias cláusulas, en tanto el arrendador no se oponga a dicha posesión, es insuficiente para demostrar el interés jurídico del quejoso que acude al juicio de amparo con el carácter de tercero extraño al procedimiento en el que aduce que se le pretende privar de la posesión del bien raíz objeto de dicho acuerdo de voluntades, si el solicitante de la protección constitucional no acredita, además, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, continúa en posesión jurídica del bien arrendado, pues al ser ésta una condición indispensable para que opere la prórroga

automática del contrato de arrendamiento –que entraña el uso y goce de un bien e implica su posesión jurídica–, resulta indispensable para acreditar la subsistencia del derecho que se esgrime como violado en el juicio protector de derechos humanos, a pesar de que el contrato respectivo esté vencido.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.2o.C.55 C (10a.)

Amparo en revisión 304/2014. Luis Antonio Be Baas. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Raúl Ángel Núñez Solorio.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada el veinticinco de octubre de mil novecientos ochenta, en La Haya, Países Bajos, a la que el Estado Mexicano se adhirió, las autoridades centrales, designadas por cada Estado contratante, deben llevar a cabo diversos actos con el fin de garantizar el cumplimiento del objetivo del convenio que consiste en lograr la restitución inmediata del menor que ha sido sustraído del país en que habitualmente reside; por tanto, su ejercicio no se limita a dar trámite a la solicitud de restitución del menor y únicamente canalizar la demanda al Estado en que aquél se encuentre, sino que dependiendo de las circunstancias del caso concreto habrán de realizar una serie de actos que, incluso, pueden revestir la función de imperio. De ahí que no les asiste el carácter de terceros interesados, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de que las facultades de la autoridad central van más allá de una simple gestión de restitución, sino que resuelve y, en su caso, tramita. Máxime que no puede perderse de vista que la intervención de la autoridad central no nace por la voluntad de esta última, sino que surge derivada de las atribuciones y obligaciones asumidas por el Estado signante de la convención citada, y su actuar se encuentra claramente limitado en los artículos del propio instrumento internacional.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.C.42 C (10a.)

Queja 19/2014. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Iván Sánchez Lobato, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Karla Belem Ramírez García.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA. En términos del artículo 41, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, cuando una persona obligada a presentar su declaración de impuestos no lo haga dentro de los plazos legalmente establecidos, la autoridad la requerirá hasta en tres ocasiones para que la presente y, conforme a la fracción II, párrafo segundo, del propio precepto, si a pesar de ello no cumple con su obligación y la autoridad hacendaria conoce fehacientemente la cantidad a la que le es aplicable la tasa respectiva, hará efectiva una cantidad igual a la contribución que le correspondía determinar, sin que ello la libere de presentar la declaración omitida, ni que la cantidad establecida sea definitiva, ya que puede ser menor o mayor, lo que sólo podrá conocerse una vez que el contribuyente cumpla y determine la situación fiscal del ejercicio de que se trate; caso en el cual podrá compensar la diferencia o disminuir el importe que tenga que pagar y, en su caso, cubrir la diferencia. De lo anterior se advierte que el procedimiento indicado no tiene como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar la situación fiscal de los contribuyentes, sino que busca obligarlos a que cumplan con la presentación de las declaraciones de impuestos, por lo que su objeto es de gestión tributaria. En consecuencia, el crédito fiscal determinado en términos de la fracción II, párrafo segundo, aludida, es de carácter provisional, por lo que no constituye un acto privativo y, por ello, no transgrede el derecho de audiencia previa. No es obstáculo a ese carácter provisional, el hecho de que la cantidad determinada pueda hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución, pues en atención a la finalidad perseguida, el legislador lo estableció como medida de presión para superar la resistencia de los contribuyentes a cumplirla, la que, atento al procedimiento regulado, es razonable y proporcional.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.A.81 A (10a.)

Amparo directo 109/2014. Iván René Calderón García. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Mario Moisés Silva Islas.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS. De conformidad con las tesis P./J. 22/2014 (10a.), 1a. CCCLXIX/2013 (10a.), 1a. CCCIII/2014 (10a.), 1a. CCCLXVIII/2013 (10a.) y 2a. XXII/2014 (10a.) del Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está ante una cuestión constitucional cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) cuando de por medio se exija la tutela del principio de supremacía constitucional, porque se presenta un conflicto interpretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto texto normativo, lo que implica la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha Norma Fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo; b) que se trate de una colisión entre un tratado internacional y una ley secundaria que implique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano, o bien cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho humano; c) cuando los efectos de una posible contradicción entre leyes secundarias trasciendan en perjuicio de un contenido constitucional o derecho humano, para lo cual será necesario que el reclamo del recurrente encierre un planteamiento argumentativo de trascendencia al principio de seguridad jurídica en grado suficiente; d) cuando se cuestione que la modalidad interpretativa adoptada, aunque en el ámbito de legalidad, tiene el potencial de vulnerar la Constitución Federal, siendo posible encontrar una intelección que la torne compatible con ésta, por lo que la opción de una modalidad sobre otra implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma; e) cuando los planteamientos hechos traten de demostrar que alguna norma general es contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a algún otro tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos que resulte vinculante para el Estado Mexicano, es decir, se trate de la convencionalidad de una ley. De ahí que si el quejoso señala que se transgrede en su perjuicio el principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, al estimar que existe una aparente contradicción entre normas secundarias, por ejemplo, una general y otra local, dicho

planteamiento no constituye una cuestión constitucional en el amparo indirecto, sino propiamente de legalidad, en razón de que no se está en alguno de los supuestos referidos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.76 K (10a.)

Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 22/2014 (10a.) y aisladas 1a. CCCLXIX/2013 (10a.), 1a. CCCIII/2014 (10a.), 1a. CCCLXVIII/2013 (10a.) y 2a. XXII/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 94, con los título y subtítulo: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO."; *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1111, con los título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE NORMAS SECUNDARIAS. SUPUESTOS EN QUE PUEDE TRASCENDER A UNA CUESTIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD."; *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de agosto de 2014 a las 9:33 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 9, Tomo I, agosto de 2014, página 534, con los título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LAS REGLAS PARA SU PROCEDENCIA DEBEN EXTENDERSE A LA IMPUGNACIÓN DE NORMAS GENERALES POR CONTRAVENIR CONVENCIONES O TRATADOS INTERNACIONALES VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO."; *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1122, con los título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DIFERENCIAS ENTRE CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES Y SUPUESTOS DE INTERPRETACIÓN CONFORME, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.", y *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de marzo de 2014 a las 10:18 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 1076, con los título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. LOS AGRAVIOS RELATIVOS AL PLANTEAMIENTO DE INCONVENCIONALIDAD FORMULADO EN LA DEMANDA, SON INOPERANTES CUANDO SE ALEGA LA CONTRAVENCIÓN DE UNA NORMA GENERAL DEL ORDEN JURÍDICO INTERNO CON UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE REGULA ASPECTOS DIVERSOS A LOS DERECHOS HUMANOS.", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

D

DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA. El procedimiento especial que en términos del artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo debe tramitarse de conformidad con las normas que lo rigen, cuando se trata de conflictos relacionados con la aplicación del artículo 503 del mismo ordenamiento legal, pues constituye un verdadero juicio en el que se otorga a los presuntos beneficiarios la oportunidad de comparecer ante la autoridad laboral a hacer valer sus derechos, toda vez que se inicia con una demanda y se desarrolla en una sola audiencia, donde las partes tienen oportunidad, en caso de no llegar a un arreglo conciliatorio, de exponer lo que a su derecho convenga, de precisar sus peticiones, de ofrecer y rendir las pruebas que les sean admitidas y de formular alegatos; inclusive, de conformidad con el artículo 896, cuando se controvierta el derecho de los probables beneficiarios, se suspenderá la audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos, concluyendo la audiencia con la resolución donde la Junta o el tribunal laboral deciden sobre el fondo del conflicto al que se contrae la litis natural, la cual tiene las características de un laudo, en cuyo caso, la ley ordinaria no concede recurso alguno para ser modificado o revocado y que, en el supuesto de que se trata, se refiere a las personas a quienes les reviste el carácter de beneficiarios de un trabajador fallecido.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.29 L (10a.)

Amparo en revisión 59/2014. Sara Martínez Contreras. 27 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro López Bravo. Secretaria: María Elena Muñoz Raigosa.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL. De conformidad con el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, las disposiciones que regulan el procedimiento especial laboral, contenidas en el título catorce, capítulo XVIII, de dicha legislación, rigen en la tramitación de los conflictos que se suscitan con motivo de la aplicación, entre otros, del artículo 503 de dicha ley, el cual se relaciona con la declaratoria de los beneficiarios de un trabajador fallecido y, por ende, no es dable sostener que se tramite y se decida fuera del juicio laboral, como un procedimiento paraprocesal o de jurisdicción voluntaria (previsto por el propio ordenamiento en el capítulo III de su título quince), pues en atención a las peculiaridades de la sustanciación del procedimiento, éste consta de todas las etapas de un juicio, aunque su desarrollo sea más compacto que un procedimiento laboral ordinario, dada su tramitación "especial", como propiamente lo denomina la ley obrera. Sin que pueda practicarse de una manera diferente, toda vez que el propio legislador estableció este trámite especial para investigar y convocar a todos los posibles beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y, con su comparecencia o sin ella, resolver sobre las personas a las que les revista ese carácter.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.28 L (10a.)

Amparo en revisión 59/2014. Sara Martínez Contreras. 27 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro López Bravo. Secretaria: María Elena Muñoz Raigosa.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN

RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que la ley de la materia prevé y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el apuntado cuerpo legal. Asimismo, determina diversas hipótesis de excepción al principio de definitividad descrito, a saber: 1. Que el acto reclamado carezca de fundamentación; 2. Que únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, 3. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Concomitante con lo anterior, el último párrafo del numeral analizado es enfático al indicar que si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio aludido. Sin embargo, esa disposición debe interpretarse de conformidad con los diversos 117, último párrafo y 124, último párrafo, del propio ordenamiento, pues éstos contienen el único supuesto en que se permite a la autoridad responsable expresar la fundamentación de su acto cuando carezca de ella, o complementarla en caso de que estime haya sido insuficiente, a saber, respecto de aquellos actos materialmente administrativos en los que, al ser del conocimiento de los particulares, no contengan la fundamentación correspondiente; de ahí que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, pueda precisar los fundamentos que la facultaron para actuar en los términos en que lo hizo. Consecuentemente, de la interpretación sistemática de los preceptos referidos no se colige que se actualice una excepción al principio de definitividad que, por regla general, rige en el amparo indirecto, por el hecho de que el particular se haga sabedor de las razones y fundamentos del acto materialmente administrativo reclamado durante la tramitación del juicio y alegue haberlos desconocido previamente a la rendición del informe justificado, aun cuando aquél, con la fundamentación relativa, sea de fecha anterior a la presentación de la demanda, pues estimar lo contrario generaría la promoción indiscriminada de juicios de amparo, porque bastaría que los quejosos expresaran desconocer el acto para hacer viable un medio de defensa instituido como extraordinario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
(III Región)4o.19 K (10a.)

Amparo en revisión 223/2014 (cuaderno auxiliar 588/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Comercializadora Brittania, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Edgar Iván Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ACTUALIZA NO SÓLO CON LA ORGANIZACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS PARA COMETER ILÍCITOS, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE LOS ELEMENTOS CONSISTENTES EN LA REPETICIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN FORMA PERMANENTE O REITERADA. Si bien es cierto que del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se advierte que se comete ese delito cuando tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar conductas que por sí o unidas a otras tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos señalados en sus diversas fracciones; también lo es que para que se actualice debe demostrarse el otro elemento objetivo claramente definido, consistente en la permanencia o reiteración de esas conductas, a través de la constatación de la previa materialización de cuando menos un comportamiento ilícito anterior de los organizados para delinquir, que tipifique alguna o algunas de las diversas figuras delictivas contenidas en el precepto legal citado, cuya acreditación sea susceptible de justificarse con pruebas fehacientes, y no inferirse con base en los medios materiales vinculados con el diverso o diversos delitos con los que se realice el de delincuencia organizada atribuida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.1o.P.25 P (10a.)

Amparo directo 88/2014. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Gazca Cossío. Secretario: Gonzalo de Jesús Morelos Ávila.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO

CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES. Conforme al artículo 411 del Código Penal Federal, comete delito electoral: "... quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para votar.". Por su parte, los artículos 172 y 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales abrogado, establecen que el Registro Federal de Electores se compone de dos secciones: a) del Catálogo General de Electores y, b) del Padrón Electoral; y que para su conformación los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a participar en la formación y actualización del catálogo y padrón mencionados. Luego, respecto del aviso de cambio de domicilio ante el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral), por los ciudadanos incorporados en el catálogo y padrón referidos, el propio código electoral prevé el procedimiento respectivo en sus artículos 175, 182, 198 y 199. Asimismo, el Centro de Cómputo y Resguardo Documental del Registro Federal de Electores es el órgano encargado de verificar las solicitudes realizadas por los gobernados, el cual, previos los trámites de ley, de no encontrar irregularidad, continúa su trámite a la etapa de actualización y es cuando se modifica la información contenida previamente en el Registro Federal de Electores. Ahora bien, si un ciudadano proporciona a la autoridad electoral correspondiente, mediante solicitud de cambio de domicilio en la que consta su firma, huella digital y fotografía, datos que no le corresponden, con el objeto de obtener una nueva credencial para votar, y la citada institución electoral, al verificarlos y advertir esas irregularidades rechaza la petición, no se produce el resultado típico del aludido artículo 411 consistente en la alteración del Registro Federal de Electores, por no haber sido modificada la información contenida previamente en éste, al haberse rechazado la solicitud respectiva; no obstante, se actualiza la tentativa del referido delito, en virtud de que el sujeto activo, al proporcionar datos que no le correspondían en la citada solicitud con el fin de obtener una nueva identificación oficial exteriorizó la intención de cometer el ilícito, realizando los actos ejecutivos que deberían producir el resultado típico, y aquél no se consumó por causas ajenas a la voluntad del agente, debido a que la autoridad electoral, al verificar los datos proporcionados por el ciudadano en la petición respectiva, y encontrar irregularidades, la rechazó.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.1o.P.23 P (10a.)

Amparo directo 85/2014. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Torres Pérez. Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)2o.7 K (10a.)

Amparo en revisión 330/2014 (cuaderno auxiliar 725/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Jesús Martínez Plascencia. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Castillo Garrido. Secretario: José Antonio Belda Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO. En la jurisprudencia 426 emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 453 del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-Septiembre 2011, Tomo II, de epígrafe: "AMPARO. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA NO DEBEN COMPUTARSE LOS DÍAS INHÁBILES POR VACACIONES DE LA AUTORIDAD.", se estableció el criterio en el sentido de que no debe ser computable para promover el juicio constitucional de amparo, el periodo vacacional del que semestralmente disfrutan los tribunales civiles, administrativos o del trabajo, porque es un lapso en que éstos se encuentran cerrados al público y las partes no tienen oportunidad de imponerse de los autos de los que emana el acto reclamado y, por tanto, no pueden preparar el material para la elaboración de la demanda de garantías con los datos indispensables que para tal efecto se requiere; entonces, de las razones jurídicas contenidas en dicho criterio, aplicado por analogía, para efecto de computar el plazo para la promoción de la demanda de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe considerar, en términos de los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo: a) La fecha en que el quejoso fue notificado del acto reclamado y así iniciar el cómputo al día siguiente (pues en materia penal el día en que se notifica la resolución que constituye el acto, surte sus efectos); b) Los días que conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo son inhábiles y aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional en que se tramita el juicio de amparo, o aquellos en que dicho órgano jurisdiccional no pueda funcionar por causa mayor, en cuyo caso, tales días quedarán excluidos del cómputo relativo; y, c) Los días no laborables para la autoridad responsable, sea por encontrarse de vacaciones o porque así se determinó en algún acuerdo administrativo; estimar lo contrario, haría nugatorio el derecho de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional y coartaría la posibilidad de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en perjuicio del peticionario del amparo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.5 K (10a.)

Amparo en revisión 137/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretario: Erick García Ibáñez.

Amparo en revisión 139/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretario: Erick García Ibáñez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. El artículo 63 del Código Fiscal de la Federación prevé que las autoridades en la materia pueden motivar sus resoluciones en hechos que conozcan con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación o que consten en expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, esto es, las no fiscales; en este último supuesto, existe obligación de dar a conocer a los contribuyentes tales expedientes o documentos y concederles un plazo de quince días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, el artículo 4, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo abrogada, establece que las instituciones del sistema financiero tienen como obligación informar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria el importe de dicha contribución recaudado y pendiente de recaudar por falta de fondos en las cuentas de los obligados a su pago, conforme a las reglas de carácter general que al efecto se establezcan. En estas condiciones, la información de los depósitos en efectivo no es proporcionada por autoridad distinta a la fiscal, sino por un retenedor obligado a informar las obligaciones que le impone la norma, por lo cual se trata de la que consta en la base de datos que llevan, tienen acceso o en su poder las autoridades fiscales y, consecuentemente, es improcedente conceder a los contribuyentes la vista de quince días señalada.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.A.79 A (10a.)

Amparo directo 109/2014. Iván René Calderón García. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Mario Moisés Silva Islas.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA

INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). Con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, de 10 de junio de 2011, en vigor a partir del día siguiente, en términos del artículo 1o., todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación con el derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el artículo 4o. constitucional establece que el Estado lo garantizará y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Luego, respecto de las personas privadas de la libertad, este derecho está reconocido en instrumentos internacionales, informes y documentos de órganos autorizados como la Observación General No. 15 del Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –sobre el derecho al agua–; las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos; Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas; el Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas; Comité Internacional de la Cruz Roja y Corte Interamericana de Derechos Humanos –Caso Vélez Loor vs. Panamá–. En concordancia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la Observación General Número 15, de noviembre de 2002, en la que precisa que el vital líquido es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud, y que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. En este sentido, y en correspondencia con el "principio pro persona", conforme al cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, el derecho humano al agua, es aquel a disponer de la suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica, lo que se logra con el abastecimiento de agua que de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos; la cantidad disponible para cada persona debería corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud; por lo que, el agua, las instalaciones y los servicios deben ser accesibles para todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. Por ello, si el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna, a fin de garantizar la tutela de ese derecho humano, los Estados Partes deben adoptar medidas

para eliminar la discriminación cuando se prive a las personas de los medios o derechos necesarios para ejercer su derecho al agua; además, deben velar porque la asignación de los recursos de agua y las inversiones, faciliten su acceso a todos los miembros de la sociedad; pues las transformaciones no deben ser en beneficio de una fracción privilegiada de la población, sino invertirse en servicios e instalaciones que redunden a favor de un sector más amplio, conforme a una interpretación no restrictiva, atendiendo al principio *pro homine*, que permite acudir a una interpretación del derecho al agua acorde con los principios sustentados en la Constitución Federal y en los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales referidos, a partir de una interpretación que favorezca en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.69 P (10a.)

Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD. El agua como recurso imprescindible para los seres humanos cumple primordialmente la necesidad de consumo y usos domésticos de todos los individuos. Así, en la asignación de los recursos hídricos debe concederse prioridad al derecho a utilizarla cuando se pretenda con su suministro garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana y alimentación. Por tanto, al ser necesaria para fines domésticos o personales, o para evitar el hambre y las enfermedades, su suministro deberá hacerse prioritariamente. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que si bien el derecho al agua potable es aplicable a todos universalmente, los Estados deben prestar especial atención a las personas que tradicionalmente han tenido dificultades para ejercerlo; y respecto de las personas privadas de la libertad, establece que el Estado tiene el deber de adoptar medidas con el fin de que los presos tengan agua suficiente y de calidad para atender sus necesidades diarias, teniendo en cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Por lo que, al encontrarse los internos bajo la custodia del

Estado, en virtud de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen el derecho fundamental al agua con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad, pues las personas privadas de la libertad no cuentan con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena realización de su derecho fundamental al agua al interior de los penales, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada, porque quienes se encuentran obligados a garantizar el derecho al agua de los reclusos –autoridades penitenciarias– asumen reiteradamente una actitud de desidia respecto de su obligación de garantizar este derecho en los niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al interior de las prisiones del país de forma digna y humana.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.P.68 P (10a.)

Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, incluyendo las jurisdiccionales, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, en caso de advertirse violación a alguno, proceder a su reparación. Por otro lado, de la interpretación sistemática de los artículos 4o., párrafo sexto, de la Constitución Federal; 4o., fracción II, 5o. a 7o., 15, 16, 20, 36, 50 a 54, 93 y 94 de la Ley de Aguas del Distrito Federal; y 2o., 5o., 123 a 125 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para la entidad, se advierte que el acceso al agua potable para consumo personal y doméstico de los sentenciados es un derecho protegido por la Constitución que el Estado está obligado a garantizar. En ese sentido, cuando las autoridades penitenciarias eluden su responsabilidad para solucionar la falta del vital líquido en los centros de reclusión, vulneran el mencionado derecho humano, pues en el ámbito de sus respectivas competencias, omiten tomar decisiones tendientes a respetarlo, protegerlo y garantizarlo, por lo que, en consecuencia, violan los artículos 1o. y 4o. constitucionales; máxime que conforme al artículo 127, fracciones

I y IX, de la mencionada Ley de Ejecución, el Consejo Técnico Interdisciplinario está obligado a establecer medidas de carácter general para la adecuada atención y operación del centro carcelario, lo que implica hacer del conocimiento de las instancias competentes (Sistema de Aguas de la Ciudad) los aspectos relacionados con el funcionamiento del servicio y sus irregularidades, con el objeto de que dicho organismo cumpla con la prestación directa del servicio público de abasto y distribución de agua para uso y consumo humano en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades de la población.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.P.67 P (10a.)

Amparo en revisión 158/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Martín Muñoz Ortiz.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De los artículos 20, apartado B, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 135, numeral 3), inciso a), 219, fracción I, 222, 223 y 311 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, que tutelan el principio de no autoincriminación del acusado en el proceso penal, se colige que la confesión es la declaración voluntaria hecha por el inculpado, con asistencia de su defensor, reconociendo su participación en la comisión de un hecho descrito por la ley como delito y que tendrá eficacia convictiva cuando reúna, entre otros requisitos, el que se haya rendido sin el empleo de incomunicación, intimidación, tortura, o cualquier otro medio de coacción o violencia física o moral. Por su parte, las irregularidades en la detención y su prolongación, constituyen vicios en la actuación de las autoridades, que invalidan la confesión en tanto se presume que fueron emitidas con violencia moral, de conformidad con las tesis 1a. CXXIII/2004 y 1a. CLXXV/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DERECHO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONS-

TITUCIÓN FEDERAL." y "DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN.". Ahora bien, cuando de autos se advierte que el indiciado que confiesa su participación en los hechos delictivos ante el Ministerio Público, fue detenido en flagrancia en una diversa averiguación previa y, por tanto, en cuanto a su libertad se encuentra a disposición de esa otra autoridad, para determinar la validez de dicha confesión, previamente deben recabarse las constancias que avalen la legalidad de su detención y patenticen si fue o no prolongada, pues de existir ésta, ello implicaría violencia moral y sometimiento del indiciado, lo que bastaría para invalidar cualquier acto jurídico procesal que requiera de la libre y espontánea voluntad de la persona, sea en la indagatoria en la que declare, como en otra de la que dependa su libertad, pues esa circunstancia no puede convalidar la confesión que se hace ante esa autoridad, so pretexto de que ésta no lo tiene a su disposición, pues al efecto, está emitiendo su deposición en la calidad de detenido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
IV.1o.P.10 P (10a.)

Amparo en revisión 133/2013. 20 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretario: Víctor Hugo Herrera Cañizales.

Amparo en revisión 59/2014. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Manuel Rodríguez Gámez. Secretario: Ernesto Vladimir Tavera Villegas.

Amparo directo 174/2014. 11 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretario: Víctor Hugo Herrera Cañizales.

Nota: Las tesis 1a. CXXIII/2004 y 1a. CLXXV/2013 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 415 y Décima Época, Libro XX, Tomo 1, mayo de 2013, página 535, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

E

ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*. Si se acreditó la participación del acusado en la comisión del delito de encubrimiento por receptación, previsto en el dispositivo 243 del Código Penal para el Distrito Federal, porque poseyó diversas partes de vehículos robados con conocimiento de esta circunstancia y el Juez de la causa lo sanciona conforme a las reglas de punibilidad del concurso real, aduciendo que en el caso se actualizó una pluralidad de acciones, vulnera el principio de *non bis in idem*, previsto en el precepto 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al sancionar doblemente la misma conducta. Es así, toda vez que se está en presencia de un solo delito y no ante conductas que deban condenarse de manera autónoma como si existiera una pluralidad de acciones, pues dicho numeral sanciona el hecho como unidad de acción con un único propósito delictivo, por lo que no pueden coexistir diversas conductas de posesión, como si se tratara de diversas acciones, si la posesión de diversas partes de vehículos previamente robados fue única en cuanto a su forma de consumación y temporalidad.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.20 P (10a.)

Amparo directo 186/2014. 25 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Irma Emigdia González Velázquez.

Amparo directo 209/2014. 25 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Irma Emigdia González Velázquez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE IMPERA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA, NO INFLUYE PARA LA CALIFICACIÓN DE UN PADECIMIENTO DE ESE ORDEN. Es incorrecto que la Junta responsable condene al reconocimiento de una enfermedad profesional con base únicamente en la prueba pericial médica, así como en las descripciones que obtiene de las páginas de Internet sobre la contaminación atmosférica en la Ciudad de México, ya que, legalmente, la profesionalidad de una enfermedad debe derivar de un ambiente laboral adverso en el centro de trabajo y no de los agentes contaminantes que se generan en la Ciudad de México y área metropolitana, lo que no es atribuible al patrón, ya que el control de la contaminación ambiental se encuentra fuera de los parámetros de control de prevención de la empresa en que hubiere laborado el actor, por lo que sólo ser portador de esos padecimientos resulta insuficiente para que se reconozca la incapacidad parcial pretendida, pues no acredita el nexo causal entre éstos, las actividades desempeñadas y el ambiente laboral adverso en el centro de trabajo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.116 L (10a.)

Amparo directo 805/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretaria: Teresa de Jesús Castillo Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). Los exámenes y los resultados de las evaluaciones de control de confianza son considerados documentos públicos y, con base en su resultado, los servidores públicos pueden obtener la certificación necesaria para permanecer en el cargo o, en su defecto, ser separados de éste. Con base en ello, podría pensarse que el informe de resultados que se emita tiene valor absoluto, pues de ello depende la permanencia en el servicio; sin embargo, puede ser desvirtuado con toda prueba que sea conducente, pues de lo con-

trario, haría nugatorio el derecho de audiencia del gobernado. Ahora, conforme con el Reglamento Interior del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Guanajuato, éste se integra, entre otras, con la Dirección Técnica, que cuenta con personal certificado que efectúa la evaluación, desplegando las técnicas conducentes de acuerdo con el aspecto examinado, para lo cual desarrolla los mecanismos adecuados para identificar factores que pudieran poner en riesgo la seguridad del Estado; empero, ello no implica que no deba informarse al evaluado cuáles fueron los aspectos que no aprobó; de ahí que cuando dentro del procedimiento administrativo de remoción lo solicita, deben proporcionarse las constancias atinentes a cada una de las evaluaciones a las cuales fue sometido, con la finalidad de que tenga verdadera posibilidad de controvertir su sentido y de esa manera garantizar su derecho de defensa. Por tanto, la negativa a esa petición constituye un motivo de nulidad de la resolución correspondiente, para el efecto de que en la sentencia del juicio contencioso administrativo se ordene la reposición de dicho procedimiento, a fin de que se integren a éste tales constancias.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A.47 A (10a.)

Amparo directo 110/2014. David Isrrael Nava Cervantes. 8 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.

Amparo directo 142/2014. José Carmen Rodríguez Razo. 5 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

Amparo directo 196/2014. Pedro Prieto Andrade. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramón Lozano Bernal, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA VIGENCIA DE UN AÑO INHERENTE AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA EL CASO EN QUE EL ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO OBTENGA EL RESULTADO "NO CUMPLE", TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS PERSONAS QUE PRETENDAN PERMANECER EN LA POLICÍA FEDERAL. El artículo sexto del Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil doce, evidencia que el periodo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza tanto para los aspirantes de nuevo ingreso, como para las personas que pretendan permanecer en la Policía Federal será: a) De 2 años para quienes "cumplan" satisfactoriamente con las evaluaciones de control de confianza, en términos de los lineamientos emitidos por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, SESNSP/CNCA/LI/01/2010, para la acreditación y certificación de los centros de evaluación y control de confianza de las instituciones de seguridad pública de la Federación, en su capítulo sexto, artículo décimo séptimo; y, b) De 1 año para los que obtengan el resultado de "no cumple"; en la inteligencia de que, de estimar lo contrario, esto es, que la excepción de vigencia de un año de las evaluaciones de mérito que se establece para los sujetos de nuevo ingreso que obtengan el resultado de "no cumple", no sea aplicable para las personas que traten de permanecer en la Policía Federal, implicaría asumir que respecto de éstas, tales evaluaciones no cuenten con una vigencia establecida normativamente, conclusión que se desvirtúa de la intelección del artículo sexto en comento.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.15o.A.9 A (10a.)

Amparo en revisión 49/2014. Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Secretario: Federico Escutia Kobe.

Amparo en revisión 142/2014. Ilay Gareb Caneda Martínez. 16 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Cuauhtémoc Cárlock Sánchez. Secretaria: Ma. Elena Borunda Placencia.

Amparo en revisión 158/2014. Presidente del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal. 22 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Secretaria: Verónica Mariana Castro Rojo.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD. JURISPRUDENCIA APLICABLE CONFORME A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME TAL CUESTIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el amparo indirecto, lo anterior conforme a la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* el viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo:

"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."; sin embargo, en el caso de que la resolución que dirimió tal cuestión se emitió al momento en que prevalecía el criterio de la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", entonces es ésta la que debe aplicarse y no la jurisprudencia posterior a tal acto que abandonó dicho criterio, en tanto que, de otro modo, se afectarían situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos, con la consecuente incertidumbre jurídica que de suyo traería a los gobernados, pues considerar lo contrario, implicaría que se diera a la parte que combatió el aspecto de personalidad en el juicio de origen una doble oportunidad de impugnarla en amparo, lo cual resulta inadmisible.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN.

(IX Región)1o.2 K (10a.)

Amparo directo 233/2014 (cuaderno auxiliar 581/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas. Andrés Torres Santibáñez. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Rodríguez Maldonado. Secretario: José Guerrero Durán.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA. El artículo 27, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las expropiaciones sólo podrán decretarse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. Este precepto contiene tanto garantías de protección del derecho humano de propiedad como una facultad soberana del Estado. En el primer aspecto, la norma establece límites para la autoridad, pues le impide apropiarse de los bienes de particulares, salvo que lo exija la utilidad pública y mediante una justa retribución. Correlativamente, dicho numeral contiene una facultad

de soberanía nacional, en cuya virtud la administración pública puede privar al gobernado de un bien, discrecional y unilateralmente, siempre que satisfaga las garantías mencionadas. En este contexto, el precepto citado no legitima a los particulares para exigir la apertura del procedimiento de expropiación de sus bienes, cuando estimen que éstos han sido objeto de alguna perturbación u ocupación estatal injustificadas, pues sólo les permite combatir la expropiación que estimen contraria a las garantías de utilidad pública y justa indemnización, o bien, oponerse a la usurpación estatal de bienes no expropiados. En congruencia con lo anterior, los artículos 1o. a 5o., 7o., 8o. y 11 de la Ley de Expropiación tampoco facultan al propietario para solicitar la apertura de un procedimiento expropiatorio en su contra, sino que sólo admiten su intervención una vez que éste ha iniciado, a fin de escucharlo previamente a que se decrete el acto de privación (tratándose de las causas de utilidad pública previstas en las fracciones I a IV, VII, VIII, IX, XI y XII del artículo 1o. de la mencionada ley). De ahí que el procedimiento expropiatorio únicamente pueda instruirse por la voluntad imperativa del Estado, y no con base en la voluntad del propietario que, por cualquier motivo, pretenda la enajenación pública de sus bienes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.9 A (10a.)

Amparo directo 219/2014. Francisco Catzin Quijano. 10 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

F

FE DE ERRATAS. CUANDO TIENE POR OBJETO LA CORRECCIÓN DE PRECEPTOS CONTENIDOS EN UN REGLAMENTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, NO AMERITA EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DISTINTA DE LA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Tratándose de disposiciones de observancia general, como son las contenidas en un reglamento emitido por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la posterior publicación de una fe de erratas en el Periódico Oficial local no puede tener el alcance de modificar el texto originalmente aprobado por el órgano emisor, antes bien, se constriñe a la mera divulgación de las correcciones de algunos errores de estilo o redacción contenidos en los propios preceptos que se enmiendan. En estas condiciones, la fe de erratas no debe considerarse aisladamente e independiente del reglamento, sino como un complemento de éste que lo subsana y, consecuentemente, participa del mismo fundamento legal del que proviene. Por tanto, no amerita el señalamiento de una entrada en vigor distinta de la que corresponde al ordenamiento que corrige, pues la errata cobró vigencia en la misma fecha que lo hizo el propio reglamento.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
(III Región)4o.50 A (10a.)

Amparo en revisión 298/2014 (cuaderno auxiliar 640/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Miguel Ángel de Miguel Borboa y otros. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Bolívar López Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

FIDEICOMISO. SI EL PATRIMONIO QUE INGRESA A ÉSTE PROVIENE DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL (INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), DEJA DE TENER SU TITULARIDAD EL FIDEICOMITENTE, POR LO QUE DE CONCEDÉRSELE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De una interpretación sistemática de la jurisprudencia 1a./J. 12/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 95, de rubro: "FIDUCIARIA. ES LA ÚNICA LEGITIMADA PARA ACUDIR A JUICIO, A TRAVÉS DE SUS DELEGADOS, CUANDO EL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO ESTÁ COMPROMETIDO EN UN ASUNTO LITIGIOSO.", y su ejecutoria, este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que el fideicomiso es un negocio jurídico (contrato mercantil) en donde el patrimonio que ingresa a él, el fideicomitente deja de tener su titularidad, aunque provenga de una persona moral oficial, pues al ingresar los bienes al negocio jurídico, se secciona e independiza y pertenece al fideicomiso. Ello es así, pues implicó para el fideicomitente la transmisión real de bienes formándose un patrimonio autónomo, por ende, la fiduciaria los recibe en nombre propio para realizar un fin; de ahí que los bienes integran la propiedad de una figura diversa, esto es, el fideicomiso. Por tanto, el fideicomitente al hacer entrega de los bienes a la fiduciaria para su administración y con ellos realizar el cumplimiento de finalidades lícitas, determinadas y posibles, éstos salen de su imperio como ente público, convirtiéndose en patrimonio de otra figura. Por consiguiente, el fideicomiso es autónomo del propio ente jurídico fideicomitente; de ahí que no sea aplicable, al caso, el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que las instituciones, servicios y dependencias de la administración pública federal y de las entidades federativas, en su carácter de fideicomitentes, deberán otorgar garantía de concedérseles la suspensión del acto reclamado, pues el fideicomiso así formado no tiene el carácter de una persona moral oficial.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.73 C (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 98/2014. Carlos Salvador Abreu Domínguez. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Katya Godínez Limón.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

G

GARANTÍA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. FORMA DE CALCULARLA CUANDO SÓLO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS Y EXISTE UNA CANTIDAD LÍQUIDA. El artículo 132 de la Ley de Amparo establece que cuando proceda la suspensión, debe garantizarse el pago de la reparación de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado si el quejoso no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, la jurisprudencia 2a./J. 70/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVIII, septiembre de 2003, página 556, de rubro: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. EL HECHO DE QUE EL LAUDO SÓLO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS, NO DA LUGAR A CONSIDERAR LA NECESIDAD DE ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.", dispone que cuando se condena al patrón sólo al pago de una cantidad líquida por prestaciones secundarias y se le absuelve de la acción principal, no existe un derecho incorporado a la esfera jurídica del obrero y, por consiguiente, no ha lugar a aplicar el criterio de subsistencia del trabajador para calcular la garantía que deba otorgarse para que surta sus efectos la suspensión. En consecuencia, en el caso, deben aplicarse los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en las jurisprudencias 1a./J. 95/2011 (9a.), publicada en el mismo medio de difusión, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2288, de rubro: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." y 1a./J. 110/2013 (10a.), publicada el viernes 6 de diciembre de 2013 a las 6:00 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, página 349, de título y subtítulo: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO

SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE).", y calcularse dicha garantía aplicando, por una sola vez, al monto de la cantidad líquida de la condena, la tasa de interés interbancaria de equilibrio calculada a veintiocho días, que se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de la presentación de la demanda de amparo directo; para lo cual, el valor porcentual de la tasa de interés se dividirá entre cien para convertirlo a pesos mexicanos; el resultado se multiplicará por la cantidad líquida de la condena y se dividirá entre doce para obtener el interés mensual; finalmente, la cantidad obtenida se multiplicará por seis que es el número de meses que, en promedio, tarda en resolverse un amparo directo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.5 L (10a.)

Queja 47/2014. Editorial Santillana, S.A. de C.V. 8 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretaria: Liliana Santos Gómez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

H

HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)].

AMPARO EN REVISIÓN 330/2014 (CUADERNO AUXILIAR 746/2014) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTOS CONCURRENTE Y ACLARATORIO DE LOS MAGISTRADOS CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA, RESPECTIVAMENTE. PONENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. SECRETARIO: ROGELIO GUÍZAR MANZO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—El estudio de los agravios conduce a las consideraciones siguientes:

Señala el recurrente que la resolución combatida no se encuentra debidamente fundada y motivada, lo cual viola el principio de legalidad, toda vez que el Juez del conocimiento decretó el sobreseimiento del juicio bajo el argumento de que no se acreditó el interés jurídico o legítimo para reclamar las normas combatidas, al no demostrarse el acto de aplicación de las mismas, por virtud de no desprenderse del recibo oficial el motivo ni el fundamento por

el cual la autoridad recibió el pago, y los datos que se desglosan del mismo no coinciden con los del inmueble que se advierten del título de propiedad ejidal del quejoso, lo cual es infundado, porque el recibo oficial es un acto imputable solamente a la autoridad municipal que lo expidió, lo que no puede limitar su derecho de defensa en términos del artículo 17 constitucional, y menos para combatir la inconstitucionalidad de las normas reclamadas, máxime si existe la jurisprudencia obligatoria (cita la tesis de jurisprudencia plenaria P./J. 30/96, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR UNA LEY. LO TIENE EL QUEJOSO CUANDO EN UNA RESOLUCIÓN SE LE APLICA, AUNQUE NO SE CITEN LOS PRECEPTOS RELATIVOS."); señala que dicho recibo, adminiculado con el escrito libre, en el que expresó el motivo del pago y fundamentos legales de la autoliquidación del impuesto, acreditan el acto de aplicación del artículo 46 de la Ley de Ingresos de Zapopan, Jalisco, para el año dos mil trece y el correlativo 43, vigente para el año dos mil nueve.

Indica que deviene ilegal la valoración que hizo el Juez del escrito libre, ya que se actualiza la oportunidad del quejoso para acudir al juicio de garantías, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", por lo que la autoliquidación, como forma de colaborar con las autoridades administrativas, evidencia la aplicación de la norma fiscal, como lo establece la tesis 1a./J. 11/2012 (9a,), de rubro: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE."; que, por ello, a partir de la autoliquidación comienza a correr el término de quince días para promover el amparo contra el precepto que impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y su aplicación por el particular, acorde con las tesis de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA LAS. EL ACTO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN COLOCA AL PARTICULAR EN EL SUPUESTO DE LA LEY RECLAMADA Y LO VINCULA A ELLA, EMPEZANDO A PARTIR DE ESE MOMENTO, A CAUSARLE PERJUICIOS Y A CORRER EL TÉRMINO DE QUINCE DÍAS PARA IMPUGNARLA." e "IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ARTÍCULO 24 TRANSITORIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. NO SE REQUIERE ACTO DE AUTORIDAD, EN SENTIDO ESTRICTO, PARA ATACAR SU INCONSTITUCIONALIDAD."

Que por ello, la autoliquidación efectuada por el quejoso resulta suficiente para acreditar el acto de aplicación de la norma reclamada, por ende, el interés jurídico, máxime que ante la omisión de asentar en el recibo oficial de pago los motivos y fundamentos del mismo, y ante la inexistencia de formatos preestablecidos en los que se liquide el impuesto, el quejoso, mediante escrito libre de dieciocho de diciembre de dos mil trece, redactó los hechos y efectuó la autoliquidación respectiva, en la cual, si bien se señalaron los dos dispositivos legales, ello se debe a la confusión que se presenta por la forma en que están redactados los artículos, pero no impide la aplicación e impugnación de ambos numerales, porque uno de ellos resulta ser el fundamento del pago efectuado.

Que las diferencias de cuotas fijas y tasas marginales de ambos numerales, implica que ante la aplicación de uno u otro numeral puedan existir diferencias en el resultado final de la contribución que pudieran generar un pago mayor o menor al debido, lo cual resulta irrelevante, ya que en el juicio solamente debe demostrarse el acto de aplicación, mas no el pago correcto o exacto de la contribución que se generó por dicha aplicación, pues corresponde a la autoridad administrativa revisar lo correcto de la contribución.

No asiste razón al quejoso, toda vez que tanto del análisis del recibo de pago relativo, como del escrito libre presentado por el quejoso, no se advierte el procedimiento establecido por el legislador para el entero de este tributo en alguno de los años que señala como de aplicación de la norma tributaria combatida, ya que si el quejoso impugna las normas específicas que regulan el tributo, los agravios se enderezan en contra del tributo, con independencia de la norma aplicada, al señalar que no importa la variación del resultado, ya que la autoridad se encuentra legitimada para revisar el mismo; empero, en rigor técnico, el amparo contra leyes se endereza en contra de las normas específicas, en este caso, amparo contra leyes fiscales, las que regulan las contribuciones, mismas que al resultar contrarias al texto constitucional generan su desincorporación de la esfera jurídica del quejoso y, por consiguiente, que no se apliquen hasta en tanto no sean reformadas.

En este aspecto, el hecho de que no existan formatos a través de los cuales el contribuyente se autodetermine la contribución y con lo cual se pueda acreditar la aplicación de las disposiciones jurídicas que sirven de sustento a los diversos cálculos cuyos resultados se plasman en la declaración de impuestos, tal circunstancia, por sí sola, no amerita reconocer la existencia de la afectación de determinada norma al particular, puesto que la autoliquidación de los tributos realizada por los contribuyentes, implica determinar, motu proprio, en cantidad líquida, las contribuciones a su cargo, mediante la reali-

zación de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley hacendaria, con el correspondiente deber de enterar al fisco las cantidades que resulten.

En ese sentido, la autoliquidación constituye el producto de la voluntad del gobernado, mediante el cumplimiento espontáneo y en tiempo de sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Se trata pues, de una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto de autoridad de por medio, porque esta modalidad respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente, está sujeta a ser supervisada por la autoridad fiscal mediante el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación en materia tributaria, de manera que, en el momento de la autoliquidación, la autoridad no externa su voluntad ante el actuar del particular, pues su actuación, en su caso, será posterior.

En tal virtud, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, la cual el contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo.

Tampoco es posible señalar que la autodeterminación que realizan los particulares se deba a los actos realizados por las autoridades exactoras tendientes a lograr u obtener el cobro respectivo, pues en tal caso ya no se estaría hablando de una autoliquidación en estricto sentido, sino del cumplimiento de una obligación requerida o solicitada, situación que, en el caso, no sucede.

Entonces, si para liquidar la contribución se requiere efectuar las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe, a través de la aplicación de las fórmulas tributarias establecidas en la ley, es innegable que al haber sido el propio particular el que efectuó tal procedimiento, a éste le corresponde establecer cuál fue la norma que en específico aplicó en ese procedimiento para poder combatirla; de modo que, al no señalar en forma específica la utilizada en la determinación del impuesto, es correcto omitir el estudio de su constitucionalidad, al no poder establecer la aplicación de la misma en lo que, señala, corresponde a la autodeterminación del impuesto.

Luego, el escrito libre en que dice se encuentra la autodeterminación de la contribución, no la contiene, ya que del mismo no se desprenden las operaciones aritméticas que reflejen la cantidad de dinero consignada en el recibo oficial que aportó al juicio de amparo.

En efecto, el referido escrito no genera certeza respecto al procedimiento seguido por el quejoso para determinar la contribución con relación a alguna disposición en particular y, por ende, de la aplicación de determinada norma jurídica, ya que como lo asentó el Juez de Distrito, las normas indicadas establecen tarifas diversas, lo que lleva a obtener un resultado distinto en cada caso, sin que obste que el resultado sea erróneo y con motivo de las facultades de comprobación de las autoridades pueda determinarse en forma correcta el mismo, ya que es a cargo del quejoso establecer en forma precisa la norma aplicada en tal procedimiento, no siendo suficiente afirmar que se aplicaron las normas de las leyes de ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, vigentes en los años dos mil nueve y dos mil trece, que tilda de inconstitucionales.

En ese sentido, al no establecer el artículo utilizado en el procedimiento seguido para la liquidación de la contribución, no puede concluirse, como lo pretende el quejoso, que se aplicaron las dos normas y, por ende, el amparo proceda en contra de ambas, ya que es una la que ineludiblemente debió aplicarse para obtener el resultado plasmado en el recibo oficial, y al no existir exactitud en el supuesto normativo aplicado, no se actualiza la jurisprudencia del Pleno que cita –página 7 del recurso–; pues, se insiste, al no reflejarse liquidación alguna en el escrito presentado el dieciocho de diciembre de dos mil trece, no puede estimarse transgredida su esfera jurídica, al no existir certeza de la norma aplicada y, por ende, no evidenció que la misma haya afectado su interés jurídico.

En tal virtud, las jurisprudencias que cita –fojas 7, 8, 9 y 10 del escrito de revisión–, ningún beneficio le irrogan, ya que las mismas se refieren a la autoliquidación de la contribución, que legitiman al contribuyente para combatir las normas con motivo del primer acto de aplicación de la norma utilizada para liquidar el impuesto, lo que en la especie no demostró el quejoso, además de que las mismas no riñen con lo considerado anteriormente, toda vez que lo que le faltó al quejoso es demostrar que en la autoliquidación de la contribución respectiva, aplicó en forma precisa la norma aplicada para obtener el resultado enterado al fisco municipal, pues para efectos de la procedencia del amparo contra leyes resulta indispensable que se acredite fehacientemente el acto de aplicación que permite controvertir su constitucionalidad.

Lo anterior tiene razón en cuanto a que, como se indicó anteriormente, los efectos del amparo contra leyes consisten en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado la norma tributaria declarada inconstitucional, y al no poderse limitar la norma, los efectos del amparo tampoco se podrían limitar al desincorporar normas vigentes en épocas diversas, lo que es indebido, ya

que se otorgarían mayores beneficios que los que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha establecido para este tipo de amparos.

Tiene aplicación la jurisprudencia 3a./J. 45/90, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 199, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época del *Semanario Judicial de la Federación*, que establece:

"INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 'INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA' Y DE 'RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA'.—Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal, y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados."

La exigencia anterior resulta, en la medida en que sólo de esa forma es comprobable en cuál de los supuestos del ordenamiento tildado de inconstitucional quedó comprendida la parte quejosa.

Sirve de apoyo la jurisprudencia 321, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216 del Tomo VI del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, que señala:

"INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.—En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones."

Asimismo, es procedente invocar, por las razones que la informan, la tesis P. XCVII/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 92, Tomo II, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, correspondiente a noviembre de 1995, que indica:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.—El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, *in fine* y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente."

En otro aspecto, en su segundo agravio, el quejoso plantea que en el tercer concepto de anulación señaló que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como todos los decretos de reforma que tuvo la misma, resultan viciados de origen, al no contar con el refrendo del secretario de Finanzas del Estado de Jalisco, en su carácter de secretario del ramo, además del secretario general de Gobierno del Estado, según se advierte del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y, no obstante ello, el director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal, en representación del secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, negó que su representado haya omitido el refrendo reclamado, ya que no le corresponde refrendar las leyes emanadas del Congreso, y el Juez del conocimiento sobreseyó en el juicio, al determinar que tanto de la Constitución Política del Estado, como de los ordenamientos que comprenden la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, en los diferentes periodos de vigencia de la ley reclamada, no se desprende esa obligación del secretario de Finanzas, hoy secretario de Administración, Planeación y Finanzas del Estado de Jalisco, para la validez de las leyes, ya que dijo, solamente es necesario el refrendo del secretario general de Gobierno.

Lo cual es incorrecto, dice el recurrente, ya que la ley no permite una interpretación armónica o sistemática, toda vez que en términos del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, se desprende la obligación de los secretarios de despacho a que el asunto corresponda, para suscribir los decretos de leyes fiscales, como también le corresponde al secretario general de Gobierno, y en términos del artículo 31, fracción XXXVI, de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, las facultades del secretario de Finanzas se extienden a aquellos asuntos que señalen las leyes vigentes en el Estado, lo que impide una interpretación como la que hizo el Juez, ya que el encargado del despacho de los asuntos fiscales es el secretario de Finanzas, sin soslayar la facultad del secretario general de Gobierno del Estado de refrendar los decretos del gobernador, por lo que si entre las facultades de éste, está la de promulgar leyes o decretos expedidos por el Congreso Local, existe la obligación del secretario de Finanzas de refrendar los decretos correspondientes.

Cita al respecto la jurisprudencia 2a./J. 95/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.", y la tesis 1a. VI/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS. PARA LA OBSERVANCIA Y VALIDEZ DE LEYES, DECRETOS, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES GENERALES, CORRESPONDE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y AL TITULAR DEL RAMO A QUE EL ASUNTO CORRESPONDA."

El agravio anterior es infundado.

Al respecto es oportuno señalar el contenido de los artículos 85 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y 93 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo.

"Artículo 85. Las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el gobernador promulgue, expida o autorice, para su validez y observancia deberán ser refrendados por el secretario general de Gobierno y por el titular del ramo a que el asunto corresponda. Cuando sean de la competencia de dos o más dependencias deberán ser refrendados por los titulares de las mismas."

"Artículo 93. Toda ley o decreto será refrendada por el secretario de Gobierno y por el funcionario del ramo relativo."

De los dispositivos constitucionales locales transcritos se desprende, en forma expresa, que las leyes serán refrendadas por el secretario general de Gobierno y por el secretario del ramo relativo, lo que no ocurre en el texto del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que dice:

"Artículo 46. Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un servidor público que se denominará secretario general de Gobierno y varios que se denominarán secretarios del despacho del ramo que se les encomiende.

"Todas las disposiciones que el gobernador del Estado emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas."

En este sentido, si la disposición constitucional del Estado de Jalisco es diversa a aquellas sobre las cuales las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron, las tesis que invoca en su favor el quejoso no cobran aplicación.

En efecto, el segundo párrafo del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco prevé que todas las disposiciones que el gobernador del Estado emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario de despacho a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas.

Sin embargo, contrario a lo apreciado en el concepto de agravio que se analiza, se considera que el anterior requisito únicamente opera respecto de las disposiciones **emitidas por el gobernador del Estado** en uso de sus facultades, pero no respecto de las leyes y decretos **emitidos por el Congreso del Estado**, pues dicho dispositivo así lo establece de manera expresa.

Ahora, los decretos publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por los que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, **fueron emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco y no por el gobernador.**

Para corroborar lo anterior, hay que recurrir al Decreto Número 11558, del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual expidió la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, publicado en la sección segunda del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el martes tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, como aquellos decretos a través de los cuales se reformaron y adicionaron los artículos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, tildados de inconstitucionales, publicados en aquel medio de comunicación oficial el nueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el veinticinco de julio de dos mil, el veintiocho de febrero de dos mil cuatro, el veintitrés de junio de dos mil cinco, el siete de diciembre de dos mil seis y el veintisiete de diciembre de dos mil once, de los que se desprende que los mismos fueron refrendados únicamente por el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco.

Como ejemplo, en lo que interesa, basta citar los decretos 11558 y 16912, que establecen lo siguiente:

"Enrique Álvarez del Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber:

"Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me ha comunicado el siguiente

"Decreto

"Número 11558. El Congreso del Estado decreta:

"Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco

"…

"Salón de sesiones del H. Congreso del Estado
"Guadalajara, Jal., a 15 de marzo de 1984

"Diputado presidente
"Francisco Ruiz Guerrero
"Dip. Secretario
"Dr. Carlos González Guevara
"Dip. Secretario
"Ing. Salvador Farías Chávez

"Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

"Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro.

"El Gobernador Constitucional del Estado
"Lic. Enrique Álvarez del Castillo

"El secretario general de Gobierno
"Lic. Eugenio Ruiz Orozco."

"Decreto 16912.

"Alberto Cárdenas Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitantes del mismo hago saber que por con-

ducto de la Secretaría del H. Congreso de esta entidad federativa, se me ha comunicado el siguiente

"Decreto

"**Número 16912. El Congreso del Estado decreta:**

"Artículo único. …

"…

"Salón de Sesiones del Congreso del Estado
"Guadalajara, Jalisco, a 6 de noviembre de 1997.

"Diputado presidente
"Sergio Vázquez García

"Diputado secretario
"Francisco Mercado Montaño Gallo

"Diputado secretario
"Arnulfo Villaseñor Saavedra

"En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue, y se le dé el debido cumplimiento.

"Emitido en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

"El C. Gobernador Constitucional del Estado
"Ing. Alberto Cárdenas Jiménez.

"El C. Secretario General de Gobierno
Lic. Raúl Octavio Espinoza Martínez."

Como puede verse, dichos decretos fueron **emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco y no por el gobernador**, ya que **este último únicamente promulgó dichos decretos,** en términos del artículo 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, vigente en la época de su expedición, y no los **emitió** en uso de la facultad que le otorgaban las fracciones VIII y XX de ese precepto constitucional, que prevén:

"Artículo 50. Son facultades y obligaciones del gobernador del Estado:

"I. Promulgar, ejecutar, hacer que se ejecuten las leyes y ejercer en su caso, la facultad de hacer observaciones a las mismas en los términos y plazos que establece esta Constitución;

"…

"VIII. Expedir los reglamentos que resulten necesarios, a fin de proveer en la esfera administrativa, la exacta observancia de las leyes y para el buen despacho de la administración pública;

"…

"XX. Expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo para la eficaz prestación de los servicios públicos y otorgar concesiones a los particulares para este mismo efecto, en el ámbito de su competencia, requiriéndose en este último caso, cuando su vigencia trascienda el término del ejercicio para el que fue electo, la autorización del Congreso del Estado; …"

De ahí que los decretos que emita el Congreso del Estado, en los que expida leyes, únicamente tienen que ser **refrendados por el secretario general de Gobierno y no por el secretario de Finanzas.**

Lo anterior encuentra apoyo, incluso, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, vigente en las épocas en que se publicaron los decretos que expidieron y reformaron la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, esto es, el doce de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve (artículo 7), el veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y nueve (artículos 5 y 30, fracción II) y el veintisiete de febrero de dos mil trece (artículos 11, fracción III y 13, fracción IV), los cuales disponen:

"Artículo 7o. Para la mejor administración de los negocios que así lo necesiten, habrá los servicios descentralizados o de gestión a que se refiere el presente ordenamiento a leyes especiales en cuyo caso los jefes, presidentes o encargados de los mismos acordarán los asuntos que legalmente así lo requieran, directamente con el Ejecutivo del Estado sin necesidad de firma de algún jefe de departamento; pero los reglamentos que debe aprobar y expedir el gobernador del Estado que tengan relación con dichos servicios, deberán ser refrendados por el secretario general de Gobierno."

Artículos 5o. y 30, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de mil novecientos ochenta y nueve:

"Artículo 5o. Todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador promulgue o expida, para que sean obligatorias, deberán estar refrendadas por el secretario general de Gobierno y, sin este requisito, no surtirán efecto legal."

"Artículo 30. La Secretaría General de Gobierno es la dependencia encargada de colaborar con el Ejecutivo en la conducción de la política interna del Estado y a ésta corresponde, además de las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución Política del Estado, el despacho de los siguientes asuntos:

"I. Presentar ante el Congreso del Estado las iniciativas de ley del Ejecutivo;

"II. Refrendar con su firma todas las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, así como los reglamentos y decretos del Ejecutivo; …"

Artículos 11, fracción III y 13, fracción IV, vigentes a partir de dos mil trece:

"Artículo 11. Las secretarías tienen las siguientes atribuciones generales:

"…

"III. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia, que emita el gobernador del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales, con la firma de su titular. En el caso de la Secretaría General de Gobierno, deberá refrendar todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador promulgue o expida para que sean obligatorias, sin este requisito no surtirán efecto legal; …"

"Artículo 13. La Secretaría General de Gobierno tiene las siguientes atribuciones:

"…

"IV. Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos y decretos del Gobernador del Estado, con la firma de su titular; …"

De las normas descritas se obtiene que en las diversas épocas en que estuvieron vigentes, el secretario al que le correspondía el refrendo de los de-

cretos que emitía el Congreso del Estado o los reglamentos que expedía el gobernador del Estado, era al secretario general de Gobierno.

Lo insertado revela que durante la vigencia de la norma aplicaba en las fechas en que se expidieron los decretos por los que se promulgó la Ley de Hacienda Municipal y sus reformas, el único secretario obligado a refrendar con su firma, tanto de los decretos del Congreso como del gobernador, era el de Gobierno, y si así aparece que lo hizo en los decretos que aquí se examinan, debe arribarse a la convicción de que éstos son válidos y obligatorios.

En esa línea de pensamiento no se observa que la regulación secundaria invocada contraríe el lineamiento constitucional en lo que al refrendo se refiere, porque atendiendo al alcance que tenía el numeral 46 de la Constitución Política local, cabe advertir que únicamente imponía que las disposiciones del gobernador del Estado, emitidas en uso de sus facultades (como se dice fue la promulgación), fueran firmadas por el secretario de despacho a que el asunto correspondía, sin cuyo requisito no serían obedecidas; luego, si el refrendo es un asunto que correspondía al secretario de Gobierno, porque así estaba dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, no se puede establecer que compete al secretario de Finanzas plasmar también su firma para que fuera obedecida, ya que el refrendo no era un asunto que estuviera dentro de sus facultades, como tampoco lo es en la actualidad.

Pudiera pensarse que el contenido de la ley orgánica vigente, durante la época en que se promulgó el último decreto reformatorio de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, aún no se adecuaba al texto constitucional y, por ende, era el de mayor jerarquía al que se debía atender; sin embargo, ahora tampoco se prevé que sean los secretarios del ramo quienes deban firmar los decretos emitidos por el Congreso Local, junto con el secretario de Gobierno a quien continúa correspondiendo el asunto de su refrendo, como queda patente de la reproducción siguiente:

"Artículo 11. Las secretarías tienen las siguientes atribuciones generales:

"...

"III. Refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia, que **emita** el gobernador del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales, con la firma de su titular. **En el caso de la Secretaría General de Gobierno, deberá refrendar todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador promulgue o**

expida para que sean obligatorias, sin este requisito no surtirán efecto legal; …"

"Artículo 13. La Secretaría General de Gobierno tiene las siguientes atribuciones:

"…

"**IV. Refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos y decretos del gobernador del Estado, con la firma de su titular**; …"

Nótese cómo, incluso, se hace la distinción entre las leyes, decretos, reglamentos y disposiciones que el gobernador **promulgue**, y aquellos que **expida**, al emplear la conjunción disyuntiva "o" para denotar diferencia, separación o alternativa entre dos actividades o facultades diferentes, en consecuencia de lo cual, el artículo 11, fracción III, en cita, establece que las secretarías tienen como atribuciones la de refrendar los reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su competencia, **que emita el gobernador del Estado en ejercicio de sus facultades constitucionales**, con la firma de su titular, dispositivo que es concordante con el diverso 46 de la Constitución Estatal.

Sin embargo, el mencionado dispositivo también establece que en el caso de la Secretaría General de Gobierno, **deberá refrendar todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el gobernador promulgue** o **expida** para que sean obligatorias, y sin este requisito no surtirán efecto legal.

Esto es, será el secretario general de Gobierno quien deberá refrendar, entre otros, los decretos que el gobernador promulgue, como en el caso lo fueron los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco.

Circunstancia que es acorde con el artículo 13, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que la Secretaría General de Gobierno tiene, entre sus atribuciones, la de refrendar las leyes y decretos del Congreso del Estado, facultad que no está encomendada a alguna otra secretaría ni exige mayor requisito para su obligatoriedad, en lo que a este tópico se refiere.

Así, los decretos emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, únicamente fueron **promulgados** por el gobernador, no **emitidos** por él y, en esas condiciones, es claro que únicamente debieron ser refrendados por el secretario general de Gobierno y no por el secretario de Finanzas.

De conformidad con lo anterior, este Tribunal Colegiado se aparta del criterio que venía sustentando en lo relativo al refrendo de los decretos que emita el Congreso del Estado de Jalisco, plasmado en la siguiente tesis:

Tesis (III Región)4o.46 A (10a.), visible en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, materia constitucional, página 1158, de título y subtítulo siguientes:

"HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DECRETO 16912, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 'EL ESTADO DE JALISCO' EL 9 DE DICIEMBRE DE 1997, POR EL CUAL SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Y 123 DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, AL NO HABERSE REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD CARECE DE VALIDEZ Y, POR ENDE, NO DEBE SER OBEDECIDO.—El artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que todas las disposiciones que el gobernador del Estado de esa entidad emita en uso de sus facultades, deberán estar firmadas por el secretario del despacho al que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidas, esto es, prevé el refrendo, mediante el cual se lleva a cabo la legalización de un documento por el servidor público facultado y obligado a ello, al plasmar su firma, con la finalidad de hacer constar que quien, a su vez, realizó la actuación legalizada, asentó su firma y es quien en realidad tiene la atribución legal de hacerlo en un momento determinado; esto es, cumple una función por la cual se auténtica tal proceder, porque de esa manera se dota de certeza jurídica a la disposición correspondiente, en el sentido de que quien la expidió contaba con el carácter para hacerlo y, de esa forma, podrá tener los efectos legales conducentes; de ahí la razón por la cual dicho refrendo emerge como un requisito de validez de la actuación respectiva, de lo contrario, se actualiza su falta de obediencia u obligatoriedad. Por tanto, si de dicho precepto se advierte que todas las disposiciones emitidas por el gobernador del Estado de Jalisco, sin exclusión alguna, deben firmarse por el secretario del despacho al que corresponda el asunto, es decir, la materia de éstas será el factor determinante para vincular y obligar a quien deba plasmar su firma en el acto referido, con la finalidad de legalizarlo y, así, dotarlo de certeza jurídica, entonces, si el decreto 16912 citado carece del refrendo del secretario de Finanzas, no cumplió con ese requisito de validez y, conforme a la norma constitucional local, no debe ser obedecido."

Lo anterior, en virtud de que tal tesis se sostuvo por mayoría de votos, con el voto en contra de la Magistrada Claudia Mavel Curiel López, quien emitió voto concurrente, y dada la nueva integración del Tribunal Colegiado, se

establece, por mayoría, que el artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, solamente dispone para la validez y obediencia de un decreto del Congreso que expida una ley, que deba ser refrendado por el secretario general de Gobierno.

Por lo expuesto, y fundado en los artículos 81, fracción I, inciso e), 83, 84, 88, 89, 91 y 93, de la Ley de Amparo, se resuelve:

PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida; en consecuencia:

SEGUNDO.—Se sobresee en los autos del juicio de amparo promovido por **********, por su propio derecho, en contra de los actos y de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.

Anótese en el libro de gobierno electrónico correspondiente; procédase a engrosar la presente ejecutoria y, con una más que la contenga, vuelvan los autos al órgano de origen en términos del inciso 6) del quinto punto del Acuerdo 44/2009, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Así lo resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, por unanimidad de votos de los Magistrados Claudia Mavel Curiel López, Moisés Muñoz Padilla y Juan Manuel Rochín Guevara, siendo presidenta la primera de los nombrados y ponente el segundo en mención; formulan voto concurrente la Magistrada Claudia Mavel Curiel López y voto aclaratorio el Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto concurrente de la Magistrada Claudia Mavel Curiel López: Con el respeto que merecen mis compañeros Magistrados, si bien convengo en el sentido de la sentencia aprobada, únicamente comparto las razones que se dieron para confirmar el sobreseimiento decretado por el a quo por falta de interés jurídico o legítimo del impetrante para reclamar, por vía de amparo, las normas combatidas (al no acreditarse el acto de aplicación); en cambio, estimo que, salvo el sobreseimiento por inexistencia de actos que se decretó en la sentencia recurrida, respecto del tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, que creo debió declararse firme ante la ausencia de controversia por el quejoso recurrente; la falta de ese interés calificado es suficiente para actualizar la misma causal de inejercicio también en relación con el se-

cretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y, por ende, desde mi punto de vista, así debió declararse en la sentencia y confirmar el sobreseimiento declarado en torno a dicha autoridad, pero por motivos diversos a los considerados en la recurrida.—Arribo a la anterior convicción, porque a esta última autoridad responsable se le atribuyó, propiamente, **la omisión de refrendar** el Decreto 11558 que contiene la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial del Estado el tres de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, así como los subsecuentes decretos por los que se crean, reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la referida legislación, específicamente los numerales tildados de inconstitucionales que prevén lo relativo al impuesto sobre transmisión patrimonial (que no fueron aplicados en perjuicio del quejoso, como se sostuvo en la primera parte de la sentencia aprobada por el Pleno); pero respecto de esta autoridad, el Juez de Distrito sobreseyó **al declarar inexistente el acto que se le reclamó (omisión de refrendar la ley combatida) ante la negativa de la responsable, aduciendo que no le correspondía llevar a cabo tal refrendo y, dijo el juzgador, esa negativa no fue desvirtuada, porque después de un análisis sobre dicha obligatoriedad del refrendo, concluyó que efectivamente no le correspondía tal tarea legislativa al secretario de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, lo que, afirmó, originaba que no se le pueda imputar la omisión en el refrendo de las disposiciones cuestionadas, que se le atribuyó.**—El estudio anterior refleja que se emplearon argumentos íntimamente relacionados con el fondo del asunto –ya que forman parte de uno de los conceptos de violación formulados por el quejoso y, por tanto, corresponden a la materia principal del juicio– para declarar la improcedencia del juicio de amparo por inexistencia del acto, lo que no es técnica ni jurídicamente válido, como lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de la Novena Época, localizable en la página 5 del Tomo XV, enero de 2002, materia común del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* (Registro IUS 187973), que de manera textual establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.".—Por esa razón me aparto de las consideraciones que se emiten en la sentencia aprobada, para avalar aquellas de origen en que descansa ese sobreseimiento y declarando infundado el agravio planteado en su contra, toda vez que no concibo que sea adecuado ratificar una postura errónea provocada por el incorrecto análisis efectuado por el Juez de amparo sobre la existencia de ese acto.—Lo que reitero, aun cuando la suscrita está de acuerdo en los fundamentos y motivos que se expresan para aterrizar en que los decretos promulgados por el gobernador del Estado de Jalisco, no emitidos por él, como es el caso de los impugnados, únicamente deben ser refrendados por el secretario general de Gobierno y no por el secretario de Finanzas, actualmente de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, por las mismas razones que he vertido al sostener dicha postura en los votos minoritarios que sobre el tema he formulado en sendos precedentes de este tribunal, y que ahora se adoptan en la sentencia, como criterio mayoritario, para declarar ineficaz la inconformidad del recurrente sobre el particular.—Cabe mencionar que es por esta última razón por la que apruebo la tesis emanada de este asunto, sometida a consideración del Pleno en esta propia sesión, mas no porque me parezca apropiado sobreseer en el juicio por esos mismos motivos que, a mi ver, deben

reservarse para dilucidar el fondo cuando sea procedente la vía de amparo.—Por tanto, desde mi óptica jurídica, al tratarse de un tópico de fondo, en el presente asunto no era dable traerlo a cuenta para reputar correcto el sobreseimiento del a quo en torno a la citada autoridad, porque se incurre en el vicio lógico de petición de principio, dando un mensaje al juzgador y a los justiciables de que ello es correcto, cuando el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación ha sostenido lo contrario e, incluso, lo hemos declarado así en diversos precedentes donde se ha detectado tal inexactitud.—De tal manera que, con todo respeto, emito voto concurrente porque si bien coincido en confirmar el sobreseimiento decretado por el juzgador federal, las razones que me llevan a dicha postura difieren, parcialmente, de las que se sustentan en la solución final del asunto, que reiteraron las propias del fallo sometido a escrutinio, a pesar de estar frente a una petición de principio.

Este voto se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

Voto aclaratorio del Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara: Aunque estoy de acuerdo con el sentido del fallo decretado en este asunto, en cuanto confirmó el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito por falta de interés jurídico del impetrante del amparo, al no haberse demostrado que dicho promovente se ubicó en el supuesto de la norma tildada de inconstitucional, aclaro mi voto solamente con relación a que, en mi concepto, sí era necesario que la ley reclamada en el juicio de amparo como inconstitucional, fuera refrendada por el secretario del ramo y no sólo por el secretario general de Gobierno, porque solamente así se cumpliría con el artículo 46 de la Constitución Política de Jalisco, dando ahora por reproducidos los argumentos que se sustentaron al resolverse por mayoría de votos el expediente del amparo en revisión 352/2014, con el fin de evitar repeticiones ociosas, por lo que con apoyo en esos argumentos sustento mi voto aclaratorio.

Este voto se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el amparo en revisión 352/2014, derivado del toca de origen 137/2014, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitió la tesis (III Región)4o.46 A (10a.), en la que, por mayoría de votos, sostuvo que, en términos del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, todas las disposiciones emitidas por el gobernador del Estado de Jalisco, sin exclusión alguna, debían firmarse por el secretario del despacho al que corresponda el asunto, por lo cual, si el decreto 16912, que reformó diversos artículos de la Ley de Hacienda Municipal de la entidad se publicó sin cumplir con ese requisito de validez,

conforme a la norma constitucional referida no debía ser obedecido; sin embargo, se aparta de dicho criterio para sostener que el requisito del refrendo por el secretario del ramo, únicamente opera en relación con las disposiciones expedidas por el gobernador del Estado en uso de sus facultades, pero no respecto de las leyes y decretos emitidos por el Congreso Local, ya que en términos del artículo 50, fracción I, de la propia Constitución Política del Estado, corresponde al gobernador promulgarlos y, acorde con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, al secretario general de Gobierno refrendar dichos decretos o los reglamentos que aquél expida. Consecuentemente, si los decretos publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", por los que se expidió, reformó y adicionó la Ley de Hacienda Municipal, fueron emitidos por el Congreso y refrendados únicamente por el secretario general de Gobierno, no contrarían el artículo 46 aludido y, por tanto, deben ser obedecidos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
(III Región)4o.55 A (10a.)

Amparo en revisión 330/2014 (cuaderno auxiliar 746/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 18 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos, mayoría en relación con el tema contenido en esta tesis, con votos concurrente de la Magistrada Claudia Mavel Curiel López y aclaratorio del Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara, respectivamente. Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Secretario: Rogelio Guízar Manzo.

Nota: Esta tesis se aparta del criterio sostenido por el propio tribunal, en la diversa (III Región)4o.46 A (10a.), de título y subtítulo: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. EL DECRETO 16912, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 'EL ESTADO DE JALISCO' EL 9 DE DICIEMBRE DE 1997, POR EL CUAL SE REFORMARON LOS ARTÍCULOS 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 Y 123 DE LA LEY RELATIVA, QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES, AL NO HABERSE REFRENDADO POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DE LA ENTIDAD CARECE DE VALIDEZ Y, POR ENDE, NO DEBE SER OBEDECIDO.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1158.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

HORAS EXTRAS. SON INVEROSÍMILES CUANDO SU RECLAMO SE BASA EN EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO CONTÓ CON TIEMPO PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS, SIN PRECISAR EL HORARIO EN QUE DEBÍA CUBRIRSE ESTA NECESIDAD. Cuando el reclamo de horas extras se basa en el hecho de que el trabajador no contó

con tiempo para gozar de la ingesta de alimentos, por haber laborado continuamente y en exceso, pero sin precisar el horario en que debía cubrir su necesidad, dicho reclamo resulta inverosímil, en virtud de que no es creíble que se hubiera laborado varias jornadas de trabajo de manera continua y excesiva, sin cubrir esa necesidad de alimentación, dado que el común de los hombres no puede trabajar en esas condiciones, al tratarse de una necesidad fisiológica humana.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

(VIII Región)2o.6 L (10a.)

Amparo directo 302/2014 (cuaderno auxiliar 700/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Wilbert Polanco Jiménez. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el contenido y tema de esta tesis, por no haber votado en el asunto que le dio origen el Magistrado Gonzalo Eolo Durán Molina. Ponente: Mayra González Solís. Secretaria: Guadalupe Belem Lobato Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL QUERELLANTE. SI AL CONOCER DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROMOVIDO CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL PROCURADOR ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO SE ASEGURÓ DE AQUÉLLAS, DEBE DEVOLVERLE LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA Y, DE SER NECESARIO, REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS ACREDITEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De conformidad con los artículos 129 y 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León, el agente del Ministerio Público que reciba un escrito de querella, tiene la obligación de asegurarse de la identidad y legitimación del querellante y, en su caso, requerir los documentos que justifiquen esos extremos. Ahora bien, si el procurador general de justicia de la entidad, al conocer del recurso de inconformidad promovido contra la resolución de no ejercicio de la acción penal dictada por el agente investigador, advierte que éste no atendió lo dispuesto en los citados numerales, debe ordenar la devolución de los autos a fin de que se dé cumplimiento a lo que ahí se dispone y, de ser necesario, requerir al querellante la exhibición de los documentos que acrediten su identidad y legitimación. Sin que esa omisión pueda ser obviada, ni aun por el hecho de que la representación social estime que en el caso operó la prescripción de la querella, pues su análisis presupone, lógicamente, que ésta existe, que se formuló por escrito y ratificó por quien se identificó a satisfacción y que, además, justificó estar legitimado para ello.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.
IV.1o.P.16 P (10a.)

Amparo en revisión 56/2014. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Heriberto Pérez García. Secretaria: María Guadalupe Briones Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL. Si la materia del amparo indirecto es el auto de formal prisión dictado por la comisión de un delito del fuero común y el Juez de Distrito plantea que está impedido para conocerlo, por actualizarse la causa prevista en el artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, argumentando que, previamente como Juez de proceso, debido al desglose de la averiguación previa correspondiente, conoció de los mismos hechos ilícitos y dictó diverso auto de formal prisión contra el quejoso por delitos del fuero federal, dicha causa de impedimento no se actualiza. Lo anterior, en razón de que el conocimiento previo del Juez de Distrito, al resolver la situación jurídica del inculpado dentro de dicho proceso federal, deriva de hechos independientes y autónomos respecto de aquellos que motivaron su juicio por delitos del fuero común y que originaron el acto reclamado; por lo que, al no afectarse el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se actualiza la causa de impedimento mencionada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.P.T.5 P (10a.)

Impedimento 2/2014. 8 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: María Guadalupe Chávez Montiel.

Impedimento 5/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: Rosalba Janeth Rodríguez Sanabria.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). El mencionado precepto establece en la porción normativa que interesa de su primer párrafo, que todas las excepciones procesales que tenga el demandado debe hacerlas valer al contestar la demanda, y en ningún caso suspenderán el procedimiento. Y, en su segundo párrafo, que cuando se declare la improcedencia de la vía, su efecto será el

de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente declarando la validez de lo actuado, con la obligación del Juez para regularizar el procedimiento de acuerdo a la vía que se declare procedente. La razón de ser de esa disposición es privilegiar la resolución del fondo de los asuntos de naturaleza mercantil y que el error de la vía no se convierta en un obstáculo para ello. Esa intención permite que, al hacer una interpretación conforme, en atención al principio pro persona, a la *ratio legis*, pero sobre todo al derecho humano de tutela judicial efectiva, la disposición mencionada también se aplique a los casos en que la improcedencia de la vía se advierta de oficio, no únicamente cuando se oponga como excepción, lo cual es la razón de ser de esa disposición, pues en ambos supuestos existe la misma situación. Lo que hace posible cumplir de una manera más completa con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se obstaculiza por un simple error en la vía elegida, la posibilidad de defensa de las partes ni la de obtener la resolución del fondo de sus pretensiones, es decir, de obtener la tutela jurisdiccional. Así, si el Juez advierte de oficio la improcedencia de la vía, no debe desechar la demanda o sobreseer en el juicio, sino que debe conducirse en términos del segundo párrafo del numeral que se analiza.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.1o.C.11 C (10a.)

Amparo directo 535/2014. Karlos Alberto Soto García. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Romero Vázquez. Secretaria: Gabriela Elizeth Almazán Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El artículo 46-BIS de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo (para el ejercicio fiscal de 2013), adicionado mediante Decreto Número 235, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 21 de diciembre de 2012, que prevé el impuesto adicional para el fomento turístico, desarrollo integral de la familia, desarrollo social y promoción de la cultura, a razón del 10% sobre el monto de los impuestos y derechos municipales a cargo del contribuyente,

viola el principio de proporcionalidad tributaria, consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, toda vez que dicho impuesto adicional cuenta con todos los elementos para ser considerado como un impuesto y no como una tasa adicional o sobretasa del que le sirve de base, pues no está establecido en cada uno de los ordenamientos que prevén los supuestos de causación de los impuestos y derechos municipales, sino que está en un ordenamiento diverso (Ley de Hacienda), en la que se señalan los sujetos pasivos, el objeto, el hecho imponible, la base gravable, tasa y época de pago, identificándose que el objeto del impuesto adicional es el pago de impuestos y derechos municipales, elementos que difieren de los correspondientes a los impuestos principales. Luego, mientras que en los impuestos y derechos municipales (predial, diversiones, videojuegos, espectáculos públicos, adquisición de bienes inmuebles, uso y tenencia de vehículos que no consuman gasolina ni otro derivado del petróleo y sobre juegos permitidos rifas y loterías, etc.), se gravan los ingresos y el patrimonio del contribuyente, en el impuesto adicional se grava el monto del pago de un tributo, sin atender a la operación o actividad económica que le dio origen; lo que no es proporcional, dado que el gobernado que pague más impuestos y derechos municipales erogará una cantidad superior por concepto de impuesto adicional que aquel que pague menos impuestos y derechos municipales, sin que esto atienda a su capacidad contributiva, ya que no se toma en consideración la manifestación de su riqueza, sino que se atiende a un elemento ajeno, como lo es el monto del pago de un impuesto o derecho municipal, es decir, una erogación que no modifica positivamente su patrimonio, sino que lo disminuye, aunado a que implica la imposición de una carga extra en su obligación tributaria.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.8 A(10a.)

Amparo en revisión 32/2014. Gran Desing & Factory, S. de R.L. de C.V. 20 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Adam Azcorra Puc.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA, CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, NO OBSTANTE QUE SE HUBIESE DICTADO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ÉL. El artículo 145 de la Ley de Amparo prevé que debe declararse sin materia el incidente de suspensión cuando se demuestre que se resolvió sobre la definitiva en un diverso juicio de amparo promovido por el propio quejoso o su representante, contra las mismas autoridades

y por los mismos actos; lo que implica que esta declaratoria procede previo al pronunciamiento de la resolución definitiva, o bien, con posterioridad a su dictado, siempre y cuando se actualicen las exigencias previstas en el citado numeral.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.1o.C.T.27 K (10a.)

Queja 64/2014. María de Fátima Quintero Castro. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Armando Juárez Morales. Secretaria: Lilia Isabel Barajas Garibay.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INFONAVIT. ESTÁ FACULTADO PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SIN NECESIDAD DE PREVIA TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997. Es procedente que la Junta de Conciliación y Arbitraje se ocupe de la reclamación contra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, aunque no se haya demandado a la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente, toda vez que el citado instituto está facultado para entregar directamente los fondos de la subcuenta de vivienda del régimen 1997 al pensionado que reúna los requisitos legales. Lo anterior encuentra su fundamento en la interpretación armónica y sistemática del artículo octavo transitorio de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de las disposiciones primera, décima, décima segunda, y de la parte considerativa del Acuerdo por el que se expiden las disposiciones de carácter general para la entrega de los recursos de la Subcuenta de Vivienda 97, a los trabajadores pensionados a los que se refiere el artículo octavo transitorio vigente de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de julio de 2012, de donde se colige que ya no existe necesidad de previa transferencia que realizaba el instituto a la Administradora de Fondos para el Retiro para que ésta, a su vez, los entregara a las personas que obtuvieron una pensión durante el periodo comprendido del 1 de julio de 1997 al 12 de enero de 2012.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.23 L (10a.)

Amparo directo 195/2014. David Ariel García Barrera. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel Arévalo Mascareño.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INFORME JUSTIFICADO. COMPLEMENTACIÓN DEL. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER OMISIVO. La porción normativa referida establece que cuando se hagan valer en la demanda de amparo indirecto violaciones relacionadas con la falta o insuficiente fundamentación y/o motivación, y se trate de actos materialmente administrativos, las autoridades responsables deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado, al rendir su informe justificado. De ahí que dicha regla sea inaplicable respecto de actos omisivos, dado que éstos se refieren lisa y llanamente a la ausencia de un actuar por las autoridades y, por tanto, no es posible complementarlos, proporcionando fundamentación o motivación alguna en el informe justificado que debiera tomarse en consideración en la litis, por lo cual, en estos casos, debe imperar la regla general de inmutabilidad de los actos reclamados.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
I.18o.A.3 K (10a.)

Amparo en revisión 143/2014. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en la Delegación Regional Poniente en el Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Anis Sabedra Alvarado Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSPECCIÓN. CUÁNDO SU OFRECIMIENTO NO ES INDIVIDUALIZADO. Si al proponer este medio de convicción, el actor señala que deberá practicarse sobre nóminas, listas de raya o de asistencia, por ejemplo, y precisa además que habrá de realizarse "en el renglón correspondiente al actor" o una expresión similar, no debe considerarse que su ofrecimiento fue individualizado, en primer lugar porque como puede verse el trabajador no solicitó en forma expresa que debía practicarse en los documentos que sólo se refieran a él y, en segundo, porque es evidente que por la naturaleza de tales documentos no pueden ser exclusivos del oferente de la prueba, sino que abarcan o comprenden a todo el personal de la empresa o centro de labores; de lo que se sigue que, en todo caso, la manifestación hecha de que se realice en el renglón correspondiente, lo único que puede significar, es que el actuario habrá de obtener los extremos a probar de donde aparezca su nombre, en caso de existir, pero no que se trate de documentos de él exclusivamente.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.7o.T.12 L (10a.)

Amparo directo 1368/2013. Guillermo Ricardo Santiago García. 30 de enero de 2014. Unanimidad de votos en cuanto al sentido del fallo; mayoría en cuanto a las consideraciones de la ejecutoria así como al tema y aprobación de esta tesis. Ponente: José Sánchez Moyaho. Secretaria: Cecilia Hidalgo Pichardo.

Nota: En sesión de seis de octubre de dos mil catorce, el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito resolvió, por unanimidad de votos, la contradicción de tesis 8/2014 sustentada entre el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Primer Circuito, en el sentido de declararla improcedente y determinar que la tesis I.7o.T.12 L (10a.) no es obligatoria, en virtud de que no se encuentra vinculada con la parte considerativa que rige la sentencia de amparo de la que derivó, por lo que dicha proposición sólo se trata de una simple opinión jurídica.

Por instrucciones del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito y del propio Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, la tesis publicada el viernes 21 de marzo de 2014 a las 11:03 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, así como en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 4, Tomo II, marzo de 2014, página 1801, se publica nuevamente con la nota que antecede.

La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 8/2014 citada, aparece publicada en la página 2078 de esta publicación.

Esta tesis se republicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS.

AMPARO DIRECTO 1646/2013. 22 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS; CON VOTO ACLARATORIO DE LA MAGISTRADA MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS, CON RELACIÓN AL TEMA DE LA TESIS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIO: EUDÓN ORTIZ BOLAÑOS.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—El análisis de los conceptos de violación propuestos permite definir lo siguiente:

Con apoyo en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se examinan, en conjunto, los motivos de disenso indicados como primero y segundo, en los que

el quejoso se duele de la ilegalidad del laudo, porque es incongruente, al no valorar debidamente las pruebas y constancias; que en el considerando III, la Junta determinó que las demandadas debían reinstalar y prorrogar la contratación del actor, pero que era procedente la excepción de "eximisión a la reinstalación", en virtud de que el actor desempeñaba sus labores como trabajador transitorio o eventual, siendo infundado tal argumento, porque omitió analizar la naturaleza de la contratación del actor, que era por tiempo determinado, especificando como motivo una "contratación especial transitorio" (que no encontraba fundamento en la Ley Federal del Trabajo), pero sin indicar las razones de delimitar su vigencia; pues conforme a los artículos 35, 36 y 37 de la invocada ley, se establecía que el contrato por tiempo indeterminado era la regla general, en tanto que los de tiempo u obra determinada, eran la excepción, correspondiendo al patrón justificarlo en caso de controversia pues, de lo contrario, debía considerársele por tiempo indefinido y, en la especie, la patronal no lo demostró.

Lo que así se plantea es infundado, en atención a las consideraciones que a continuación se exponen.

********** demandó de Petróleos Mexicanos y/o quien resultara responsable de la relación laboral, el cumplimiento de su contrato individual de trabajo y, como consecuencia, la reinstalación en el puesto de **********, nivel **********, en la gerencia de servicios de seguridad física, en las Oficinas Centrales de Petróleos Mexicanos en la Ciudad de México, en las mismas condiciones en que lo venía haciendo hasta antes del diecinueve de abril de dos mil diez (19 de abril de 2010), data en la que fue separado injustificadamente, no obstante de que su contratación no había llegado a su fin, pues tenía una vigencia del uno de enero al treinta de junio de dos mil diez (del 1 de enero al 30 de junio de 2010); asimismo, solicitó la prórroga por tiempo indefinido del contrato de trabajo, celebrado como "contratación especial transitorio" (la cual no existía en la Ley Federal del Trabajo), hasta que subsistiera la materia de trabajo; y el pago de otras prestaciones.

En la narrativa de los hechos, adujo que ingresó a laborar el dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y siete (16 de septiembre de 1977), teniendo a la fecha del despido, ********** (**********) años de servicios, con un salario diario de $********** (********** M.N.); que fue trabajador de turno, entre otras cosas.

Al contestar el reclamo, Petróleos Mexicanos negó acción y derecho, ya que no lo despidió. Que ingresó a trabajar en forma transitoria el dieciséis de septiembre de mil novecientos setenta y siete (16 de septiembre de 1977), como trabajador transitorio de confianza por tiempo determinado, registrando una antigüedad de ********** (**********) años con ********** (**********)

días, hasta el seis de diciembre de mil novecientos noventa y tres (6 de diciembre de 1993), en que firmó su finiquito y se le liquidó.

Que el diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho (10 de agosto de 1998) reingresó a laborar con motivo del convenio de colaboración con Pemex Refinación, quedando adscrito al departamento de seguridad física de **********, **********, y que así sucesivamente le fueron renovando los contratos cada seis meses; que tuvo otro que fue con motivo del Convenio de Colaboración celebrado entre Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción, de veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), el cual finalizó su vigencia el treinta y uno (31) de diciembre de ese año; que el último (sic) fue del uno (01) de enero al treinta (30) de junio de dos mil diez (2010); que tenía antigüedad de ********** (**********) años con ********** (**********) días; que tenía la categoría de **********, nivel **********, jornada "**********", turno diurno, refutó el salario, y dijo que el correcto era el salario diario ordinario de $********** (********** M.N.).

Que, como dijo al contestar los hechos 5, 6, 7 y 8, la contratación del actor se dio por terminada el diecinueve de abril de dos mil diez (19 de abril de 2010), en términos de un Convenio de Colaboración celebrado por Petróleos Mexicanos y Pemex Exploración y Producción de veintisiete de agosto de dos mil nueve (27 de agosto de 2009).

En los hechos 5, 6, 7 y 8, dijeron que el último contrato concluyó el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil nueve (2009), que en términos de la cláusula décima siguió surtiendo efectos, con el objeto de participar en los operativos especiales de seguridad física, contratación especial como transitorio de confianza, sujeto a una vigencia determinada, en términos del artículo 37, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, habiendo llegado a su término.

Que en todo caso, sólo tenía derecho a demandar la prórroga, siempre y cuando subsistiera la materia de trabajo.

Opuso, entre otras, la siguiente excepción:

"X. Eximisión a la reinstalación. Excepción que opongo de manera cautelar para el supuesto y no consentido caso de que esa Junta determine condenar a mi representada a la reinstalación del actor en el puesto reclamado, y que hago valer en términos de lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracciones XXI y XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, fracción V, 50, fracciones II y III, 162, 485, 486 y 947 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que en el evento de llegar a ser procedente la acción intentada por el actor, Petróleos Mexicanos, en su carácter de demandado y patrón del actor ********** (sic), manifiesta, hace valer la presente

excepción para que se le exima de la posible reinstalación a que se le llegara a condenar.—Lo anterior, en virtud que de conformidad con el artículo 49, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, el patrón podrá ser eximido de la obligación de reinstalar al trabajador mediante el pago de las indemnizaciones a que se refiere el artículo 50 del mismo ordenamiento legal invocado, y dada la naturaleza de la acción que ejercita el actor que fue trabajador eventual, como se acreditará en su oportunidad, por lo que queda debidamente acreditada la aplicación del artículo 49, fracción V, de la ley de la materia, acogiéndose desde este momento a lo estipulado en el precepto legal invocado (artículo 49, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo) en relación al artículo 947 del propio ordenamiento legal citado.—En virtud de lo anterior y dado que el actor, **********, fue trabajador transitorio o eventual de Petróleos Mexicanos, como se acreditará oportunamente, por lo que en la especie se configura la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 49, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que resulta así procedente el rompimiento de la relación de trabajo, en términos de lo dispuesto por el artículo 947, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.—1. Respecto de la oportunidad de su planteamiento como excepción, así como la procedencia de la misma resulta aplicable lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis número 44/2001-SS, entre las sustentadas por el Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XV, enero de 2002, tesis 2a./J. 1/2002, página 71, que es del tenor literal siguiente: 'LAUDOS. LA NEGATIVA A ACATARLOS PUEDE PLANTEARSE AL CONTESTAR LA DEMANDA Y LA JUNTA DEBE PRONUNCIARSE AL RESPECTO, E INCLUSIVE FIJAR EL MONTO DE LAS PRESTACIONES SI SE TIENE LOS ELEMENTOS PARA ELLO.' (la transcribe).—**********, quien laboró por obra determinada en la categoría **********, con adscripción a la Gerencia de Servicios de Seguridad Física de **********, participaba en los Operativos Especiales de Seguridad Física, realizando las siguientes labores: 1. Vigilancia de los poliductos e instalaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.—2. Inspección del estado que guardan los poliductos que se asignen.—3. Entregar reporte del resultado de la inspección que realizó del poliducto asignado.—4. Protección física de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.—5. Protección y seguridad física de los bienes patrimoniales de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.—6. Protección y seguridad física de funcionarios a anivel (sic) directivo de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.—7. Investigaciones administrativas internas para esclarecer presuntos ilícitos cometidos en contra de los bienes patrimoniales de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.—8. Todas las funciones inherentes a la protección y seguridad física en instalaciones y bienes patrimoniales de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios, mismas que se realizan con armas de fuego bajo el amparo de la licencia colectiva respectiva.—Por lo anterior, resulta evidente que el actor se coloca en las hipótesis previstas por el artículo 9 en relación con el artículo 49, fracción V, ambos de la Ley

Federal del Trabajo; y por ello mis representadas hacen valer en el presente juicio, la facultad que les confiere el artículo 947 de la ley antes citada.—Con base en todo lo antes expuesto, en su oportunidad deberá declararse procedente la excepción de eximisión que hace valer Petróleos Mexicanos."

Al resolver, la autoridad de instancia determinó que procederían la reinstalación y la prórroga por haberse acreditado que subsistía la materia del trabajo, pero que atendiendo a la excepción de eximirlo de la reinstalación, en términos del artículo 49, fracción V, y 947 de la Ley Federal del Trabajo, considerando que era trabajador eventual, y dada la acción ejercitada, era procedente dar por terminada la relación de trabajo con el actor a partir de esa resolución, esto es, al dos de julio de dos mil trece, por lo que calculó las indemnizaciones.

La determinación adoptada por la responsable es correcta y debe prevalecer, en atención a lo siguiente.

Doctrinariamente, se puede clasificar a los trabajadores en dos grupos:

a) De planta o de base; y,

b) Transitorios.

En el presente asunto, se hará alusión a la segunda clasificación, esto es, a los transitorios.

La característica de este tipo de trabajadores, se ciñe en la temporalidad de las labores a desarrollar, que no forzosamente se encuentra vinculado a la actividad de la empresa. Esto es, constituye el género.

De esta clasificación se derivan las especies, como son los trabajadores eventuales, ocasionales o accidentales, intermitentes, sustitutos o interinos, dependiendo de las circunstancias de cada caso, pero refiriéndose siempre a la temporalidad de la contratación.

Así las cosas, en caso de trabajadores transitorios, con autonomía de la especie, las contrataciones se encuentran acotadas a un tiempo específico, independientemente de que subsista o no la materia de trabajo.

En el caso particular, se acreditó que el trabajador tuvo la calidad de eventual, con la documental que ofreció Petróleos Mexicanos en el punto IV, inciso c), de su ocurso respectivo, el cual tiene valor probatorio porque fue exhibida en original y fue objetada en términos generales en audiencia de trece de abril de dos mil once, cuyo contenido se transcribe:

"PETRÓLEOS MEXICANOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN.
GERENCIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD FÍSICA

PEMEX

CLASIFICACIÓN PARCIALMENTE

RESERVADA ____ Confidencial _X_
Páginas:
Fecha de clasificación: 16/12/09
Periodo de reserva: ********** Años
Unidad Administrativa: Gerencia de Servicios de Seguridad Física.

Fundamento legal: ART. 18, FRACC. II

Rúbrica del titular de la Unidad Administrativa: ___MEM___
Fecha de desclasificación: XXX
Rúbrica y cargo del servidor público quien desclasifica:
Partes o páginas clasificadas: Nombre, RFC, Nivel, Categoría.

No. **********
México, D.F., 16 de diciembre de 2009

C. ********** (**********)
A/C DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE **********.
PRESENTE.

En relación al Convenio de colaboración que suscribieron Petróleos Mexicanos y el Organismo Subsidiario PEMEX Exploración y Producción, la Gerencia de Servicios de Seguridad Física le notifica que ha sido contratado con cargo al presupuesto de 'PEP' , por un periodo determinado del 01 de enero al 30 de junio de 2010, con el objeto de participar en los operativos especiales de Seguridad Física que realizará esta Gerencia en las instalaciones de la referida Subsidiaria. Para efectos de control administrativo se le asigna el número (**********), su Registro Federal de Contribuyentes es **********; asimismo, ocupará la categoría de ********** y percibirá su salario correspondiente al Nivel ********** del tabulador de salarios y prestaciones vigente, con un horario de acuerdo a las necesidades laborales y propias de su adscripción conforme a la Ley Federal del Trabajo y Normas Institucionales. CONTRATACIÓN ESPECIAL TRANSITORIO CONFIANZA.

Atentamente.
Gral. de Bgda. D.E.M. Ret.

(FIRMADO)
****
Gerente de Servicios de Seguridad Física.

ACEPTO
(FIRMADO)
C. ********** (**********)

C.c.p. Gral. **********, Subgerente de Operaciones. (MEDIO ELECTRÓNICO)
C.c.p. C. **********, Jefe del Departamento de Seguridad Física de **********. (MEDIO ELECTRÓNICO)

1. Trabajador.
1. Expediente."

(foja noventa y nueve).

En efecto, con la probanza en comento, se colige que fue contratado de manera eventual o transitoria, dado que la intención fue la de contratar por un tiempo delimitado al actor.

Una vez establecido que el actor detentaba un contrato de tipo transitorio o temporal, enseguida se analiza la decisión de la Junta respecto a la procedencia de la excepción opuesta por Petróleos Mexicanos.

Así, como en el caso, cuando el patrón se excepciona de reinstalar al trabajador alegando que se sitúa en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, y se demuestra en el juicio laboral; la Junta debe condenar a la indemnización que contempla el artículo 947 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los diversos numerales 49 y 50 del mismo ordenamiento.

El contenido del dispositivo mencionado es de este tenor:

"Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de

Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales."

Esto es, son dos condiciones que deben actualizarse para la procedencia de la excepción de eximir de reinstalar al trabajador, a saber:

1. Que el trabajador esté en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 49, reclame la reinstalación; y,

2. Que el patrón demuestre que el trabajador tiene un puesto de los indicados en la norma.

Ahora, del contenido del citado artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el espíritu del legislador fue el de que en determinados casos pudiera oponerse a la reinstalación de un trabajador que tuviera características especiales y que por su cercanía o porque simplemente no fuera su deseo continuar con una relación en la que, de prolongarse, se llegaría al supuesto de forzarla aun cuando el patrón no esté agusto con el trabajador, como sucede con los empleados domésticos; los que no alcanzaran un año de labor; los de confianza o los eventuales.

Por tanto, si en el presente asunto se demostró que el actor prestó sus servicios mediante una contratación temporal, transitoria o eventual y reclamó la reinstalación, como se vio en párrafos precedentes, es inconcuso que se colman las dos exigencias indicadas por la norma, por lo que, con independencia de que la materia del trabajo subsistiera, la acción resulta improcedente.

En mérito de lo expuesto, no resultan aplicables las tesis que invocó en su libelo de amparo.

En otro contexto, en el tercer concepto de violación, alega el amparista que en el considerando III, al condenar, se apoyó en el recibo que obra a folio cuarenta y siete (47) del sumario laboral, por un monto catorcenal de $********** (********** M.N.), pero sin especificar cómo debía quedar el salario integrado que percibía, ya que únicamente tomó en cuenta el citado recibo, sin señalar qué prestaciones formaban parte del estipendio; aunado a

que la responsable no se pronunció respecto a los incrementos que se generaron durante el tiempo que transcurrió el juicio laboral.

Lo que así se arguye es infundado por un lado y fundado por otro, suplido en parte, con apoyo en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo siguiente.

Al laudar, la autoridad de instancia determinó declarar procedente la excepción opuesta por la demandada en cuanto a eximirlo de reinstalar al actor por la calidad de eventual que ostentó, por lo que decretó la terminación del vínculo de trabajo al dos de julio de dos mil trece, y cuantificó las indemnizaciones, la prima de antigüedad, la prima vacacional y el aguinaldo, en los siguientes términos:

"… de conformidad con los artículos 49, 50 y 947 de la ley laboral, que se le condene a pagar al actor el importe de tres meses de salario por concepto de indemnización, 20 días por cada año de servicios, el pago de salarios vencidos generados del 20 de abril de 2010 hasta que se le pague la indemnización así como el pago de prima de antigüedad, tomando en cuenta para ello el recibo de pago que obra a foja 47 de autos por un monto catorcenal de $********** que dividida entre 14 días resulta un salario diario de $********** y para tal efecto se cuantifica de la siguiente forma: 1. Por concepto de indemnización constitucional a razón de tres meses que equivale a 90 días se obtienen $********** (al multiplicar $********** por 90 días).—2. Por concepto de salarios vencidos generados del 19 de abril de 2010 a la fecha de la presente resolución (2 de julio de 2013) han transcurrido 1,170 días que multiplicados a su vez por la cantidad de $********** resultan $**********, sin perjuicio de lo que se siga generando a su favor hasta dar cumplimiento a esta resolución.—3. Por concepto de 20 días de servicio tomando en cuenta que computó ********** años y ********** días de servicio (del 10 de agosto de 1998 al 19 de abril de 2010 fecha del despido), por lo que por los ********** años le corresponde el pago de 220 días y por los 253 días le corresponde el pago de 13.8 días, por lo anterior los días que le corresponden son 233.8, los cuales a su vez multiplicados por el salario de $********** resultan $********** salvo error u omisión de carácter aritmético.—4. Por concepto de prima de antigüedad a razón de 12 días por año que establece el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo y tomando en cuenta que se le contrató (en forma transitoria como lo manifestó y acreditó la empresa con la prueba de inspección referida del 10 de agosto de 1998 al 19 de abril de 2010) se computan ********** años y ********** días por lo que por los ********** años le corresponde el pago de 132 días, y por los ********** días le corresponde el pago de 8.3 días, por lo anterior los días que le corresponde son

140.3 días multiplicados por 140.3 resultan $**********.—Por lo que respecta a lo reclamado por concepto de vacaciones resulta improcedente ya que al serle cubiertos los salarios caídos se estaría en presencia de un doble pago, por lo tanto se absuelve a la demandada de ello.—Por lo que respecta a los conceptos de prima vacacional y aguinaldo por el tiempo de tramitación del juicio son procedentes por ser accesorias a la principal por lo que deberán cubrirse al actor en los términos de los artículos 40 y 48 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, desde la fecha del despido y hasta que se dio por terminada la relación de trabajo, es decir, el 2 de julio de 2013, y de conformidad con el artículo 48 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por concepto de aguinaldo le corresponde el pago anual de 55 días de salario ordinario diario, así tenemos que del 19 de abril de 2010 al 2 de julio de 2013, transcurrieron ********** años y ********** días, por lo tanto, por los ********** años le corresponde el pago de ********** días, y por los ********** días le corresponde el pago de 11.3 días, por lo anterior, los días que le corresponden, por concepto de aguinaldo por el periodo del 19 de abril de 2010 al 2 de julio de 2013, son ********** los cuales multiplicados por el salario ordinario diario de $********** que se establece en el recibo de pago que obra a foja 47 de autos, resulta la cantidad de $**********; por concepto de prima vacacional de conformidad con los artículos 35 y 39 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el actor tiene derecho a recibir una prima vacacional del 150% del promedio del salario tabulado, más el fondo de ahorro y ayuda de despensa, y de esa cantidad se le otorgan 30 días, así tenemos que de conformidad con el recibo de pago que obra a foja 47 de autos se acredita que el salario tabulado del actor es de $**********, y la cantidad de $********** por concepto de fondo de ahorro sin que se aprecie que recibía el concepto de despensa, por lo tanto, la cantidad que resulta de la suma del salario tabulado y fondo de ahorro es de $********** por lo que el 150% de esa cantidad es $**********; ahora bien, por los ********** años le corresponde el pago de ********** días, y por los ********** días, le corresponde el pago de 6.1 días, por lo anterior, los días que le corresponden al actor por concepto de prima vacacional por el lapso del 19 de abril de 2010 al 2 de julio de 2013, resultan 96.1 días, los cuales multiplicados por la cantidad de $********** resulta la cantidad de $**********.—Por lo que respecta a la reclamación que hace el actor para que se le cubran durante el tiempo que dure la tramitación del presente juicio, los conceptos de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, canasta básica, gas doméstico, gasolina, rendimientos, productividad, tiempo extra ocasional, tiempo extra adicional, viáticos de transporte, compensación por comidas, lavado de ropa y reparto de utilidades, sobre el particular debe decirse

que por lo que respecta a las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo ya se resolvieron anteriormente, por lo que respecta a la canasta básica, gas doméstico, gasolina, productividad, tiempo extra adicional y tiempo extra ocasional, compensación por comidas ya fueron tomadas en cuenta con el recibo de pago que obra a foja 47 de los autos, con el que se cuantificó los salarios vencidos; por lo que respecta a los conceptos de rendimientos, viáticos de transporte y lavado de ropa, el actor no acredita que los estuviera percibiendo, por lo tanto, se debe de absolver a la demandada del pago de los conceptos de rendimientos, viáticos de transporte y lavado de ropa …"

Establecido lo anterior se analizará, en primer término, la integración salarial para el pago de las indemnizaciones, misma que derivó del recibo de pago que obraba a folio cuarenta y siete (47), a razón de $********** (********** M.N.), que dividida entre 14 días resultaba un estipendio diario de $********** (********** M.N.).

En este rubro se estima que su decisión es correcta, pues si bien es verdad que tratándose de conceptos indemnizatorios, el salario que debe utilizarse es el integrado conforme al artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo; no menos lo es que en el caso concreto, el estipendio ordinario que utilizó la responsable para cuantificar la condena de pago de las indemnizaciones y salarios vencidos, y que denominó "integrado" no puede ser adicionado por otros conceptos, pues como se advierte del laudo impugnado, condenó por separado al pago de prima vacacional y aguinaldo, y el hecho de incluirlos implicaría un doble pago, como se expone a continuación.

Sobre el tema, la Ley Federal del Trabajo dispone:

"Artículo 84. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo."

"Artículo 89. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84.

"..."

Como se desprende de los anteriores preceptos, el salario que debe servir de base para el pago de las indemnizaciones contenidas en el artículo

50 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se declara procedente la excepción de eximir al patrón de reinstalar al trabajador por demostrarse que se actualiza uno de los supuestos previstos en el numeral 49 de la citada ley, es el correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84, esto es, con el integrado.

En este contexto, procede incluirle los conceptos de prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al operario por su trabajo.

Sin embargo, en el supuesto de que la autoridad laboral condene al pago de la prima vacacional y del aguinaldo por separado y como prestaciones independientes desde la ruptura de la relación laboral hasta la declaratoria de su terminación por parte de la autoridad de trabajo, inclusive hasta el cumplimiento del laudo, no procede integrarlas al salario para la cuantificación de las indemnizaciones contenidas en el artículo 50 de la ley laboral, por el mismo periodo, porque ello implicaría un doble pago, ya que, por una parte, se cubrirían los mencionados conceptos como autónomos y, por otra, se estarían incluyendo en el estipendio para pagar aspectos indemnizatorios.

Por otra parte, debe decirse que cuando en un juicio se declara procedente la excepción de eximir al patrón de reinstalar al trabajador por demostrarse que se actualiza uno de los supuestos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, el estipendio que debe servir para calcular los salarios caídos, es el integrado, conforme a lo dispuesto por los preceptos 84 y 89 del mismo cuerpo legal, por lo que procede incluirle los conceptos de prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al operario por su trabajo.

Sin embargo, en el supuesto de que la Junta condene al pago de la prima vacacional y aguinaldo por separado, como prestaciones independientes, desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo, no procede integrarlas al estipendio, porque ello implicaría un doble pago, pues por una parte se cubrirían los mencionados conceptos de manera autónoma y, por otra, se estarían incluyendo en el monto que serviría de base para pagar los salarios vencidos.

Aunado a lo señalado, del recibo de pago en que se apoyó la Junta, no se desprenden otros conceptos, aparte de los considerados por la autoridad laboral, que pudieran integrarse al estipendio.

Lo anterior es así, porque de la documental en comento se advierte que se tomaron en consideración los siguientes conceptos:

Salario = $********** (********** M.N.), que está conformado por: Salario tabulado ($**********) + Fondo de ahorro ($**********) + Renta de casa ($**********) = $**********.

Esta cantidad multiplicada por los catorce (14) días que era la forma en que se le cubría el salario al trabajador, da como resultado $********** (********** M.N.), que es la cantidad indicada en el recibo de pago.

También se desprenden las siguientes cantidades:

Productividad	$********** (********** M.N.)
Tiempo Extra Adicional	$********** (********** M.N.)
Tiempo Extra Ordinario	$********** (********** M.N.)
Ajuste Regulariz I.S.P.T.	$********** (********** M.N.)
Compensación comidas	$********** (********** M.N.)
Gas	$********** (********** M.N.)
Canasta básica	$********** (********** M.N.)
Gasolina	$********** (********** M.N.)

Sumadas todas estas cantidades dan la cantidad que expuso la responsable, como se aprecia de la siguiente operación aritmética:

$**********
$**********
$**********
$**********
+ $**********
$**********
$**********
$**********
$**********
$**********

Por tanto, aun cuando el salario que debe utilizarse es el integrado, se itera, en el caso particular no hay otros elementos, a parte de los considerados por la responsable, que puedan adicionarse; de ahí lo infundado.

No obstante lo anterior, con la suplencia anunciada, se advierte que el laudo es violatorio de los derechos fundamentales de legalidad y seguridad

jurídica, en razón de que determinó acotar la condena de pago de veinte días por año y prima de antigüedad, al diecinueve de abril de dos mil diez (19 de abril de 2010), fecha en que se dijo despedido, cuando debió ser hasta la declaratoria de terminación de la relación laboral, esto es, hasta el dos de julio de dos mil trece, como lo estableció en este punto la autoridad de instancia.

Orienta esta determinación, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 147/2010, derivada de la contradicción de tesis 278/2010, sustentada en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 827 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXXIII, enero de 2011, cuyos rubro y contenido son:

"INSUMISIÓN AL ARBITRAJE EN MATERIA LABORAL. LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO SE DA AL RESOLVER PROCEDENTE EL INCIDENTE RESPECTIVO.—La insumisión al arbitraje procede excepcionalmente tratándose de conflictos laborales en los que el trabajador demanda del patrón la reinstalación por despido injustificado, pues fue concebida constitucionalmente como una excepción a la estabilidad en el empleo en los supuestos que la Ley Federal del Trabajo fija en su artículo 49, y su procedencia trae como consecuencia que se declare la terminación del contrato de trabajo mediante el pago de las indemnizaciones y responsabilidades que resulten al patrón, previstas en los artículos 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo. En ese sentido, para que la autoridad cuente con elementos suficientes que le permitan tener certeza acerca de si el trabajador se encuentra en alguna de las causas previstas en el indicado artículo 49, que autoricen al patrón quedar eximido de la obligación de reinstalarlo, debe tramitarse el incidente correspondiente en el que las partes podrán ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, y de resultar procedente, en términos del artículo 947 de la ley citada, aquélla dará por terminada la relación de trabajo y condenará al patrón al pago de las respectivas indemnizaciones y responsabilidades, además del pago de los salarios caídos y de la prima de antigüedad; por tanto, no basta que el patrón solicite la insumisión al arbitraje para dar por terminada la relación de trabajo desde ese momento, sino que es necesario que la Junta del conocimiento haga el pronunciamiento en el que así lo determine al resolver el incidente relativo."

Por otro lado, en lo tocante a la conformación salarial para el pago de la prima vacacional, es infundado en un aspecto y fundado en otro, suplido en parte, como se verá a continuación.

Entre otras cosas, en el inciso f) de su ocurso inicial, el actor demandó el pago de la prima vacacional y aguinaldo que se generaran durante la tramitación del juicio, pero sin indicar el fundamento, esto es, si era legal o contractual su reclamo.

Sin embargo, al laudar, la Junta del conocimiento condenó al pago de la prima vacacional generada a partir del despido, diecinueve de abril de dos mil diez (19 de abril de 2010), a la fecha de la resolución, dos de julio de dos mil trece (2 de julio de 2013), calculando que eran ********** (**********) años con ********** (**********) días.

Para cuantificar la condena, se basó en los artículos 35 y 39 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (que ofreció el actor), lo cual no fue impugnado; estableciendo que el pago de la prima vacacional debía ser al 150% (ciento cincuenta por ciento) del salario tabulado, más el fondo de ahorro, y sin considerar la despensa, dado que no se demostró su percepción; que de ello le correspondían treinta (30) días por año, por lo que le correspondían ********** (**********) días por los ********** (**********) años, y en cuanto a la parte proporcional de los ********** (**********) días, le tocaban 6.1 (seis punto un días), resultando 96.1 (noventa y seis punto un días), que multiplicados por el salario tabulado más el fondo de ahorro ($********** + $********** = $**********) daban $********** (********** M.N.).

Conforme a lo relatado, la conclusión a la que arribó la responsable, no obstante que resolvió la prestación en cuestión como si se hubiera reclamado de manera extralegal, debe seguir rigiendo, porque por una parte no se impugnó y, por otra, le es más benéfico que se resolviera conforme a la Ley Federal del Trabajo, ya que aumentaba considerablemente el porcentaje, pues se hizo en un 150% (ciento cincuenta por ciento) del salario establecido en la norma extralegal.

Por otra parte, en torno al salario que utilizó la Junta para cuantificar el aguinaldo, se estima lo siguiente:

Lo tomó del que denominó como "ordinario" a razón de $********** (********** M.N.), establecido en el recibo de pago que obra a foja cuarenta y siete (47), el cual está compuesto por los conceptos de salario tabulado ($**********), más el fondo de ahorro ($**********) más renta de casa ($**********), como se advierte de la siguiente operación matemática:

$**********
+ $**********
$**********
$**********

Al igual que el concepto de prima vacacional, el actor no dijo con base en qué normatividad reclamaba el aguinaldo, si con fundamento en una norma contractual o legal.

No obstante, la responsable resolvió la procedencia de este reclamo con apoyo en el artículo 48 del Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, estableciendo que le correspondía el pago anual de cincuenta y cinco (55) días de salario ordinario.

Que del diecinueve de abril de dos mil diez (19 de abril de 2010) al dos de julio de dos mil trece (2 de julio de 2013) transcurrieron ********** (**********) años con ********** (**********) días; por lo que, respecto a los ********** (**********) años, le correspondían ciento sesenta y cinco (165) días, y por los ********** (**********) días restantes, 11.3 (once punto tres días), totalizando 176.3 (ciento setenta y seis punto tres días).

Multiplicó los días con el salario ordinario que estableció, resultando: ********** x ********** = $********** (********** M.N.), que fue a lo que condenó.

La decisión de la Junta no irroga perjuicio al impetrante de amparo, pues si bien es verdad que resolvió la prestación conforme a un ordenamiento extralegal, también lo es que esa circunstancia no se encuentra refutada, además de que le es más benéfica, por lo siguiente.

El contenido del artículo reglamentario en que se apoyó la Junta, el cual fue ofrecido por el actor y que por ello obra en su contra, establece:

"Artículo 48. El patrón pagará al personal de confianza por concepto de aguinaldo, el importe de 55 –cincuenta y cinco días– del promedio de los salarios ordinarios percibidos en el año correspondiente, con valores actualizados al 30 de noviembre; en la inteligencia de que tratándose de personal de planta dicho promedio nunca será menor a lo que le corresponda del salario ordinario que percibe en su puesto de planta.—El pago por este concepto se hará entre el 1o. y 15 de diciembre de cada año; los ejercicios anuales para esta prestación se computarán del 1o. de diciembre de un año al 30 de no-

viembre del año siguiente. Al personal de confianza de planta y transitorio que no hubiese laborado todo el año, el aguinaldo se le otorgará en proporción a los días en que hubiere percibido salarios."

Por otra parte, del recibo que obra a foja cuarenta y siete (47), se desprende el "salario ordinario puesto base" que percibía el accionante catorcenalmente, y que era de $********** (********** M.N.), esto es, diario de $********** ($********** ÷ 14 = $**********), que es el que tomó en cuenta la resolutora, lo cual es correcto porque es el que establece el aludido artículo 48 reglamentario.

Ahora bien, en cuanto a los días que le corresponde para el pago del aguinaldo, la norma extralegal establece que es de cincuenta y cinco (55) días por año.

Por tanto, en cuanto al monto salarial para el cálculo de los conceptos referidos, la determinación se estima acertada y debe prevalecer.

En cambio, supliendo la queja deficiente, se considera que la autoridad de instancia incorrectamente delimitó el pago de la prima vacacional y del aguinaldo hasta el dictado del laudo, lo que ocurrió el dos de julio de dos mil trece (2 de julio de 2013).

Lo anterior, porque siguen la misma suerte de los salarios caídos, porque en el caso particular no integraron el salario para calcular éstos, debido a que se condenó en forma autónoma, siendo que son prestaciones a las que tiene derecho el trabajador por la prestación de sus servicios, la cual se vio interrumpida por la procedencia de la excepción de la patronal.

Finalmente, con la suplencia anunciada se advierte que la Junta no se pronunció respecto a los incrementos que demandó el actor relacionados con los salarios vencidos, en el inciso e), de su escrito inicial.

En este tenor, el laudo impugnado resulta incongruente con lo solicitado, pues no se pronunció en su totalidad respecto de lo solicitado, trastocando en perjuicio del amparista el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Apoya esta determinación, la jurisprudencia 316, emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917–2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, cuyos rubro y contenido son de este tenor:

"LAUDO INCONGRUENTE.—Si una Junta, al pronunciar el laudo respectivo, omite resolver sobre todos los puntos de la controversia, con ello falta al principio de congruencia que exige el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, lo que se traduce en violación de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales."

En la publicación respectiva, se hace la aclaración que el artículo 776 citado, corresponde al 842 de la Ley Federal del Trabajo en vigor.

Así las cosas, ante lo ilegal del laudo reclamado, en el aspecto censurado, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta:

1. Deje insubsistente el laudo reclamado.

2. Determine que los pagos de veinte días por años de servicio y de la prima de antigüedad, deben calcularse hasta el dos de julio de dos mil trece (2 de julio de 2013), data en que hizo la declaratoria de la terminación de trabajo.

3. Determine que procede el pago de la prima vacacional y del aguinaldo hasta que se cubran las indemnizaciones a las que se condenó.

4. Se pronuncie como corresponda respecto a los incrementos para el pago de salarios caídos; y,

5. Reitere los aspectos ajenos a esta concesión.

Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del tres siguiente, requiérase al presidente de la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que en el término de tres días posteriores a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de $********** (********** M.N.), que es el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que a la fecha es de $********** (********** M.N.) diarios y se multiplica por cien, multa mínima que se considera procede, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley invocada.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 77, 170, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto de la Junta Especial Número Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo pronunciado el dos de julio de dos mil trece, en el juicio laboral **********, seguido por el quejoso contra Petróleos Mexicanos. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, en sesión pública, por unanimidad de votos lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue relator el Magistrado Héctor Landa Razo. La Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos emite voto aclaratorio en cuanto al tema de integración salarial para el pago de las indemnizaciones y salarios caídos, mismo que al final se transcribe.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto aclaratorio de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos: Respetuosa del criterio de la mayoría, estimo que el monto con el que se debe cuantificar la condena al pago de indemnización y salarios caídos, derivadas de la eximisión de reinstalar al actor, también debe ser integrado por los conceptos de aguinaldo y prima vacacional, que no tomó en consideración la responsable para su cuantificación.—Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es parte integrante del salario el aguinaldo, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se adicione a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la costumbre.—Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 33/2002, emitida en la Novena Época por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 269 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XV, mayo de 2002, que dice: "SALARIO. EL AGUINALDO. ES PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.—De lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria,

gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo de manera ordinaria y permanente, es decir, todo aquello que habitualmente se sume a la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado, ya sea que derive del contrato individual de trabajo, del contrato colectivo o de cualquier otra convención e, incluso, de la costumbre. Ahora bien, si se toma en consideración que, por un lado, ante la necesidad de los trabajadores de hacer frente a los gastos de fin de año, en el artículo 87 de la ley citada se consagró el derecho de los trabajadores a percibir el aguinaldo anual o su parte proporcional, y se fijaron las condiciones mínimas para su otorgamiento, esto es, que se pague antes del veinte de diciembre de cada año una cantidad equivalente cuando menos a quince días de salario, la cual puede ser mayor si así lo acuerdan las partes y, por otro, que al ser una prestación creada por la ley y susceptible de ser aumentada en los contratos, su pago es un derecho de los trabajadores que, como tal, es irrenunciable, en términos de los artículos 123, apartado A, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción XIII, de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el pago de esta percepción forma parte de las gratificaciones a que se refiere el artículo primeramente invocado y, por tanto, es computable para la integración del salario para efectos indemnizatorios provenientes de un reajuste de personal cuando existe convenio entre las partes. En consecuencia, las cláusulas de los convenios individuales o colectivos de trabajo que no respeten este derecho o cualquier otro beneficio que como mínimo establezca la Ley Federal del Trabajo en favor de los trabajadores, se entenderán sustituidas por lo previsto en este ordenamiento legal, por así disponerlo el primer párrafo de su artículo tercero transitorio, y sólo quedarán vigentes las cláusulas que superen esos mínimos, en términos del segundo párrafo de ese numeral.".—En esa medida, es incorrecta la determinación de la responsable, al establecer que el aguinaldo no es parte integrante del salario para el pago de la indemnización establecida en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo y de los salarios caídos, ya que se trata de un concepto que se cubre al trabajador por la prestación de sus servicios de manera ordinaria y permanente, por lo que viene a adicionar la cuota diaria estipulada como consecuencia inmediata del servicio prestado.—De acuerdo con lo expuesto, para establecer el salario integrado para el pago de prestaciones indemnizatorias y los salarios caídos a que condenó, la autoridad responsable debe tomar en cuenta que el aguinaldo forma parte integrante del salario, partiendo de ello, cuantificar las condenas de referencia.—Por lo que hace a la prima vacacional, también de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, forma parte del salario y se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue a la quejosa por su trabajo de manera ordinaria y permanente; en ese sentido, la prima vacacional forma parte integrante del salario para el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos a que condenó la Junta, por lo que, al no haberlo estimado así, con ello violó los derechos de la impetrante, ya que se trata de un concepto que se entrega a la trabajadora con motivo de la prestación del servicio y, en esa medida, es un concepto integrante del salario para el pago de las indemnizaciones.—De ahí, que para establecer el salario integrado para el pago de la indemnización constitucional y los salarios caídos a que condenó, la autoridad responsable debe tomar en cuenta que la prima vacacional forma parte integrante

del salario.—Lo anterior tiene apoyo en lo que informa, en la jurisprudencia 4a./J. 14/93, derivada de la contradicción de tesis 7/92, sustentada en la Octava Época por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Número 64, abril de 1993, cuyos rubro y contenido son: "SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCIÓN QUE SE EJERCITÓ FUE LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL.—Esta Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, publicada en la página 2773 del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional, los salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisión, porque la ruptura de la relación laboral operó desde aquella época. Esto se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, de forma que los salarios vencidos solicitados ya no tienen el mismo concepto de los que se generaron con motivo de la relación de trabajo que continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral, encontrando al respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización."

Este voto se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS. Cuando en un juicio se declara procedente la excepción de eximir al patrón de reinstalar al trabajador por demostrarse que se actualiza uno de los supuestos previstos en el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, y procedan las indemnizaciones correspondientes en términos del artículo 50, el estipendio que debe servir de base para calcular los salarios caídos es el integrado, conforme a los artículos 84 y 89 de la citada ley, por lo que procede incluirle los conceptos de prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al operario por su trabajo. Sin embargo, si la Junta condena al pago de la prima vacacional y aguinaldo por separado, como prestaciones independientes, desde la fecha del despido hasta el cumplimiento del laudo, es improcedente

integrarlas al estipendio, porque ello implicaría un doble pago, pues, por una parte, se cubrirían los conceptos mencionados de manera autónoma, y, por la otra, se estarían incluyendo en el monto que serviría de base para pagar los salarios caídos.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.101 L (10a.)

Amparo directo 1646/2013. 22 de mayo de 2014. Unanimidad de votos, con voto aclaratorio de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos, con relación al tema de la tesis. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

J

JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES. De la interpretación armónica de los artículos 1390 Bis 2, 1390 Bis 22, 1390 Bis 31 y 1075 del Código de Comercio, que rigen la tramitación de los juicios orales mercantiles a que se refiere el título especial con esa denominación, se concluye que las notificaciones de las resoluciones adoptadas en audiencia se realizan a las partes que a ella asisten, en ese mismo momento sin necesidad de formalidad alguna, por lo que para determinar si la presentación de la demanda de amparo directo es oportuna, el cómputo del término inicia a partir del día siguiente de finalizada la misma, siempre y cuando exista constancia fehaciente en autos de que en la diligencia quedaron a disposición del quejoso los registros correspondientes, como lo es la copia de la resolución pronunciada, de no ser así, debe atenderse a las reglas genéricas que establece el artículo 1068 de la propia legislación comercial para las notificaciones realizadas fuera de la audiencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.16 C (10a.)

Amparo directo 326/2014. Julio César Sánchez Rosas. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Secretario: Juan José Hernández Leyva.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO

QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 145/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, diciembre de dos mil, página dieciséis, de rubro: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.", determinó que la jurisprudencia es la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito hacen de la ley y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a ésta por lo que, al aplicarse, no se viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en su artículo 217, último párrafo, refiere lo siguiente: "... La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Este texto es claramente enunciativo o declarativo y no contiene ningún verbo que autorice a establecer que del mismo derive una prohibición de aplicar la jurisprudencia en asuntos pendientes de resolución al momento de su publicación. Es así, por la naturaleza de la jurisprudencia apuntada. Además, doctrinarios e, incluso, quienes formaron parte de la Comisión de Análisis de Propuestas para la Elaboración de un Anteproyecto de la Nueva Ley de Amparo señalaron que se conformaría en un alto porcentaje por la jurisprudencia emitida por nuestro Máximo Tribunal al señalar que la experiencia jurisprudencial con sentido garantista reunido especialmente en los años de la Novena Época y lo que va del inicio de la Décima, formó una base importante para el ejercicio del juicio de amparo en el futuro. Así, la forma en que debe interpretarse el último párrafo del mencionado artículo 217, no es como una prohibición, sino como una declaración en el sentido de que la jurisprudencia sólo interpreta la ley y los aspectos que el legislador no precisó, esto es, integra o complementa a la norma en relación con los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin que dicha conformación constituya una norma jurídica de carácter general, sino la determinación del verdadero sentido obligatorio de la ley, que no se modifica por el hecho de desentrañar su contenido con precisión y certeza. Por tanto, debe aplicarse inmediatamente a los casos a que la misma jurisprudencia se refiera, que estén pendientes de resolución en cualquier sede, por constituir la debida interpretación de la norma y reflejar el verdadero sentir del legislador. Interpretar lo contrario, implicaría que ninguna jurisprudencia pudiera aplicarse a situaciones de hecho anteriores a su creación, lo que reñiría con su naturaleza que es el interpretar o suplir la laguna de la ley a partir del examen de constitucionalidad de un caso concreto pretérito y cuya finalidad es que se observe tanto para los supuestos de hecho surgidos antes

como después pues, con motivo de la creación de la jurisprudencia, los diversos casos que le dieron vigencia, dejan de ser individualizados y concretos, dado que pasan a ser parte de la norma, la que tiene la característica de ser general, obligatoria y abstracta, por lo que, al llevarse a cabo un análisis de lo que el legislador plasmó en la ley, su aplicación no puede considerarse violatoria del principio de irretroactividad en tanto que el hecho a regular o situación procesal a resolver sea posterior a la vigencia de la ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.54 K (10a.)

Amparo directo 356/2014. Sani Móvil, S.A. de C.V. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Amparo en revisión 209/2014. Francisco Enrique Jordán Moreno. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Laura Díaz Jiménez, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Carlos Ortiz Toro.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

L

LAUDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE VALIDEZ SI SON FIRMADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL NO TENER DICHO FUNCIONARIO FE PÚBLICA NI HABER SIDO DESIGNADO PARA SUPLIR LA AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DE LA SALA RESPECTIVA. El Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene por objeto normar su organización y funcionamiento; determinar las facultades y atribuciones de sus servidores públicos, así como la forma en que pueden ser suplidos en su ausencia. En este sentido, el artículo 24 del citado ordenamiento establece que las faltas temporales de los presidentes de las Salas serán cubiertas por el secretario general auxiliar y en su ausencia por el jefe de la Unidad Técnica, sin que prevea que este último también supla la ausencia del secretario, y que con su firma autoriza el laudo emitido por la Sala, en ejercicio de la fe pública de la que está investido, ya que esa facultad es conferida por la ley. Consecuentemente, el hecho de que el jefe de la Unidad Técnica firme el laudo, en ausencia del secretario, con fundamento en la citada norma reglamentaria, constituye una violación formal que produce su invalidez, porque este funcionario no fue designado para suplir la ausencia del secretario general auxiliar y tampoco está dotado de fe pública.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.109 L (10a.)

Amparo directo 627/2014. Georgina González Flores. 7 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Ahideé Violeta Serrano Santillán.

Amparo directo 712/2014. Jorge Aguilar Maturano y otro. 7 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretaria: Ahideé Violeta Serrano Santillán.

Amparo directo 498/2014. Ana Guadalupe Hernández Vega. 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Margarita Jiménez Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

LITIS ABIERTA. ESTE PRINCIPIO PERMITE AL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL FORMULAR CONCEPTOS DE NULIDAD SOBRE ASPECTOS QUE NO HIZO VALER EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA E, INCLUSO, PARA EVIDENCIAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN SU PERJUICIO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ÉSTE, LOS CUALES DEBEN ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA. El principio de litis abierta previsto en el artículo 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no contiene limitante ni condición alguna para el actor en el juicio contencioso administrativo federal, razón por la cual, éste, al impugnar una resolución, está facultado para formular conceptos de nulidad sobre aspectos que no hizo valer en el procedimiento del que aquélla derivó e, incluso, externar argumentos para evidenciar las violaciones cometidas en su perjuicio durante la tramitación de éste, pues el principio mencionado permite al gobernado una defensa extendida, por lo cual, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiar dichos planteamientos.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.A.83 A (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 275/2014. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 12 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Jeny Jahaira Santana Albor.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 73/2013 (10a.), de rubro: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001 (*)].", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 917.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

N

NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. La sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en la que el Juez de Distrito resolvió negar el amparo solicitado, no afecta en su esfera jurídica a la parte tercera interesada; por lo tanto, si ésta interpone el recurso de revisión en contra de aquélla, debe desecharse por improcedente, toda vez que la resolución dictada por el a quo, no le irroga perjuicio alguno.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.T.119 L (10a.)

Amparo en revisión 85/2014. Rubén Cabrera Martínez y otro. 23 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Raúl Santiago Loyola Ordóñez.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA. El artículo 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece, entre otras cosas, que los actos y resoluciones emitidos por las autoridades administrativas gozan de la presunción de legalidad, a menos que el afectado por éstos niegue lisa y llanamente los hechos que los motivaron; de lo anterior se sigue que para estar en condiciones de averiguar si se actualiza la presunción legal referida, es necesario definir cuándo estamos en presencia de una negativa como la que se precisa en dicho numeral. Para ello, debe considerarse que una negativa lisa y llana –también conocida como simple, porque se trata de una mera negación de los hechos señalados por la autoridad– sí es

capaz de arrojar la carga de la prueba en perjuicio de la contraparte, pues de lo contrario obligaría a quien la formula a demostrar hechos negativos; en cambio, cuando incluye cortapisas, explicaciones o justificaciones, no puede calificarse así, sino como calificada, toda vez que encierra la afirmación implícita de otros hechos, lo cual acontece cuando en la demanda en el juicio contencioso administrativo federal se expresa una negativa simple de los hechos que motivaron el acto o resolución impugnada, que se contradice con los anexos de aquélla, por incluirse en ellos algunos argumentos tendentes a evidenciar la legalidad de la conducta reprochada, pues, en esas condiciones, la negación respectiva deberá considerarse como calificada. Es así, porque resulta de explorado derecho que la demanda y demás documentos que la acompañan, constituyen un todo que debe interpretarse integralmente, para desentrañar la verdadera intención del promovente; pensar lo contrario, implicaría desnaturalizar por completo la esencia del numeral 42 citado, en la medida en que, sin acreditarse la existencia de una auténtica negativa simple, podría arrojarse indebidamente la carga probatoria a la autoridad demandada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.
(III Región)4o.52 A (10a.)

Amparo directo 288/2014 (cuaderno auxiliar 696/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Felipe Larios Mercedes. 3 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Bolívar López Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE ENTIENDE CON UN TERCERO, EN EL CITATORIO PREVIO Y EN EL ACTA RELATIVA DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES QUE DEN PRECISIÓN Y CLARIDAD RESPECTO AL VÍNCULO QUE UNE A AQUÉL CON EL CONTRIBUYENTE Y ESPECIFICAR LAS RAZONES QUE ASEGUREN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO POR CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES, ASÍ COMO SUSTENTAR LA UBICACIÓN DE ÉSTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLEMENTE IDENTIFICABLES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, de rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTI-

FICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.", estableció, esencialmente, que si una diligencia de notificación personal practicada en términos del artículo 137 del Código Fiscal de la Federación se entiende con un tercero, debe levantarse razón circunstanciada que arroje plena convicción de su práctica en la realidad y con apego a las formalidades previstas por la norma. Por tanto, en el citatorio previo y en el acta de notificación, el funcionario debe asentar los pormenores que den precisión y claridad respecto al vínculo que une a la persona que atiende la diligencia con el contribuyente y especificar las razones que aseguren que no se encuentra en el domicilio por circunstancias accidentales, así como sustentar la ubicación de éste con elementos objetivos y razonablemente identificables, pues sólo así puede existir certeza de que se llevó a cabo en el sitio correcto. Consecuentemente, es insuficiente que en dichas actuaciones se asiente sólo que quien atendió al notificador manifestó, por ejemplo, tener una relación laboral con el interesado, sin cerciorarse de ello con elementos probatorios que lo acreditaran, o señalar que el lugar de la diligencia coincide con el que consta en los archivos o registros que la autoridad legalmente tiene a su cargo, porque este elemento no es óptimo para sustentar la validez de un dato descriptivo del sitio en que se verificó el acto.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.3o.A.1 A (10a.)

Amparo directo 722/2010. César Romero García. 6 de octubre de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Salvador González Baltierra. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Enrique Orozco Moles.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 132/2014, de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 85/2014 (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN PERSONAL EN MATERIA FISCAL. PARA CIRCUNSTANCIAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA ENTENDIDA CON UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EL NOTIFICADOR RECABE DOCUMENTOS O ELEMENTOS INDUBITABLES QUE DEMUESTREN EL NEXO QUE ADUCE TENER CON EL CONTRIBUYENTE.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 12 de septiembre de 2014 a las 10:15 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 746.

Por ejecutoria del 1 de julio de 2014, cuya parte conducente aparece en la página 1999 de esta publicación, el Pleno del Segundo Circuito declaró inexistente la contradicción de tesis 2/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Esta tesis publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VI, Tomo 2, marzo de 2012, página 1265, se cancela por instrucciones del propio

Tribunal Colegiado de Circuito, al contener un criterio distinto al sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 82/2009, difundida en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 404, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. DATOS QUE EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACIÓN PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACIÓN, CUANDO LA DILIGENCIA RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO."

Esta tesis se republicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO). El artículo 134, fracción III, del Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones de los actos administrativos se efectuarán por estrados, entre otros supuestos, cuando se ignore el domicilio de la persona a quien deba notificarse o de su representante, disposición que se aplica supletoriamente al procedimiento administrativo en materia aduanera. Ahora bien, la interpretación conforme de dicho precepto en el aludido proceso, esto es, favoreciendo a las personas en su protección más amplia como lo ordena el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva dotar de contenido jurídico a la palabra "ignorar", cuya esencia radica en no saber algo o carecer de noticia cierta de alguna circunstancia. En tales condiciones, la interpretación conforme y en sentido amplio de la citada porción normativa implica que, previo a que opere la notificación por estrados, la autoridad debe investigar el domicilio de la persona a quien se dirige, agotando todos los medios que tenga a su alcance y que resulten conducentes para lograr dicho fin, como sería solicitar informes a un número razonable de entidades públicas y privadas que cuenten con bases de datos nominales y domiciliarios. Se colige así, pues la sola afirmación de la autoridad en el sentido de que se ignora el domicilio del particular para ordenar la notificación por estrados, sin antes agotar los medios que tenga a su alcance para averiguarlo, sería contraria a los derechos fundamentales de audiencia y de debido proceso, por lo que la intelección de esa porción normativa, en tanto regula la forma en que deben practicarse las notificaciones, conduce a estimar imprescindible la investigación de su domicilio a fin de notificarle el acto administrativo y sólo agota-

da sin éxito se podrá ordenar la notificación por estrados al concluir que aquél se ignora.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.7 A (10a.)

Amparo directo 265/2014. Feliciano Laureano Magil. 31 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: José Francisco Aguilar Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el plazo genérico para la interposición del amparo es de quince días, y su cómputo iniciará desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Ahora bien, del análisis de los numerales 109 a 116 y 119 a 126 del capítulo V, denominado "Notificaciones" del título segundo, intitulado "Reglas generales" del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, se advierte que no hay una regla específica que determine el momento a partir del cual surten efectos las notificaciones. En ese sentido, para suplir la oscuridad o insuficiencia de esa disposición, debe acudirse al principio interpretativo *pro personae*, contenido en el párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente, preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos de la persona humana, y armonizarlo con el derecho humano de los particulares al acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, previsto en el artículo 17 de la propia Constitución; y establecer, que aun cuando el señalado código no prevea expresamente cuándo surten efectos las notificaciones, en atención al mayor beneficio para las partes, el juzgador deberá considerar, que será al día siguiente al en que se practiquen, pues sólo así el quejoso contará con uno más para acceder a la jurisdicción mediante la presentación de su demanda de amparo, lo que no sucedería en el caso de que surtieran efectos el mismo día.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO NOVENO CIRCUITO.
XXIX.2o.2 C (10a.)

Recurso de reclamación 15/2014. Guillermo Arellano Ruiz. 19 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Guadalupe Sánchez González. Secretaria: Irma Ramírez Rivera.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 39/2013 (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO PRO PERSONA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, página 367.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La sentencia dictada en el procedimiento de nulidad de laudo arbitral no constituye una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del amparo directo, ya que aun cuando el Código de Comercio vigente prevé que se tramita como un juicio especial denominado "transacciones comerciales y arbitraje", regulado en los artículos 1470 a 1477 y no en la vía incidental, lo relevante es que la impugnación de laudo surge únicamente por vicios formales y no por cuestiones de fondo, toda vez que así lo prevé el artículo 1457 del código invocado. En esas condiciones, la resolución dictada en el juicio de nulidad de laudo arbitral, no constituye materialmente una sentencia definitiva para efectos de la procedencia del juicio de amparo uniinstancial, porque el procedimiento arbitral seguido en forma de juicio concluyó con el dictado del laudo respectivo; por consiguiente, la resolución que recae a la acción de nulidad de laudo arbitral, debe considerarse como un acto ejecutado fuera de juicio y, por tanto, es procedente en su contra el amparo indirecto, de conformidad con el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.C.41 C (10a.)

Amparo directo 226/2014. Las Palmas Partners, L.L.C. 25 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Hernández Flores. Secretaria: Xóchitl Alicia Rosales Peraza.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NULIDAD DE NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE). El referido artículo dispone que la nulidad de las notificaciones debe promoverla el interesado en la siguiente actuación en que comparezca; sin embargo, no cualquier injerencia o promoción del interesado al procedimiento puede admitirse como actuación o intervención subsecuente para estimar consentida la notificación irregular, sino sólo aquella que evidencie que éste tuvo pleno conocimiento de la que tacha de nula, pues no puede convalidarse lo

que se desconoce. En ese tenor, el escrito o actuación siguiente que refiere el precepto en consulta, es el que revele que conocía la actuación judicial que impugna de nula, ya sea porque así lo exprese, o bien, que por el contenido de su escrito de manera razonada se pueda presumir.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.
III.1o.C.6 K (10a.)

Queja 118/2014. María Ricarda Barba Meza viuda de Nolasco, también conocida como Ricarda Barba Bricio. 29 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina Orozco Barajas.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

O

OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 48 HORAS. En la tesis aislada 2a. CXC/2001, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XIV, octubre de 2001, página 441, de rubro: "TRABAJO DE AUTOTRANSPORTES. EL ARTÍCULO 257 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO RESULTA VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIONES I Y XI, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las diferentes reglas relativas al salario, en el caso del trabajo de autotransportes, obedecen a su especial naturaleza, ya que no pueden precisarse con exactitud la jornada ordinaria ni el tiempo de cada viaje. Por tanto, se requiere que las partes acuerden previamente, a través del contrato individual de trabajo, las condiciones mínimas en que debe desarrollarse esa relación laboral, entre las que destaca la duración máxima de horas de trabajo por semana; esto es, no debe rebasar las previstas en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo, que fija un total de 48 horas para la jornada diurna semanal. Ello, porque en el caso de estos trabajadores, precisamente, por la naturaleza de la actividad que desempeñan, debe cuidarse que la jornada de trabajo no sea extenuante, ni implique un riesgo para los usuarios del servicio ni para las personas que transitan por la misma ruta del transporte. Por tanto, si en un juicio laboral, el patrón ofrece la reinstalación a un trabajador de autotransportes (choferes, conductores, operadores, cobradores y demás trabajadores que presten servicios a bordo de autotransportes de servicio público de pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, camionetas o automóviles), sin especificar que la jornada semanal de trabajo tendrá una duración máxima de 48 horas, el ofrecimiento debe considerarse de mala fe, pues no puede justificarse que el trabajador quede a disposición del patrón indefinidamente, al no contar con un límite, al menos semanal, de horas de servicio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.3 L (10a.)

Amparo directo 279/2014. Unión de Transportistas de Pasaje UTP, S.A. de C.V. 15 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretario: León Darío Morice López.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

P

PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). La pensión provisional, como medida cautelar, participa de los principios de sumariedad, inaudiencia de parte y mutabilidad. Así, en atención al primero, debe decretarse de plano, tomando como justificación la urgencia de la medida y la apariencia del buen derecho. Conforme al segundo, debe dictarse sin otorgar audiencia a la contraparte, sin que ello signifique la inobservancia a ese derecho, pues éste se otorga después de dictada la medida. Finalmente, en atención al tercero, puede modificarse durante su subsistencia, porque esta modificación no extingue la naturaleza de medida cautelar de dicha pensión. Ahora, si bien la legislación procesal de Veracruz no contempla un recurso en específico contra la modificación de la pensión alimenticia provisional, el juzgador deberá, sin dejar insubsistente la modificación decretada, instaurar un incidente donde respete el derecho de audiencia de ambas partes, con fundamento en los artículos 539, 540, 541 y 542 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.72 C (10a.)

Amparo en revisión 60/2014. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Lucio Huesca Ballesteros.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA EXCEPCIÓN OPUESTA POR EL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, FUNDADA EN LA FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL

TRABAJADOR, ES IMPROCEDENTE SI SE VINCULA A LA FECHA EN QUE SE REALIZA SU RECLAMO. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 52/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro IX, Tomo 1, junio de 2012, página 482, de rubro: "PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. PARA SU OTORGAMIENTO ES NECESARIO ACREDITAR QUE EL HECHO QUE LA ORIGINA ACAECIÓ DURANTE EL TIEMPO EN QUE EL TRABAJADOR ESTUVO SUJETO AL RÉGIMEN OBLIGATORIO O DENTRO DEL PERIODO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS.", la condición para el otorgamiento de la pensión por cesantía en edad avanzada radica en acreditar que el hecho que le dé origen haya acaecido durante el tiempo en que el trabajador estuvo sujeto al régimen obligatorio o dentro del periodo de conservación de los derechos respectivos, sin que su procedencia dependa del momento en que se reclamen, pues considerarlo así equivaldría a introducir un elemento ajeno a la norma aplicable. Lo anterior también tiene su apoyo, en razón de que conforme al artículo 280 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, el derecho al otorgamiento de una pensión es inextinguible, siempre y cuando el asegurado satisfaga todos los requisitos establecidos en la ley para gozar de las prestaciones correspondientes. De ahí que, si en un juicio laboral el Instituto Mexicano del Seguro Social opone como excepción la falta de conservación de derechos del asegurado que reclama el otorgamiento de una pensión por cesantía en edad avanzada, al señalar que presentó su demanda con posterioridad a que feneció el referido plazo de conservación, ésta es improcedente, porque introduce un elemento ajeno a la norma aplicable, ya que la única condición para el otorgamiento de dicha pensión es acreditar que los requerimientos que le dan origen –cumplir 60 años de edad, cotizar un mínimo de 500 semanas y quedar privado de un trabajo remunerado– hayan acaecido durante la preservación de los derechos respectivos, mas no que dentro de ese tiempo deba hacerse el reclamo de que se trata; por tanto, esa excepción debe declararse improcedente y resolverse la controversia en torno a la litis planteada.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.25 L (10a.)

Amparo directo 428/2014. Prisciliano López Valenzuela. 31 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel Arévalo Mascareño.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO SU MONTO SE INTEGRA CON LO COTIZADO EN DOS PLAZAS DISTINTAS, SU INCREMENTO DEBE

CALCULARSE CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA OBTENCIÓN DE LA RELATIVA A LA PLAZA MÁS ANTIGUA, SI ES LO QUE MÁS BENEFICIA AL TRABAJADOR O A SUS FAMILIARES (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA). Cuando una pensión por jubilación se integra cotizando en dos plazas distintas, su incremento debe calcularse conforme a las reglas del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, vigentes al momento de la obtención de la pensión relativa a la plaza más antigua, si es lo que más beneficia al trabajador o a sus familiares.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.A.60 A (10a.)

Amparo directo 1171/2013. Blanca Ortega Cabrera. 30 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Milton Montes Cárdenas.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN). Los citados artículos son precisos en señalar los documentos que deben acompañarse al escrito inicial de demanda; y puede advertirse que ninguno exige que la actora deba exhibir la documentación que acredite la personalidad o calidad de la parte demandada. Lo que implica que no tiene obligación de observar los lineamientos previstos en el artículo 303 del mismo ordenamiento, porque éste se refiere a los documentos fundatorios de la acción. Ahora bien, conforme al diverso numeral 343, la actora debe probar los hechos constitutivos de su acción, pero ello no incluye que al presentar la demanda acredite el carácter o calidad que atribuye al demandado, puesto que la representación o legitimación pasiva en el proceso, no es un hecho constitutivo de la acción. Así, la prohibición consignada en el artículo 305 del código adjetivo invocado, en el sentido de que, entablada la demanda, ya no se admitirán al actor otros documentos que los que fueren de fecha posterior, no opera, por ejemplo, respecto de los que guardan relación con el carácter de albacea provisional de la sucesión demandada de quien al comparecer negó tenerlo y opuso la excepción de falta de legitimación pasiva, porque este debate da

oportunidad al actor de exhibir la documentación que desvirtúe esa negativa, conforme al numeral 662 del propio código, como prueba de un hecho controvertido.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.
XI.1o.C.22 C (10a.)

Amparo directo 11/2013. BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Patricia Mújica López. Secretario: Antonio Rico Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

PETRÓLEOS MEXICANOS. LA CORRIDA ESCALAFONARIA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDADA PRUEBA QUE LEGALMENTE PACTÓ CON EL SINDICATO LA CANCELACIÓN DE LA PLAZA RECLAMADA. Si tanto los demandados como el sindicato pactaron la cancelación de diversas plazas y con ello la empresa demandada acreditó los extremos de su excepción, en el sentido de que había legalmente cancelado la plaza cuya preferencia de derechos se reclamaba, evidentemente la acción correlativa quedó destruida, pues legalmente no es posible llevar a cabo la corrida escalafonaria y, en consecuencia, resulta innecesario solicitar ser propuesto para ocupar una plaza inexistente.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.T.114 L (10a.)

Amparo directo 663/2014. Rosalío Hugo Martínez Lozano y otro. 18 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Raúl Santiago Loyola Ordóñez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Si el quejoso promueve el juicio de amparo indi-

recto contra el desahogo de la audiencia de ley que se llevó a cabo sin su comparecencia en el procedimiento de separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República en que se turnó el asunto para resolver, debe admitirse la demanda en términos del artículo 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, por tratarse de un acto que puede tener una ejecución de imposible reparación pues, acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien al culminar el procedimiento administrativo referido el servidor público puede llegar a obtener una sentencia favorable, dada la naturaleza de aquél, de no ser así se afectarían en su perjuicio, directa e inmediatamente, derechos sustantivos de imposible reparación, porque no podría ser reinstalado en el cargo en acatamiento al precepto constitucional citado, a pesar de que se resolviera que la separación fue injustificada, pues la autoridad sólo estaría obligada a pagarle la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho. No se desconoce la jurisprudencia 2a./J. 119/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 442, con el rubro: "SERVICIO DE CARRERA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA FEDERAL (ACTUALMENTE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL) DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN RELATIVO NO ES ACTO IRREPARABLE NI CAUSA AFECTACIÓN EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR.", sin embargo, de su ejecutoria se advierte que ésta es aplicable cuando el órgano sustanciador se encuentra en posibilidad de ordenar diligencias para mejor proveer, lo que no sucede cuando, concluida la audiencia, se turna el asunto para resolver.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.3 A (10a.)

Amparo en revisión 88/2014 (cuaderno auxiliar 492/2014) del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Emiliano Hernández García. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Cristina Pardo Vizcaíno. Secretaria: Lucero Alejandra de Alba Peña.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA

EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. El numeral 27 citado establece que las zonas exclusivas para fumar deben ubicarse en espacios al aire libre o en espacios interiores aislados que dispongan de mecanismos que eviten el traslado de partículas hacia los espacios 100% libres de humo de tabaco y que no sea paso obligado para los no fumadores. Por su parte, el artículo 14 referido dispone que los espacios para fumar en los establecimientos con servicio de alimentos y bebidas, deben ubicarse al aire libre, es decir, en espacios que no tienen techo ni están limitados entre más de una pared o muro, independientemente del material utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o temporal, los cuales deben estar completamente separados e incomunicados de los espacios 100% libres de humo de tabaco, no ser paso forzoso de las personas y ubicarse a la distancia que establezca su reglamento, de cualquier puerta, ventana o baño que comunique con los espacios libres de humo de tabaco; no pueden ubicarse sobre las aceras o cualquier otro espacio de uso público, y deben estar señalizados de acuerdo con el reglamento aludido y demás normativa. En estas condiciones, este último precepto no transgrede el principio de supremacía constitucional, previsto en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no existir contradicción alguna con el inicialmente mencionado, en virtud de que no se genera un conflicto de normas, pues en términos del artículo 13, apartado B, fracción I, de la Ley General de Salud, el Estado de Nuevo León, a través de su Congreso, tiene facultades para legislar en cuanto a la protección a la salud de los no fumadores, por tratarse de un aspecto de salubridad general, de conformidad con el artículo 4o. constitucional y, por ello, no puede originarse un conflicto entre dichas legislaciones, ya que lo establecido en el mencionado artículo 14 tuvo la finalidad de prevenir y proteger a los no fumadores de las enfermedades atribuibles al tabaquismo, lo cual es acorde con las facultades concurrentes que le corresponden a la propia entidad federativa, conforme al citado artículo 13.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.100 A (10a.)

Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE SU DESAHOGO POR OFICIO SI SE OFRECE A CARGO DEL DIREC-

TOR DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PUEBLA, POR NO TENER ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS EL CARÁCTER DE ALTOS FUNCIONARIOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA). La regla contenida en la fracción IV del artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo, consistente en que la Junta laboral puede ordenar que el desahogo de la prueba testimonial de un alto funcionario se lleve a cabo por medio de oficio, es aplicable analógicamente a la prueba confesional, lo que obliga a interpretar quiénes son susceptibles de ubicarse en esa calidad. Al respecto, un criterio válido considera que los altos funcionarios públicos son quienes ocupan grados superiores en la estructura orgánica de las instituciones del Estado, en virtud de su elevado nivel de responsabilidad pública y representatividad; nivel, que en la administración pública municipal de Puebla, únicamente tienen el presidente municipal, el síndico y los regidores; pues, conforme al artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, sólo estos servidores integran el Ayuntamiento y tienen la responsabilidad pública de gobernar y representar a cada Municipio en dicha entidad federativa; razón por la cual, únicamente ellos pueden considerarse como altos funcionarios. Ahora bien, partiendo de esta premisa, los directores de los organismos públicos descentralizados de la administración pública municipal de Puebla no son altos funcionarios, ya que sólo representan a esos organismos, auxiliares de los Ayuntamientos en la prestación de un servicio público que, conforme al citado artículo 102, carecen del elevado nivel de responsabilidad pública y representatividad. Por tanto, si se ofrece la prueba confesional a cargo del director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, organismo público descentralizado, auxiliar del Ayuntamiento en la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, al no tener la calidad de alto funcionario, es innecesario que el oferente acompañe un pliego de posiciones por escrito, pues la Junta no debe ordenar que el desahogo de ese medio de convicción se lleve a cabo por oficio, sino de forma personalísima por el director del mencionado organismo público descentralizado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.4 L (10a.)

Amparo directo 236/2014. Víctor David Romero Martínez. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretario: León Darío Morice López.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS NECESARIAS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO DEL QUEJOSO CUANDO PROMUEVE EL JUICIO POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, EN CONTRA DE LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, QUIEN ES SU CÓNYUGE Y MADRE DE AQUÉLLOS. Si el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto, por derecho propio y en representación de sus menores hijos, en contra de la rotación en el empleo o cambio de adscripción de una servidora pública federal, quien es su cónyuge y madre de aquéllos, el Juez de Distrito debe ejercer su facultad para recabar y desahogar de oficio las pruebas que estime necesarias para acreditar el interés jurídico y/o legítimo del promovente y no sobreseer por no existir prueba suficiente para ello. Lo anterior, porque si el acto reclamado puede causar afectación al interés superior de los menores de edad representados, el juzgador debe protegerles en su dignidad, desarrollo integral y preservar el ejercicio pleno de sus derechos, pues implica sustraerlos del ambiente en el que se han desarrollado como integrantes de una familia; de ahí se colige que debe contar con el material probatorio necesario para acreditar la procedencia del juicio pues, de lo contrario, deberá ordenarse la reposición del procedimiento para el efecto precisado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)1o.4 A (10a.)

Amparo en revisión 75/2014 (cuaderno auxiliar 413/2014) del índice del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Juan Antonio Hernández Romero, por propio derecho y en representación de sus menores hijas. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Sofía Virgen Avendaño. Secretaria: Lorena García Vasco Rebolledo.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES. De la interpretación sistemática y teleológica del artículo 379 del Código Federal de Procedimientos Penales, se concluye

que la expresión "el tribunal podrá ordenar el desahogo de las pruebas que no se hubiesen practicado, si las partes las promueven", no significa que en la apelación contra el auto de plazo constitucional sean admisibles los medios de convicción que se hubiesen planteado ante el órgano de primera instancia y dejado de recabar por éste, ya que al relacionar dicho precepto con los diversos 373, 376, 377, 378 y 380 del propio ordenamiento, se advierte que el desahogo de las pruebas en la alzada no es una excepción, sino que corresponde al trámite natural del recurso, pues con independencia de que se exige tener los autos a la vista de las partes, por tres días, para dar ocasión a que las ofrezcan, existen reglas específicas en cuanto a la forma en que han de producirse ante el tribunal de apelación, así como las limitantes generales para admitirlas: 1. La testimonial sólo procede respecto de hechos que no hayan sido objeto de ella ante el Juez de la causa; y, 2. Tratándose de sentencias definitivas, sólo proceden las que no se hubieran promovido durante el proceso, en relación con la condena condicional; además de que conforme a la fracción VI del numeral 388 del mismo código, la falta de desahogo de pruebas en primera instancia constituye un motivo de reposición del procedimiento y no un presupuesto para admitirlas en la alzada. Por otra parte, del proceso legislativo que dio origen al párrafo segundo del precepto a estudio, destaca el dictamen de la Cámara de Origen (Senado de la República), al señalar que con dicha modificación se amplía la oportunidad probatoria tratándose de apelaciones contra autos de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad por falta de elementos para procesar, atendiendo a que la trascendencia de esas resoluciones justifica la aportación al órgano judicial de todos los elementos de juicio posibles. Consecuentemente, si el órgano que conoce de la apelación contra el auto de formal prisión desecha la prueba planteada por el recurrente, sin mayor argumento que la falta de su ofrecimiento ante el Juez de la causa, acudiendo para ello al segundo párrafo del invocado artículo 379, incurre en violación de los derechos de la parte oferente, previstos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que de la norma sujeta a interpretación no puede extraerse válidamente dicho presupuesto. Lo anterior se sostiene con apego al texto vigente del artículo 1o. constitucional, no sólo porque provee al apelante la protección más amplia, sino porque incide favorablemente en la seguridad jurídica y reafirma el Estado de derecho, al permitir que el órgano revisor cuente con mayores elementos para pronunciarse en definitiva acerca de la situación jurídica del probable responsable, con todas las consecuencias que implica esa determinación, tanto para aquél como para las demás personas que pudieran tener interés legítimo en el asunto, y atender al interés general de la sociedad en dotar de certeza al proceso penal en todas sus etapas. Además, se encuentra en consonancia en la jurisprudencia 1a./J. 13/2011, publicada en la página 246, Tomo XXXIII, abril de 2011, del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena

Época, de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS Y ADMITIDAS POR LA AUTORIDAD JUDICIAL EN LA PREINSTRUCCIÓN. CUANDO SU DESAHOGO ES MATERIAL Y TEMPORALMENTE POSIBLE DURANTE EL PLAZO CONSTITUCIONAL, EXISTE OMISIÓN INJUSTIFICADA DE ÉSTA DE HACERLO Y ELLO TRASCIENDE AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE PLAZO CONSTITUCIONAL, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO PARA EFECTO DE DEJARLA INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO.", pues en ésta se sostuvo que es inadmisible obligar al inculpado a someterse a un proceso penal sin habérsele dado oportunidad de desvirtuar las pruebas de cargo durante la preinstrucción. Lo que no significa dejar de reconocer que la actividad probatoria en la alzada no puede tener los mismos alcances ni extensión que en la primera instancia, porque se traduciría en una repetición de ésta, ajena a la naturaleza del recurso de apelación y de los medios de impugnación en general; por tanto, nada de lo anterior implica que deba recibirse cualquier clase de prueba, sino que siempre y en cada caso particular corresponderá al tribunal de apelación pronunciarse, fundada y motivadamente, acerca de la pertinencia e idoneidad de la propuesta por parte legítima, pues además de ser inherente a su investidura y responsabilidad, la propia norma establece que ese órgano podrá ordenar el desahogo de tales pruebas, de modo que su admisión no es un deber sino una facultad del órgano de apelación, sujeta a control constitucional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.2o.P.31 P (10a.)

Amparo en revisión 49/2014. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Espinosa Durán. Secretario: Víctor Manuel Martínez Mata.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Del artículo 634 del Código de Procedimientos Civiles se desprende que los incidentes promovidos en un procedimiento civil se tramitan por pieza separada, en el que se les corre traslado a las partes, se les da oportunidad de ofrecer pruebas, formular alegatos y, finalmente, el Juez dicta la interlocutoria correspondiente. En tal virtud, las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas dentro de un incidente, aunque se encuentren relacionadas con el juicio en lo principal, son ajenas a éste, porque las actuaciones y pruebas que se hayan desahogado en él sólo tienen por objeto acreditar la acción planteada y, ade-

más, al tramitarse el incidente por cuerda separada, resulta evidente que se rigen por disposiciones distintas, por lo que, de tomarlas en cuenta, se estarían duplicando las etapas procesales, provocando con ello la violación al principio de igualdad procesal, pues se otorgaría nuevo término para acreditar las pretensiones de las partes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
VI.1o.C.50 C

Amparo directo 298/2002. José Rafael Isabel López Barranco. 26 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosa María Temblador Vidrio. Secretario: Juan E. Gatica Arteaga.

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 122/2014, pendiente de resolverse por la Primera Sala.

Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 1124, se publica nuevamente con la modificación en el precedente que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Esta tesis se republicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Q

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO. El artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo prevé el recurso de queja contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en los que debe interponerse (dos días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, del citado ordenamiento. Por esta razón, el mencionado recurso quedó exceptuado de la regla general prevista en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley, conforme a la cual el juzgador a quo debe dar vista a las contrapartes del recurrente para que en el plazo de tres días señalen las constancias que estimen necesarias para agregar en copia certificada al testimonio que se remitirá al tribunal ad quem. En cambio, el párrafo segundo del mismo precepto dispone que tratándose de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la ley de la materia, el Juez de Distrito notificará la interposición del recurso a las partes y, de inmediato, remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito su informe, copia de la resolución impugnada, de las actuaciones solicitadas por el recurrente y las que estime pertinentes. En este último caso, las acciones de notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad no son sucesivas, sino simultáneas, pues de otro modo la remisión no podría ser inmediata, como lo exige el referido precepto. Consecuentemente, es innecesario que el envío de las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite de la queja se postergue hasta recabar los comprobantes de notificación del recurso a las contrapartes del recurrente, ya que éstas no intervendrán en la formación del testimonio de queja. Lo anterior, porque aguardar las refe-

ridas constancias de notificación es contrario a la naturaleza urgente de la mencionada queja, ya que podría ocasionar que la legalidad de la resolución recurrida permanezca sub júdice durante un periodo excesivamente largo, en comparación con los plazos brevísimos previstos para interponer y resolver el recurso.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.65 K (10a.)

Queja 149/2014. Norma Madero Jiménez o Norma Madero de Paredes. 21 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

R

RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA. El desechamiento por extemporaneidad en la presentación de la demanda de nulidad, al considerar que no se promovió dentro del plazo previsto para los juicios seguidos en la vía sumaria, implica que existe una determinación judicial de la vía que si bien es cierto puede ser recurrida, también lo es que rige el caso concreto hasta en tanto sea modificada por virtud del recurso de reclamación, motivo por el cual –como las normas procesales son imperativas y no potestativas– el promovente debe ceñir la interposición del medio de impugnación mencionado a los plazos regulados para la vía sumaria, en aras de evitar un estado de anarquía procesal y guardar el debido orden público. Por tanto, en la hipótesis señalada, debe interponerse en el plazo de cinco días establecido en el artículo 58-8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Lo anterior, porque en términos del artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho de tutela judicial o acceso a la impartición de justicia no es absoluto ni irrestricto en favor de los gobernados, pues el Constituyente otorgó a los órganos legislativos secundarios la facultad de establecer los plazos en los que la función jurisdiccional debe realizarse, al utilizar la frase "en los plazos y términos que fijen las leyes", la cual no sólo implica las temporalidades en que debe hacerse la solicitud de jurisdicción, sino que incluye, además, todas las formalidades, requisitos y mecanismos que el legislador prevea para cada clase de procedimiento, como en el caso, la vía sumaria en el juicio contencioso administrativo.

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.10o.A.8 A (10a.)

Amparo directo 314/2014. Deacero, S.A. de C.V. 29 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Camero Ocampo. Secretaria: Sandra Paulina Delgado Robledo.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" es el medio de difusión del gobierno local, en el que deben publicarse, entre otros, los reglamentos emitidos por el titular del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, para los efectos de su vigencia legal, como lo disponen los artículos 2o., 3o. y 8o., fracción III, de la ley de dicha publicación. En estas condiciones, la versión impresa de ese periódico es lo que se conoce como la fuente primigenia de la norma y, por ende, es imprescindible atender a su texto, es decir, a la literalidad de la divulgación realizada en ese documento, para determinar la fecha de entrada en vigor de aquélla, toda vez que se trata de la reproducción más precisa de la voluntad del órgano emisor, sin que resulte admisible considerar la información que sobre dicha vigencia pueda obtenerse de medios electrónicos de difusión, aun cuando provenga de páginas o sitios de Internet oficiales, toda vez que su publicidad, en esa forma, únicamente surte efectos de divulgación, pero no afecta la entrada en vigor de los reglamentos ni el contenido de los materiales publicados en la versión impresa e, inclusive, su consulta queda bajo la estricta responsabilidad del usuario, como expresamente lo disponen los preceptos 21 y 22 de la invocada Ley del Periódico Oficial referido.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

(III Región)4o.51 A (10a.)

Amparo en revisión 298/2014 (cuaderno auxiliar 640/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Miguel Ángel de Miguel Borboa y otros. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Bolívar López Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RELACIÓN DE TRABAJO. LA CARTA PODER OTORGADA POR EL DEMANDADO AL ACTOR, QUE CONTIENE UN RECONOCIMIENTO

EXPRESO DE QUE ÉSTE ES SU TRABAJADOR Y QUE LABORA EN EL DOMICILIO SEÑALADO COMO EL DE LA FUENTE DE PRODUCCIÓN, ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DICHO VÍNCULO ENTRE AMBOS. Si en un juicio laboral el actor ofrece como prueba una carta poder que le otorgó el demandado, a quien se le atribuye la calidad de patrón, para realizar un trámite administrativo ante una dependencia gubernamental y la misma contiene el reconocimiento expreso del otorgante de que el apoderado es su trabajador y que labora en el domicilio señalado por éste como la de la fuente de trabajo, dicho documento, al contener esa confesión de su otorgante, es suficiente para demostrar que existió la relación de trabajo entre el actor (apoderado) y el demandado (poderdante). Lo anterior es así, toda vez que la carta poder no puede ni debe ponderarse desde el punto de vista formal (que se trata estrictamente de un mandato), sino de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los hechos a conciencia; de ahí que la confesión contenida en dicho documento es suficiente para acreditar la existencia de la relación de trabajo entre el actor y el demandado, cuando el primero alega el despido y, el segundo, niega el vínculo laboral.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
III.4o.T.24 L (10a.)

Amparo directo 1111/2013. Gerardo Jiménez de los Santos. 17 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús López Arias. Secretario: Gabriel Arévalo Mascareño.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA. El procedimiento previsto en el artículo 41 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad inspeccionar, verificar, determinar o liquidar la situación fiscal de los contribuyentes, sino que busca obligarlos a que cumplan con la presentación de la declaración de impuestos, por lo cual, su objeto es de gestión tributaria. En tal contexto, el crédito fiscal determinado en términos de la fracción II, párrafo segundo, del precepto referido, es de carácter provisional

y, por ello, sólo establece una presunción legal de ingresos del contribuyente que deriva de datos fehacientes que informan la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la que podrá desvirtuarse al momento en que se presente la declaración omitida, por lo que, al no tratarse de una resolución definitiva derivada del ejercicio de facultades de comprobación, no puede considerarse uno de los supuestos de la determinación presuntiva de ingresos prevista en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, sobre todo si se toma en consideración que el artículo 41 citado prevé la mecánica que debe seguirse para el caso de que se desvirtúe esa presunción legal, ya que al momento en que el contribuyente presente su declaración y determine su situación fiscal, de resultar una cantidad menor a la determinada, podrá compensar la diferencia y, de ser mayor, disminuir el importe que tenga que pagar y, en su caso, deberá cubrir la diferencia, situación que atenderá a su real capacidad contributiva.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.A.80 A (10a.)

Amparo directo 109/2014. Iván René Calderón García. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Saucedo Zavala. Secretario: Mario Moisés Silva Islas.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. EL GRADO DE PUNICIÓN EN QUE SE UBICA AL SENTENCIADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA A SU PAGO, NO ESTÁ LIGADO CON EL GRADO DE CULPABILIDAD PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 26, fracción III, del Código Penal del Estado de México, establece que la reparación del daño comprenderá, entre otras, la indemnización del daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos que como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima; y que el monto de la indemnización por el daño moral, no podrá ser inferior a treinta ni superior a mil días multa y será fijado considerando las circunstancias objetivas del delito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre la víctima u ofendido. Ahora bien, para cuantificar la condena al pago de la reparación del daño moral, de acuerdo con el parámetro que fija dicho precepto, deben ponderarse los factores de las circunstancias objetivas del ilícito, las subjetivas del delincuente y las repercusiones del delito sobre el ofendido, a fin de ubicar al sentenciado en un grado de punición, el cual no está ligado con el grado de culpabilidad para la individualización de la pena, pues son

distintos para la aplicación de las sanciones, ya que en este último, en términos del numeral 57 del código en comento, deben considerarse la gravedad del delito y el grado de culpabilidad del sentenciado, de lo que se aprecia que en ambos casos se analizan elementos diversos, pues en el daño moral son factores externos de la víctima y en la individualización de la pena, lo son en relación con el justiciable.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.3o.P.40 P (10a.)

Amparo directo 70/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Valle Hernández. Secretaria: Gabriela Bravo Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA DEMANDA INICIAL Y SUS ANEXOS. AL CONSTITUIR UN ACTO DECLARATIVO QUE CONLLEVA UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN. En la jurisprudencia número 15, de rubro: "ACTOS DECLARATIVOS.", publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 14, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció: "Cuando los actos declarativos llevan en sí mismos un principio de ejecución, procede contra ellos la suspensión en los términos de la ley.". Ahora bien, la resolución que sobresee en un juicio ordinario mercantil y ordena la devolución de la demanda inicial, así como de los documentos anexos de ella, constituye un acto declarativo que conlleva en sí mismo un principio de ejecución, pues con motivo de esa orden se entregarán a la actora la demanda y sus documentos anexos, circunstancia que, incluso, tendrá como consecuencia que quede sin materia el juicio de amparo, razón por la que, en contra de aquella resolución, procede conceder la suspensión del acto reclamado.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.C.40 C (10a.)

Queja 127/2013. Concepción Amparán Gutiérrez. 29 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ismael Hernández Flores. Secretaría: María Irene López Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RESTITUCIÓN DEL BIEN INDEBIDO, EN TRATÁNDOSE DEL DELITO ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN. Si bien es cierto el precepto 20,

apartado B, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho fundamental de las víctimas u ofendidos de un delito, la reparación del daño para asegurar de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y responder al reclamo social frente a la impunidad y a los efectos del delito sobre aquéllos, garantizando que en todo proceso penal tengan derecho a una reparación pecuniaria por los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito, para lograr así una clara y plena reivindicación de dichos efectos en el proceso penal, en tratándose de delitos de encubrimiento por receptación, no procede la condena a la reparación del daño consistente en la restitución a los ofendidos los sendos vehículos robados, ya que el detrimento en su patrimonio fue como consecuencia directa del antisocial de robo perpetrado por personas distintas al sentenciado, y no por la posesión de éstos; de ahí que si bien existe una víctima individualizable que pudiera acceder a dicho derecho, habida cuenta que el bien jurídico protegido pertenece a alguien en específico; sin embargo, existe el delito que tutela esos bienes jurídicos respecto de los cuales sí procedería la condena de la restitución total de los vehículos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.21 P (10a.)

Amparo directo 186/2014. 25 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Irma Emigdia González Velázquez.

Amparo directo 209/2014. 25 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretaria: Irma Emigdia González Velázquez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO. De la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la fracción I-B del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta el 3 de octubre de 2011, cuyo contenido sustancial se reproduce en la actual fracción III del propio precepto, respecto del recurso de revisión fiscal, se colige que los medios de impugnación que se promuevan contra las sentencias que emiten los tribunales de lo contencioso administrativo, entre ellos, el del Distrito Federal, tienen una naturaleza excepcional y, por ello, debe estarse a lo que el legislador establezca para su procedencia. Así, del artículo 140 de la Ley

Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte que el recurso de revisión contenciosa administrativa procede contra las sentencias que emita la Sala Superior de dicho órgano al resolver el recurso de apelación a que se refieren los diversos artículos 138 y 139 del mismo ordenamiento (contra las resoluciones dictadas por las Salas ordinarias y auxiliares). Por tanto, el recurso de revisión contenciosa administrativa es improcedente contra las sentencias emitidas por las Salas ordinarias del tribunal aludido, al resolver un juicio de nulidad en la vía sumaria, por no cumplirse el requisito de procedencia aludido.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.A.82 A (10a.)

Revisión contenciosa administrativa 78/2014. Director General Jurídico y de Gobierno en Cuajimalpa de Morelos, por conducto de su autorizado. 19 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Aguirre Montoya, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Penélope Serrano Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA. En congruencia con las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales y por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues, en esos supuestos, no se emite una resolución de fondo al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, al margen de la materia del asunto. En este sentido, los referidos criterios son aplicables cuando la sentencia que declara la nulidad lisa y llana obedece a que se actualizó la figura de la afirmativa ficta en el procedimiento administrativo de origen, por ejemplo, en términos de los artículos 9o. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 15 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, dado que, en esa hipótesis, no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso y no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.P.A.2 A (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 41/2014. Director General Adjunto de Procesos Contenciosos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en ausencia del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría, en representación del Director General del Centro SCT Campeche de la aludida Secretaría. 5 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Secretario: Jorge Gabriel Tzab Campo.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

S

SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN. La jurisprudencia 4a./J. 20/93, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Número 65, mayo de 1993, página 19, de rubro: "HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES.", la cual sirvió de sustento jurídico para la diversa XII.2o. (V Región) J/1 (9a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 1489, de rubro: "SALARIO INVEROSÍMIL. LA AUTORIDAD LABORAL DEBE DECLARAR ASÍ AL INDICADO POR EL TRABAJADOR, CUANDO DE ACUERDO A LA CATEGORÍA QUE OCUPA RESULTA EXCESIVO, NO OBSTANTE QUE SE HAYA TENIDO POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.", es inaplicable analógicamente en aquellos casos en que la demandada no controvierta el salario y cumpla con la fatiga procesal probatoria, en virtud de que las horas extras y el salario tienen distinta naturaleza; esto es, las horas extras pueden analizarse con base en la razón y la lógica (ya que la condición humana tiene límites de resistencia a determinadas condiciones ambientales, de horarios e, incluso, de actividades intelectuales, etcétera); en cambio, el salario se concreta o establece por una diversidad de factores de la producción, trabajo y capital, cuya relación no únicamente se basa en la razón y en la lógica, puesto que pueden ser demostrados en el juicio laboral; por tanto, si el salario señalado por el trabajador fuera considerado inverosímil, contrario a la prestación de horas extras, la autoridad laboral no podría únicamente abstenerse de condenar por ese aspecto, pues el salario es el elemento indispensable para determinar el monto de las prestaciones económicas reclamadas procedentes. Así, suponiendo sin conceder que se calificara como inverosímil el salario del trabajador, que no fue controvertido ni se ofrecieron pruebas para acreditar uno distinto, la autoridad laboral tendría que pronunciarse bajo alguno de los

siguientes supuestos: a) Que ante la incertidumbre del salario real del trabajador, se determinara que éste fuera el salario mínimo, lo cual sería ruinoso para el trabajador, pues pudiera darse la posibilidad de una disminución de su salario si éste fuera mayor al mínimo; b) Que se abriera incidente de liquidación para aportar pruebas por las partes. Esto significaría dar una segunda oportunidad probatoria en contra del trabajador, y en el caso, no se está ante una excepción a que se refiere el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que ordenar dicha apertura, equivaldría a transgredir dicho numeral; y, c) Que la Junta considerara el monto conforme a su arbitrio, lo cual tampoco sería procedente, pues está obligada conforme al artículo 841 de la citada ley, a estudiar pormenorizadamente las pruebas rendidas, haciendo su valoración. De lo que se ve, los citados supuestos no satisfacen la equidad que debe imperar en los procesos laborales, porque el salario es un elemento de la relación laboral y de los factores de la producción, trabajo y capital, cuya fijación no únicamente se basa en la razón y en la lógica, sino en las habilidades, desempeño, estímulos motivacionales, riesgos, especialización del trabajador, así como en las necesidades de la patronal, por citar sólo algunos aspectos; además, que el salario puede ser demostrado a través de las pruebas pertinentes, por lo que no habría bases objetivas que permitieran la defensa u objeción de un monto establecido a criterio de la autoridad laboral, sino que sería un hecho meramente arbitrario. Tan es así que existen investigaciones y estudios necesarios y apropiados para que el consejo de representantes pueda fijar los salarios mínimos de conformidad con la facultad prevista en la fracción III del artículo 561, que comprenda todos los datos, elementos e informes que se detallan en el numeral 562 del propio ordenamiento legal. Todo lo cual evidencia que por la complejidad de la fijación del salario, la Junta no podría resolver en conciencia y a verdad sabida, por lo que debe tenerse como firme el salario que el trabajador adujo en su escrito de demanda.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN.

(VIII Región)2o.7 L (10a.)

Amparo directo 308/2014 (expediente auxiliar 653/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán. Carlos Valladares Valle. 20 de agosto de 2014. Unanimidad de votos; mayoría en relación con el contenido y tema de esta tesis, por no haber votado en el asunto que le dio origen el Magistrado Gonzalo Eolo Durán Molina. Ponente: Adiel Palacio Zurita, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Juana Inés Muñiz Sánchez.

Nota: El criterio contenido en esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 311/2014, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR DIVERSIDAD DE ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE REVOCARLO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE POR UNO DE ELLOS NO SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA. Si durante la secuela del juicio de amparo, el resolutor constitucional decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por estimar que respecto de los diversos actos reclamados se actualizaron causales de improcedencia previstas en el numeral 61 del mencionado ordenamiento, y el Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer del recurso de revisión advierte que por uno de esos actos reclamados no se actualizó la causal de improcedencia invocada, ello conduce a revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio, sin que se tenga que verificar si se surten o no causales de improcedencia respecto de los demás actos, pues acorde con la técnica que rige en el juicio de amparo, no puede decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia de manera parcial, es decir, sólo por alguno de los actos reclamados, ya que precisamente la finalidad del sobreseimiento es poner fin al juicio sin entrar al estudio de fondo de los actos reclamados ni analizar los conceptos de violación esgrimidos, y si en el caso el juzgador tiene que pronunciarse por uno de los actos en la audiencia constitucional, específicamente en la etapa de sentencia (salvo desistimiento por parte del quejoso del juicio de amparo que puede ocurrir en cualquier etapa), es evidente que en tal determinación debe realizar el estudio de los actos restantes, además de que con ello se respetaría el desahogo de las etapas de alegatos y pruebas, con lo cual brindará al quejoso la oportunidad de formular los alegatos que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime pertinentes.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.6 K (10a.)

Amparo en revisión 137/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretario: Erick García Ibáñez.

Amparo en revisión 139/2014. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretario: Erick García Ibáñez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES. De con-

formidad con lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: "LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124; y en concordancia con lo determinado por el Pleno del referido Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 142/2001, difundida en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XV, enero de 2002, página 1042, de rubro: "FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.", en el sentido de que en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican que las entidades federativas, incluso el Distrito Federal, los Municipios y la Federación, puedan actuar respecto de una misma materia, y que será el Congreso de la Unión el que determine la forma y los términos de la participación de dichos entes mediante una ley general, se concluye que no se transgrede el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la Constitución Federal, cuando se origine un conflicto entre una ley federal y una ley local, tratándose de facultades que se ejercen simultáneamente por las entidades federativas y la Federación, respecto de una misma materia y que, en una ley general emitida por el Congreso de la Unión se determine la forma y términos de la participación de esos entes, toda vez que dicho principio se vulneraría en caso de que la ley federal o la local contradijeran las disposiciones de aquélla en cuanto a la competencia concurrente, por el grado superior que tiene sobre las leyes secundarias referidas conforme al precepto constitucional aludido, mas no porque éstas pudieran contener normas que se contradigan entre sí, dado que el artículo 133 constitucional no establece relación de supra o subordinación entre las legislaciones federales y locales y, consecuentemente, se encuentran en un plano de igualdad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.2 CS (10a.)

Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS. Conforme a lo sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 3a./J. 10/91, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo VII, marzo de 1991, página 56, de rubro: "LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACIÓN JERÁRQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCIÓN.", el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, y cuando se está ante una aparente contradicción entre ellas, ésta debe resolverse atendiendo a qué órgano es competente para expedir el ordenamiento, de acuerdo con el sistema de competencia que nuestra Carta Magna dispone en su artículo 124. En ese contexto, en razón de que el artículo 133 constitucional no prevé relación de jerarquía entre legislaciones federales y locales, pues las leyes a las que hace referencia y que constituyen la "Ley Suprema" son la Constitución, los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, y las leyes generales del Congreso de la Unión, no se transgrede el principio de supremacía constitucional establecido por dicho precepto cuando se origine un conflicto entre las mencionadas normas por una aparente contradicción entre éstas, toda vez que las legislaciones locales emanan exclusivamente del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión que, en cuanto a sus regímenes interiores, les es propio, de conformidad con los postulados de los artículos 40 y 41 de la Norma Fundamental, relativos a la autonomía de las entidades federativas en cuanto a su régimen interno, así como el ejercicio soberano del poder local. Por lo cual, cuando se haga el planteamiento de una aparente contradicción entre leyes federales y locales, debe resolverse atendiendo a qué órgano es competente para su expedición, de conformidad con el sistema de competencia señalado por el artículo 124 citado, el cual indica que las facultades que no están expresamente concedidas por dicha Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.1 CS (10a.)

Amparo en revisión 194/2014. Grupo Quintín del Norte, S.A. de C.V. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretaria: Griselda Tejada Vielma.

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO. Si el acto reclamado lo es la sanción impuesta a un interno por el Consejo Técnico Interdisciplinario del reclusorio, consistente en suspender la visita de alguno de sus familiares (esposa), por infringir el reglamento interno (tratar de introducir un teléfono celular), este castigo equivale a una pena trascendental prohibida por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no sólo afecta al inculpado sino también a su familia; por tanto, la demanda de amparo que se promueva en su contra podrá presentarse en cualquier tiempo, conforme a la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo; máxime si la autoridad no expresó las razones particulares y causas inmediatas para establecer que la visita del mencionado familiar representaba un riesgo para la reincorporación a la sociedad del imputado o un peligro para la seguridad de la institución penitenciaria.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.6o.P.60 P (10a.)

Amparo en revisión 159/2014. 21 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretaria: Guillermina Alderete Porras.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 4/2011 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2479, de rubro: "CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS."

Esta tesis se publicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA. Del artículo 129 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció los casos en que debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social o que se contravienen disposiciones de orden público, sin contemplar al procedimiento en esos supuestos. De esta manera, si no fue establecido en el citado numeral 129, que debía considerarse al procedimiento como un acto en donde pueda seguirse perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden

público, no resulta jurídico indicar lo contrario sin fundamentación y motivación alguna. Lo anterior es así, porque, si por un lado, el diverso 128, fracción II, establece como requisito para conceder la suspensión de los actos reclamados que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público y, por otro, en el referido artículo 129, en ninguna de las hipótesis previstas enunciativamente, se contempló la suspensión de un procedimiento judicial, ello implica que el legislador no dispuso expresamente que la suspensión fuera improcedente y, en consecuencia, si el juzgador de amparo determina en un caso concreto la actualización de una hipótesis no precisada por el legislador, que pudiere seguir perjuicio al interés social o se considere la contravención de disposiciones de orden público, deberá emitir los razonamientos con los que justifique dicha situación. Esto debe entenderse así, porque si el legislador contempló en el mencionado precepto 129 lo denominado como "entre otros casos", ello permite interpretar que ese listado es enunciativo y no limitativo, pero debe tomarse en cuenta que si esas hipótesis señalan cuándo debe considerarse que se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, entonces, ésos son casos en los que el legislador estableció una presunción legal sobre ello; de esa manera, para determinar esos "otros casos", se deberá fundar y motivar por qué en un caso concreto tendría que considerarse en dichos supuestos, pues estos "otros casos" no gozan de la presunción legal de referencia. Consecuentemente, la concesión de la suspensión del acto reclamado no tiene que paralizar el procedimiento del juicio, pues como se advierte del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 67/2012 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 1189, de rubro: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.", los juzgadores pueden ordenar la interrupción de alguna etapa del procedimiento para evitar perder la materia del juicio constitucional y evitar resoluciones contradictorias, lo cual no supone necesariamente paralizar el procedimiento; en ese entendido, resulta suficiente conceder la medida suspensional y evitar el dictado de la sentencia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.2o.C.19 K (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 100/2014. Secretaría de Salud. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretaria: Diana Helena Sánchez Álvarez.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER *EX OFFICIO* DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO. La autoridad de amparo (trátese de Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito), como perito en derecho y rector del procedimiento, tiene el deber *ex officio* de estar al pendiente del debido cumplimiento de los requisitos de efectividad establecidos en la Ley de Amparo, en relación con la suspensión para, en caso de que el quejoso incumpla el requisito de efectividad consistente en exhibir la garantía fijada, informar a la autoridad responsable, inmediatamente fenecido el plazo de gracia que estableció el legislador (cinco días), que está en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Deber que se justifica, por lo que atañe al amparo judicial civil, en el respeto a la cosa juzgada; el derecho a ejecutar la sentencia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, integrante de la tutela judicial efectiva que tiene la parte vencedora y la protección a su efecto útil, para evitar que la justicia se torne ilusoria, pues sin interés del condenado para suspender la ejecución, ni garantía de los posibles daños y perjuicios que llegaren a producirse si no obtiene un fallo favorable, no existe una razón válida para el mantenimiento de esa situación de hecho. Una interpretación contraria desnaturalizaría el noble propósito que tuvo el legislador al establecer la medida cautelar en mención, puesto que por simple inacción de la autoridad responsable, que como parte del juicio también debe estar al pendiente del procedimiento, la suspensión surtiría sus efectos de facto, esto es, sin ningún requisito legal de por medio, lo que es jurídicamente insostenible.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.C.47 K (10a.)

Queja 158/2013. Remediation and Engeneering Services de México, S.A. de C.V. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Amparo en revisión 333/2013. Caabsa Eagle, S.A. de C.V. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Karlo Iván González Camacho.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada el viernes 15 de agosto de 2014 a las 9:42 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, así como en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 1968, se publica nuevamente con la modificación en el texto que el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.

Esta tesis se republicó el viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DEL IM-

PUESTO PREDIAL. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO SÓLO TIENE VIGENCIA HASTA ANTES DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE INICIADO ÉSTE, AQUÉLLA PODRÁ CONCEDERSE Y SURTIRÁ EFECTOS SI SE CONSTITUYE GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA. El artículo 135 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables; además de que el órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: (i). Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; (ii). Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y, (iii). Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Por tanto, aunque el artículo 47 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco dispone la forma en que podrán garantizarse las obligaciones y los créditos fiscales a que dicha legislación se refiere y, en su último párrafo, señala que en caso del impuesto predial, no se hará necesario constituir garantía alguna, en tanto se instaure el procedimiento administrativo de ejecución; esto debe interpretarse en el sentido de que dicha exención sólo tiene vigencia hasta antes de que la autoridad recaudadora inicie el referido trámite coactivo en contra de los contribuyentes obligados, es decir, mientras se sigue el procedimiento de ejecución en sede administrativa, por lo que una vez que esto suceda, deberá otorgarse la aludida garantía, con base en el referido artículo 135, en caso de promoverse el juicio amparo y se solicite la suspensión contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro del mencionado impuesto predial, por ser dicho dispositivo legal el que regula esa medida cautelar.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.4o.T.9 K (10a.)

Queja 116/2014. Humberto Campos Morales. 16 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Joel Omar Preciado Alonso.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En los juicios de amparo indirecto en que se reclame una norma general, ya sea con el carácter de autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación, una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión, conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, opera el numeral 148 de este último ordenamiento, que establece los efectos de la medida cautelar, de acuerdo con la forma en que fue controvertida la norma, a saber: a) en el supuesto de que se impugne una ley por su sola vigencia, la medida paralizará los efectos y consecuencias de los preceptos en la esfera jurídica del quejoso; y, b) cuando se reclame una norma heteroaplicativa, la suspensión tiene el efecto, además, de suspender las consecuencias del acto concreto de aplicación. Consecuentemente, cuando se reclama una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, en su carácter de heteroaplicativa, y éste no se demuestra, no pueden otorgarse los efectos de la suspensión como si aquélla se hubiera impugnado como autoaplicativa, pues el acto no fue reclamado en esos términos y los supuestos del artículo 148 señalados son excluyentes entre sí, aunado a que, al impugnar una norma de individualización condicionada, es necesario que exista el acto de aplicación para que incida en la esfera de derechos del quejoso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.75 K (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 171/2014. Delegada de las autoridades responsables del Municipio de Apodaca, Nuevo León. 2 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretaria: Claudia Elena Hurtado de Mendoza Godínez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación.*

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA

TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. De los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 12 de la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", se advierte el derecho fundamental a la protección de la salud y su pleno ejercicio, a través del establecimiento de reglas obligatorias para el Estado, tendentes a prestar el servicio médico de prevención y asistencial de la salud física y mental de las personas sujetas a su jurisdicción. Consecuentemente, si el quejoso se encuentra dado de baja en definitiva del servicio como elemento de seguridad pública, presenta y se admite su demanda en la cual aduce la inconstitucionalidad de ese acto, por lo que en el incidente pide la suspensión y se le concede para el efecto de que se le siga prestando el servicio médico durante la tramitación del juicio de amparo, dicha concesión de la medida cautelar no puede condicionarse al pago de cuotas de recuperación, pues, de hacerlo, se excederían los requisitos para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, dado que, en el caso, no existe tercero interesado ni el amparo se solicitó contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal y se vulneraría el artículo 128 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; aunado a que se otorgaría un interés superior a cuestiones meramente económicas, como el pago de cuotas, por encima del derecho sustantivo indicado y lo inherente a los servicios médicos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.3o.A.32 K (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 148/2014. José Ruiz Muñoz. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Consuelo del Roble Treviño González.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO. Del análisis sistemático de los artículos 128, 131, interpretado con apoyo en el principio pro persona y 138 de la Ley de Amparo, se coligen los requisitos que deben cumplirse para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado cuando se aduce un interés legítimo, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, de la propia ley, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que se acrediten presuntivamente: a) un daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, en caso de que se niegue la medida cautelar, entendiéndose por éste la afectación a su esfera jurídica que está sucediendo, que amenaza o está por suceder, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y que de concederse el amparo no podría ser restituido en el goce del derecho fundamental violado, en términos del artículo 77 de la ley citada; y, b) el interés social que justifique el otorgamiento de la medida cautelar, entendido como el que tiene la sociedad para que una colectividad determinada que es parte de ella, vea protegido su interés difuso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
XXIV.2o.1 K (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 399/2013. Universidad del Valle de Matatipac, S.C., Campus Versalles. 15 de mayo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Humberto Salcedo Salcedo.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. SI EL PROCESO SE TRAMITA Y CONCLUYE CONFORME AL SISTEMA PENAL ANTERIOR, EL INCIDENTE RELATIVO DEBE REGIRSE POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Si el proceso que se siguió contra el quejoso se tramitó y concluyó conforme a las disposiciones del sistema penal anterior, es acertado que se tramite el incidente de suspensión y se provea sobre la medida cautelar conforme a la legislación de amparo abrogada, pues aun cuando en el Estado de México ya se encuentra vigente la legislación que prevé un sistema de justicia penal acusatorio, los hechos imputados al acusado acontecieron previo a su entrada en vigor, lo que implica que se resuelva en los términos señalados, en atención a las circunstancias específicas del caso.

Y es que el artículo décimo transitorio, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, no podría interpretarse de otra manera, dado que al referirse a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal, no atiende a un aspecto de temporalidad en abstracto, referente a un circuito o demarcación territorial en donde se hubiere decretado la vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, sino a la efectiva aplicabilidad del sistema al procedimiento o causa penal del que emane el acto reclamado respecto del cual se solicite la medida suspensional dentro del juicio de amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.2o.P.13 K (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 129/2014. 8 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Carlos Ruiz Alejandre.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO. Constituye un interés prioritario y específico de la sociedad que no se suspendan los efectos de los artículos 17-K, 28, 42 y 53-B del Código Fiscal de la Federación, adicionados el primero y el último y reformados los restantes, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, 34 de su reglamento, así como de las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, adicionadas en la segunda resolución de modificaciones, difundida en el medio oficial señalado el 4 de julio de 2014, relativos a la obligación de llevar contabilidad electrónica y enviarla a la autoridad a través del buzón tributario, habida cuenta que de la lectura de la exposición de motivos de la reforma indicada se advierte que tuvo como finalidad, entre otras cosas, que la comunicación electrónica agilice y eficiente toda gestión entre el contribuyente y el fisco para facilitar y fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones de aquél con el uso de la tecnología, con miras a lograr una mayor recaudación; disminuir costos operativos para la autoridad en trámites presenciales y reducir la generación de vicios formales derivados de la interacción personal. Por consiguiente, es improcedente conceder la suspensión

provisional contra los efectos de los preceptos referidos, por incumplirse con el imperativo previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, consistente en que con la medida no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, merced a que, de otorgarse la medida cautelar, se impediría la concreción de la norma, al grado de posibilitar la erosión de la política fiscal. Además, de la ponderación de los valores que se encuentran en disputa, se estima de mayor peso la afectación al interés social que los perjuicios que pudiera resentir el quejoso, máxime que la inconstitucionalidad que se aduzca bajo la apariencia del buen derecho no es evidente y notoria, sino que requiere de un examen exhaustivo propio de la sentencia que decida el fondo del amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.60 A (10a.)

Queja 277/2014. Villagroup Developments, S.A. de C.V. 26 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Primero y Segundo del Vigésimo Séptimo Circuito, Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Segundo, Cuarto, Quinto, Sexto, Noveno, Décimo Primero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito, y Primero del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, en los recursos de queja 189/2014 y 182/2014; 187/2014; 131/2014 y 162/2014; 184/2014, 205/2014, 209/2014, 214/2014, 215/2014, 216/2014, 217/2014, 218/2014, 219/2014, 220/2014, 222/2014, 223/2014, 224/2014, 225/2014, 226/2014, 227/2014, 228/2014, 229/2014, 231/2014, 232/2014, 233/2014 y 235/2014; 166/2014; 148/2014; 168/2014, 157/2014, 161/2014, 171/2014, 178/2014, 164/2014, 157/2014, 165/2014 y 168/2014; 130/2014 y 131/2014, respectivamente, que fueron objeto de las denuncias relativas a las contradicciones de tesis 294/2014, 287/2014, 281/2014, 280/2014, 275/2014, 272/2014 y 266/2014, resueltas por la Segunda Sala el 19 de noviembre de 2014, y que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, entonces Tercero del Décimo Segundo Circuito, actualmente Tercero en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, y por el propio Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en los recursos de queja 140/2014, 166/2014, 169/2014, 173/2014, 175/2014 y 155/2014; 163/2014, 77/2014, 94/2014 y 206/2014, respectivamente, que fueron objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 277/2014, resuelta por la Segunda Sala el 26 de noviembre de 2014.

La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Décimo Primero y Décimo Tercero en Materia Administrativa del Primer

Circuito, en los recursos de queja 180/2014 y 174/2014, respectivamente, que son objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 296/2014, pendiente de resolverse por la Segunda Sala.

La presente tesis aborda el mismo tema que las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo en Materia Administrativa del Primer Circuito, en los recursos de queja 185/2014 y 170/2014, respectivamente, que fueron objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 25/2014, resuelta por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito el 29 de septiembre de 2014, de la cual derivó la jurisprudencia PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

T

TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO. El procedimiento previsto en el capítulo III, denominado "De los nombramientos" de las condiciones generales de trabajo que rigen en el organismo público descentralizado Servicios de Salud en Tamaulipas, regula la intervención del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, lo cual significa que este gremio laboral debe estar enterado de los actos jurídicos que pudieran derivar con motivo del reclamo consistente en la expedición de un nombramiento de forma definitiva al organismo público descentralizado referido; por ello, si en un juicio en el que se plantea dicho reclamo, la Junta no llama oficiosamente como tercero interesado al sindicato aludido, es inconcuso que esta omisión constituye una violación procesal análoga a la prevista en la fracción I, en relación con la XII del artículo 172 de la Ley de Amparo, que afecta las defensas del interesado y trasciende al resultado del fallo, pues vulnera los artículos 690 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.P.T.7 L (10a.)

Amparo directo 832/2014. Francisco Rodríguez Gómez. 4 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretaria: Rosalba Janeth Rodríguez Sanabria.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER QUIENES NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL SIEMPRE QUE SUS FUNCIONES SEAN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y ESTÉN VINCULADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en su artículo 13, fracción III, considera como empleado de confianza a aquel personal distinto al ministerial, policial, pericial y de base, y en ningún caso será considerado miembro de los servicios de carrera; acorde a lo anterior, el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su párrafo segundo dispone que todos los servidores públicos de las instituciones policiales en los tres órdenes de gobierno que no pertenezcan a la carrera policial, serán considerados trabajadores de confianza; por ello, si un trabajador prestó servicios como "Primer Comandante en Vuelo Ala Rotativa", en la Dirección General de Servicios Aéreos de la Procuraduría General de la República, debe ser considerado con tal naturaleza, ya que con base en las actividades desempeñadas de pilotear la aeronave asignada; responsable de la seguridad tanto del equipo como de las personas que traslada, trátese de funcionarios, detenidos o policías, se estima que esas funciones son eminentemente de confianza, dado su carácter confidencial y asociadas a actos vinculados a la seguridad nacional.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.T.117 L (10a.)

Amparo directo 703/2014. Donato Enrique Guerra Franco. 8 de octubre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretaria: Margarita Cornejo Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.

AMPARO EN REVISIÓN 64/2014. 12 DE JUNIO DE 2014. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: LORENZO PALMA HIDALGO. PONENTE: JOSÉ LUIS GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA YOLANDA ASCENCIO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

NOVENO.—Determinación que adopta este tribunal.

Los motivos de disenso expresados por el quejoso revisionista, son sustancialmente fundados en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, por falta de fundamentación y motivación del acto reclamado.

Para una mejor comprensión de lo que se afirma, se considera oportuno narrar brevemente los antecedentes del asunto.

• El veintiséis de enero de dos mil once, el entonces Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, tuvo por recibido el oficio mediante el cual el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en el Distrito Federal, remitió original y duplicado de la averiguación previa número **********, en la que ejerció acción penal y solicitó orden de aprehensión en contra del quejoso ********** y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud; contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud con agravante; portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo; por lo que ordenó su registro con el número de expediente **********; el veintisiete de enero de dos mil once, emitió orden de aprehensión en contra del quejoso ********** y otros sujetos, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de delincuencia organizada y otros ilícitos; el cinco de febrero del año citado, el Juez de la causa, tuvo por recibido el oficio en el cual se puso a disposición del juzgado en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 5 "Oriente" en el Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz, al quejoso ********** y coacusados; ello, en cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra, el veintisiete de enero del año citado, por lo que de conformidad con el artículo 470 del Código Federal de Procedimientos Penales, se reanudó el procedimiento en la causa penal ********** por lo que ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, en turno, para que en auxilio del juzgado recabara las declaraciones preparatorias de los detenidos entre otras cosas; posteriormente, el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, a quien correspondió diligenciar el exhorto aludido, el catorce de febrero de

dos mil once, dictó auto de formal prisión en contra del quejoso ********** y coacusados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fojas 4 a 428, tomo VI y 165 a 179, tomo VII, del cuaderno de pruebas).

• Dicha resolución de catorce de febrero de dos mil once, fue revocada por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, a fin de que se recabaran las correspondientes declaraciones preparatorias de los inculpados y hacerles saber, entre otras cosas, el nombre de las personas que declaran en su contra, como el nombre del testigo protegido, entre otras cosas, por ende, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Veracruz, en cumplimiento a dicha resolución, emitió auto de plazo constitucional el treinta de junio de dos mil once, en contra de ********** y coacusados, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales (fojas 649 a 719 del tomo VII de pruebas).

Del incidente no especificado respecto del traslado del procesado **********:

1) En resolución de dos de enero de dos mil doce, emitida por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, en el incidente relativo a la solicitud de traslado del procesado ********** y coacusado, del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", promovido por su asesor jurídico en la causa penal **********, que se les instruye por los delitos de: delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de cometer delitos contra la salud) y sancionado por el numeral 4, fracción I, incisos a) y b), respectivamente, y el primero con la agravante que establece el precepto 5, fracción II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en relación con el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal y portación de arma de fuego de uso exclusivo para las fuerzas armadas del país, previsto y sancionado por el artículo 83, fracciones II y III, en relación con el arábigo 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; declaró improcedente el traslado solicitado por los incidentistas, al considerarse que la solicitud debía ser resuelta única y exclusivamente por el comisionado del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social; dado que es el único facultado para autorizar la transferencia de un interno de un centro federal a otro, ya que de ordenar el traslado del incidentista y coacu-

sado como se pretende, dicha juzgadora estaría invadiendo las atribuciones exclusivas del comisionado y sobre todo, al desconocer el número, perfil criminológico y expediente jurídico de los internos que se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente" y en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", podría incidirse en la desestabilización del centro de reclusión al que pide su cambio, provocar hacinamiento o peor aún poner en peligro la integridad personal de los propios encausados; en consecuencia, no es competencia de dicho juzgado federal autorizar dicho traslado; también se estableció que no era obstáculo para determinar dicha improcedencia, los acuerdos en que se admitió a trámite el incidente, pues éstos se realizaron con base en un examen preliminar de lo planteado, siendo que el estudio definitivo corresponde a la interlocutoria que resuelve el incidente, por ello, dicho auto admisorio no tiene el alcance jurídico de hacer procedente lo que es contrario a la ley o jurisprudencia (fojas 36 a 41, tomo II, del cuaderno de pruebas).

2) Inconformes los incidentistas ********** y coacusado, en contra de la resolución en la que se les negó el traslado, interpusieron recurso de apelación, que se admitió y tocó conocer al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el que en resolución de treinta de abril de dos mil doce, confirmó la resolución interlocutoria materia del recurso.

3) Inconformes los inculpados con la resolución anterior, promovieron demanda de amparo indirecto que conoció el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, con el número de expediente ********** y se dictó sentencia en la que se negó el amparo; en contra de ese fallo, los impetrantes interpusieron recurso de revisión **********, del índice de este Tribunal Colegiado, el que en sesión de veinticuatro de enero de dos mil trece, revocó la sentencia de amparo indirecto ********** y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que el competente para resolver con plenitud, sobre la materia del incidente no especificado que promovió **********, en el que solicitaron el traslado del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", asentado en Villa Aldama, Veracruz, al Centro de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, es el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en esta entidad (fojas 83 a 93 del tomo XII del cuaderno de pruebas).

4) El tres de abril de dos mil trece, el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, resolvió el incidente no especificado respecto al traslado mencionado, en la causa penal **********, declarándolo infundado (fojas 108 a 114 del tomo XII del cuaderno de pruebas).

5) Inconformes el inculpado ********** y coacusado con dicho fallo, interpusieron recurso de apelación que tocó conocer al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, mismo que en resolución de trece de noviembre de dos mil trece, confirmó la resolución de tres de abril del mismo año, en la que se declaró infundado el incidente no especificado de traslado (fojas 188 a 200 del tomo XIII del cuaderno de pruebas).

6) En contra de la resolución anterior, el inconforme **********, promovió juicio de amparo en contra de la resolución de trece de noviembre del año citado, el cual tocó conocer al Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito, el que en sentencia de amparo indirecto 64/2013, de treinta y uno de enero del año en curso, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (fojas 72 a 98 del proceso).

7) Inconforme el quejoso con el fallo constitucional, promovió el recurso de revisión que se estudia.

Argumentos de la sentencia de amparo que negó el amparo y protección de la Justicia Federal:

1. Conforme al artículo 18 constitucional, al quejoso y otro, se les confió en un centro especial, administrado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, con base en los lineamientos fijados en la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y el manual de seguridad de tales centros, cuyos preceptos fueron transcritos en la resolución que confirmó la negativa de la orden de traslado.

2. Pues el mantener al quejoso y otro, en el Centro de Reclusión Preventiva Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, se protege el bien jurídico fundamental atinente a la seguridad de la sociedad, puesto que presuntivamente interviene en la comisión de delitos de delincuencia organizada que atenta contra el orden social, poniendo en grave riesgo la estabilidad de las instituciones dado el impacto negativo que causan.

Ahora bien, la resolución que negó la orden de traslado de tres de abril de dos mil trece del incidente no especificado respecto al traslado del procesado **********, del Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente" en la causa penal **********, fue confir-

mada por el Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, al conocer del recurso de apelación **********, en sentencia de trece de noviembre de dos mil trece, con los siguientes argumentos:

• Que el proceso que se le instruye al recurrente, en la causa penal **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, es por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de fuego para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

• Por lo que el delito de delincuencia organizada justifica su reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social, con sede en Villa Aldama, Veracruz.

• Conforme al acuerdo 21/2008, que dotó de competencia legal a algunos Juzgados de Distrito que se precisan en dicho acuerdo para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; sin embargo, no establece que los procesados por delincuencia organizada, su prisión preventiva deba ejecutarse en lugar distinto y distante al en que se sigue el proceso; pero tampoco prohibió que los procesados por delincuencia organizada, su prisión preventiva deba ejecutarse en lugar distinto y distante al en que se sigue el proceso.

• Por ende, por el hecho de que el Juez que instruye el proceso, tiene su residencia en Puente Grande, Jalisco, es a donde debe ser trasladado específicamente al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", dado que ha sido confinado a un centro especial, conforme con las Reglas que establecen las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y manual de seguridad de tales centros.

• Al mantenerse al procesado recluido en el Centro Federal, con sede en Villa Aldama, Veracruz, protege el bien jurídico fundamental de seguridad de la sociedad, pues quien presuntivamente interviene en la comisión del delito de delincuencia organizada, atenta en grado sumo contra el orden social, poniendo en riesgo la estabilidad de las instituciones, dado el impacto negativo que causan.

• Que las deficiencias que argumenta la defensa del procesado en el sentido de que carece de condiciones de higiene para la salud por la sobrepoblación existente, deben reclamarse ante la autoridad administrativa correspondiente,

pues no es el juzgador quien, en caso de existir esos inconvenientes, deba subsanarlos.

• No obsta a lo anterior, que no obren en autos informes sobre el particular.

• En el delito de delincuencia organizada, sólo será dable al juzgador, en esos casos, ordenar cambios o traslados entre los centros de máxima seguridad, cuando exista una causa que legal y materialmente lo amerite, lo que no ocurrió en la especie.

• Sin que obste que el traslado pudiera facilitar el desahogo de pruebas y diligencias en el proceso, pues ello tampoco es una razón suficiente para acceder a la transferencia que se solicita, ya que se cuenta con los medios de comunicación procesal establecidos en la legislación adjetiva aplicable y con la tecnología acorde, con lo que sin contratiempos, se supera la distancia, lográndose el pleno ejercicio del derecho fundamental de defensa, al quedar ampliamente salvaguardado, cumpliendo así con el principio procesal de inmediación.

• No existe violación a los derechos humanos del procesado, tutelados por la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Y el que no esté demostrada la existencia de una organización delictiva a la que estuviera adherido el inculpado, es cuestión de fondo que no forma parte de la litis.

• Y la constancia de perfil criminológico de alta peligrosidad, no es indispensable para resolver en torno al traslado, porque tratándose del delito de delincuencia organizada, basta que el sujeto activo sea probable responsable en su comisión, como acontece.

• El procesado se encuentra a disposición de un Juez Federal en Jalisco, para los efectos del proceso, por lo que no es válido disponer el traslado de una cárcel a otra, para que el inculpado esté presente en todas las diligencias relativas a su proceso, ya que como se dijo, se cuenta con medios legales (y tecnológicos) que superan esos inconvenientes sin dejarlo en estado de indefensión.

• Tampoco se atenta contra el principio pro persona, por el hecho de que no se resolviera favorablemente su solicitud.

En suma, es ostensible que resulta incorrecta la motivación expresada por la autoridad responsable y avalada por el tribunal de amparo, de modo que en lugar de negar el amparo a **********, debe otorgársele el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la autoridad responsable, emita una resolución que cumpla con los principios de la debida y adecuada fundamentación y motivación.

En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, el cual establece cuáles son los requisitos de forma, para la emisión de ese tipo de actos que deben observarse por las autoridades responsables, en especial, la obligación atinente a fundar y motivar todo acto de autoridad que afecte la esfera de derechos de los gobernados; so pena de decretar su ilegalidad del acto reclamado si se incurre en una omisión de ese tipo.

Por lo que el tribunal de amparo, parte de una premisa equivocada al manifestar que el acto reclamado cumplió con dichos requisitos.

A tal conclusión se arriba, al advertir que la negativa del traslado podría lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada previsto en el artículo 20 de la Constitución Federal, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso de aquel en que se sigue la causa penal y que conforme al artículo 18 de la propia Constitución, el centro donde solicita su traslado tiene las características especiales para los procesados de delitos de delincuencia organizada.

Toda vez que los fundamentos que utiliza la responsable para sustentar su fallo, como son el Acuerdo General 21/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, trata de la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de distintos delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; como la propia responsable lo aduce, el objeto de dicho acuerdo, es precisar los alcances del párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, fijando la competencia de los Jueces de Distrito, cuando se actualice una hipótesis excepcional a la competencia territorial prevista por dicho precepto; sin embargo, ello no implica que deba negarse el traslado del inculpado, a un diverso centro de reclusión en el que se encuentra internado, puesto que ello no dirime lo alegado por el quejoso en cuanto a que refiere que sufre de deficiencias de higiene y salud y que requiere estar presente en todas las diligencias y estar en contacto directo con su defensor de oficio nombrado en el juzgado donde se lleva su proceso.

En otro aspecto, el argumento de la responsable relativo a que al tratarse de un delito de delincuencia organizada, debe mantenerse al hoy quejoso en un centro de reclusión preventivo especial para proteger la seguridad de la sociedad, no es razón para hacer nugatoria su petición, dado que pretende su traslado al Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente", con sede en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, que también es un centro especial considerado de máxima seguridad, por lo que se garantiza lo dispuesto por el artículo 18 constitucional de que se trate de un centro con medidas especiales.

Independientemente de lo anterior, el tribunal responsable también considera que, de hacerse el aludido traslado, podría provocar hacinamiento y poner en riesgo la propia integridad física del solicitante del traslado, dado que refiere que no existen informes sobre el particular que sustenten su afirmación; que al tratarse del delito de delincuencia organizada, sólo le será dable al juzgador ordenar su traslado en el centro de máxima seguridad, cuando exista una causa que legal y materialmente lo amerite, lo que aduce no ocurre.

Igualmente señala la ordenadora que con los medios de comunicación procesal establecidos en la legislación adjetiva aplicable y con la tecnología acorde, quedó salvaguardado su derecho fundamental de defensa, cumpliendo con el principio procesal de inmediación.

Empero, dichos razonamientos lógicos jurídicos para negar el traslado del quejoso no cumplen con los requisitos formales de todo acto de autoridad que exige el artículo 16 constitucional, relativos a la adecuada y legal fundamentación y motivación, por lo que se vulneraron los derechos fundamentales del quejoso a una adecuada defensa.

Pues lo cierto es que el artículo 18 constitucional expresamente dispone que para la prisión preventiva se destinarán centros especiales. Por tanto, el Centro Federal número Dos "Puente Grande", ubicado en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, Jalisco, cumple como hecho notorio, con esa característica, al tratarse de un centro de máxima seguridad.

Además, como lo dispone la norma constitucional citada, en tratándose de delincuencia organizada, no se restringe el derecho del inculpado para tener acceso a su defensor, entonces, tanto el principio procesal de la inmediación como el de la adecuada defensa, se salvaguardan en la medida en que el imputado tiene contacto directo e inmediato con el Juez de su causa y con su defensor.

Y, no habiendo alguna otra disposición constitucional o legal que justifique que el inculpado se encuentre recluido en un centro de readaptación social federal, distinto al en que se ubica otro (Cefereso Dos), en el que se sigue el proceso que se instruye; el tribunal responsable deberá proveer sobre la procedencia del traslado solicitado, debidamente fundado y motivado, excluyendo argumentación ajena a la que legalmente es aplicable (verbigracia Acuerdos del Consejo sobre instrumentación competencial o medidas administrativas para diligencias judiciales vía videoconferencias o cuestiones de hecho no probadas, relativas a hacinamiento o sobrepoblación).

Así, en ese mismo tenor se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, interpretó el aspecto relativo a la fundamentación y motivación y plasmó su criterio, en la jurisprudencia número 204, visible en la página 166, Tomo VI, materia Común del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, cuyos rubro y texto son:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Conclusión:

En atención a que los agravios resultan fundados, debe revocarse la sentencia de amparo recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los siguientes efectos:

1. Que el Tribunal Unitario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada;

2. En su lugar pronuncie otra; y,

3. En la que de acuerdo con los lineamientos puntualizados en esta ejecutoria, aparte de resolver el recurso de apelación hecho valer por el ahora recurrente, realice un estudio legalmente fundado y motivado, en relación con la materia de apelación.

Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 1o., fracción I, 79, fracción III, inciso b), 81, fracción I, inciso e), 82, 84, 86, 92, 93, fracciones V y VI, y 94 de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—La Justicia de la Unión ampara y protege para los efectos que se precisan en esta ejecutoria a **********, contra el acto reclamado al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, consistente en la resolución que emitió el trece de noviembre de dos mil trece, en el toca penal **********.

Notifíquese; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos a su lugar de procedencia; y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Óscar Vázquez Marín, quien funge como presidente y José Luis González, encargado del engrose, siendo disidente de la mayoría el Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo, quien formula voto particular.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo: Con todo el respeto que merecen mis compañeros Magistrados que integran la mayoría que autorizó el presente fallo, disiento del sentido en la que se revoca la resolución recurrida y se concede el amparo para efectos al quejoso, toda vez que considero que los agravios debieron considerarse infundados, confirmarse la sentencia y negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal a **********, contra el acto reclamado al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, por las siguientes consideraciones: Toda vez que los motivos de disenso expresados por el quejoso revisionista son infundados, en suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, al tenor siguiente: Toda vez que los procesados o sentenciados por el delito de delincuencia organizada, dada la naturaleza del propio antijurídico y del bien que éste tutela (la soberanía del Estado), tienen derechos humanos diversos, tanto es así que precisamente, por disposición de la Carta Magna, no gozan de la garantía consistente en compurgar sus penas en el centro de reclusión más cercano a su domicilio y lo de permanecer en uno del orden común, sino que, su prisión preventiva y ejecución de sanciones, ha de verificarse en centros especiales de máxima

seguridad; de ahí que la sola precisión de derechos fundamentales relacionado con personas procesadas o sentenciadas por delitos de delincuencia organizada, como en la especie acontece, genera la presunción de que éstas, por el hecho de atentar contra la soberanía estatal revelan una peligrosidad mayor, por lo que su reclusión requiere centros especiales.—Luego, como lo precisó el tribunal constitucional, al inconforme en la causa penal **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, se le dictó auto de formal prisión, como probable responsable en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, previsto en el artículo 2, fracción I (hipótesis de delitos contra la salud) y sancionado en el numeral 4, fracción I, incisos a) y b), respectivamente, además al primero con la agravante a que se refiere el artículo 5, fracción II (que utilice un menor de edad), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y portación de armas de fuego para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, tipificado y castigado por el artículo 83, fracciones II y III, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.—Por ende, como correctamente lo establece el tribunal de amparo, el delito de delincuencia organizada, atribuido al enjuiciado, justifica jurídicamente su reclusión preventiva en una institución carcelaria especial, como lo es el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, con fundamento en los párrafos primero y último del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—Por lo anterior, no es suficiente el argumento de la defensa, al solicitar su traslado, en el sentido de que en el lugar en que actualmente se halla, carece de condiciones de higiene y salud, por la sobrepoblación existente; aspectos que, como lo establece el órgano de control constitucional, no se encuentran apoyadas en ningún documento que haga establecer esa necesidad, estando ante la presencia de aseveraciones personales y subjetivas carentes de fundamentación y motivación; por lo que se vulnera el principio de impartición de justicia pronta y expedita establecida en el artículo 17 constitucional; pues el acto reclamado, negativa del traslado, como lo señala el tribunal de amparo, reunió los requisitos de fundamentación y motivación, al establecer las razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para negar dicho traslado, como son, a saber: 1. Conforme al artículo 18 constitucional, al quejoso y otro, se les confió en un centro especial, administrado por autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a través del órgano desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con base en los lineamientos fijados en la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como el Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y el Manual de Seguridad de tales centros, cuyos preceptos fueron transcritos en la resolución que confirmó la negativa de la orden de traslado. 2. Pues el mantener al quejoso y otro, en el Centro de Reclusión Preventiva Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, se protege el bien jurídico fundamental, atinente a la seguridad de la sociedad, puesto que presuntivamente interviene en la comisión de delitos de delincuencia organizada, que atenta contra el orden social, poniendo en grave riesgo la estabilidad de las instituciones, dado el impacto negativo que causan.—Ahora, el hecho de que se encuentre recluido preventivamente en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, muy distante del juzgado en que se lleva el proceso, Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, no implica que no tenga una adecuada defensa, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el Juez del proceso penal puede no coincidir con la jurisdicción en la cual se encuentra recluido el quejoso. Es aplicable, en lo con-

ducente, la contradicción de tesis 187/2011,[4] que es del rubro: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO.".—Además, en el punto tercero del Acuerdo General 21/2008, se establece: "TERCERO. El Juez de Distrito que reciba una consignación, con o sin detenido, en la que se ejercite la acción penal por el delito o delitos cometidos fuera de su jurisdicción, y se actualice la excepción competencial mencionada en el párrafo que antecede, es el competente para conocer y resolver el asunto, con independencia, en su caso, del centro federal de readaptación social de máxima seguridad donde se encuentre recluido el detenido. Bajo ningún supuesto podrá declinar su competencia el Juez de Distrito ante quien se lleve el ejercicio de la acción penal, cuando se actualice la excepción competencial invocada, sea cual fuere la etapa del procedimiento penal en que se encuentre el asunto. Cuando el representante social estime que han desaparecido las razones que lo llevaron a consignar a un reo ante un Juez cuya sede se encuentre en una cárcel de máxima seguridad, bastará su manifestación en ese sentido para que produzca los efectos legales conducentes, sin que sea necesario exigir la demostración de tal aseveración.".—Asimismo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 11/2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, señaló: "... XXXIII. Los Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales del Primero y Segundo Circuito, los Penales del Tercer Circuito y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales ...".—Si bien este último acuerdo no hizo referencia a la imposibilidad que tienen los Jueces de Distrito para declinar su competencia, también es cierto que no es necesario porque tal prohibición ahora se encuentra en la ley.—Finalmente, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, señala: "... III. Tercer Circuito: Estado de Jalisco.—III. Tercer Circuito: Los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan y Puente Grande, ejercerán jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por la propia entidad federativa. ... XXXIII. Los Jueces de Distrito de Procesos Penales Federales del Primero, Segundo y Tercer Circuito, y los Mixtos, así como los de Procesos Penales Federales que en lo futuro se lleguen a crear en aquellos lugares donde exista un centro federal de readaptación social de máxima seguridad, ejercerán jurisdicción en toda la República para conocer de aquellos asuntos que se encuentren en la hipótesis del artículo 10, párrafo tercero, del Código Federal de Procedimientos Penales.".—De lo anterior

[4] Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constante en la jurisprudencia número 1a./J. 118/2011 (9a.), visible en la foja 2183 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 3, diciembre de 2011.

podemos concluir que el agente del Ministerio Público decidió consignar la averiguación previa ante un Juez de Distrito en Materia Penal en turno en el Estado de Jalisco, no obstante que los hechos ocurrieron en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, ello no implica que al inculpado se le prive de su derecho a una adecuada defensa, ya que cuenta con esa facultad la representación social, dado el tipo de delito que se trata de delincuencia organizada.—Además, contrario a lo que sostiene el recurrente, en el pliego de consignación en el que se ejercitó acción penal en contra de ********** y otro, se especificaron las particularidades del caso, bastando que se considerara su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo para las fuerzas armadas del país, para actualizarse la hipótesis de competencia excepcional prevista en el párrafo tercero del artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, al Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, Municipio de Juanacatlán; por ende, el que conociera un Juez de distinta jurisdicción al centro de reclusión en que se encuentra el quejoso, no se vulnera su derecho a una defensa adecuada.—Por lo anterior, lo que sostiene en esta ejecutoria no es contrario a lo establecido en la tesis que cita el recurrente en sus agravios.—También son infundados los agravios hechos valer dado que correctamente el tribunal de amparo determinó que actualmente se cuenta con los medios de comunicación procesal establecidos en la legislación adjetiva aplicable y con la tecnología acorde, con lo que sin contratiempos, se supera la distancia, lográndose el pleno ejercicio del derecho fundamental de defensa, al quedar ampliamente salvaguardado. Asimismo, lo anterior conlleva a que se cumpla con la celeridad del proceso y con la defensa plena que señala el quejoso; además, la figura jurídica del exhorto, de ninguna manera obstaculiza el proceso judicial, atendiendo precisamente a los medios de comunicación con que actualmente se cuenta y que facilitan su envío y desahogo.—Además, como lo establece el tribunal de amparo debido a los medios de comunicación con que se cuenta actualmente, se garantiza una buena y pronta administración de justicia y con ello se cumplen los requisitos de defensa adecuada, con independencia de que se encuentre en un lugar diverso a donde se lleva el juicio; destacándose, como ya se dijo, que las medidas especiales por las que se internó al quejoso en el lugar donde actualmente se encuentra, fue porque uno de los delitos que se le atribuyen, es el de delincuencia organizada y no por la peligrosidad que pudiera presentar.—Así las cosas, el quejoso no puede hacer a un lado los avances de la ciencia, los cuales son señalados en el Acuerdo General 74/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que pone a disposición de los órganos jurisdiccionales el uso de la videoconferencia como un medio o instrumento útil para el desahogo de diligencias judiciales.—Acuerdo que define la figura de la videoconferencia como: "un medio de comunicación que tiene por objeto reproducir imágenes y sonidos en tiempo real a través de la distancia, utilizando como vía las conexiones a través de nodos digitales dedicados a esos fines, en otras palabras, la videoconferencia no es otra cosa más que un sistema de televisión cerrado de doble vía que transmite y recibe en ambos sentidos imágenes y sonidos al mismo tiempo.".—Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal señala que la videoconferencia es un medio de comunicación que ofrece las siguientes ventajas: Dentro de las principales que ofrece se encuentra el eficientar el tiempo empleado en la tramitación de las causas penales o juicios en general, la reducción de los gastos en cuanto a erogación de los costos del desplazamiento de las partes de un punto a otro, evitar el traslado de inculpados con un perfil criminológico alto, examen de testigos, peritos o terceros que se encuentren fuera del lugar del juicio, permitiendo a su vez que surta su efecto el principio de inmediación judicial de la prueba, toda vez que a través de este medio el Juez del

proceso puede percatarse de los pormenores de la diligencia como el comportamiento procesal de las partes, gesticulaciones, etc., y todos aquellos detalles que en su momento le permitan emitir una sentencia con el sustento de haber presenciado el acto de prueba, entre otras ventajas.—Por ende, no tiene razón al aducir que con la utilización de los medios tecnológicos se priva de una adecuada defensa; además, de que la utilización de estos medios no le restringen la privacidad que pudiera tener con su defensor, dado que existen otros medios de comunicación en que podría tener la privacidad que menciona.—También es infundado, como correctamente lo estableció el tribunal de amparo, dado que no se ve afectado el derecho de defensa del quejoso, ni sus prerrogativas judiciales que prevé el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que dice: "Artículo 8. Garantías judiciales: 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.—2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) Comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) Concesión al inculpado de tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección o de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable; y, h) Derecho de recurrir el fallo ante Juez o tribunal superior.—3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.—4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.—5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia.".—De lo transcrito, como correctamente lo estableció el órgano de control constitucional, no se advierte algún derecho que le impida al quejoso el seguir manteniéndose interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, en el que se encuentra, además de que esas prerrogativas judiciales en todo caso se deberán satisfacer dentro del proceso penal que se le instruye, dado que, ello no implica que se le dejen de otorgar los medios adecuados para la preparación de su defensa.—Por ende, como lo determinó el tribunal de amparo, no se vulneraron los derechos humanos del quejoso, previstos en la Carta Magna, ni los establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.—También son infundados, toda vez que esas circunstancias personales del inculpado, no demuestran que deba ser favorable su solicitud de traslado, dado que como se dijo con anterioridad no se demostró con pruebas fehacientes las razones lógico jurídicas para ordenar su traslado, dado que con los medios tecnológicos podrían desahogarse las diligencias necesarias para desarrollar su derecho de defensa.—Asimismo, son infundados, toda vez que al agente del Ministerio Público de la Federación, no corres-

pondía demostrar que el inculpado generaría situaciones de peligro, dado que basta con que se tratara de un delito de delincuencia organizada, para que éste estuviera recluido en un centro de máxima seguridad, como en el que se encuentra.—Finalmente, también son infundados, dado que correctamente en la sentencia de amparo se estableció que con la negativa de ordenar el traslado solicitado, no se vulneraron los derechos fundamentales y principios previstos en la Constitución, en virtud de que su cumplimiento no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales, dejen de observar las restricciones que prevé la Norma Fundamental, por lo que se cumplió con los requisitos de fundamentación y motivación necesarios para no ordenar dicho traslado.—En conclusión, los agravios debieron considerarse infundados, confirmarse la sentencia de amparo recurrida y negarse el amparo y la protección de la Justicia Federal a **********, contra el acto reclamado al Tercer Tribunal Unitario del Tercer Circuito, consistente en la resolución que emitió el trece de noviembre de dos mil trece, en el toca penal **********.

En términos de lo previsto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en ese supuesto normativo.

Nota: Los Acuerdos Generales del Consejo de la Judicatura Federal 21/2008, por el que se dota de competencia a los Juzgados de Distrito que se precisan para conocer de delitos cometidos en lugar distinto al de su jurisdicción, por razones de seguridad en las prisiones; 11/2011, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, 74/2008, que pone a disposición de los órganos jurisdiccionales el uso de la videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVIII, agosto de 2008, página 1371; Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1331; Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559; y, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 1105, respectivamente.

Este voto se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.

La negativa vía incidental del Juez de

proceso a la solicitud de traslado del procesado de un Centro Federal de Readaptación Social a aquel en donde se le instruye la causa por la comisión del delito de delincuencia organizada, debe cumplir con los principios de debida y adecuada fundamentación y motivación, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que podría lesionar directamente otros derechos como el de defensa adecuada, previsto en el artículo 20 constitucional, en tanto que el procesado se encontraría físicamente en un lugar diverso al en que se sigue la causa penal. En efecto, si el artículo 18, párrafo noveno, de la Constitución Federal dispone que para la reclusión preventiva en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, es evidente que si el diverso donde solicita el traslado cumple –como hecho notorio– con esa característica, su concesión salvaguarda el derecho del procesado a la adecuada defensa y el principio procesal de inmediación, conforme al artículo 20 constitucional, en la medida en que el imputado tiene contacto directo e inmediato con el Juez de la causa y su defensor. Por tanto, no habiendo alguna disposición constitucional o legal que justifique que el inculpado siga recluido en un centro de internamiento distinto al del lugar en donde se sigue el proceso que se le instruye, debe procederse a su traslado, excluyendo argumentaciones ajenas a las legalmente aplicables, como los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal sobre la instrumentación competencial o medidas administrativas para las diligencias judiciales vía videoconferencias, así como cuestiones de hecho no probadas en el incidente respectivo, relativas al hacinamiento o sobrepoblación planteadas para negar el traslado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P.63 P (10a.)

Amparo en revisión 64/2014. 12 de junio de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Lorenzo Palma Hidalgo. Ponente: José Luis González. Secretaria: María Yolanda Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE. La importación de bienes con

trato arancelario preferencial se encuentra regulada en los artículos 401 y 501 a 506 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y, específicamente, su artículo 506, punto 1, dispone que para determinar si un bien que se importe al territorio de una Parte proveniente del territorio de otra califica como originario, puede verificarse el origen mediante los siguientes procedimientos: a) cuestionarios escritos dirigidos a los exportadores o a los productores en territorio de otra Parte; b) visitas a las instalaciones de un exportador o de un productor en territorio de otra Parte, con el propósito de examinar los registros a los que se refiere el artículo 505 (a), e inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien; o, c) otros procedimientos que acuerden las Partes. En este contexto, de la interpretación conjunta de las disposiciones citadas, se advierte que la obligación de soportar documentalmente el origen de un bien sólo se actualiza tratándose del procedimiento de verificación a que se refiere el artículo 506, punto 1, inciso b), señalado, consistente en la visita a las instalaciones de un exportador o productor, mas no así cuando se haya elegido el sistema de cuestionarios escritos, pues dicho precepto dispone textualmente que la visita indicada tiene como propósito examinar los registros a los que se refiere el artículo 505 (a) del propio tratado, así como inspeccionar las instalaciones que se utilicen en la producción del bien, situación que no prevé el diverso inciso a), referente al desahogo de cuestionarios escritos, pues no considera requerir el envío de documentos para corroborar la veracidad de las respuestas del exportador o productor, con la correlativa obligación de éste de anexarlos, además de que el artículo 505 (a) aludido prevé que las partes dispondrán que el exportador o productor en su territorio que llene y firme un certificado de origen, deberá conservar en su territorio durante un periodo de cinco años después de la fecha de firma del certificado o por un plazo mayor que la Parte determine, todos los registros relativos al origen de un bien para el cual se solicitó el trato arancelario preferencial, lo que atiende a la finalidad de soportar documentalmente el origen de un bien en caso de que se instaure el procedimiento de verificación, pero únicamente en la hipótesis de la visita a las instalaciones del exportador o productor, por así señalarlo expresamente el propio instrumento internacional. Cabe recordar que en términos de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, para interpretar las disposiciones de un tratado, como regla general, debe, en principio, acudirse al sentido literal de las palabras utilizadas por las partes contratantes al redactar el documento final y, en todo caso, deberá adoptarse la conclusión que sea lógica con el contexto propio del tratado y acorde con el objeto o fin que se tuvo con su celebración.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.98 A (10a.)

Amparo directo 731/2013. Ecoval Dairy Trade Incorporated (antes M.E. Franks, Inc.). 14 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.

Esta tesis se publicó el viernes 7 de noviembre de 2014 a las 9:51 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEXTA PARTE
NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES

SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO GENERAL 36/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL; Y QUE REFORMA Y ADICIONA DISPOSICIONES DE DIVERSOS ACUERDOS GENERALES.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del mismo, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

CUARTO. Uno de los paradigmas más importantes del nuevo sistema procesal penal es el principio de inmediación, el cual consiste en la presencia permanente del juzgador en el desahogo de las audiencias, para lo cual

la oralidad resulta fundamental, ya que a través de esta herramienta, el órgano jurisdiccional se allega de los elementos de valoración para emitir la sentencia correspondiente, sin que pueda tomar en consideración, por regla general, probanzas que no han sido desahogadas en el plenario.

Por ello, el nuevo sistema reclama la adopción de otros esquemas de gestión judicial, propios de la forma de intervención del juzgador en el proceso penal.

El presente acuerdo regula un nuevo diseño administrativo-judicial, basado en la creación de Centros de Justicia Penal, los cuales estarían conformados en dos vertientes, en específico la jurisdiccional y la administrativa. La primera estaría integrada por el Juez de Control, el Tribunal de Enjuiciamiento, el Tribunal de Alzada y el Juez de Ejecución; y la segunda por el Administrador y el personal que le esté adscrito.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO PRIMERO. Se expide el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. El objeto del presente Acuerdo es establecer las disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los Centros de Justicia Penal, en los cuales se integran y articulan los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, necesarios para tramitar los procesos del sistema penal acusatorio previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administración del Centro: la oficina del Administrador del Centro y las áreas especializadas que de él dependen;

II. Administrador: Administrador del Centro de Justicia Penal;

III. Áreas administrativas: Las que determine el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

IV. Centro: Centro de Justicia Penal;

V. Código: Código Nacional de Procedimientos Penales;

VI. Comisiones permanentes: las que determine el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

VII. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

VIII. Juez de Control: Juez de Distrito competente para intervenir desde el principio del procedimiento hasta el dictado de apertura a juicio;

IX. Juez de Ejecución: Juez de Distrito especializado en ejecución de sanciones penales;

X. Ley: Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

XI. Tribunal de Enjuiciamiento: Juez de Distrito que interviene después del auto de apertura a juicio oral, hasta el dictado y explicación de la sentencia;

XII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito que resuelve la apelación;

XIII. Órganos jurisdiccionales: Jueces de Control y de Ejecución, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada; y

XIV. Pleno: Pleno del Consejo.

Artículo 3. La interpretación del presente Acuerdo corresponde al Pleno y a las Comisiones permanentes, en el ámbito de su competencia.

TÍTULO SEGUNDO
DISPOSICIONES ORGÁNICAS

CAPÍTULO PRIMERO
CENTROS DE JUSTICIA PENAL

Artículo 4. Los Centros se integran por Jueces de Control; Tribunales de Enjuiciamiento, Tribunales de Alzada y Jueces de Ejecución; así como un

Administrador, y el personal que determine el Consejo de conformidad con el Presupuesto del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 5. Los órganos jurisdiccionales tendrán a su cargo a los servidores públicos que le estén directamente adscritos. Lo mismo sucederá con el Administrador respecto de su personal.

CAPÍTULO SEGUNDO
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO

Artículo 6. Al frente de cada Administración del Centro estará un Administrador, quien se auxiliará para el ejercicio de sus atribuciones de las áreas especializadas que se determinen en el manual correspondiente de los Centros.

El Administrador estará adscrito a la Comisión de Administración y será el responsable de la administración del Centro.

Artículo 7. Los requisitos para ser Administrador son los siguientes:

I. Contar con título y cédula profesional de licenciatura expedidos por autoridad competente, y acreditar los conocimientos necesarios mediante los exámenes que determine el Consejo;

II. Acreditar cuando menos cinco años de experiencia profesional;

III. Ser mayor de treinta años al momento de la designación;

IV. Estar en pleno goce de derechos civiles y políticos;

V. Gozar de buena reputación; y

VI. No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.

Artículo 8. Los Administradores de los Centros serán designados por la Comisión de Administración, de entre los finalistas del procedimiento de selección que al efecto se convoque o de la lista de reservistas.

Los procedimientos de selección serán internos o abiertos, según lo determine el Pleno en la convocatoria respectiva.

El nombramiento inicial del Administrador será de tres o seis meses, según lo determine la Comisión de Administración.

Antes del vencimiento del nombramiento inicial por tres meses, la Dirección General de Recursos Humanos pondrá a consideración de la Comisión de Administración la prórroga por tres meses más, o bien, si se otorgó por seis meses la propuesta será por tiempo indefinido.

La terminación anticipada del nombramiento, por cualquier causa, será resuelta por la Comisión de Administración a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, y de ser procedente será notificada por ésta.

Artículo 9. El Administrador propondrá a la Comisión de Administración, por conducto de la Dirección General de Recursos Humanos, al candidato a ocupar un puesto vacante dependiente del mismo, previo desahogo del procedimiento de selección que al efecto se convoque o de entre la lista de reservistas, según lo determine la Comisión de Administración.

Artículo 10. El nombramiento inicial del personal de confianza dependiente del Administrador, será de tres o seis meses, salvo en los siguientes casos:

I. Que el nombramiento se expida a favor del servidor público que cubra algún tipo de licencia u ocupe una plaza temporal. En este caso el nombramiento no podrá ser menor de siete días;

II. Que la propuesta de nombramiento contenga características especiales, debidamente fundadas y motivadas, mismas que deberán ser informadas por el Administrador, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Recursos Humanos; y

III. Que el servidor público con antigüedad en el puesto de seis meses, cause baja por renuncia o por fin de nombramiento y el Administrador le extienda nuevo nombramiento en el mismo puesto. En este caso se elaborará de forma indefinida, siempre y cuando no exista interrupción entre ambos nombramientos.

El Administrador propondrá a la Comisión de Administración la temporalidad inicial del nombramiento, a efecto de evaluar el desempeño laboral del servidor público.

Artículo 11. La Dirección General de Recursos Humanos pondrá a consideración de la Comisión de Administración, la prórroga de nombramiento del personal dependiente del Administrador, por tiempo indefinido cuando:

I. El Administrador, previo al término del nombramiento inicial, así lo solicite, o

II. Transcurran seis meses continuos de nombramiento en el mismo puesto y el titular respectivo solicite su renovación, aun cuando dicha petición sea por tiempo determinado.

El Administrador podrá determinar la terminación anticipada del nombramiento, misma que deberá notificar al interesado, y dar aviso de inmediato a la Dirección General de Recursos Humanos, para que someta a la consideración de la Comisión de Administración la realización de un nuevo procedimiento de selección o la utilización de la lista de reservistas.

Artículo 12. Las convocatorias de los procedimientos de selección que se emitan deberán contener:

I. Las plazas sujetas al procedimiento de selección y lugar de adscripción;

II. Lugar de inscripción;

III. El perfil que debe reunir la persona que ocupe el puesto;

IV. Los requisitos que deban cumplir los aspirantes y la forma de acreditarlos;

V. Lugar, día y hora en que deben presentarse los candidatos;

VI. El responsable del desahogo del procedimiento de selección;

VII. Las etapas del procedimiento de selección, la forma de su desahogo y las fechas para ello;

VIII. La atribución de la Dirección General de Recursos Humanos de verificar la autenticidad y veracidad de los documentos e información que proporcionen los aspirantes;

IX. La prohibición de los aspirantes de realizar gestiones personales relativas al desahogo del procedimiento; y

X. Los demás aspectos que determine el Pleno o la Comisión de Administración.

Artículo 13. Si el procedimiento es abierto la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en un periódico de mayor circulación nacional, en otro de la entidad federativa en que se realice el procedimiento, y en la página de internet del Consejo. En caso de que sea interno sólo en este último medio.

Artículo 14. Corresponde a la Dirección General de Recursos Humanos:

I. Proponer a la Comisión de Administración que se lleve a cabo un procedimiento de selección o se haga uso de la lista de reservistas, en cuanto tenga conocimiento de una vacante de Administrador o del personal que le esté adscrito;

II. Elaborar las convocatorias de los procedimientos de selección;

III. El desahogo de los procedimientos de selección;

IV. Integrar la lista de reservistas; y

V. Las demás que determine el Pleno y la Comisión de Administración.

Artículo 15. La lista de reservistas se integrará por los finalistas en los procedimientos de selección que no hayan sido designados.

La vigencia de cada uno de los registros en la lista será de tres años, sin perjuicio de que la Dirección General de Recursos Humanos, verifique que los integrantes de la lista siguen cumpliendo con los requisitos para ocupar el cargo, antes de que la misma se presente a la consideración de la Comisión de Administración o del Administrador.

La incorporación en la lista de reservistas será voluntaria y no generará derecho alguno a los integrantes de la misma.

Artículo 16. Corresponde al Administrador:

I. Coordinar y supervisar las acciones de soporte jurídico y los procesos complementarios siguientes:

a) Atención al público;

b) Acreditación de periodistas y medios de comunicación, en términos de las disposiciones aplicables;

c) Recepción, registro y turno de correspondencia y asuntos;

d) Programación y gestión óptima de audiencias; y

e) Notificaciones;

II. Coordinar la gestión logística y los servicios de información necesarios para llevar a cabo el proceso penal;

III. Participar en las acciones de coordinación con las autoridades competentes, y con la intervención de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, para el traslado y presentación de personas, en términos de las disposiciones aplicables y conforme a las medidas de seguridad que correspondan;

IV. Brindar apoyo a los órganos jurisdiccionales del Centro en la operación, mantenimiento y supervisión de sistemas administrativos, financieros e informáticos, así como en la gestión de recursos humanos, materiales y servicios generales;

V. Servir de enlace entre los órganos jurisdiccionales del Centro y las áreas administrativas del Consejo, en la gestión y desahogo de trámites administrativos, estadísticos e informáticos;

VI. Apoyar a los órganos jurisdiccionales en la operación, mantenimiento y supervisión de los sistemas informáticos de gestión judicial;

VII. Proponer la designación de su personal en los términos previstos en este Acuerdo;

VIII. Revisar los proyectos de autos elaborados por el personal del área especializada correspondiente, en apoyo de los órganos jurisdiccionales; a efecto de que dé cuenta con ellos a los titulares respectivos, para que éstos en ejercicio pleno de su autonomía jurisdiccional, determinen lo pertinente; y

IX. Las demás que determinen el Pleno o las Comisiones permanentes.

Para el ejercicio de sus atribuciones el Administrador podrá auxiliarse del personal que le esté adscrito, en términos del manual correspondiente de los Centros.

En el ejercicio de las atribuciones a que se refieren las fracciones IV y V de este artículo, el Administrador deberá observar la normatividad, procedimien-

tos, manuales, lineamientos, directrices e instrucciones, tanto generales como particulares y demás disposiciones aplicables a las funciones de los Coordinadores Técnicos Administrativos.

Artículo 17. Las ausencias, temporales y definitivas, de los Administradores serán suplidas por los titulares de las áreas especializadas que establezca el manual correspondiente de los Centros, en el orden que en el mismo se señale. Esto último también se observará respecto de las ausencias de dichos titulares.

Artículo 18. En el ámbito de su competencia, las áreas administrativas del Consejo brindarán asesoría y apoyo al Administrador, para el debido ejercicio de sus atribuciones.

CAPÍTULO TERCERO
JUECES Y TRIBUNALES

Artículo 19. En términos de lo dispuesto en el Código, son competentes para conocer de los procedimientos penales federales regulados en el mismo, los Jueces de Control y los tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada, adscritos a los Centros, dentro de su jurisdicción territorial conforme a lo previsto en este Acuerdo y en el de su creación, y en los demás que expida el Consejo.

Además de lo dispuesto por el artículo 22 de dicho Código, los Jueces de Control y los tribunales de Enjuiciamiento serán competentes para conocer de procedimientos penales fuera de su jurisdicción territorial, en aquellos casos en que la Comisión de Adscripción lo determine.

Los Jueces de Ejecución serán competentes para conocer de la ejecución de sanciones penales impuestas en los procedimientos penales que se tramiten y resuelvan en el Centro de su adscripción, conforme a las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que lo previsto en el párrafo anterior, también será observable respecto de dichos juzgadores.

Artículo 20. Los acuerdos generales mediante los cuales se creen los Centros deberán contener:

I. Denominación de los órganos jurisdiccionales;

II. Domicilio de los órganos jurisdiccionales;

III. Jurisdicción territorial de los órganos jurisdiccionales;

IV. Competencia material;

V. Guardias y horarios de los órganos jurisdiccionales;

VI. Reglas de sustitución de juzgadores;

VII. Reglas para vacaciones;

VIII. Sistema de turnos; y

IX. Los demás aspectos necesarios para la operación y funcionamiento del Centro que determine el Pleno.

TÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES DE FUNCIONAMIENTO

CAPÍTULO PRIMERO
OFICIALÍA DE PARTES

Artículo 21. Los Centros contarán con una oficialía de partes dependiente del Administrador, misma que se encargará de la recepción, registro y turno, entre todos los órganos jurisdiccionales a los que preste servicio, de la correspondencia y asuntos que se presenten.

El funcionamiento de las oficialías de partes se regirá por el manual correspondiente de los Centros.

En todo caso el Administrador deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Centro, dando aviso de las mismas a la Comisión de Administración.

Artículo 22. El sistema de turnos deberá procurar una distribución equitativa de los asuntos y garantizar que los juzgadores que funjan como Jueces de Control no participen en un mismo asunto como Tribunal de Enjuiciamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
LIBROS DE CONTROL Y VISITAS DE INSPECCIÓN

Artículo 23. Los órganos jurisdiccionales están obligados a llevar libros electrónicos en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 24. Las visitas de inspección de los Centros se regirán conforme a las disposiciones aplicables.

CAPÍTULO TERCERO
NOTIFICACIONES

Artículo 25. El Administrador auxiliará a los órganos jurisdiccionales en la práctica de las notificaciones, a que se refiere el artículo 82, fracciones I, incisos b), c) y d); II y III del Código, en términos del manual correspondiente de los Centros.

CAPÍTULO CUARTO
AUDIENCIAS

Artículo 26. El Administrador llevará a cabo el registro de la identificación de las personas que vayan a declarar en las audiencias, conforme a lo previsto en el artículo 54 del Código.

Artículo 27. El ingreso a las Salas estará limitado a la capacidad de las mismas, y el acceso se llevará a cabo conforme al manual correspondiente de los Centros.

El órgano jurisdiccional podrá solicitar al Administrador el cambio de Sala siempre y cuando exista la disponibilidad necesaria o, en su defecto, éste podrá proveer de otro espacio del Centro para que los periodistas, medios de comunicación y público en general puedan presenciar la audiencia, en cuyo caso, habilitará una o varias pantallas, en las cuales se transmitirá de forma directa o diferida la sesión respectiva.

Artículo 28. El Administrador integrará el padrón de periodistas y medios de comunicación acreditados, el cual se conformará por aquellos que se registren conforme a los Lineamientos que determine el Pleno, a propuesta de la Dirección General de Comunicación Social.

El Administrador dará vista a la Dirección General de Comunicación Social de las acreditaciones que otorgue para su conocimiento.

Artículo 29. Los periodistas y medios de comunicación acreditados, deberán solicitar por escrito al Administrador ser registrados para asistir a la audiencia.

En caso de que haya disponibilidad en el espacio designado para periodistas y medios de comunicación, el Administrador asentará el registro correspondiente al solicitante, o de lo contrario le comunicará dicha situación.

Artículo 30. Al entrar a la audiencia, la Administración del Centro entregará al periodista o medio de comunicación acreditado su gafete oficial, el cual deberá portar en la audiencia a la que asista. Dicho gafete será devuelto al salir de la audiencia.

Artículo 31. Los periodistas y medios de comunicación que ingresen a la Sala, serán colocados en el espacio que al efecto se determine, sin que puedan sobrepasar la capacidad del mismo, sin perjuicio de que el Administrador pueda habilitar, para tal efecto, el espacio designado para el público, siempre que sea posible.

CAPÍTULO QUINTO
QUEJA ADMINISTRATIVA

Artículo 32. La Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación conocerá de las quejas a que se refiere el artículo 135 del Código.

Para dar celeridad a la remisión del informe, el recurso y los documentos justificativos, se autoriza a los órganos jurisdiccionales para disponer su envío por medio de correo electrónico o fax, previa certificación que realice el órgano receptor.

El proyecto de resolución será elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia, Información y Evaluación.

La determinación de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación no prejuzga sobre la responsabilidad del juzgador.

CAPÍTULO SEXTO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 33. Los Centros funcionarán las veinticuatro horas, todos los días del año, en turnos de ocho horas, siete horas y media, así como siete horas, atendiendo al tipo de jornada de trabajo, en específico diurna, nocturna y mixta.

El Administrador tomará las medidas necesarias para garantizar que haya personal suficiente de la Administración del Centro en cada turno.

Artículo 34. Los horarios y guardias de los órganos jurisdiccionales serán determinados en sus acuerdos de creación.

Artículo 35. El Administrador deberá asentar en el sistema del registro automatizado de entrada y salida de servidores públicos, el horario respectivo a cada uno de los mismos que estén obligados a registrar su entrada y salida.

Artículo 36. El inicio de las audiencias de las etapas intermedia y de juicio o su continuación, será programado entre las 9:00 y 15:00 horas, de lunes a viernes. Lo mismo se observará para las audiencias iniciales sin detenido, en aquellos casos en que medie solicitud del Ministerio Público para su programación, siempre y cuando resulte posible.

Artículo 37. Los órganos jurisdiccionales y los Administradores de los Centros, en el ámbito de su competencia, deberán observar lo dispuesto en el título sexto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos.

Artículo 38. La Administración del Centro deberá observar las disposiciones en materia de seguridad, e implementar las acciones que determine la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación.

Artículo 39. Los órganos jurisdiccionales privilegiarán el uso del sistema de videoconferencias en términos de las disposiciones aplicables y en respeto al principio de inmediación.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 13, 14 y 18 del Acuerdo General 23/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de seguridad en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, para quedar como sigue:

"**Artículo 13.** El acceso de Visitantes a los inmuebles sólo podrá ser autorizado por la Administración de éstos o por los Administradores de los Centros de Justicia Penal, sin perjuicio de que deberán observarse los protocolos, manuales, normas, lineamientos y políticas aplicables.

Artículo 14. Queda prohibido ingresar cualquier tipo de armas, sustancias o material peligroso a las instalaciones, con excepción de aquellas personas que con motivo de sus funciones deban ingresarlas, caso en el cual

la Coordinación de Seguridad deberá llevar un registro específico de dichas personas.

Artículo 18. El ingreso y estancia de periodistas y medios de comunicación en las instalaciones, requerirá la previa autorización de la Dirección General de Comunicación Social o del Administrador del Centro de Justicia Penal, quienes, en todo caso, deberán dar aviso a la Coordinación de Seguridad a efecto de que se apliquen los protocolos o manuales correspondientes."

ARTÍCULO TERCERO. Se reforma el numeral ÚNICO, Apartado A, primer párrafo, del Acuerdo General 48/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jornada y el horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del propio Consejo, para quedar como sigue:

"**A.** Se establece una jornada de trabajo en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal con un máximo de ocho horas efectivas diarias, que comprenderá de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, con excepción de la Oficialía de Partes y Certificación del Edificio Sede del propio Consejo, así como de las Administraciones de los Centros de Justicia Penal.

…
…
…"

ARTÍCULO CUARTO. Se reforma el numeral PRIMERO, primer párrafo, del Acuerdo General 49/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la jornada y horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

"**PRIMERO.** La jornada de trabajo de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, será de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y, de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del órgano jurisdiccional, de las quince a las dieciséis horas, con excepción de los Juzgados de Distrito que se encuentren de turno, por el tiempo que dure la guardia respectiva, así como de los órganos jurisdiccionales de los Centros de Justicia Penal.

…
…
…"

ARTÍCULO QUINTO. Se reforman los artículos 41, fracción I, inciso a) y la fracción II, incisos h) e i); 51, primer párrafo; 52, primer párrafo; 56; 69, tercer párrafo; 72, segundo párrafo; 75, primer párrafo; así como 77, párrafos primero y tercero; y se adicionan las fracciones III. Bis y IV. Bis al artículo 3, así como el artículo 98 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, para quedar como sigue:

"Artículo 3. …

I. a **III. …**

III. Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada;

IV. …

IV. Bis. Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o Juez de enjuiciamiento; y

V. a **VI.** …

Artículo 41. …

I. …

a) Especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito, así como en Asistencia de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento: cinco puntos;

b) a **e) …**

…
…

II. …

a) a **g)** …

h) Secretario de Tribunal de Circuito, Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada o Secretario de Estudio y Cuenta de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; hasta 4 puntos, considerando 1 punto por cada año de servicios hasta llegar a un máximo de cuatro años.

i) Secretario de Juzgado de Distrito o Asistente de Constancias y Registro de Juez de control o de Juez de enjuiciamiento; hasta 4 puntos, considerando 1 punto por cada año de servicios hasta llegar a un máximo de cuatro años.

j) …

III. …

a) a **g)** …

…

Artículo 51. Para poder ser designado Secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito, así como Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control o de Juez de enjuiciamiento, se requiere lo siguiente:

I. a **VIII.** …

Artículo 52. La experiencia profesional de tres años requerida para ser designado Secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito, así como Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control o de Juez de enjuiciamiento, se computará a partir de la fecha en que el aspirante haya aprobado su examen profesional para obtener título de licenciado en derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan los siguientes requisitos:

I. a **II.** …

Artículo 56. El Plan de Estudios de la Especialidad, será elaborado por el Comité Académico del Instituto, en coordinación con el Director General. En dicho documento deberán especificarse las habilidades, conocimientos y aptitudes básicas de los alumnos, indispensables para desempeñar el cargo de secretario de órgano jurisdiccional, así como Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control o de Juez de enjuiciamiento.

Artículo 69. …

…

Las personas que hayan causado baja del Poder Judicial de la Federación por más de tres años, para poder reingresar a los cargos de secretario de Tribunal de Circuito o de Juzgado de Distrito; así como de Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control, o de Juez de enjuiciamiento; y de actuario judicial deberán aprobar nuevamente el examen de aptitud a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 112 de la ley o el curso para secretarios.

…

Artículo 72. …

En el caso de que en algún órgano jurisdiccional se hubiere extendido un nombramiento de base o interino, en las categorías de secretario de juzgado; o de Tribunal de Circuito; de actuario de los mismos; o bien de Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control, o de Juez de enjuiciamiento; a persona o personas que fueren cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado de algún titular; éste no podrá a su vez, extender nombramientos en los mismos términos respecto de personas que resultaren cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado del titular del órgano donde se encuentren adscritos sus allegados. El titular que designe en alguno de los citados cargos a personas que se ubiquen en los supuestos citados, deberá dar aviso de esa circunstancia a la Dirección General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal.

...

Artículo 75. Para expedir un nombramiento de Secretario de Tribunal de Circuito; o de Juzgado de Distrito; así como de Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control; o de Juez de enjuiciamiento; y de Actuario del Poder Judicial de la Federación, los titulares podrán solicitar al Instituto la información profesional y, en su caso, académica del integrante de la lista que pretendan designar.

…
…
…

Artículo 77. Los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden otorgar, en cualquier momento, la base a los servidores públicos de su adscripción, con nombramiento de Secretario de Tribunal de Circuito; de Juzgado de Distrito; Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control, o de Juez de enjuiciamiento; o Actuario del Poder Judicial de la Federación, cuando a su juicio resulte procedente, siempre que la plaza correspondiente se encuentre vacante y sea definitiva en la plantilla autorizada, tomando en consideración las prevenciones señaladas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

...

Los Jueces y Magistrados Interinos y los Secretarios de Tribunal de Circuito o Juzgado de Distrito autorizados para realizar las funciones de Magistrados y Jueces, respectivamente, por las ausencias temporales de los titulares, sólo podrán extender nombramientos de Secretarios de Tribunal de Circuito, Juzgados de Distrito o Actuario del Poder Judicial de la Federación, de manera temporal, cuando la plaza correspondiente se encuentre desocupada; salvo aquellos casos en que la base se deba otorgar por disposición legal. Lo mismo se observará en caso de nombramientos de Asistente de Constancias y Registro que extiendan los Jueces de Control o juzgadores de tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada Interinos.

Artículo 98 Bis. Tratándose del sistema penal acusatorio, cuando un Juez de Control, juzgador de Tribunal de Enjuiciamiento o de Tribunal de Alzada se encuentre impedido para conocer de un asunto, conocerá otro juzgador similar del mismo Centro de Justicia Penal.

En caso de que no sea posible, podrá conocer un juzgador de otro Centro de Justicia Penal, en términos de las disposiciones aplicables."

ARTÍCULO SEXTO. Se reforma el artículo 1o., fracción I, del Acuerdo General 34/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de los Libros de Control que obligatoriamente deberán llevar los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes, para quedar como sigue:

"**Artículo 1o.** ...

I. Los libros de gobierno que los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación, con excepción

de los que formen parte de un Centro de Justicia Penal, están obligados a llevar oficialmente a manera de mecanismos de control de los asuntos de sus respectivas competencias, como auxiliares en su supervisión por parte de los propios titulares; para los efectos de la rendición de estadística y, finalmente, a fin de facilitar los procedimientos de las visitas de inspección que se lleven a cabo;

II. a **III.** ..."

ARTÍCULO SÉPTIMO. Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la obligatoriedad del uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para quedar como sigue:

"**PRIMERO. Establecimiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.** Se establece el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como programa automatizado de captura y reporte de datos estadísticos sobre el movimiento de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los que formen parte de los Centros de Justicia Penal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral."

ARTÍCULO OCTAVO. Se reforma el numeral PRIMERO del Acuerdo General 31/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el módulo de consulta de expedientes por Internet, respecto de los asuntos del conocimiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue:

"**PRIMERO.** Los listados de captura de datos de los asuntos del conocimiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los que formen parte de los Centros de Justicia Penal, se publicarán para su consulta en el medio de comunicación informático denominado Internet."

ARTÍCULO NOVENO. Se reforma el artículo 7, primer párrafo, del Acuerdo General 23/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula al Coordinador Técnico Administrativo en Órganos Jurisdiccionales, para quedar como sigue:

"**Artículo 7.** Cada órgano jurisdiccional, con excepción de los que formen parte de un Centro de Justicia Penal, contará con un Coordinador Técnico Administrativo quien, de conformidad con las funciones que se establezcan en el manual específico:

I. a **II.** …"

ARTÍCULO DÉCIMO. Se reforma el artículo 2, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos jurisdiccionales, para quedar como sigue:

"**Artículo 2**. …

I. …

II. En las diligencias de averiguación previa y de las etapas de investigación, en aquellos supuestos en que sean acordadas por los órganos jurisdiccionales a solicitud del Ministerio Público y en las decretadas de oficio por los referidos órganos jurisdiccionales, cuando los mismos determinen que las publicaciones sean con cargo al presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación.

…"

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se reforma el artículo 65, párrafo primero; y se adiciona un cuarto párrafo al artículo 149 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, para quedar como sigue:

"**Artículo 65.** Tratándose de expedientes judiciales que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales, el secretario de Juzgado o de Tribunal encargado del expediente o del engrose, o bien, el Asistente de Constancias y Registro respectivo, según sea el caso, será responsable de elaborar las versiones públicas de los expedientes que se encuentren bajo su responsabilidad, así como de las resoluciones respectivas. El Asistente, para tal fin, podrá auxiliarse del Administrador del Centro de Justicia Penal que corresponda.

…

Artículo 149. …

…
…

Para efectos de este artículo, los órganos jurisdiccionales de los Centros de Justicia Penal deberán remitir la sentencia en su versión pública y escrita."

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se reforma el artículo 2, fracción XV; 162, fracción XV; y se adiciona una fracción II Bis al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, para quedar como sigue:

"Artículo 2. …

I. a **XIV.** …

XV. Unidades administrativas: Las ponencias de los Consejeros, Oficialía Mayor, secretarías ejecutivas, coordinaciones, Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, secretarías técnicas de Comisiones, direcciones generales, así como la Unidad de Enlace del Consejo; el Archivo General del Consejo, las Administraciones de los Centros de Justicia Penal, y demás que sean autorizadas por el Pleno.

Artículo 42. …

I. a **II.** …

II. Bis. Proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal;

III. a **XIII.** …

Artículo 162. …

I. a **XIV.** …

XV. Expedir constancias de acreditación a medios de información para tener acceso a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con excepción de los Centros de Justicia Penal;

XVI. a **XXII.** …"

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se reforma el artículo 2, fracciones XXIII y XXXII, y se adiciona un numeral 3 Bis a la fracción I, del artículo 33 del

Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, para quedar como sigue:

Artículo 2. …

I. a **XXII.** …

XXIII. Órganos jurisdiccionales: Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

Las referencias que se hagan en este Acuerdo a los Juzgados de Distrito o a sus titulares también se entenderán hechas a los Jueces de Control, de Ejecución y Tribunales de Enjuiciamiento; y aquellas que se hagan a los Tribunales Unitarios de Circuito o sus titulares, a los Tribunales de Alzada;

XXIV. a **XXXI.** …

XXXII. Unidades administrativas: Las ponencias de los Consejeros, Oficialía Mayor, secretarías ejecutivas, Coordinaciones, Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, secretarías técnicas de Comisiones o de Comités, direcciones generales, las Administraciones de los Centros de Justicia Penal, así como la Unidad de Enlace del Consejo y el Archivo General del Consejo, y cualquier otro órgano administrativo creado por ley o acuerdo general del Pleno.

Artículo 33. …

I. …

1. a **3.** …

3. Bis. Asistente de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, de Juez de control o de Juez de enjuiciamiento;

4. a **6.** …

II. a **III.** …

…"

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en sus artículos QUINTO al OCTAVO transitorios, que entrarán en vigor al día siguiente de la aprobación del mismo.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal vigentes a la entrada en vigor del presente acuerdo serán aplicables a los Centros de Justicia Penal en lo no previsto por éste, siempre y cuando no se opongan al mismo.

CUARTO. Las referencias que se hagan en otros acuerdos generales a los Juzgados de Distrito se entenderán hechas a los Jueces de Control, de Ejecución y Tribunales de Enjuiciamiento; y aquellas que se hagan a los Tribunales Unitarios de Circuito a los Tribunales de Alzada.

QUINTO. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, deberá someter, directamente, a consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal, conforme el Congreso de la Unión vaya emitiendo las declaratorias de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

SEXTO. La Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación deberá someter, directamente, a consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los instrumentos normativos que se estimen necesarios, y que deben observarse en los Centros de Justicia Penal cuya creación determine el referido órgano colegiado, antes del inicio de operaciones de los mismos, a fin de que entren en vigor ese mismo día.

SÉPTIMO. La Dirección General de Comunicación Social deberá someter a consideración y, en su caso, aprobación, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los lineamientos para la acreditación de periodistas y medios de comunicación, antes del inicio de operaciones del primer Centro de Justicia Penal.

OCTAVO. La Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional en coordinación con la Unidad de Implementación de las Refor-

mas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, deberá elaborar el proyecto del manual correspondiente de los Centros de Justicia Penal.

Las áreas administrativas del Consejo brindarán el apoyo y asesoría que sea necesario para la elaboración del proyecto respectivo.

El proyecto correspondiente deberá someterse a la consideración y, en su caso, aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal antes del inicio de operaciones del Centro de Justicia Penal.

El manual aprobado deberá publicarse, antes de su entrada en vigor, en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

NOVENO. Los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito competentes para conocer de procedimientos penales que se tramiten conforme al Código Federal de Procedimientos Penales, también lo son para practicar actos procesales que les sean requeridos por Jueces de Control o Tribunales de Enjuiciamiento o Alzada.

En tanto se crean en cada circuito judicial los Centros de Justicia Penal, los Juzgados de Distrito mixtos y especializados en materia penal o de procedimientos penales federales, según la localidad de que se trate, tendrán competencia en sus jurisdicciones territoriales para conocer de las solicitudes de autorización judicial para diligencias urgentes que formule el Ministerio Público respecto de actos y medidas que requieran control judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Para dichos efectos, la Oficialía Mayor, por conducto de las unidades administrativas que le están adscritas, tomará las medidas necesarias para que los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito cuenten con los insumos necesarios para desahogar las diligencias que les sean requeridas en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

DÉCIMO. Las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de su competencia, adoptarán las medidas necesarias para la implementación del presente Acuerdo.

DÉCIMO PRIMERO. La creación de los Jueces de Ejecución de los Centros de Justicia Penal quedará diferida hasta en tanto se expida la legislación en la materia.

DÉCIMO SEGUNDO. Para efectos del artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Asistentes de Constancias y Registro de Tribunal de Alzada, Juzgado de Control, y Tribunal de Enjuiciamiento, constituyen una especialización de las categorías de secretarios de Tribunal de Circuito y de Juzgado de Distrito.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; 23/2012, que establece las disposiciones en materia de seguridad en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral; 48/2011, que establece la jornada y el horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a las áreas administrativas del propio Consejo; 49/2011, que establece la jornada y horario de trabajo de los servidores públicos adscritos a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; 34/2000, relativo a la determinación de los libros de control que obligatoriamente deberán llevar los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes; 28/2001, que establece la obligatoriedad del uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; 31/2005, que establece el módulo de consulta de expedientes por internet, respecto de los asuntos del conocimiento de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación; 23/2013, que regula al Coordinador Técnico Administrativo en Órganos Jurisdiccionales; 5/2013, que establece los lineamientos para la atención de solicitudes de publicaciones que hacen los órganos jurisdiccionales; y, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control

y rendición de cuentas citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2687; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, página 2047; Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, página 3925; Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011, página 3928; Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025; Tomo XII, agosto de 2000, página 1327; Tomo XIII, mayo de 2001, página 1303; Tomo XXII, agosto de 2005, página 2109; Décima Época, Libro XXV, Tomo 3, octubre de 2013, página 1935; Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 2201; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 2, Tomo IV, enero de 2014, página 3275, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 37/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL SIMILAR 6/2009, QUE ESTABLECE LAS BASES PARA QUE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA PÚBLICA Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, SE AJUSTEN A LOS CRITERIOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del mismo, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de con-

formidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realice el Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; atendiendo a lo dispuesto en el artículo 81, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y

QUINTO. Es necesario llevar a cabo adecuaciones normativas para fortalecer los procedimientos de contratación en el Consejo de la Judicatura Federal, y con ello su eficacia.

Lo anterior, con base en la experiencia adquirida por las áreas administrativas, y en el marco de la puesta en marcha del proceso de mejora administrativa implementado por el Consejo de la Judicatura Federal.

En este contexto, se hacen modificaciones en materia de investigación de mercado, así como evaluaciones técnicas y económicas de las propuestas de los participantes en procedimientos de licitación; atendiendo al objeto de los procedimientos de contratación.

Asimismo, se ajustan los procedimientos institucionales para la elaboración de los dictámenes legal, financiero, y de finiquito, para conferirles mayor agilidad; al tiempo que se realizan adecuaciones complementarias en aras de dotar de mayor claridad la normativa institucional.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

"**ARTÍCULO ÚNICO.** Se reforman los artículos 2, fracciones III y IV; 13; 42 BIS, párrafo primero y el inciso a); 42 TER, párrafo primero y las fracciones I, III y VI; 42 QUÁTER; 42 QUINTUS, párrafo primero; 42 SEXTUS; 45, fracción I; 55; 55 BIS; 56, párrafo tercero; 57, fracción IV, párrafo primero y sus incisos a), e), i), así como la fracción V; 64, fracción IV; 77, párrafo primero; 78, fracción I; 89, fracción I; 92, párrafo primero; 105, párrafo primero;

110, párrafo quinto de la fracción II; 115, párrafo quinto; 117, fracción II; 125; 147; 148; así como 172, párrafo primero; y se adicionan las fracciones II BIS a II QUINQUIES al artículo 2; el artículo 2 BIS; el artículo 2 TER; el artículo 2 QUÁTER; un cuarto párrafo al artículo 56; los párrafos octavo y noveno al artículo 74; un cuarto párrafo al artículo 82; así como un sexto párrafo a la fracción II del artículo 110 del Acuerdo General 6/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"**ARTÍCULO 2.** …

"**I.** a **II.** …

"**II. BIS. Área administradora del contrato:** El área de adquisiciones o de obra según corresponda;

"**II. TER. Áreas asesoras:** Las direcciones generales de Recursos Materiales; de Servicios Generales; de Inmuebles y Mantenimiento; y de Tecnologías de la Información, en el ámbito de su competencia;

"**II. QUÁTER. Área requirente:** La que solicita o requiere formal u orgánicamente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios; así como la obra pública o servicios relacionados con la misma;

"**II. QUINQUIES. Área técnica:** El órgano administrativo que cuenta con competencia para resolver sobre especificaciones, características y demás aspectos técnicos de los bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma que solicite el área requirente;

"**III. Área de Adquisiciones:** Las direcciones generales de Recursos Materiales; de Servicios Generales; Administradores de Edificios, y la Coordinación de Administración Regional, incluso a través de sus Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas, según corresponda de acuerdo a su competencia;

"**IV. Área de Obras:** La Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento y, en su caso, los Administradores de Edificios, y la Coordinación de Administración Regional, incluso a través de sus Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas;

"**V.** a **XXIII.** ...

"**ARTÍCULO 2 BIS. ÁREAS ADMINISTRADORA Y TÉCNICA DEL CONTRATO.** El área administradora del contrato deberá llevar a cabo la administración, control y seguimiento de los contratos.

"El área técnica elaborará las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evaluará la propuesta técnica de las proposiciones y deberá responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes.

"Cada una de esas áreas podrá tener distinto carácter en un mismo procedimiento de contratación; dicho carácter o caracteres serán especificados en las bases y en el contrato.

"**ARTÍCULO 2 TER. ÁREA REQUIRENTE.** Según lo haya solicitado para satisfacer las necesidades del Consejo, el área requirente será responsable, en el ámbito de su competencia, de verificar y validar que los bienes, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, se entreguen, presten o realicen en la forma y plazo en que fueron contratados.

"**ARTÍCULO 2 QUÁTER. ÁREAS ASESORAS.** Las áreas asesoras deberán asesorar a los administradores de edificios y regionales, así como a los delegados administrativos en los procedimientos de contratación que lleven a cabo y, en su caso, a los órganos administrativos.

"**ARTÍCULO 13. CUMPLIMIENTO DE ESTE ACUERDO.** La Contraloría tendrá a su cargo las atribuciones de control, inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo, en el marco de las atribuciones que establece la Ley y demás disposiciones aplicables.

"Si con motivo del ejercicio de sus atribuciones de verificación advierte irregularidades en un procedimiento de contratación pública, deberá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar los principios del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluyendo la solicitud de suspensión del procedimiento al Comité, quien resolverá lo conducente.

"**ARTÍCULO 42 BIS. DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.** Para estar en condiciones de determinar el presupuesto base y el procedimien-

to de adjudicación, con la previsión necesaria para no afectar los calendarios del programa de ejecución respectivo, las áreas operativas deberán llevar a cabo la investigación de mercado; por lo que durante su desarrollo se deberá:

"**a)** Verificar la existencia de oferta de bienes, arrendamiento y servicios, en la cantidad, calidad y oportunidad requeridas;

"**b)** a **c)** ...

"**ARTÍCULO 42. TER. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.** La investigación de mercado a la que se refiere el artículo anterior, es la base para determinar el precio estimado de bienes y servicios, así como el procedimiento de contratación y, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, arrendamientos y servicios permite, en su caso, lo siguiente:

"**I.** Argumentar la procedencia de agrupar varios bienes o servicios en una sola partida;

"**II. ...**

"**III.** Fijar en las bases de contratación los rangos de referencia de bienes o servicios;

"**IV.** a **V. ...**

"**VI.** Justificar la conveniencia de efectuar un procedimiento de contratación internacional abierto, cuando se acredite fehacientemente que en el territorio nacional no existe proveedor o prestador de servicios que esté en aptitud de atender el requerimiento del Consejo, en lo que respecta a cantidad, calidad y oportunidad, o que el precio no es aceptable.

"**ARTÍCULO 42. QUÁTER. ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.** La investigación de mercado se efectuará considerando las condiciones en cuanto a los plazos y lugar de entrega de los bienes y prestación de servicios; la moneda a cotizar, forma y términos de pago; características técnicas de los bienes o servicios; y las demás circunstancias que resulten aplicables y que permitan la comparación objetiva entre los mismos en iguales condiciones o de la misma naturaleza y se realizará empleando, por lo menos, dos de los medios siguientes:

"**I.** Información disponible en CompraNet;

"**II.** Respuesta a la solicitud escrita o electrónica dirigida a los proveedores y prestadores de servicios;

"**III.** Información obtenida de organismos especializados de carácter público, social o privado; agrupaciones, asociaciones, cámaras, colegios, o sociedades, industriales, comerciales, de servicios, profesionales, científicas y académicas; y fabricantes, proveedores de bienes o prestadores de servicios;

"**IV.** Información disponible en Internet; y

"**V.** Histórico de procedimientos de adjudicación realizados con anterioridad, considerando como máximo los dos ejercicios anteriores, con la correspondiente actualización al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"En todos los supuestos se deberá dejar constancia en el expediente de las solicitudes y respuestas, así como de la información utilizada, que deberá precisar su fuente con exactitud.

"**ARTÍCULO 42 QUINTUS. VIGENCIA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO, EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.** La investigación de mercado no podrá tener una antigüedad mayor a un año contado a partir del momento de su formulación y hasta el acto de recepción y apertura de las ofertas del procedimiento de adjudicación. Para la realización de dicho acto y con base en esa vigencia, el área operativa deberá tomar en cuenta la naturaleza de los bienes, arrendamientos y servicios a adjudicar. La investigación de mercado que se utiliza como base para la convocatoria de éstos, deberá tomar en consideración la correspondiente actualización al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"**...**

"**ARTÍCULO 42 SEXTUS. TIPO DE CONTRATO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS.** Previo al procedimiento de adjudicación y conforme a los criterios que tenga autorizados, el área de obras determinará el tipo de contrato de entre los señalados en el artículo 110 de este Acuerdo, de modo que resulte aplicable el más adecuado para la ejecución de los trabajos de la obra pública. Asimismo, dicha área realizará la investigación de mercado necesaria para determinar el presupuesto base a que se refiere el artículo 61 de este mismo instrumento.

"La verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así como de contratistas, a nivel nacional o internacional, y del precio total estimado de los trabajos, se hará tomando en consideración la obra pública que se pretende llevar a cabo. Para tal efecto, la investigación de mercado deberá basarse en la información que se obtenga de cuando menos dos de las fuentes siguientes:

"**I.** En CompraNet;

"**II.** De agrupaciones, asociaciones, cámaras, colegios, entidades, instituciones y organismos especializados en el ramo de la construcción y de servicios relacionados con la misma, de carácter público, social, industrial, comercial, científico y académico;

"**III.** De Internet;

"**IV.** La generada por cualquier medio especializado en el ramo de la construcción y servicios relacionados con la misma; y

"**V.** Histórico de procedimientos de adjudicación realizados con anterioridad considerando como máximo los dos ejercicios anteriores, con la correspondiente actualización al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"En todos los supuestos se deberá dejar constancia en el expediente de la información utilizada, la que deberá precisar su fuente con exactitud, a fin de que pueda ser verificada.

"La investigación de mercado en materia de obra pública no podrá tener una antigüedad mayor a un año contado a partir del momento de su formulación y hasta el inicio del procedimiento de adjudicación. Para la realización de dicho acto y con base en esa vigencia, el área de obras deberá tomar en cuenta la naturaleza de la obra pública a realizar. La investigación de mercado que se utiliza como base para la convocatoria de ésta, deberá tomar en consideración la correspondiente actualización al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

"**ARTÍCULO 45. ...**

"**I.** Adquisición de mobiliario y equipo de oficina que se obtiene con proveedores idóneos, para lograr la homogeneidad, dichos proveedores se calificarán por el Comité en la forma y plazo que éste determine, a partir de una revisión comparativa de precios, calidad, oportunidad y relación comercial;

"**II.** a **XVIII. ...**

"**ARTÍCULO 55. DICTAMEN LEGAL.** Asuntos Jurídicos elaborará dictamen legal para lo cual el licitante deberá proporcionar lo siguiente:

"**I.** Nombre de la persona física o razón o denominación social de la persona moral, así como el de su apoderado o representante legal;

"**II.** Cédula de identificación fiscal o constancia de registro fiscal y domicilio fiscal;

"**III.** Objeto social, escritura constitutiva y datos de inscripción de la persona moral, así como sus modificaciones; y nombre, razón o denominación social de socios y accionistas;

"**IV.** Identificación oficial vigente de la persona física licitante y, en su caso, de su apoderado o representante legal; y

"**V.** Instrumento en el que constan las facultades del apoderado o representante, así como su identificación oficial vigente.

"Una vez notificado del fallo, el o los adjudicados deberán presentar al área operativa los documentos a que se refiere este artículo en original y copia para su cotejo.

"Los documentos debidamente cotejados serán remitidos a Asuntos Jurídicos para la elaboración del dictamen correspondiente, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la totalidad de los mismos.

"Tratándose de licitantes extranjeros, dichos documentos deberán estar debidamente legalizados o apostillados, y tendrán que presentarse redactados en español, o acompañados de la traducción correspondiente.

"En caso de que el dictamen legal no sea favorable, previo a la firma del contrato, el Consejo iniciará en contra del adjudicado el procedimiento de impedimento al que se refiere el artículo 51 de este ordenamiento, independientemente de proceder a adjudicar conforme a lo establecido en el artículo 80 del mismo.

"**ARTÍCULO 55 BIS. DICTAMEN FINANCIERO.** Programación y Presupuesto realizará el dictamen financiero con base en este Acuerdo y los criterios que determine el Comité, los cuales deberán precisar, entre otros as-

pectos, los documentos específicos que se deben solicitar y los plazos a observar para la emisión del dictamen.

"La documentación financiera deberá presentarse por los participantes en el procedimiento de adjudicación de que se trate, en el mismo acto de apertura de las propuestas; la que estará sujeta a un análisis de sus estados de liquidez, solvencia y capital contable, a fin de acreditar, a satisfacción del Consejo, su capacidad financiera.

"**ARTÍCULO 56. ...**

"La evaluación que se realice podrá contener los aspectos siguientes:

"**I.** a **VII. ...**

"En todo caso, en las bases se deberán especificar los aspectos que se tomarán en consideración en la evaluación técnica, pudiendo reducirse o ser distintos a los previstos en este artículo, con el fin de atender las particularidades específicas de la contratación.

"**ARTÍCULO 57. ...**

"**I.** a **III. ...**

"**IV.** En el caso de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, lo mínimo que se deberá evaluar será:

"**a.** Que en todos los conceptos que integran la propuesta, se establezca el precio unitario, revisando que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el supuesto de que una o más contengan errores se efectuarán las correcciones correspondientes por el interesado, siendo así, que el monto correcto será el que se considere para el análisis comparativo de las proposiciones;

"**b.** a **d. ...**

"**e.** Que los costos básicos de mano de obra, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes de mercado;

"**f.** a **h. ...**

"**i.** Que el programa de erogaciones de los trabajos sea congruente con el programa de ejecución.

"**V.** Tratándose de obra pública a precio alzado, además se deberá verificar:

"**a.** Que en todas y cada una de las actividades, se establezca su importe; y

"**b.** Que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran.

"**ARTÍCULO 64. ...**

"**I.** a **III. ...**

"**IV.** La descripción general, normas de calidad, cantidad y unidad de medida de los bienes o servicios cuya adquisición o prestación se requiere. En el caso de arrendamiento, la indicación de si es con opción a compra. Adicionalmente, en el caso de obra pública, la descripción general de la obra o del servicio relacionado con ella y el lugar donde se llevará a cabo, así como los costos de los bienes, servicios y obra pública a contratar; y

"**V. ...**

"**ARTÍCULO 74. ...**

"No será motivo de desechamiento la falta de identificación o acreditación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

"En el mismo acto de presentación y con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes presentarán, dentro o fuera del sobre o a través del uso de las tecnologías a que se refiere el primer párrafo de este artículo, un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos a que se refiere el artículo 55 de este Acuerdo. En el caso de licitaciones públicas internacionales, el escrito deberá contener dichos datos o los equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate. En el supuesto de duda sobre los documentos que deberán requerirse a los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, la convocante solicitará un escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

"**ARTÍCULO 77. APERTURA DE PROPUESTAS.** El acto de presentación y apertura de propuestas se realizará en sesión pública que presidirá el servidor público autorizado por el titular de la Dirección de las áreas de adquisiciones o de obras, según corresponda, debiendo contar con la intervención de la Contraloría, los que actuarán en el ámbito de su respectiva competencia.

"**...**

"**I.** a **VII. ...**

"**ARTÍCULO 78. ...**

"**I.** Los dictámenes financiero, técnico y económico deberán estar debidamente fundados y motivados;

"**II.** a **III. ...**

"**ARTÍCULO 82. ...**

"**I.** a **III. ...**

"Lo previsto en este artículo será aplicable al concurso público sumario y a la invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas.

"**ARTÍCULO 89. ...**

"**I.** Los dictámenes financiero, técnico y económico, los cuales deberán estar debidamente fundados y motivados;

"**II.** a **III. ...**

"**ARTÍCULO 92. DEFINICIÓN.** La adjudicación directa es el procedimiento a través del cual se adjudica de manera expedita un contrato a un proveedor o contratista idóneo, previamente seleccionado, a juicio del área operativa que corresponda de conformidad con la fracción V del artículo 16 de este Acuerdo, en virtud de materializarse alguno de los siguientes supuestos:

"**I.** a **III. ...**

"**ARTÍCULO 105. REQUISITOS PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.** Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se

adjudicará de entre los participantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación o invitación correspondiente, las condiciones técnicas y económicas requeridas por el Consejo, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

"**...**

"**ARTÍCULO 110. ...**

"**I. ...**

"**II. ...**

"Los contratos de este tipo no podrán ser modificados en cuanto a monto, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

"Excepcionalmente el Comité, tomando en consideración las causas y razonamientos que le presente el Titular del área de obras, podrá autorizar la modificación del plazo por causas no imputables al contratista que sean supervenientes a la suscripción del contrato; en ese supuesto las garantías deberán mantenerse vigentes.

"**III. ...**

"**ARTÍCULO 115. ...**

"Cuando los proveedores, contratistas y prestadores de servicios demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con la entrega total de los bienes, conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las áreas operativas podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el veinte por ciento del importe total del contrato respectivo.

"**...**

"**ARTÍCULO 117. ...**

"**I. ...**

"**II.** El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista en un plazo no mayor a treinta días hábiles posteriores a la firma del contrato, siempre y cuando haya entregado la fianza de anticipo correspondiente;

"**III.** a **V. ...**

"**ARTÍCULO 125. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.** La ejecución de los trabajos deberá iniciarse con la orden de inicio en la fecha señalada en la misma, la cual deberá ser coincidente con el contrato respectivo y, en su caso, el Consejo oportunamente pondrá al contratista en posesión, total o parcial, del inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos. El incumplimiento del Consejo prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos.

"La entrega de la posesión se hará mediante acta de entrega recepción en la que se harán constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

"El administrador del inmueble deberá entregarlo al área de obras previo a la vigencia del contrato para que ésta haga lo propio con la contratista.

"Por orden de inicio se entenderá el documento emitido por el Consejo que contiene los datos generales de los trabajos a ejecutar y la fecha de inicio de los mismos.

"**ARTÍCULO 147. CONCLUSIÓN DE LOS CONTRATOS.** El área operativa que corresponda, para dar por concluidos, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en los contratos, deberá elaborar el finiquito en el caso de los contratos de adjudicación directa por monto, según corresponda, anexando el acta recepción física de los trabajos, bienes o servicios. El finiquito será definitivo y sin posibilidad a ulterior reclamación.

"De conformidad con sus atribuciones, la Contraloría podrá dictaminar finiquitos presentados por las áreas operativas dentro del término de quince días hábiles, cuando deriven de contratos adjudicados a través del procedimiento de licitación pública, concurso público sumario, de invitación a cuando menos tres proveedores o contratistas y adjudicación directa.

"El finiquito de los contratos que la Contraloría determine no dictaminar, serán finiquitados sin más trámite, bajo la más estricta responsabilidad del área operativa, debiendo informar a la Contraloría de su resultado y sin perjuicio de que ésta los revise cuando lo considere conveniente.

"**ARTÍCULO 148. NOTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL FINIQUITO.** El área operativa competente deberá notificar al contratista o proveedor y, en su caso, al Director Responsable de Obra y al Supervisor Externo,

tratándose de supervisión externa, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito, el que deberá realizarse dentro de un plazo máximo de sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se realice la recepción física de los trabajos, bienes o servicios, el cual incluye el término con el cual cuenta la Contraloría para emitir dictamen, en su caso. Los contratistas o proveedores, Director Responsable de Obra y Supervisor Externo, en su caso, tendrán la obligación de acudir al llamado que se les haga por escrito; de no hacerlo, se les comunicará el resultado conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 144 de este Acuerdo.

"**ARTÍCULO 172. SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA**. El Consejo, a través del área operativa que corresponda, podrá suspender en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que implique su terminación definitiva. Asimismo, podrá ordenar la suspensión y determinar la temporalidad de ésta, sin que pueda ser indefinida; debiendo rendir el informe correspondiente al Comité de dicha suspensión y sus razones. En los casos que así lo determine el Comité podrá ordenar dicha suspensión.

"**...**

"**I.** a **VII. ...**"

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Para efectos del artículo 147 a que se refiere este Acuerdo, la Contraloría someterá a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Administración los criterios para ejercer su atribución en materia de finiquitos dentro de los treinta días posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

CUARTO. El Comité deberá adecuar los criterios relativos al dictamen financiero dentro de los quince días hábiles posteriores a la entrada en vigor del presente Acuerdo.

QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Acuerdo.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 37/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones del similar 6/2009, que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General 6/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2961.

ACUERDO GENERAL 43/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN, RESIDENCIA, COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CHILPANCINGO, GUERRERO; ASÍ COMO LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

DE ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE LAS MISMAS MATERIAS Y SEDE.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V y XXIV; y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de trece de noviembre de dos mil trece, aprobó la creación de un Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo en el Vigésimo Primer Circuito con sede en Chilpancingo, según consta en el oficio SEPLE./CNO./006/5971/2013

de la misma fecha, en el cual se precisó que el propio Pleno determinará la fecha de inicio de funciones;

QUINTO. De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Administración Regional y Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de dicho Tribunal Colegiado, lo cual hace necesario determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. El órgano jurisdiccional que inicia funciones se denominará TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, y tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de las mismas materias y sede que actualmente funcionan en el Circuito mencionado.

El domicilio del TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO será Boulevard Vicente Guerrero número 125, Fraccionamiento La Cortina, C.P. 39090 en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

SEGUNDO. El TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en Chilpancingo, Guerrero, iniciará funciones el dieciséis de noviembre de dos mil catorce, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional.

TERCERO. Durante el periodo que comprenderá del dieciséis al treinta de noviembre de dos mil catorce, los asuntos nuevos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se remitirán al TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

Durante ese periodo no tendrán aplicación las reglas de relación de asuntos fijadas conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

Transcurrido el plazo concedido, los asuntos nuevos se distribuirán entre los tres Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

CUARTO. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para concluir de manera anticipada o prorrogar, en su caso, el plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos ordenada en el presente acuerdo. Lo anterior, con base en los estudios respectivos que presentará a su consideración la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos.

QUINTO. Al finalizar el periodo de exclusión otorgado en el punto precedente, los presidentes de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, deberán de informar a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos y a la Dirección General de Estadística Judicial, el resultado estadístico de la medida adoptada.

SEXTO. El Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de gobierno nuevos, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General 34/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SÉPTIMO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito deberá remitir dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes, su reporte estadístico correspondiente, a la Dirección General de Estadística Judicial, con copia a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos.

OCTAVO. El Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito deberá levantar un acta administrativa de inicio de funciones por duplicado, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos debiendo enviar un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

NOVENO. El presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, se integrará al Pleno de dicho circuito, conforme a lo establecido en el diverso Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

DÉCIMO. Se modifica el punto SEGUNDO, inciso XXI, punto 1, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,

relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, para quedar como sigue:

"**SEGUNDO.** Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito que a continuación se precisan:

...

XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO:

1. Cinco Tribunales Colegiados especializados: tres en materias civil y de trabajo, con residencia en Chilpancingo; y dos Tribunales Colegiados en materias penal y administrativa, con sede en Acapulco ..."

DECIMOPRIMERO. La Oficialía Mayor con sus respectivas áreas, dotarán al nuevo órgano de la infraestructura y equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.

DECIMOSEGUNDO. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; y de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. La Secretaría Técnica de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, deberá incorporar de inmediato el texto de la reforma, al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

TERCERO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 43/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados de las mismas materias y sede, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a cinco de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 14/2014, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran; 34/2000, relativo a la determinación de los libros de control que obligatoriamente deberán llevar los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes; 11/2014, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo III, junio de 2014, página 1982; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1327; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2421; y, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 44/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS EXPEDIENTES

PERSONALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del mismo, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo constitucional, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. Corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos internos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

QUINTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 43, fracción X, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, es obligación del Poder Judicial de la Federación integrar los expedientes de sus trabajadores, por lo que en el ámbito de sus atribuciones, la Dirección General de Recursos Humanos debe coordinar el desarrollo y actualización del sistema de registro de información en materia de personal, así como administrar y resguardar los expedientes personales de los servidores públicos;

SEXTO. Es de suma importancia que los expedientes personales de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentren debidamente integrados con los documentos personales, disciplinarios e institucionales correspondientes;

SÉPTIMO. Como parte del proceso de modernización institucional y mejora administrativa; el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en marcha un proceso de desconcentración de funciones de las oficinas centrales a las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas;

OCTAVO. Ante la necesidad de contar con un sistema que permita un servicio más eficiente y óptimo en el uso de recursos, resulta oportuno emitir normas que establezcan la obligación de los servidores públicos de aportar los documentos que le sean requeridos para la integración de los expedientes personales; y

NOVENO. Resulta ineludible establecer procedimientos modernos para la sistematización de los expedientes personales, de manera que facilite su consulta electrónica, se evite el préstamo físico y el deterioro de los mismos.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones relativas a la integración, custodia, conservación, depuración y préstamo de los expedientes personales de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 2. Para efectos de este acuerdo se entenderá por:

I. Áreas administrativas: las unidades administrativas y los órganos auxiliares;

II. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

III. ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

IV. Órganos jurisdiccionales: Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y

V. Unidades administrativas: las que señale el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL CONTENIDO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

Artículo 3. Los expedientes del personal a cargo del Consejo, en resguardo de la Dirección General de Recursos Humanos, deberán contener los documentos relativos a su situación personal, institucional y disciplinaria, siguientes:

I. Documentación personal:

a) Copia certificada del acta de nacimiento, inscripción, adopción o reconocimiento, expedida por la oficina del Registro Civil correspondiente. Para los extranjeros, el documento original o copia certificada por la oficina respectiva del país de origen, apostillada o legalizada, en su caso, con la traducción al español por un perito autorizado. Tratándose de mexicanos naturalizados, copia certificada de la carta de naturalización expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Para el caso de mexicanos que presenten constancia de la Clave Única de Registro de Población bastará con copia simple del documento respectivo a que se refiere el párrafo anterior;

b) Copia certificada del documento que acredite los estudios académicos necesarios para cumplir con el perfil del puesto respectivo y, en su caso, copia simple del título de licenciatura, maestría y doctorado, así como de la cédula respectiva, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. De esta última deberá adjuntarse el reporte de la consulta realizada en la página electrónica del Registro Nacional de Profesionistas a cargo de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública; lo anterior, a fin de cumplir con la verificación de antecedentes profesionales.

Para los estudios realizados en el extranjero, copia certificada de los documentos a que se refiere el párrafo anterior, los cuales deben contar con la apostilla o legalización correspondiente y, en su caso, debe estar acompañada por la traducción efectuada por un perito autorizado, por embajadas, consulados o alguna institución educativa que forme parte del sistema educativo nacional. Para los estudios de media superior y, en su caso, superior, deberá acompañar, la revalidación de estudios otorgada por la Secretaría de Educación Pública;

c) Copia certificada o simple del comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a tres meses respecto a la fecha de expedición, el cual deberá actualizarse en caso de que éste cambie;

d) Currículum vitae del servidor público que incluya todos los puestos desempeñados y estudios realizados;

e) Constancia de la Clave Única de Registro de Población. De no haberse tramitado ni obtenido ésta, la Dirección General de Recursos Humanos podrá realizar el trámite correspondiente, siempre y cuando se presente copia certificada del acta de nacimiento expedida por la oficina del Registro Civil, o documento probatorio de identidad;

f) Escrito original en el que, bajo protesta de decir verdad, el servidor público manifieste encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un año, así como no haber sido sancionado por falta administrativa grave de conformidad con las disposiciones aplicables;

g) Escrito original en el que, bajo protesta de decir verdad, el servidor público manifieste que no se encuentra desempeñando otro empleo, cargo o comisión con cargo a la Federación;

h) Copia certificada de identificación oficial con fotografía;

i) Copia certificada del documento migratorio que acredite su condición de estancia que permita realizar actividades remuneradas, tratándose de extranjeros;

j) Original o copia certificada del documento expedido por el sector salud que acredite dicha condición, tratándose de personas con discapacidad;

k) Copia certificada de la cartilla liberada del Servicio Militar Nacional, en su caso;

l) Formato original de la Hoja de Registro de Datos del Servidor Público de Nuevo Ingreso, debidamente llenada y firmada por el interesado; y

m) Constancia emitida por la Secretaría de la Función Pública, de no encontrarse inhabilitado para desempeñar cargo público, con una antigüedad no mayor a 30 días naturales contados a partir de su fecha de expedición.

II. Documentación institucional:

a) Original de la solicitud y del acuse de recibo de las credenciales de identificación expedidas por el Consejo; en caso de robo, copia certificada

de la denuncia penal o querella interpuesta ante la autoridad competente y; en caso de extravío, original del escrito en el que bajo protesta de decir verdad, el servidor público manifieste las causas y circunstancias en que se dio dicho extravío;

b) Formato original de compatibilidad de empleo, en su caso;

c) Original con firma autógrafa o electrónica, o bien, copia autógrafa al carbón o certificada de las hojas únicas de servicios expedidas por el Consejo u otras instituciones públicas federales y, en su caso, del Distrito Federal, para efectos de acumulación de antigüedad;

d) Propuesta de nombramiento expedida por los titulares de las áreas administrativas;

e) Autorizaciones de las instancias competentes para desempeñar el cargo de actuario judicial, de secretario de juzgado o de tribunal; y para fungir como secretario en funciones de Juez de Distrito o de Magistrado de Circuito y toma de nota de encargado del despacho;

f) Original o copia con firma autógrafa o electrónica de los movimientos de personal;

g) Originales de incapacidades médicas expedidas por el ISSSTE;

h) Certificaciones por cambio de clave o puesto;

i) Copia certificada del dictamen de ratificación de Juez de Distrito o de Magistrado de Circuito;

j) Copia de los dictámenes de adscripción y readscripción de Juez de Distrito o de Magistrado de Circuito;

k) Original o copia de los escritos de renuncias que se hayan formulado en órganos jurisdiccionales y áreas administrativas;

l) Autorización de licencia prejubilatoria;

m) Dictámenes expedidos por el ISSSTE;

n) Copia certificada por la oficina del Registro Civil correspondiente del acta de defunción del servidor público o el documento homólogo en caso de fallecimiento en el extranjero;

o) Formato original de solicitud de inscripción individual al Fondo de Ahorro Capitalizable de los Trabajadores al Servicio del Estado, en su caso; y

p) Acuse del oficio para solicitar el pago por concepto de ayuda de gastos funerarios, pago de defunción, ayuda por invalidez y estímulo por jubilación.

III. Documentación disciplinaria:

a) Copias certificadas del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo y de la resolución, tratándose de quejas o denuncias administrativas;

b) Documentos remitidos por la Comisión Substanciadora Única del Poder Judicial de la Federación;

c) Original o copia de los comunicados, acuerdos y sentencias dictadas en contra de los servidores públicos por los titulares de los órganos jurisdiccionales, federales y locales;

d) Copias certificadas de las actas administrativas y de hechos levantadas en contra del servidor público; y

e) La documentación en la que conste la imposición de una medida disciplinaria al servidor público.

Las actas de visita y los informes circunstanciados no se integrarán a expedientes personales, salvo que así lo determine el órgano dictaminador, caso en el cual la Secretaría Ejecutiva de Disciplina proveerá lo conducente al envío de copia certificada de tales instrumentos a la Dirección General de Recursos Humanos.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA INTEGRACIÓN, RESGUARDO, CONSERVACIÓN, DEPURACIÓN Y PRÉSTAMO DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

Artículo 4. La Dirección General de Recursos Humanos es la única instancia facultada para resguardar el expediente personal de los servidores públicos, y tiene a su cargo la integración, custodia, conservación, depuración, uso y desglose de documentos que obran agregados en dichos expedientes, así como la obligación de garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los mismos.

Asimismo, dicha dirección general, será la facultada para autorizar el préstamo de los expedientes personales originales, a las áreas administrativas que en ejercicio de sus atribuciones los requieran, en cuyo caso deberán realizar la solicitud correspondiente, teniendo la obligación de conservarlos en las mismas condiciones en que los recibieron, sin poder alterar su contenido, ni provocar su deterioro. En todo caso, deberán reintegrarlos inmediatamente después de que realicen las diligencias o actuaciones para lo cual los requirieron.

Artículo 5. Todos aquellos documentos relacionados con trámites del personal que no se mencionen en el artículo 3 de este acuerdo, deberán ser resguardados por los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, a quienes les corresponda la atención de los asuntos de su competencia.

Artículo 6. Los servidores públicos de nuevo ingreso, tienen la obligación de proporcionar a los titulares de los órganos jurisdiccionales o áreas administrativas la documentación personal señalada en la fracción I, del artículo 3 de este acuerdo, para efecto de trámite del nombramiento. La cual deberá ser remitida de manera inmediata a la Dirección General de Recursos Humanos.

Artículo 7. En todos los casos de movimientos de personal los titulares de órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, deberán verificar que los candidatos propuestos a ocupar una plaza vacante, cumplan con los requisitos previstos en el perfil del puesto que establece el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal.

Artículo 8. Los titulares de los órganos jurisdiccionales y de las áreas administrativas o el servidor público que designen están facultados para certificar administrativamente la documentación personal señalada en los incisos a), b), c), h), i), j) y k) de la fracción I, del artículo 3 de este acuerdo, para tales efectos se autoriza la siguiente leyenda:

En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____, de dos mil _____, en términos de lo dispuesto en el artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones relativas a los expedientes personales de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, el (nombre, cargo y adscripción), certifica que el presente documento es copia fiel y exacta del original que se tuvo a la vista. CONSTE.
(Sello de la adscripción) (nombre y firma del servidor público que certifica)

Artículo 9. Para efectos de la actualización de los expedientes personales es obligación de los servidores públicos proporcionar a los titulares de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas la documentación señalada en el artículo 3, fracción I, de este acuerdo, la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Recursos Humanos, en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la fecha de su recepción.

Artículo 10. Los titulares de las Administraciones Regionales y Delegaciones Administrativas tienen la obligación de recabar, revisar, cotejar y validar que la documentación que se les presenta cumple con lo señalado en el artículo 3 de este acuerdo, para remitirla inmediatamente a la Dirección General de Recursos Humanos a efecto de que sea integrada al expediente personal correspondiente. Asimismo, deberán devolver al interesado o área remitente la documentación que no cumpla con lo previsto en el presente acuerdo.

Artículo 11. La Dirección General de Recursos Humanos es la única facultada para llevar a cabo la depuración de los expedientes personales a su cargo, con la finalidad de evitar la duplicidad de documentos y la inclusión de los no contemplados en este acuerdo. La documentación que se desglose de los expedientes personales con motivo de los procesos de depuración será destruida, sin dictamen de valoración documental, a menos que se trate de documentos originales de los servidores públicos a cargo el Consejo, en cuyo caso, se les devolverá a los interesados.

Concluida la depuración del expediente personal a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos, se procederá a foliar nuevamente los documentos que obren en el mismo, a fin de que coincida con el número de fojas que lo integran.

En todo caso se dejará constancia del proceso de depuración.

CAPÍTULO CUARTO
DE LA DIGITALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES PERSONALES

Artículo 12. La Secretaría Ejecutiva de Administración a través de la Dirección General de Recursos Humanos, deberá sistematizar y digitalizar la documentación contenida en los expedientes personales bajo resguardo de la citada dirección general, mediante la utilización de medios tecnológicos que proporcionará la Dirección General de Tecnologías de la Información, a efecto de contar con un mecanismo que facilite su control archivístico y su consulta de forma electrónica, evitando su deterioro y el préstamo físico del expediente personal.

Asimismo, deberá privilegiarse la utilización de la firma electrónica o sello digital, para la certificación de los documentos que obren en los expedientes personales.

Artículo 13. La Dirección General de Recursos Humanos podrá atender los requerimientos de copias, mediante la utilización del expediente digitalizado, certificándolas con firma electrónica, sello digital, u otra herramienta tecnológica, las cuales podrán ser enviadas a través de los medios electrónicos disponibles.

Las copias certificadas expedidas mediante los medios señalados, tendrán validez plena para todas las actuaciones y trámites que se realicen tanto al interior del Consejo, como ante otras autoridades, salvo disposición en contrario.

Artículo 14. La Dirección General de Recursos Humanos pondrá los expedientes digitalizados a disposición de las áreas administrativas competentes que requieran consultar o contar con copias certificadas de los documentos que obran en ellos, los cuales podrán examinarlos y, en su caso, imprimirlos, mismos que serán certificados mediante firma electrónica, sello digital, u otra herramienta tecnológica que genere el propio sistema, y tendrán plena validez para la realización de los trámites y diligencias que corresponda, salvo disposición en contrario.

En este sentido, en los casos en que las áreas administrativas soliciten a la Dirección General de Recursos Humanos, copia certificada de los expedientes personales o de documentos que obren en los mismos, para la atención de asuntos de su competencia, deberán de conservar o destruir dichas copias certificadas sin dictamen de valoración documental, evitando su devolución a dicha dirección general.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo.

TERCERO. Se abroga el Acuerdo General Número 28/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determinan los documentos e información que deben contener los expedientes de personal, así como

la obligación de proporcionarlos que tienen los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

QUINTO. Las Direcciones Generales de Recursos Materiales; de Tecnologías de la Información; y de Programación y Presupuesto, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo las acciones necesarias, para que la Dirección General de Recursos Humanos esté en posibilidad de dar cumplimiento a lo previsto en el presente acuerdo.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 44/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones relativas a los expedientes personales de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General Número 28/2000, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determinan los documentos e información que deben contener los expedientes de personal, así como la obligación de proporcionarlos que tienen los servidores públicos adscritos a los órganos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 1005.

ACUERDO GENERAL 45/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL SIMILAR POR

EL QUE SE OTORGA Y REGULA LA PRESTACIÓN DEL FONDO DE RESERVA INDIVIDUALIZADO BAJO EL ESQUEMA DE FONDO DE AHORRO PARA EL PERSONAL DE NIVEL OPERATIVO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. El Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con los artículos 5, fracción I, inciso d), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 4, fracción III, del Acuerdo General 66/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta el proceso presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal, en su calidad de ejecutor del gasto con plena autonomía presupuestal autorizará las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos;

TERCERO. Que el 21 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se otorga y regula la prestación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se establecen las bases del funcionamiento del mismo, y su operación como Fondo de Ahorro, el cual opera con los principios de participación voluntaria; igualdad de derechos y obligaciones de los participantes y cooperación, solidaridad y equidad;

CUARTO. Que en un replanteamiento del Fondo de Ahorro, se ha determinado la conveniencia técnica, operativa y fiscal de considerar para efectos

del patrimonio del Fondo de Reserva Individualizado, únicamente la Aportación Ordinaria, los rendimientos devengados por ésta, y los préstamos, lo cual beneficiaría sustancialmente su operación, amén de que hasta el momento no se hicieron aportaciones adicionales por los sujetos beneficiados. Asimismo, en pro de la transparencia e información pronta y oportuna de los servidores públicos beneficiados por esta prestación, se consagra su derecho a que de manera directa la Institución financiera le permita la consulta vía electrónica de los reportes de saldos y movimientos de su cuenta individual, y de ser el caso y a petición de los servidores públicos, podrán recibir dicha información en forma impresa.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se **reforman** los artículos 2, inciso I; 4, fracción IV; 11, párrafo primero; 12, inciso e); 13; 14; 15, primer párrafo; 20, primer párrafo; y se **deroga** el inciso B del artículo 2; la fracción I del artículo 3; la fracción III del artículo 4; y el artículo 7; del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se otorga y regula la prestación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar como sigue:

"**Artículo 2. …**

A. …

B. Se deroga.

C a **H …**

I. Patrimonio del Fondo: Es la suma de dinero que se constituye por las aportaciones ordinarias y los rendimientos devengados por éstas y por los préstamos;

J a **N …**

Artículo 3. …

I. Se deroga.

II. …

Artículo 4. …

I. y **II. …**

III. Se deroga.

IV. Los rendimientos devengados por las aportaciones ordinarias; y,

V. …

Artículo 7. Se deroga.

Artículo 11. La Institución llevará una cuenta individual por cada servidor público inscrito al Fondo, en la que se refleje de manera separada las aportaciones ordinarias realizadas por el servidor público y las del Consejo, además de los rendimientos obtenidos tanto por las aportaciones ordinarias, como por los préstamos otorgados con cargo al patrimonio del Fondo.

…

Artículo 12. …

a) a **d) …**

e) El monto total por separado de las aportaciones ordinarias, así como de los préstamos; y,

f) …

Artículo 13. La Institución deberá dar acceso a los servidores públicos del servicio de Internet para consulta de reportes de saldos y movimientos de su cuenta individual.

En el supuesto de que el servidor público, solicite que se le remitan los reportes de saldos y movimientos en forma impresa, podrá presentar dicha petición ante la Dirección General de Servicios al Personal, o en su caso, ante la Coordinación de Administración Regional, a través de sus administraciones regionales o delegaciones administrativas.

Artículo 14. El Consejo enterará a la Institución las aportaciones ordinarias que correspondan al patrimonio del Fondo, a más tardar el día hábil siguiente de realizadas las aportaciones.

Artículo 15. La sociedad de inversión deberá proporcionar la información respecto al monto de los rendimientos a partir del día hábil siguiente a aquel en que hayan ingresado las aportaciones ordinarias, lo cual deberá acreditar conforme a los mecanismos de inversión de los recursos.

...

Artículo 20. El servidor público podrá cancelar, disminuir o incrementar sus aportaciones al Fondo por así convenir a sus intereses, previo aviso que realice a la Dirección General de Servicios al Personal o en su caso, ante la Coordinación de Administración Regional, a través de sus administraciones regionales o delegaciones administrativas, dentro del periodo que señale el Consejo.

...

...".

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de Administración para que en coordinación con las áreas competentes, someta a la aprobación de la Comisión de Administración, los nuevos lineamientos para la operación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal, en razón a la nueva conformación del patrimonio del mismo; y en su oportunidad difunda su contenido a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación con excepción de los de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 45/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga diversas disposiciones del similar por el que se otorga y regula la prestación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de quince de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a diez de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 66/2006, que reglamenta el proceso presupuestario en el Consejo de la Judicatura Federal, y por el que se otorga y regula la prestación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 1137 y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2677, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 46/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DENOMINACIÓN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. De conformidad con en el artículo 94, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 81, fracciones VI y XXIV, y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; esta última atribución, la ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en términos de los artículos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de nueve de julio de dos mil catorce, aprobó el Acuerdo General 21/2014, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia, entidad y sede mencionadas;

CUARTO. Mediante oficio número 99/2014-A, recibido en la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, el licenciado Guillermo Baltazar Jiménez, Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, solicita se aclare "la actual denominación correcta del Juzgado Primero en Materia de Procesos Penales Federales, en H. Matamoros, Tamaulipas", en razón de que se aprecia una diferencia con la denominación de los tres órganos jurisdiccionales de la especialidad y sede, materia de la presente consulta.

En el análisis respecto de la consulta señalada que realizó la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, se advierte que existen diferencias entre las de-

nominaciones de los juzgados especializados en procesos penales federales del territorio nacional, incluso en una misma sede (Matamoros), se hace más evidente la mencionada diferencia, ya que los dos Juzgados de Distrito más antiguos se denominan distinto que el de reciente creación, según el acuerdo de inicio de funciones respectivo, a pesar de tener la misma especialidad. Es decir, los dos primeros se llaman "en Materia de Procesos Penales Federales", en tanto que el más reciente solamente es "de Procesos Penales Federales";

QUINTO. En el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, específicamente en el punto SEGUNDO, se observa un esfuerzo de unificación en las denominaciones de los juzgados especializados en procesos penales federales, omitiendo las palabras "en Materia", para solamente llamarlos "Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales"; lo anterior, atendiendo al criterio que en su momento fue discutido en el Pleno, respecto a que la especialidad no es en realidad una materia, sino que forma parte de la materia penal. Sin embargo, no se determinó específicamente la modificación de las denominaciones de los órganos jurisdiccionales, por lo que en la actualidad, la mayoría de los órganos jurisdiccionales de la especialidad que se trata, se denominan "Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales" y, solamente son excepciones los seis órganos jurisdiccionales de esta clase y especialidad con sede en Toluca, Estado de México, así como los dos Juzgados de Distrito en Matamoros, Tamaulipas, aludidos en la consideración CUARTA del presente acuerdo.

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y legales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Los juzgados de Distrito especializados en procesos penales federales de toda la República Mexicana se denominarán "Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales".

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. La Oficialía Mayor, a través de las áreas correspondientes, dotará a los órganos jurisdiccionales que cambien su denominación con motivo del presente acuerdo, de la infraestructura y equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones (papelería, sellos, placas, entre otros).

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 46/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales del Poder Judicial de la Federación, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de veintidós de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 21/2014, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la materia, entidad y sede mencionadas; y, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 2041; y *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 49/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DE LOS

TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BOCA DEL RÍO Y XALAPA, VERACRUZ, ASÍ COMO LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN EN XALAPA Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ACTUAL OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE BOCA DEL RÍO, EN EL MISMO ESTADO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de su competencia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, atribución esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales;

TERCERO. El artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. La especialización plena de órganos jurisdiccionales contribuye a la eficiencia en el trámite de los asuntos y en la calidad de las resolu-

ciones que se emiten, al agrupar el estudio de los diversos temas jurídicos en las ramas específicas del derecho, además de la circunstancia particular de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, que se ubican en dos residencias distintas como son Boca del Río y Xalapa en el Estado de Veracruz, con la medida que se implementa se concentrará cada una de las materias en una sede especifica en beneficio de los justiciables.

El artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala que cuando se establezca en un circuito en materia de amparo varios Tribunales Colegiados con residencia en un mismo lugar que deban conocer de una misma materia, tendrán una oficina de correspondencia común, en concordancia con el precepto invocado se hace necesario la apertura de una unidad administrativa como la indicada, como medida indispensable para la nueva especialización de que se trata, la cual deberá ubicarse en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Los argumentos antes señalados, hacen viable, la especialización plena de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencias en Boca del Río y Xalapa en el Estado de Veracruz;

QUINTO. En ese contexto, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil catorce, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos tuvo por recibido el dictamen relativo al cambio de denominación y especialización plena de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, ambos en el Estado de Veracruz, y determinó se enviara al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, el citado Pleno en sesión de cuatro de junio de dos mil catorce, aprobó el referido dictamen;

SEXTO. Para la aplicación e inicio del Acuerdo de Cambio de Denominación y Especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, se instruye de modo enunciativo mas no limitativo que los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo se conserven por el órgano jurisdiccional que los posee y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos; evitando el traslado de expedientes entre las sedes de Boca del Río y de Xalapa en el Estado de Veracruz, y el consecuente retraso en la administración de justicia;

SÉPTIMO. De acuerdo con la información proporcionada por la Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, en la actualidad se cuenta con una superficie de nueve metros cuadrados para

que pueda ser instalada de manera provisional la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, toda vez que actualmente se está trabajando en el proyecto dónde se ubicará definitivamente ésta.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, así como en las consideraciones vertidas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. A partir del uno de diciembre de dos mil catorce, cambian de denominación y especialización los cuatro Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, en el Estado de Veracruz.

SEGUNDO. A partir de la fecha señalada en el punto anterior, los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, en el Estado de Veracruz, se denominarán y tendrán la especialización siguiente:

ACTUAL DENOMINACIÓN	NUEVA DENOMINACIÓN
Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.	Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.	Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.
Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.	Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.
Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.	Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.

Los Tribunales Colegiados de que se trata conservarán la misma jurisdicción y domicilio actuales.

Bajo ese contexto, los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso a); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

Los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso d); II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

TERCERO. Desde la fecha señalada en el punto primero del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, cambia de denominación para llamarse Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz.

La Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, turnará los asuntos entre los órganos jurisdiccionales a los que prestará servicio conforme a lo establecido en el Acuerdo General 14/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran.

CUARTO. A partir del uno de diciembre de dos mil catorce, se crea e inicia funciones la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz.

La Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, turnará los asuntos entre los órganos jurisdiccionales a los que prestará servicio conforme a lo establecido en el Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran.

QUINTO. Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, realizarán las modificaciones necesarias a la configuración del sistema computarizado para la recepción y distribución de asuntos en las Oficinas de Correspondencia Común de que se trata.

SEXTO. A partir del uno de diciembre de dos mil catorce, los presidentes de los Tribunales Colegiados que cambian de denominación y especialización, con asistencia de un secretario, deberán ordenar en los libros de gobierno, la certificación de su nueva especialidad y denominación, y continuarán con las anotaciones en los asuntos que conserven, así como el registro de los correspondientes a su nueva competencia, es decir, conforme al número consecutivo que corresponda; en términos a lo dispuesto en el Acuerdo General 34/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

SÉPTIMO. Cada órgano jurisdiccional que cambia de denominación y especialización deberá levantar por duplicado un acta administrativa del inicio de su nueva competencia, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la misma.

OCTAVO. Se modifica el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, en el punto **SEGUNDO**, apartado **VII. SÉPTIMO CIRCUITO**, número **1**, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. …

I. a VI. …

VII. SÉPTIMO CIRCUITO:

1. Ocho Tribunales Colegiados especializados: dos en materia penal y dos en materia administrativa, con sede en Boca del Río; dos en materia civil y dos en materia de trabajo, con residencia en Xalapa, todos en el Estado de Veracruz.

2. …

3. …

VIII. a **XXXII …".**

NOVENO. La Oficialía Mayor con sus respectivas áreas, dotarán al nuevo órgano jurisdiccional de la infraestructura y equipamiento necesario para el desempeño de sus funciones.

DÉCIMO. El Pleno, las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo.

TERCERO. Los Tribunales Colegiados que cambian de denominación y especialización en el Séptimo Circuito, de modo enunciativo mas no limitativo, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación y continuarán con su competencia originaria para la atención de los mismos; evitando el traslado de expedientes y el retraso en la impartición de justicia.

CUARTO. La Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, deberá proveer a los Tribunales Colegiados que se especializan y cambian de denominación, motivo del presente acuerdo, de los recursos materiales necesarios de identificación (sello oficial, directorios, placas de denominación, papelería, etc.), para que a la brevedad posible cuenten con ellos.

QUINTO. La integración de los Plenos Especializados del Séptimo Circuito, se realizará a partir del mes de enero del año dos mil quince, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 49/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la oficina de correspondencia común en Xalapa y cambio de denominación de la actual oficina de correspondencia común de Boca del Río, en el mismo Estado, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 14/2014, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran; 34/2000, relativo a la determinación de los libros de control que obligatoriamente deberán llevar los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y 11/2014, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo III, junio de 2014, página 1982; *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 1327; Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559; y *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, Tomo III, mayo de 2014, página 2421, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 51/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera

tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal en el Estado de Puebla;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como objeto establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

El veinticuatro de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en los Estados de Durango y Puebla;

OCTAVO. El ocho de octubre de dos mil catorce fue aprobado el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales; y

NOVENO. Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Puebla con residencia en la ciudad de San Andrés Cholula.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula;

II. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

III. Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio: Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento;

IV. Órganos Jurisdiccionales: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

V. Pleno: Pleno del Consejo; y

VI. Tribunales Unitarios de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio: Tribunales de Alzada.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

Artículo 4. El Centro se integra por un administrador y, además, por:

I. Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

II. Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

III. Juez Tercero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

IV. Juez Cuarto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

V. Primer Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio; y

VI. Segundo Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como Jueces de control y tribunales de enjuiciamiento, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los órganos jurisdiccionales del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los órganos jurisdiccionales del Centro comprenderá el Estado de Puebla, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Avenida Osa Menor No. 82, Ciudad Judicial, Siglo XXI, Piso 13, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, Código Postal 72810.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro, contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los órganos jurisdiccionales que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante una misma etapa procesal.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias y las vacaciones para equilibrar la distribución de los asuntos.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado el Oficial de Partes con la anuencia y supervisión del administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados durante la misma etapa del procedimiento al órgano jurisdiccional correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los órganos jurisdiccionales, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del órgano jurisdiccional, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces en su función de control se realizarán de forma semanal, en el siguiente orden:

I. Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

II. Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

III. Juez Tercero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio; y

IV. Juez Cuarto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

Los titulares de los Tribunales de Alzada del Centro acordarán el turno de guardia en días y horas inhábiles, a fin de que estén en posibilidad de resolver las apelaciones de término a que se refiere el Código Nacional de Procedimientos Penales, y deberán de comunicarlo a la Secretaría Ejecutiva del Pleno y de la Presidencia.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los titulares de los órganos jurisdiccionales del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo necesarios, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio

Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial.

Artículo 17. En caso de que por ausencia, recusación o impedimento sea necesario suplir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro, será sustituido por otro del mismo, en el orden secuencial de su denominación, salvo que ello no sea posible, supuesto en el cual, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano, en el orden de su denominación.

Tratándose de un Tribunal de Alzada del Centro la sustitución recaerá en el otro Tribunal de Alzada del mismo, salvo que ello no sea posible, supuesto en el cual, la sustitución recaerá en los Tribunales de Alzada del Centro de Justicia Penal más cercano, en el orden de su denominación.

Artículo 18. El personal de los Juzgados de Distrito del Centro junto con su titular disfrutará de los periodos vacacionales durante la segunda quincena del mes de julio, el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, en el caso del primer periodo. Y durante la segunda quincena del mes de diciembre y el mes de enero tratándose del segundo periodo, en el orden que los titulares de dichos órganos jurisdiccionales consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine.

El personal de los Tribunales de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales durante la segunda quincena de los meses de julio y diciembre, así como la primera quincena de los meses de agosto y enero. Lo mismo sucederá con el personal de la administración del Centro, sin embargo, en este caso el administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos durante dichos periodos, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal adoptarán con la debida anticipación, las medidas necesarias para que los Centros de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entren en operación en la fecha señalada en este artículo.

El administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. La primera guardia corresponderá al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, misma que iniciará el veinticuatro de noviembre a partir de las 00:00 horas.

CUARTO. Hasta en tanto se crean los Tribunales de Alzada a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 4 de este Acuerdo, se habilitan, respectivamente, a los Tribunales Unitarios Primero y Segundo del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Dichos Tribunales Unitarios precisarán en los actos procesales que celebren la denominación con la que actúan, dependiendo si lo hacen conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Estos Tribunales Unitarios quedan exceptuados de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos de los artículos 17 y 18 del mismo instrumento normativo se regirán por las disposiciones aplicables como Tribunales Unitarios de Circuito.

QUINTO. A la entrada en vigor de la legislación en materia de ejecución de penas será habilitado el Juez de Distrito de Ejecución de Sanciones Penales correspondiente.

SEXTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 51/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández. México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647 y en la diversa 3081 de esta publicación, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 52/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal en el Estado de Durango;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como objeto establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al

inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

El veinticuatro de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en los Estados de Durango y Puebla;

OCTAVO. El doce de noviembre de dos mil catorce fue aprobado el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; y

NOVENO. Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre;

II. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

III. Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio: Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento;

IV. Órganos jurisdiccionales: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

V. Pleno: Pleno del Consejo; y

VI. Tribunales Unitarios de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio: Tribunales de Alzada.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

Artículo 4. El Centro se integra por un administrador y, además, por:

I. Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

II. Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

III. Juez Tercero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

IV. Juez Cuarto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

V. Juez Quinto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio; y

VI. Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los órganos jurisdiccionales del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los órganos jurisdiccionales del Centro comprenderá el Estado de Durango, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro, será el ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, esquina Boulevard José María Patoni (avenida San Ignacio) 101, Predio El Tule, código postal 34217, en Durango, Durango.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de la competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una oficialía de partes común, que dará servicio a los órganos jurisdiccionales que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante una misma etapa procesal.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberán tomar en consideración las guardias y las vacaciones para equilibrar la distribución de los asuntos.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado el oficial de partes con la anuencia y supervisión del administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados durante la misma etapa del

procedimiento al órgano jurisdiccional correspondiente, sin embargo deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, la oficialía de partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles la oficialía de partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los órganos jurisdiccionales, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del órgano jurisdiccional, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces en su función de control se realizarán de forma semanal, en el siguiente orden:

I. Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

II. Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

III. Juez Tercero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio;

IV. Juez Cuarto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio; y

V. Juez Quinto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los titulares de los órganos jurisdiccionales del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia secretaría ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo necesarios, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial.

Artículo 17. En caso de que por ausencia, recusación o impedimento sea necesario suplir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro, será sustituido por otro del mismo, en el orden secuencial de su denominación, salvo que ello no sea posible, supuesto en el cual, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano, en el orden de su denominación.

Tratándose del Tribunal de Alzada del Centro la sustitución recaerá en el Tribunal Unitario del Vigésimo Quinto Circuito, para lo cual en este caso se habilita a dicho tribunal para conocer como Tribunal de Alzada respecto de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal de los Juzgados de Distrito del Centro junto con su titular disfrutará de los periodos vacacionales durante la segunda quincena del mes de julio, el mes de agosto y la primera quincena de septiembre, en el caso del primer periodo. Y durante la segunda quincena del mes de diciembre y el mes de enero tratándose del segundo periodo, en el orden que los titulares de dichos órganos jurisdiccionales consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales durante la segunda quincena de los meses de julio y diciembre, así como la primera quincena de los meses de agosto y enero. Lo mismo sucederá con el personal de la administración del Centro, sin embargo, en este caso el administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal adoptarán con la debida anticipación, las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este acuerdo entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. La primera guardia corresponderá al Juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, misma que iniciará el veinticuatro de noviembre a partir de las 00:00 horas.

CUARTO. A la entrada en vigor de la legislación en materia de ejecución de penas el Juez Quinto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, cambiará su competencia y denominación a la de Juez de Distrito de Ejecución de Sanciones Penales. A partir de ese momento la oficialía de partes dejará de turnarle asuntos como Juez de Control y de Enjuiciamiento y cesará en sus funciones como Juez Quinto de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, conservando su competencia anterior para la conclusión de todos asuntos que le fueron turnados antes de la vigencia de las disposiciones legales señaladas.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el administrador del Centro con apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 52/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, y 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647 y en la página 3081 de esta misma publicación, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 53/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ADICIONA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL

NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones

debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal en el Estado de Durango, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otro en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como objeto establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

El veinticuatro de septiembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, en los Estados de Durango y Puebla;

OCTAVO. El ocho de octubre de dos mil catorce fue aprobado el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales; y

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó los acuerdos por los que se crearon los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de Durango y Puebla.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Se adiciona el numeral QUINTO BIS del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"**QUINTO BIS.** Centros de Justicia Penal Federal:

1. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango se integrará por cinco Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio, y un Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio, todos con residencia en Durango, Durango.

2. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla se integrará por cuatro Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio, y dos Tribunales Unitarios de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio, todos con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

Los órganos jurisdiccionales de los centros de justicia penal federal serán competentes en todo el territorio de la entidad federativa de su residencia."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 53/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de doce de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a doce de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 21 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, y en la página 3081 de esta misma publicación, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 54/2014, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN, Y QUE REFORMA EL DIVERSO 18/2008 POR EL QUE SE CREA EL PROPIO CENTRO AUXILIAR, ASÍ COMO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE LO INTEGRARÁN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. El artículo 17 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

TERCERO. El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV y V, y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y los límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales Colegiados, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece;

CUARTO. Por Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se creó el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; en el punto cuarto de la citada normativa se estableció el funcionamiento de una Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán; con el propósito de dar servicio a los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto del propio Centro Auxiliar, en la sede mencionada; y,

QUINTO. Por Acuerdo General 38/2014, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que a las veinticuatro horas del treinta y uno de octubre de dos mil catorce, concluyera funciones el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán y a partir del uno de noviembre del presente año, se transformara e iniciara funciones como Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Morelia; por ello,

la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, que le prestaba servicio debe concluir funciones, ya que con la transformación referida, actualmente sólo presta servicio al Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del propio centro auxiliar, el cual es el único órgano jurisdiccional auxiliar en funciones en esa residencia; por lo que puede recibir los asuntos de su conocimiento, en su propia oficialía de partes.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. A las veinticuatro horas del quince de noviembre de dos mil catorce concluye funciones la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.

SEGUNDO. Se modifica el punto Cuarto del Acuerdo General 18/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, para quedar como sigue:

"CUARTO. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. El Centro Auxiliar de la Tercera Región contará con las Oficinas de Correspondencia Común siguientes: Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato y Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco; éstas se integrarán con las plazas que fije la Dirección General de Estadística Judicial."

TERCERO. A partir del dieciséis de noviembre de dos mil catorce, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, recibirá los asuntos por conducto de su oficialía de partes.

CUARTO. El Pleno y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultados para interpretar y resolver cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 54/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, y que reforma el diverso 18/2008 por el que se crea el propio centro auxiliar, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, César Esquinca Muñoa, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 18/2008, por el que se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán; por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; y, 38/2014, relativo a la conclusión de funciones del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, y su transformación en Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, fecha de inicio de funciones y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados en la materia, circuito y residencia indicados, así como a la creación de su oficina de correspondencia común citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, abril de 2008, página 2541; Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 11, Tomo III, octubre de 2014, página 3024, respectivamente.

ACUERDO CCNO/23/2014, DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS JUZGADOS TERCERO, CUARTO, NOVENO Y DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. En sesión del veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, mismo que en la fracción VIII de su artículo 42, faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, el acordar las acciones tendentes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales dentro de la misma ciudad o localidad;

CUARTO. La aplicación de espacios inmobiliarios a las necesidades de creación de nuevos órganos judiciales, impone al Consejo de la Judicatura Federal, el acordar acciones para el uso racional de los locales donde se ubican los juzgados y tribunales federales, en ese sentido, se ponderó por las áreas administrativas del propio Consejo, el aprovechar los espacios físicos que cuen-

tan con las especificaciones normativas y de seguridad, dignas en la prestación del servicio de impartición de justicia;

QUINTO. Por otra parte, el artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente realizar el cambio de domicilio de los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el cambio de domicilio de los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal.

SEGUNDO. El nuevo domicilio de los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal será en Avenida Insurgentes Sur No. 2065, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, México, Distrito Federal, C.P. 01000.

TERCERO. Los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, iniciarán funciones en su nuevo domicilio el diez de noviembre de dos mil catorce.

CUARTO. A partir de la fecha señalada en el punto que antecede, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cita, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el punto segundo de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. Para conocimiento del público en general y por la trascendencia del mismo publíquese el acuerdo en la página del Consejo de la Judicatura Federal, como aviso importante.

Los órganos judiciales a que se refiere este acuerdo y la oficina de correspondencia común que les presta servicio en su actual domicilio, deberán colocar avisos en lugares visibles en relación a su cambio de domicilio.

CUARTO. El calendario de guardias de turno en días y horas inhábiles de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, seguirá vigente en los términos autorizados.

EL MAGISTRADO EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/23/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil catorce, por los señores consejeros: presidente Felipe Borrego Estrada, César Esquinca Muñoa y Alfonso Pérez Daza.—México, Distrito Federal, a treinta de octubre de dos mil catorce (D.O.F. DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647.

ACUERDO CCNO/24/2014, DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL PERIODO DE EXCLUSIÓN DEL TURNO DE NUEVOS

ASUNTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN QUERÉTARO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales Colegiados, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de su competencia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos de los artículos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, aprobó el Acuerdo General 29/2014 del propio Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Cuarto Tribunal Colegiado en el Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil catorce.

En dicho acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el nuevo órgano jurisdiccional iniciara funciones el uno de octubre

de dos mil catorce, asimismo, se acordó un periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos que comprendió del uno al quince de octubre de dos mil catorce. Lo anterior, con el objetivo de nivelar las cargas de trabajo entre los Tribunales Colegiados del referido circuito;

CUARTO. Del análisis de los resultados estadísticos proporcionados por los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, se considera necesario otorgar un nuevo periodo de exclusión para nivelar las cargas de trabajo entre los referidos órganos jurisdiccionales.

Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito Reporte estadístico correspondiente al periodo de exclusión de turno (1 al 15 de octubre de dos mil catorce)							
TC	**Existencia anterior**	**Ingreso**	**Reingreso**	**Total**	**Egreso total**	**Envío temporal a TC Aux.**	**Existencia**
1o.	492	15	0	507	5	1	502
2o.	528	15	0	543	38	0	505
3o.	624	13	0	637	4	8	633
4o.	0	216	0	216	32	0	184

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, expide el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Se otorga un periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro.

El periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos para los Tribunales Colegiados antes citados, comprenderá del tres al siete de noviembre de dos mil catorce; por lo tanto, todos los asuntos nuevos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Segundo Circuito, se remitirán al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos.

Asimismo, los asuntos relacionados, serán turnados al órgano jurisdiccional que tenga los antecedentes, de conformidad con el Acuerdo General

14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran.

SEGUNDO. Al finalizar el periodo de la nueva exclusión del turno otorgado, los presidentes de los Tribunales Colegiados de que se trata, deberán informar sobre los resultados obtenidos a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, y a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos.

TERCERO. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, resolverá las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación de este acuerdo, así como acordar la conclusión anticipada o extensión del plazo previsto en el punto primero de este acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

EL MAGISTRADO EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/24/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro, fue aprobado por la propia comisión en sesión privada ordinaria celebrada el treinta de octubre de dos mil catorce, por los consejeros: presidente Felipe Borrego Estrada, César Esquinca Muñoa y Alfonso Pérez Daza.—México, Distrito Federal, a treinta de octubre de dos mil catorce (D.O.F. DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 29/2014, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos, y 14/2014, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2706, y Décima Época, Libro 7, Tomo III, junio de 2014, página 1982, respectivamente.

ACUERDO CCNO/25/2014, DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN ENSENADA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. En sesión de veinticinco de septiembre de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, mismo que en la fracción VIII de su artículo 42, faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, el acordar las acciones tendentes a la adecuada y pronta instalación y cambio de domicilio de los órganos jurisdiccionales y sus oficinas de correspondencia común que les prestan servicio dentro de la misma ciudad o localidad;

CUARTO. El artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que las unidades administrativas, como lo son las oficinas de correspondencia común, adscritas a los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes, para garantizar que la recepción, turno y distribución de asuntos, contribuya en la impartición de una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado. En virtud de lo anterior el Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente realizar el cambio de domicilio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza el cambio de domicilio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Ensenada.

SEGUNDO. El nuevo domicilio de la Oficina de Correspondencia en cita será el ubicado en Calle Delante Número 314, esquina Pedro Loyola, colonia Carlos Pacheco, código postal 22880, Ensenada, Baja California.

TERCERO. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, iniciará funciones en su nuevo domicilio el diez de noviembre de dos mil catorce.

CUARTO. A partir de la fecha señalada en el punto que antecede, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la

competencia de la unidad administrativa en cita, deberá dirigirse al domicilio señalado en el punto segundo del presente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, así como en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.

TERCERO. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada y la oficina de correspondencia común que les presta servicio, deberán colocar avisos en lugares visibles en relación al cambio de domicilio de la unidad administrativa de que se trata.

EL MAGISTRADO EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo CCNO/25/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, fue aprobado por la propia Comisión en sesión privada ordinaria celebrada el tres de noviembre de dos mil catorce, por los señores consejeros: presidente Felipe Borrego Estrada, César Esquinca Muñoa y Alfonso Pérez Daza.—México, Distrito Federal, a tres de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647.

AVISO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE,

POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 29/2012, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ GUADALUPE ARIAS ORTEGA.

Se hace del conocimiento que en sesión ordinaria de ocho de octubre de dos mil catorce, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiocho de mayo de dos mil catorce por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 29/2012, interpuesto por el licenciado José Guadalupe Arias Ortega, resolvió:

PRIMERO. Derivado del cumplimiento a la ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil catorce pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 29/2012, se determinó que el licenciado José Guadalupe Arias Ortega resultó vencedor en el Sexto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Jueces de Distrito en Materia Mixta.

SEGUNDO. En consecuencia, se designa a José Guadalupe Arias Ortega, Juez de Distrito, reservándose su adscripción hasta el momento en que exista una vacante y el Pleno del Consejo lo determine.

TERCERO. Remítase copia certificada de la resolución a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocimiento y en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión administrativa 29/2012.

Notifíquese, haciéndolo personalmente al recurrente y por oficio a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido (D.O.F. DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2014).

México, D.F., a 6 de noviembre de 2014

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO

AVISO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE, POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 76/2013, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDGAR SALVADOR VARGAS VALLE.

SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EL TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE POR LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN EL RECURSO DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA 76/2013, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO EDGAR SALVADOR VARGAS VALLE, RESOLVIÓ:

PRIMERO. Derivado del cumplimiento a la ejecutoria de trece de agosto de dos mil catorce, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el recurso de revisión administrativa 76/2013, se declara vencedor al licenciado Edgar Salvador Vargas Valle, en el Décimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces en Juzgado de Distrito de Competencia Mixta.

SEGUNDO. En consecuencia, se designa a Edgar Salvador Vargas Valle, Juez de Distrito, reservándose su adscripción hasta el momento en que exista una vacante y el Pleno del Consejo lo determine.

TERCERO. Remítase copia certificada de la resolución a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocimiento y en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el recurso de revisión administrativa 76/2013.

Notifíquese, haciéndolo personalmente al recurrente y por oficio a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en su oportuni-

dad, archívese el expediente como asunto concluido (D.O.F. DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014).

México, D. F., a 12 de noviembre de 2014

ATENTAMENTE

EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO

Incorporación a las Comisiones Permanentes del Consejo de la Judicatura Federal de la consejera Martha María Del Carmen Hernández Álvarez

	CONSEJEROS
COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL	**PRESIDENTE: J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ** CÉSAR ESQUINCA MUÑOA MARTHA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

	CONSEJEROS
COMISIÓN DE ADSCRIPCIÓN	**PRESIDENTE: MANUEL ERNESTO SALOMA VERA** J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ MARTHA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ

	CONSEJEROS
COMISIÓN DE VIGILANCIA, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN	**PRESIDENTA: MARTHA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ** FELIPE BORREGO ESTRADA ALFONSO PÉREZ DAZA

COMISIÓN PARA LA TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	CONSEJEROS **PRESIDENTA: MARTHA MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ÁLVAREZ** FELIPE BORREGO ESTRADA ALFONSO PÉREZ DAZA

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que la incorporación a las comisiones permanentes del Consejo de la Judicatura Federal de la consejera Martha María del Carmen Hernández Álvarez, fue aprobada por el Pleno del propio consejo, en sesión ordinaria de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, César Esquinca Muñoa, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veinte de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 27 DE NOVIEMBRE DE 2014).

LISTA DE VENCEDORES EN EL PRIMER CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL ACUSATORIO.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—En sesión de nueve de julio de dos mil catorce, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 22/2014, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de julio siguiente;

SEGUNDO.—En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del

artículo 3 del acuerdo general citado en el considerando que antecede, en virtud de las reformas constitucionales de dieciocho de junio de dos mil ocho, mediante las cuales, entre otros aspectos, se establecieron las bases del nuevo sistema procesal penal acusatorio y los principios que lo rigen, se hace necesario realizar un proceso transparente y objetivo de selección de Jueces especializados en el sistema penal acusatorio, toda vez que se trata de un nuevo procedimiento con instituciones y principios distintos a los que prevalecen en el sistema actual, que por tanto requiere de una preparación diversa a la hasta hoy exigida para el cargo de Juez de Distrito, por ello, se ordenó emitir la convocatoria correspondiente dirigida a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que estuvieran interesados en participar en el primer concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, y cumplieran con los requisitos establecidos para ello;

TERCERO.—El cuestionario relativo a la primera etapa se aplicó el uno de septiembre de este año, y el diecisiete siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con base en las calificaciones obtenidas por los participantes, determinó quiénes pasarían a la segunda etapa.

La resolución del caso práctico se llevó a cabo el seis y el siete de octubre del presente año;

CUARTO.—El examen oral se aplicó el veintisiete y el veintiocho de octubre citado;

QUINTO.—La puntuación obtenida en el caso práctico y examen oral, así como de los factores del desempeño judicial y la calificación final se concentraron en una lista en orden descendente de los participantes.

En sesión de veintinueve de octubre de este año, la Comisión de Carrera Judicial tuvo por recibido ese documento, el que determinó someter a consideración del Pleno del Consejo;

SEXTO.—En sesión de veintinueve de octubre de dos mil catorce, una vez analizado el documento enviado por la Comisión de Carrera Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo aprobó, y conforme al número de plazas sujetas a concurso, de acuerdo a la calificación final que obtuvieron designó a cinco vencedores para ocupar el cargo de Juez de Distrito.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas, se ordena publicar la

LISTA DE VENCEDORES EN EL PRIMER CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN EL NUEVO PROCESO PENAL ACUSATORIO.

PRIMERO.—Las personas que en el primer concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio fueron designadas para ocupar dicho cargo son:

1. Beltrán González Ana Luisa

2. Estrada Sánchez Amílcar Asael

3. Mora Madrid Abril Verónica

4. Rodríguez Escobar Gabriela Guadalupe

5. Villar Ceballos Ganther Alejandro

SEGUNDO.—Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el artículo 64 del Acuerdo General 22/2014, el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los nombramientos correspondientes.

TRANSITORIO

ÚNICO.—Publíquese la presente lista en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, en los estrados de la sede central del Instituto, en sus extensiones y en la página web del propio instituto, así como en el periódico de circulación nacional en el que se haya publicado la convocatoria, otorgándose a la publicación en el referido Diario Oficial el carácter de notificación para todos los participantes.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que esta Lista de vencedores en el primer concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito especializados en el nuevo proceso penal acusatorio, fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintinueve de octubre de dos mil catorce,

por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce (D.O.F DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General 22/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 2047.

LISTA DE VENCEDORES EN EL VIGÉSIMO CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO DE COMPETENCIA MIXTA.

CONSIDERANDO

PRIMERO.—En sesión de nueve de julio de dos mil catorce, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 22/2014, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición, publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciséis de julio siguiente;

SEGUNDO.—En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en términos del artículo 3 del acuerdo general citado en el considerando que antecede, en virtud de la creciente demanda del servicio de impartición de justicia y la creación de nuevos órganos en el año dos mil catorce, lo que implica la necesidad de designar un mayor número de Jueces de Distrito de Competencia Mixta, se ordenó emitir la convocatoria correspondiente dirigida a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que estuvieran interesados en participar en el vigésimo concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito de Competencia Mixta, y cumplieran con los requisitos establecidos para ello;

TERCERO.—El cuestionario relativo a la primera etapa se aplicó el veintiséis de septiembre de este año, y el treinta siguiente, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal con base en las calificaciones obtenidas por los participantes, determinó quiénes pasarían a la segunda etapa.

La resolución del caso práctico se llevó a cabo el dos y el tres de octubre del presente año;

CUARTO.—El examen oral se aplicó el veintitrés y el veinticuatro de octubre citado;

QUINTO.—La puntuación obtenida en el caso práctico y examen oral, así como de los factores del desempeño judicial y la calificación final se concentraron en una lista en orden descendente de los participantes.

En sesión de veintinueve de octubre de este año, la Comisión de Carrera Judicial tuvo por recibido ese documento, el que determinó someter a consideración del Pleno del Consejo;

SEXTO.—En sesión de veintinueve de octubre de dos mil catorce, una vez analizado el documento enviado por la Comisión de Carrera Judicial, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo aprobó, y conforme al número de plazas sujetas a concurso, de acuerdo a la calificación final que obtuvieron designó a diez vencedores para ocupar el cargo de Juez de Distrito.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones señaladas, se ordena publicar la

LISTA DE VENCEDORES EN EL VIGÉSIMO CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN PARA LA DESIGNACIÓN DE JUECES DE DISTRITO DE COMPETENCIA MIXTA.

PRIMERO.—Las personas que en el vigésimo concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito de Competencia Mixta fueron designadas para ocupar dicho cargo son:

1. Coello Cetina Rafael

2. Dávila Rangel Juan Marcos

3. Díaz de León Cruz José

4. Gómez Fierro Juan Pablo

5. Jaimes Ramos Beatriz Joaquina

6. Migoni Goslinga Francisco Gorka

7. Regis López Gabriel

8. Ruiz Palma Horacio Nicolás

9. Torres Padilla Rodrigo

10. Vargas Ornelas José Álvaro

SEGUNDO.—Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el artículo 64 del Acuerdo General 22/2014, el Consejo de la Judicatura Federal emitirá los nombramientos correspondientes.

TRANSITORIO

ÚNICO.—Publíquese la presente lista en el Diario Oficial de la Federación y, para su mayor difusión, en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, en los estrados de la sede central del Instituto, en sus extensiones y en la página web del propio Instituto, así como en el periódico de circulación nacional en el que se haya publicado la convocatoria, otorgándose a la publicación en el referido diario oficial el carácter de notificación para todos los participantes.

EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que esta Lista de vencedores en el vigésimo concurso interno de oposición para la designación de Jueces de Distrito de Competencia Mixta, fue aprobada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintinueve de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veintinueve de octubre de dos mil catorce (D.O.F. DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: El Acuerdo General 22/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento y lineamientos generales para acceder al cargo de Juez de Distrito en sus distintas especialidades, mediante concursos internos de oposición citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 9, Tomo III, agosto de 2014, página 2047.

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PUESTOS

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

CONTENIDO

		Página
HOJA DE AUTORIZACIÓN		5
INTRODUCCIÓN		6
I.	**OBJETIVO DEL MANUAL**	7
II.	**ANTECEDENTES DE ORGANIZACIÓN**	8
III.	**MARCO JURÍDICO**	9
IV.	**ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA GENERAL**	11
V.	**ORGANIGRAMA ESPECÍFICO**	12
VI.	**ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN PUESTOS ESPECÍFICOS**	
1	**Administración del Centro de Justicia Penal Federal**	
	Objetivo y Funciones	13
	Organigrama Específico	15
	Cédula de Descripción de Puesto Específico	
	- Administrador del CJPF	16
	- Secretaria Ejecutiva de SPS	19
	- Notificador	21
	- Auxiliar de Notificador	23
	- Oficial de Partes	25
1.1	**Despacho Judicial de Segunda Instancia**	
	Objetivo y Funciones	27
	Organigrama Específico	28
	Cédula de Descripción de Puesto Específico	
	- Asistente de Despacho Judicial de Segunda Instancia	29
	- Auxiliar de Gestión Judicial	32
1.2	**Despacho Judicial de Primera Instancia y Ejecución de Penas**	
	Objetivo y Funciones	34
	Organigrama Específico	35
	Cédula de Descripción de Puesto Específico	
	- Asistente de Despacho Judicial de Primera Instancia y Ejecución de Penas	36

Página

- Auxiliar de Gestión Judicial (*referirse a la página 32*)

1.0.0.1 Despacho Logístico y Administrativo del CJPF

Objetivo y Funciones 39

Organigrama Específico 41

Cédula de Descripción de Puesto Específico

- Encargado del Despacho Logístico Administrativo del CJPF 42
- Auxiliar de Atención al Público 45
- Auxiliar de Servicios Generales 47
- Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación 49
- Técnico de Videograbación 52
- Técnico de Soporte Informático 54
- Auxiliar de Servicios Administrativos 56
- Jefe de Salas 58
- Auxiliar de Sala 61

Tribunal de Alzada

Objetivo y Funciones 63

Organigrama Específico 64

Cédula de Descripción de Puesto Específico

- Magistrado de Alzada 65
- Asistente de Constancias y Registro de Segunda Instancia 67
- Secretaria Ejecutiva de SPS (*referirse a la página 19)*
- Chofer de funcionario 70

Juzgado de Control

Objetivo y Funciones 72

Organigrama Específico 73

Cédula de Descripción de Puesto Específico

- Juez de Control 74
- Asistente de Constancias y Registro de Primera Instancia y Ejecución de Penas 76
- Secretaria Ejecutiva de SPS (*referirse a la página 19*)
- Chofer de funcionario (*referirse a la página 70*)

Página

Juzgado de Tribunal de Enjuiciamiento

Objetivo y Funciones 79

Organigrama Específico 80

Cédula de Descripción de Puesto Específico

- Juez de Tribunal de Enjuiciamiento 81
- Asistente de Constancias y Registro de Primera Instancia y Ejecución de Penas (*referirse a la página 76*)
- Secretaria Ejecutiva de SPS (*referirse a la página 19*)
- Chofer de funcionario (*referirse a la página 70*)

Juzgado de Ejecución de Penas

Objetivo y Funciones 83

Organigrama Específico 84

Cédula de Descripción de Puesto Específico

- Juez de Ejecución de Penas 85
- Asistente de Constancias y Registro de Primera Instancia y Ejecución de Penas (*referirse a la página 76*)
- Secretaria Ejecutiva de SPS (*referirse a la página 19*)
- Chofer de funcionario (*referirse a la página 70*)

ANEXOS

Anexo 1. Glosario 88

Anexo 2. Registro de Actualizaciones 90

Poder Judicial de la Federación

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR

Consejo de la Judicatura — Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Hoja de Autorización

Nombre del Documento:

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PUESTOS

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Clave	Aprobado por	Oficio de Aprobación	Fecha de Aprobación
MOP-CJP-E-SEP-2014			

Formulado por:

Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos

Integrado por:

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Dirigido a:

Los servidores públicos del Centro de Justicia Penal, como herramienta técnico-administrativa que establece las responsabilidades, así como las competencias de las áreas y de los puestos específicos que la integran; para su consulta y aplicación correspondientes.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que adopta el Sistema Procesal Penal Acusatorio ordena a los tres Poderes del Estado Mexicano la transformación del sistema de justicia penal, para transitar de uno mixto preponderantemente escrito a uno acusatorio oral. Para dar cumplimiento a este mandato constitucional la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos desarrolló un Plan Maestro dentro del cual se tiene contemplado para 2014, la entrada en operación del Centro de Justicia Penal; por tal motivo y en seguimiento de diversos asuntos planteados en el mismo, se formuló el Manual de Organización y de Puestos, con el propósito de establecer los objetivos y funciones de cada una de las áreas que la integran, de acuerdo con la estructura orgánica autorizada; así como contribuir a la conformación de los documentos normativos, de carácter técnico-administrativo, que reflejan la organización interna del mismo Centro de Justicia.

El presente documento está integrado por seis apartados, mismos que se describen de manera genérica a continuación:

I. **Objetivo del Manual**, establece el propósito del presente documento.

II. **Antecedentes de Organización**, describe la creación de la estructura orgánica y el funcionamiento del Centro de Justicia Penal.

III. **Marco Jurídico**, integra los ordenamientos que regulan el funcionamiento del Centro de Justicia Penal.

IV. **Estructura Orgánica y Organigrama General**, representa gráficamente la estructura orgánica del Centro de Justicia Penal, describiendo el tipo de autoridad lineal o funcional de cada una de las áreas que la integran, así como una codificación para su identificación en lo que corresponde a labor administrativa, así como también refleja el vínculo organizacional con los órganos jurisdiccionales responsables de la impartición de justicia.

V. **Organigrama Tipo**, el que se representa gráficamente la estructura orgánica del Centro de Justicia Penal, reflejando los niveles jerárquicos y la línea de autoridad de cada una de las áreas y puestos que la integran del área administrativa como jurisdiccional.

VI. **Organización y Descripción de Puestos Específicos**, detalla el objetivo y funciones genéricas, el organigrama específico y la descripción de puesto específico.

La elaboración de este documento estuvo a cargo de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en coordinación con la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional.

Por último, cabe destacar que es importante que este Manual de Organización y de Puestos del Centro de Justicia Penal sea revisado y actualizado oportunamente cada vez que se presenten modificaciones de carácter organizacional o funcional en sus áreas internas, a efecto de contar con un documento vigente que nos muestre la organización y funcionamiento del citado Centro de Justicia Penal, y sirva como referente para los demás Centros que continúen aperturándose.

I. OBJETIVO DEL MANUAL

Contar con un instrumento normativo de carácter técnico-administrativo para identificar y reflejar de manera formal los aspectos organizativos y funcionales del Centro de Justicia Penal, delimitando a su vez las responsabilidades de los puestos que conforman su estructura organizacional; logrando además, disponer de información que sirva de consulta y orientación a los servidores públicos adscritos al Centro de Justicia Penal y otras instancias que así lo requieran.

II. ANTECEDENTES DE ORGANIZACIÓN

Mediante SEPLE./GTSJPA.003/3830/2014 y SEPLE./GTSJPA.004/4241/2014 se comunica en sesión ordinaria que el Pleno del Consejo aprobó para el Centro de Justicia Penal, las Cédulas de Descripción de Puestos Específicos y la Plantilla de plazas.

El Centro de Justicia Penal estará integrado por las siguientes plazas de mando superior conformados por Magistrado de Circuito, Juez de Distrito, Titular de Unidad Administrativa, mandos medios conformados por Secretario de Tribunal, Secretario de Juzgado, Subdirector de Área, Actuario Judicial, Coordinador Técnico B, Coordinador Técnico Administrativo y nivel operativo conformados por Secretaria Ejecutiva de SPS, Analista Jurídico SISE, Auxiliar de Actuario, Analista Especializado, Oficial de Partes, Chofer de Funcionario, Analista y Auxiliar de Servicios Generales.

III. MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 2003.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

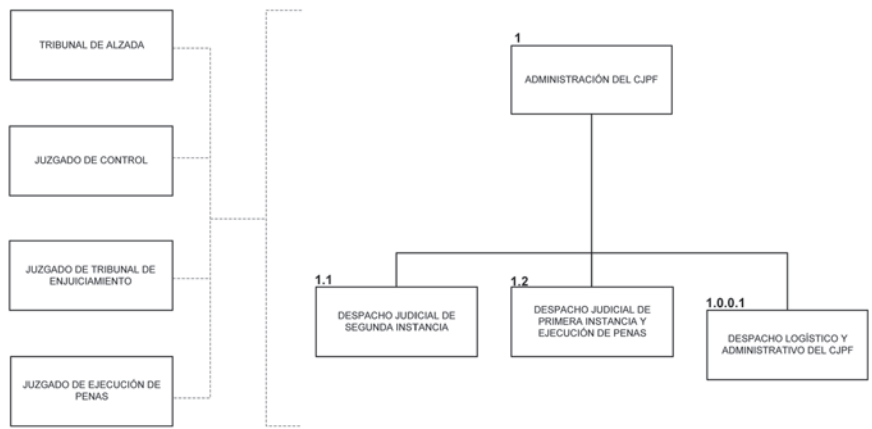
- Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero 2013.
- Acuerdo General 16/2009 que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo 2009.
- Acuerdo General 75/2008 por el que se crean los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre 2008.
- Acuerdo General 34/2000 relativo a la determinación de los Libros de Control que obligatoriamente deberán llevar los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio 2000.
- Los acuerdos generales por los que se regula el sistema de turno de las Oficialías de Partes Comunes de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

Diversas Disposiciones

- Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2004.
- Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2004.

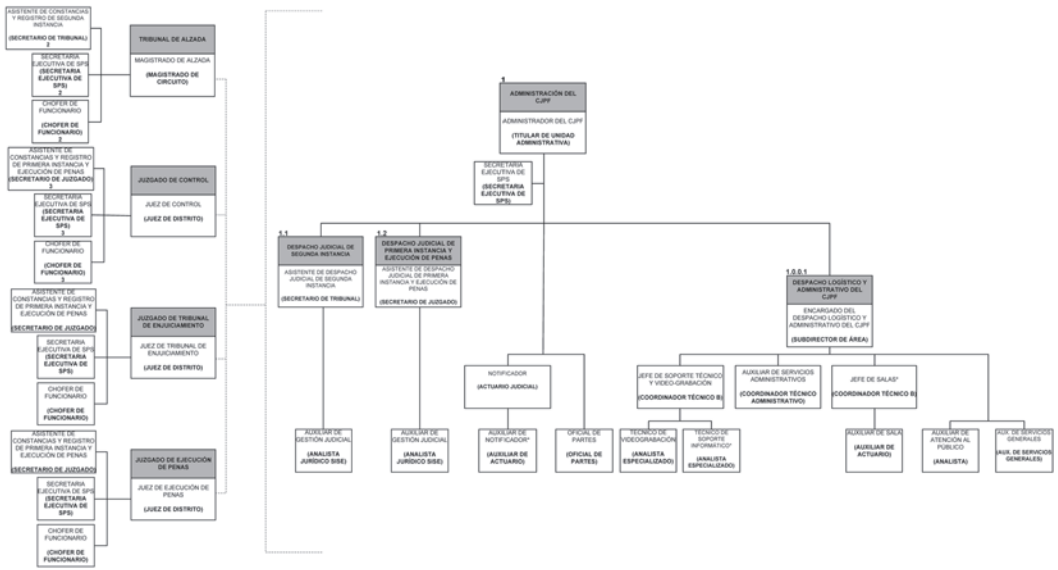
- Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, vigente.
- Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, vigente.

IV. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA GENERAL



Línea de relación funcional o de comunicación.

V. ORGANIGRAMA TIPO



VI. ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PUESTOS ESPECÍFICOS

1 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL

OBJETIVO: Administrar la gestión de procesos relativos al despacho judicial, logística y apoyo administrativo, para el cumplimiento de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional en conformidad con la Ley por parte de los órganos jurisdiccionales en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.

FUNCIONES:

I. Coordinar la recepción de peticiones al CJPF, supervisando la distribución de trabajo y asignando roles y turnos para su atención, conforme a lo dispuesto en la Ley.

II. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para la programación de audiencias mediante un sistema de información permanentemente actualizado y un eficiente control de sus operaciones.

III. Vigilar el resguardo de los expedientes, documentos y valores, que se tramiten por los órganos jurisdiccionales.

IV. Coordinar la utilización de los espacios físicos, previendo la interacción entre sujetos del procedimiento y sus auxiliares, condiciones de seguridad, controles de acceso, disponibilidad y preparación de espacios adecuados.

V. Coordinar el ingreso del público, periodistas o medios de comunicación mediante la observancia de criterios de acceso de acuerdo a lo previsto por la Ley y en apego a los protocolos de seguridad, sin perjuicio del orden requerido para el desarrollo de audiencias.

VI. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para el registro audiovisual de audiencias, supervisando el resguardo y garantizando la conservación de imágenes o sonidos que sean parte de las actuaciones del Poder Judicial.

VII. Supervisar las actividades relativas al apoyo brindado a jueces y magistrados, previo y durante la celebración de audiencias.

VIII. Supervisar el apoyo a la función jurisdiccional relativo a la emisión de resoluciones que deberán constar por escrito.

IX. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para el seguimiento de asuntos y ejecución de actos procedimentales derivados de resoluciones judiciales.

X. Supervisar la transmisión de comunicaciones oficiales, verificando su efectividad y confiabilidad.

XI. Coordinar la realización de notificaciones derivadas de los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales, observando los plazos de su ejecución y en apego a lo dispuesto en la Ley.

XII. Supervisar la administración documental del CJPF, observando disposiciones conducentes y procedimientos de revisión expeditos.

XIII. Desarrollar propuestas de mejoras relativas a la efectividad operativa del CJPF, evaluando cargas de trabajo y proponiendo sistemas de trabajo ante los órganos competentes.

XIV. Coordinar las actividades del CJPF observando normas, procedimientos, instrucciones, directrices institucionales y apoyándose en metodologías confiables.

XV. Supervisar, en conformidad con los lineamientos vigentes, los servicios administrativos relativos a la conservación y mantenimiento de los inmuebles, así como el suministro de los recursos materiales y servicios generales requeridos para la operación del CJPF.

XVI. Coordinar las acciones necesarias para asegurar la disposición de personal suficiente que cumpla con el perfil y competencias requeridas, de acuerdo a la normatividad aplicable a nombramientos, autorización de vacaciones y licencias para ausentarse, atendiendo a los procedimientos aplicables.

XVII. Coordinar las actividades necesarias para contar con la tecnología de información adecuada que soporte las operaciones atendiendo a la gestión oportuna de programas de mejoramiento y mantenimiento ante los órganos competentes.

XVIII. Facilitar la coordinación interinstitucional, atendiendo a protocolos establecidos y convenios de colaboración.

XIX. Verificar los expedientes y libros de gobierno en el sistema de información, monitoreando la integración de constancias y registros correspondientes.

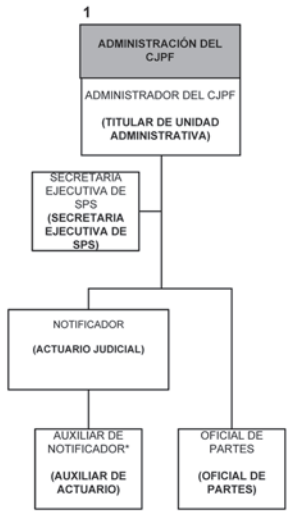
XX. Rendir los informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.

XXI. Atender las inspecciones judiciales conforme a los procedimientos aplicables.

XXII. Coordinar al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.

XXIII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



NOTA: * Puestos cuya existencia se contempla exclusivamente para los CJP de mayores dimensiones.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**1 - MANDOS SUPERIORES**	**01 - DIRECCIÓN DEL CJF**	**07 - TITULAR DE UNIDAD ADMINISTRATIVA**	**CF10107**	**9 MX/MD/MN**
Denominación del puesto específico: **ADMINISTRADOR DEL CJP**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Administrar la gestión de procesos relativos al despacho judicial, logística y apoyo administrativo, para el cumplimiento de los principios que rigen el ejercicio de la función jurisdiccional en conformidad con la Ley por parte de los órganos jurisdiccionales en el Sistema Procesal Penal Acusatorio.

II.2 Funciones:

1. Coordinar la recepción de peticiones al Centro de Justicia Penal, supervisando la distribución de trabajo y asignando roles y turnos para su atención, conforme a lo dispuesto en la Ley.
2. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para la programación de audiencias mediante un sistema de información permanentemente actualizado y un eficiente control de sus operaciones.
3. Vigilar el resguardo de los expedientes, documentos y valores, que se tramiten por los órganos jurisdiccionales.
4. Coordinar la utilización de los espacios físicos, previendo la interacción entre sujetos del procedimiento y sus auxiliares, condiciones de seguridad, controles de acceso, disponibilidad y preparación de espacios adecuados.
5. Coordinar el ingreso del público, periodistas o medios de comunicación mediante la observancia de criterios de acceso de acuerdo a lo previsto por la Ley y en apego a los protocolos de seguridad, sin perjuicio del orden requerido para el desarrollo de audiencias.
6. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para el registro audiovisual de audiencias, supervisando el resguardo y garantizando la conservación de imágenes o sonidos que sean parte de las actuaciones del Poder Judicial.
7. Supervisar las actividades relativas al apoyo brindado a jueces y magistrados, previo y durante la celebración de audiencias.
8. Supervisar el apoyo a la función jurisdiccional relativo a la emisión de resoluciones que deberán constar por escrito.
9. Coordinar y supervisar las actividades necesarias para el seguimiento de asuntos y ejecución de actos procedimentales derivados de resoluciones judiciales.
10. Supervisar la transmisión de comunicaciones oficiales, verificando su efectividad y confiabilidad.

11. Coordinar la realización de notificaciones derivadas de los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales, observando los plazos de su ejecución y en apego a lo dispuesto en la Ley.
12. Supervisar la administración documental del CJP, observando disposiciones conducentes y procedimientos de revisión expeditos.
13. Desarrollar propuestas de mejoras relativas a la efectividad operativa del CJP, evaluando cargas de trabajo y proponiendo sistemas de trabajo ante los órganos competentes.
14. Coordinar las actividades del CJP observando normas, procedimientos, instrucciones, directrices institucionales y apoyándose en metodologías confiables.
15. Supervisar, en conformidad con los lineamientos vigentes, los servicios administrativos relativos a la conservación y mantenimiento de los inmuebles, así como el suministro de los recursos materiales y servicios generales requeridos para la operación del CJP.
16. Coordinar las acciones necesarias para asegurar la disposición de personal suficiente que cumpla con el perfil y competencias requeridas, de acuerdo a la normatividad aplicable a nombramientos, autorización de vacaciones y licencias para ausentarse, atendiendo a los procedimientos aplicables.
17. Coordinar las actividades necesarias para contar con la tecnología de información adecuada que soporte las operaciones atendiendo a la gestión oportuna de programas de mejoramiento y mantenimiento ante los órganos competentes.
18. Facilitar la coordinación interinstitucional, atendiendo a protocolos establecidos y convenios de colaboración.
19. Verificar los expedientes y libros de gobierno en el sistema de información, monitoreando la integración de constancias y registros correspondientes.
20. Rendir los informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.
21. Atender las inspecciones judiciales conforme a los procedimientos aplicables.
22. Coordinar al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.
23. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	Sí	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciatura en Derecho y/o Licenciatura en Administración y cualquiera de sus ramas, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Práctica profesional de cuando menos cinco años en materia afín a las desempeñadas en el puesto.

Recomendable cubrir alguno de los siguientes requisitos en el caso de contar solamente con Licenciatura en Derecho:

a) Experiencia de cuando menos tres años en labores administrativas.
b) Estudios en Administración o materia afín.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente
- Ser mayor de treinta años.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**5 - OPERATIVOS**	**05 - ADMINISTRATIVA**	**01 - SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS**	**CF50501**	**25 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **SECRETARIA EJECUTIVA DE SPS**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Facilitar el desempeño del servidor público superior al que se encuentra asignado, mediante la asistencia en la transcripción y archivo de documentos, la comunicación oportuna con otros servidores públicos y canalización de usuarios del área administrativa de su adscripción.

II.2 Funciones:

1. Tomar dictados y transcribir en computadora todo tipo de documentos, trabajos y asuntos que le sean encomendados, cuidando la presentación y contenido de los mismos.
2. Recibir, organizar y registrar la correspondencia de carácter general y confidencial turnándola a las áreas correspondientes para su atención.
3. Manejar, controlar y resguardar el archivo ordinario, confidencial y particular de su jefe inmediato.
4. Llevar el control de la agenda de su jefe inmediato e informar de manera oportuna los compromisos contraídos.
5. Efectuar y recibir llamadas telefónicas, tomar recados y concertar citas.
6. Elaborar y mantener actualizado el directorio telefónico de la Institución.
7. Recibir y atender a los visitantes, canalizando a las personas que solicitan información a las áreas correspondientes.
8. Elaborar formatos y documentos derivados de las actividades encomendadas.
9. Prever las necesidades de material de oficina, solicitarlo y llevar control del mismo.
10. Participar en la realización de trabajos secretariales, en las condiciones de tiempo y lugar que por necesidades de la Institución se requiera.
11. Las demás que le encomiende su jefe inmediato.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Carrera secretarial con secundaria terminada.

III.2 Experiencia laboral:

Un año en actividades similares.

III.3 Competencias:

- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ-CARRERA JUDICIAL	**4-HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**02-JURISDICCIONAL**	**06- ACTUARIO JUDICIAL**	**CJ40206**	**21 MX**
Denominación del puesto específico: **NOTIFICADOR**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Realizar notificaciones derivadas del conocimiento de asuntos por parte de los órganos jurisdiccionales.

II.2 Funciones:

1. Las encomendadas por los órganos jurisdiccionales según ámbito de competencia.
2. Recibir las actuaciones entregadas para asegurar la práctica de notificaciones, así como el desarrollo de diligencias respectivas.
3. Devolver las actuaciones, previas las anotaciones correspondientes y el levantamiento de las razones que procedan legalmente.
4. Elaborar la síntesis de acuerdo para publicarse en los medios correspondientes.
5. Practicar notificaciones atendiendo a las formalidades previstas en la ley y a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales para garantizar su adecuada gestión.
6. Reportar la práctica de notificaciones proporcionando información, recaudando acuses de recibo e integrando en el expediente respectivo para su adecuado seguimiento.
7. Emitir notificaciones por medios electrónicos de conformidad con las disposiciones previstas por la ley y los acuerdos emitidos por los órganos competentes.
8. Registrar en el sistema de información la práctica y constancia de notificaciones.
9. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina. • Traslados por desempeño de comisión oficial.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de dos años desempeñando actividades en órgano jurisdiccional.

III.3 Competencias:

- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente
- Ser ciudadano mexicano, que no se adquiera otra nacionalidad.
- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
BS - BASE	**5 - OPERATIVOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**02 – AUXILIAR DE ACTUARIO**	**BS50202**	**26 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **AUXILIAR DE NOTIFICADOR**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar en la realización de notificaciones y diligencias asociadas

II.2 Funciones:

1. Apoyar en la recepción de las actuaciones entregadas para asegurar la práctica de notificaciones, así como el desarrollo de diligencias respectivas.
2. Asistir en la devolución de actuaciones, previas las anotaciones correspondientes y el levantamiento de las razones que procedan legalmente.
3. Auxiliar en la elaboración de síntesis de acuerdo para publicarse en los medios correspondientes.
4. Facilitar la elaboración de reportes de la práctica de notificaciones, recaudando acuses de recibo e integrando en el expediente respectivo para su adecuado seguimiento.
5. Apoyar en el registro del sistema de información la práctica y constancia de notificaciones.
6. Verificar los plazos de las notificaciones para su debida cumplimentación.
7. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina. • Traslados por desempeño de comisión oficial.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Pasante de licenciatura en derecho o título y cédula profesional de licenciatura en derecho.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**5- OPERATIVOS**	**02-JURISDICCIONAL**	**02- OFICIAL DE PARTES**	**CF50202**	**27 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **OFICIAL DE PARTES**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar en la recepción, registro, turno y programación (en su caso), de peticiones y demás correspondencia presentada en el CJPF, coadyuvando en el cumplimiento de los plazos previstos para el desahogo de actos procedimentales.

II.2 Funciones:

1. Recibir documentación, aplicando criterios de recepción y distribución de asuntos.
2. Registrar en formatos y bitácoras correspondientes la recepción de documentación.
3. Apoyar en la programación de audiencias, derivadas de peticiones recibidas que lo requieran, utilizando el sistema de información, atendiendo a los procedimientos aplicables para la reservación de fecha, hora y espacio y avisando a los remitentes correspondientes.
4. Registrar en el sistema de información la recepción y turno de la documentación, aplicando criterios de remisión según historial y cargas de trabajo, asentando su registro en los libros de gobierno correspondientes y atendiendo acuerdos y disposiciones aplicables en el ámbito de su competencia.
5. Turnar la documentación, considerando la adecuada captura de asuntos, la actualización de la información, la distribución de carga de trabajo entre los órganos jurisdiccionales.
6. Asistir en la clasificación de oficios o promociones, aplicando criterios de prioridad y urgencia, así como atendiendo al sistema de horarios, guardias y roles con apego a los procedimientos establecidos.
7. Apoyar en la verificación de la documentación presentada, atendiendo a formalidades y requisitos para su recepción emitiendo observaciones, efectuando la aceptación o exclusión del turno y emitiendo boletas o acuses de recepción.
8. Auxiliar en el archivo de boletas, acuses y cualquier documentación soporte derivada de la aceptación y turno de peticiones de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Registrar los asuntos ingresados en los libros de gobierno correspondientes.
10. Atender a los interesados en la información relativa al turno de los asuntos, número de registro asignado y fecha de remisión al órgano jurisdiccional.
11. Utilizar de manera adecuada los medios tecnológicos a su disposición, monitoreando el respaldo de información, mantenimiento del equipo, control de su inventario y reportes de fallas

12. Apoyar en la elaborar informes de acuerdo a los criterios e instrucciones establecidas por las áreas competentes para asegurar una adecuada inspección y vigilancia del funcionamiento de la Oficialía de Partes.
13. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Carrera técnica o pasante de Licenciatura en Derecho

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Compromiso
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

DESPACHO JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETIVO: Asegurar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

FUNCIONES:

I. Supervisar el seguimiento de peticiones judiciales, monitoreando la distribución de cargas de trabajo y asignación de responsables.

II. Dirigir las actividades necesarias para el seguimiento de procedimientos judiciales, actualizando permanentemente la información del sistema de gestión y verificando el desarrollo de los actos procedimentales asociados a resoluciones judiciales de conformidad con lo dispuesto en la ley.

III. Administrar los controles relativos al resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

IV. Constatar el cumplimiento de notificaciones y emisión de comunicaciones entre autoridades, realizando cualquier actividad en el ámbito de su competencia, necesaria para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

V. Tramitar promociones y comunicaciones entre autoridades, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

VI. Supervisar la debida integración de expedientes físicos y electrónicos, verificando la adecuada gestión documental y uso correcto del sistema de información, así como la implementación de procedimientos, políticas y directrices institucionales que puedan asegurar la disposición ordenada y completa de la información.

VII. Garantizar el registro en libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia.

VIII. Administrar el acceso y resguardo del archivo provisional, atendiendo y controlando su integración de conformidad a las disposiciones aplicables.

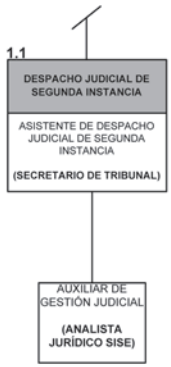
IX. Supervisar el control de la medida cautelar relativa a la presentación periódica de imputados en libertad, tramitando las comunicaciones necesarias de conformidad con las disposiciones aplicables.

X. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.

XI. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ - CARRERA JUDICIAL	**4 - HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**04 - SECRETARIO DE TRIBUNAL**	**CJ40204**	**13A ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **ASISTENTE DE DESPACHO JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Asegurar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

II.2 Funciones:

1. Supervisar el seguimiento de peticiones judiciales, monitoreando la distribución de cargas de trabajo y asignación de responsables.
2. Dirigir las actividades necesarias para el seguimiento de procedimientos judiciales, actualizando permanentemente la información del sistema de gestión y verificando el desarrollo de los actos procedimentales asociados a resoluciones judiciales de conformidad con lo dispuesto en la ley.
3. Administrar los controles relativos al resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
4. Constatar el cumplimiento de notificaciones y emisión de comunicaciones entre autoridades, realizando cualquier actividad en el ámbito de su competencia, necesaria para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
5. Tramitar promociones y comunicaciones entre autoridades, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
6. Supervisar la debida integración de expedientes físicos y electrónicos, verificando la adecuada gestión documental y uso correcto del sistema de información, así como la implementación de procedimientos, políticas y directrices institucionales que puedan asegurar la disposición ordenada y completa de la información.
7. Garantizar el registro en libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia.
8. Administrar el acceso y resguardo del archivo provisional, atendiendo y controlando su integración de conformidad a las disposiciones aplicables.
9. Supervisar el control de la medida cautelar relativa a la presentación periódica de imputados en libertad, tramitando las comunicaciones necesarias de conformidad con las disposiciones aplicables.
10. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.

11. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.
12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional de tres años, computada a partir de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener título de Licenciado en Derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

a) Antes de recibirse el aspirante haya laborado en Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o en el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollando actividades relacionadas con aspectos jurídicos, independientemente de la categoría que tenga o del cargo que desempeñe; debiendo tener, en cualquier caso, una antigüedad de cuando menos tres años.

b) Que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal manifieste que el aspirante a ocupar la plaza posee práctica profesional de más de tres años.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente
- Ser mayor de treinta años.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
BS-BASE	**5-OPERATIVOS**	**02-JURISDICCIONAL**	**01-ANALISTA JURÍDICO SISE**	**BS50201**	**25 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **AUXILIAR DE GESTIÓN JUDICIAL**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

II.2 Funciones:

1. Elaborar oficios requeridos para el seguimiento de peticiones judiciales.
2. Actualizar permanentemente la información del sistema de gestión.
3. Apoyar en el resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
4. Asistir en la realización de comunicaciones y cualquier tipo de actividad necesaria para el cumplimiento de resoluciones.
5. Apoyar en la gestión de promociones y comunicaciones según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
6. Integrar expedientes físicos y electrónicos mediante la adecuada gestión documental, uso correcto del sistema de información así como el seguimiento de procedimientos, políticas y directrices establecidas.
7. Constatar que la realización de notificaciones se haya realizado en tiempo y de acuerdo a las formalidades de ley.
8. Realizar los registros en los libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia.
9. Apoyar en el control de registros relativos a la presentación periódica de imputados en libertad.
10. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de un año como oficial administrativo.

III.3 Competencias:

- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

DESPACHO JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE PENAS

OBJETIVO: Asegurar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

FUNCIONES:

I. Supervisar el seguimiento de peticiones judiciales, monitoreando la distribución de cargas de trabajo y asignación de responsables.

II. Dirigir las actividades necesarias para el seguimiento de procedimientos judiciales, actualizando permanentemente la información del sistema de gestión y verificando el desarrollo de los actos procedimentales asociados a resoluciones judiciales de conformidad con lo dispuesto a la ley.

III. Administrar los controles relativos al resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

IV. Constatar el cumplimiento de notificaciones y emisión de comunicaciones entre autoridades, realizando cualquier actividad en el ámbito de su competencia, necesaria para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

V. Tramitar promociones y comunicaciones entre autoridades, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

VI. Supervisar la debida integración de expedientes físicos y electrónicos, verificando la adecuada gestión documental y uso correcto del sistema de información, así como la implementación de procedimientos, políticas y directrices institucionales que puedan asegurar la disposición ordenada y completa de la información.

VII. Garantizar el registro en libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia.

VIII. Administrar el acceso y resguardo del archivo provisional, atendiendo y controlando su integración de conformidad a las disposiciones aplicables.

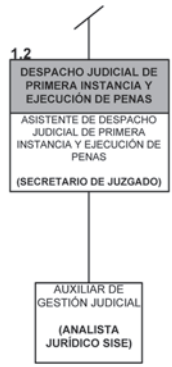
IX. Supervisar el control de la medida cautelar relativa a la presentación periódica de imputados en libertad, tramitando las comunicaciones necesarias de conformidad con las disposiciones aplicables.

X. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.

XI. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ - CARRERA JUDICIAL	**4 - HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**07 - SECRETARIO DE JUZGADO**	**CJ40207**	**13C ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **ASISTENTE DE DESPACHO JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE PENAS**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Asegurar el despacho de actos procedimentales y demás actuaciones complementarias a la audiencia, referidas al trámite judicial, conducentes a la conclusión de los asuntos penales según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.

II.2 Funciones:

1. Supervisar el seguimiento de peticiones judiciales, monitoreando la distribución de cargas de trabajo y asignación de responsables.
2. Dirigir las actividades necesarias para el seguimiento de procedimientos judiciales, actualizando permanentemente la información del sistema de gestión y verificando el desarrollo de los actos procedimentales asociados a resoluciones judiciales de conformidad con lo dispuesto a la ley.
3. Administrar los controles relativos al resguardo de expedientes, documentos y valores, que se tramiten en los órganos jurisdiccionales, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
4. Constatar el cumplimiento de notificaciones y emisión de comunicaciones entre autoridades, realizando cualquier actividad en el ámbito de su competencia, necesaria para el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
5. Tramitar promociones y comunicaciones entre autoridades, según su ámbito de competencia y de conformidad a las disposiciones aplicables.
6. Supervisar la debida integración de expedientes físicos y electrónicos, verificando la adecuada gestión documental y uso correcto del sistema de información, así como la implementación de procedimientos, políticas y directrices institucionales que puedan asegurar la disposición ordenada y completa de la información.
7. Garantizar el registro en libros de gobierno correspondientes de acuerdo al ámbito de su competencia.
8. Administrar el acceso y resguardo del archivo provisional, atendiendo y controlando su integración de conformidad a las disposiciones aplicables.
9. Supervisar el control de la medida cautelar relativa a la presentación periódica de imputados en libertad, tramitando las comunicaciones necesarias de conformidad con las disposiciones aplicables.
10. Apoyar en la elaboración de informes estadísticos que le sean requeridos, de conformidad a los procedimientos y plazos aplicables.

11. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.

12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y

2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional de tres años, computada a partir de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener título de Licenciado en Derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

a) Antes de recibirse el aspirante haya laborado en Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o en el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollando actividades relacionadas con aspectos jurídicos, independientemente de la categoría que tenga o del cargo que desempeñe; debiendo tener, en cualquier caso, una antigüedad de cuando menos tres años.

b) Que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal manifieste que el aspirante a ocupar la plaza posee práctica profesional de más de tres años.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente
- Ser mayor de treinta años.
- Estar en pleno ejercicio de sus derechos.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

DESPACHO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CJPF

OBJETIVO: Administrar los servicios generales que se requieren para el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas.

FUNCIONES:

I. Administrar la utilización de espacios físicos, previendo la interacción entre sujetos del procedimiento y sus auxiliares, condiciones de seguridad, controles de acceso, disponibilidad y preparación de espacios adecuados para favorecer el desarrollo de las audiencias.

II. Elaborar propuestas relativas a la logística de actos procedimentales celebrados fuera del CJPF, previendo recursos y requerimientos materiales de acuerdo a las condiciones locales, determinando el equipo tecnológico y medios informáticos y atendiendo a protocolos de actuación así como a convenios de colaboración.

III. Asegurar la capacidad de infraestructura tecnológica, realizando las gestiones necesarias para mejorar su funcionalidad, renovación y actualización que garantice la capacidad de almacenamiento y seguridad informática del CJPF.

IV. Verificar la correcta utilización de infraestructura tecnológica asociada al sistema integral de información y comunicaciones, redes informáticas, servidores con sus aplicaciones, equipamiento de voz, datos, y vídeo, emitiendo reportes de incidencias y coordinando los trabajos de mantenimiento y conservación con las áreas competentes.

V. Evaluar el servicio de telecomunicaciones, enlaces de internet y telefonía, reportando incidentes a las áreas competentes y monitoreando su efectividad operacional.

VI. Elaborar propuestas de mejora en la utilización o implementación del equipo tecnológico y sistemas informáticos.

VII. Verificar la preparación oportuna de salas de audiencia en consonancia con la programación de actos procedimentales, garantizando su acceso, disponibilidad y funcionamiento.

VIII. Verificar la utilización adecuada de salas de audiencia, vigilando el cumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones y directrices institucionales.

IX. Supervisar las acciones necesarias para mantener un adecuado nivel de servicio y funcionalidad de los espacios, mediante la implementación de programas orientados a su conservación.

X. Autorizar planes de acción ante contingencias imprevistas que afecten la celebración de audiencias, atendiendo protocolos de actuación y formalidades de los actos procedimentales previstas en la ley.

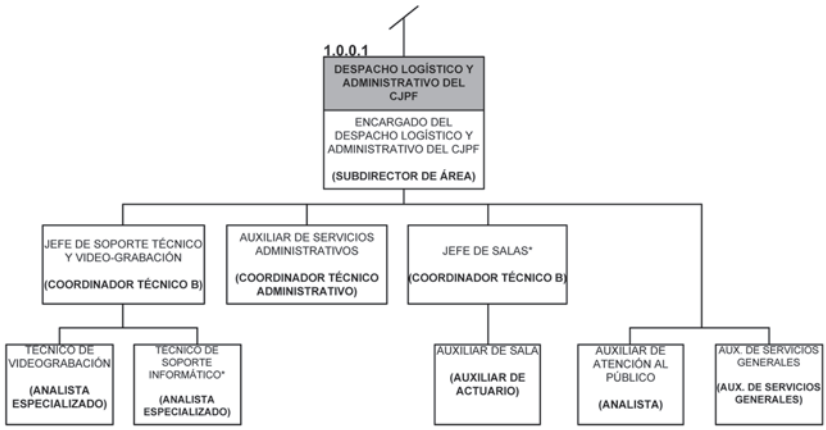
XI. Monitorear el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, particularmente de las salas de audiencia, implementando las disposiciones previstas por los órganos competentes que garanticen la disponibilidad de los espacios previstos para el desarrollo de los actos procedimentales.

XII. Supervisar las actividades necesarias para el resguardo y conservación de imágenes o sonidos que sean parte de las actuaciones del Poder Judicial.

XIII. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.

XIV. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



NOTA: * Puestos cuya existencia se contempla exclusivamente para los CJP de mayores dimensiones.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**3 - MANDOS MEDIOS**	**05 - ADMINISTRATIVA**	**03 SUBDIRECTOR DE ÁREA**	**CF30503**	**21 MX/MD/MN**
Denominación del puesto específico: **ENCARGADO DEL DESPACHO LOGÍSTICO Y ADMINISTRATIVO DEL CJPF**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Asegurar las condiciones pertinentes para la celebración de audiencias, atendiendo a las necesidades logísticas y de apoyo de los órganos jurisdiccionales.

II.2 Funciones:

1. Administrar la utilización de espacios físicos, previendo la interacción entre sujetos del procedimiento y sus auxiliares, condiciones de seguridad, controles de acceso, disponibilidad y preparación de espacios adecuados para favorecer el desarrollo de las audiencias.
2. Elaborar propuestas relativas a la logística de actos procedimentales celebrados fuera del CJPF, previendo recursos y requerimientos materiales de acuerdo a las condiciones locales, determinando el equipo tecnológico y medios informáticos y atendiendo a protocolos de actuación así como a convenios de colaboración.
3. Asegurar la capacidad de infraestructura tecnológica, realizando las gestiones necesarias para mejorar su funcionalidad, renovación y actualización que garantice la capacidad de almacenamiento y seguridad informática del CJPF.
4. Verificar la correcta utilización de infraestructura tecnológica asociada al sistema integral de información y comunicaciones, redes informáticas, servidores con sus aplicaciones, equipamiento de voz, datos, y vídeo, emitiendo reportes de incidencias y coordinando los trabajos de mantenimiento y conservación con las áreas competentes.
5. Evaluar el servicio de telecomunicaciones, enlaces de internet y telefonía, reportando incidentes a las áreas competentes y monitoreando su efectividad operacional.
6. Elaborar propuestas de mejora en la utilización o implementación del equipo tecnológico y sistemas informáticos.
7. Verificar la preparación oportuna de salas de audiencia en consonancia con la programación de actos procedimentales, garantizando su acceso, disponibilidad y funcionamiento.
8. Verificar la utilización adecuada de salas de audiencia, vigilando el cumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones y directrices institucionales.
9. Supervisar las acciones necesarias para mantener un adecuado nivel de servicio y funcionalidad de los espacios, mediante la implementación de programas orientados a su conservación.

10. Autorizar planes de acción ante contingencias imprevistas que afecten la celebración de audiencias, atendiendo protocolos de actuación y formalidades de los actos procedimentales previstas en la ley.
11. Monitorear el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, particularmente de las salas de audiencia, implementando las disposiciones previstas por los órganos competentes que garanticen la disponibilidad de los espacios previstos para el desarrollo de los actos procedimentales.
12. Supervisar las actividades necesarias para el resguardo y conservación de imágenes o sonidos que sean parte de las actuaciones del Poder Judicial.
13. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.
14. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciatura en Administración o en materia afín, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de dos años en la materia afín a su competencia.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF-CONFIANZA	**5-OPERATIVOS**	**05-ADMINISTRATIVA**	**03- ANALISTA**	**CF50503**	**29 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **AUXILIAR DE ATENCIÓN AL PÚBLICO**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Atender tanto a sujetos del procedimiento y sus auxiliares como a usuarios externos que concurran al CJPF, haciendo valer los criterios de acceso en razón del orden y seguridad en conformidad con las disposiciones aplicables.

II.2 Funciones:

1. Registrar el acceso de personas concurrentes al CJPF, aplicando los criterios y disposiciones correspondientes.
2. Brindar orientación e información personal, telefónica y/o escrita a sujetos del procedimiento, sus auxiliares, usuarios externos, así como a representantes de otras instituciones.
3. Monitorear el ingreso de personas, registrándolas en las bitácoras correspondientes, para apoyar la seguridad y el orden del CJPF.
4. Canalizar a las personas cuya presencia requiera accesos, tránsitos y/o ubicación especial, atendiendo a criterios y disposiciones aplicables e informando a la(s) área(s) pertinentes.
5. Gestionar la recepción, aviso y distribución de mensajería y correspondencia a las áreas destinatarias, apegándose a las políticas y procedimientos establecidos.
6. Entregar debidamente documentos o materiales derivados del desarrollo de actos procedimentales a quienes lo soliciten, atendiendo las formalidades y procedimientos previstos por el CJPF.
7. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Carrera técnica, bachillerato o pasante de educación superior.

III.2 Experiencia laboral:

No requerida

III.3 Competencias:

- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
BS - BASE	**5 - OPERATIVOS**	**07 - SERVICIOS**	**01 - AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**	**BS50701**	**32 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Garantizar el orden y mantenimiento de las instalaciones del CJPF, con apego a la normatividad y procedimientos establecidos

II.2 Funciones:

1. Mantener un adecuado nivel de servicio e higiene de las salas de audiencia, mediante la implementación de acciones orientadas a su conservación en las mejores condiciones.
2. Realizar los servicios de operación, soporte, conservación, acomodo, transporte asignados conforme a los procedimientos establecidos.
3. Apoyar actividades de recepción, distribución y entrega de mensajería y correspondencia, captura, impresión y fotocopiado de documentos.
4. Resguardar los documentos escritos mediante la recepción de los mismos que garantice su disposición para quien lo requiera en conformidad con las disposiciones aplicables
5. Conservar los acervos documentales bien organizados, almacenándolos conforme a los principios de los archivos.
6. Distribuir material, útiles, mobiliario, vales y equipo necesarios para el funcionamiento normal de labores desempeñadas en el CJPF.
7. Manejar, en su caso, el equipo de transporte y efectuar traslados de personal y documentos que le sean encomendados.
8. Desarrollar acciones vinculadas al cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el CJPF con la finalidad de prevenir accidentes y anticipar situaciones de riesgo.
9. Mantener en estado óptimo las instalaciones, reportando imperfectos y determinando la prioridad de su atención.
10. Elaborar propuestas de reparación y mantenimiento de inmuebles a través de la estimación, selección, traslado y utilización de materiales y planeación de actividades.
11. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina (En su caso, por el material asignado para realizar las tareas encomendadas) • Equipo de cómputo y comunicaciones (En caso de que le sea asignado o por su uso)	No	• Normal de oficina. • Traslados por desempeño de comisión oficial.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Secundaria, bachillerato o carrera técnica.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF-CONFIANZA	**4-HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**06-TÉCNICA**	**04-COORDINADOR TÉCNICO B**	**CF40604**	**24 MX/MD/MN**
Denominación del puesto específico: **JEFE DE SOPORTE TÉCNICO Y VIDEO-GRABACIÓN**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Administrar los medios tecnológicos utilizados para comunicaciones oficiales y registro audiovisual de audiencias que puedan generar evidencias confiables, auténticas y verificables de los actos realizados por los órganos jurisdiccionales

II.2 Funciones:

1. Administrar la tecnología de información adecuada que soporte las operaciones, asignando usuarios y niveles de acceso que faciliten la automatización de actividades de trabajo y el suministro oportuno de información.
2. Controlar de manera eficiente el resguardo oportuno de información, a través de respaldos periódicos de bancos de datos, verificando los niveles de acceso y compartición de la información, que salvaguarde los niveles de confidencialidad y discrecionalidad de la información.
3. Supervisar la adecuada utilización de equipo tecnológico utilizado para el registro audiovisual de audiencia y comunicaciones oficiales, asesorando en su uso, atendiendo a sus especificaciones técnicas y disposiciones aplicables.
4. Elaborar propuestas técnicas de enlace por videoconferencia y utilización de medios remotos para la transmisión y registro de imágenes y sonidos, atendiendo a convenios de colaboración interinstitucional, criterios de compatibilidad tecnológica, calidad y autenticidad del registro, cuando así lo determine el órgano jurisdiccional.
5. Comunicar el estatus funcional del equipo tecnológico, elaborando reportes de incidentes, programando el mantenimiento del equipo y atendiendo a las especificaciones técnicas y criterios de desempeño.
6. Administrar la utilización de firma electrónica, acreditando y registrando a los servidores públicos autorizados para su uso, inspeccionando su adecuada utilización sobre documentos electrónicos y gestionando su vigencia para garantizar la seguridad informática.
7. Administrar las aplicaciones tecnológicas asociadas a libros electrónicos de gobierno, expediente electrónico y digitalización de documentos monitoreando su funcionalidad y adecuada integración.
8. Supervisar el resguardo y archivo digital de imágenes o sonidos que sean parte del expediente electrónico, vigilando su adecuado registro durante la celebración de audiencias y verificando el cumplimiento de políticas previstas para el resguardo de información.

9. Supervisar el apoyo brindado por los técnicos de videograbación y soporte informático, atendiendo a la programación de audiencias, asignación de roles y turnos, previsiones logísticas y disposiciones aplicables.
10. Supervisar el soporte técnico brindado relativo al funcionamiento del sistema integral de información, inspeccionado la conservación y debido resguardo de documentos, así como la confiabilidad y efectividad funcional.
11. Administrar los recursos tecnológicos asociados a comunicaciones oficiales, particularmente notificaciones con la finalidad de garantizar su autenticidad y efectividad en la transmisión.
12. Definir planes emergentes de acción ante contingencias no previstas que afecten el desempeño de los medios tecnológicos, atendiendo a protocolos y disposiciones aplicables.
13. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.
14. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones. (Equipo especializado)	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de la Información, Informática o Sistemas Computacionales, o materia afín, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de dos años en actividades relacionadas con el puesto.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**5 - OPERATIVOS**	**06 - TÉCNICA**	**02 - ANALISTA ESPECIALIZADO**	**CF50602**	**27 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **TÉCNICO DE VIDEOGRABACIÓN**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Registrar las audiencias a través de medios de videograbación o cualquier medio tecnológico para asegurar su disposición, resguardo y conservación.

II.2 Funciones:

1. Preparar el equipo tecnológico, asegurando su disposición, funcionamiento y colocación adecuada para llevar a cabo el registro audiovisual de las audiencias y garantizar su integración al expediente bajo los estándares establecidos.
2. Registrar las audiencias celebradas, mediante su videograbación en conformidad a las disposiciones y procedimientos aplicables.
3. Implementar planes de acción emergente ante incidencias que afecten el registro de la audiencia, atendiendo a protocolos establecidos que aseguren el registro continuo de las audiencias.
4. Utilizar mecanismos de protección y reserva de datos, llevando a cabo acciones de distorsión de voz, imagen o datos personales que puedan exponer a los declarantes.
5. Resguardar los archivos de videograbación, verificando su almacenamiento y registro en el sistema de gestión.
6. Generar copias de registros audiovisuales de audiencia atendiendo los procedimientos previstos que aseguren su disposición hacia otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento, de las partes o de quien lo determine el órgano jurisdiccional.
7. Reportar fallas y necesidades referentes a los equipos tecnológicos, a partir de la revisión del óptimo funcionamiento.
8. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones. (Equipo especializado)	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Carrera técnica o pasante de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de la Información, Informática o Sistemas Computacionales, o materia afín, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente

Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**5 - OPERATIVOS**	**06 - TÉCNICA**	**02 – ANALISTA ESPECIALIZADO**	**CF50602**	**27 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **TÉCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Brindar servicios de apoyo a usuarios del sistema informático para asegurar una adecuada utilización y aprovechamiento de los recursos tecnológicos del CJPF.

II.2 Funciones:

1. Asesorar a los usuarios de los sistemas informáticos, instruyéndolos en su utilización, atendiendo a la capacidad tecnológica del equipo y características del software.
2. Configurar los sistemas informáticos con los medios de comunicación electrónicos para asegurar la transmisión efectiva de información entre los usuarios del sistema.
3. Asistir a los usuarios en la actualización de software, configurando los equipos asignados, instalando software, respaldando datos y detectando la presencia de software nocivo.
4. Realizar respaldos de información, atendiendo a los procedimientos establecidos para el mantenimiento del equipo y actualización del sistema informático, conservación de bancos de datos y registro de audiencias.
5. Gestionar el soporte informático de expedientes electrónicos, verificando su adecuada organización e integración según los requerimientos de la plataforma tecnológica.
6. Practicar mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático.
7. Reportar el estado de los equipos informáticos, atendiendo a políticas y periodos pertinentes, comunicando fallas y monitoreando su atención o reparación.
8. Brindar apoyo en las labores de mantenimiento operativo de la red local para asegurar la interconexión y transmisión oportuna de información entre los usuarios del sistema informático.
9. Generar copias de registros audiovisuales de audiencias en conformidad con las políticas establecidas y disposiciones aplicables.
10. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones. (Equipo especializado)	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del Puesto

III.1 Formación académica:

Carrera técnica o pasante de Licenciatura o Ingeniería en Tecnologías de la Información, Informática o Sistemas Computacionales, o materia afín, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF- CONFIANZA	4 - HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS	06 - TÉCNICA	06 - COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	CF40605	24A MX/MD/MN
Denominación del puesto específico: AUXILIAR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar la gestión administrativa en materia de recursos materiales y humanos requeridos para el desempeño de funciones del CJPF.

II.2 Funciones:

1. Gestionar recursos materiales con las áreas correspondientes, elaborando solicitudes y atendiendo a políticas y procedimientos establecidos por las áreas competentes.
2. Apoyar a los servidores públicos en la tramitación de prestaciones y servicios a los que tengan derecho, así como en la actualización de sus expedientes y cumplimiento de responsabilidades, difundiendo y comunicando la información respectiva.
3. Solicitar mantenimientos de carácter preventivo o correctivo, atendiendo a los medios y criterios establecidos por las áreas competentes.
4. Controlar gastos derivados por la operación del CJPF, llevando bitácoras de registro y su correspondencia con diligencias realizadas, gestionando reembolsos por concepto de viáticos, así como recabando documentación comprobatoria y justificatoria de gastos erogados.
5. Vigilar el almacenamiento y resguardo de material consumible proporcionado al CJPF, registrando inventarios de existencias, distribuyendo de acuerdo a criterios establecidos y anticipando su solicitud y suministro.
6. Aplicar manuales de procedimientos en materia de gestión administrativa, verificando el correcto registro, seguimiento y atención de solicitudes realizadas a las áreas correspondientes.
7. Gestionar solicitudes relativas al mobiliario y equipo requerido, atendiendo a la cumplimentación adecuada de formatos.
8. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Carrera técnica o pasante de educación superior en materia afín a Administración.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF-CONFIANZA	**4-HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**06-TÉCNICA**	**04-COORDINADOR TÉCNICO B**	**CF40604**	**24 MX/MD/MN**
Denominación del puesto específico: **JEFE DE SALAS**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Administrar la utilización de salas de conformidad al orden y disciplina requeridos para la celebración de audiencias por parte de los órganos jurisdiccionales.

II.2 Funciones:

1. Coordinar el apoyo a jueces, verificando la asignación de salas, roles y turnos de auxiliares de sala, según la programación en el sistema integral de información.
2. Resguardar el orden y disciplina en las salas, atendiendo a disposiciones aplicables al acceso, tránsito y ubicación de asistentes y ejecutando instrucciones relativas a la canalización de sujetos del procedimiento o sus auxiliares.
3. Apoyar la vigilancia de la sala, monitoreando la conducta de los asistentes a la audiencia, identificando riesgos y reportando oportunamente a las áreas competentes.
4. Supervisar la utilización adecuada de las salas, controlando el acceso a través del resguardo llaves, verificando su disposición oportuna de acuerdo a la programación prevista e instruyendo en su preparación según los procedimientos aplicables.
5. Reportar incidentes acontecidos en las salas de audiencia, atendiendo protocolos de actuación y considerando criterios establecidos.
6. Determinar planes de acción emergentes relativos a la utilización de salas ante contingencias imprevistas en la programación de los actos, atendiendo las formalidades previstas por la ley y comunicando los cambios oportunamente a los sujetos del procedimientos y sus auxiliares.
7. Canalizar a los asistentes a la audiencia cuya presencia requiera accesos, tránsitos y/o ubicación especial, atendiendo a criterios y disposiciones aplicables.
8. Supervisar la adecuada preparación y utilización de las salas de audiencia, verificando las condiciones de los espacios y reportando su estado con la finalidad de implementar acciones preventivas o correctivas de mantenimiento.
9. Verificar la preparación de medios de comunicación remota, programando su disponibilidad y supervisando su utilización para garantizar la adecuada transmisión de datos entre el auxiliar de sala y operadores ubicados fuera de la sala de audiencia.
10. Supervisar las actividades necesarias para la identificación y registro de declarantes previo al ingreso a la sala de audiencia, implementando los procedimientos aplicables para cumplir con las formalidades relativas a la reserva de información.

11. Instruir al auxiliar de sala sobre las medidas de acceso y permanencia del público en la sala, atendiendo al nivel de privacidad determinado por los juzgadores.
12. Dirigir al personal a su cargo, procurando relaciones de confianza y apoyo, negociando ante objetivos en conflicto, supervisando sus niveles de desempeño y monitoreando su capacitación y desarrollo.
13. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Administración o materia afín, expedidos por autoridad competente

III.2 Experiencia laboral:

Experiencia mínima de un año en actividades afines a las desempeñadas en el puesto

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Trabajo en equipo
- Resolución de problemas
- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
BS - BASE	**5 - OPERATIVOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**02 - AUXILIAR DE ACTUARIO**	**BS50202**	**26 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **AUXILIAR DE SALA**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Brindar apoyo oportuno durante la celebración de audiencias para favorecer el cumplimiento de formalidades de los actos procedimentales.

II.2 Funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de deberes de los asistentes a la audiencia, aplicando las disposiciones previstas para apoyar el orden y respeto requerido para el desarrollo de la audiencia.
2. Controlar el acceso a la sala de audiencia, atendiendo a las determinaciones del juzgador, así como a los protocolos y disposiciones generales previstas.
3. Identificar a declarantes, previo a su ingreso a la sala, aplicando criterios de registro, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad relativa a la publicación de sus datos.
4. Reportar incidentes sucedidos durante la celebración de la audiencia, atendiendo protocolos de actuación y comunicando oportunamente a las áreas correspondientes.
5. Brindar apoyo a jueces y magistrados durante la celebración de la audiencia, relativo a registros, presentación de declarantes, exhibición de medios de prueba así como los que determine el juzgador.
6. Apoyar en la programación de audiencias, derivado de las decisiones del juzgador durante el desarrollo de las mismas, mediante la implementación de los procedimientos previstos.
7. Ejecutar los procedimientos y disposiciones aplicables a la preparación de la sala, previo a la audiencia, reportando incidentes al área correspondiente para garantizar la aplicación oportuna de planes emergentes de acción.
8. Ejecutar procedimientos y disposiciones aplicables para el traslado de medios de prueba a la sala durante la audiencia, en coordinación con el equipo técnico y logístico.
9. Ingresar en los sistemas correspondientes la información susceptible de registrarse, así como los autos y resoluciones emitidos por el juez durante la audiencia.
10. Transmitir de manera oportuna y adecuada los registros relevantes derivados de la celebración de la audiencia para anticipar su despacho oportuno por las áreas correspondientes.
11. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Pasante de licenciatura o título y cédula profesional de Licenciatura en Administración, Derecho o materia afín.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Trabajo en equipo
- Comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente.
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

TRIBUNAL DE ALZADA

OBJETIVO: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los juicios promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

FUNCIONES:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Tercero de los Tribunales de Circuito según su adscripción:

- Capítulo II de los Tribunales Unitarios, Artículos 29 al 31.
- Capítulo III de los Tribunales Colegiados, Artículos 34 al 37.

En caso de ser nombrado Presidente del Tribunal Colegiado, considerar además los Artículos 40 y 41.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

I. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.

II. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.

III. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.

IV. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.

V. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.

VI. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca.

VII. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.

VIII. Hacer cumplir sus determinaciones.

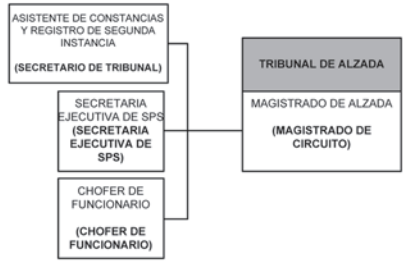
IX. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.

X. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.

XI. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ-CARRERA JUDICIAL	**1 - MANDOS SUPERIORES**	**02 - JURISDICCIONAL**	**01 - MAGISTRADO DE CIRCUITO**	**CJ10201**	**6 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **MAGISTRADO DE ALZADA**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los juicios promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

II.2 Funciones:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Tercero de los Tribunales de Circuito según su adscripción:

- Capítulo II de los Tribunales Unitarios, Artículos 29 al 31.
- Capítulo III de los Tribunales Colegiados, Artículos 34 al 37.

En caso de ser nombrado Presidente del Tribunal Colegiado, considerar además los Artículos 40 y 41.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

1. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.
2. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.
3. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.
4. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.
5. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.
6. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca.
7. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.
8. Hacer cumplir sus determinaciones.
9. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.
10. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.
11. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.
12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina • Equipo de cómputo y comunicaciones	No	• Normal de oficina. • Riesgos inherentes a su responsabilidad.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional en Derecho.

III.2 Experiencia laboral:

Práctica profesional de cuando menos cinco años.

Tres años, al menos, de experiencia en la función de Juez de Distrito, considerados como el profesionalismo necesario y formativo de la carrera judicial.

Lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

- Los señalados en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ - CARRERA JUDICIAL	**4 - HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**04 - SECRETARIO DE TRIBUNAL**	**CJ40204**	**13A ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE SEGUNDA INSTANCIA**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar al juzgador en la elaboración de las versiones escritas de resoluciones que legalmente deban constar de esa forma y de aquellas otras actuaciones judiciales que se le instruyan, estableciendo la fundamentación y motivación pertinentes y congruentes al sentido de lo resuelto, en estricto cumplimiento a las formalidades previstas por la Ley.

II.2 Funciones:

1. Realizar las constancias por escrito de resoluciones, atendiendo a la motivación y fundamentación a partir de los puntos resueltos y cumpliendo con las disposiciones legales en su elaboración.
2. Apoyar en la alimentación del sistema de información para procurar su permanente actualización.
3. Apoyar al juez en las comunicaciones con otros servidores públicos para coadyuvar a la realización de diligencias requeridas en el desarrollo efectivo de la actuación jurisdiccional, atendiendo a los criterios de procedencia establecidos en la Ley.
4. Apoyar en la obtención de tesis, doctrina, leyes, precedentes, tratados, jurisprudencias y en general aquellas herramientas que faciliten la actuación del juez.
5. Brindar el apoyo requerido, instruido por el juzgador para el despacho judicial efectivo.
6. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, en lo que no se oponga a los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional de tres años, computada a partir de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener título de Licenciado en Derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

a) Antes de recibirse el aspirante haya laborado en Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o en el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollando actividades relacionadas con aspectos jurídicos, independientemente de la categoría que tenga o del cargo que desempeñe; debiendo tener, en cualquier caso, una antigüedad de cuando menos tres años.

b) Que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal manifieste que el aspirante a ocupar la plaza posee práctica profesional de más de tres años.

III.3 Competencias:

- Trabajo en equipo
- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el Instituto de la Judicatura Federal, de conformidad con las disposiciones de su propio reglamento, lo señalado en los Artículos 109 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los acuerdos que emita el Pleno del Consejo.
- Ser ciudadano mexicano, que no se adquiera otra nacionalidad.
- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- Gozar de buena reputación.

- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder a los puestos de Carrera Judicial.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CF - CONFIANZA	**5 - OPERATIVOS**	**07 - SERVICIOS**	**02 - CHOFER DE FUNCIONARIO**	**CF50702**	**28 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **CHOFER DE FUNCIONARIO**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar al servidor público superior en el puntual traslado al destino que se le indique y auxiliar en la realización de trámites que le encomiende.

II.2 Funciones:

1. Efectuar los traslados del servidor público a quien esté asignado, en vehículo oficial o particular a los destinos que le sean solicitados.
2. Cuidar el buen estado, conservación y funcionamiento del vehículo.
3. Cuidar que la documentación y permisos legales del vehículo se encuentren vigentes, en caso contrario informar al funcionario al que se encuentre adscrito.
4. Recibir, registrar, controlar e informar sobre los vales de combustible utilizados.
5. Mantener limpia la unidad, realizar composturas menores y reportar con oportunidad el requerimiento del servicio o reparación mayor que necesite el vehículo.
6. Cumplir las comisiones oficiales que le encomiende su jefe inmediato.
7. Mantener y guardar discreción de aquellos asuntos o información confidencial a la que por su trabajo tenga acceso.
8. Participar en la realización de trabajos en las condiciones de tiempo y lugar que por necesidades de la Institución se requiera.
9. Solicitar los recursos necesarios o vales de gasolina que requiera, así como solicitar su reembolso.
10. Manejar el vehículo oficial o particular que le sea asignado para efectuar los traslados que le sean indicados.
11. Conducir con precaución y atender los señalamientos de tránsito.
12. Las demás que le encomiende su jefe inmediato.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Equipo de transporte por el uso y manejo del asignado al Magistrado o Juez de su adscripción.	No	• Exteriores, riesgos inherentes a su responsabilidad.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Secundaria terminada.

III.2 Experiencia laboral:

Mínima de seis meses.

III.3 Competencias:

- Comunicación efectiva
- Compromiso

III.4 Otros requisitos:

- Licencia de conducir.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.
- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el área correspondiente
- Los demás que determinen los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

JUZGADO DE CONTROL

OBJETIVO: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los procedimientos promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

FUNCIONES:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

I. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.

II. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.

III. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.

IV. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.

V. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.

VI. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.

VII. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.

VIII. Hacer cumplir sus determinaciones.

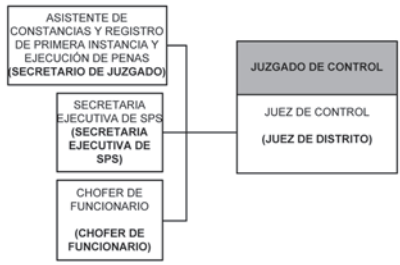
IX. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.

X. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y Congruencia.

XI. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ-CARRERA JUDICIAL	**1 - MANDOS SUPERIORES**	**02 - JURISDICCIONAL**	**02 - JUEZ DE DISTRITO**	**CJ10202**	**7 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **JUEZ DE CONTROL**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los procedimientos promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

II.2 Funciones:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

1. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.
2. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.
3. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.
4. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.
5. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.
6. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.
7. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.
8. Hacer cumplir sus determinaciones.
9. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.
10. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.
11. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.
12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina • Equipo de cómputo y comunicaciones	No	• Normal de oficina. • Riesgos inherentes a su responsabilidad.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional en Derecho.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de cinco años.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

Los señalados en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ - CARRERA JUDICIAL	**4 - HOMÓLOGOS A MANDOS MEDIOS**	**02 - JURISDICCIONAL**	**07 - SECRETARIO DE JUZGADO**	**CJ40207**	**13C ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTRO DE PRIMERA INSTANCIA Y EJECUCIÓN DE PENAS**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Apoyar al juzgador en la elaboración de las versiones escritas de resoluciones que legalmente deban constar de esa forma y de aquellas otras actuaciones judiciales que se le instruyan, estableciendo la fundamentación y motivación pertinentes y congruentes al sentido de lo resuelto, en estricto cumplimiento a las formalidades previstas por la Ley.

II.2 Funciones:

1. Apoyar en la elaboración de constancias por escrito de resoluciones, atendiendo a la motivación y fundamentación a partir de los puntos resueltos y cumpliendo con las disposiciones legales en su elaboración.
2. Apoyar en la alimentación del sistema de información para procurar su permanente actualización.
3. Apoyar al juez en las comunicaciones con otros servidores públicos para coadyuvar a la realización de diligencias requeridas en el desarrollo efectivo de la actuación jurisdiccional, atendiendo a los criterios de procedencia establecidos en la Ley.
4. Apoyar en la obtención de tesis, doctrina, leyes, precedentes, tratados, jurisprudencias y en general aquellas herramientas que faciliten la actuación del juez.
5. Brindar el apoyo requerido, instruido por el juzgador para el despacho judicial efectivo.
6. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, en lo que no se oponga a los principios del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
No	• Mobiliario y equipo de oficina. • Equipo de cómputo y comunicaciones.	No	• Normal de oficina.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional de Licenciado en Derecho, expedidos por autoridad competente.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional de tres años, computada a partir de la fecha en que el aspirante haya presentado su examen profesional para obtener título de Licenciado en Derecho, salvo en aquellos casos en que se satisfagan alguno de los siguientes requisitos:

a) Antes de recibirse el aspirante haya laborado en Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, o en el Consejo de la Judicatura Federal, desarrollando actividades relacionadas con aspectos jurídicos, independientemente de la categoría que tenga o del cargo que desempeñe; debiendo tener, en cualquier caso, una antigüedad de cuando menos tres años.

b) Que el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal manifieste que el aspirante a ocupar la plaza posee práctica profesional de más de tres años.

III.3 Competencias:

- Trabajo en equipo
- Calidad en el servicio
- Comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Compromiso
- Pensamiento analítico
- Aprendizaje continuo

III.4 Otros requisitos:

- Haber aprobado los exámenes de aptitud practicados por el Instituto de la Judicatura Federal, de conformidad con las disposiciones de su propio reglamento, lo señalado en los Artículos 109 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en los acuerdos que emita el Pleno del Consejo.
- Ser ciudadano mexicano, que no se adquiera otra nacionalidad.
- Estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
- Gozar de buena reputación.
- No haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad mayor a un año.

- Los demás que determinen la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo relacionados con los concursos para acceder a los puestos de Carrera Judicial.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

JUZGADO DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO

OBJETIVO: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los juicios promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

FUNCIONES:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

I. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.

II. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.

III. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.

IV. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.

V. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.

VI. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.

VII. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.

VIII. Hacer cumplir sus determinaciones.

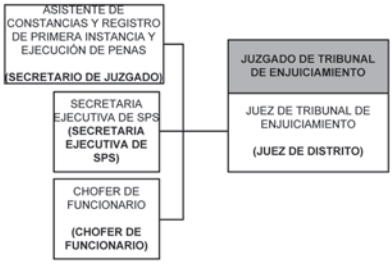
IX. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.

X. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.

XI. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ-CARRERA JUDICIAL	**1 - MANDOS SUPERIORES**	**02 - JURISDICCIONAL**	**02 - JUEZ DE DISTRITO**	**CJ10202**	**7 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **JUEZ DE TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los juicios promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

II.2 Funciones:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

1. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.
2. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.
3. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.
4. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.
5. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.
6. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.
7. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.
8. Hacer cumplir sus determinaciones.
9. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.
10. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.
11. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.
12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina • Equipo de cómputo y comunicaciones	No	• Normal de oficina. • Riesgos inherentes a su responsabilidad.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional en Derecho.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de cinco años.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

- Los señalados en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

JUZGADO DE EJECUCIÓN DE PENAS

OBJETIVO: Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los procedimientos promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

FUNCIONES:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

I. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.

II. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.

III. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.

IV. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.

V. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.

VI. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.

VII. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.

VIII. Hacer cumplir sus determinaciones.

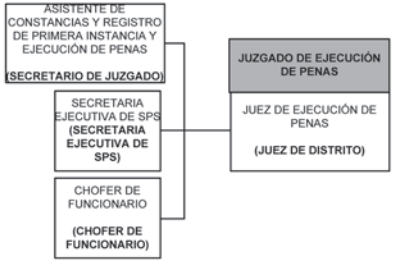
IX. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.

X. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.

XI. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.

XII. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO



CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE PUESTO ESPECÍFICO

I. Datos de Control.-

Tipo:	Grupo:	Rama:	Puesto:	Clave:	Nivel y Rango:
CJ-CARRERA JUDICIAL	**1 - MANDOS SUPERIORES**	**02 - JURISDICCIONAL**	**02 - JUEZ DE DISTRITO**	**CJ10202**	**7 ÚNICO**
Denominación del puesto específico: **JUEZ DE EJECUCIÓN DE PENAS**					

II. Descripción.-

II.1 Objetivo:

Impartir justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, resolviendo los procedimientos promovidos, en los términos previstos en las leyes aplicables.

II.2 Funciones:

De conformidad con lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Título Cuarto de los Juzgados de Distrito según su adscripción:

- Capítulo II, Artículos 48 al 55.

De manera general más no limitativa, las siguientes:

1. Desempeñar su función jurisdiccional, que consiste en decir el derecho ante las situaciones controvertidas que se le planteen y reflexionar adecuadamente la razón cuando no resuelva el fondo de la controversia.
2. Resolver los asuntos de su competencia dentro de los plazos y términos que fija la ley.
3. Fundar y motivar sus resoluciones, sujetando su actuar a la ley.
4. Resguardar expedientes, documentos y valores, que materialmente tenga a su disposición, para cumplir el ejercicio de sus funciones.
5. Recibir las pruebas de las partes conforme a las leyes aplicables.
6. Atender y recibir a las personas que sean partes en los juicios de que conozca, siempre y cuando la contraparte esté también presente.
7. Sujetarse a las formalidades que establece la ley.
8. Hacer cumplir sus determinaciones.
9. Mantener el orden en el Órgano Jurisdiccional de su adscripción.
10. Elaborar sus resoluciones acatando las reglas de claridad, precisión, exhaustividad y congruencia.
11. Turnar el asunto a la autoridad competente, cuando él no lo sea.
12. Las demás que correspondan al ámbito de su competencia.

II.3 Responsabilidades:

1. Desempeñar sus funciones a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; y
2. Las señaladas en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

II.4 Responsabilidad por manejo de recursos:

HUMANOS	MATERIALES	VALORES	AMBIENTE DE TRABAJO
Sí	• Mobiliario y equipo de oficina • Equipo de cómputo y comunicaciones	No	• Normal de oficina. • Riesgos inherentes a su responsabilidad.

III. Perfil del puesto.-

III.1 Formación académica:

Título y cédula profesional en Derecho.

III.2 Experiencia laboral:

Profesional mínima de cinco años.

III.3 Competencias:

- Liderazgo
- Comunicación efectiva
- Colaboración transversal
- Compromiso
- Pensamiento analítico

III.4 Otros requisitos:

- Los señalados en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente.

Nota: La norma de creación del puesto se deberá consultar en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal vigente, de conformidad con el puesto indicado en el apartado: **I. Datos de Control** de esta Cédula de Descripción de Puesto Específico.

ANEXOS

Anexo 1. **Glosario,** donde se definen diversos términos usados en este documento.

Anexo 2. **Registro de Actualizaciones,** donde se identifican los principales cambios entre la versión anterior y la actual, principalmente en la cantidad de cédulas de descripción de puestos que conforman este manual.

ANEXO 1. GLOSARIO

Para efecto del presente documento se entenderá por:

Catálogo General de Puestos.- Al documento que contiene la clasificación de los puestos autorizados en el Consejo de la Judicatura Federal.

Cédula de Descripción de Puesto Específico.- Al documento en donde se detalla las características de un puesto determinado, considerando datos de control, denominación del puesto específico, objetivo, funciones, responsabilidades, y perfil del ocupante.

Educación medio-superior.- El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes, conforme lo señala el artículo 37 de la Ley General de Educación.

Educación superior.- A la educación que comprende el cincuenta por ciento o más de los créditos correspondientes a las asignaturas que conforman el plan de estudios de cada carrera.

Función.- Al conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los objetivos del órgano o área responsable de su cumplimiento.

Manual de Organización General.- Al documento que contiene la información detallada sobre antecedentes, marco jurídico, referencia a atribuciones, organigrama general, estructura orgánica, objetivo y funciones de los órganos. En este sentido para la elaboración de este documento se tiene como principal fuente de información el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del propio Consejo vigente.

Manual de Organización y de Puestos.- Al documento normativo de carácter administrativo en el que se detalla el objetivo y funciones de cada una de las áreas que conforman un área administrativa; así como las cédulas de descripción de puesto específico que las conforman.

Manual General de Puestos.- Al documento que contiene las descripciones de puestos que administra el Consejo, en donde se establece el propósito, funciones, requisitos y responsabilidades de cada uno de los puestos vigentes en el Tabulador General de Sueldos y Prestaciones del Consejo.

Objetivo.- A la descripción del propósito específico que se fija cualitativa o cuantitativamente y que permite orientar los esfuerzos y el desarrollo de las acciones hacia un fin específico, que se espera obtener de un programa, un plan o una unidad de trabajo.

Pasante.- A la persona que ha cubierto el cien por ciento de los créditos correspondientes a las asignaturas que conforman el plan de estudios de una carrera del nivel de licenciatura.

Puesto.- A la unidad de trabajo específica e impersonal, constituida por un conjunto de operaciones que deben realizarse, y aptitudes que debe reunir el ocupante, en determinadas condiciones de trabajo.

Responsabilidades.- A la descripción de las principales obligaciones inherentes a la ejecución de las funciones del puesto.

ANEXO 2. REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

Cons.	Revisión	Motivo	Descripción
1	Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional	Modificación de la Cédula de descripción de puesto específico de Administrador del Centro de Justicia Penal, aprobado por el Pleno mediante oficio SEPLEP./GTSJPA./ 009/6435/2014.	Modificación de la Cédula de descripción de puesto especifico del Administrador del Centro de Justicia Penal en el apartado III. Perfil del puesto: III.1 Formación académica, y; III.2 Experiencia laboral.

- - - - - EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, -

- C E R T I F I C A:- -

- - - - Que este Manual de Organización y Puestos del Centro de Justicia Penal, fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de ocho de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014).

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CENTRO DE JUSTICIA PENAL

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

CONTENIDO

		Página
Hoja de Autorización		3
Introducción		4
I.	**Objetivo del manual**	5
II.	**Marco Jurídico**	6
III.	**Orientación Estratégica del Centro de Justicia Penal**	8
IV.	**Mapeo de Procesos del Centro de Justicia Penal**	9
	IV.1 Mapa General de Procesos del Centro de Justicia Penal	10
	IV.2 Proceso Operativo	
	IV.2.1 Sistema Procesal Penal Acusatorio	11
	IV.3 Matriz de Procesos y Procedimientos Administrativos del Centro de Justicia Penal	14
V.	**Procedimientos Administrativos**	
	Subproceso: Programación de Actos Procedimentales	
	1. Recepción y registro de peticiones	
	2. Programación de audiencia	
	3. Preparación de sala para audiencia	
	Subproceso: Intervención Jurisdiccional	
	4. Apoyo para el desarrollo de la audiencia	
	5. Desarrollo de videoconferencia	
	Subproceso: Despacho Judicial	
	6. Emisión escrita de resoluciones	
	7. Despacho judicial	
	8. Notificaciones	
Anexos		
	Anexo 1. Glosario	
	Anexo 2. Registro de Actualizaciones	

Poder Judicial de la Federación

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
OFICIALÍA MAYOR

Poder Judicial de la Federación Consejo de la Judicatura
Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Hoja de Autorización

Nombre del Documento:

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Clave	Aprobado por	Oficio de Aprobación	Fecha de Aprobación
MPPA-CJP-E-SEP-2014			

Formulado por:

Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos

Integrado por:

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

Dirigido a:

Los servidores públicos del Centro de Justicia Penal, como herramienta técnico-administrativa que establece los procesos y procedimientos administrativos de las áreas que la integran para su consulta y aplicación correspondientes.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional del 18 de junio de 2008, que adopta el Sistema Procesal Penal Acusatorio ordena a los tres Poderes del Estado Mexicano la transformación del sistema de justicia penal, para transitar de uno mixto preponderantemente escrito a uno acusatorio oral. Para dar cumplimiento este mandato constitucional la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos desarrolló un Plan Maestro dentro del cual se tiene contemplado para 2014, la entrada en operación del Centro de Justicia Penal; por tal motivo y en seguimiento a diversos asuntos planteados en el mismo, se formuló el Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos que tiene como propósito fundamental servir como una fuente normativa actualizada y confiable de referencia, orientación y consulta para los servidores públicos del Centro de Justicia Penal, en relación a las atribuciones, objetivos e integración de los procesos operativos, así como los procedimientos administrativos que muestran el detalle de la ejecución de los mismos.

El presente Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos está integrado por cinco apartados, mismos que a continuación se describen:

I. **Objetivo del Manual**. En el que se establece el propósito del presente documento.

II. **Marco Jurídico.** Integra los ordenamientos que regulan el funcionamiento del Centro de Justicia Penal.

III. **Orientación Estratégica del Centro de Justicia Penal**. En la que se presenta la Misión y la Visión del área, con una orientación al Macroproceso de Administración de Justicia.

IV. **Mapeo de Procesos.** Comprende los procesos operativos con sus respectivos Mapas Específicos, ENPROSA (Entradas-Proceso-Salidas), y Funcional de cada uno de éstos.

V. **Procedimientos Administrativos.** En donde se presentan agrupados por subprocesos los procedimientos administrativos, integrado cada uno de estos por objetivo, fundamento legal, conceptos básicos, políticas de operación, y diagrama de flujo; que se desarrollan en el Centro de Justicia Penal.

Asimismo, como anexos se incluyen un Glosario, en donde se precisan conceptos técnico-administrativos utilizados a lo largo del documento para facilitar su comprensión, y una hoja de Registro de Actualizaciones, con la finalidad de que se identifiquen las modificaciones que sufra en su contenido durante su vigencia.

Por último, para que este Manual cumpla con la finalidad de ser un documento normativo-administrativo y de consulta permanente sobre los subprocesos y procedimientos administrativos del Centro de Justicia Penal, es importante que sea revisado y actualizado anualmente o cada vez que se presenten modificaciones de carácter organizacional o funcional en las áreas responsables de su ejecución.

I. OBJETIVO DEL MANUAL

Contar con un instrumento normativo de carácter técnico-administrativo que permita identificar y reflejar de manera formal los procesos operativos en los que intervienen las áreas internas que integran el Centro de Justicia Penal, así como los procedimientos administrativos de éstas, coadyuvando con ello a dar cumplimiento a los principios de la transparencia en la información pública.

II. MARCO JURÍDICO

Legislación Federal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917.
- Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995.
- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002.
- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio 2003.
- Código Nacional de Procedimientos Penales.
  Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal

- Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito, y de los juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero 2013.
- Acuerdo General 16/2009 que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo 2009.
- El Acuerdo General 75/2008 por el que se crean los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre 2008.
- Acuerdo General 34/2000 relativo a la determinación de los Libros de Control que obligatoriamente deberán llevar los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, así como su descripción e instructivos correspondientes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de julio 2000.
- Los acuerdos generales por los que se regula el sistema de turno de las Oficialías de Partes Comunes de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.

Diversas Disposiciones

- Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2004.
- Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2004.

- Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, vigente.
- Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, vigente.

III. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL

El Centro de Justicia Penal se consolida como un Centro de Justicia oral, con el objeto de lograr un ejercicio responsable, profesional y honorable de la función jurisdiccional; como se refleja en su Misión:

> *"Contribuir en el acceso a la justicia en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley en relación a la aplicación del derecho y resolución de conflictos que surja con motivo de la comisión del delito".*

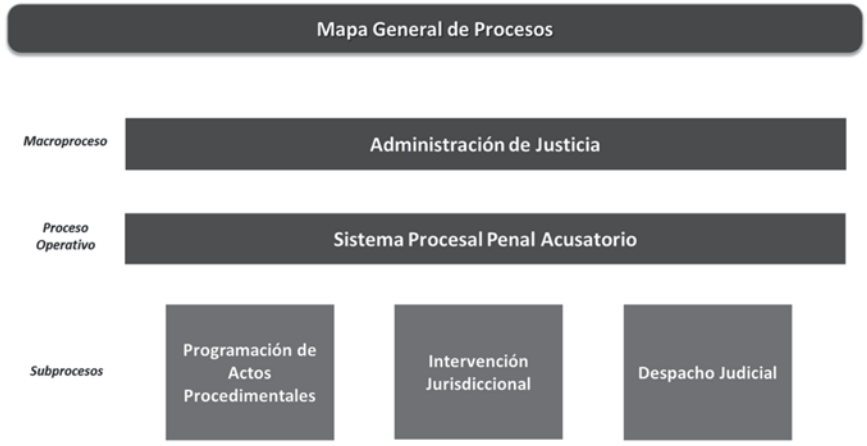
Asimismo, se observa como un Centro comprometido con la aplicación de justicia, como se cita en su Visión:

> *"Ser un órgano generador de confianza en la impartición de justicia pronta y expedita comprometido con la ciudadanía, aplicando los principios universales de definición, protección y defensa de los derechos propios de la condición humana, creando una cultura jurídica acorde a la demanda de la sociedad."*

IV. MAPEO DE PROCESOS DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL

IV.1 Mapa General de Procesos del Centro de Justicia Penal

Considerando el propósito y prospectiva de funcionamiento, del Centro de Justicia Penal interviene en el Proceso operativo de Sistema Procesal Penal Acusatorio, así mismo, participa en los subprocesos de Programación de Actos Procedimentales, Intervención Jurisdiccional y Despacho Judicial; siendo su Mapa General el siguiente:



IV.2 Proceso Operativo

IV.2.1 Sistema Procesal Penal Acusatorio

Mapa Específico del Proceso Clave: Sistema Procesal Penal Acusatorio

Proceso Clave: Sistema Procesal Penal Acusatorio

Subprocesos / *Actividades relevantes*:

1. Programación de actos procedimentales
- 1.1 Recepción, clasificación y registro de asuntos
- 1.2 Distribución de asuntos
- 1.3 Consulta de asuntos en sistema
- 1.4 Clasificación por tipo de audiencia
- 1.5 Asignación de sala y publicación en tablero de control
- 1.6 Asignación de juez y equipo de apoyo, y notificación
- 1.7 Gestión de la seguridad externa para el desarrollo de la audiencia
- 1.8 Confirmación de sala
- 1.9 Preparación de sala
- 1.10 Comprobación de asistencia y registro de las partes intervinientes
- 1.11 Preparación de equipo de grabación
- 1.12 Protocolo previo al ingreso del juez

2. Intervención Jurisdiccional
- 2.1 Inicio de grabación y protocolo de apertura
- 2.2 Desarrollo de la audiencia
- 2.3 Presentación y desahogo de pruebas
- 2.4 Cierre de la audiencia
- 2.5 Generación de copias de audiencia
- 2.6 Revisión de resoluciones de desahogo de audiencias
- 2.7 Redacción y firma de resoluciones
- 2.8 Autorización de actos procedimentales

3. Despacho Judicial
- 3.1 Recepción de promociones
- 3.2 Elaboración de acuerdos y notificaciones
- 3.3 Publicación y/o envío de promociones, acuerdos y notificaciones
- 3.4 Recepción de acuses y archivo
- 3.5 Atención de Diligencias de comunicaciones oficiales provenientes de otros juzgados
- 3.6 Atención de comunicaciones ordenadas por juez o tribunal

Área Ejecutora: Centro de Justicia Penal Federal

Mapa ENPROSA del Proceso Operativo: Sistema Procesal Penal Acusatorio

ENTRADAS

Insumos:
- Causas penales
- Comunicaciones oficiales
- Medidas de protección
- Actos de Investigación
- Providencias Precautorias
- Promociones
- Medios de Prueba
- Análisis de riesgos
- Seguridad externa

Requerimientos de entrada:
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Legislación aplicable

Proveedores:
- Ministerio Público Federal
- Defensoría
- Órganos Jurisdiccionales
- Victima u ofendido
- Asesores jurídicos
- Centro Penitenciario
- Imputado
- Policía Federal

SUBPROCESOS

1. Programación de actos procedimentales

2. Intervención Jurisdiccional

3. Despacho Judicial

Indicadores:
- Asuntos tramitados
- Audiencias desarrolladas
- Promociones, notificaciones, acuerdos y comunicaciones oficiales desahogadas

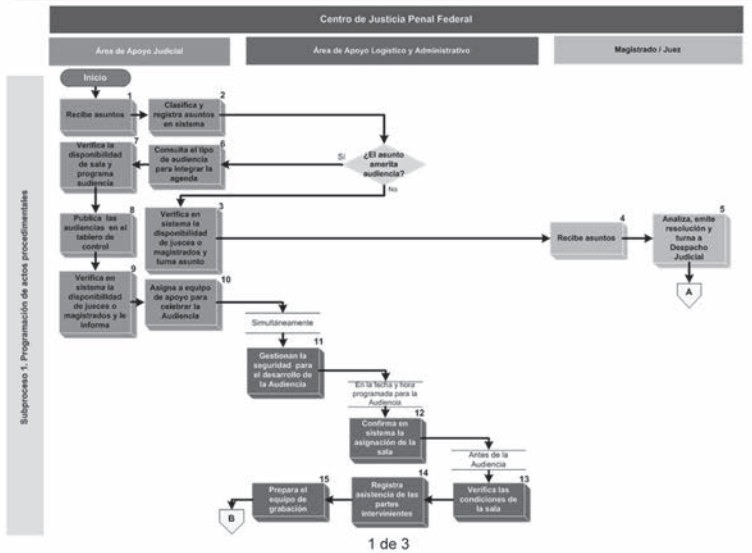
SALIDAS

Productos o servicios:
- Resoluciones oficiales
- Comunicaciones oficiales
- Audiencias
- Expediente

Requerimientos de salida:
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Legislación aplicable

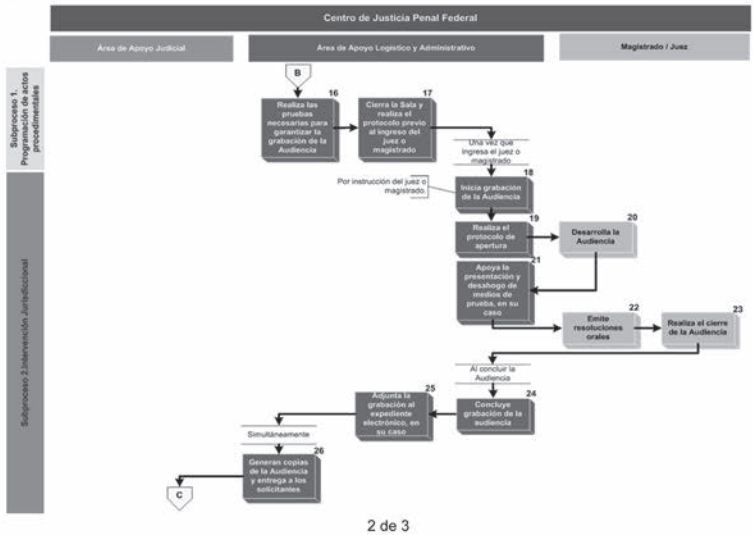
Usuarios:
- Ministerio Público Federal
- Defensoría
- Órganos Jurisdiccionales
- Victima u ofendido
- Asesores jurídicos
- Centro Penitenciario
- Imputado

Mapa Funcional del Proceso Operativo: Sistema Procesal Penal Acusatorio

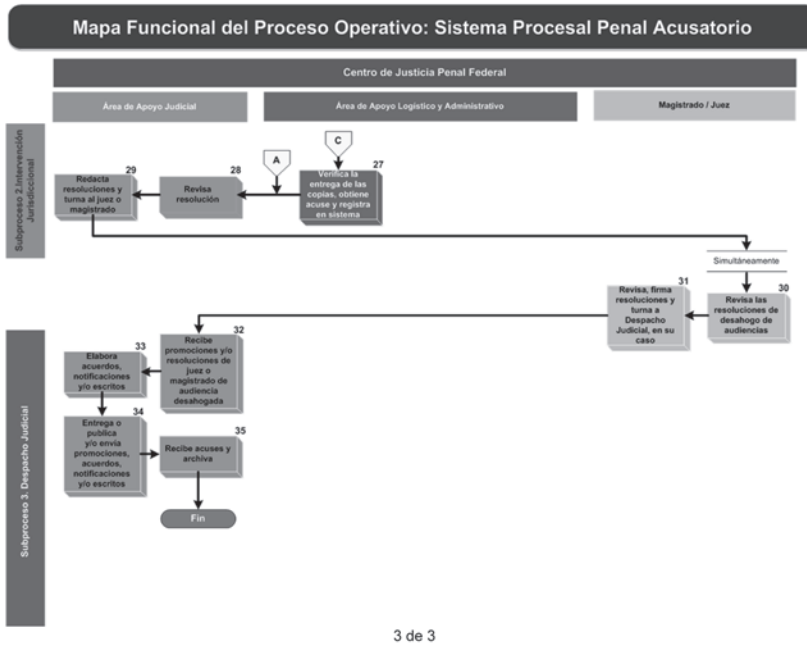


1 de 3

Mapa Funcional del Proceso Operativo: Sistema Procesal Penal Acusatorio



2 de 3


Mapa Funcional del Proceso Operativo: Sistema Procesal Penal Acusatorio
Centro de Justicia Penal Federal
Área de Apoyo Judicial
Área de Apoyo Logístico y Administrativo
Magistrado / Juez
Subproceso 2.Intervención Jurisdiccional
C
A
27
Verifica la entrega de las copias, obtiene acuse y registra en sistema
28
Revisa resolución
29
Redacta resoluciones y turna al juez o magistrado
Simultáneamente
30
Revisa las resoluciones de desahogo de audiencias
31
Revisa, firma resoluciones y turna a Despacho Judicial, en su caso
32
Recibe promociones y/o resoluciones de juez o magistrado de audiencia desahogada
33
Elabora acuerdos, notificaciones y/o escritos
34
Entrega o publica y/o envía promociones, acuerdos, notificaciones y/o escritos
35
Recibe acuses y archiva
Fin
Subproceso 3. Despacho Judicial

3 de 3

IV.3 Matriz de Procesos y Procedimientos Administrativos del Centro de Justicia Penal

Los Procedimientos Administrativos autorizados que reflejan la operación del Centro de Jurídica Penal, están vinculados a los Procesos Operativos antes descritos, de la siguiente manera:

Matriz de Procesos y Procedimientos Administrativos

Macroproceso	Proceso Operativo	Subproceso	Cons.	Procedimiento Administrativo
Administración de Justicia	Sistema Procesal Penal Acusatorio	Programación de Actos Procedimentales	1	Recepción y registro de peticiones
			2	Programación de audiencia
			3	Preparación de sala para audiencia
		Intervención Jurisdiccional	4	Apoyo para el desarrollo de la audiencia
			5	Desarrollo de videoconferencia
		Despacho Judicial	6	Emisión escrita de resoluciones
			7	Despacho judicial
			8	Notificaciones

V. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SUBPROCESO: Programación de Actos Procedimentales

1. Recepción y registro de peticiones.
2. Programación de audiencia.
3. Preparación de sala para audiencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 6
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **1. Programación de Actos Procedimentales**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Recepción y registro de peticiones		

OBJETIVO

Recibir las promociones presentadas ante el Centro de Justicia Penal, considerando los criterios de verificación, registro, turno y apremio, que conforme al acto y la normatividad aplicable correspondan.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en los artículos 131, 134, 137, 138, 141, 142, 143,157, 161, 162,190, 193, 202, 252, 258, 282, 291 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que los actos procedimentales que se refieren a las solicitudes al Órgano jurisdiccional por parte del Ministerio Público, a la atención oportuna de peticiones dirigidas al Órgano jurisdiccional, las medidas de protección, las providencias precautorias, las órdenes de citación, comparecencia y citación, la imposición y revisión de medidas cautelares, la aprobación de acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, el procedimiento abreviado, los actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de Control, el control judicial sobre determinaciones del Ministerio Público, al cateo, la intervención de comunicaciones, la audiencia inicial para control de detención y/o imputación, y otros, que establecen las promociones del procedimiento penal.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Recepción y registro de peticiones	2 de 6

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- Agenda de audiencias.- Al módulo del software de gestión que permite programar el calendario de audiencias con base en la disponibilidad de salas y horario asignado a los órganos jurisdiccionales.
- Asunto.- A todo aquel procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, distinto a las causas penales que amerite la integración de un expediente, como pueden ser técnicas de investigación con control judicial.
- Causa penal.- A la promoción por la cual se ejercitará la acción penal por el Ministerio Público, con detenido, caso en el que solicitará audiencia inicial para el control de detención y en su caso imputación; o bien, sin detenido, caso en el que podrá solicitar orden de aprehensión, comparecencia o citación del imputado. La promoción de acción penal por particulares también integrará causa penal.
- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Libro de control.- Al registro oficial de las actuaciones judiciales realizadas por los órganos jurisdiccionales y áreas jurídico administrativas del CJP, para el control estadístico y de inspección judicial.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Petición.- A la solicitud presentada a un Órgano jurisdiccional, la cual puede tratarse de un asunto, promoción, solicitud de audiencia o cualquier otra derivada de los procedimientos previstos en el CNPP.
- Promoción.- A las promociones que recibe la Oficialía de Partes del CJP, que se pueden clasificar en dos grandes grupos: en asuntos nuevos entendidos como los que dan la pauta a la apertura de un expediente (por ejemplo, ejercicios de la acción penal, con o sin detenido, pedimentos de técnicas de investigación que requieren autorización judicial, prueba anticipada) y las promociones en general, que se presentan posteriormente al documento que generó la apertura de un nuevo expediente (promociones de las partes en el procedimiento, oficios, informes y documentos remitidos por otras autoridades, entidades o personas físicas o morales diversas a las partes, promociones de interposición de recursos o amparos).
- Returno.- A la asignación de un asunto que ya ingresó a un Órgano jurisdiccional distinto al originalmente asignado, debido al surgimiento de alguna hipótesis procesal que le impida continuar conociendo del asunto.
- Software de gestión.- A la herramienta informática diseñada para el apoyo en las actividades relativas al registro, trámite, control y seguimiento de los asuntos y causas desahogadas en el Centro de Justicia Penal, además de agilizar las comunicaciones con otras instituciones participantes en los procesos judiciales.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
- Turno.- A la asignación de un Órgano jurisdiccional para el conocimiento de un asunto de nuevo ingreso que da pauta a la apertura de un expediente.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Recepción y registro de peticiones	3 de 6

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Administrador del CJPF será el encargado de:
   - Supervisar la recepción y registro de peticiones realizada por la Oficialía de Partes de conformidad con la normatividad procedentes para su clasificación, recepción, registro en libros de control, turno o returno y apertura de expediente.
   - Modificar el turno de Órgano jurisdiccional, originalmente asignado de manera automatizada a cargo del Oficial de Partes, ante contingencias extraordinarias que impidan su actuación, en virtud de que es el único autorizado para realizar modificaciones.
   - Determinar los parámetros que solicite el software de gestión para el turno automático de asuntos y promociones.
   - Supervisar la atención y canalización de promociones y asuntos por parte del Asistente del Despacho Judicial.
   - Supervisar la programación oportuna en la agenda de audiencias, derivada por la recepción de una promoción.
   - Supervisar la atención de promociones recibidas que requieran la emisión de resoluciones a que haya lugar, que por excepción, no sea requisito emitir en audiencia.
   - Registrar y resguardar certificados de depósito, pólizas de fianza, garantías diversas o cualquier documento valor y objetos susceptibles de resguardo asociados a una causa o asunto.
   - Asegurar la ejecución de los procedimientos relativos a la programación de audiencia, despacho judicial y notificaciones derivados de la recepción y registro de promociones.

2. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Recibir y revisar que la promoción cumpla con los requerimientos correspondientes para su trámite y hacer del conocimiento del Órgano jurisdiccional que deba conocer.
   - Recibir las peticiones enviadas por medios electrónicos y realizar las gestiones a las que haya lugar.
     - En caso de que la petición deba remitirse al Órgano jurisdiccional, deberá coordinarse con el Asistente de Constancias y Registro para hacerlo de su conocimiento.
   - Integra las promociones al expediente correspondiente, según lo amerite, asegurando su permanente actualización, de conformidad a la legislación aplicable.
   - Ratificar o rectificar el turno al Órgano jurisdiccional
     - En caso de que se trate de la radicación de un asunto nuevo, deberá verificar el turno de la promoción al Órgano jurisdiccional que corresponda, utilizando los medios tecnológicos disponibles para el efecto para la realización de la secuela procesal que proceda.
     - En caso de que se trate de una promoción subsecuente de la que un Órgano jurisdiccional haya conocido con anterioridad; deberá hacerlo de su conocimiento para la realización de la secuela procesal que proceda.
   - Realizar la resolución o actividad que el Órgano jurisdiccional determine que deba recaer a la promoción de cuenta.
   - Realizar lo conducente a la emisión de resoluciones, recepción y sustanciación necesarias para el desahogo de la audiencia correspondiente.
   - Realizar las gestiones para remitir los registros al notificador para la práctica de las notificaciones o citaciones a que haya lugar.
   - Remitir al Administrador del CJPF los certificados de depósito, pólizas de fianza, garantías diversas o cualquier documento valor, así como los objetos recibidos que ameriten resguardo, para este efecto.

3. El Oficial de Partes será el responsable de:
   - Recibir las peticiones escritas presentadas durante las veinticuatro horas todos los días del año.
   - Verificar que la documentación presentada se encuentra dirigida a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
   - Recibir la petición junto con las copias y anexos, imprimiendo el sello respectivo en la primera hoja
     - El sello contendrá fecha y hora de presentación y asentará el número de copias y de anexos.
     - Además se precisará si obra firma, registrándola.

- En la copia que se entregará al interesado, así como en los comprobantes de registro, se deberá anotar fecha y hora de recepción, número de copias y anexos, si los hubiere, y si ostenta o no firma, asentando las observaciones que adviertan en la revisión de la documentación recibida, signando la persona que haya recibido la documentación, proporcionando la información relativa al turno del asunto y el número de registro que le fue asignado, según el caso.
- Registra la petición, obteniendo impresión por triplicado de la boleta de turno. Un ejemplar de dicha boleta se entregará al interesado, otro al Órgano jurisdiccional al que se turne y, el último, lo conservará el oficial de partes como soporte documental en el cual se asentará el nombre y firma del servidor público que recibió el asunto, lo anterior, para efectos de consulta, inspección y archivo, según el caso.
- La boleta de turno contendrá, según el caso, los datos siguientes:
  - Fecha y hora de presentación.
  - Fecha y hora de turno.
  - Número de registro consecutivo determinado de manera automática por el software de gestión.
  - Nombre del promovente.
  - Nombre del defensor o asesor jurídico, según el caso.
  - Tipo de asunto, recurso que se interpone o procedimiento que se promueve.
  - Número de expediente que sirva como antecedente.
  - El delito por el que se ejerce acción penal y el número de la carpeta de investigación de la que deriva.
  - Órgano jurisdiccional al que se turna el asunto.
  - Número de copias y anexos que se reciben; y el señalamiento si cuenta con firma.
  - El asunto o asuntos con el cual se relaciona.
  - Nombre y firma del servidor público que recibió el asunto y del que lo entregue al Órgano jurisdiccional.
- Según sea el caso, la recepción de peticiones, podrá implicar el turno o returno al Órgano jurisdiccional así como la programación de audiencia.

– En caso de que la petición recibida requiera turnar o returnar al Órgano jurisdiccional:
- Tratándose de la radicación de un asunto nuevo, deberá turnar la promoción al Órgano jurisdiccional que corresponda, de acuerdo a la propuesta de turno determinada por el software de gestión, la cual remitirá al Asistente de Despacho Judicial, para la realización de la secuela procesal que proceda.
- En caso de que se trate de una promoción subsecuente de la que ya se tenga conocimiento; deberá remitirla al Órgano jurisdiccional del conocimiento y al Asistente de Despacho Judicial, para la realización de la secuela procesal que proceda.

– En caso de que se tenga por recibida una promoción no correspondiente al CJP, se remitirá al Asistente de Despacho Judicial a efecto de tramitar su devolución inmediata, previa integración de expediente o registro y emisión del auto.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Recepción y registro de peticiones	5 de 6

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
Oficial de Partes	1	Recibe la petición con las copias y anexos correspondientes.
	2	Verifica que la documentación presentada se encuentra dirigida a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación.
	3	Imprime el sello respectivo en la primera hoja.
	4	Registra la petición y verifica si requiere turno/returno. ¿Requiere turno/returno? Si.- Continúa en la actividad número 5. No.- Continúa en la actividad número 6.
	5	Consulta en el software de gestión el turno determinado de manera automatizada.
	6	Obtiene una impresión por triplicado de la boleta de turno
	7	Entrega un ejemplar de la boleta de turno al interesado, remite otra al asistente del Despacho Judicial y conserva copia como soporte documental.
	8	Entrega la petición al Asistente de Despacho Judicial, para su revisión y en su caso, integración de expediente.
		Fin de procedimiento

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	**DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

Clave:

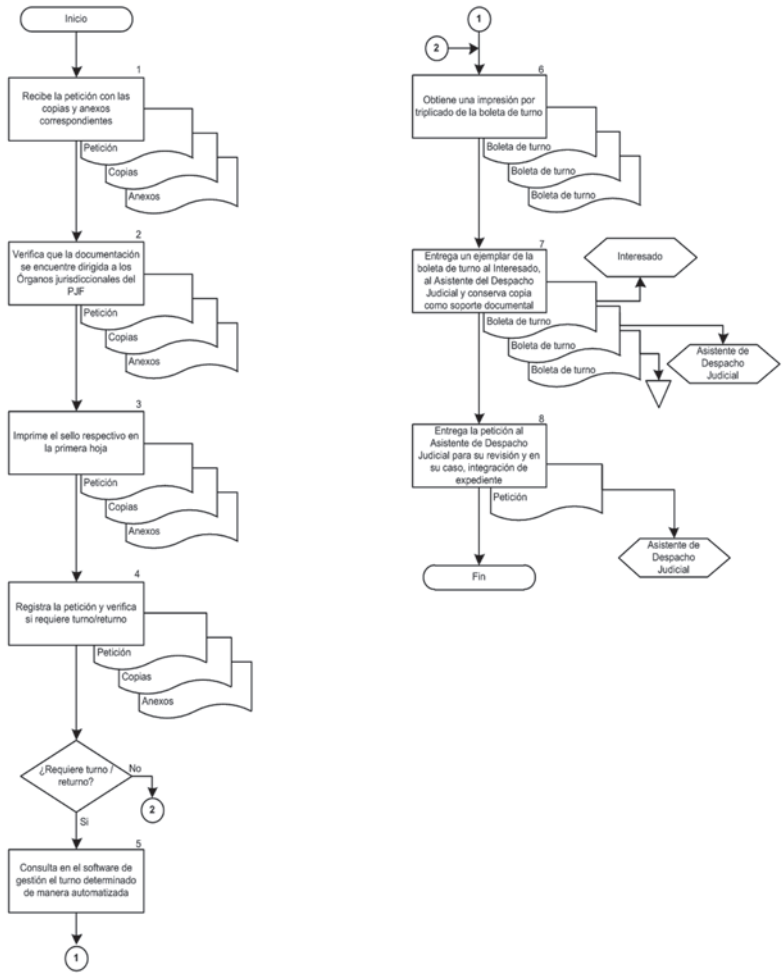
Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Recepción y registro de peticiones	6 de 6

OFICIAL DE PARTES



Clave:

Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 6
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **1. Programación de Actos Procedimentales**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Programación de audiencia		

OBJETIVO

Realizar la programación de audiencias conforme a la agenda oficial y los términos legales que correspondan, cuando el caso lo amerite, para su oportuno despacho judicial y logístico administrativo.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que previa el propio Código; asimismo, que los autos y resoluciones serán emitidos oralmente.

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- Agenda de audiencias.- Al módulo del software de gestión que permite programar el calendario de audiencias con base en la disponibilidad de salas y horario asignado a los órganos jurisdiccionales.
- Asunto.- A todo aquel procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, distinto a las causa penales, que amerite la integración de un expediente, como pueden ser técnicas de investigación con control judicial.
- Audiencia privada.- A la audiencia cuyo acceso es permitido únicamente a las partes o a alguna de ellas, o bien el Órgano jurisdiccional lo determine, quedando prohibido el ingreso de público en general, periodistas o medios de comunicación, debido, entre otras razones, a la reserva o sensibilidad de la información o las afectaciones a derechos que puedan generarse de ser pública.
- Audiencia pública.- A la audiencia de acceso libre para público en general y periodistas o medios de comunicación.
- Causa penal.- A la promoción por la cual se ejercitará la acción penal por el Ministerio Público, con detenido, caso en el que solicitará audiencia inicial para el control de detención y en su caso imputación; o bien, sin detenido, caso en el que podrá solicitar orden de aprehensión, comparecencia o citación del imputado. La promoción de acción penal por particulares también integrará causa penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Libro de control.- Al registro oficial de las actuaciones judiciales realizadas por los órganos jurisdiccionales y áreas jurídico administrativas del CJP, para el control estadístico y de inspección judicial.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Sala de audiencia.- Al espacio destinado y acondicionado para la celebración de audiencias dentro del CJP.
- Software de gestión.- A la herramienta informática diseñada para el apoyo en las actividades relativas al registro, trámite, control y seguimiento de los asuntos y causas desahogadas en el Centro de Justicia Penal, además de agilizar las comunicaciones con otras instituciones participantes en los procesos judiciales.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Programación de audiencia	3 de 6

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Administrador del CJPF será el encargado de:
   - Supervisar la programación de audiencias derivadas de la atención a peticiones y de todo aquel procedimiento previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que así lo requiera.
   - Determinar los parámetros que solicite el software de gestión asociados a la disponibilidad de salas de audiencia, considerando la programación de trabajos de conservación y mantenimiento, así como cualquier otra contingencia que impida la disponibilidad física de la sala.
   - Supervisar la actualización permanente de la agenda de audiencias y su publicación en pantallas, medios electrónicos o cualquier otro medio establecido para el efecto.
   - Modificar la programación de audiencias, ante contingencias extraordinarias que impidan la actuación en la programación originalmente establecida, en virtud de que es el único autorizado para realizar dichas modificaciones.
   - Prever la preparación de condiciones físicas y logísticas para la celebración de audiencias, en consonancia con la agenda de audiencias.
   - Supervisar la gestión de los procesos judiciales, a cargo del Asistente de Despacho Judicial, derivadas de la programación de audiencias como son notificaciones o citatorios para la presencia de declarantes, transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia), libramiento de oficios o comunicaciones oficiales y la reproducción de medios de prueba o prueba durante la audiencia, entre otros, en caso de que así lo determine el Órgano jurisdiccional en la resolución respectiva.
   - Controlar la agenda de audiencias en el software de gestión, verificando la disponibilidad de la sala, eliminando el apartado de salas derivados por la suspensión de audiencias, así como programando tiempos destinados al mantenimiento y conservación de las salas de audiencia.
   - Mantener la agenda de audiencias permanentemente actualizada, especificando al menos la información relativa a:
     - Fecha y hora.
     - Tipo de audiencia.
     - Sala de audiencia.
     - Numero de causa.

2. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Gestionar los procesos judiciales, derivados de la programación de audiencias como son notificaciones o citatorios para la presencia de declarantes, transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia), libramiento de oficios o comunicaciones oficiales y la reproducción de medios de prueba o prueba durante la audiencia, emisión de resoluciones, recepción y sustanciación necesarias para el desahogo de la audiencia correspondiente, entre otros, en caso de que así lo determine el Órgano jurisdiccional en la resolución respectiva.
   - Registrar en los libros de control establecidos para el efecto, las audiencias deducidas de una causa penal o cualquier asunto cuyo desahogo requiera la celebración de audiencias, monitoreando el registro histórico del número y tupo de audiencias relacionadas con una misma causa o asunto.

3. El Oficial de Partes será el responsable de:
   - Programar las audiencias, realizada a través del software de gestión el cual determinará la fecha, hora y sala de audiencia.
   - Publicar la programación de audiencias en los monitores, medios electrónicos o cualquier otro medio establecido para el efecto.

4. El Encargado del Despacho Logístico y Administrativo del CJPF será el responsable de:
   - Verificar si la audiencia programada será pública o privada, según lo instruido por el Órgano jurisdiccional, para tomar las previsiones relativas al acceso de periodistas o medios de comunicación y público en general.
   - Avisar oportunamente sobre la programación de trabajos de conservación y mantenimiento de las salas de audiencia, con la finalidad de que en la agenda de audiencias, se haga el apartado de

tiempo correspondiente, sin perjuicio de la programación de audiencias a celebrarse por los órganos jurisdiccionales.
- Determinar alternativas de utilización de salas de audiencias, ante dificultades que permitan utilizar la sala inicialmente determinada en la agenda de audiencias, como puede ser la prolongación de una audiencia, o cualquier contingencia que impida la disponibilidad física del espacio.
- Asignar roles y turnos al Jefe de Salas, Auxiliares de Sala, Jefe de Soporte Técnico y de Videograbación y Técnicos de Videograbación y en su caso al personal de soporte logístico-administrativo, de acuerdo a las previsiones y requerimientos específicos, autorizados por el Órgano jurisdiccional, para el desahogo de audiencias o diligencias judiciales.

5. El Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación será el responsable de:
   - Recibir el aviso de programación de la audiencia.
   - Asegurar las condiciones para la videograbación de la audiencia en consonancia con la agenda de audiencias, verificando la funcionalidad del equipo de la sala destinada, así como requerimientos específicos como son transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia), protección de identidad y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional que requiera ajustes tecnológicos.
   - Instruir a los técnicos de videograbación y soporte informático según las previsiones técnicas y logísticas, realizadas por el Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF, derivadas de la programación de audiencias.

6. El Auxiliar de Sala será responsable de:
   - Asistir al Órgano jurisdiccional, dentro de la sala de audiencias, para la programación subsecuente, solicitando al Encargado del Despacho Logístico y Administrativo del CJPF la información relativa a la disponibilidad de agenda.
   - Previo a la audiencia, revisar la agenda de audiencias y anticipar la disponibilidad de fechas, horarios y salas para agilizar la programación subsecuente de audiencia, en caso de ser solicitada por el Órgano jurisdiccional.
   - Confirmar con el Encargado del Despacho Logístico y Administrativo del CJPF, la programación de audiencia de conformidad por lo instruido en la sala de audiencia por el Órgano jurisdiccional.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Programación de audiencia	Hoja 5 de 6

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
Oficial de Partes	1	Recibe solicitud de programación de audiencias.
	2	Elabora la agenda de audiencias en el software de gestión.
		Cuando recibe una nueva solicitud de programación de audiencia
	3	Confirma programación de audiencia con el solicitante.
	4	Captura la nueva programación de audiencia en agenda.
	5	Pública la actualización de la agenda en monitores, medios electrónicos o cualquier otro establecidos para el efecto.
	6	Envía avisos de confirmación de la programación de audiencias al Órgano jurisdiccional y a operadores de la administración del CJP.
		Fin de procedimiento.

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave:

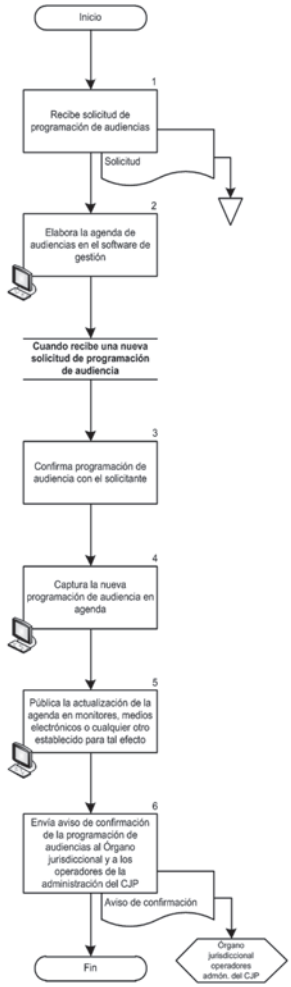
Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Programación de audiencia	6 de 6

OFICIAL DE PARTES



Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 9
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **1. Programación de Actos Procedimentales**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Preparación de sala para audiencia		

OBJETIVO

Asegurar las condiciones físicas y tecnológicas de la sala de audiencia, previo al ingreso del Órgano jurisdiccional y durante el desahogo de la diligencia, mediante la aplicación de las disposiciones normativas relativas a su uso; así como la coordinación de acceso y permanencia de las partes y público asistente, conforme a lo que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales y normativa aplicable.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5, 47, 55, 58, 64, 65 y 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que los actos procedimentales que se refieren con el principio de publicidad, lugar de audiencia, la restricción de acceso, los deberes de los asistentes, la presencia de medios de comunicación, las excepciones al principio de publicidad y de la continuación de la audiencia.

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- Agenda de audiencias.- Al módulo del software de gestión que permite programar el calendario de audiencias con base en la disponibilidad de salas y horario asignado a los órganos jurisdiccionales.
- Acreditación de medios.- Al procedimiento mediante el cual se autoriza el ingreso a las salas de audiencia a los periodistas o medios de comunicación, según los criterios establecidos para su acreditación.
- Audiencia privada.- A la audiencia cuyo acceso es permitido únicamente a las partes o a alguna de ellas, o bien el Órgano jurisdiccional lo determine, quedando prohibido el ingreso de público en general, periodistas o medios de comunicación, debido, entre otras razones, a la reserva o sensibilidad de la información o las afectaciones a derechos que puedan generarse de ser pública.
- Audiencia pública.- A la audiencia de acceso libre para público en general y periodistas o medios de comunicación.
- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Gafete de registro.- A la credencial de identificación proporcionada al público, periodistas o medios de comunicación, cuyo ingreso al CJP fue autorizado.
- Identificación oficial con fotografía.- A la credencial de elector, pasaporte, cédula profesional, documento migratorio, entre otros, legalmente válido para identificar a una persona.
- Libreta de registro.- A la libreta en la cual se escribe el nombre de los asistentes al Centro de Justicia Penal, como las partes, sujetos procesales, público en general, periodistas o medios de comunicación.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Presentación de la audiencia.- A la introducción que de la audiencia se realice, bienvenida a los asistentes, mención de su objeto y establecimiento de las reglas de permanencia en la sala de audiencia.
- Público en general.- A las personas que concurren al CJP, sin ser parte o sujetos del procedimiento.
- Sala de audiencia.- Al espacio destinado y acondicionado para la celebración de audiencias dentro del CJP.
- Software de gestión.- A la herramienta informática diseñada para el apoyo en las actividades relativas al registro, trámite, control y seguimiento de los asuntos y causas desahogadas en el Centro de Justicia Penal, además de agilizar las comunicaciones con otras instituciones participantes en los procesos judiciales.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Preparación de sala para audiencia	Hoja 3 de 9

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Administrador del CJPF será el responsable de:
   - Velar por la observancia de los protocolos en materia de seguridad del CJP de manera coordinada con el personal de la Coordinación de Seguridad del PJF.

2. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Realizar las gestiones judiciales y logístico administrativas relacionadas con los requerimientos específicos para el desahogo de audiencias o diligencias judiciales, como notificaciones o citatorios para la presencia de declarantes, transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia), libramiento de oficios o comunicaciones oficiales y la reproducción de medios de prueba o prueba durante la audiencia, entre otros, conforme lo determine en la resolución respectiva el Órgano jurisdiccional.
   - Reportar oportunamente a los órganos jurisdiccionales, previo a la audiencia, el estatus relativo a notificaciones, citaciones y la realización de otras diligencias preparatorias asociadas a una causa o asunto de su conocimiento.

3. El Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF será el responsable de:
   - Consultar la agenda de audiencias, así como los requerimientos logísticos, tecnológicos y materiales solicitados por el Asistente de Despacho Judicial, previa autorización del Órgano jurisdiccional.
   - Prever la distribución de espacios, resguardo y orden de los participantes en la audiencia, utilización de medios tecnológicos y en su caso, las diligencias para lograr la presencia de imputados y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional.
   - Coordinar a los Auxiliares de Sala, y en su caso, al Jefe de Salas, para la preparación de salas de audiencia.
   - Verificar que los Auxiliares de Sala y Técnicos de Videograbación cumplan con sus roles, para garantizar la preparación de la sala de audiencia.
   - Verificar la preparación de medios de comunicación remota, programando su disponibilidad y supervisando su utilización para garantizar la adecuada transmisión de datos con el Auxiliar de Sala y operadores ubicados fuera de la sala de audiencia.
   - Realizar las gestiones para reasignar espacios para la celebración de audiencia, derivado de contingencias que impidan su celebración en el lugar originalmente previsto, como pueden ser:
     - La suspensión o prolongación de una audiencia.
     - Que la sala de audiencia no cumpla con las condiciones mínimas requeridas, o cualquier otro incidente que impida la utilización de los espacios programados.

4. El Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación será el responsable de:
   - Consultar constantemente la agenda de audiencias y los requerimientos tecnológicos necesarios para su celebración.
   - Supervisar las condiciones relativas a la conservación y mantenimiento del equipo tecnológico, así como coordinar con las áreas competentes la utilización de los medios de apoyo referentes al soporte informático y de telecomunicaciones requeridos para la celebración de audiencias.
   - Supervisar la preparación de medios de comunicación remota, programando su disponibilidad y supervisando su utilización para garantizar la adecuada transmisión de datos con el Auxiliar de Sala y operadores ubicados fuera de la sala de audiencia.
   - Determinar las previsiones en relación a la utilización de medios tecnológicos para la reproducción de medios de prueba o prueba, realización de videoconferencias, protección de identidad y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional.
   - Reasignar los medios tecnológicos y establecer planes de acción ante contingencias técnicas que afecten la su funcionamiento.

5. El Auxiliar de Atención al Público será el encargado de:
   - Verificar que el personal de seguridad cumpla con la correcta aplicación de los protocolos de seguridad establecidos para el CJP.
   - Solicitar una identificación oficial con fotografía a toda persona que desee ingresar al CJP.
   - Verificar el correcto llenado en la libreta de registro por parte de los concurrentes al centro, de los datos relativos a: fecha, nombre completo, hora de ingreso, motivo del ingreso, entre otros, de conformidad con los lineamientos al efecto establecidos.
     - En caso de que el registro se lleve de manera electrónica, será el responsable de capturar la información en el sistema establecido para dicho efecto.
   - Entregar el gafete de registro, indicando a las personas que deberá portarlo durante su estancia en el CJP.
   - Controlar el número de gafetes de registro así como el resguardo efectivo de las identificaciones de las personas que ingresen al CJP.
   - Reportar al encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF los incidentes relacionados con el extravío, maltrato o alteración del gafete de registro para los efectos conducentes al control y reposición.
   - Identificar a las partes y sujetos procesales, brindando información relativa a la audiencia e informar al Encargado de Despacho Logístico Administrativo del CJPF sobre su presencia.

6. El Técnico de Videograbación será el responsable de:
   - Atender los avisos para la preparación de la sala de audiencia, para lo cual deberá verificar fecha, hora, sala de audiencia y tipo de audiencia a celebrarse.
   - Verificar el correcto funcionamiento de todos los componentes del sistema de videograbación incluyendo audio, video y el software de videograbación así como los niveles óptimos establecidos para la adecuada operación de los componentes, apoyándose en las guías técnicas establecidas para el efecto.
   - Preparar los proyectores de evidencias, altavoces, monitores y cualquier otro equipo destinado a la proyección de documentes, fotografías, objetos, vídeos o audios que se constituyan como medios de prueba, asegurando su integración automática al sistema de videograbación de la audiencia.
   - Preparar el equipo de registro audiovisual previo al inicio de las audiencias, consultando los instructivos correspondientes para llevar a cabo la grabación y almacenamiento digital, así como cualquier otra previsión tecnológica instruida por el Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación.
   - Preparar los medios tecnológicos destinados a la protección de identidad, enlace de videoconferencia y cualquier otro, autorizado por el Órgano jurisdiccional.
   - Preparar el equipo de cómputo del Auxiliar de Sala y en su caso, el del Órgano jurisdiccional, previo al inicio de la audiencia.
   - Preparar los radio-comunicadores o cualquier otro equipo destinados a la comunicación entre el Auxiliar de Sala y operadores ubicados fuera de la sala de audiencia.

7. El Auxiliar de Sala será el responsable de:
   - Atender los avisos para la preparación de la sala de audiencia, para lo cual deberá verificar fecha, hora, sala de audiencia y tipo de audiencia a celebrarse.
   - Verificar que la sala de audiencia se encuentre disponible, en condiciones mínimas necesarias de conformidad a la "Lista de verificación de preparación de sala de audiencia" (Anexo 1), para el desarrollo de las audiencias y en su caso, reportar al Encargado de Despacho Logístico Administrativo del CJPF los requerimientos de conservación y mantenimiento.
   - Preparar la sala de audiencia en lo relativo al acomodo del equipo tecnológico y elementos necesarios previstos para la celebración de la audiencia.
   - Verificar si en la audiencia estará presente el imputado y si estará privado de su libertad, para tomar las previsiones correspondientes al acceso de las partes y sujetos en el procedimiento y del público en general a la sala de audiencia.
     - Tratándose de un imputado privado de su libertad, el auxiliar de sala será el responsable de indicar el momento en que el personal de seguridad podrá inspeccionar la sala, cumpliendo el Protocolo de Seguridad en Salas de Audiencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Preparación de sala para audiencia	5 de 9

- Anticipar la presencia de declarantes, para anticipar el registro de su información y el llenado de la "Constancia de autorización de reserva de datos de los declarantes" (Anexo 2).
- Anticipar las actuaciones previstas durante la audiencia, tendientes a transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia), reproducción de medios de prueba o prueba durante la audiencia, entre otros.
- Verificar la asistencia de las partes y demás sujetos procesales a través de la coordinación efectiva con el Auxiliar de Atención al Público.
- Permitir el acceso al público o medios de comunicación a las audiencias, mientras éstas no hayan iniciado, procurando restringir el acceso cuando ello haya ocurrido para evitar distracciones que pudieran afectar su desarrollo.
  - Cuando el número de asistentes, periodistas o medios de comunicación exceda el cupo de la sala de audiencia, se sugiere el siguiente orden de acceso: familiares de las partes, periodistas o medios de comunicación y público en general, sin perjuicio de lo que determine el Órgano jurisdiccional.
- Restringir el acceso a la sala de audiencia a toda persona que porte distintivos gremiales, partidarios, o cualquiera que inciten a la violencia o puedan representar un riesgo para la seguridad o desarrollo de la diligencia.
- Comprobar que las partes en el procedimiento se encuentren ubicadas en sus respectivos lugares guardando el orden establecido, para dar inicio a la audiencia.
- Cerrar el acceso a la sala de audiencia y dar la introducción a la audiencia, previo al ingreso del Órgano jurisdiccional.
- Realizar la presentación a la audiencia, mencionando los aspectos relevantes correspondientes al comportamiento de los asistentes (Anexo 3).

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Consejo de la Judicatura

Procedimiento:	Hoja
Preparación de sala para audiencia	6 de 9

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
		Previo a la celebración de una audiencia
Auxiliar de Sala	1	Revisa la programación de audiencia y recibe las instrucciones de carácter logístico del Encargado del Despacho Logístico Administrativo del CJPF.
	2	Prepara la sala atendiendo a los requerimientos necesarios para la celebración de la audiencia.
		Simultáneamente
Técnico de Videograbación	3	Prepara el equipo de audio, video y de cómputo de la sala de audiencia, realizando las pruebas correspondientes.
		Una vez que la sala cuenta con las condiciones óptimas para celebrar la audiencia.
Auxiliar de Sala	4	Verifica presencia de imputado(s). ¿La audiencia programada se llevará a cabo con imputado(s)? Sí.- Continúa en la actividad número 5. No.- Continúa en la actividad número 6.
	5	Comunica a los elementos de seguridad la disposición de la sala para el ingreso del imputado, cuando éste ocurra privado de su libertad.
	6	Ubica a las partes en el procedimiento dentro de la sala y verifica si la audiencia es pública y privada. ¿La audiencia es pública o privada? Pública.- Continúa en la actividad número 7 Privada.- Continúa en actividad número 8
	7	Permite el acceso al público en general, periodistas o medios de comunicación.
	8	Cierra el acceso a la sala de audiencia.
	9	Indica al Técnico de Videograbación el inicio del registro audiovisual.
	10	Informa al Órgano jurisdiccional que las partes se encuentran ubicadas correctamente dentro de la sala para que proceda a su ingreso.

Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Preparación de sala para audiencia	Hoja 7 de 9

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
Auxiliar de Sala	11	Realiza la presentación de la audiencia, previo al ingreso del Órgano jurisdiccional. **Fin de procedimiento**

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

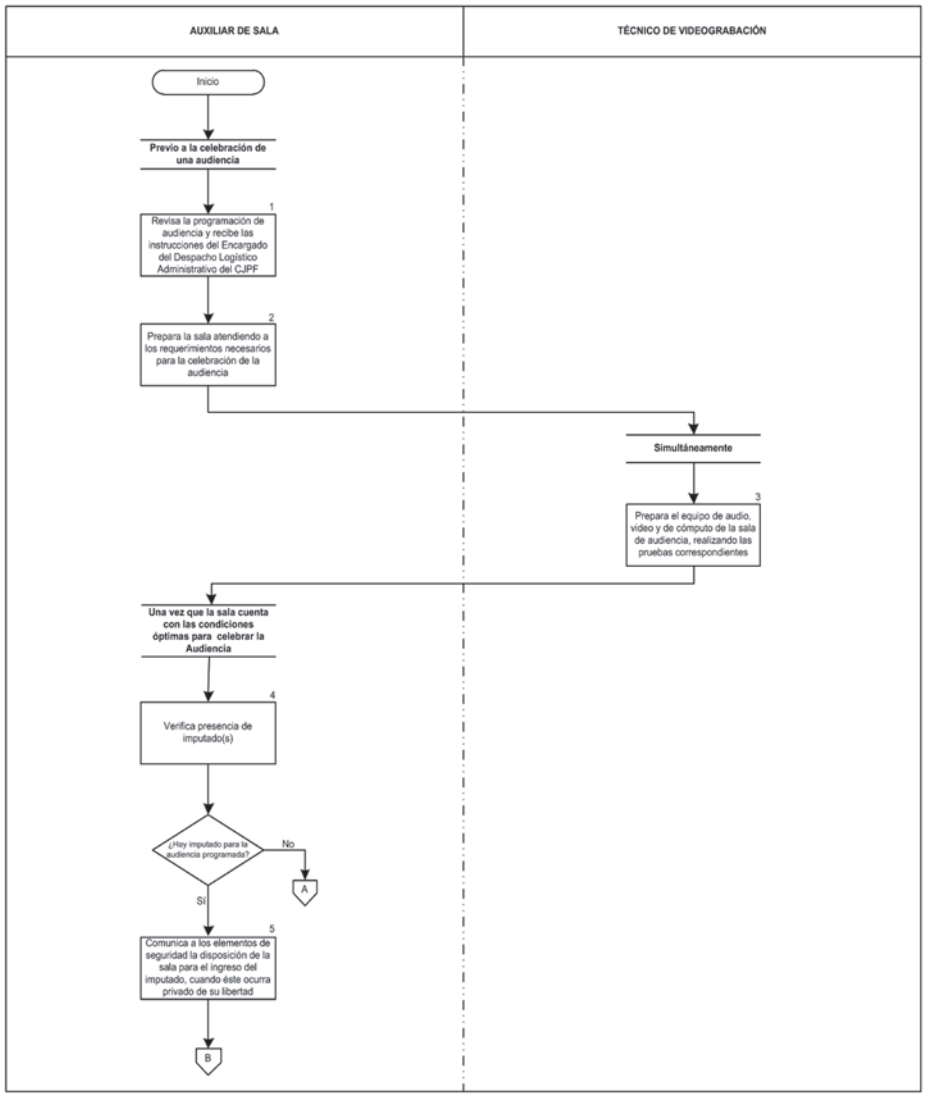
Clave:

Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Preparación de sala para audiencia	8 de 9

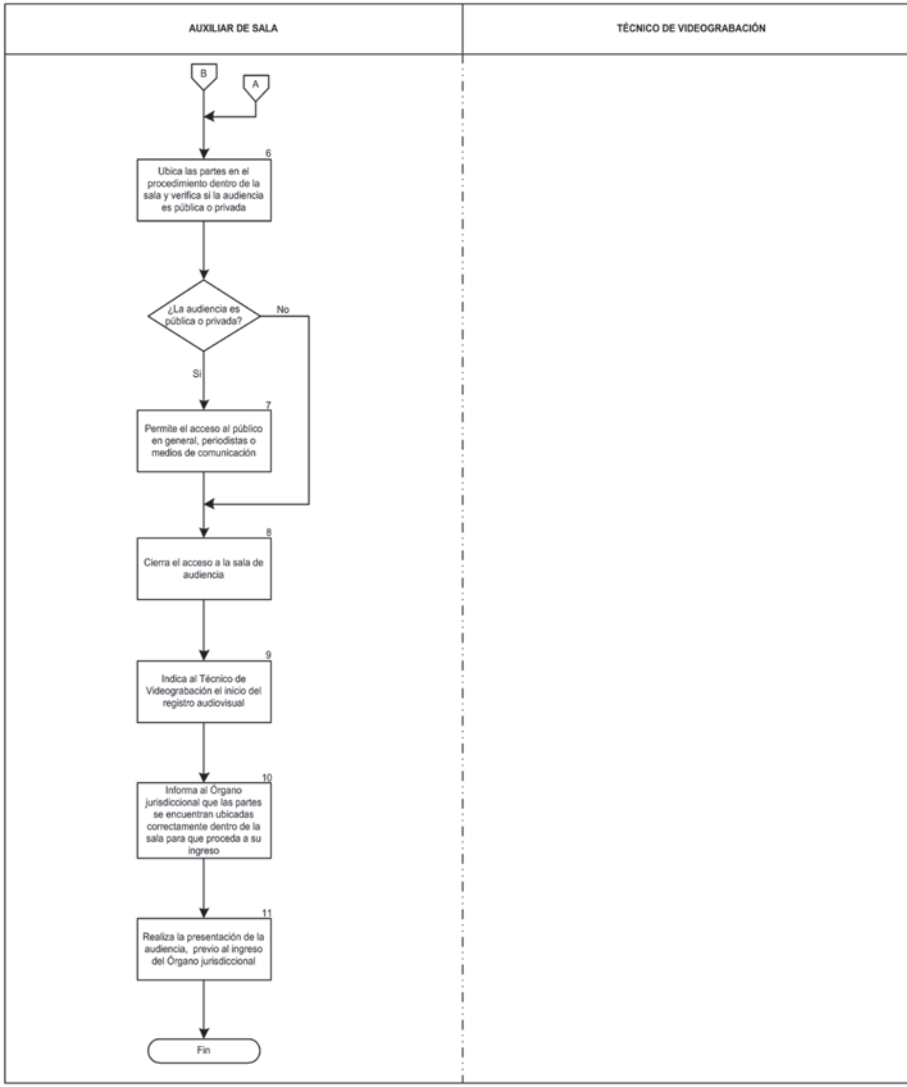


Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Preparación de sala para audiencia	9 de 9



Clave: Fecha de autorización:

ANEXOS

Anexo 1. Lista de verificación de preparación de sala de audiencia

I. Previsiones relativas a la preparación de equipo y asistentes

	Verificado
1. La audiencia es: Pública ( ) Privada ( )	
2. Asistencia	
a. Imputado	
b. Víctima u ofendido	
c. Testigos	
d. Medios de comunicación	
e. Defensor	
f. Ajustes especiales para los declarantes (personas con discapacidad, traductores, interpretes, médicos, psicólogos, etc)	
3. Tarjeta informativa de datos de identificación mínima de la audiencia en el estrado del juzgador	
4. Texto de presentación de la audiencia	
5. Constancia de autorización de reserva de datos de los declarantes	
6. Disponibilidad de asientos y ubicaciones de los participantes en la audiencia	
7. Radio-comunicadores	
8. Disponibilidad de agenda de audiencias en previsión a programaciones subsecuentes	
9. Disposición de equipo para proyección de información digitalizada	
10. Utilización de videoconferencia, protección de identidad u otro ajuste tecnológico requerido para la audiencia	

II. Previsiones relativas a las condiciones físicas de la sala de audiencia

	Adecuado	Inadecuado
11. Orden y limpieza de sala		
a. Accesos de la sala		
b. Pasillos al interior de la sala		
c. Suelo de la sala		
d. Asientos		
e. Salidas de emergencia		
12. Equipo de Sala		
a. Iluminación de la sala		
b. Funcionamiento del equipo de cómputo		
c. Funcionamiento del sistema de registro de información		
d. Funcionamiento del equipo de audio y vídeo		
e. Funcionamiento de altavoces y pantallas		
f. Funcionamiento de aire acondicionado		
13. Equipos y materiales		
a. Agua para el juzgador		
b. Material requerido en el estrado del juzgador (calendario, calculadora, bolígrafos, hojas blancas)		
c. Material requerido para la exhibición o reproducción de medios de prueba o pruebas		

Anexo 2. Constancia de autorización de reserva de datos de los declarantes

Asunto:_____ Fecha: _____

Tipo de Declarante:	
Víctima u ofendido	
Asesor jurídico	
Imputado	
Defensor	
Ministerio Público	
Policía	
Autoridad de supervisión de medidas cautelares	
Autoridad de la suspensión condicional del proceso	
Testigo	

Datos Personales:

Nombre(s):_____

Apellido Paterno:_____

Apellido Materno:_____

Fecha de Nacimiento: _____Edad:____

Domicilio
Calle: _____ _____No. Ext: _____No. Int: _____
Col:_____C.P.:_____
Delegación o Municipio:_____
Ciudad:_____Estado:_____
Tel: (___)_____ Celular:_____

Con fundamento en el artículo 54 del Código Nacional de Procedimientos Penales, manifiesta su voluntad de hacer públicos sus datos:

Si ☐ No ☐

_____
Nombre y Firma

Anexo 3. Modelo de presentación de la Audiencia Auxiliar de Sala

"Buenos días (tardes) a todos los presentes", hoy (día) de mes del año ____, siendo las _____ horas, nos encontramos reunidos en la Sala _____ del Centro de Justicia Penal de (Ciudad), del Circuito Judicial (número de circuito), para desahogar la audiencia de: (Tipo de audiencia) deducida de la causa penal identificada con el número de expediente_____

La audiencia para la cual las partes están citadas el día de hoy, se instruye en contra de: _____

Por el hecho delictuoso de: _____

Cometido en agravio de: _____

En términos de lo dispuesto por el artículo 9º del Código Nacional de Procedimientos Penales, vigente para el Sistema Procesal Penal Acusatorio, se hace de su conocimiento que la presente audiencia será presidida por el/la Jueza/Juez: _____

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53 y 58 del código citado se solicita al público y en general a todos los asistentes guardar silencio y permanecer respetuosamente en la audiencia.

Toda persona que altere el orden en la audiencia podrá ser acreedora a una medida de apremio, impuesta por el órgano jurisdiccional sin perjuicio de que se pueda solicitar su retiro de la sala de audiencias y su puesta a disposición de la autoridad competente.

Se hace de su conocimiento que queda estrictamente prohibida la grabación y reproducción de fotografías, videos, o cualquier información captada por dispositivo electrónico en el desahogo de la audiencia, ya que en caso de incumplir con lo anterior, el órgano jurisdiccional podrá aplicar las medidas de apremio de conformidad con las señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

(ACTO CONTINUO) Solicito a los presentes ponerse de pie para recibir al Juez (a).

SUBPROCESO: Despacho Judicial

6. Apoyo para el desarrollo de la audiencia.
4. Desarrollo de videoconferencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 8
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **2. Intervención Jurisdiccional**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Apoyo para el desarrollo de la audiencia		

OBJETIVO

Brindar a los Órganos jurisdiccionales el apoyo logístico necesario, los preparativos y facilidades para la disposición oportuna de los medios de prueba y prueba para su desahogo en audiencia.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece bajo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 47 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que los actos procedimentales que se refieren a la sala de audiencias como el lugar determinado para la celebración de éstas y lo referente al principio de publicidad que contempla la posibilidad de ingreso y permanencia al público en general y de medios de comunicación a las audiencias.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Apoyo para el desarrollo de la audiencia	2 de 8

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- Agenda de audiencias.- Al módulo del software de gestión que permite programar el calendario de audiencias con base en la disponibilidad de salas y horario asignado a los órganos jurisdiccionales.
- Audiencia privada.- A la audiencia cuyo acceso es permitido únicamente a las partes o a alguna de ellas, o bien el Órgano jurisdiccional lo determine, quedando prohibido el ingreso de público en general, periodistas o medios de comunicación, debido, entre otras razones, a la reserva o sensibilidad de la información o las afectaciones a derechos que puedan generarse de ser pública.
- Audiencia pública.- A la audiencia de acceso libre para público en general y periodistas o medios de comunicación.
- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Medios de prueba o elemento.- A toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Prueba documental.- Al documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho.
- Pruebas.- A todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación.
- Público en general.- A las personas que concurren al CJP, sin ser parte o sujetos del procedimiento.
- Sala de audiencia.- Al espacio destinado y acondicionado para la celebración de audiencias dentro del CJP.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.
- Testigo.- A la persona obligada a concurrir al proceso cuando sea citada y declarar la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado, sin ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante para la solución de una controversia, salvo disposición en contrario.
- Videoconferencia.- Al medio de comunicación que tiene por objeto reproducir imágenes y sonidos en tiempo real a través de la distancia, utilizando como vía las conexiones a través de nodos digitales dedicados a esos fines, en otras palabras, la videoconferencia no es otra cosa más que un sistema de televisión cerrado de doble vía que transmite y recibe en ambos sentidos imágenes y sonidos al mismo tiempo.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Apoyo para el desarrollo de la audiencia	3 de 8

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

8. El Administrador del CJPF será el responsable de:
   - Velar por la observancia de los protocolos en materia de seguridad del CJP de manera coordinada con el personal de la Coordinación de Seguridad.

9. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Verificar la integración y la actualización de expedientes o registros, aplicando mecanismos para la restricción de acceso a la información en ellos contenida, de conformidad con las atribuciones establecidas para el resto de los servidores públicos del CJP.
   - Garantizar la identificación fehaciente de sujetos que deban declarar o participar en alguna diligencia judicial a través de videoconferencias u otras formas de comunicación que utilicen tecnologías de la información a distancia, previa autorización del Órgano jurisdiccional.
   - Coordinar el trámite correspondiente a la emisión y entrega de copias de registros audiovisuales de audiencia, de conformidad con la autorización realizada por el Órgano jurisdiccional, llevando un control preciso y aplicando las disposiciones establecidas en la normativa respectiva.

10. El Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF será el responsable de:
   - Coordinar el personal a su cargo para la realización de tareas asociadas con el apoyo logístico requerido para el desahogo de la audiencia.
   - Consultar constantemente la agenda de audiencias, así como los requerimientos logísticos, tecnológicos y materiales necesarios para su realización.
   - Coordinar con las áreas correspondientes la utilización de videoconferencia u otros medios electrónicos de comunicación en tiempo real, para el desahogo de medios de prueba o prueba y de otros actos procesales autorizados por el Órgano jurisdiccional.
   - Determinar las previsiones en relación a la distribución de espacios, resguardo y orden de declarantes o participantes en la audiencia, utilización de medios tecnológicos, y en su caso, presencia de imputados y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional.
   - Determinar las previsiones en relación a la presencia y tipo de testigos, evitando la comunicación entre ellos y la transmisión de la información de lo que suceda en audiencia, por cualquier medio de comunicación.
   - Coordinar la recepción y ubicación de testigos, en caso de que éstos no estén presentes al iniciar la audiencia, pero hayan sido debidamente notificados para asistir a una hora posterior.
   - Prever el tránsito ordenado de testigos a la sala de audiencia de conformidad a lo instruido por el Órgano jurisdiccional.
   - Supervisar la asistencia brindada al Órgano jurisdiccional por parte del Auxiliar de Sala y el Técnico de Videograbación.
   - Realizar las gestiones para reasignar espacios para la celebración de audiencia, derivado de contingencias que impidan su celebración en el lugar originalmente previsto, como pueden ser:
     - La suspensión o prolongación de una audiencia.
     - Que la sala de audiencia no cumpla con las condiciones mínimas requeridas, o cualquier otro incidente que impida la utilización de los espacios programados.

11. El Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación será el responsable de:
   - Consultar constantemente la programación de audiencias y los requerimientos tecnológicos necesarios para su celebración.
   - Determinar las previsiones en relación a la utilización de medios tecnológicos para la reproducción de medios de prueba o prueba, realización de videoconferencias, protección de identidad de participantes y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional.
   - Reasignar los medios tecnológicos y establecer planes de acción ante contingencias técnicas que afecten la celebración de audiencia.
   - Supervisar el almacenamiento y respaldo adecuado de los registros audiovisuales de audiencia.
   - Controlar la emisión de copias de la grabación audiovisual de la audiencia, cuando sean autorizadas por el Órgano jurisdiccional.

12.El Auxiliar de Atención al Público será el encargado de:

- Recibir e identificar a testigos citados o demás personas que deban participar en la audiencia, incluso si comparecen en una hora posterior a la marcada para el inicio de aquélla, avisando oportunamente al Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF sobre su presencia, para su conducción a la sala.
- Las demás establecidas en el procedimiento de preparación de sala para audiencia.

13.El Técnico de Videograbación será el responsable de:

- Realizar la grabación audiovisual de la audiencia.
- Operar los ajustes tecnológicos tendientes a la protección de identidad, enlace de videoconferencia y cualquier otro, autorizado por el Órgano jurisdiccional.
- Generar las copias de registros audiovisuales de audiencia previamente solicitadas y autorizadas por el Órgano jurisdiccional, en su caso.
- Entregar copias de registros audiovisuales al Asistente del Despacho Judicial, llevando un registro de control, en su caso.
- Operar los medios tecnológicos necesarios para cumplir con lo instruido por el Órgano jurisdiccional, en relación a la transmisión de comunicación a distancia (videoconferencia) o la reproducción de medios de prueba o prueba durante la audiencia.

14.El Auxiliar de Sala será el responsable de:

- Asistir al Órgano jurisdiccional, permaneciendo dentro de la sala durante el desarrollo de la audiencia.
- Registrar los datos específicos de la audiencia incluyendo el número de causa o asunto, el tipo de audiencia, los datos de identificación de los declarantes o participantes en la audiencia, los cuales incluyan nombre, apellidos, edad y domicilio, dejando constancia de la manifestación expresa de la voluntad del declarante de hacer públicos o no sus datos personales.
- Registrar la información correspondiente a los actos relevantes o resoluciones dictadas por el Órgano jurisdiccional que deban constar por escrito, así como las actuaciones que ameriten un despacho judicial posterior, ordenen la comunicación con autoridades o la ejecución de alguna diligencia como: órdenes de notificación o citación, remisión de oficios o comunicaciones oficiales, preparación y desahogo de medios de prueba, entre otros.
- Asignar etiquetas o identificadores al registro audiovisual de la audiencia, señalando el tiempo preciso en que se desarrollaron los actos o resoluciones relevantes en la misma, mediante el uso de los medios disponibles.
- Asistir a los declarantes o participantes en la sala de audiencia, atendiendo su recepción y ubicación dentro de la sala.
- Reportar al personal de vigilancia sobre incidentes que afecten el orden o disciplina de los asistentes durante la audiencia, conforme se lo instruya el Órgano jurisdiccional.
- Apoyar en la utilización de los medios materiales disponibles para el desahogo de medios de prueba o pruebas.
- Instruir al público en general el desalojo de la sala de audiencia, cuando el Órgano jurisdiccional instruya un receso o interrupción, o algún momento en que deba proseguir la audiencia de manera privada.
- Coordinar y verificar las condiciones de la sala cuando finalice la audiencia, para asegurar su disponibilidad.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Apoyo para el desarrollo de la audiencia	5 de 8

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
		Una vez que el Órgano jurisdiccional ingresa se cierra la sala para el inicio de la audiencia
Técnico de Videograbación	1	Inicia grabación de la audiencia.
Auxiliar de Sala	2	Permanece durante el desarrollo de la audiencia para asistir al Órgano jurisdiccional.
	3	Inserta etiquetas o identificadores al vídeo durante el desarrollo de la audiencia
		Una vez que el Órgano jurisdiccional concluye con la audiencia
	4	Realiza actividades de cierre de audiencia.
Técnico de Videograbación	5	Concluye con la grabación de la audiencia.
	6	Coordina la salida del público en general, periodistas o medios de comunicación, las partes y sus familiares, con apoyo del personal de seguridad.
	7	Realiza y envía la información de actos relevantes relativos a la audiencia celebrada para el apoyo del despacho judicial, de acuerdo al procedimiento.
	8	Avisa al Jefe de Salas o Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF para el cierre de la sala de audiencia.
Encargado de Despacho Logístico y Administrativo del CJPF	9	Cierra la sala de audiencia.
Técnico de Videograbación	10	Genera copias autentificadas de registros audiovisuales de audiencia, en caso de ser autorizadas por el Órgano jurisdiccional, y las envía al Asistente de Despacho Judicial.
Asistente de Despacho Judicial	11	Valida las copias de registros y las proporciona al Auxiliar de Gestión Judicial para su entrega.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Apoyo para el desarrollo de la audiencia	Hoja 6 de 8

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
Auxiliar de Gestión Judicial	12	Entrega los registros al solicitante y realiza las razones de copias. **Fin de procedimiento**

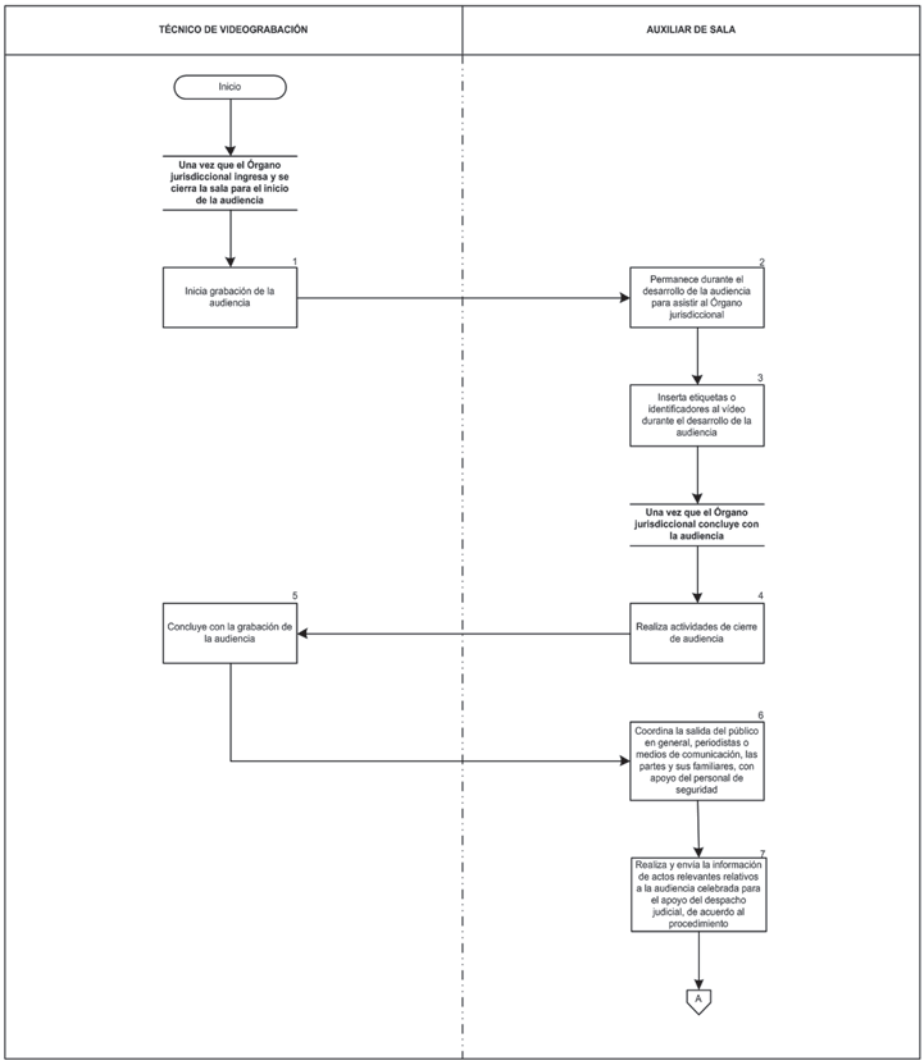
ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Apoyo para el desarrollo de la audiencia	7 de 8

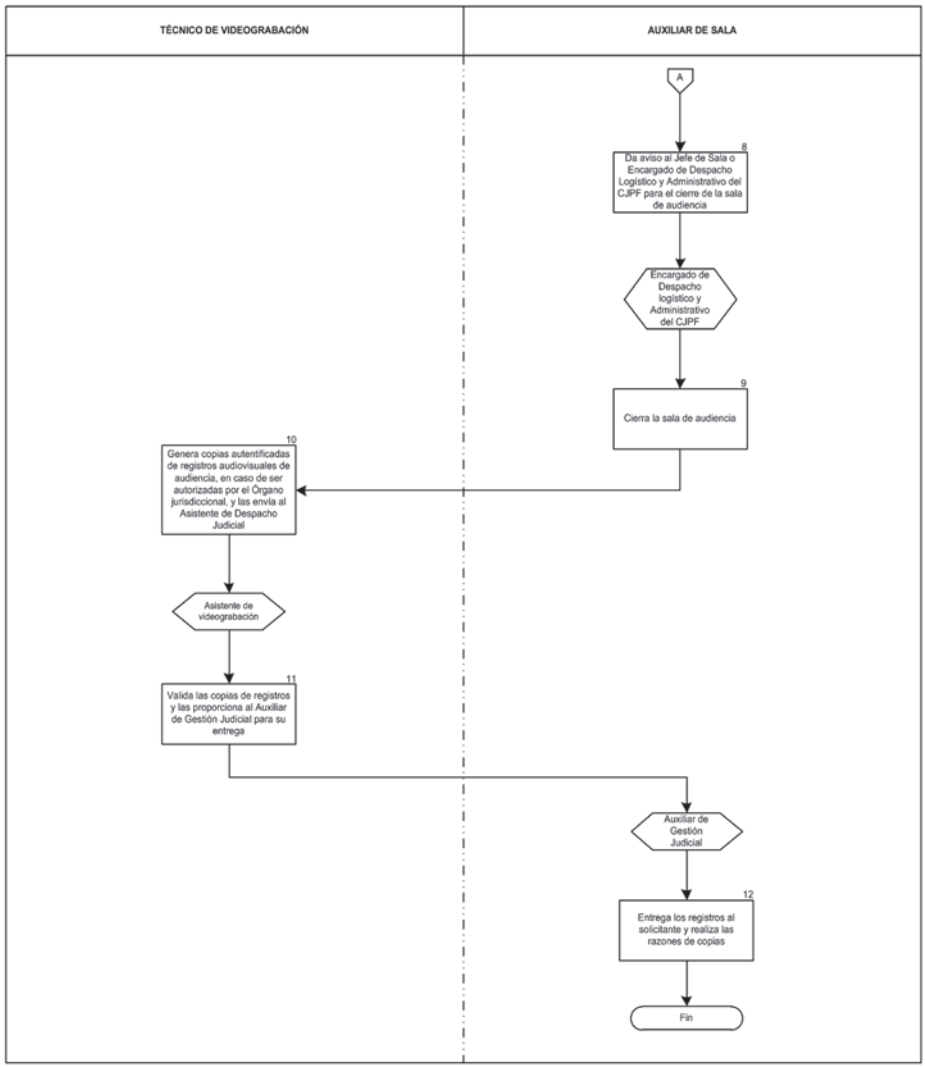


Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Apoyo para el desarrollo de la audiencia	8 de 8



Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 6
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **2. Intervención Jurisdiccional**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Desarrollo de videoconferencia		

OBJETIVO

Apoyar al desarrollo de actos procedimentales llevados a cabo a través de la videoconferencia, asegurando la disposición de recursos tecnológicos y humanos, así como la logística necesaria para su desahogo.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla el uso de la videoconferencia como una forma de comunicación que podrá ser utilizada para la recepción y transmisión de medios de prueba, así como la realización de actos procesales.

Asimismo deberá observarse, en lo aplicable el Acuerdo General 74/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que pone a disposición de los órganos Jurisdiccionales el uso de la videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de diligencias judiciales y demás disposiciones normativas aplicables.

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- DGTI.- Dirección General de Tecnologías de la Información
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Punto de transmisión.- A uno de los espacios físicos en los que se llevará a cabo el enlace para la videoconferencia.
- Sala de audiencia.- Al espacio destinado y acondicionado para la celebración de audiencias dentro del CJP.
- Videoconferencia.- Al medio de comunicación que tiene por objeto reproducir imágenes y sonidos en tiempo real a través de la distancia, utilizando como vía las conexiones a través de nodos digitales dedicados a esos fines, en otras palabras, la videoconferencia no es otra cosa más que un sistema de televisión cerrado de doble vía que transmite y recibe en ambos sentidos imágenes y sonidos al mismo tiempo.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Desarrollo de videoconferencia	3 de 6

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Administrador del CJPF será el responsable de:
   - Atender las resoluciones del Órgano jurisdiccional relativas a la utilización de videoconferencia para el desahogo de actos procesales, realizando la coordinación de las áreas correspondientes.
   - Coordinar con las autoridades correspondientes para asegurar la disposición de recursos humanos y tecnológicos que permitan la transmisión, en caso de que la videoconferencia se desarrolle fuera de la jurisdicción del CJP.
   - Llevar a cabo la coordinación con las autoridades penitenciarias correspondientes, así como con los órganos jurisdiccionales del fuero común, cuándo a éstos se les solicite auxilio.

2. El Asistente del Despacho Judicial será el responsable de:
   - Realizar la comunicación oficial (exhorto o despacho) u oficio, según corresponda, para llevar a cabo la videoconferencia, en los términos ordenados por el Órgano jurisdiccional.
   - Supervisar la permanente actualización y reporte de la información generada, particularmente lo relacionado con los requerimientos de carácter logístico y derivadas de la presencia de declarantes, transmisiones por sistemas de comunicación a distancia (videoconferencia) y los requerimientos logísticos o materiales para la reproducción de medios de prueba durante la audiencia, previa autorización del Órgano jurisdiccional.
   - Presentarse en el lugar señalado para el desarrollo de la videoconferencia con la anticipación suficiente para la preparación de la videoconferencia.
     - Identificar debidamente a las personas que vayan a participar en la videoconferencia fuera del CJP.
     - En caso que el inculpado participe en la videoconferencia, deberá cerciorarse que se encuentra asistido por su defensor.
     - Verificar que desde el punto de transmisión se realicé debidamente el registro audiovisual de la diligencia, con la asistencia del personal técnico necesario.

3. El Encargado del Despacho Logístico y Administrativo del CJPF será el responsable de:
   - Realizar la propuesta de logística relativa a la realización de videoconferencias, indicando al Administrador del CJPF el personal que prestará el apoyo al Órgano jurisdiccional durante la videoconferencia.
   - Coordinar el desarrollo de la videoconferencia en consonancia con las disposiciones establecidas por el procedimiento de preparación de sala para audiencia y apoyo para la celebración de audiencia.

4. El Jefe de Soporte Técnico y de Video-grabación será el responsable de:
   - Determinar las previsiones necesarias en relación a la utilización de medios tecnológicos para la reproducción de medios de prueba o prueba, protección de identidad y cualquier otra determinada por el Órgano jurisdiccional.
   - Verificar el estatus funcional del equipo de videoconferencia.
   - Reasignar los medios tecnológicos y establecer planes de acción ante contingencias técnicas que afecten la celebración de audiencia desahogada mediante videoconferencia en coordinación con la DGTI.
   - Supervisar el almacenamiento y respaldo adecuado de los registros audiovisuales de la audiencia desahogada mediante videoconferencia.

5. El Técnico de Soporte Informático será el responsable de:
   - Configurar los sistemas informáticos con los medios de comunicación electrónicos que se requieran para la realización de la videoconferencia.
   - En caso de contingencia, asesorar a los usuarios de los sistemas informáticos, para la solución del problema.
   - Respaldar la información recabada de la videoconferencia y generar las copias necesarias de los registros audiovisuales cuando se autoricen por el Órgano jurisdiccional.

– En caso de la omisión de dicha plaza, las responsabilidades recaerán de manera directa en el Jefe de Soporte Técnico y de Video-grabación.

6. El Técnico de Videograbación será el responsable de:
   – Iniciar el funcionamiento de monitores u otros dispositivos revisando:
     • El suministro de energía.
     • Selección de entrada.
     • Conexiones de audio y video.
     • Configuración de imagen en el monitor (brillo, nitidez, etc.).
     • La adecuada grabación y almacenamiento del audio y video.
   – Seguir las instrucciones establecidas en las guías y manuales para el uso y cuidado de la tecnología de videograbación.
   – Atender a los señalamientos sobre el inicio y fin del enlace.
   – Revisar constantemente la calidad de la conexión así como del audio y video de la videoconferencia.
   – Dar aviso al Jefe de Soporte Técnico y Video-grabación en caso de que ocurra algún imprevisto, ya sea dentro o fuera del CJP.
   – Cerrar el enlace y almacenar la información digital en el sistema informático al término de la videoconferencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Desarrollo de videoconferencia	Hoja 5 de 6

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
		Una vez que el Órgano jurisdiccional ordena la realización de audiencia mediante videoconferencia
Administrador del CJPF	1	Agenda fecha y hora de videoconferencia con los intervinientes involucrados.
Encargado del Despacho Logístico y Administrativo del CJPF	2	Cumplimenta formato de solicitud de enlace de videoconferencia y remite a la DGTI.
	3	Programa provisionalmente fecha y hora de videoconferencia.
	4	Recibe confirmación de enlace de videoconferencia por parte de la DGTI y archiva.
	5	Confirma fecha y hora de realización de videoconferencia con el Administrador del CJPF, el Asistente de Despacho Judicial y Órgano jurisdiccional.
		Fin de procedimiento

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

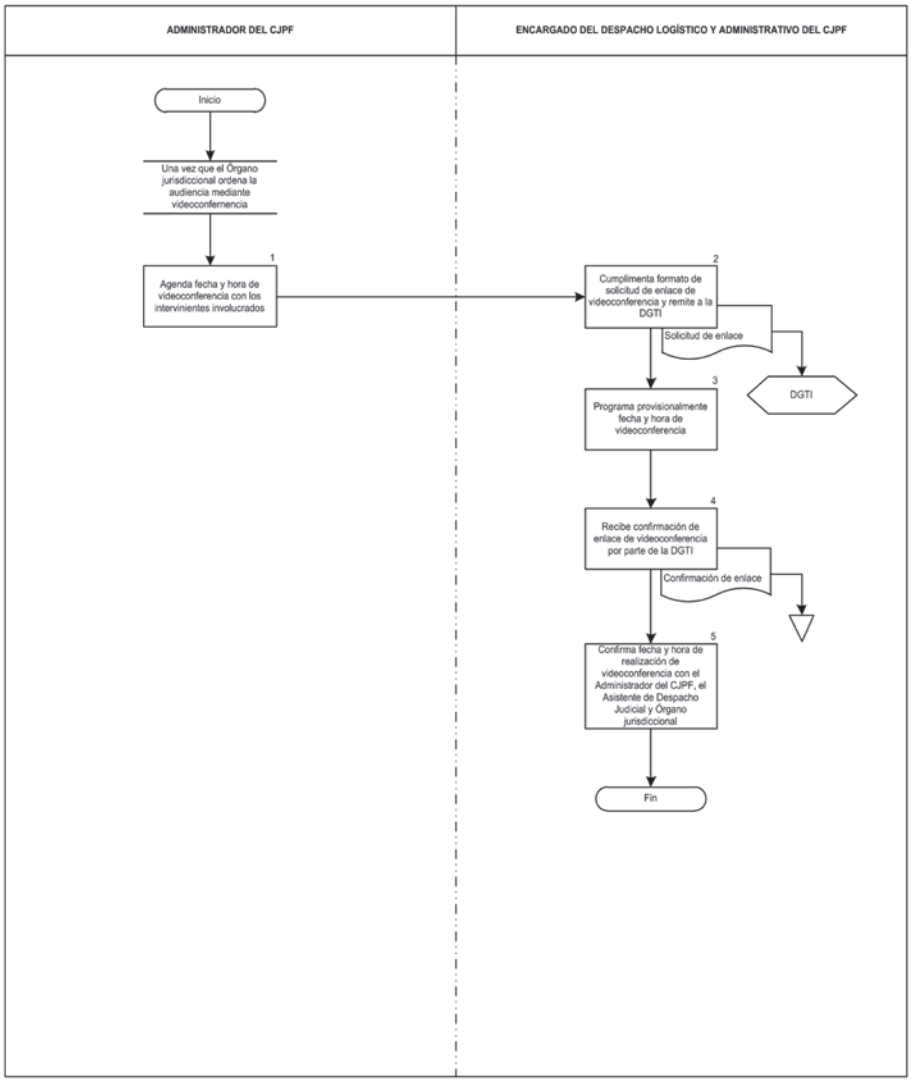
Clave:

Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Desarrollo de videoconferencia	6 de 6



Clave: Fecha de autorización:

SUBPROCESO: Despacho Judicial

7. Emisión escrita de resoluciones.
8. Despacho judicial.
9. Notificaciones.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 5
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **3. Despacho Judicial**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Emisión escrita de resoluciones		

OBJETIVO

Emitir por escrito las resoluciones judiciales que deban constar en ese formato en término de ley y de aquellas que pueda emitir el Órgano jurisdiccional en la misma forma.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone lo relativo a las resoluciones que deben constar por escrito, no obstante hayan sido pronunciadas en audiencia.

Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Emisión escrita de resoluciones	2 de 5

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Resoluciones Judiciales.- A las sentencias y autos pronunciados por el Órgano jurisdiccional, quien dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Emisión escrita de resoluciones	3 de 5

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Asistente de Constancias y Registro será el responsable de:
   - Revisa la resolución pronunciada por el Órgano jurisdiccional.
   - Realizar la versión escrita de la resolución judicial pronunciada en audiencia; igualmente realizará la resolución escrita de aquellas que en términos de ley exista la posibilidad de emitir en esta forma, como son, a título enunciativo: las que resuelven sobre providencias precautorias, las órdenes de aprehensión, comparecencia o citación, las que autoricen técnicas de investigación con control judicial, entre otras.
   - Dar cuenta al Órgano jurisdiccional de la versión escrita, para su revisión y firma.
   - Enviar los registros y la resolución escrita al Asistente de Despacho Judicial para su ejecución o cumplimiento, en su caso.

2. El Asistente de Despacho Judicial, será el responsable de:
   - Recibir resoluciones firmadas por el Órgano jurisdiccional, para proceder a su trámite o ejecución.
   - Realizar las actividades necesarias para el seguimiento del procedimiento judicial de ejecución o cumplimiento, tales como la emisión de los oficios y demás comunicaciones oficiales, ordenar la práctica de notificaciones, integrar los registros en el expediente físico, entre otras.
   - Remitir los autos al Juez de Ejecución de Penas para la ejecución o cumplimiento de la sentencia firme condenatoria.
   - Proveer en el caso de la interposición de recursos, lo relativo a la substanciación para su resolución oportuna por el propio Órgano jurisdiccional resolutor o el de alzada, según el recurso hecho valer.
   - Verificar en los libros de control correspondientes, el registro de las actuaciones que le competa inscribir.

3. El Técnico de Videograbación será el responsable de:
   - Poner a disposición del Asistente de Constancias y Registro, la grabación o registros audiovisuales de la audiencia.

4. El Auxiliar de Sala será el responsable de:
   - Registrar durante el desahogo de la audiencia, la información correspondiente a los actos relevantes o resoluciones dictadas por el Órgano jurisdiccional que deban constar por escrito, así como las actuaciones que ameriten un despacho judicial posterior, ordenen la comunicación con autoridades o la ejecución de alguna diligencia como: órdenes de notificación o citación, remisión de oficios o comunicaciones oficiales, preparación y desahogo de medios de prueba, entre otros.
   - Remitir oportunamente los registros correspondientes al Asistente de Constancias y Registro, para que realice la resolución escrita de la pronunciada en audiencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Emisión escrita de resoluciones	4 de 5

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
Asistente de Constancias y Registro	1	Recibe registros de resoluciones emitidas durante audiencia o bien instrucciones del Órgano jurisdiccional para emitir aquellas que pueda dictar por escrito y archiva.
	2	Elabora la resolución escrita.
	3	Remite la resolución escrita al Órgano jurisdiccional para su revisión y firma.
		Una vez firmada la resolución por el Órgano jurisdiccional
	4	Envía al Asistente de Despacho Judicial para ejecutarla mediante el despacho correspondiente.
		Fin de procedimiento

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave:

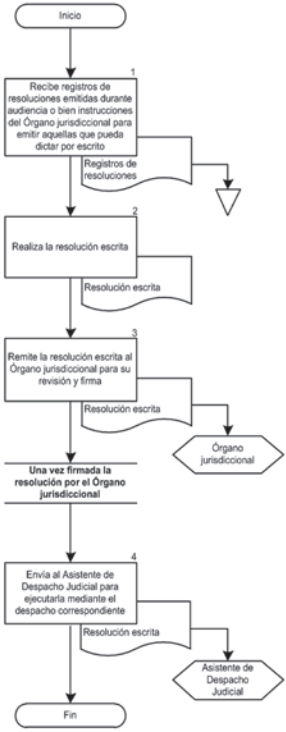
Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Emisión escrita de resoluciones	5 de 5

ASISTENTE DE CONSTANCIAS Y REGISTROS



Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 5
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **3. Despacho Judicial**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Despacho judicial		

OBJETIVO

Asegurar el despacho de las actuaciones procedimentales preparatorias o complementarias a la audiencia o a las resoluciones que deban ser emitidas por los órganos jurisdiccionales, referidas al trámite judicial, a la conclusión de los asuntos penales, entre otras, conforme a las disposiciones normativas.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, 28, 41, 52, 73, 82-93, 98, 141, 282, 291, 334, 335, 338, 340 y 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que disponen que los actos procedimentales se refieren a las actuaciones judiciales que su tramitación se aparte de la oralidad para dar pie a la forma escrita o cualquier otra, que obliga a que exista un despacho previo o posterior a la emisión de una resolución.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Despacho judicial	Hoja 2 de 5

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Libro de control.- Al registro oficial de las actuaciones judiciales realizadas por los órganos jurisdiccionales y áreas jurídico administrativas del CJP, para el control estadístico y de inspección judicial.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas o al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Despacho judicial	3 de 5

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Recibir los registros de la resolución pronunciada por el Órgano jurisdiccional, ya sea en audiencia o por otro medio. Igualmente, hacer del conocimiento del Órgano jurisdiccional aquellas promociones que se presenten por escrito y darles el despacho que aquél resuelva.
   - Programar audiencias, en caso de que se requiera.
   - Realizar cuando no se requiera programar audiencias, las actividades necesarias para el seguimiento del procedimiento judicial, tales como la emisión de los oficios correspondientes y demás comunicaciones oficiales, ordenar la práctica de notificaciones e integrar los registros en el expediente físico.
   - Gestionar, bajo supervisión del Administrador del CJPF, la sustitución del Ministerio Público, asesor jurídico o defensor de conformidad con lo determinado por el Órgano jurisdiccional.
   - Gestionar, bajo supervisión del Administrador del CJPF, los ajustes razonables o acciones positivas cuando alguna de las partes o sujeto en el procedimiento sea una persona en condición de vulnerabilidad, como indígenas o pertenecientes a comunidades de este tipo, mujeres víctimas de violencia de género, adultos mayores, discapacitados, menores de edad, etc.
   - Verificar en los libros de control correspondientes, el registro de las actuaciones que le competa inscribir.
   - Integrar y resguardar el expediente o registros físicos y electrónicos en el sistema de gestión.
   - Administrar el archivo documental.
   - Supervisar el control de imputados en libertad, bajo la medida cautelar de presentación periódica ante el juez o magistrado y hacer del conocimiento del Órgano jurisdiccional lo relativo a su seguimiento o incumplimiento.

2. El Auxiliar de Sala será el responsable de:
   - Registrar la información correspondiente a los actos relevantes o resoluciones dictadas por el Órgano jurisdiccional durante la audiencia, mismos que impliquen trámites judiciales a cargo del Despacho Judicial.
   - Enviar los registros correspondientes al Asistente de Despacho Judicial para que realice las actividades de su competencia.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Despacho judicial	Hoja 4 de 5

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
Asistente de Despacho Judicial	1	Recibe resolución y/o promoción que amerite despacho y archiva. ¿El documento es resolución o promoción? Promoción.- Continúa en la actividad número 2 Resolución.- Continúa en la actividad número 3
	2	Estudia la promoción y da cuenta al Órgano jurisdiccional correspondiente.
	3	Elabora el proyecto de auto, u oficios correspondientes según las indicaciones del Órgano jurisdiccional.
	4	Remite al Órgano jurisdiccional la versión escrita y autos para su revisión y firma.
	5	Solicita al Auxiliar de Gestión Judicial integrar la versión escrita y autos al expediente, en su caso, pone autos a disposición del Notificador. **Véase procedimiento de Notificaciones.**
Auxiliar de Gestión Judicial	6	Integra documentación al expediente.
		Fin de procedimiento

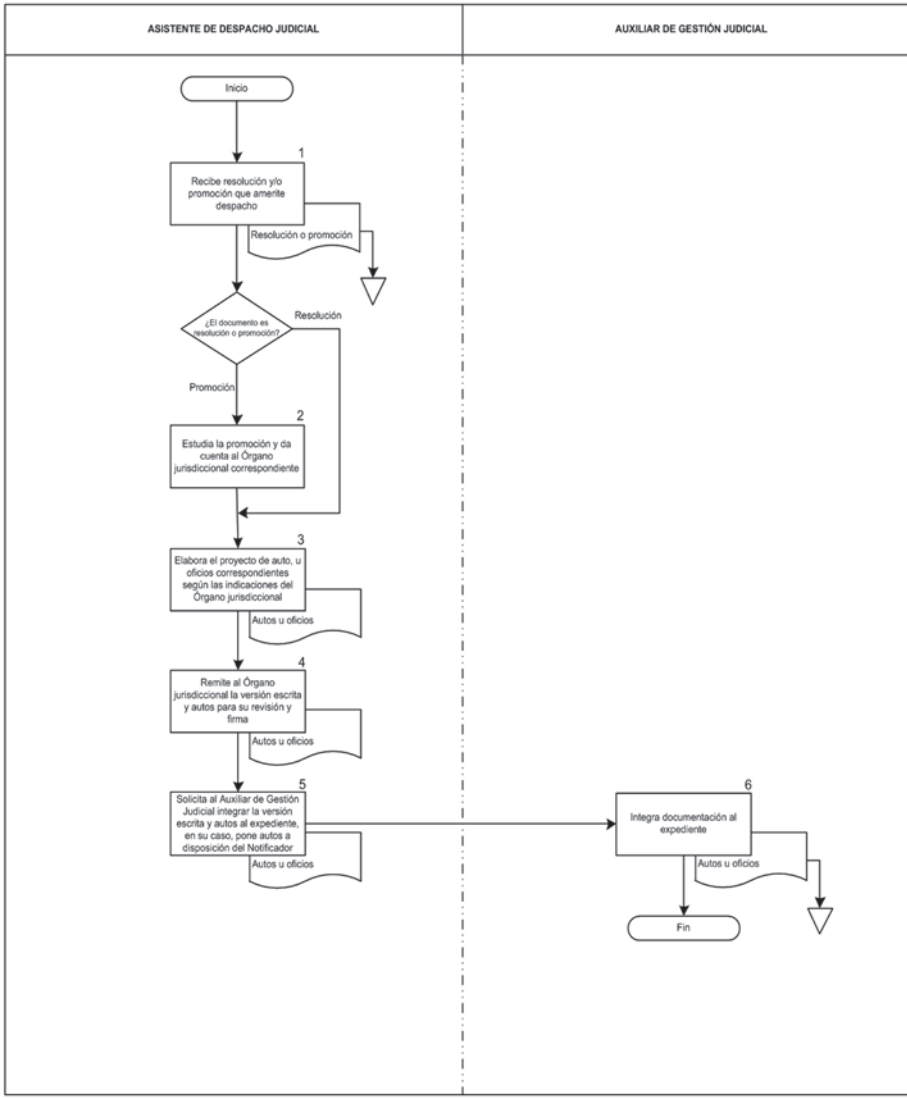
ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Despacho judicial	5 de 5



Clave: Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Macroproceso: **Administración de Justicia**	Proceso Estratégico:	Hoja 1 de 5
Proceso Clave:	Proceso Operativo: **1. Sistema Procesal Penal Acusatorio**	Subproceso: **3. Despacho Judicial**
Vinculado al Sistema(s): **N/A**		
Módulo(s):**N/A**	Proceso(s): **N/A**	
Procedimiento: Notificaciones		

OBJETIVO

Notificar en tiempo y forma las resoluciones emitidas por los Órgano jurisdiccionales de conformidad a la normativa aplicable, así como realizar las citaciones que se le instruyan.

FUNDAMENTO LEGAL

El presente procedimiento se establece de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82-93 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen que los actos procedimentales que se refieren a las notificaciones y citaciones.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Notificaciones	Hoja 2 de 5

CONCEPTOS BÁSICOS

Se entenderá por:

- Cédula de notificación.- Soporte documental en el que conste la realización de la notificación.
- CJP.- Al Centro de Justicia Penal.
- CNPP.- Al Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Libro de control.- Al registro oficial de las actuaciones judiciales realizadas por los órganos jurisdiccionales y áreas jurídico administrativas del CJP, para el control estadístico y de inspección judicial.
- Medios de notificación.- A los medios utilizados para la realización de notificaciones, los cuales incluyen teléfono, medios electrónicos como fax, correo electrónico o cualquier otro existente para tal efecto, siempre y cuando asegure la notificación clara, precisa, en forma completa y en el tiempo establecido por la resolución.
- Medios tecnológicos.- A las tecnologías de la información y comunicación destinadas a las labores de gestión, reproducción de contenidos en medios digitales, electrónicos, ópticos o de cualquier otro tipo, que faciliten las labores jurisdiccionales y administrativas.
- Notificación en audiencia.- A la comunicación que se realizan en forma oral, durante la audiencia; quedando de esa forma los intervinientes y quienes estaban obligados a asistir, formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en el CNPP.
- Notificación.- A la comunicación de una resolución.
- Órgano jurisdiccional.- Al Juez de Control, Juez de Tribunal de Enjuiciamiento, Juez de Ejecución de Penas y al Magistrado de Alzada.
- Partes en el procedimiento.- Al imputado y su defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico.
- Sujetos procesales.- A la víctima u ofendido, el Asesor jurídico, el imputado, el Defensor, el Ministerio Público, la Policía, el Órgano jurisdiccional y la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

1. El Administrador del CJPF será el encargado de:
   - Coordinar y supervisar las actividades necesarias para la práctica de notificaciones.
   - Supervisar el aviso oportuno de notificaciones a realizar por parte del Asistente del Despacho Judicial para coordinar lo conducente para su práctica.
   - Asegurar la gestión de los procesos de despacho judicial y administrativos que deban tener lugar con motivo de la práctica de notificaciones.

2. El Asistente de Despacho Judicial será el responsable de:
   - Identificar las resoluciones que ordenan notificaciones, a partir de la revisión del expediente o registros.
   - Supervisar el registro adecuado de los datos de las partes en el procedimiento, entre los cuales se incluye el domicilio y en su caso la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en la normatividad aplicable o bien a lo ordenado por el Órgano jurisdiccional.
   - Hacer del conocimiento de los órganos jurisdiccionales sobre el estado que guardan la práctica de notificaciones.
   - Realizar las gestiones para emitir los oficios o comunicaciones oficiales, turnando los registros al notificador para la práctica de las notificaciones o citaciones a que haya lugar.
   - Integrar la documentación de soporte relativa a las notificaciones al expediente respectivo, asegurando su permanente actualización.

3. El Auxiliar de Sala será el responsable de:
   - Durante el desahogo de la audiencia, registra la información correspondiente a los actos relevantes o resoluciones dictadas por el Órgano jurisdiccional que deban constar por escrito, así como las actuaciones que ameriten un despacho judicial posterior, ordenen la comunicación con autoridades o la ejecución de alguna diligencia como: órdenes de notificación o citación, remisión de oficios o comunicaciones oficiales, preparación y desahogo de medios de prueba, entre otros.

4. El Notificador será el responsable de:
   - Recibir las resoluciones o instrucciones emitidos por el Asistente de Despacho Judicial para su notificación o realización de citaciones.
   - Elaborar cédulas de notificación o citatorios, verificando en el expediente o registros que en la resolución se ordene la realización de la notificación, a la vez que recaba los datos correctos y completos relativos a:
     - El nombre de la persona a quien va dirigida la notificación.
     - El domicilio en donde se va a realizar la notificación.
     - La transcripción de la resolución judicial que se ordena notificar.
     - Una vez elaborada la cédula de notificación deberá obtener copia de la misma y verificar que los documentos cuenten con el sello oficial. Si existen errores u omisiones en la información, deberá reportarlo al Asistente del Despacho Judicial o bien realizar las actividades correspondientes para su corrección.
   - Practicar las notificaciones a quien corresponda, dentro de los plazos establecidos por la normatividad aplicable, utilizando los medios de notificación autorizados siempre y cuando no causen indefensión a alguna de las partes.
     - En caso de que no le sea posible realizar las notificaciones o citaciones, por no localizarse al interesado o por diverso motivo, deberá efectuar la razón de notificación en la que asentará lo acontecido y la remitirá al Despacho Judicial para que se informe al Órgano jurisdiccional y se provea lo conducente (por ejemplo, ordenar que la notificación se efectúe nuevamente por el medio anteriormente acordado o en su caso, realizarla por medio de lista, vía electrónica, exhorto, despacho o edicto, en cuyos casos se sujetarán a las reglas que la ley de la materia exige).
   - Remitir al Asistente del Despacho Judicial para su debida integración al expediente físico y electrónico, la copia de la cédula de notificación, del acta o la razón de notificación.

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento: Notificaciones	Hoja 4 de 5

Responsable de su realización	No.	Descripción de la actividad
		Inicio de procedimiento
Notificador	1	Identifica a las personas a notificar.
	2	Define los medios de notificación
	3	Elabora cédula de notificación.
	4	Practica la notificación correspondiente.
	5	Elabora acta o razón de notificación, incluso si no logró notificar o citar.
	6	Proporciona acta o razón de notificación al Asistente de Despacho Judicial para su integración al expediente.
		Fin de procedimiento

ELABORACIÓN	REVISIÓN
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA UNIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS REFORMAS PENAL, DE JUICIO DE AMPARO Y DERECHOS HUMANOS	DIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Clave:

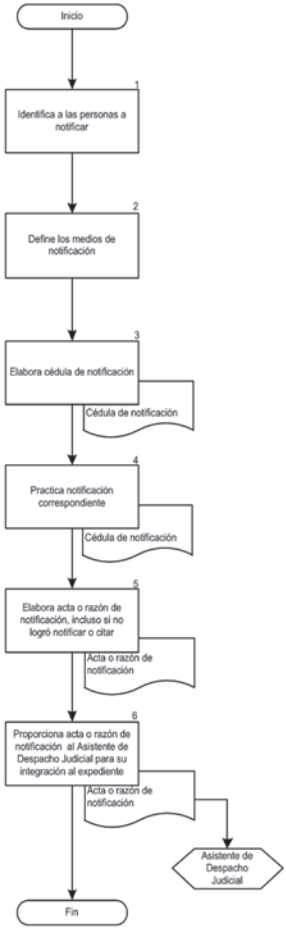
Fecha de autorización:

Poder Judicial de la Federación

CENTRO DE JUSTICIA PENAL

Procedimiento:	Hoja
Notificaciones	5 de 5

NOTIFICADOR



Clave: Fecha de autorización:

ANEXOS

Anexo 1. **Glosario,** donde se definen diversos términos usados en este documento.

Anexo 2. **Registro de Actualizaciones,** donde se identifican los principales cambios entre la versión anterior y la actual.

Anexo 1. Glosario

Macroproceso.- Es aquel gran proceso que engloba o sintetiza la función esencial del Consejo de la Judicatura Federal que es la Administración de Justicia.

Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente interrelacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Procedimiento Administrativo.- Indica la forma específica de realizar un conjunto de actividades. En muchos casos los procedimientos administrativos se expresan en documentos que contiene el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe hacerse y quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse.

Procesos Operativos.- Son aquellos que permiten la implantación del Macroproceso en la operación cotidiana del Centro de Justicia Penal que tienen una relación directa con sus atribuciones o facultades.

Subproceso.- Partes o etapas bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes alternativas focalizadas dentro de un mismo proceso.

Anexo 2. Registro de Actualizaciones

Cons.	Revisión	Motivo	Descripción
1	Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional	Elaboración	Entrada en operación del Centro de Justicia Penal.

- - - - - EL MAGISTRADO LUIS FERNANDO ANGULO JACOBO, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO Y DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, -

- C E R T I F I C A:- -

- - - - Que este Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos del Centro de Justicia Penal, fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de ocho de octubre de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: Presidente Ministro Juan N. Silva Meza, Felipe Borrego Estrada, Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández, César Esquinca Muñoa, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.–México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 24 DE NOVIEMBRE DE 2014).

RGZ

SECCIÓN TERCERA
ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS

DECLARATORIA DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE SOBRE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS PARTES TENDRÁN ACCESO A LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, PODRÁN PROMOVER POR VÍA ELECTRÓNICA Y SOLICITAR LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES POR ESA VÍA,

LA CUAL SE EMITE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

PRIMERA. Los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieron el Acuerdo General Conjunto 1/2013, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación del ocho de julio de dos mil trece;

SEGUNDA. En el párrafo primero del artículo SEXTO TRANSITORIO del citado Acuerdo General Conjunto 1/2013 se dispuso que "La Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y los expedientes electrónicos regulados en este Acuerdo General Conjunto se integrarán y utilizarán, respectivamente, por los órganos de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, por los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito así como por las partes en los asuntos de la competencia de dichos órganos, a partir

de las fechas que la Unidad determine, las cuales se indicarán en la declaración que emita y publique en el Diario Oficial de la Federación";

TERCERA. Los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal emitieron el "Acuerdo General Conjunto 1/2014 por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece;

CUARTA. En el artículo SEGUNDO TRANSITORIO del citado Acuerdo General Conjunto 1/2014 se estableció:

"A los expedientes electrónicos regulados en este Acuerdo General Conjunto podrán acceder los justiciables por conducto del SEPJF, mediante el uso de su FIREL, en las fechas que al efecto establezca la Unidad en la declaratoria que publique en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta las bases siguientes:

I. El uso del expediente electrónico se iniciará en tres diferentes etapas: la primera, para la SCJN y los Órganos jurisdiccionales del PJF radicados en los Circuitos Primero al Cuarto; la segunda, para los radicados en los Circuitos Quinto al Décimo Quinto y la tercera, para los ubicados en los Circuitos Décimo Sexto al Trigésimo Segundo;

II. A partir de las fechas indicadas en la declaración referida en la fracción I inmediata anterior, en la SCJN y en los Órganos jurisdiccionales del PJF, se integrarán los expedientes electrónicos en los términos previstos en este Acuerdo General Conjunto, relativos a los nuevos asuntos que se reciban, sean demandas, recursos o incidentes que se rijan por la Ley de Amparo vigente, y

III. A partir de las fechas indicadas en la declaración referida en la fracción I que antecede, en las cuales se inicie el uso del expediente electrónico en la SCJN y en los Órganos jurisdiccionales del PJF, en todos los juicios de amparo y en los diversos recursos o incidentes derivados de éstos, que se rigen por la Ley de Amparo vigente, aun cuando se trate de asuntos o instancias respecto de las cuales no sea obligatoria la integración del expediente electrónico, las partes podrán promover, mediante el uso de su FIREL, en los términos previstos en los capítulos Séptimo y Octavo de este Acuerdo General Conjunto, para el efecto de que al expediente impreso respectivo se agreguen dichas promociones, tanto en la SCJN como en los Órganos jurisdiccionales

del PJF, una vez certificada la coincidencia de su versión impresa con la recibida electrónicamente";

QUINTA. Tomando en cuenta la complejidad específica que implica concluir el desarrollo de la infraestructura necesaria para la integración y el uso del expediente electrónico en los 750 órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación administrados por el Consejo de la Judicatura Federal (Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito así como Juzgados de Distrito), derivado de la cantidad y diversidad de asuntos del conocimiento de dichos órganos jurisdiccionales, en comparación con los trabajos que para tal fin se requieren en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima conveniente que en la primera etapa señalada en la fracción I del artículo segundo transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2014 antes referido, en un primer momento, únicamente en ese Alto Tribunal las partes puedan acceder a los expedientes electrónicos, promover en éstos y solicitar notificaciones por vía electrónica, al tenor de la nueva Ley de Amparo mediante el uso de su FIREL, sin menoscabo de que a la brevedad se determine la fecha en la que dichas actividades puedan llevarse a cabo en los órganos jurisdiccionales radicados en los Circuitos del I al IV.

Por lo expuesto y fundado, la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas declara:

PRIMERA. A partir del primero de diciembre de dos mil catorce en los asuntos que se radiquen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, regulados por la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, las partes podrán mediante el uso de su FIREL, acceder a los expedientes electrónicos que al efecto se integren, presentar promociones por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esta vía, en términos de lo establecido en el "Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo";

SEGUNDA. A partir del primero de diciembre de dos mil catorce las partes en los asuntos que se rigen por la Ley de Amparo vigente, que se hubieren radicado antes de esa fecha en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán presentar promociones por vía electrónica, mediante el uso de su FIREL, en los términos previstos en los Capítulos Séptimo y Octavo del referido Acuerdo General Conjunto 1/2014, aun cuando los expedientes respectivos únicamente obren en versión impresa.

TERCERA. En términos de lo previsto en la parte inicial del inciso c) del párrafo segundo del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 antes mencionado, las partes que cuenten con FIREL expedida, indistintamente, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o el Consejo de la Judicatura Federal, podrán acceder a los expedientes electrónicos de los asuntos radicados en aquélla, en términos de lo señalado en el párrafo último del artículo 22 del citado Acuerdo General Conjunto 1/2014.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. La presente declaratoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese esta declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

EL SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

LICENCIADO GABRIEL MENDOZA ELVIRA

LA DIRECTORA GENERAL DE ESTADÍSTICA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

LICENCIADA LORENA ANGÉLICA TABOADA PACHECO

EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LICENCIADO OTILIO ESTÉBAN HERNÁNDEZ PÉREZ

EL DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAESTRO DAVID AMÉZQUITA PÉREZ

EL DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

LICENCIADO JUAN JOSÉ GARCÍA MORA

EL SECRETARIO DE LA UNIDAD

LICENCIADO IVÁN ELADIO PALACIOS ALLEC

Esta hoja corresponde a la declaratoria del seis de noviembre de dos mil catorce sobre la fecha a partir de la cual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las partes tendrán acceso a los expedientes electrónicos, podrán promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía.

EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,

CERTIFICA:

Que esta copia fotostática constante de tres fojas útiles concuerda fiel y exactamente con el original de la DECLARATORIA DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE SOBRE LA FECHA A PARTIR DE LA CUAL EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS PARTES TENDRÁN ACCESO A LOS EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS, PODRÁN PROMOVER POR VÍA ELECTRÓNICA Y SOLICITAR LA RECEPCIÓN DE NOTIFICACIONES POR ESA VÍA, que obra en los archivos de la sección de instrumentos normativos de esta Secretaría General de Acuerdos y se expide para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*.—México, Distrito Federal, a siete de noviembre de dos mil catorce (D.O.F. DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2014).

Nota: Los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico; y, 1/2014, de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expediente impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXII, Tomo 2, julio de 2013, página 1667; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 10, Tomo III, septiembre de 2014, página 2769, respectivamente.

SÉPTIMA PARTE
ÍNDICES

Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER.	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	VII.2o.C.20 K (10a.)	2888
ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA.	VI.2o.C.19 K (10a.)	2890
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS.	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME		

	Número de identificación	Pág.
A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL.	2a./J. 119/2014 (10a.)	768
ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL.	VII.2o.C.78 C (10a.)	2897
ALIMENTOS. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA MATERIA DEBEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO, AUNQUE PROCEDA ALGÚN RECURSO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.21 C (10a.)	2898
ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA		

	Número de identificación	Pág.
CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
AMPARO ADHESIVO. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SU PROCEDENCIA.	1a. CDXIII/2014 (10a.)	705
AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO.	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. CUANDO SE DESECHA POR IMPROCEDENTE NO OPERA EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE."(*).	2a./J. 126/2014 (10a.)	803
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE ANALIZAR, DE MANERA OFICIOSA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ES PARTE EL ESTADO MEXICANO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.	2a./J. 124/2014 (10a.	815

	Número de identificación	Pág.
AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA POR MATERIA Y PONE FIN AL JUICIO SIN DECIDIRLO EN LO PRINCIPAL.	II.1o.5 K (10a.)	2902
AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.	I.9o.A.61 A (10a.)	2903
AMPARO EN REVISIÓN. EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL A LAS VÍCTIMAS O PARTE OFENDIDA DEL DELITO.	1a. CDXII/2014 (10a.)	706
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS.	II.1o.12 P (10a.)	2904
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO.	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218

	Número de identificación	Pág.
APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO.	VI.2o.T. J/2 (10a.)	2579
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN SERVIDOR O FUNCIONARIO PÚBLICO NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HAYA SOLICITADO PREVIAMENTE, ÉSTE PODRÁ PEDIR AL JUEZ DE DISTRITO QUE REQUIERA A LOS OMISOS, ASÍ COMO EL DIFERIMIENTO DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA PETICIÓN SE HAGA CON LA ANTICIPACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 121 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.	I.6o.T.13 K (10a.)	2905
AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA).	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906
AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA		

	Número de identificación	Pág.
Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA.	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA.	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO.	1a. CCCXCVI/2014 (10a.)	706
CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	2a./J. 127/2014 (10a.)	849

	Número de identificación	Pág.
CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).	2a./J. 95/2014 (10a.)	1069
COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO "DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO" A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR LOS METROS CÚBICOS DE AGUA SUSTRAÍDA DEL SUBSUELO, LO ES EL FORMATO 10-A, AUTORIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	IV.1o.A.28 A (10a.)	2913
COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO		

	Número de identificación	Pág.
QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO.	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
CONCLUSIONES ACUSATORIAS DEFICIENTES EL PRECEPTO 232 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, VIOLA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16, 17, 20, 21 Y 133 CONSTITUCIONALES. El texto de esta tesis no se publica por ser esencialmente igual al de la publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 horas y en su *Gaceta*, Décima Época, Libro 8, Tomo II, julio de 2014, página 1117, tesis VI.2o.P.17 (10a.), de rubro: "CONCLUSIONES NO ACUSATORIAS O DEFICIENTES. EL ARTÍCULO 232 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, AL ESTABLECER QUE CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO LAS FORMULE, EL JUEZ REMITIRÁ EL PROCESO AL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA PARA QUE CONFIRME O MODIFIQUE EL PLANTEAMIENTO DE LA ACUSACIÓN, VULNERA LOS ARTÍCULOS 1o., 14, 16 Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	VI.1o.P.24 P (10a.)	
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710

	Número de identificación	Pág.
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. SUPUESTO EN EL QUE ES INAPLICABLE PARA DESCONOCER LA VERSIÓN DEFENSIVA DEL IMPUTADO Y DEBE VALORARSE DE MANERA QUE COMPRENDA ASPECTOS QUE LE FAVOREZCAN.	II.2o.P.30 P (10a.)	2915
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.	P./J. 52/2014 (10a.)	23
CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACIÓN SI EL ESTADO RECEPTOR NOTIFICA A OTRO SOBRE LA DETENCIÓN DE UNO DE SUS NACIONALES, NO OBSTANTE QUE EL ESTADO NOTIFICADO DECIDA NO ASISTIR A LA PERSONA DETENIDA.	1a. CDII/2014 (10a.)	713
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA, VENCIDO PERO PRORROGABLE AUTOMÁTICA E INDEFINIDAMENTE. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO, CUANDO NO ACREDITA LA POSESIÓN JURÍDICA		

	Número de identificación	Pág.
DEL INMUEBLE RESPECTIVO, QUE CONDICIONA LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA.	VI.2o.C.55 C (10a.)	2915
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.	2a./J. 123/2014 (10a.)	859
CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO.	I.6o.C.42 C (10a.)	2916
COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR.	1a. CCCXCIX/2014 (10a.)	713
COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESEN-		

	Número de identificación	Pág.
TACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.	I.8o.A.81 A (10a.)	2917
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS.	IV.2o.A.76 K (10a.)	2918
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 59/2014 (10a.)	5
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 60/2014 (10a.)	7
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VALORAR LA LEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 61/2014 (10a.)	9

	Número de identificación	Pág.
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 58/2014 (10a.)	11
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.	P./J. 56/2014 (10a.)	13
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN.	P./J. 57/2014 (10a.)	16
DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA.	III.3o.T.29 L (10a.)	2921
DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL.	III.3o.T.28 L (10a.)	2922
DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO		

	Número de identificación	Pág.
PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.	(III Región)4o.19 K (10a.)	2922
DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ACTUALIZA NO SÓLO CON LA ORGANIZACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS PARA COMETER ILÍCITOS, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE LOS ELEMENTOS CONSISTENTES EN LA REPETICIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN FORMA PERMANENTE O REITERADA.	VI.1o.P.25 P (10a.)	2924
DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/4 (10a.)	2708
DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/7 (10a.)	2709
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711
DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/6 (10a.)	2712
DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO		

	Número de identificación	Pág.
RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.	I.5o.P. J/2 (10a.)	2725
DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO.	I.5o.P.5 K (10a.)	2927
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	I.8o.A.79 A (10a.)	2928
DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL		

	Número de identificación	Pág.
PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).	I.9o.P.69 P (10a.)	2928
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO.	2a. CIX/2014 (10a.)	1190
DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.	1a. CDV/2014 (10a.)	714
DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECA-		

	Número de identificación	Pág.
BARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA.	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*.	I.3o.P.20 P (10a.)	2935
ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE IMPERA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA, NO INFLUYE PARA LA CALIFICACIÓN DE UN PADECIMIENTO DE ESE ORDEN.	I.6o.T.116 L (10a.)	2936
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE		

	Número de identificación	Pág.
REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).	XVI.1o.A.47 A (10a.)	2936
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA VIGENCIA DE UN AÑO INHERENTE AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA EL CASO EN QUE EL ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO OBTENGA EL RESULTADO "NO CUMPLE", TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS PERSONAS QUE PRETENDAN PERMANECER EN LA POLICÍA FEDERAL.	I.15o.A.9 A (10a.)	2937
EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD. JURISPRUDENCIA APLICABLE CONFORME A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME TAL CUESTIÓN.	(IX Región)1o.2 K (10a.)	2938
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA.	(VIII Región)2o. J/1 (10a.)	2737
EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO		

	Número de identificación	Pág.
DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA.	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
FE DE ERRATAS. CUANDO TIENE POR OBJETO LA CORRECCIÓN DE PRECEPTOS CONTENIDOS EN UN REGLAMENTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, NO AMERITA EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DISTINTA DE LA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.50 A (10a.)	2941
FIDEICOMISO. SI EL PATRIMONIO QUE INGRESA A ÉSTE PROVIENE DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL (INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), DEJA DE TENER SU TITULARIDAD EL FIDEICOMITENTE, POR LO QUE DE CONCEDÉRSELE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).	VII.2o.C.73 C (10a.)	2942
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL.	1a. CD/2014 (10a.)	716
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO.	1a. CDI/2014 (10a.)	717
FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR.	1a. CCCXCVII/2014 (10a.)	718

	Número de identificación	Pág.
GARANTÍA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. FORMA DE CALCULARLA CUANDO SÓLO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS Y EXISTE UNA CANTIDAD LÍQUIDA.	VI.2o.T.5 L (10a.)	2943
GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)].	(III Región)4o.55 A (10a.)	2963
HORAS EXTRAS. SON INVEROSÍMILES CUANDO SU RECLAMO SE BASA EN EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO CONTÓ CON TIEMPO PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS, SIN PRECISAR EL HORARIO EN QUE DEBÍA CUBRIRSE ESTA NECESIDAD.	(VIII Región)2o.6 L (10a.)	2964
IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL QUERELLANTE. SI AL CONOCER DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROMOVIDO CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL PROCURADOR ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO SE ASEGURÓ DE AQUÉLLAS, DEBE DEVOLVERLE LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA Y, DE SER NECESARIO, REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS		

	Número de identificación	Pág.
ACREDITEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.1o.P.16 P (10a.)	2967
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.	1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)	720
IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL.	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE		

	Número de identificación	Pág.
DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.	P./J. 51/2014 (10a.)	24
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	P./J. 55/2014 (10a.)	18
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA, CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, NO OBSTANTE QUE SE HUBIESE DICTADO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ÉL.	XVII.1o.C.T.27 K (10a.)	2970

	Número de identificación	Pág.
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL.	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).	XIV.P.A. J/3 (10a.)	2780
INFONAVIT. ESTÁ FACULTADO PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SIN NECESIDAD DE PREVIA TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.	III.4o.T.23 L (10a.)	2971
INFORME JUSTIFICADO. COMPLEMENTACIÓN DEL. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER OMISIVO.	I.18o.A.3 K (10a.)	2972
INSPECCIÓN. CUÁNDO SU OFRECIMIENTO NO ES INDIVIDUALIZADO.	**REPUBLICADA POR ADICIÓN DE NOTA SOBRE OBLIGATORIEDAD** I.7o.T.12 L (10a.)	2972
INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL		

	Número de identificación	Pág.
PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS.	I.13o.T.101 L (10a.)	2993
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).	P./J. 50/2014 (10a.)	60
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.	PC.III.C. J/2 C (10a.)	1339
ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL.	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	II.1o.16 C (10a.)	2995
JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA		

	Número de identificación	Pág.
POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO).	I.3o.C.54 K (10a.)	2995
LAUDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE VALIDEZ SI SON FIRMADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL NO TENER DICHO FUNCIONARIO FE PÚBLICA NI HABER SIDO DESIGNADO PARA SUPLIR LA AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DE LA SALA RESPECTIVA.	I.13o.T.109 L (10a.)	2999
LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO.	2a./J. 105/2014 (10a.)	1106
LITIS ABIERTA. ESTE PRINCIPIO PERMITE AL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL FORMULAR CONCEPTOS DE NULIDAD SOBRE ASPECTOS QUE NO HIZO VALER EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA E, INCLUSO, PARA EVIDENCIAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN SU PERJUICIO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ÉSTE, LOS CUALES DEBEN ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA.	I.8o.A.83 A (10a.)	3000
NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO.	I.6o.T.119 L (10a.)	3001

	Número de identificación	Pág.
NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA.	(III Región)4o.52 A (10a.)	3001
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA.	PC.IV.A. J/4 A (10a.)	1664
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD.	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR DE LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD. LA AUTORIDAD NO PUEDE TOMAR EN CUENTA ELEMENTOS DE ALEGADA PERTENENCIA NACIONAL PARA NEGAR AQUEL DERECHO HUMANO.	1a. CDIV/2014 (10a.)	723
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A		

	Número de identificación	Pág.
LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD.	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES.	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.	XXVII.3o. J/3 (10a.)	2713
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE ENTIENDE CON UN TERCERO, EN EL CITATORIO PREVIO Y EN EL ACTA RELATIVA DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES QUE DEN PRECISIÓN Y CLARIDAD RESPECTO AL VÍNCULO QUE UNE A AQUÉL CON EL CONTRIBUYENTE Y ESPECIFICAR LAS RAZONES QUE ASEGUREN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO POR CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES, ASÍ COMO SUSTENTAR LA UBICACIÓN DE ÉSTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLEMENTE IDENTIFICABLES.	**CANCELADA** II.3o.A.1 A (10a.)	3002
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA		

	Número de identificación	Pág.
AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO).	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
NULIDAD DE NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).	III.1o.C.6 K (10a.)	3006
OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 48 HORAS.	VI.2o.T.3 L (10a.)	3009
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO		

	Número de identificación	Pág.
DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.	1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.)	725
PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA EXCEPCIÓN OPUESTA POR EL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, FUNDADA EN LA FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJADOR, ES IMPROCEDENTE SI SE VINCULA A LA FECHA EN QUE SE REALIZA SU RECLAMO.	III.4o.T.25 L (10a.)	3011
PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO SU MONTO SE INTEGRA CON LO COTIZADO EN DOS PLAZAS DISTINTAS, SU INCREMENTO DEBE CALCULARSE CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA OBTENCIÓN DE LA RELATIVA A LA PLAZA MÁS ANTIGUA, SI ES LO QUE MÁS BENEFICIA AL TRABAJADOR O A SUS FAMILIARES (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA).	I.9o.A.60 A (10a.)	3012
PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA		

	Número de identificación	Pág.
LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
PETRÓLEOS MEXICANOS. LA CORRIDA ESCALAFONARIA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDADA PRUEBA QUE LEGALMENTE PACTÓ CON EL SINDICATO LA CANCELACIÓN DE LA PLAZA RECLAMADA.	I.6o.T.114 L (10a.)	3014
PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO.	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO.	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727

	Número de identificación	Pág.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL.	1a. CCCLXXXI/2014 (10a.)	728
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LA CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.	1a. CCCXC/2014 (10a.)	729
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.	P./J. 54/2014 (10a.)	19
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER		

	Número de identificación	Pág.
(LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)1o.3 A (10a.)	3014
PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.	PC.I.A. J/30 A (10a.)	1698
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	P./J. 53/2014 (10a.)	61
PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE SU DESAHOGO POR OFICIO SI SE OFRECE A CARGO DEL DIRECTOR DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PUEBLA,		

	Número de identificación	Pág.
POR NO TENER ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS EL CARÁCTER DE ALTOS FUNCIONARIOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.T.4 L (10a.)	3016
PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS NECESARIAS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO DEL QUEJOSO CUANDO PROMUEVE EL JUICIO POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, EN CONTRA DE LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, QUIEN ES SU CÓNYUGE Y MADRE DE AQUÉLLOS.	(IV Región)1o.4 A (10a.)	3018
PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES.	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL PRECEDENTE** VI.1o.C.50 C	3020
QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO,		

	Número de identificación	Pág.
SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO.	XXVII.3o.65 K (10a.)	3023
RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA.	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO SINO SÓLO CONTRA AQUÉLLA QUE LA DECLARA SIN MATERIA O INFUNDADA.	1a. CCCLXXXVI/2014 (10a.)	730
RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.	1a./J. 70/2014 (10a.)	640
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE		

	Número de identificación	Pág.
CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN.	1a./J. 69/2014 (10a.)	658
REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
RELACIÓN DE TRABAJO. LA CARTA PODER OTORGADA POR EL DEMANDADO AL ACTOR, QUE CONTIENE UN RECONOCIMIENTO EXPRESO DE QUE ÉSTE ES SU TRABAJADOR Y QUE LABORA EN EL DOMICILIO SEÑALADO COMO EL DE LA FUENTE DE PRODUCCIÓN, ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DICHO VÍNCULO ENTRE AMBOS.	III.4o.T.24 L (10a.)	3026
RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA.	I.8o.A.80 A (10a.)	3027
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. EL GRADO DE PUNICIÓN EN QUE SE UBICA AL SENTENCIADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA A SU PAGO, NO ESTÁ LIGADO CON EL GRADO DE CULPABILIDAD PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).	II.3o.P.40 P (10a.)	3028
RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DE LA DEMANDA INICIAL Y SUS ANEXOS. AL CONSTITUIR UN ACTO DECLARATIVO QUE CONLLEVA UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.	I.6o.C.40 C (10a.)	3029
RESTITUCIÓN DEL BIEN INDEBIDO, EN TRATÁNDOSE DEL DELITO ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN.	I.3o.P.21 P (10a.)	3029
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO.	I.8o.A.82 A (10a.)	3030
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.	2a./J. 122/2014 (10a.)	1039
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS.	1a. CCCLXXXII/2014 (10a.)	730
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA.	XIV.P.A.2 A (10a.)	3031
SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER		

	Número de identificación	Pág.
EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN.	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033
SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.	2a. CVIII/2014 (10a.)	1192
SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727
SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA.	XIX.1o.P.T. J/3 (10a.)	2790
SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CDXI/2014 (10a.)	731
SENTENCIAS PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO DE AQUELLAS DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA,		

	Número de identificación	Pág.
CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	XI.P. J/1 (10a.)	2800
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EL TIEMPO Y ESTILO DE DISCUSIÓN DE CADA ASUNTO RESPONDEN A UNA DINÁMICA ADQUIRIDA POR LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVII/2014 (10a.)	733
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE SEGUIDO CUANDO LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES VOTAN EN CONTRA DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDIX/2014 (10a.)	734
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA APERTURA Y TRANSPARENCIA QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ÉSTAS, DEBE SER COMPATIBLE CON LA EXIGENCIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVI/2014 (10a.)	736
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SON ESPACIOS DE DELIBERACIÓN POLÍTICA SINO PROCESOS DE DEBATE JURÍDICO ENTRE MAGISTRADOS CUYO OBJETIVO FINAL ES LA EMISIÓN DE SENTENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVIII/2014 (10a.)	737
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON INSTRUMENTALES		

	Número de identificación	Pág.
PARA LA EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDX/2014 (10a.)	738
SINIESTROS AÉREOS. EL CONVENIO DE CHICAGO Y SU ANEXO 13, TITULADO "INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN", NO SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO EN LA INDAGACIÓN DE AQUELLOS EN LOS QUE INTERVIENEN AERONAVES DEL ESTADO QUE CUMPLEN UN SERVICIO DE POLICÍA.	1a. CCCXCIII/2014 (10a.)	739
SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR DIVERSIDAD DE ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE REVOCARLO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE POR UNO DE ELLOS NO SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA.	I.5o.P.6 K (10a.)	3035
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES.	IV.2o.A.2 CS (10a.)	3035
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS.	IV.2o.A.1 CS (10a.)	3037
SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.	I.6o.P.60 P (10a.)	3038
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA.	VII.2o.C.19 K (10a.)	3038
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR.	PC.I.C. J/9 C (10a.)	1816
SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER *EX OFFICIO* DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO.	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** I.3o.C.47 K (10a.)	3040
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO SÓLO TIENE VIGENCIA HASTA ANTES DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE INICIADO ÉSTE, AQUÉLLA PODRÁ CONCEDERSE Y SURTIRÁ EFECTOS SI		

	Número de identificación	Pág.
SE CONSTITUYE GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA.	III.4o.T.9 K (10a.)	3040
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO.	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. SI EL PROCESO SE TRAMITA Y CONCLUYE CONFORME AL		

	Número de identificación	Pág.
SISTEMA PENAL ANTERIOR, EL INCIDENTE RELATIVO DEBE REGIRSE POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	II.2o.P.13 K (10a.)	3044
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO.	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949
TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO.	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049

	Número de identificación	Pág.
TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006).	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.	1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.)	741
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER QUIENES NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL SIEMPRE QUE SUS FUNCIONES SEAN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y ESTÉN VINCULADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL.	I.6o.T.117 L (10a.)	3050
TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA.	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR		

	Número de identificación	Pág.
TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.	I.4o.A.98 A (10a.)	3066
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL PERSONAL TÉCNICO ACADÉMICO QUE LABORA POR CONTRATO SÓLO PUEDE ADQUIRIR SU DEFINITIVIDAD MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO Y DESPUÉS DE TRES AÑOS ININTERRUMPIDOS CON NOMBRAMIENTO INTERINO SOMETERSE A UN CONCURSO CERRADO.	2a. CXI/2014 (10a.)	1193
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO.	2a. CX/2014 (10a.)	1193
VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA,		

	Número de identificación	Pág.
ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO.	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)].	VI.2o.T. J/1 (10a.)	2852
VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882

Índice de Ejecutorias

	Clave	Pág.
Contradicción de tesis 145/2013.—Suscitada entre el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa a la tesis P./J. 46/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CON MOTIVO DE UNA NOTIFICACIÓN ERRÓNEA DEL ACTUARIO JUDICIAL. CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 5.	P.	26
Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 4/2014.—César Octavio Camacho Quiroz.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativa al tema: "Consulta popular referida a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Su materia es inconstitucional, al aplicar no sólo una cuestión sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino un tema electoral."	P.	305
Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014.—Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativa al tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal,		

	Clave	Pág.
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado."	P.	347
Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 3/2014.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa al tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de petróleo y energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre de 2013. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado."	P.	442
Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativa al tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un nuevo salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del Estado y restringir el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal."	P.	510
Amparo en revisión 433/2010.—Ministro Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Relativo a la tesis 1a./J. 71/2014 (9a.), de título y subtítulo: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a.	551
Recurso de inconformidad 545/2014.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativo a la tesis 1a./J. 76/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO."	1a.	587

	Clave	Pág.
Recurso de inconformidad 325/2014.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativo a la tesis 1a./J. 75/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a.	607
Recurso de inconformidad 466/2014.—Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Relativo a la tesis 1a./J. 70/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO."	1a.	628
Recurso de inconformidad 217/2014.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativo a la tesis 1a./J. 69/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN."	1a.	641
Contradicción de tesis 406/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativa a la tesis 1a./J. 60/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO."	1a.	659
Amparo directo en revisión 1607/2014.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativo a la tesis 2a./J. 119/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTI-		

	Clave	Pág.
TUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL."	2a.	747
Amparo directo en revisión 1168/2014.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a la tesis 2a./J. 126/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. CUANDO SE DESECHA POR IMPROCEDENTE NO OPERA EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011, DE RUBRO: 'AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE.'(*)."	2a.	770
Recurso de reclamación 800/2014.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a la tesis 2a./J. 124/2014 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE ANALIZAR, DE MANERA OFICIOSA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ES PARTE EL ESTADO MEXICANO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO."	2a.	805
Amparo en revisión 467/2014.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativo a la tesis 2a./J. 127/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA."	2a.	817
Amparo directo en revisión 1408/2014.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativo a la tesis 2a./J. 123/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN."	2a.	851

	Clave	Pág.
Amparo directo en revisión 2652/2014.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativo a la tesis 2a./J. 128/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a.	861
Amparo en revisión 173/2014.—Ministro Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Relativo a la tesis 2a./J. 120/2014 (10a.), de título y subtítulo: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.".....	2a.	895
Amparo directo en revisión 2464/2014.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a las tesis 2a./J. 114/2014 (10a.), 2a./J. 116/2014 (10a.) y 2a./J. 115/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.", "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".....	2a.	926
Amparo en revisión 437/2014.—Ministro Ponente: José Fernando González Salas. Relativo a las tesis 2a./J. 111/2014 (10a.) y 2a./J. 112/2014 (10a.), de títulos y subtítulos: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS		

	Clave	Pág.
UNIDOS MEXICANOS." y "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a.	963
Recurso de reclamación 436/2013.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a la tesis 2a./J. 122/2014 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.".....	2a.	1019
Contradicción de tesis 209/2014.—Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativa a la tesis 2a./J. 107/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a.	1041
Contradicción de tesis 149/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativa a la tesis 2a./J. 95/2014 (10a.), de título y subtítulo: "CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013)."	2a.	1058
Contradicción de tesis 164/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Tercer		

Clave **Pág.**

Circuito, Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa a la tesis 2a./J. 105/2014 (10a.), de título y subtítulo: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO."..... 2a. 1071

Contradicción de tesis 224/2014.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativa a la tesis 2a./J. 104/2014 (10a.), de título y subtítulo: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."..... 2a. 1108

Contradicción de tesis 167/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.—Ministro Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Relativa a la tesis 2a./J. 108/2014 (10a.), de título y subtítulo: "VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO." 2a. 1139

Contradicción de tesis 1/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Noveno Circuito.—Magistrado Ponente: José Guadalupe Sánchez González. Relativa a la tesis PC.XXIX. J/1 C (10a.), de título y subtítulo:

	Clave	Pág.
"ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."...	PC.	1199
Contradicción de tesis 5/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Carlos Manuel Bautista Soto. Relativa a la tesis PC.III.C. J/1 K (10a.), de título y subtítulo: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.	1219
Contradicción de tesis civil 7/2014.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz.—Magistrado Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Relativa a la tesis PC.VII. J/4 C (10a.), de título y subtítulo: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."...	PC.	1251
Contradicción de tesis 9/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Relativa a la tesis PC.III.C. J/2 C (10a.), de título y subtítulo: "INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO."	PC.	1289
Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Adminis-		

Clave Pág.

trativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Jorge Meza Pérez. Relativa a las tesis PC.IV.A. J/4 A (10a.) y PC.IV.A. J/3 A (10a.), de títulos y subtítulos: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA." y "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD." ..... PC. 1341

Contradicción de tesis 20/2014.—Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.—Magistrada Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Relativa a la tesis PC.I.A. J/30 A (10a.), de título y subtítulo: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." ..... PC. 1667

Contradicción de tesis 2/2014.—Entre el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Virgilio Solorio

	Clave	Pág.
Campos. Relativa a la tesis PC.I.C. J/8 C (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.	1700
Contradicción de tesis 13/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.—Magistrada Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Relativa a la tesis PC.I.A. J/28 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL."	PC.	1730
Contradicción de tesis 5/2014.—Entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Relativa a la tesis PC.I.C. J/9 C (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR."	PC.	1768
Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Relativa a la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.	1818

Clave Pág.

Contradicción de tesis 19/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.—Magistrada Ponente: Luz Cueto Martínez. Relativa a la tesis PC.I.A. J/29 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." ..... PC. 1908

Contradicción de tesis 2/2014.—Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Ángel Ponce Peña. Relativa a la tesis P.C.I.L. J/8 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA."... PC. 1951

Contradicción de tesis 2/2014.—Entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito.—Magistrada Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Relativa a los temas: "Contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito. Debe declararse inexistente cuando uno de los criterios contendientes es contrario a una jurisprudencia de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." y "Contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito. Si uno de los criterios contendientes es opuesto a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sirvió para resolver la problemática planteada, procede ordenar la cancelación de aquél, a efecto de evitar inseguridad jurídica." ..... PC. 1999

	Clave	Pág.
Contradicción de tesis 8/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Casimiro Barrón Torres. Relativa al tema: "Contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito. Es improcedente la tramitada ante un Pleno de Circuito, cuando uno de los criterios contendientes deriva del voto aclaratorio emitido por alguno de los Magistrados que los integran y no de la parte considerativa de la ejecutoria correspondiente."	PC.	2078
Contradicción de tesis 2/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Jorge Meza Pérez. Relativa a los temas: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida." y "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, por lo que ve a su votación, no contiene violaciones formales trascendentales que invaliden su constitucionalidad."	PC.	2091
Contradicción de tesis 3/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Jorge Meza Pérez. Relativa a los temas: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida." y "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm.		

	Clave	Pág.
037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, por lo que ve a su votación, no contiene violaciones formales trascendentales que invaliden su constitucionalidad."	PC.	2246
Contradicción de tesis 7/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: Jorge Meza Pérez. Relativa al tema: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida."	PC.	2409
Amparo directo 109/2014.—Magistrada Ponente: Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Relativo a la tesis I.9o.P. J/14 (10a.), de título y subtítulo: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	T.C.	2547
Incidente de inejecución de sentencia 25/2014.—Magistrado Ponente: Francisco Esteban González Chávez. Relativo a la tesis VI.2o.T. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO."	T.C.	2574
Amparo directo 854/2013.—Magistrado Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Relativo a la tesis VII.2o.C. J/6 (10a.), de título y subtítulo: "COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y		

	Clave	Pág.
EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)."	T.C.	2581
Amparo directo 99/2014.—Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Relativo a las tesis XXVII.3o. J/4 (10a.), XXVII.3o. J/7 (10a.), XXVII.3o. J/5 (10a.), XXVII.3o. J/6 (10a.) y XXVII.3o. J/3 (10a.), de títulos y subtítulos: "DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.", "DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.", "DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.", "DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA." y "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO."	T.C.	2605
Queja 55/2014.—Magistrado Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Relativa a la tesis I.5o.P. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO."	T.C.	2715
Amparo directo 110/2014 (cuaderno auxiliar 345/2014) del índice del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Mérida, Yucatán.—Magistrada Ponente: Mayra González Solís. Relativo a la tesis (VIII Región)2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE		

Clave **Pág.**

RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA." ..... T.C. 2726

Amparo directo 121/2014.—Magistrado Ponente: José Heriberto Pérez García. Relativo a la tesis IV.1o.P. J/4 (10a.), de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL." ..... T.C. 2738

Amparo directo 330/2013.—Magistrado Ponente: Jorge Enrique Eden Wynter García. Relativo a la tesis XIV.P.A. J/3 (10a.), de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)." ..... T.C. 2766

Incidente de inejecución de sentencia 87/2014.—Ponente: Alfonso Bernabé Morales Arreola, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Relativo a la tesis XIX.1o.P.T. J/3 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA O NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA." ..... T.C. 2781

Amparo en revisión 9/2014.—Magistrado Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Relativo a la tesis XI.P. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO

	Clave	Pág.
DE AQUELLAS DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA, CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN."	T.C.	2792
Amparo directo 641/2013.—Magistrado Ponente: Juan José Franco Luna. Relativo a la tesis XVIII.4o. J/5 (10a.), de título y subtítulo: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	T.C.	2802
Amparo directo 7/2013.—Magistrado Ponente: Miguel Mendoza Montes. Relativo a la tesis VI.2o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)]."	T.C.	2838
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 100/2014.—Administradora Local Jurídica de Celaya, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Irapuato, y en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria.—Magistrado Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Relativa a la tesis XVI.1o.A. J/16 (10a.), de título y subtítulo: "VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."	T.C.	2854
Amparo en revisión 330/2014 (cuaderno auxiliar 746/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del		

Clave **Pág.**

Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.—Magistrado Ponente: Moisés Muñoz Padilla. Relativo a la tesis (III Región)4o.55 A (10a.), de título y subtítulo: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN) 4o.46 A (10a.)]." ..... T.C. 2945

Amparo directo 1646/2013.—Magistrado Ponente: Héctor Landa Razo. Relativo a la tesis I.13o.T.101 L (10a.), de título y subtítulo: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS." ..... T.C. 2973

Amparo en revisión 64/2014.—Magistrado Ponente: José Luis González. Relativo a la tesis III.2o.P.63 P (10a.), de título y subtítulo: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO." ..... T.C. 3050

Índice de Votos Particulares y Minoritarios

Pág.

Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas.—Contradicción de tesis 145/2013.—Entre las sustentadas por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis P./J. 46/2014 (10a.), de título y subtítulo: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CON MOTIVO DE UNA NOTIFICACIÓN ERRÓNEA DEL ACTUARIO JUDICIAL. CORRESPONDE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 8, Tomo I, julio de 2014, página 5..... 58

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 4/2014. César Octavio Camacho Quiroz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Su materia es inconstitucional, al aplicar no sólo una cuestión sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino un tema electoral."..... 330

Ministro Luis María Aguilar Morales.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 4/2014. César Octavio Camacho Quiroz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la modificación de la Constitución Política de los

Pág.

Estados Unidos Mexicanos para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Su materia es inconstitucional, al aplicar no sólo una cuestión sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino un tema electoral." 340

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 4/2014. César Octavio Camacho Quiroz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Su materia es inconstitucional, al aplicar no sólo una cuestión sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino un tema electoral." 341

Ministro Juan N. Silva Meza.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 4/2014. César Octavio Camacho Quiroz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se eliminen 100 de las 200 diputaciones federales plurinominales y las 32 senadurías plurinominales. Su materia es inconstitucional, al aplicar no sólo una cuestión sobre la conformación orgánica del Poder Legislativo Federal, sino un tema electoral." 344

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 372

Pág.

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 374

Ministro Luis María Aguilar Morales.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 407

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 409

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel

Pág.

López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 413

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 415

Ministro Juan N. Silva Meza.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 1/2014. Andrés Manuel López Obrador, Elena Poniatowska Amor, Claudia Sheinbaum Pardo, Javier Jiménez Espriú y Martí Batres Guadarrama. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, esto es, al otorgamiento de contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 436

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 3/2014. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados

Pág.

Unidos Mexicanos, en materia de petróleo y energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre de 2013. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 477

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 3/2014. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de petróleo y energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre de 2013. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado." 478

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 3/2014. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de petróleo y energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre de 2013. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado."..... 499

Ministro Juan N. Silva Meza.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 3/2014. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular referida a la reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de petróleo y energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 diciembre de 2013. Su materia es inconstitucional, al estar relacionada directamente con el concepto de ingresos del Estado."..... 502

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es

Pág.

inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del estado y restringir el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal." 519

Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del estado y restringir el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal." 522

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del estado y restringir el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal." 525

Ministro Juan N. Silva Meza.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del estado y restringir

Pág.

el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal." 533

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2/2014.—Gustavo Enrique Madero Muñoz. Relativo a la ejecutoria de tema: "Consulta popular relativa a la modificación de la Ley Federal del Trabajo para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga reglamentada su atribución de fijar un salario mínimo, ajustado a la línea de bienestar que establece el CONEVAL, para garantizar las necesidades de un trabajador y su familia. Su materia es inconstitucional, al referirse a los ingresos y gastos del estado y restringir el derecho humano social de los trabajadores, establecido en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo 2, de la Constitución Federal." 543

Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez.—Contradicción de tesis 5/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.III.C. J/1 K (10a.), de título y subtítulo: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)." 1247

Magistrado Martín Jesús García Monroy.—Contradicción de tesis 7/2014.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.VII J/4 C (10a.), de título y subtítulo: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." 1276

Pág.

Magistrado Martín Soto Ortiz.—Contradicción de tesis civil 7/2014.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.VII. J/4 C (10a.), de título y subtítulo: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." 1284

Magistrado Sergio Javier Coss Ramos.—Contradicción de tesis 4/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.IV.A. J/4 A (10a.) y PC.IV.A. J/3 A (10a.), de títulos y subtítulos: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA." y "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD." 1658

Magistrado Leonel Castillo González.—Contradicción de tesis 2/2014.—Entre el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.C. J/8 C (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE

Pág.

UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)." 1721

Magistrado Indalfer Infante Gonzales.—Contradicción de tesis 2/2014.—Entre el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.C. J/8 C (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)." 1722

Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González.—Contradicción de tesis 2/2014.—Entre el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.C. J/8 C (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)." 1726

Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González.—Contradicción de tesis 5/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Séptimo y Décimo Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.C. J/9 C (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA

Pág.

Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR." 1815

Magistrado José Antonio García Guillén.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1851

Magistrada Norma Lucía Piña Hernández.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1883

Magistrado Armando Cruz Espinosa.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1887

Pág.

Magistrados Carlos Ronzon Sevilla y Clementina Flores Suárez.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1889

Magistrado Gaspar Paulín Carmona.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1891

Magistrada Luz María Díaz Barriga.—Contradicción de tesis 25/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.A. J/31 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." 1902

Magistrados Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Casimiro Barrón Torres, Marco Antonio Bello Sánchez, Elías Álvarez Torres, Emilio González Santander y Ángel Ponce Peña.—Contradicción de tesis

Pág.

2/2014.—Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.L. J/8 L (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA." 1982

Magistrado Sergio Javier Coss Ramos.—Contradicción de tesis 2/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria de temas: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida." y "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, por lo que ve a su votación, no contiene violaciones formales trascendentales que invaliden su constitucionalidad." 2239

Magistrado Sergio Javier Coss Ramos.—Contradicción de tesis 3/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria de temas: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley

Pág.

de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida." y "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, por lo que ve a su votación, no contiene violaciones formales trascendentales que invaliden su constitucionalidad."..... 2403

Magistrado Sergio Javier Coss Ramos.—Contradicción de tesis 7/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria de tema: "Nóminas. El procedimiento legislativo que dio origen al Decreto Núm. 037, por el que se reforma el artículo 157 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial local el 31 de diciembre de 2012, que incrementa la tasa del impuesto relativo del 2% al 3%, no se infringió porque el dictamen relativo se circuló con la anticipación debida." 2536

Magistrada Claudia Mavel Curiel López.—Amparo en revisión 330/2014 (cuaderno auxiliar 746/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis (III Región)4o.55 A (10a.), de título y subtítulo: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)]."..... 2961

Pág.

Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara.—Amparo en revisión 330/2014 (cuaderno auxiliar 746/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis (III Región)4o.55 A (10a.), de título y subtítulo: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)]." 2963

Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos.—Amparo directo 1646/2013. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.13o.T.101 L (10a.), de título y subtítulo: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS." 2991

Magistrado Lorenzo Palma Hidalgo.—Amparo en revisión 64/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis III.2o.P.63 P (10a.), de título y subtítulo: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO." 3060

Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales

	Número de identificación	Pág.
Acción de inconstitucionalidad 58/2014.—Partido Acción Nacional.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativa a los temas: "Acción de inconstitucionalidad. Debe sobreseerse respecto del artículo 341 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, emitida mediante Decreto 198/2014, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el 28 de junio de 2014, al no haberse hecho valer conceptos de invalidez en su contra, ni advertirse otros que deban suplirse.", "Acción de inconstitucionalidad. La manifestación del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán en el sentido de que la promulgación y publicación del decreto que se le reclama, derivan del cumplimiento de las disposiciones jurídicas correspondientes, no actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." y "Acción de inconstitucionalidad. Procede su desestimación respecto del artículo 310, fracción II, párrafo quinto, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, emitida mediante Decreto 198/2014, publicado en el Diario Oficial de esa entidad el 28 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos."	P.	65
Controversia constitucional 21/2011.—Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativa a los temas: "Controversia constitucional. Debe sobreseerse en el juicio		

respecto de la autorización, por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de la impresión, adquisición, uso y cobro de formas valoradas y recibos oficiales sin la aprobación del Congreso Local y que correspondan a los referidos en el artículo 31, fracción XIV, de la Ley de Ingresos de la entidad para el ejercicio fiscal del año 2011, en tanto que su impugnación resultó extemporánea.", "Controversia constitucional. Debe sobreseerse en el juicio respecto de los artículos 31, fracción XIV y décimo transitorio, así como 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para los ejercicios fiscales de los años 2011 y 2012, respectivamente, al haber cesado sus efectos.", "Controversia constitucional. Es improcedente contra la omisión del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco de adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales para el ejercicio fiscal 2011, a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública de esa entidad y sus Municipios, en términos de la fracción VII del artículo 19 de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 105, fracción I, a contrario sensu, de la Constitución Federal.", "Controversia constitucional. Los actos realizados por un organismo descentralizado estatal no pueden considerarse como efectuados por el Poder Ejecutivo Local para efectos del primer acto de aplicación de una norma general que cause perjuicio a dicho Poder.", "Controversia constitucional. Oportunidad para impugnar omisiones del órgano demandado.", "Controversia constitucional. Para determinar la oportunidad de la demanda respectiva, cuando se alegue la inconstitucionalidad de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, éste debe acreditarse de manera fehaciente.", "Derecho de veto. La omisión de su ejercicio por parte del titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa en relación con una ley estatal que impugna en controversia constitucional, no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos.", "Fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Al haberse declarado la invalidez del artículo 51, párrafos primero y segundo, de la ley relativa, en vía de consecuencia, deben invalidarse los oficios sin número suscritos por el secretario general y el director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo, ambos del Congreso Estatal, dirigidos a la Secretaría de Finanzas, al Fondo de Seguridad Pública, al despacho del gobernador y a la Comisión de Adquisiciones, todos pertenecientes a esa entidad federativa, así como el oficio 0248/2011, suscrito por las mencionadas autoridades del Poder Legislativo, dirigido a la Secretaría de Administración local.", "Fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Efectos generales de la declaración de invalidez del artículo 51, párrafos primero y segundo, de la ley relativa.", "Fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo 51, párrafos primero y segundo, de la ley relativa, al establecer que las entidades fiscalizadas estatales y municipales deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en términos de ese ordenamiento, ante el Congreso Estatal y previo pago de los derechos previstos en la Ley de Ingresos del gobierno de la entidad, para el respectivo ejercicio fiscal, y que los ingresos generados por el pago indicado deberán ser remitidos íntegramente al mencionado órgano legislativo, no constituye una disposición propia del sistema tributario que rige en aquella localidad.", "Fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo 51, párrafos primero y segundo, de la ley relativa, al prever que las entidades fiscalizadas estatales y municipales deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en términos de ese ordenamiento, ante el Congreso Estatal y previo pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del gobierno de la entidad, para el respectivo ejercicio fiscal, y que los ingresos generados por el pago indicado deberán

	Número de identificación	Pág.
ser remitidos íntegramente al mencionado órgano legislativo, viola el principio de división de poderes, por contravención a los de no intromisión, no dependencia y no subordinación." y "Fiscalización superior y auditoría pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El artículo 51, párrafos primero y segundo, de la ley relativa, al señalar que las entidades fiscalizadas estatales y municipales deberán adquirir las formas valoradas y recibos para cobros de ingresos de las haciendas públicas estatal y municipales, en términos de ese ordenamiento, ante el Congreso Estatal y previo pago de los derechos previstos en la Ley de Ingresos del gobierno de la entidad, para el respectivo ejercicio fiscal, y que los ingresos generados por el pago indicado deberán ser remitidos íntegramente al mencionado órgano legislativo, transgrede el principio de destino al gasto público."	P.	83

Controversia constitucional 23/2013.—Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.—Ministro Ponente: Luis María Aguilar Morales. Relativa a los temas: "Controversia constitucional. Debe sobreseerse en el juicio respecto del artículo 51, párrafos primero y segundo, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en tanto que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inválido en la sentencia dictada en la controversia constitucional 21/2011 y, por ende, cesaron sus efectos.", "Derecho de veto. La omisión de su ejercicio por parte del titular del Poder Ejecutivo de una entidad federativa en relación con una ley estatal que impugna en controversia constitucional, no actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", "Fiscalización del gasto público en el Estado de Jalisco y sus Municipios. Al haberse declarado la invalidez del artículo 51, párrafos primero y segundo, de la Ley de Fiscalización Superior y Auditoría Pública de la entidad y sus Municipios, en la controversia constitucional 21/2011, procede

	Número de identificación	Pág.
declarar inválidos los artículos 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de esa entidad para el ejercicio fiscal del año 2013, que prevén, respectivamente, las tarifas de pago por las formas valoradas y los recibos de cobro que deben adquirir las entidades fiscalizadas, y la obligación del Poder Ejecutivo Local de transferir mensualmente, antes del día 15 de cada mes al Congreso Estatal, los ingresos que perciba por dichos conceptos." e "Ingresos del Estado de Jalisco. Efectos generales de la declaración de invalidez de los artículos 38, fracción X y décimo tercero transitorio de la Ley de Ingresos de esa entidad para el ejercicio fiscal del año 2013."	P.	174

Acción de inconstitucionalidad 21/2013.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa a los temas: "Delincuencia organizada. El artículo 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 080, publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, en la porción normativa que señala 'delincuencia organizada', invade la esfera de atribuciones reservadas al Congreso de la Unión.", "Delincuencia organizada. El Congreso de la Unión, al reformar diversas disposiciones de la ley relativa, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 23 de enero de 2009, ejerció la facultad que le fue conferida para legislar en esa materia, en términos del artículo sexto transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el mismo medio de difusión oficial el 18 de junio de 2008.", "Ejecución de las sanciones penales en el Estado de Nuevo León. El artículo 26, párrafo cuarto, de la ley que la regula en esa entidad, reformado mediante Decreto Núm. 080 publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, en la porción normativa que dice 'deberá restringir las comunicaciones de los imputados o condenados con terceros,

salvo el acceso de su defensor. También', vulnera los principios de reinserción social y pro persona.", "Prisión preventiva. Debe declararse la invalidez del artículo 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 080, publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, en las porciones normativas que señalan: 'rebelión en todas sus modalidades; terrorismo; y agrupación delictuosa; contra la seguridad de la comunidad, a que se refiere el artículo 165 bis ...' y '... parricidio; privación ilegal de la libertad a que se refiere los artículos 354, 355 y 355 bis; y robo cometido por métodos violentos, previstos en el Código Penal para el Estado de Nuevo León ...', al no preverse aquella medida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para esos delitos.", "Prisión preventiva. El artículo 171, párrafo último, del Código Procesal Penal para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 080, publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, al establecer que tratándose de otros delitos, podrá aplicarse esa figura u otras medidas cautelares, siempre que resulten procedentes de conformidad con las disposiciones del título relativo, es constitucional.", "Procedimiento penal en el Estado de Nuevo León. Debe declararse la invalidez, con efectos retroactivos, de los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales y 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal, en las porciones normativas relativas, así como del numeral 275 bis del Código de Procedimientos Penales, todos de esa entidad, reformados mediante Decreto Núm. 080 publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013.", "Secuestro y trata de personas en el Estado de Nuevo León. Los artículos 26, párrafo cuarto, de la Ley que Regula la Ejecución de las Sanciones Penales, 171, párrafo penúltimo, del Código Procesal Penal y 275 bis, párrafo primero, del Código de Procedimientos Penales, todos de esa entidad, reformados mediante Decreto Núm. 080, publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, en las porciones normativas que indican, respectivamente,

	Número de identificación	Pág.
'... así como de los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos ...'; '... además los delitos establecidos en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos ...' e '... y en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos ...', invaden la esfera de atribuciones reservadas al Congreso de la Unión." y "Testigos protegidos. El artículo 275 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Nuevo León, reformado mediante Decreto Núm. 080, publicado en el Periódico Oficial Local el 10 de julio de 2013, al regular la prueba de ADN como método de identificación de aquéllos para preservar su identidad, es inconstitucional."	P.	229

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes del Consejo de la Judicatura Federal

Pág.

Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales. 3073

Acuerdo General 37/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones del similar 6/2009, que establece las bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3098

Acuerdo General 43/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funcionamiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, Guerrero; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Colegiados de las mismas materias y sede. 3112

Acuerdo General 44/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones relativas a los expedientes personales de los servidores públicos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 3117

Acuerdo General 45/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga diversas disposiciones del similar por

Pág.

el que se otorga y regula la prestación del Fondo de Reserva Individualizado bajo el esquema de Fondo de Ahorro para el personal de nivel operativo de los órganos jurisdiccionales federales y del Consejo de la Judicatura Federal. 3127

Acuerdo General 46/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales del Poder Judicial de la Federación. 3132

Acuerdo General 49/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la Oficina de Correspondencia Común en Xalapa y cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de Boca del Río, en el mismo Estado. 3135

Acuerdo General 51/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. 3142

Acuerdo General 52/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango. 3151

Acuerdo General 53/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 3159

Acuerdo General 54/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, y que reforma el diverso 18/2008

Pág.

por el que se crea el propio Centro Auxiliar, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán. 3163

Acuerdo CCNO/23/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Tercero, Cuarto, Noveno y Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal. 3167

Acuerdo CCNO/24/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al periodo de exclusión del turno de nuevos asuntos a los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en Querétaro. 3169

Acuerdo CCNO/25/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3173

Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de ocho de octubre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiocho de mayo de dos mil catorce, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 29/2012, interpuesto por el licenciado José Guadalupe Arias Ortega. 3175

Aviso de la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintidós de octubre de dos mil catorce, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de agosto de dos mil catorce, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de revisión administrativa 76/2013, interpuesto por el licenciado Edgar Salvador Vargas Valle. 3177

Incorporación a las Comisiones Permanentes del Consejo de la Judicatura Federal de la consejera Martha María del Carmen Hernández Álvarez. 3178

Pág.

Lista de vencedores en el Primer Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito Especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio. 3179

Lista de Vencedores en el Vigésimo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito de Competencia Mixta. 3182

Manual de Organización y Puestos, Centro de Justicia Penal. 3185

Manual de Procesos y Procedimientos Administrativos, Centro de Justicia Penal. 3275

Índice de Normativa y Acuerdos Generales Conjuntos

Pág.

Declaratoria del seis de noviembre de dos mil catorce sobre la fecha a partir de la cual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación las partes tendrán acceso a los expedientes electrónicos, podrán promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. 3353

Los índices en Materia Constitucional, en Materia Penal, en Materia Administrativa, en Materia Civil, en Materia Laboral, en Materia Común, de Jurisprudencia por Contradicción, de Ordenamientos, así como la Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas correspondientes a las tesis publicadas en esta *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* son consultables en la Gaceta Electrónica.

OCTAVA PARTE

SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CUYA PUBLICACIÓN NO ES OBLIGATORIA
Y LOS VOTOS RESPECTIVOS

NOVENA PARTE

SENTENCIAS RELEVANTES DICTADAS POR OTROS TRIBUNALES, PREVIO ACUERDO DEL PLENO O DE ALGUNA DE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DÉCIMA PARTE
OTROS ÍNDICES

Índice en Materia Constitucional

	Número de identificación	Pág.
ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE -POR LA RAZÓN QUE SEA- EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO.	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO		

	Número de identificación	Pág.
PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA.	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO "DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO" A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCU-		

	Número de identificación	Pág.
LO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACIÓN SI EL ESTADO RECEPTOR NOTIFICA A OTRO SOBRE LA DETENCIÓN DE UNO DE SUS NACIONALES, NO OBSTANTE QUE EL ESTADO NOTIFICADO DECIDA NO ASISTIR A LA PERSONA DETENIDA.	1a. CDII/2014 (10a.)	713
COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO		

	Número de identificación	Pág.
Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.	I.8o.A.81 A (10a.)	2917
DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).	I.9o.P.69 P (10a.)	2928
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P.67 P (10a.)	2931

	Número de identificación	Pág.
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO.	2a. CIX/2014 (10a.)	1190
DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.	1a. CDV/2014 (10a.)	714
DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA.	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*.	I.3o.P.20 P (10a.)	2935
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.	2a./J. 120/2014 (10a.)	924

	Número de identificación	Pág.
FE DE ERRATAS. CUANDO TIENE POR OBJETO LA CORRECCIÓN DE PRECEPTOS CONTENIDOS EN UN REGLAMENTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, NO AMERITA EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DISTINTA DE LA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.50 A (10a.)	2941
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL.	1a. CD/2014 (10a.)	716
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO.	1a. CDI/2014 (10a.)	717
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)].	(III Región)4o.55 A (10a.)	2963
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD.	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS		

	Número de identificación	Pág.
PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL.	1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)	720
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL.	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764

	Número de identificación	Pág.
ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL.	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA.	PC.IV.A. J/4 A (10a.)	1664
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD.	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR DE LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD. LA AUTORIDAD NO PUEDE TOMAR EN CUENTA ELEMENTOS DE ALEGADA PERTENENCIA NACIONAL PARA NEGAR AQUEL DERECHO HUMANO.	1a. CDIV/2014 (10a.)	723
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A		

	Número de identificación	Pág.
LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD.	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO).	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO.	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726

	Número de identificación	Pág.
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO.	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL.	1a. CCCLXXXI/2014 (10a.)	728
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123,		

	Número de identificación	Pág.
APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LA CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.	1a. CCCXC/2014 (10a.)	729
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO.	2a. CVIII/2014 (10a.)	1192
SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CDXI/2014 (10a.)	731
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE SEGUIDO CUANDO LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES VOTAN EN CONTRA DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDIX/2014 (10a.)	734

	Número de identificación	Pág.
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA APERTURA Y TRANSPARENCIA QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ÉSTAS, DEBE SER COMPATIBLE CON LA EXIGENCIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVI/2014 (10a.)	736
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES.	IV.2o.A.2 CS (10a.)	3035
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS.	IV.2o.A.1 CS (10a.)	3037
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.	1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.)	741
TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL		

	Número de identificación	Pág.
RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA.	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882

Índice en Materia Penal

	Número de identificación	Pág.
ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
AMPARO EN REVISIÓN. EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL A LAS VÍCTIMAS O PARTE OFENDIDA DEL DELITO.	1a. CDXII/2014 (10a.)	706
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS.	II.1o.12 P (10a.)	2904
AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA).	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906

	Número de identificación	Pág.
AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA.	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO.	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. SUPUESTO EN EL QUE ES INAPLICABLE PARA DESCONOCER LA VERSIÓN DEFENSIVA DEL IMPUTADO Y DEBE VALORARSE DE MANERA QUE COMPRENDA ASPECTOS QUE LE FAVOREZCAN.	II.2o.P.30 P (10a.)	2915
CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACIÓN SI EL ESTADO RECEPTOR NOTIFICA A OTRO SOBRE LA DETENCIÓN DE UNO DE SUS NACIONALES, NO OBSTANTE QUE EL ESTADO NOTIFICADO DECIDA NO ASISTIR A LA PERSONA DETENIDA.	1a. CDII/2014 (10a.)	713
DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ACTUALIZA NO SÓLO CON LA ORGANIZACIÓN DE TRES		

	Número de identificación	Pág.
O MÁS PERSONAS PARA COMETER ILÍCITOS, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE LOS ELEMENTOS CONSISTENTES EN LA REPETICIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN FORMA PERMANENTE O REITERADA.	VI.1o.P.25 P (10a.)	2924
DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/4 (10a.)	2708
DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/7 (10a.)	2709
DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711
DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA.	XXVII.3o. J/6 (10a.)	2712
DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).	I.9o.P.69 P (10a.)	2928

	Número de identificación	Pág.
DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD.	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*.	I.3o.P.20 P (10a.)	2935

	Número de identificación	Pág.
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL.	1a. CD/2014 (10a.)	716
FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO.	1a. CDI/2014 (10a.)	717
IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL QUERELLANTE. SI AL CONOCER DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROMOVIDO CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL PROCURADOR ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO SE ASEGURÓ DE AQUÉLLAS, DEBE DEVOLVERLE LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA Y, DE SER NECESARIO, REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS ACREDITEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.1o.P.16 P (10a.)	2967
IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL.	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NOR-		

	Número de identificación	Pág.
MATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA "LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO", ES INCONVENCIONAL.	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).	XIV.P.A. J/3 (10a.)	2780
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR DE LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD. LA AUTORIDAD NO PUEDE TOMAR EN CUENTA ELEMENTOS DE ALEGADA PERTENENCIA NACIONAL PARA NEGAR AQUEL DERECHO HUMANO.	1a. CDIV/2014 (10a.)	723
NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD.	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.	XXVII.3o. J/3 (10a.)	2713
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.	1a./J. 71/2014 (9a.)	585

	Número de identificación	Pág.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE INTERPRETARSE DE CONFORMIDAD CON AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL.	1a. CCCLXXXI/2014 (10a.)	728
PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES.	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. EL GRADO DE PUNICIÓN EN QUE SE UBICA AL SENTENCIADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA A SU PAGO, NO ESTÁ LIGADO CON EL GRADO DE CULPABILIDAD PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).	II.3o.P.40 P (10a.)	3028
RESTITUCIÓN DEL BIEN INDEBIDO, EN TRATÁNDOSE DEL DELITO ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN.	I.3o.P.21 P (10a.)	3029
SENTENCIAS PENALES DEFINITIVAS. LA EJECUCIÓN, RESPECTO DE AQUELLAS DICTADAS POR JUECES MENORES O DE PRIMERA INSTANCIA, CORRESPONDE A LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE MICHOACÁN.	XI.P. J/1 (10a.)	2800
SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO.		

	Número de identificación	Pág.
DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.	I.6o.P.60 P (10a.)	3038
TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA.	1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.)	741
TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO.	III.2o.P.63 P (10a.)	3065

Índice en Materia Administrativa

	Número de identificación	Pág.
ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS.	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME		

	Número de identificación	Pág.
A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO.	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.	I.9o.A.61 A (10a.)	2903
BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA.	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES		

	Número de identificación	Pág.
PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA.	2a./J. 127/2014 (10a.)	849
CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).	2a./J. 95/2014 (10a.)	1069
COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO "DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO" A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL.	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR LOS METROS CÚBICOS DE AGUA SUSTRAÍDA DEL SUBSUELO, LO ES EL FORMATO 10-A, AUTORIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	IV.1o.A.28 A (10a.)	2913
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA.	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709

	Número de identificación	Pág.
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA.	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA.	I.8o.A.81 A (10a.)	2917
DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	I.8o.A.79 A (10a.)	2928

	Número de identificación	Pág.
ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).	XVI.1o.A.47 A (10a.)	2936
EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA VIGENCIA DE UN AÑO INHERENTE AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA EL CASO EN QUE EL ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO OBTENGA EL RESULTADO "NO CUMPLE", TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS PERSONAS QUE PRETENDAN PERMANECER EN LA POLICÍA FEDERAL.	I.15o.A.9 A (10a.)	2937
EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA.	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939

	Número de identificación	Pág.
FE DE ERRATAS. CUANDO TIENE POR OBJETO LA CORRECCIÓN DE PRECEPTOS CONTENIDOS EN UN REGLAMENTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO, NO AMERITA EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DISTINTA DE LA DE AQUÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.50 A (10a.)	2941
HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)].	(III Región)4o.55 A (10a.)	2963
IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
LITIS ABIERTA. ESTE PRINCIPIO PERMITE AL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO		

	Número de identificación	Pág.
FEDERAL FORMULAR CONCEPTOS DE NULIDAD SOBRE ASPECTOS QUE NO HIZO VALER EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA E, INCLUSO, PARA EVIDENCIAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN SU PERJUICIO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ÉSTE, LOS CUALES DEBEN ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA.	I.8o.A.83 A (10a.)	3000
NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA.	(III Región)4o.52 A (10a.)	3001
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA.	PC.IV.A. J/4 A (10a.)	1664
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD.	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA		

	Número de identificación	Pág.
REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES.	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE ENTIENDE CON UN TERCERO, EN EL CITATORIO PREVIO Y EN EL ACTA RELATIVA DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES QUE DEN PRECISIÓN Y CLARIDAD RESPECTO AL VÍNCULO QUE UNE A AQUÉL CON EL CONTRIBUYENTE Y ESPECIFICAR LAS RAZONES QUE ASEGUREN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO POR CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES, ASÍ COMO SUSTENTAR LA UBICACIÓN DE ÉSTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLEMENTE IDENTIFICABLES.	**CANCELADA** II.3o.A.1 A (10a.)	3002
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO).	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO SU MONTO SE INTEGRA CON LO COTIZADO EN DOS PLAZAS DISTINTAS, SU INCREMENTO DEBE CALCULARSE CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES AL MOMENTO		

	Número de identificación	Pág.
DE LA OBTENCIÓN DE LA RELATIVA A LA PLAZA MÁS ANTIGUA, SI ES LO QUE MÁS BENEFICIA AL TRABAJADOR O A SUS FAMILIARES (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA).	I.9o.A.60 A (10a.)	3012
PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO.	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LA CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS.	1a. CCCXC/2014 (10a.)	729
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR		

	Número de identificación	Pág.
DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)1o.3 A (10a.)	3014
PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.	PC.I.A. J/30 A (10a.)	1698
PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS NECESARIAS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO DEL QUEJOSO CUANDO PROMUEVE EL JUICIO POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, EN CONTRA DE LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, QUIEN ES SU CÓNYUGE Y MADRE DE AQUÉLLOS.	(IV Región)1o.4 A (10a.)	3018
RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO		

	Número de identificación	Pág.
DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA.	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA.	I.8o.A.80 A (10a.)	3027
REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO.	I.8o.A.82 A (10a.)	3030
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA.	XIV.P.A.2 A (10a.)	3031
SINIESTROS AÉREOS. EL CONVENIO DE CHICAGO Y SU ANEXO 13, TITULADO "INVESTIGACIÓN DE		

	Número de identificación	Pág.
ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN", NO SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO EN LA INDAGACIÓN DE AQUELLOS EN LOS QUE INTERVIENEN AERONAVES DEL ESTADO QUE CUMPLEN UN SERVICIO DE POLICÍA.	1a. CCCXCIII/2014 (10a.)	739
SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO.	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949

	Número de identificación	Pág.
TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE.	I.4o.A.98 A (10a.)	3066
VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO.	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882

Índice en Materia Civil

	Número de identificación	Pág.
ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL.	VII.2o.C.78 C (10a.)	2897
ALIMENTOS. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA MATERIA DEBEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO, AUNQUE PROCEDA ALGÚN RECURSO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.21 C (10a.)	2898
ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899

	Número de identificación	Pág.
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO.	1a. CCCXCVI/2014 (10a.)	706
CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA.	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA, VENCIDO PERO PRORROGABLE AUTOMÁTICA E INDEFINIDAMENTE. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO, CUANDO NO ACREDITA LA POSESIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE RESPECTIVO, QUE CONDICIONA LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA.	VI.2o.C.55 C (10a.)	2915
CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO.	I.6o.C.42 C (10a.)	2916
COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME		

	Número de identificación	Pág.
DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA.	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715
FIDEICOMISO. SI EL PATRIMONIO QUE INGRESA A ÉSTE PROVIENE DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL (INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), DEJA DE TENER SU TITULARIDAD EL FIDEICOMITENTE, POR LO QUE DE CONCEDÉRSELE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).	VII.2o.C.73 C (10a.)	2942
FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR.	1a. CCCXCVII/2014 (10a.)	718
GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO).	II.1o.C.11 C (10a.)	2968

	Número de identificación	Pág.
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.	PC.III.C. J/2 C (10a.)	1339
JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	II.1o.16 C (10a.)	2995
NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO).	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
PENSIÓN COMPENSATORIA. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA ES DE NATURALEZA DISTINTA A LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA QUE SURGE DE LAS RELACIONES DE MATRIMONIO, PUES EL PRESUPUESTO BÁSICO PARA SU PROCEDENCIA CONSISTE EN LA EXISTENCIA DE UN DESEQUILIBRIO ECONÓMICO.	1a. CCCLXXXVII/2014 (10a.)	725

	Número de identificación	Pág.
PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN).	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO.	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL PRECEDENTE** VI.1o.C.50 C	3020
RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA DEMANDA INICIAL Y SUS ANEXOS. AL CONSTITUIR UN ACTO DECLARATIVO QUE CONLLEVA UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.	I.6o.C.40 C (10a.)	3029
SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR.	PC.I.C. J/9 C (10a.)	1816

Índice en Materia Laboral

	Número de identificación	Pág.
ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER.	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887
COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA.	III.3o.T.29 L (10a.)	2921

	Número de identificación	Pág.
DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL.	III.3o.T.28 L (10a.)	2922
ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL QUE IMPERA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA, NO INFLUYE PARA LA CALIFICACIÓN DE UN PADECIMIENTO DE ESE ORDEN.	I.6o.T.116 L (10a.)	2936
GARANTÍA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. FORMA DE CALCULARLA CUANDO SÓLO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS Y EXISTE UNA CANTIDAD LÍQUIDA.	VI.2o.T.5 L (10a.)	2943
HORAS EXTRAS. SON INVEROSÍMILES CUANDO SU RECLAMO SE BASA EN EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR NO CONTÓ CON TIEMPO PARA LA INGESTA DE ALIMENTOS, SIN PRECISAR EL HORARIO EN QUE DEBÍA CUBRIRSE ESTA NECESIDAD.	(VIII Región)2o.6 L (10a.)	2964
INFONAVIT. ESTÁ FACULTADO PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SIN NECESIDAD DE PREVIA TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.	III.4o.T.23 L (10a.)	2971
INSPECCIÓN. CUÁNDO SU OFRECIMIENTO NO ES INDIVIDUALIZADO.	**REPUBLICADA POR ADICIÓN DE NOTA SOBRE OBLIGATORIEDAD** I.7o.T.12 L (10a.)	2972

	Número de identificación	Pág.
INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS.	I.13o.T.101 L (10a.)	2993
ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL.	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
LAUDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE VALIDEZ SI SON FIRMADOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL NO TENER DICHO FUNCIONARIO FE PÚBLICA NI HABER SIDO DESIGNADO PARA SUPLIR LA AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DE LA SALA RESPECTIVA.	I.13o.T.109 L (10a.)	2999
NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO.	I.6o.T.119 L (10a.)	3001
OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 48 HORAS.	VI.2o.T.3 L (10a.)	3009
PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE		

	Número de identificación	Pág.
DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA EXCEPCIÓN OPUESTA POR EL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, FUNDADA EN LA FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJADOR, ES IMPROCEDENTE SI SE VINCULA A LA FECHA EN QUE SE REALIZA SU RECLAMO.	III.4o.T.25 L (10a.)	3011
PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO SU MONTO SE INTEGRA CON LO COTIZADO EN DOS PLAZAS DISTINTAS, SU INCREMENTO DEBE CALCULARSE CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA OBTENCIÓN DE LA RELATIVA A LA PLAZA MÁS ANTIGUA, SI ES LO QUE MÁS BENEFICIA AL TRABAJADOR O A SUS FAMILIARES (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA).	I.9o.A.60 A (10a.)	3012
PETRÓLEOS MEXICANOS. LA CORRIDA ESCALAFONARIA ES IMPROCEDENTE SI LA DEMANDADA PRUEBA QUE LEGALMENTE PACTÓ CON EL SINDICATO LA CANCELACIÓN DE LA PLAZA RECLAMADA.	I.6o.T.114 L (10a.)	3014
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV,		

	Número de identificación	Pág.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE SU DESAHOGO POR OFICIO SI SE OFRECE A CARGO DEL DIRECTOR DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PUEBLA, POR NO TENER ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS EL CARÁCTER DE ALTOS FUNCIONARIOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.2o.T.4 L (10a.)	3016
RELACIÓN DE TRABAJO. LA CARTA PODER OTORGADA POR EL DEMANDADO AL ACTOR, QUE CONTIENE UN RECONOCIMIENTO EXPRESO DE QUE ÉSTE ES SU TRABAJADOR Y QUE LABORA EN EL DOMICILIO SEÑALADO COMO EL DE LA FUENTE DE PRODUCCIÓN, ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DICHO VÍNCULO ENTRE AMBOS.	III.4o.T.24 L (10a.)	3026
SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN.	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033
TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA		

	Número de identificación	Pág.
A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO.	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049
TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006).	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER QUIENES NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL SIEMPRE QUE SUS FUNCIONES SEAN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y ESTÉN VINCULADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL.	I.6o.T.117 L (10a.)	3050
TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA.	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL PERSONAL TÉCNICO ACADÉMICO QUE LABORA POR CONTRATO SÓLO PUEDE ADQUIRIR SU DEFINITIVIDAD MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO Y DESPUÉS DE TRES AÑOS ININTERRUMPIDOS CON NOMBRAMIENTO INTERINO SOMETERSE A UN CONCURSO CERRADO.	2a. CXI/2014 (10a.)	1193

	Número de identificación	Pág.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO.	2a. CX/2014 (10a.)	1193

Índice en Materia Común

	Número de identificación	Pág.
ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	VII.2o.C.20 K (10a.)	2888
ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA.	VI.2o.C.19 K (10a.)	2890
ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS.	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE		

	Número de identificación	Pág.
ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL.	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN LA DESAPLICACIÓN DE UNA RESTRICCIÓN, PROHIBICIÓN, LIMITACIÓN O EXCEPCIÓN CONSTITUCIONAL, CON APOYO EN UNA DISPOSICIÓN DE CARÁCTER CONVENCIONAL.	2a./J. 119/2014 (10a.)	768
AMPARO ADHESIVO. ELEMENTOS QUE DETERMINAN SU PROCEDENCIA.	1a. CDXIII/2014 (10a.)	705
AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA "SENTENCIA FAVORABLE", ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO.	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. CUANDO SE DESECHA POR IMPROCEDENTE NO OPERA EL CRITERIO SOSTENIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 39/2011, DE RUBRO: "AMPARO DIRECTO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA DEBE DEJARSE INSUBSISTENTE."(*).	2a./J. 126/2014 (10a.)	803
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO SÓLO SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL		

	Número de identificación	Pág.
COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE ANALIZAR, DE MANERA OFICIOSA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ES PARTE EL ESTADO MEXICANO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO.	2a./J. 124/2014 (10a.)	815
AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA POR MATERIA Y PONE FIN AL JUICIO SIN DECIDIRLO EN LO PRINCIPAL.	II.1o.5 K (10a.)	2902
AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN.	I.9o.A.61 A (10a.)	2903
AMPARO EN REVISIÓN. EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL A LAS VÍCTIMAS O PARTE OFENDIDA DEL DELITO.	1a. CDXII/2014 (10a.)	706
AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS.	II.1o.12 P (10a.)	2904
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO.	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904

	Número de identificación	Pág.
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO.	VI.2o.T. J/2 (10a.)	2579
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN SERVIDOR O FUNCIONARIO PÚBLICO NO HAYA EXPEDIDO LAS COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HAYA SOLICITADO PREVIAMENTE, ÉSTE PODRÁ PEDIR AL JUEZ DE DISTRITO QUE REQUIERA A LOS OMISOS, ASÍ COMO EL DIFERIMIENTO DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA PETICIÓN SE HAGA CON LA ANTICIPACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 121 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE.	I.6o.T.13 K (10a.)	2905
AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE		

	Número de identificación	Pág.
LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).	2a./J. 95/2014 (10a.)	1069
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO.	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.	P./J. 52/2014 (10a.)	23
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA, VENCIDO PERO PRORROGABLE AUTOMÁTICA E INDEFINIDAMENTE. ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL TERCERO EXTRAÑO, CUANDO NO ACREDITA LA POSESIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE RESPECTIVO, QUE CONDICIONA LA VIGENCIA DE LA PRÓRROGA.	VI.2o.C.55 C (10a.)	2915
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.	2a./J. 123/2014 (10a.)	859
CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONS-		

	Número de identificación	Pág.
TITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO.	I.6o.C.42 C (10a.)	2916
COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO "NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL" NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR.	1a. CCCXCIX/2014 (10a.)	713
CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS.	IV.2o.A.76 K (10a.)	2918
CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 59/2014 (10a.)	5
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 60/2014 (10a.)	7
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VALORAR LA		

	Número de identificación	Pág.
LEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 61/2014 (10a.)	9
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	P./J. 58/2014 (10a.)	11
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO.	P./J. 56/2014 (10a.)	13
CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN.	P./J. 57/2014 (10a.)	16
DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.	(III Región)4o.19 K (10a.)	2922
DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO		

	Número de identificación	Pág.
RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO.	I.5o.P. J/2 (10a.)	2725
DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO.	I.5o.P.5 K (10a.)	2927
EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD. JURISPRUDENCIA APLICABLE CONFORME A LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME TAL CUESTIÓN.	(IX Región)1o.2 K (10a.)	2938
EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA.	(VIII Región)2o. J/1 (10a.)	2737
FIDEICOMISO. SI EL PATRIMONIO QUE INGRESA A ÉSTE PROVIENE DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL (INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), DEJA DE TENER SU TITULARIDAD EL FIDEICOMITENTE, POR LO QUE DE CONCEDÉRSELE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).	VII.2o.C.73 C (10a.)	2942

	Número de identificación	Pág.
GARANTÍA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. FORMA DE CALCULARLA CUANDO SÓLO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS Y EXISTE UNA CANTIDAD LÍQUIDA.	VI.2o.T.5 L (10a.)	2943
IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL.	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.	P./J. 51/2014 (10a.)	24
INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.	P./J. 55/2014 (10a.)	18
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA, CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORI-		

	Número de identificación	Pág.
DADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, NO OBSTANTE QUE SE HUBIESE DICTADO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ÉL.	XVII.1o.C.T.27 K (10a.)	2970
INFORME JUSTIFICADO. COMPLEMENTACIÓN DEL. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER OMISIVO.	I.18o.A.3 K (10a.)	2972
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).	P./J. 50/2014 (10a.)	60
JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES.	II.1o.16 C (10a.)	2995
JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO).	I.3o.C.54 K (10a.)	2995
LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA		

	Número de identificación	Pág.
O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO.	2a./J. 105/2014 (10a.)	1106
NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO.	I.6o.T.119 L (10a.)	3001
NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO.	XXVII.3o. J/3 (10a.)	2713
NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
NULIDAD DE NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE).	III.1o.C.6 K (10a.)	3006
PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO.	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726
PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.	P./J. 54/2014 (10a.)	19
PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO		

	Número de identificación	Pág.
INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).	(IV Región)1o.3 A (10a.)	3014
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.	P./J. 53/2014 (10a.)	61
PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS NECESARIAS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO DEL QUEJOSO CUANDO PROMUEVE EL JUICIO POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, EN CONTRA DE LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, QUIEN ES SU CÓNYUGE Y MADRE DE AQUÉLLOS.	(IV Región)1o.4 A (10a.)	3018
QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO.	XXVII.3o.65 K (10a.)	3023

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO.	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO SINO SÓLO CONTRA AQUÉLLA QUE LA DECLARA SIN MATERIA O INFUNDADA.	1a. CCCLXXXVI/2014 (10a.)	730
RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.	1a./J. 70/2014 (10a.)	640
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN.	1a./J. 69/2014 (10a.)	658
RESOLUCIÓN QUE SOBRESEE EN UN JUICIO ORDINARIO MERCANTIL Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA DEMANDA INICIAL Y SUS ANEXOS. AL CONSTITUIR UN ACTO DECLARATIVO QUE CONLLEVA UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN, PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.	I.6o.C.40 C (10a.)	3029
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DE-		

	Número de identificación	Pág.
RECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO.	2a./J. 122/2014 (10a.)	1039
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS.	1a. CCCLXXXII/2014 (10a.)	730
SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA.	XIX.1o.P.T. J/3 (10a.)	2790
SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.	1a. CDXI/2014 (10a.)	731
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EL TIEMPO Y ESTILO DE DISCUSIÓN DE CADA ASUNTO RESPONDEN A UNA DINÁMICA ADQUIRIDA POR LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVII/2014 (10a.)	733
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES CONSTITUCIONAL EL		

	Número de identificación	Pág.
TRÁMITE SEGUIDO CUANDO LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES VOTAN EN CONTRA DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDIX/2014 (10a.)	734
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA APERTURA Y TRANSPARENCIA QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ÉSTAS, DEBE SER COMPATIBLE CON LA EXIGENCIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVI/2014 (10a.)	736
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SON ESPACIOS DE DELIBERACIÓN POLÍTICA SINO PROCESOS DE DEBATE JURÍDICO ENTRE MAGISTRADOS CUYO OBJETIVO FINAL ES LA EMISIÓN DE SENTENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDVIII/2014 (10a.)	737
SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON INSTRUMENTALES PARA LA EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO).	1a. CDX/2014 (10a.)	738
SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR DIVERSIDAD DE ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE REVOCARLO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE POR UNO DE ELLOS NO SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA.	I.5o.P.6 K (10a.)	3035
SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO.	I.6o.P.60 P (10a.)	3038
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA.	VII.2o.C.19 K (10a.)	3038
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR.	PC.I.C. J/9 C (10a.)	1816
SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER *EX OFFICIO* DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO.	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** I.3o.C.47 K (10a.)	3040
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO SÓLO TIENE VIGENCIA HASTA ANTES DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE INICIADO ÉSTE, AQUÉLLA		

	Número de identificación	Pág.
PODRÁ CONCEDERSE Y SURTIRÁ EFECTOS SI SE CONSTITUYE GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA.	III.4o.T.9 K (10a.)	3040
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD.	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO.	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. SI EL PROCESO SE TRAMITA Y CONCLUYE CONFORME AL SISTEMA		

	Número de identificación	Pág.
PENAL ANTERIOR, EL INCIDENTE RELATIVO DEBE REGIRSE POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013.	II.2o.P.13 K (10a.)	3044
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO.	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949
TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS", CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO.	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049

	Número de identificación	Pág.
VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)].	VI.2o.T. J/1 (10a.)	2852

Índice de Jurisprudencia por Contradicción

	Número de identificación	Pág.
ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN.	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Contradicción de tesis 209/2014. Entre las sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 10 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.		
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
Contradicción de tesis 1/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Vigésimo Noveno Circuito. 27 de octubre de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados presidente Aníbal Lafragua Contreras, Elsa Hernández Villegas, Miguel Vélez Martínez, José		

	Número de identificación	Pág.
Guadalupe Sánchez González y Guillermo Arturo Medel García. Ponente: José Guadalupe Sánchez González. Secretaria: Irma Ramírez Rivera.		
AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA).	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Contradicción de tesis 5/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 12 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Eduardo Francisco Núñez Gaytán, Carlos Manuel Bautista Soto, Martha Leticia Muro Arellano y Gustavo Alcaraz Núñez. Disidente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Ponente: Carlos Manuel Bautista Soto. Secretario: Antonio López Rentería.		
CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013).	2a./J. 95/2014 (10a.)	1069
Contradicción de tesis 149/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 de agosto de 2014. Cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente:		

	Número de identificación	Pág.
Alberto Pérez Dayán. Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.		
COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO.	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
Contradicción de tesis 406/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito. 27 de agosto de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.		
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN.	P./J. 52/2014 (10a.)	23
Contradicción de tesis 467/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la		

	Número de identificación	Pág.
Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 2 de junio de 2014. Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Yaremy Patricia Penagos Ruiz.		
GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
Contradicción de tesis 7/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 29 de septiembre de 2014. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Clemente Gerardo Ochoa Cantú, Isidro Pedro Alcántara Valdés, Héctor Riveros Caraza, Anastacio Martínez García y Graciela Guadalupe Alejo Luna. Disidentes: Martín Jesús García Monroy, Martín Soto Ortiz y Antonio Soto Martínez. Ponente: Isidro Pedro Alcántara Valdés. Secretaria: Andrea Martínez García.		
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY	P./J. 51/2014 (10a.)	24

	Número de identificación	Pág.
DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.		
Contradicción de tesis 426/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Segundo, ambos del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 18 de septiembre de 2014. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Octavio Joel Flores Díaz.		
INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).	P./J. 50/2014 (10a.)	60
Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González.		

	Número de identificación	Pág.
INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.	PC.III.C. J/2 C (10a.)	1339

Contradicción de tesis 9/2013. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito. 12 de agosto de 2014. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Martha Leticia Muro Arellano, Víctor Manuel Flores Jiménez, Gustavo Alcaraz Núñez, Carlos Manuel Bautista Soto y Eduardo Francisco Núñez Gaytán. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Alberto Carrillo Ruvalcaba.

LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO.	2a./J. 105/2014 (10a.)	1106

Contradicción de tesis 164/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Quinto de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en La Paz, Baja California Sur y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales; votó con salvedad José Fernando Franco González Salas. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Margarita Beatriz Luna

	Número de identificación	Pág.
Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.		
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA.	PC.IV.A. J/4 A (10a.)	1664
Contradicción de tesis 4/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa, todos del Cuarto Circuito. 2 de septiembre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez. Disidente: Sergio Javier Coss Ramos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz.		
NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD.	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Contradicción de tesis 4/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero en Materia Administrativa, así como el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y		

	Número de identificación	Pág.
Administrativa, todos del Cuarto Circuito. 2 de septiembre de 2014. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Luis Alfonso Hernández Núñez. Disidente: Sergio Javier Coss Ramos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María Inocencia González Díaz.		
NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES.	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Contradicción de tesis 224/2014. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 27 de agosto de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Disidente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes.		
PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.	PC.I.A. J/30 A (10a.)	1698
Contradicción de tesis 20/2014. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia		

Número de identificación **Pág.**

Administrativa del Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. 22 de septiembre de 2014. Unanimidad de dieciocho votos de los Magistrados Carlos Ronzon Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Norma Lucía Piña Hernández, Carlos Amado Yáñez, Luz María Díaz Barriga, Armando Cruz Espinosa y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Fernando Cruz Ventura.

PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. P./J. 53/2014 (10a.) 61

Contradicción de tesis 134/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno en Materia Administrativa y Décimo Primero en Materia Civil, ambos del Primer Circuito. 11 de agosto de 2014. Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.

	Número de identificación	Pág.
SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO).	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727

Contradicción de tesis 2/2014. Entre el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de octubre de 2014. Por mayoría de nueve votos de los Magistrados Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Adalberto Eduardo Herrera González, María Concepción Alonso Flores, Gilberto Chávez Priego y Virgilio Solorio Campos, contra el voto de los Magistrados José Leonel Castillo González, Ma. del Refugio González Tamayo, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez y Carlos Arellano Hobelsberger, lo resolvieron los Magistrados que integran el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. El Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González se reservó su derecho para formular salvedades. Los Magistrados José Leonel Castillo González e Indalfer Infante Gonzales se reservaron su derecho para formular voto particular. Ponente: Virgilio Solorio Campos.

SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767

Contradicción de tesis 13/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer

	Número de identificación	Pág.
Circuito. 22 de septiembre de 2014. Mayoría de quince votos de los Magistrados Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Norma Lucía Piña Hernández, Luz María Díaz Barriga y Armando Cruz Espinosa. Disidentes: Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, Carlos Ronzon Sevilla y Carlos Amado Yáñez. Ponente: Ma. Gabriela Rolón Montaño. Secretaria: Jeny Jahaira Santana Albor.		
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR.	PC.I.C. J/9 C (10a.)	1816
Contradicción de tesis 5/2014. Entre el criterio sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el asumido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de octubre de 2014. Por mayoría de trece votos de los Magistrados Luis Gilberto Vargas Chávez, Daniel Patiño Pereznegrón, Víctor Francisco Mota Cienfuegos, José Leonel Castillo González, Walter Arellano Hobelsberger, Ismael Hernández Flores, Ma. Del Refugio González Tamayo, María Concepción Alonso Flores, Gilberto Chávez Priego, Indalfer Infante Gonzales, Gonzalo Arredondo Jiménez, Virgilio Solorio Campos y Carlos Arellano Hobelsberger, contra el voto del Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González, lo resolvieron los Magistrados que integran el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito. El Magistrado Adalberto Eduardo Herrera González se reservó su derecho a formular voto particular. Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón. Secretarias:		

	Número de identificación	Pág.
Nélida Calvillo Mancilla y Sofía Concepción Matías Ramo.		
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
Contradicción de tesis 25/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 29 de septiembre de 2014. Mayoría de once votos de los Magistrados Carlos Alfredo Soto y Villaseñor, Jesús Antonio Nazar Sevilla, Pablo Domínguez Peregrina, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba, Homero Fernando Reed Ornelas, Guadalupe Ramírez Chávez, José Antonio García Guillén, Luz Cueto Martínez, Norma Lucía Piña Hernández y Armando Cruz Espinosa. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Clementina Flores Suárez, José Luis Caballero Rodríguez, Carlos Amado Yáñez y Luz María Díaz Barriga. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada.		
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949

	Número de identificación	Pág.
Contradicción de tesis 19/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 22 de septiembre de 2014. Mayoría de once votos de los Magistrados Gaspar Paulín Carmona, Jorge Ojeda Velázquez, Pablo Domínguez Peregrina, Clementina Flores Suárez, Ma. Gabriela Rolón Montaño, María Simona Ramos Ruvalcaba, Guadalupe Ramírez Chávez, Luz Cueto Martínez, Norma Lucía Piña Hernández, Luz María Díaz Barriga y Armando Cruz Espinosa. Disidentes: Carlos Ronzon Sevilla, Jesús Antonio Nazar Sevilla, José Luis Caballero Rodríguez, Homero Fernando Reed Ornelas, José Antonio García Guillén, Carlos Amado Yáñez y Carlos Alfredo Soto y Villaseñor. Ponente: Luz Cueto Martínez. Secretario: Iván Guerrero Barón.		
TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA.	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
Contradicción de tesis 2/2014. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado y el Sexto Tribunal Colegiado, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 6 de octubre de 2014. Mayoría de nueve votos de los Magistrados Alicia Rodríguez Cruz, Víctor Ernesto Maldonado Lara, Roberto Ruiz Martínez, Salvador Castro Zavaleta, Ricardo Castillo Muñoz, Felipe Eduardo Aguilar Rosete, María del Rosario Mota Cienfuegos, Sergio Pallares y Lara y Juan Manuel Alcántara Moreno. Disidentes: Jorge Rafael Olivera		

	Número de identificación	Pág.
Toro y Alonso, Casimiro Barrón Torres, Marco Antonio Bello Sánchez, Elías Álvarez Torres, Emilio González Santander y Ángel Ponce Peña, quienes emiten voto concurrente particular. Ponente: Ángel Ponce Peña. Relator de la mayoría: Roberto Ruiz Martínez. Secretario: Jahaziel Sillas Martínez.		
VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO.	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
Contradicción de tesis 167/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 3 de septiembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.		

Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
Acceso a la impartición de justicia, derecho de.—Véase: "RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
Acceso a la jurisdicción, derecho de.—Véase: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR."	1a. CCCXCIX/2014 (10a.)	713
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
Acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA		

	Número de identificación	Pág.
OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO."	I.5o.P.5 K (10a.)	2927
Acceso a la justicia, derecho fundamental de.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Acceso a la justicia, principio de.—Véase: "VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO."	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
Acceso a la justicia pronta, derecho fundamental de.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Acceso a los datos de la averiguación previa, derecho de.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE		

	Número de identificación	Pág.
HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA)."	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906
Acceso a los datos de la averiguación previa, derecho de.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Acceso efectivo a la justicia, derecho humano de.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, derecho humano de.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Actos de ejecución irreparable.—Véase: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLI-		

	Número de identificación	Pág.
CO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
Actos de ejecución irreparable.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Adquisición procesal, principio de.—Véase: "FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR."	1a. CCCXCVII/2014 (10a.)	718
Alimentación, derecho fundamental a la.—Véase: "DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD."	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
Alimentos, derecho a los.—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.6o.C.41 C (10a.)	3006

	Número de identificación	Pág.
Amparo, procedencia del.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."	P./J. 50/2014 (10a.)	60
Apertura, principio de.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON INSTRUMENTALES PARA LA EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDX/2014 (10a.)	738
Audiencia, derecho de.—Véase: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."	XVI.1o.A.47 A (10a.)	2936
Audiencia, derecho de.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."	P./J. 51/2014 (10a.)	24
Audiencia, derecho de.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL		

	Número de identificación	Pág.
JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
Audiencia, derecho fundamental de.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO)."	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
Audiencia previa, derecho de.—Véase: "CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA."	I.8o.A.81 A (10a.)	2917
Certeza, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Congruencia, principio de.—Véase: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.		

	Número de identificación	Pág.
SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN."	2a./J. 123/2014 (10a.)	859
Debido proceso, derecho al.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Debido proceso, derecho al.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Debido proceso, derecho al.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR DE LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD. LA AUTORIDAD NO PUEDE TOMAR EN CUENTA ELEMENTOS DE ALEGADA PERTENENCIA NACIONAL PARA NEGAR AQUEL DERECHO HUMANO."	1a. CDIV/2014 (10a.)	723
Debido proceso, derecho al.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Debido proceso, derecho fundamental al.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO)."	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
Debido proceso, derecho humano al.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Defensa adecuada, derecho a una.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE		

	Número de identificación	Pág.
DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Defensa adecuada, derecho fundamental de.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Defensa adecuada, derecho fundamental de.—Véase: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL."	1a. CD/2014 (10a.)	716
Defensa, derecho de.—Véase: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR AL EVALUADO LAS CONSTANCIAS RELATIVAS QUE SOLICITÓ DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN, CONSTITUYE UN MOTIVO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, PARA EL EFECTO DE QUE EN LA SENTENCIA DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SE ORDENE LA REPOSICIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO, A FIN DE QUE AQUÉLLAS SE INTEGREN A ÉSTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)."	XVI.1o.A.47 A (10a.)	2936

	Número de identificación	Pág.
Defensa, derecho de.—Véase: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
Defensa, derecho fundamental de.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Definitividad en el amparo, excepción al principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893

	Número de identificación	Pág.
Deliberación democrática, principio de.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.—Véase: "DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."	I.9o.P.69 P (10a.)	2928
Derecho de los Estados a defender a sus nacionales.—Véase: "CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SE CUMPLE CON ESTA OBLIGACIÓN SI EL ESTADO RECEPTOR NOTIFICA A OTRO SOBRE LA DETENCIÓN DE UNO DE SUS NACIONALES, NO OBSTANTE QUE EL ESTADO NOTIFICADO DECIDA NO ASISTIR A LA PERSONA DETENIDA."	1a. CDII/2014 (10a.)	713
Dignidad humana, derecho fundamental a la.—Véase: "DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS		

	Número de identificación	Pág.
AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD."	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
Disciplina, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Eficacia, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
Equilibrio social, principio de.—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABI-		

	Número de identificación	Pág.
LIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
Exhaustividad, principio de.—Véase: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO DEBE SATISFACER REQUISITOS MÍNIMOS CUANDO SE PROPONE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN."	2a./J. 123/2014 (10a.)	859
Fundamentación, garantía de.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882
Fundamentación, principio de.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESO LUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Generalidad, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO		

	Número de identificación	Pág.
FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
Generalidad tributaria, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA."	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709
Honradez, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Igualdad, derecho a la.—Véase: "PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
Igualdad, garantía de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
Igualdad jurídica, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710

	Número de identificación	Pág.
Imparcialidad, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Imparcialidad, principio de.—Véase: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL."	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
Inaudiencia de parte, principio de.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
Indivisibilidad, principio de.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
Inmediación, principio de.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO		

	Número de identificación	Pág.
A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Interdependencia, principio de.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
Interés legítimo en el amparo.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."	P./J. 50/2014 (10a.)	60
Interés superior del menor.—Véase: "PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS NECESARIAS PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO Y/O LEGÍTIMO DEL QUEJOSO CUANDO PROMUEVE EL JUICIO POR DERECHO PROPIO Y EN REPRESENTACIÓN DE SUS MENORES HIJOS, EN CONTRA DE LA ROTACIÓN EN EL EMPLEO O CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL, QUIEN ES SU CÓNYUGE Y MADRE DE AQUÉLLOS."	(IV Región)1o.4 A (10a.)	3018
Interés superior del menor.—Véase: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE NEGARLA CONTRA LA ORDEN DIRIGIDA AL PROGENITOR QUE RETUVO AL MENOR DE EDAD, PARA QUE LO RESTITUYA AL QUE LEGALMENTE TIENE LA GUARDA		

	Número de identificación	Pág.
Y CUSTODIA, SALVO QUE EXISTAN INDICIOS DE QUE ESTÉ EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL MENOR."	PC.I.C. J/9 C (10a.)	1816
Interpretación conforme, principio de.—Véase: "COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
Interpretación conforme, principio de.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Irretroactividad de la ley, principio de.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Irretroactividad, principio de.—Véase: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)."	I.3o.C.54 K (10a.)	2995

	Número de identificación	Pág.
Justa indemnización en la expropiación, garantía de.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Justicia pronta y expedita, derecho humano a la.—Véase: "VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO."	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
Justicia pronta y expedita, principio de.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Justicia social, principio de.—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
Lealtad, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924

	Número de identificación	Pág.
Legalidad, derecho de.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Legalidad, principio.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Motivación, garantía de.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882
Motivación, principio de.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065

	Número de identificación	Pág.
Mutabilidad, principio de.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
No autoincriminación, principio de.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
No discriminación, derecho a la.—Véase: "PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
Non bis in idem, violación al principio de.—Véase: "ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*."	I.3o.P.20 P (10a.)	2935

	Número de identificación	Pág.
Objetividad, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "CONFESIÓN CALIFICADA DIVISIBLE. SUPUESTO EN EL QUE ES INAPLICABLE PARA DESCONOCER LA VERSIÓN DEFENSIVA DEL IMPUTADO Y DEBE VALORARSE DE MANERA QUE COMPRENDA ASPECTOS QUE LE FAVOREZCAN."	II.2o.P.30 P (10a.)	2915
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO."	1a. CDI/2014 (10a.)	717
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
Previsión social, violación al principio de.—Véase: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL."	2a. CXII/2014 (10a.)	1191

	Número de identificación	Pág.
Principio lógico de la prueba.—Véase: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO."	1a. CCCXCVI/2014 (10a.)	706
Principio lógico de la prueba.—Véase: "CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
Principio ontológico de la prueba.—Véase: "CARGA DE LA PRUEBA. SU DISTRIBUCIÓN A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS LÓGICO Y ONTOLÓGICO."	1a. CCCXCVI/2014 (10a.)	706
Principio ontológico de la prueba.—Véase: "CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
Principio pro persona.—Véase: "DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."	I.9o.P.69 P (10a.)	2928

	Número de identificación	Pág.
Principio pro persona.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS 'CATEGORÍAS SOSPECHOSAS', A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL."	1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)	720
Principio pro persona.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Principio pro persona.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD."	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
Principio pro persona.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Principio *pro personae*.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Profesionalismo, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL		

	Número de identificación	Pág.
DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Progresividad de los derechos humanos, principio de.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Progresividad, inaplicabilidad del principio de.—Véase: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
Progresividad, principio de.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
Progresividad, principio de.—Véase: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO."	2a. CVIII/2014 (10a.)	1192
Propiedad, derecho humano de.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939

	Número de identificación	Pág.
Proporcionalidad, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Proporcionalidad tributaria, violación al principio de.—Véase: "IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012,		

	Número de identificación	Pág.
QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
Protección de la salud, derecho fundamental a la.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Razonabilidad jurídica, principio de.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Razonabilidad, principio de.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
Recurso, derecho al.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO."	2a./J. 122/2014 (10a.)	1039
Representación, principio de.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL		

	Número de identificación	Pág.
PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Respeto a los derechos humanos, principio de.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Salud, derecho fundamental a la.—Véase: "DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD."	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
Seguridad jurídica, derecho a la.—Véase: "IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA 'SENTENCIA FAVORABLE', ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE		

	Número de identificación	Pág.
LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO."	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS."	IV.2o.A.76 K (10a.)	2918
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949
Seguridad social, violación al derecho a la.—Véase: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO		

	Número de identificación	Pág.
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL."	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
Sumariedad, principio de.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
Supremacía constitucional, principio de.—Véase: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS."	IV.2o.A.76 K (10a.)	2918
Supremacía constitucional, principio de.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Transparencia, principio de.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON INSTRUMENTALES PARA LA EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDX/2014 (10a.)	738
Tutela judicial efectiva, derecho a la.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR		

	Número de identificación	Pág.
DE LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD. LA AUTORIDAD NO PUEDE TOMAR EN CUENTA ELEMENTOS DE ALEGADA PERTENENCIA NACIONAL PARA NEGAR AQUEL DERECHO HUMANO."	1a. CDIV/2014 (10a.)	723
Tutela judicial efectiva, derecho de.—Véase: "RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
Tutela judicial efectiva, derecho humano a la.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Tutela judicial efectiva, derecho humano de.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Universalidad, principio de.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. FUNCIONES Y CONSECUENCIAS EN EL USO DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD."	1a. CCCLXXXV/2014 (10a.)	719
Utilidad pública en la expropiación, garantía de.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO		

	Número de identificación	Pág.
ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Vida, derecho fundamental a la.—Véase: "DERECHO FUNDAMENTAL AL AGUA POTABLE. AL SER LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD SUJETOS ESPECIALMENTE VULNERABLES, LAS AUTORIDADES CARCELARIAS DEBEN GARANTIZARLO Y REFORZARLO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN, CON CRITERIOS DE DISPONIBILIDAD, CALIDAD Y ACCESIBILIDAD."	I.9o.P.68 P (10a.)	2930
Violación a las leyes del procedimiento penal.—Véase: "AMPARO EN REVISIÓN. EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN PENAL A LAS VÍCTIMAS O PARTE OFENDIDA DEL DELITO."	1a. CDXII/2014 (10a.)	706

Índice de Ordenamientos

	Número de identificación	Pág.
Acuerdo a través del cual se pretende regular el procedimiento a seguir en contra de los integrantes de la Policía Federal que no asistan o se retiren de las evaluaciones de control de confianza, así como la vigencia de dichas evaluaciones, artículo sexto (D.O.F. 23-V-2012).—Véase: "EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA. LA VIGENCIA DE UN AÑO INHERENTE AL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN PARA EL CASO EN QUE EL ASPIRANTE DE NUEVO INGRESO OBTENGA EL RESULTADO 'NO CUMPLE', TAMBIÉN ES APLICABLE A LAS PERSONAS QUE PRETENDAN PERMANECER EN LA POLICÍA FEDERAL."	I.15o.A.9 A (10a.)	2937
Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, punto cuarto, fracción II.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO."	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
Anexo 13 al Convenio de Aviación Civil Internacional, artículo 3, numeral 1.—Véase: "SINIESTROS AÉREOS. EL CONVENIO DE CHICAGO Y SU ANEXO 13,		

	Número de identificación	Pág.
TITULADO 'INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN', NO SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO EN LA INDAGACIÓN DE AQUELLOS EN LOS QUE INTERVIENEN AERONAVES DEL ESTADO QUE CUMPLEN UN SERVICIO DE POLICÍA."	1a. CCCXCIII/2014 (10a.)	739
Código Civil de Jalisco, artículo 1198, fracción II.—Véase: "INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO."	PC.III.C. J/2 C (10a.)	1339
Código Civil de Michoacán, artículo 261 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Código Civil de Michoacán, artículo 275 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
Código Civil de Michoacán, artículo 318 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE		

	Número de identificación	Pág.
SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Código Civil de Quintana Roo, artículo 5.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Código Civil de Veracruz, artículo 251, fracción II.—Véase: "ALIMENTOS. CUANDO EL ACREEDOR MAYOR DE EDAD HA PROCREADO UN HIJO, ESTE HECHO NO ACTUALIZA POR SÍ SOLO LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ, YA QUE DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE CÓMO HA DEJADO DE NECESITARSE EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN LEGAL."	VII.2o.C.78 C (10a.)	2897
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2078.—Véase: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727

	Número de identificación	Pág.
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2094.—Véase: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727
Código Civil del Distrito Federal, artículo 2189.—Véase: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727
Código Civil Federal, artículo 3043, fracciones I y III.—Véase: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
Código Civil Federal, artículos 3044 y 3045.—Véase: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA Y DE SU AUTO ADMISORIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	PC.XXIX. J/1 C (10a.)	1218
Código de Comercio, artículo 75, fracción X.—Véase: "CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY		

	Número de identificación	Pág.
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA."	2a./J. 127/2014 (10a.)	849
Código de Comercio, artículo 1068.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES."	II.1o.16 C (10a.)	2995
Código de Comercio, artículo 1075.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES."	II.1o.16 C (10a.)	2995
Código de Comercio, artículo 1127.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Código de Comercio, artículo 1390 Bis 2.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO		

	Número de identificación	Pág.
DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES."	II.1o.16 C (10a.)	2995
Código de Comercio, artículo 1390 Bis 22.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES."	II.1o.16 C (10a.)	2995
Código de Comercio, artículo 1390 Bis 31.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA, INICIA A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN REALIZADA EN AUDIENCIA, SIEMPRE QUE EXISTA CONSTANCIA DE QUE SE DEJARON A DISPOSICIÓN DEL QUEJOSO LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES."	II.1o.16 C (10a.)	2995
Código de Comercio, artículo 1457.—Véase: "NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
Código de Comercio, artículos 1470 a 1477.—Véase: "NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
Código de Procedimientos Civiles de Hidalgo, artículos 109 a 116.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRIN-		

	Número de identificación	Pág.
CIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Código de Procedimientos Civiles de Hidalgo, artículos 119 a 126.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, artículo 267 (derogado).—Véase: "INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO."	PC.III.C. J/2 C (10a.)	1339
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 29.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 46.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL		

	Número de identificación	Pág.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 276 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 280 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 302.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 305.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTE-		

	Número de identificación	Pág.
MÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 343.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 662.—Véase: "PERSONALIDAD DEL DEMANDADO. EL ACTOR NO ESTÁ OBLIGADO A ACREDITAR EL CARÁCTER O LA CALIDAD QUE ATRIBUYE A AQUÉL, YA QUE LA LEGITIMACIÓN PASIVA EN EL PROCESO NO ES UN HECHO CONSTITUTIVO DE LA ACCIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA Y EXTENSIVA DE LOS ARTÍCULOS 29, 46, 302 Y 343 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.22 C (10a.)	3013
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 1291 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 1293 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS		

	Número de identificación	Pág.
PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículos 1296 y 1297 (abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA MATERIA DEBEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO, AUNQUE PROCEDA ALGÚN RECURSO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.21 C (10a.)	2898
Código de Procedimientos Civiles de Puebla, artículo 634 (abrogado).—Véase: "PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL PRECEDENTE** VI.1o.C.50 C	3020
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 100.—Véase: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 104.—Véase: "COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO		

	Número de identificación	Pág.
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 104.—Véase: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículos 107 y 108.—Véase: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículos 539 a 542.—Véase: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA SU MODIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ, SIN DEJAR INSUBSISTENTE LA DECRETADA, INSTAURAR UN INCIDENTE A EFECTO DE RESPETAR EL DERECHO DE AUDIENCIA DE AMBAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C.72 C (10a.)	3011
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 278.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 281.—Véase: "CARGAS PROBATORIAS.		

	Número de identificación	Pág.
EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL *ONUS PROBANDI* PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA."	1a. CCCXCV/2014 (10a.)	707
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 507.—Véase: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 514.—Véase: "SENTENCIA EJECUTORIADA EN JUICIO CIVIL O MERCANTIL QUE CONTIENE Y ESTABLECE UNA CONDENA LÍQUIDA Y OTRA ILÍQUIDA. APLICACIÓN DEL PAGO REALIZADO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, CONFORME A SUS PUNTOS RESOLUTIVOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE A OTRAS, EN CUANTO SEAN DE IDÉNTICO CONTENIDO)."	PC.I.C. J/8 C (10a.)	1727
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 278 y 279.—Véase: "FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR."	1a. CCCXCVII/2014 (10a.)	718
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 402 y 403.—Véase: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA."	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715

	Número de identificación	Pág.
Código de Procedimientos Penales de Jalisco, artículo 8o., fracción I.—Véase: "ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
Código de Procedimientos Penales de Jalisco, artículo 93.—Véase: "ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, artículo 135, numeral 3.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, artículo 219, fracción I.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO		

	Número de identificación	Pág.
PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, artículo 311.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, artículos 129 y 130.—Véase: "IDENTIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL QUERELLANTE. SI AL CONOCER DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD PROMOVIDO CONTRA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, EL PROCURADOR ADVIERTE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO NO SE ASEGURÓ DE AQUÉLLAS, DEBE DEVOLVERLE LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA Y, DE SER NECESARIO, REQUERIR LA EXHIBICIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE LAS ACREDITEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.16 P (10a.)	2967
Código de Procedimientos Penales de Nuevo León, artículos 222 y 223.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO		

	Número de identificación	Pág.
PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo, artículo 522 (abrogado).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA)."	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906
Código de Procedimientos Penales de Quintana Roo, artículo 522 (abrogado).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 277.—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS		

	Número de identificación	Pág.
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículos 12 a 17.—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículos 274 y 275.—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 172 (abrogado).—Véase: "DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES."	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 175 (abrogado).—Véase: "DELITO		

	Número de identificación	Pág.
ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES."	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 182 (abrogado).—Véase: "DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES."	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículos 198 y 199 (abrogado).—Véase: "DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES."	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 4o.—Véase: "FIDEICOMISO. SI EL PATRIMONIO QUE INGRESA A ÉSTE PROVIENE DE UNA PERSONA MORAL OFICIAL (INSTITUCIONES, SERVICIOS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS), DEJA DE TENER SU TITULARIDAD EL FIDEICOMITENTE, POR LO QUE DE CONCEDÉRSELE LA SUSPENSIÓN, DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."	VII.2o.C.73 C (10a.)	2942
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 72.—Véase: "ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL		

	Número de identificación	Pág.
3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA."	VI.2o.C.19 K (10a.)	2890
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 297, fracción II.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO."	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 373.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 388, fracción VI.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Código Federal de Procedimientos Penales, artículos 376 a 380.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN		

	Número de identificación	Pág.
OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Código Fiscal de la Federación, artículo 17-K.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Código Fiscal de la Federación, artículo 19-A.—Véase: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL."	1a. CD/2014 (10a.)	716
Código Fiscal de la Federación, artículo 19-A.—Véase: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATAMIENTO."	1a. CDI/2014 (10a.)	717
Código Fiscal de la Federación, artículo 26.—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891

	Número de identificación	Pág.
Código Fiscal de la Federación, artículo 28.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Código Fiscal de la Federación, artículo 28, fracción IV.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
Código Fiscal de la Federación, artículo 41, fracción II.—Véase: "RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA."	I.8o.A.80 A (10a.)	3027
Código Fiscal de la Federación, artículo 41, fracciones I y II.—Véase: "CRÉDITO FISCAL. EL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO		

	Número de identificación	Pág.
Y, POR ELLO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA PREVIA."	I.8o.A.81 A (10a.)	2917
Código Fiscal de la Federación, artículo 42.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Código Fiscal de la Federación, artículo 42, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907
Código Fiscal de la Federación, artículo 48.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882
Código Fiscal de la Federación, artículo 52.—Véase: "PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO."	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726

	Número de identificación	Pág.
Código Fiscal de la Federación, artículo 53-B.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Código Fiscal de la Federación, artículo 63.—Véase: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."	I.8o.A.79 A (10a.)	2928
Código Fiscal de la Federación, artículo 67.—Véase: "IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
Código Fiscal de la Federación, artículo 67.—Véase: "PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO."	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726
Código Fiscal de la Federación, artículo 110, fracción V.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS.		

	Número de identificación	Pág.
EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Código Fiscal de la Federación, artículo 134, fracción III.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Código Fiscal de la Federación, artículo 134, fracción III.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO)."	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
Código Fiscal de la Federación, artículo 137.—Véase: "NOTIFICACIÓN PERSONAL PRACTICADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE ENTIENDE CON UN TERCERO, EN EL CITATORIO PREVIO Y EN EL ACTA RELATIVA DEBEN ASENTARSE LOS PORMENORES QUE DEN PRECISIÓN Y CLARIDAD RESPECTO AL VÍNCULO QUE UNE A AQUÉL CON EL CONTRIBUYENTE Y ESPECIFICAR LAS RAZONES QUE ASEGUREN QUE NO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO POR CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES, ASÍ COMO SUSTENTAR LA UBICACIÓN DE ÉSTE CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y RAZONABLEMENTE IDENTIFICABLES."	**CANCELADA** II.3o.A.1 A (10a.)	3002

	Número de identificación	Pág.
Código Fiscal de la Federación, artículo 137.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Código Fiscal de la Federación, artículo 137 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013).—Véase: "CITATORIO PARA NOTIFICAR A PERSONA MORAL O JURÍDICA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. ES INNECESARIO QUE ADEMÁS DE DIRIGIRSE A AQUÉLLA, SE PRECISE EL NOMBRE DE SU REPRESENTANTE LEGAL (LEGISLACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE DICIEMBRE DE 2013)."	2a./J. 95/2014 (10a.)	1069
Código Fiscal de la Federación, artículo 139.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Código Penal de Nuevo León, artículo 47, fracción V.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL."	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
Código Penal de Quintana Roo, artículo 10.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS		

	Número de identificación	Pág.
DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Código Penal de Yucatán, artículo 80.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA EN DELITOS CULPOSOS. LA GRADUACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CULPA DEBE SITUARSE EN UN PUNTO QUE OSCILE DE LEVE A GRAVE PASANDO POR UNO MEDIANAMENTE GRAVE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)."	XIV.P.A. J/3 (10a.)	2780
Código Penal del Distrito Federal, artículo 243.—Véase: "ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*."	I.3o.P.20 P (10a.)	2935
Código Penal del Distrito Federal, artículo 243.—Véase: "RESTITUCIÓN DEL BIEN INDEBIDO, EN TRATÁNDOSE DEL DELITO ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN."	I.3o.P.21 P (10a.)	3029
Código Penal del Estado de México, artículo 26, fracción III.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. EL GRADO DE PUNICIÓN EN QUE SE UBICA AL SENTENCIADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA A SU PAGO, NO ESTÁ LIGADO CON EL GRADO DE CULPABILIDAD PARA LA INDIVIDUALI-		

	Número de identificación	Pág.
ZACIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."	II.3o.P.40 P (10a.)	3028
Código Penal del Estado de México, artículo 57.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO MORAL. EL GRADO DE PUNICIÓN EN QUE SE UBICA AL SENTENCIADO PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LA CONDENA A SU PAGO, NO ESTÁ LIGADO CON EL GRADO DE CULPABILIDAD PARA LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)."	II.3o.P.40 P (10a.)	3028
Código Penal Federal, artículo 15, fracción I.—Véase: "DELITO. CONDUCTA PENALMENTE RELEVANTE QUE DEBE ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/4 (10a.)	2708
Código Penal Federal, artículo 15, fracciones II y VIII.—Véase: "DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711
Código Penal Federal, artículo 15, fracciones III a VI.—Véase: "DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/6 (10a.)	2712
Código Penal Federal, artículo 15, fracciones V, VII a IX.—Véase: "DELITO. ELEMENTOS DE LA CULPABILIDAD QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/7 (10a.)	2709
Código Penal Federal, artículo 17.—Véase: "DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711

	Número de identificación	Pág.
Código Penal Federal, artículo 17.—Véase: "DELITO. JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD QUE DEBE REALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/6 (10a.)	2712
Código Penal Federal, artículo 400 bis (vigente hasta el 14 de marzo de 2014).—Véase: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
Código Penal Federal, artículo 411.—Véase: "DELITO ELECTORAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 411 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SE ACTUALIZA LA TENTATIVA Y NO EL DELITO CONSUMADO, SI NO SE MATERIALIZA LA ALTERACIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES."	VI.1o.P.23 P (10a.)	2924
Código Penal Federal, artículos 7o. a 9o.—Véase: "DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711
Código Penal Federal, artículos 12 y 13.—Véase: "DELITO. ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE DEBEN ANALIZARSE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA."	XXVII.3o. J/5 (10a.)	2711
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DE-		

	Número de identificación	Pág.
RECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR."	1a. CCCXCIX/2014 (10a.)	713
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."	I.9o.P.69 P (10a.)	2928
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE		

	Número de identificación	Pág.
ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS LLAMADAS 'CATEGORÍAS SOSPECHOSAS', A FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN INSTITUCIONAL."	1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.)	720
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL."	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO		

	Número de identificación	Pág.
DE ESTE DERECHO A LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD."	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 134, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SI DICHO PRECEPTO SE APLICA SUPLETORIAMENTE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA, LA AUTORIDAD, PREVIO A ORDENARLA, DEBE INVESTIGAR EL DOMICILIO DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGE, AGOTANDO LOS MEDIOS QUE TENGA A SU ALCANCE Y QUE RESULTEN CONDUCENTES PARA LOGRAR DICHO FIN (INTERPRETACIÓN CONFORME CON LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO)."	XXVII.3o.7 A (10a.)	3004
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PE-		

	Número de identificación	Pág.
NALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO."	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "COSTAS CON BASE EN LA TEORÍA DEL VENCIMIENTO Y EL CRITERIO DE LA COMPENSACIÓN. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES, SI NO OBTUVIERON SENTENCIA FAVORABLE (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.C. J/6 (10a.)	2604
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "DERECHO DE ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, EN FORMA SUFICIENTE, SALUBRE, ACEPTABLE Y ASEQUIBLE. TRATÁNDOSE DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, AQUÉL DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS PLASMADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES, A PARTIR DE UNA INTERPRETACIÓN MÁS AMPLIA QUE LES FAVOREZCA EN TODO MOMENTO (APLICACIÓN DEL PRINCIPIO PRO		

	Número de identificación	Pág.
PERSONA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL)."	I.9o.P.69 P (10a.)	2928
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 13.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13		

	Número de identificación	Pág.
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA."	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DE-		

	Número de identificación	Pág.
RECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "GASTOS Y COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO, SI EL ACTOR NO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE, AUN CUANDO EL JUICIO SE HUBIERE SEGUIDO EN REBELDÍA DEL DEMANDADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	PC.VII. J/4 C (10a.)	1287
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL."	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "JURISPRUDENCIA. SU		

	Número de identificación	Pág.
APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)."	I.3o.C.54 K (10a.)	2995
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 'SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS', CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO."	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA."	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIO-		

	Número de identificación	Pág.
NAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. EL ARTÍCULO 139 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VULNERA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. CCCLXXVIII/2014 (10a.)	724
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE		

	Número de identificación	Pág.
AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. SU ÚLTIMA ACTA PARCIAL TIENE NATURALEZA DIVERSA DE LA DEL OFICIO DE OBSERVACIONES DERIVADO DE LA REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE CUMPLA CON EL REQUISITO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."	XVI.1o.A. J/16 (10a.)	2882
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO.		

	Número de identificación	Pág.
EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO."	I.5o.P.5 K (10a.)	2927
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DICTAMEN PERICIAL EXTRAJUDICIAL. SU VALORACIÓN COMO PRUEBA DOCUMENTAL NO TRANSGREDE A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES POR DENEGACIÓN DE JUSTICIA."	1a. CCCXCVIII/2014 (10a.)	715
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL."	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "IMPROCEDENCIA DE LA		

	Número de identificación	Pág.
VÍA. SI EL JUEZ LA ADVIERTE DE OFICIO, SU EFECTO SERÁ DECLARAR LA VALIDEZ DE LO ACTUADO CON LA OBLIGACIÓN DE REGULARIZAR EL PROCEDIMIENTO (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 1127 DEL CÓDIGO DE COMERCIO)."	II.1o.C.11 C (10a.)	2968
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA APERTURA Y TRANSPARENCIA QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ÉSTAS, DEBE SER COMPATIBLE CON LA EXIGENCIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		

	Número de identificación	Pág.
PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDVI/2014 (10a.)	736
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR DE AMPARO TIENE EL DEBER *EX OFFICIO* DE INFORMAR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DEJÓ DE SURTIR EFECTOS Y, POR TANTO, QUE ESTÁ EN APTITUD DE EJECUTAR EL ACTO RECLAMADO."	**REPUBLICADA POR MODIFICACIÓN EN EL TEXTO** I.3o.C.47 K (10a.)	3040
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL."	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20.—Véase: "TRASLADO DE UN PROCESADO POR DELINCUENCIA ORGANIZADA DEL CENTRO PENITENCIARIO EN EL QUE SE EN-		

	Número de identificación	Pág.
CUENTRA RECLUIDO AL DEL LUGAR DONDE SE LE INSTRUYE LA CAUSA. SU NEGATIVA PUEDE LESIONAR DIRECTAMENTE SU DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA, POR TANTO, ESA RESOLUCIÓN DEBE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE DEBIDA Y ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, EXCLUYENDO ARGUMENTOS AJENOS A LOS LEGALMENTE APLICABLES Y CUESTIONES DE HECHO NO PROBADAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO."	III.2o.P.63 P (10a.)	3065
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20 (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. LA PRESUNCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19-A, PÁRRAFO ÚLTIMO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PENAL."	1a. CD/2014 (10a.)	716
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción IX (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracciones VII y X (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO		

	Número de identificación	Pág.
DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA)."	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracciones VII y X (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción II.—Véase: "DETENCIÓN. SI EL INDICIADO QUE CONFESÓ SU PARTICIPACIÓN EN LOS HECHOS DELICTIVOS ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, FUE CAPTURADO EN FLAGRANCIA EN UNA DIVERSA AVERIGUACIÓN PREVIA Y, POR TANTO, EN CUANTO A SU LIBERTAD SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE ESA OTRA AUTORIDAD, PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE DICHA CONFESIÓN, PREVIAMENTE DEBEN RECABARSE LAS CONSTANCIAS QUE AVALEN LA LEGALIDAD DE AQUÉLLA Y PATENTICEN SI FUE O NO PROLONGADA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.1o.P.10 P (10a.)	2932
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B, fracción IV (texto ante-		

	Número de identificación	Pág.
rior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "RESTITUCIÓN DEL BIEN INDEBIDO, EN TRATÁNDOSE DEL DELITO ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN."	I.3o.P.21 P (10a.)	3029
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.—Véase: "ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.—Véase: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO		

	Número de identificación	Pág.
PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS."	II.1o.12 P (10a.)	2904
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. EL ARTÍCULO 47, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN LA PORCIÓN NORMATIVA QUE ESTABLECE QUE EL JUEZ FIJARÁ LA SANCIÓN TENIENDO EN CUENTA 'LOS ANTECEDENTES PERSONALES DEL SUJETO ACTIVO', ES INCONVENCIONAL."	IV.1o.P. J/4 (10a.)	2764
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO."	I.6o.P.60 P (10a.)	3038
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "TORTURA. LA AUTOINCRIMINACIÓN DEL INCULPADO NO ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA ACREDITARLA."	1a. CCCLXXXIII/2014 (10a.)	741
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 23.—Véase: "ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. SI SE ACREDITÓ QUE EL INCULPADO POSEYÓ DIVERSAS PARTES DE VEHÍCULOS ROBADOS, CON CONOCIMIENTO DE ESTA CIRCUNSTANCIA Y EL JUEZ LO SANCIONA CONFORME A LAS REGLAS DE PUNIBILIDAD DEL CONCURSO REAL, ADUCIENDO QUE SE ACTUALIZÓ UNA PLURALIDAD DE ACCIONES, VULNERA EL PRINCIPIO DE *NON BIS IN IDEM*."	I.3o.P.20 P (10a.)	2935

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA."	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 30.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD."	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO ME-		

	Número de identificación	Pág.
NOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. LAS NORMAS QUE LA PREVÉN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE EQUIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	1a. CCCLXXXVIII/2014 (10a.)	711
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 32.—Véase: "NOTIFICACIÓN, CONTACTO		

	Número de identificación	Pág.
Y ASISTENCIA CONSULAR. NO PUEDE HACERSE DISTINCIÓN ALGUNA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESTE DERECHO A LAS PERSONAS MEXICANAS DETENIDAS QUE TENGAN DOBLE O MÚLTIPLE NACIONALIDAD."	1a. CDIII/2014 (10a.)	724
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción VII.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXIII.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción XXIX-H.—Véase: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracciones VII y XXX.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. CONSTITUYE UN BENEFICIO OTORGADO VOLUNTARIAMENTE POR EL LEGISLADOR, POR LO QUE NO ES EXIGIBLE AL ESTADO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA."	1a. CCCLXXXIX/2014 (10a.)	709

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracciones VII y XXX.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 100.—Véase: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN IMPEDIDOS PARA REVISAR LA REGULARIDAD DE LOS ACUERDOS QUE EXPIDE Y, POR TANTO, DEBEN OBSERVAR LOS QUE AUTORIZAN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN."	P./J. 52/2014 (10a.)	23
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102.—Véase: "OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. EL ARTÍCULO 400 BIS, PÁRRAFO SEXTO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, VIGENTE HASTA EL 14 DE MARZO DE 2014, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA."	1a./J. 71/2014 (9a.)	585
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 104, fracción I-B (vigente hasta el 3 de octubre de 2011).—Véase: "REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO."	I.8o.A.82 A (10a.)	3030
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 104, fracción III.—Véase: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLA-		

	Número de identificación	Pág.
MACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 104, fracción III.—Véase: "REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO."	I.8o.A.82 A (10a.)	3030
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)."	P./J. 50/2014 (10a.)	60
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGA-		

	Número de identificación	Pág.
MIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IV.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE JULIO DE 2014, NO PREVÉ UN PLAZO IGUAL O MENOR AL ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO PARA OTORGARLA, POR LO QUE SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."	PC.I.A. J/29 A (10a.)	1949
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción VIII.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."	P./J. 51/2014 (10a.)	24
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IX.—Véase: "AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUAN-		

	Número de identificación	Pág.
DO SÓLO SE ATRIBUYE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LA OMISIÓN DE ANALIZAR, DE MANERA OFICIOSA, LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ES PARTE EL ESTADO MEXICANO, AUN CUANDO SE ALEGUE LA VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO."	2a./J. 124/2014 (10a.)	815
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IX.—Véase: "COSA JUZGADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN. LA INCORPORACIÓN DEL LLAMADO 'NUEVO PARADIGMA CONSTITUCIONAL' NO IMPLICA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDA REVISAR TEMAS DE LEGALIDAD RESUELTOS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UNA SENTENCIA DE AMPARO DIRECTO ANTERIOR."	1a. CCCXCIX/2014 (10a.)	713
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción X.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 60/2014 (10a.)	7
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "CUM-		

	Número de identificación	Pág.
PLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. ÓRGANO AL QUE COMPETE SU VALORACIÓN."	P./J. 57/2014 (10a.)	16
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO."	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B (D.O.F. 5-XII-1960).—Véase: "TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA."	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XI.—Véase: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCU-		

	Número de identificación	Pág.
LO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL."	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "ACTUARIO DEL MINISTERIO PÚBLICO. A FIN DE INGRESAR Y PERMANECER EN EL PUESTO, DEBE SUJETARSE A LOS EXÁMENES DE SELECCIÓN Y EVALUACIONES PSICOSOCIALES, ASÍ COMO ACREDITAR LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN QUE PREVEAN LAS NORMAS APLICABLES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	III.2o.A.61 A (10a.)	2889
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLI-		

	Número de identificación	Pág.
CIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)1o.3 A (10a.)	3014
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracciones IV, VI, IX, XI y XIV.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartados A y B.—Véase: "PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PRIVADO Y PÚBLICO. LA EXISTENCIA DE DISTINCIONES LEGALES EN LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a./J. 114/2014 (10a.)	958
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 124.—Véase: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES."	IV.2o.A.2 CS (10a.)	3035
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 124.—Véase: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO		

	Número de identificación	Pág.
CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS."	IV.2o.A.1 CS (10a.)	3037
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133.—Véase: "CUESTIÓN CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. NO LO ES EL PLANTEAMIENTO DEL QUEJOSO EN EL SENTIDO DE QUE SE TRANSGREDE EN SU PERJUICIO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, AL ESTIMAR QUE EXISTE UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS."	IV.2o.A.76 K (10a.)	2918
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133.—Véase: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ELLAS, TRATÁNDOSE DE FACULTADES CONCURRENTES."	IV.2o.A.2 CS (10a.)	3035
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133.—Véase: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS."	IV.2o.A.1 CS (10a.)	3037

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 y 17.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 19 y 20.—Véase: "PRUEBAS EN LA APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 379 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO CONDICIONA SU ADMISIÓN A QUE SE HAYAN OFRECIDO Y DEJADO DE RECABAR DURANTE LA PREINSTRUCCIÓN, SINO QUE IMPONE AL TRIBUNAL PONDERAR LA IDONEIDAD Y PERTINENCIA DE LAS QUE PROPONGAN LAS PARTES."	II.2o.P.31 P (10a.)	3018
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 40 y 41.—Véase: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. NO SE TRANSGREDE ESE PRINCIPIO CUANDO SE ORIGINE UN CONFLICTO ENTRE LEYES FEDERALES Y LOCALES POR UNA APARENTE CONTRADICCIÓN ENTRE ÉSTAS."	IV.2o.A.1 CS (10a.)	3037
Constitución Política de Jalisco, artículo 46.—Véase: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)]."	(III Región)4o.55 A (10a.)	2963

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de Jalisco, artículo 50, fracción I.—Véase: "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO. LOS DECRETOS POR LOS QUE SE EXPIDIÓ, REFORMÓ Y ADICIONÓ LA LEY RELATIVA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, AL HABER SIDO REFRENDADOS ÚNICAMENTE POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, NO CONTRARÍAN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y, POR TANTO, DEBEN SER OBEDECIDOS [ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS (III REGIÓN)4o.46 A (10a.)]."	(III Región)4o.55 A (10a.)	2963
Constitución Política de Puebla, artículo 102.—Véase: "PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE SU DESAHOGO POR OFICIO SI SE OFRECE A CARGO DEL DIRECTOR DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PUEBLA, POR NO TENER ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS EL CARÁCTER DE ALTOS FUNCIONARIOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.T.4 L (10a.)	3016
Constitución Política de Quintana Roo, artículo 91, fracción II.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907

	Número de identificación	Pág.
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico al Servicio de la Universidad Nacional Autónoma de México, cláusula 13.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL PERSONAL TÉCNICO ACADÉMICO QUE LABORA POR CONTRATO SÓLO PUEDE ADQUIRIR SU DEFINITIVIDAD MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO Y DESPUÉS DE TRES AÑOS ININTERRUMPIDOS CON NOMBRAMIENTO INTERINO SOMETERSE A UN CONCURSO CERRADO."	2a. CXI/2014 (10a.)	1193
Contrato Colectivo de Trabajo del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, cláusulas 13 y 14.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO."	2a. CX/2014 (10a.)	1193
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.—Véase: "POTESTAD JURISDICCIONAL EN MATERIA PROBATORIA. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN DEBIDO PROCESO."	1a. CCCXCIV/2014 (10a.)	727
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU		

	Número de identificación	Pág.
PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 17.—Véase: "ALIMENTOS PARA HIJOS NACIDOS FUERA DE MATRIMONIO. SI LA MADRE NO ACREDITA HABER CONTRAÍDO DEUDAS PARA SUFRAGARLOS, LA CONDENA DEBE HACERSE A PARTIR DE QUE SE RECLAMARON, ES DECIR, DESDE QUE SE PROMOVIÓ EL JUICIO NATURAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.19 C (10a.)	2899
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO."	2a./J. 122/2014 (10a.)	1039
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículos 31 y 32.—Véase: "TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE."	I.4o.A.98 A (10a.)	3066

	Número de identificación	Pág.
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, artículo 17.—Véase: "ALIMENTOS. LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN ESA MATERIA DEBEN SER EJECUTADAS DE INMEDIATO, AUNQUE PROCEDA ALGÚN RECURSO EN SU CONTRA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.21 C (10a.)	2898
Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, artículo 7.—Véase: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO."	I.6o.C.42 C (10a.)	2916
Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 27, numeral 4.—Véase: "ALIMENTOS. ANTE LA CONDUCTA RENUENTE DEL OBLIGADO PARA CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS, DEBEN DICTARSE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PENSIÓN RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."	XI.1o.C.20 C (10a.)	2896
Convenio de Aviación Civil Internacional, artículo 3.—Véase: "SINIESTROS AÉREOS. EL CONVENIO DE CHICAGO Y SU ANEXO 13, TITULADO 'INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE AVIACIÓN', NO SON VINCULANTES PARA EL ESTADO MEXICANO EN LA INDAGACIÓN DE AQUELLOS EN LOS QUE INTERVIENEN AERONAVES DEL ESTADO QUE CUMPLEN UN SERVICIO DE POLICÍA."	1a. CCCXCIII/2014 (10a.)	739
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA		

	Número de identificación	Pág.
DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Decreto por el que se reforman los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997, artículo octavo transitorio (D.O.F. 12-I-2012).—Véase: "INFONAVIT. ESTÁ FACULTADO PARA ENTREGAR DIRECTAMENTE LOS FONDOS DE LA SUBCUENTA DE VIVIENDA, SIN NECESIDAD DE PREVIA TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO, A LOS TRABAJADORES PENSIONADOS CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997."	III.4o.T.23 L (10a.)	2971
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 51.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.		

	Número de identificación	Pág.
EL PERSONAL TÉCNICO ACADÉMICO QUE LABORA POR CONTRATO SÓLO PUEDE ADQUIRIR SU DEFINITIVIDAD MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO Y DESPUÉS DE TRES AÑOS ININTERRUMPIDOS CON NOMBRAMIENTO INTERINO SOMETERSE A UN CONCURSO CERRADO."	2a. CXI/2014 (10a.)	1193
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 75.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO."	2a. CX/2014 (10a.)	1193
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 77.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO."	2a. CX/2014 (10a.)	1193
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículo 106.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE SUS PROFESORES E INVESTIGADORES DE CARRERA SE OBTIENE UNA VEZ QUE ADQUIERE FIRMEZA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE GANADOR AL PARTICIPANTE DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO."	2a. CX/2014 (10a.)	1193
Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, artículos 14 a 19.—Véase: "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EL PERSONAL TÉCNICO ACADÉMICO QUE		

	Número de identificación	Pág.
LABORA POR CONTRATO SÓLO PUEDE ADQUIRIR SU DEFINITIVIDAD MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO Y DESPUÉS DE TRES AÑOS ININTERRUMPIDOS CON NOMBRAMIENTO INTERINO SOMETERSE A UN CONCURSO CERRADO."	2a. CXI/2014 (10a.)	1193
Ley Aduanera, artículo 16.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 65.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 70.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE		

	Número de identificación	Pág.
REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 74.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 4o., fracción II.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 20.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículo 36.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO.		

	Número de identificación	Pág.
LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículos 5o. a 7o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículos 15 y 16.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículos 50 a 54.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Aguas del Distrito Federal, artículos 93 y 94.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD		

	Número de identificación	Pág.
PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Amparo, artículo 1o.—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
Ley de Amparo, artículo 1o.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Amparo, artículo 5o.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS."	1a. CCCLXXXII/2014 (10a.)	730
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción I.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO		

	Número de identificación	Pág.
(AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: "CONVENCIÓN SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES. A LAS AUTORIDADES CENTRALES DE LOS ESTADOS PARTE, NO LES ASISTE EL CARÁCTER DE TERCEROS INTERESADOS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, CONFORME AL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO."	I.6o.C.42 C (10a.)	2916
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción III.—Véase: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO."	XXVII.3o. J/3 (10a.)	2713
Ley de Amparo, artículo 7o.—Véase: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO."	2a./J. 105/2014 (10a.)	1106
Ley de Amparo, artículo 9o. (abrogada)—Véase: "LEGITIMACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LA TIENE LA FEDERACIÓN PARA PROMOVERLO, POR CONDUCTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA RE-		

	Número de identificación	Pág.
PÚBLICA Y/O DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESUELVE UN JUICIO EN EL QUE PARTICIPA SIN ATRIBUTOS DE AUTORIDAD Y EN DEFENSA DE SU PATRIMONIO."	2a./J. 105/2014 (10a.)	1106
Ley de Amparo, artículo 17.—Véase: "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS."	II.1o.12 P (10a.)	2904
Ley de Amparo, artículo 17, fracción IV.—Véase: "SUSPENSIÓN DE LA VISITA DE ALGUNO DE LOS FAMILIARES A UN INTERNO EN UN RECLUSORIO. DICHA SANCIÓN EQUIVALE A UNA PENA TRASCENDENTAL, PROHIBIDA POR EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, POR TANTO, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO."	I.6o.P.60 P (10a.)	3038
Ley de Amparo, artículo 18.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES DICTADO EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO."	I.5o.P. J/2 (10a.)	2725
Ley de Amparo, artículo 22.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN."	1a./J. 69/2014 (10a.)	658
Ley de Amparo, artículo 26, fracción II.—Véase: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIAN-		

	Número de identificación	Pág.
TE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Ley de Amparo, artículo 28, fracción I.—Véase: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Ley de Amparo, artículo 31, fracción I.—Véase: "NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS IMPUGNADOS MEDIANTE RECLAMACIÓN EN EL TRÁMITE DE LA REVISIÓN FISCAL. SURTE EFECTOS DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HAYA EFECTUADO A LAS AUTORIDADES."	2a./J. 104/2014 (10a.)	1137
Ley de Amparo, artículo 51, fracción VIII.—Véase: "IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL AMPARO ES EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN DICTADO POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DEL FUERO COMÚN Y EL JUEZ DE DISTRITO QUE LO PLANTEA ARGUMENTA QUE, PREVIAMENTE COMO JUEZ DE PROCESO, DEBIDO AL DESGLOSE DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA CORRESPONDIENTE, CONOCIÓ DE LOS MISMOS HECHOS ILÍCITOS Y DICTÓ DIVERSO AUTO DE FORMAL PRISIÓN CONTRA EL QUEJOSO POR DELITOS DEL FUERO FEDERAL."	XIX.1o.P.T.5 P (10a.)	2968
Ley de Amparo, artículo 61.—Véase: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR DIVERSIDAD DE ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE REVOCARLO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE POR UNO DE ELLOS NO SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA."	I.5o.P.6 K (10a.)	3035

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XIV.—Véase: "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE LOS BENEFICIOS PRELIBERATORIOS (REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA Y LIBERTAD CONDICIONAL). EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA ES EL DE QUINCE DÍAS."	II.1o.12 P (10a.)	2904
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."	(III Región)4o.19 K (10a.)	2922
Ley de Amparo, artículo 63, fracción V.—Véase: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL POR DIVERSIDAD DE ACTOS RECLAMADOS. PROCEDE REVOCARLO Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE POR		

	Número de identificación	Pág.
UNO DE ELLOS NO SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA."	I.5o.P.6 K (10a.)	3035
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."	P./J. 51/2014 (10a.)	24
Ley de Amparo, artículo 68.—Véase: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. MOMENTO EN QUE DEBE PROMOVERSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE)."	III.1o.C.6 K (10a.)	3006
Ley de Amparo, artículo 73.—Véase: "PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS."	P./J. 53/2014 (10a.)	61
Ley de Amparo, artículo 73.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. SON EL ELEMENTO IDÓNEO PARA LEGITIMAR LA LABOR DE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."	1a. CDXI/2014 (10a.)	731
Ley de Amparo, artículo 74, fracción IV.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 59/2014 (10a.)	5
Ley de Amparo, artículo 74, fracción IV.—Véase: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO."	P./J. 56/2014 (10a.)	13
Ley de Amparo, artículo 77.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículo 81, fracción II.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS."	1a. CCCLXXXII/2014 (10a.)	730
Ley de Amparo, artículo 83, fracción V (abrogada).—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS NO CONSTITUYE UNA FUENTE DE PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO."	2a./J. 122/2014 (10a.)	1039
Ley de Amparo, artículo 88.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA LEGITIMACIÓN DEL TERCERO INTERESADO PARA INTERPONER DICHO RECURSO NO ESTÁ CONDICIONADA AL CONTENIDO DE SUS AGRAVIOS."	1a. CCCLXXXII/2014 (10a.)	730

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 97, fracción II.—Véase: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO."	XXVII.3o.65 K (10a.)	3023
Ley de Amparo, artículo 98.—Véase: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO."	XXVII.3o.65 K (10a.)	3023
Ley de Amparo, artículo 101.—Véase: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PARA SU TRAMITACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SIN ESPERAR A QUE SE RECABEN LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO DICHO RECURSO."	XXVII.3o.65 K (10a.)	3023
Ley de Amparo, artículo 107, fracción IV.—Véase: "NULIDAD DE LAUDO ARBITRAL. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."	I.6o.C.41 C (10a.)	3006
Ley de Amparo, artículo 107, fracción V.—Véase: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO		

	Número de identificación	Pág.
SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	VII.2o.C.20 K (10a.)	2888
Ley de Amparo, artículo 107, fracción VIII.—Véase: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA."	(VIII Región)2o. J/1 (10a.)	2737
Ley de Amparo, artículo 111.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO."	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904
Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV (abrogada).—Véase: "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA)."	PC.III.C. J/1 K (10a.)	1250
Ley de Amparo, artículo 114, fracciones II y IV (abrogada).—Véase: "PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA EL DES-		

	Número de identificación	Pág.
AHOGO DE LA AUDIENCIA RELATIVA SIN LA COMPARECENCIA DEL QUEJOSO, CUANDO SE TURNÓ EL ASUNTO PARA RESOLVER, PUES EL ÓRGANO SUSTANCIADOR SE ENCUENTRA IMPOSIBILITADO PARA ORDENAR DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)1o.3 A (10a.)	3014
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO."	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."	(III Región)4o.19 K (10a.)	2922
Ley de Amparo, artículo 117.—Véase: "INFORME JUSTIFICADO. COMPLEMENTACIÓN DEL. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER OMISIVO."	I.18o.A.3 K (10a.)	2972
Ley de Amparo, artículo 121.—Véase: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO UN SERVIDOR O FUNCIONARIO PÚBLICO NO HAYA EXPEDIDO LAS		

	Número de identificación	Pág.
COPIAS O DOCUMENTOS QUE EL OFERENTE LE HAYA SOLICITADO PREVIAMENTE, ÉSTE PODRÁ PEDIR AL JUEZ DE DISTRITO QUE REQUIERA A LOS OMISOS, ASÍ COMO EL DIFERIMIENTO DE AQUÉLLA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA PETICIÓN SE HAGA CON LA ANTICIPACIÓN PREVISTA EN EL NUMERAL 121 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE."	I.6o.T.13 K (10a.)	2905
Ley de Amparo, artículo 124.—Véase: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA."	(III Región)4o.19 K (10a.)	2922
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIE-		

	Número de identificación	Pág.
RA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA."	VII.2o.C.19 K (10a.)	3038
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.I.A. J/31 A (10a.)	1907

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Ley de Amparo, artículo 129.—Véase: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICTADO DE LA SENTENCIA."	VII.2o.C.19 K (10a.)	3038
Ley de Amparo, artículo 131.—Véase: "SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL."	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767
Ley de Amparo, artículo 131.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículo 132.—Véase: "GARANTÍA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. FORMA DE CALCULARLA CUANDO SÓLO SE CONDENA AL PAGO DE PRESTACIONES SECUNDARIAS Y EXISTE UNA CANTIDAD LÍQUIDA."	VI.2o.T.5 L (10a.)	2943

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 135.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO SÓLO TIENE VIGENCIA HASTA ANTES DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE INICIADO ÉSTE, AQUÉLLA PODRÁ CONCEDERSE Y SURTIRÁ EFECTOS SI SE CONSTITUYE GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA."	III.4o.T.9 K (10a.)	3040
Ley de Amparo, artículo 138.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
Ley de Amparo, artículo 138.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO SE ADUCE UN INTERÉS LEGÍTIMO."	XXIV.2o.1 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículo 145.—Véase: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA, CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, NO OBSTANTE QUE SE HUBIESE DICTADO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN ÉL."	XVII.1o.C.T.27 K (10a.)	2970

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 158 (abrogada).—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)]."	VI.2o.T. J/1 (10a.)	2852
Ley de Amparo, artículo 160 (abrogada).—Véase: "ACTUACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO CARECEN DE VALIDEZ NI CONTRAVIENEN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO O EL DERECHO DE DEFENSA, POR ESTAR ASENTADAS EN PAPEL TAMAÑO CARTA Y NO EN OFICIO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P. J/14 (10a.)	2572
Ley de Amparo, artículo 170, fracción I.—Véase: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DECLARA LA INCOMPETENCIA POR MATERIA Y PONE FIN AL JUICIO SIN DECIDIRLO EN LO PRINCIPAL."	II.1o.5 K (10a.)	2902
Ley de Amparo, artículo 170, fracción I.—Véase: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN."	I.9o.A.61 A (10a.)	2903
Ley de Amparo, artículo 170, fracción II.—Véase: "AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA		

	Número de identificación	Pág.
INCONSTITUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA 'SENTENCIA FAVORABLE', ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO."	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
Ley de Amparo, artículo 171.—Véase: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	VII.2o.C.20 K (10a.)	2888
Ley de Amparo, artículo 171.—Véase: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA."	(VIII Región)2o. J/1 (10a.)	2737
Ley de Amparo, artículo 172, fracciones I y XII.—Véase: "TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALI-		

	Número de identificación	Pág.
ZADO 'SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS', CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO."	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049
Ley de Amparo, artículo 172, fracciones X y XII.—Véase: "EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECLAMARSE, POR EXCLUSIÓN, COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN EL AMPARO DIRECTO, SI AQUÉLLA SE DESECHA, NO SE TRAMITA EL INCIDENTE RELATIVO O SE DECLARA INFUNDADA."	(VIII Región)2o. J/1 (10a.)	2737
Ley de Amparo, artículo 174.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES. CONFORME AL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EL QUEJOSO QUE LAS HACE VALER DEBE EXPLICAR LA FORMA EN QUE TRASCIENDEN EN SU PERJUICIO AL RESULTADO DEL FALLO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 27/2013 (10a.)]."	VI.2o.T. J/1 (10a.)	2852
Ley de Amparo, artículo 187.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES CONSTITUCIONAL EL TRÁMITE SEGUIDO CUANDO LA MAYORÍA DE SUS INTEGRANTES VOTAN EN CONTRA DE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDIX/2014 (10a.)	734
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUE-		

	Número de identificación	Pág.
RIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 59/2014 (10a.)	5
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA VALORAR LA LEGALIDAD DE LAS MULTAS IMPUESTAS A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS A DICHO CUMPLIMIENTO, CUANDO ÉSTE FUE EXTEMPORÁNEO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 61/2014 (10a.)	9
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO."	P./J. 56/2014 (10a.)	13
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."	P./J. 54/2014 (10a.)	19
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO."	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
Ley de Amparo, artículo 192.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 193.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 58/2014 (10a.)	11
Ley de Amparo, artículo 195.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 60/2014 (10a.)	7
Ley de Amparo, artículo 195.—Véase: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO."	P./J. 56/2014 (10a.)	13
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 58/2014 (10a.)	11
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."	P./J. 54/2014 (10a.)	19

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS EN LOS QUE SE CUESTIONAN CONSECUENCIAS GENERADAS INDIRECTAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO."	1a./J. 70/2014 (10a.)	640
Ley de Amparo, artículo 197.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	P./J. 59/2014 (10a.)	5
Ley de Amparo, artículo 197.—Véase: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO."	P./J. 56/2014 (10a.)	13
Ley de Amparo, artículo 201.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS		

	Número de identificación	Pág.
CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES."	1a./J. 75/2014 (10a.)	627
Ley de Amparo, artículo 201, fracción I.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO."	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
Ley de Amparo, artículo 201, fracción III.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO SINO SÓLO CONTRA AQUÉLLA QUE LA DECLARA SIN MATERIA O INFUNDADA."	1a. CCCLXXXVI/2014 (10a.)	730
Ley de Amparo, artículo 202.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN."	1a./J. 69/2014 (10a.)	658
Ley de Amparo, artículo 210.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SU PRESENTACIÓN ES OPORTUNA AUN CUANDO SE REALICE CON ANTERIORIDAD A QUE COMIENCE A CORRER EL PLAZO PARA SU INTERPOSICIÓN."	1a./J. 69/2014 (10a.)	658
Ley de Amparo, artículo 217.—Véase: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO PUEDE CONSIDERARSE VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD, EN TANTO QUE EL HECHO A REGULAR O SITUACIÓN PROCESAL A RESOLVER SEA POSTERIOR A LA VIGENCIA DE LA LEY (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 217, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO)."	I.3o.C.54 K (10a.)	2995
Ley de Amparo, artículo 223.—Véase: "AMPARO DIRECTO. AL DECLARAR *EX OFFICIO*, LA INCONSTI-		

	Número de identificación	Pág.
TUCIONALIDAD DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE LA MATERIA, PROCEDE INAPLICARLA Y DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE AQUÉL, CUANDO SE ESTÉ ANTE UNA 'SENTENCIA FAVORABLE', ESTO ES, UN FALLO DEFINITIVO DE LOS TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE NULIFIQUE –POR LA RAZÓN QUE SEA– EL ACTO IMPUGNADO, SIEMPRE QUE PRETENDA OBTENERSE UN BENEFICIO MAYOR AL ALCANZADO."	(III Región)4o.53 A (10a.)	2900
Ley de Amparo, artículo 238.—Véase: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."	P./J. 54/2014 (10a.)	19
Ley de Amparo, artículo 258.—Véase: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO."	VI.2o.T. J/2 (10a.)	2579
Ley de Amparo, artículo 258.—Véase: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO."	P./J. 54/2014 (10a.)	19
Ley de Amparo, artículo sexto transitorio.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PRO-		

	Número de identificación	Pág.
CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley de Amparo, artículo décimo transitorio (D.O.F. 2-IV-2013).—Véase: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. SI EL PROCESO SE TRAMITA Y CONCLUYE CONFORME AL SISTEMA PENAL ANTERIOR, EL INCIDENTE RELATIVO DEBE REGIRSE POR LA LEY DE AMPARO ABROGADA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013."	II.2o.P.13 K (10a.)	3044
Ley de Amparo, artículos 17 a 19.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	(IV Región)2o.7 K (10a.)	2926
Ley de Amparo, artículos 17 a 19.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD DE SU PRESENTACIÓN, DEBEN EXCLUIRSE DEL CÓMPUTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, LOS DÍAS INHÁBILES, ASÍ COMO LOS NO LABORABLES PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y EL ÓRGANO JURISDICCIONAL EN QUE SE TRAMITA EL JUICIO DE AMPARO."	I.5o.P.5 K (10a.)	2927
Ley de Amparo, artículos 17 y 18.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO."	VI.2o.C.20 K (10a.)	2904
Ley de Amparo, artículos 17 y 18.—Véase: "NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SURTEN EFECTOS		

	Número de identificación	Pág.
AL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE PRACTIQUEN, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO *PRO PERSONAE* (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO)."	XXIX.2o.2 C (10a.)	3005
Ley de Amparo, artículos 66 y 67.—Véase: "ACUMULACIÓN DE AUTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE VÍA INCIDENTAL, AUNQUE LA LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 NO CONTEMPLE EXPRESAMENTE DICHA FIGURA."	VI.2o.C.19 K (10a.)	2890
Ley de Amparo, artículos 147 y 148.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN Y ÉSTE NO SE DEMUESTRA, NO PUEDEN OTORGARSE LOS EFECTOS DE DICHA MEDIDA COMO SI AQUÉLLA SE HUBIERA IMPUGNADO CON EL CARÁCTER DE AUTOAPLICATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."	IV.2o.A.75 K (10a.)	3042
Ley de Amparo, artículos 184 a 187.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. EL TIEMPO Y ESTILO DE DISCUSIÓN DE CADA ASUNTO RESPONDEN A UNA DINÁMICA ADQUIRIDA POR LOS MAGISTRADOS QUE LOS INTEGRAN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDVII/2014 (10a.)	733
Ley de Amparo, artículos 184 a 187.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA APERTURA Y TRANSPARENCIA QUE SE BUSCA A TRAVÉS DE ÉSTAS, DEBE SER COMPATIBLE CON LA EXIGENCIA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, COMPLETA E IMPARCIAL (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDVI/2014 (10a.)	736

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículos 184 a 187.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SON ESPACIOS DE DELIBERACIÓN POLÍTICA SINO PROCESOS DE DEBATE JURÍDICO ENTRE MAGISTRADOS CUYO OBJETIVO FINAL ES LA EMISIÓN DE SENTENCIAS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDVIII/2014 (10a.)	737
Ley de Amparo, artículos 184 a 187.—Véase: "SESIONES PÚBLICAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON INSTRUMENTALES PARA LA EMISIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 184, 185, 186 Y 187 DE LA LEY DE AMPARO)."	1a. CDX/2014 (10a.)	738
Ley de Amparo, artículos 192 y 193.—Véase: "APERCIBIMIENTO DE MULTA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ES UN TRIBUNAL, INTEGRADO POR MÁS DE UN TITULAR, DEBE HACERSE A CADA UNO DE SUS INTEGRANTES (ESPECIFICANDO NOMBRE Y APELLIDOS) Y NO AL TRIBUNAL EN ABSTRACTO."	VI.2o.T. J/2 (10a.)	2579
Ley de Amparo, artículos 192 y 193.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO LES DA CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO DE 3 DÍAS, A PESAR DE HABER SIDO NOTIFICADA DE LOS REQUERIMIENTOS RESPECTIVOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR SI LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD PARA REALIZARLO AMERITA LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO, O SI EL ASUNTO REVISTE URGENCIA Y NOTORIO PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE ORDENARLO INMEDIATAMENTE POR LOS MEDIOS OFICIALES DE QUE DISPONGA, DE LO CONTRARIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL RESOLVER		

	Número de identificación	Pág.
EL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, LE DEVOLVERÁ LOS AUTOS PARA QUE LO HAGA."	XIX.1o.P.T. J/3 (10a.)	2790
Ley de Amparo, artículos 196 y 197.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO."	1a./J. 76/2014 (10a.)	605
Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, artículo 9o.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA."	XIV.P.A.2 A (10a.)	3031
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, artículo 2o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, artículo 5o.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, artículo 127, fracciones I y IX.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y		

	Número de identificación	Pág.
DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, artículos 123 a 125.—Véase: "DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO. LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LO VULNERAN CUANDO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD PARA SOLUCIONAR LA FALTA DEL VITAL LÍQUIDO EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.P.67 P (10a.)	2931
Ley de Expropiación, artículo 11.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Ley de Expropiación, artículos 1o. a 5o.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Ley de Expropiación, artículos 7o. y 8o.—Véase: "EXPROPIACIÓN. LOS PARTICULARES NO ESTÁN LEGITIMADOS PARA EXIGIR LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO CONTRA SUS BIENES, CUANDO ESTIMEN QUE ÉSTOS HAN SIDO OBJETO		

	Número de identificación	Pág.
DE ALGUNA PERTURBACIÓN U OCUPACIÓN ESTATAL INJUSTIFICADA."	XXVII.3o.9 A (10a.)	2939
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, artículo 157.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, NO SE INFRINGIÓ PORQUE EL DICTAMEN RELATIVO SE CIRCULÓ CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA."	PC.IV.A. J/4 A (10a.)	1664
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, artículo 157.—Véase: "NÓMINAS. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE DIO ORIGEN AL DECRETO NÚM. 037, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 157 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, QUE INCREMENTA LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO DEL 2% AL 3%, POR LO QUE VE A SU VOTACIÓN, NO CONTIENE VIOLACIONES FORMALES TRASCENDENTALES QUE INVALIDEN SU CONSTITUCIONALIDAD."	PC.IV.A. J/3 A (10a.)	1665
Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2013, artículo 46-BIS.—Véase: "IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO TURÍSTICO, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DESARROLLO SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA. EL ARTÍCULO 46-BIS DE LA LEY DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO NÚMERO 235, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 21 DE		

	Número de identificación	Pág.
DICIEMBRE DE 2012, QUE LO PREVÉ, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	XXVII.3o.8 A (10a.)	2969
Ley de Hacienda Municipal de Jalisco, artículo 47.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA ACTOS RELATIVOS A LA DETERMINACIÓN, LIQUIDACIÓN, EJECUCIÓN O COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL. LA EXENCIÓN PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO SÓLO TIENE VIGENCIA HASTA ANTES DE LA INSTAURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE INICIADO ÉSTE, AQUÉLLA PODRÁ CONCEDERSE Y SURTIRÁ EFECTOS SI SE CONSTITUYE GARANTÍA ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA."	III.4o.T.9 K (10a.)	3040
Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, artículos 28 Bis y 28 bis-1.—Véase: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL PREVER UNA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO MENOR A LA GENERAL PARA DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	IV.2o.A.104 A (10a.)	2892
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, artículo 16, apartado A, fracción II.—Véase: "ESTÍMULO FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, artículo tercero transitorio, fracción IV.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBU-		

	Número de identificación	Pág.
TARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL EN SU VERTIENTE DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABILIDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCI/2014 (10a.)	710
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2013, artículo tercero transitorio, fracción IV.—Véase: "CONDONACIÓN DE DEUDAS TRIBUTARIAS. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD JURÍDICA."	1a. CCCXCII/2014 (10a.)	710
Ley de la Policía Federal, artículo 4, fracción II.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Ley de la Policía Federal, artículo 4, fracción II.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Ley de la Policía Federal, artículo 16, fracción II.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016

	Número de identificación	Pág.
Ley de la Policía Federal, artículo 16, fracción II.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Ley de la Policía Federal, artículo 17, apartado A, fracción VI.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Ley de la Policía Federal, artículo 17, apartado A, fracción VI.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Ley de la Policía Federal, artículo 17, apartado B, fracciones VI y XV.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Ley de la Policía Federal, artículo 17, apartado B, fracciones VI y XV.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE		

	Número de identificación	Pág.
DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Ley de la Policía Federal, artículos 24 a 42.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Ley de la Policía Federal, artículos 24 a 42.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Ley de la Propiedad Industrial, artículo 180.—Véase: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."	PC.I.A. J/30 A (10a.)	1698
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, artículo 18.—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PRO-		

	Número de identificación	Pág.
CEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
Ley de Protección contra la Exposición al Humo del Tabaco de Nuevo León, artículo 14.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, artículo 4o., fracción III (abrogada).—Véase: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES LA VISTA DE QUINCE DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA INFORMACIÓN QUE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS REPORTAN AL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."	I.8o.A.79 A (10a.)	2928
Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, artículo 5o. (abrogada).—Véase: "IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY RESPECTIVA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVER UN PLAZO ESPECÍFICO PARA SU EMISIÓN, SIENDO APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 67 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN."	1a. CCCLXXIX/2014 (10a.)	722
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, artículo 2o.-A, fracción I.—Véase: "ESTÍMULO		

	Número de identificación	Pág.
FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16, APARTADO A, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013. NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY."	2a./J. 128/2014 (10a.)	893
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 90 (abrogada).—Véase: "RENTA. EL CRÉDITO FISCAL DETERMINADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ANTE EL INCUMPLIMIENTO EN LA PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONES, NO PUEDE CONSIDERARSE UNO DE LOS SUPUESTOS DE LA DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE INGRESOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO ABROGADA."	I.8o.A.80 A (10a.)	3027
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 109, fracción X (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013).—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 170 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2013).—Véase: "ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (AFORES). NO SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN A SUS ENCARGADOS O DIRECTORES GENERALES ACTOS DE APLICACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN DE LA CUAL SON RETENEDORAS."	I.16o.A.14 A (10a.)	2891

	Número de identificación	Pág.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 2o. (D.O.F. 24-XII-1974).—Véase: "TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA."	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 2o. (D.O.F. 30-XII-1959).—Véase: "TRABAJADORES INCLUIDOS EN LAS LISTAS DE RAYA. LA OBLIGACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS A INCORPORARLOS AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y DE CUBRIR LAS APORTACIONES RELATIVAS; SURGE A PARTIR DE LA ADICIÓN DEL APARTADO B AL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA."	PC.I.L. J/8 L (10a.)	1994
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 15 (abrogada).—Véase: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."	I.15o.T.6 L (10a.)	2914

	Número de identificación	Pág.
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 17.—Véase: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 17.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 57 (abrogada).—Véase: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. CUANDO SU MONTO SE INTEGRA CON LO COTIZADO EN DOS PLAZAS DISTINTAS, SU INCREMENTO DEBE CALCULARSE CONFORME A LAS REGLAS VIGENTES AL MOMENTO DE LA OBTENCIÓN DE LA RELATIVA A LA PLAZA MÁS ANTIGUA, SI ES LO QUE MÁS BENEFICIA AL TRABAJADOR O A SUS FAMILIARES (LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA)."	I.9o.A.60 A (10a.)	3012

	Número de identificación	Pág.
Ley del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", artículo 8o., fracción III.—Véase: "REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
Ley del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", artículos 2o. y 3o.—Véase: "REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
Ley del Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", artículos 21 y 22.—Véase: "REGLAMENTOS. PARA DETERMINAR SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ATENDERSE AL TEXTO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO QUE APARECE PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL, Y NO AL OBTENIDO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."	(III Región)4o.51 A (10a.)	3026
Ley del Seguro Social, artículo 280 (vigente hasta el 30 de junio de 1997).—Véase: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. LA EXCEPCIÓN OPUESTA POR EL SEGURO SOCIAL PARA SU OTORGAMIENTO, FUNDADA EN LA FALTA DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS DEL TRABAJADOR, ES IMPROCEDENTE SI SE VINCULA A LA FECHA EN QUE SE REALIZA SU RECLAMO."	III.4o.T.25 L (10a.)	3011
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 2o.—Véase: "DELINCUENCIA ORGANIZADA, DELITO DE. PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA		

	Número de identificación	Pág.
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, SE ACTUALIZA NO SÓLO CON LA ORGANIZACIÓN DE TRES O MÁS PERSONAS PARA COMETER ILÍCITOS, SINO QUE DEBEN DEMOSTRARSE LOS ELEMENTOS CONSISTENTES EN LA REPETICIÓN DE CONDUCTAS ILÍCITAS EN FORMA PERMANENTE O REITERADA."	VI.1o.P.25 P (10a.)	2924
Ley Federal de Derechos, artículo 49, fracción I.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Ley Federal de Derechos, artículo 225.—Véase: "COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR LOS METROS CÚBICOS DE AGUA SUSTRAÍDA DEL SUBSUELO, LO ES EL FORMATO 10-A, AUTORIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."	IV.1o.A.28 A (10a.)	2913
Ley Federal de Derechos, artículo 228.—Véase: "COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. EL DOCUMENTO IDÓNEO PARA JUSTIFICAR LOS METROS CÚBICOS DE AGUA SUSTRAÍDA DEL SUBSUELO, LO ES EL FORMATO 10-A, AUTORIZADO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA."	IV.1o.A.28 A (10a.)	2913
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, artículo 83.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE,		

	Número de identificación	Pág.
PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 1o.—Véase: "LITIS ABIERTA. ESTE PRINCIPIO PERMITE AL ACTOR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL FORMULAR CONCEPTOS DE NULIDAD SOBRE ASPECTOS QUE NO HIZO VALER EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA E, INCLUSO, PARA EVIDENCIAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN SU PERJUICIO DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ÉSTE, LOS CUALES DEBEN ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL DE LA MATERIA."	I.8o.A.83 A (10a.)	3000
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 28 (vigente hasta el 10 de diciembre de 2010).—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 42.—Véase: "NEGATIVA LISA Y LLANA DE LOS HECHOS QUE MOTIVARON EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. NO PUEDE		

	Número de identificación	Pág.
CONSIDERARSE ASÍ LA QUE SE CONTRADICE CON LOS ANEXOS DE LA DEMANDA."	(III Región)4o.52 A (10a.)	3001
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 58-2.—Véase: "VÍA SUMARIA EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA PROHIBICIÓN DE ACUMULAR EL MONTO DE LAS RESOLUCIONES, CONTENIDA EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58-2 DE LA LEY FEDERAL DE LA MATERIA, ES APLICABLE A TODAS LAS FRACCIONES DEL PRECEPTO."	2a./J. 108/2014 (10a.)	1185
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 58-8.—Véase: "RECLAMACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA POR EXTEMPORÁNEA LA DEMANDA, AL CONSIDERAR QUE NO SE PROMOVIÓ DENTRO DEL PLAZO QUE CORRESPONDE A LA VÍA SUMARIA, DICHO RECURSO DEBE INTERPONERSE EN EL DIVERSO DE CINCO DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58-8 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.10o.A.8 A (10a.)	3025
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 59.—Véase: "AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE ACTUALIZA RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL, EL PLENO DE UNA SALA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE NULIDAD ANTES DEL CIERRE DE LA INSTRUCCIÓN."	I.9o.A.61 A (10a.)	2903
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 63.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y		

	Número de identificación	Pág.
LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA."	XIV.P.A.2 A (10a.)	3031
Ley Federal de Protección al Consumidor, artículo 65 Bis.—Véase: "CASAS DE EMPEÑO. PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, TIENEN TAL CARÁCTER TODOS LOS PROVEEDORES PERSONAS FÍSICAS O MORALES NO REGULADAS POR LEYES O AUTORIDADES FINANCIERAS, QUE EN FORMA HABITUAL O PROFESIONAL, REALICEN U OFERTEN AL PÚBLICO CONTRATOS U OPERACIONES DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, INCLUYENDO LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA."	2a./J. 127/2014 (10a.)	849
Ley Federal del Trabajo, artículo 2o. (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
Ley Federal del Trabajo, artículo 18 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 20 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MA-		

	Número de identificación	Pág.
NERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 48 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 51 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER."	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887
Ley Federal del Trabajo, artículo 61.—Véase: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA TRABAJADORES DE AUTOTRANSPORTES. DEBE CONSIDERARSE DE MALA FE SI NO SE ESPECIFICA QUE LA JORNADA SEMANAL TENDRÁ UNA DURACIÓN MÁXIMA DE 48 HORAS."	VI.2o.T.3 L (10a.)	3009
Ley Federal del Trabajo, artículo 66.—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
Ley Federal del Trabajo, artículo 82 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE		

	Número de identificación	Pág.
REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS."	I.13o.T.101 L (10a.)	2993
Ley Federal del Trabajo, artículo 89.—Véase: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS."	I.13o.T.101 L (10a.)	2993
Ley Federal del Trabajo, artículo 133, fracción VII (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 152 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL		

	Número de identificación	Pág.
SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículo 503 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA."	III.3o.T.29 L (10a.)	2921
Ley Federal del Trabajo, artículo 503 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL."	III.3o.T.28 L (10a.)	2922
Ley Federal del Trabajo, artículo 517.—Véase: "ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER."	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887
Ley Federal del Trabajo, artículo 518.—Véase: "ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER."	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 561, fracción III.—Véase: "SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN."	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033
Ley Federal del Trabajo, artículo 562.—Véase: "SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN."	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033
Ley Federal del Trabajo, artículo 690 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "TERCERO INTERESADO EN MATERIA LABORAL. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE LLAMAR A JUICIO OFICIOSAMENTE CON ESE CARÁCTER AL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SECRETARÍA DE SALUD CUANDO SE DEMANDA LA EXPEDICIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DEFINITIVO EN EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 'SERVICIOS DE SALUD DE TAMAULIPAS', CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON LA XII DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO."	XIX.1o.P.T.7 L (10a.)	3049
Ley Federal del Trabajo, artículo 784, fracción VIII (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 805.—Véase: "TIEMPO EXTRA INVEROSÍMIL. PARA RESOLVER LA CONTROVERSIA RELATIVA, DEBE PONDERARSE SU VIABILIDAD EN CADA CASO CONCRETO, Y LA ABSOLUCIÓN DEL PATRÓN NO ES FORZOSA NI LA ÚNICA FORMA DE DECIDIR DICHA PRESTACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 4a./J. 20/93 Y 2a./J. 7/2006)."	XVIII.4o. J/5 (10a.)	2836
Ley Federal del Trabajo, artículo 813, fracción IV.—Véase: "PRUEBA CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. ES IMPROCEDENTE SU DESAHOGO POR OFICIO SI SE OFRECE A CARGO DEL DIRECTOR DE UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PUEBLA, POR NO TENER ESTE TIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS EL CARÁCTER DE ALTOS FUNCIONARIOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 813, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.2o.T.4 L (10a.)	3016
Ley Federal del Trabajo, artículo 841.—Véase: "RELACIÓN DE TRABAJO. LA CARTA PODER OTORGADA POR EL DEMANDADO AL ACTOR, QUE CONTIENE UN RECONOCIMIENTO EXPRESO DE QUE ÉSTE ES SU TRABAJADOR Y QUE LABORA EN EL DOMICILIO SEÑALADO COMO EL DE LA FUENTE DE PRODUCCIÓN, ES SUFICIENTE PARA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE DICHO VÍNCULO ENTRE AMBOS."	III.4o.T.24 L (10a.)	3026
Ley Federal del Trabajo, artículo 841 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN."	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 843.—Véase: "SALARIO. NO DEBE CALIFICARSE COMO INVEROSÍMIL SI NO FUE CONTROVERTIDO POR EL PATRÓN, YA QUE LA JUNTA NO PODRÍA RESOLVER EN CONCIENCIA Y A VERDAD SABIDA ANTE LA COMPLEJIDAD DE SU FIJACIÓN."	(VIII Región)2o.7 L (10a.)	3033
Ley Federal del Trabajo, artículo 873 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIONES CONTRADICTORIAS EN MATERIA LABORAL. SI EL TRABAJADOR DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO Y, A SU VEZ, LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉL, LA JUNTA DEBE PREVENIRLO PARA QUE INDIQUE LA ACCIÓN QUE DESEA PROMOVER."	XIX.1o.P.T.6 L (10a.)	2887
Ley Federal del Trabajo, artículo 892 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MATERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA."	III.3o.T.29 L (10a.)	2921
Ley Federal del Trabajo, artículo 892 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. SE TRAMITA COMO UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, Y NO PARAPROCESAL."	III.3o.T.28 L (10a.)	2922
Ley Federal del Trabajo, artículo 896.—Véase: "DECLARATORIA DE BENEFICIARIOS DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. AL TRATARSE DE UNA HIPÓTESIS QUE DEBE TRAMITARSE CONFORME A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL EN MA-		

	Número de identificación	Pág.
TERIA LABORAL, CONSTITUYE UN VERDADERO JUICIO EN EL QUE SE OTORGA A LAS PARTES LA OPORTUNIDAD DE AUDIENCIA Y DEFENSA."	III.3o.T.29 L (10a.)	2921
Ley Federal del Trabajo, artículos 2o. y 3o. (vigentes hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley Federal del Trabajo, artículos 49 y 50.—Véase: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. SI LA JUNTA DECLARA PROCEDENTE DICHA EXCEPCIÓN Y CONDENA AL PAGO DE LOS CONCEPTOS DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO COMO PRESTACIONES INDEPENDIENTES, DESDE EL DESPIDO Y HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL LAUDO, ES IMPROCEDENTE INTEGRARLOS AL ESTIPENDIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA CALCULAR LOS SALARIOS CAÍDOS."	I.13o.T.101 L (10a.)	2993
Ley Federal del Trabajo, artículos 841 y 842 (vigentes hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "ACCIÓN DE REINSTALACIÓN O DE INDEMNIZACIÓN. EL HECHO DE QUE EL TRABAJADOR DEMANDE EL PAGO DEL SALARIO CORRESPONDIENTE AL DÍA EN QUE ADUJO FUE DESPEDIDO, NO CONLLEVA DE MANERA NECESARIA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN."	2a./J. 107/2014 (10a.)	1056
Ley General de Salud, artículo 13, apartado B, fracción I.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y,		

	Número de identificación	Pág.
CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 73.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER QUIENES NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL SIEMPRE QUE SUS FUNCIONES SEAN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y ESTÉN VINCULADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL."	I.6o.T.117 L (10a.)	3050
Ley General para el Control del Tabaco, artículo 27.—Véase: "PROTECCIÓN CONTRA LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL TABACO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY RELATIVA NO CONTRADICE EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y, CONSECUENTEMENTE, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL."	IV.2o.A.100 A (10a.)	3015
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, artículo 44 (abrogada).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, artículo 84 (abrogada).—Véase:		

	Número de identificación	Pág.
"AVERIGUACIÓN PREVIA. CUANDO EL ACUSADO REQUIERA COPIAS DE ÉSTA, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE DETERMINAR, EN CADA CASO, SI EL DERECHO U OBLIGACIÓN QUE HAYA ORIGINADO LA SOLICITUD EXIGE QUE SEAN SIMPLES O CERTIFICADAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ABROGADA)."	XXVII.3o.10 P (10a.)	2906
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo, artículo 84 (abrogada).—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 13, fracción III.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. TIENEN ESE CARÁCTER QUIENES NO PERTENEZCAN A LA CARRERA POLICIAL SIEMPRE QUE SUS FUNCIONES SEAN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL Y ESTÉN VINCULADAS A LA SEGURIDAD NACIONAL."	I.6o.T.117 L (10a.)	3050
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 34, fracciones I y II.—Véase: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATAMIENTO DEL IMPUTADO. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, INCISO E), EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO F), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DEBE INTERPRE-		

	Número de identificación	Pág.
TARSE DE CONFORMIDAD CON AQUEL DERECHO FUNDAMENTAL."	1a. CCCLXXXI/2014 (10a.)	728
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 49, fracción IV.—Véase: "EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO."	2a./J. 120/2014 (10a.)	924
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 10, fracción XI.—Véase: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. SU TRÁMITE EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."	P./J. 55/2014 (10a.)	18
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 29, fracción V.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO."	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 37, fracción VI.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO DE DISTINTA JURISDICCIÓN, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO PENAL FEDERAL. SE SURTE A FAVOR DEL TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO."	1a./J. 60/2014 (10a.)	700
Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, artículos 138 a 140.—Véase: "REVISIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS ORDINARIAS DEL TRIBUNAL DE LO CON-		

	Número de identificación	Pág.
TENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, AL RESOLVER UN JUICIO DE NULIDAD EN LA VÍA SUMARIA, ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO."	I.8o.A.82 A (10a.)	3030
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 14, fracciones XI y XVI.—Véase: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS TRAMITADO CONFORME A LA LEY RELATIVA, DEBE AGOTARSE, PREVIO AL AMPARO, LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN ESE ORDENAMIENTO Y, EN SU CASO, EL RECURSO DE REVISIÓN A QUE ALUDE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL."	IV.2o.A.103 A (10a.)	2893
Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, artículo 26.—Véase: "SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL."	PC.I.A. J/28 K (10a.)	1767
Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, artículo 2, fracción II (D.O.F. 31-V-2010).—Véase: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, artículo 2, fracción II (D.O.F. 31-V-2011).—Véase: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA		

	Número de identificación	Pág.
DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
Manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, artículo 2, fracción II (D.O.F. 31-V-2012).—Véase: "COMPENSACIÓN GARANTIZADA DE LOS TRABAJADORES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. NO FORMA PARTE DE LA BASE DE CÁLCULO PARA DETERMINAR LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL."	I.15o.T.6 L (10a.)	2914
Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, artículo 12.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.—Véase: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO."	2a. CVIII/2014 (10a.)	1192
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.—Véase: "SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE		

	Número de identificación	Pág.
COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO."	2a. CVIII/2014 (10a.)	1192
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, artículo 20.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 116/2014 (10a.)	960
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, artículo 20.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, artículo 22.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 116/2014 (10a.)	960

	Número de identificación	Pág.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007, artículo 22.—Véase: "PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. SUS ARTÍCULOS 20 Y 22 NO TRANSGREDEN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIONES IV, VI, IX, XI Y XIV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 115/2014 (10a.)	961
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", artículos 9 y 10.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LA CONCEDIDA AL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA DADO DE BAJA EN DEFINITIVA DEL SERVICIO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL EFECTO DE QUE SE LE SIGA PRESTANDO EL SERVICIO MÉDICO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO, NO PUEDE CONDICIONARSE AL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN, EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD."	IV.3o.A.32 K (10a.)	3042
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, artículo 15.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD LISA Y LLANA DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA AFIRMATIVA FICTA."	XIV.P.A.2 A (10a.)	3031
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 19.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016

	Número de identificación	Pág.
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 19.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 101.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículo 101—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículos 197 a 205.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 111/2014 (10a.)	1016
Reglamento de la Ley de la Policía Federal, artículos 197 a 205.—Véase: "POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO		

	Número de identificación	Pág.
QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	2a./J. 112/2014 (10a.)	1017
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, artículo 5o., fracción I (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)—Véase: "PROPIEDAD INDUSTRIAL. LAS SOLICITUDES O PROMOCIONES DEL INTERESADO O DE SU REPRESENTANTE DIRIGIDAS AL INSTITUTO RELATIVO QUE CAREZCAN DE FIRMA AUTÓGRAFA DEBEN DESECHARSE DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 180 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN QUE PROCEDA REQUERIMIENTO O PREVENCIÓN DE LA AUTORIDAD MARCARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN I, Y TERCER PÁRRAFO, DE SU REGLAMENTO, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011."	PC.I.A. J/30 A (10a.)	1698
Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, artículo 1.—Véase: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA."	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, artículo 2, fracción IV.—Véase: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA		

	Número de identificación	Pág.
HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA."	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, Nuevo León, artículo 9.—Véase: "BOLETA DE INFRACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRÁNSITO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN. SE ENCUENTRA FUNDADA Y MOTIVADA, SI LA AUTORIDAD CITA LOS HECHOS QUE CONSIDERÓ MOTIVO DE INFRACCIÓN, ASÍ COMO LA HIPÓTESIS EN QUE ENCUADRÓ LA CONDUCTA CON EL SUPUESTO DE LA NORMA."	IV.1o.A.30 A (10a.)	2911
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 58.—Véase: "PLAZO PARA LA EMISIÓN DE RESOLUCIONES FISCALES. LA TESIS JURISPRUDENCIAL P./J. 10/2013 (10a.), DEL TRIBUNAL PLENO, ES DE CARÁCTER TEMÁTICO."	1a. CCCLXXX/2014 (10a.)	726
Reglamento del Ministerio Público de Quintana Roo, artículo 40.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 40 DEL REGLAMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO, 84 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA ABROGADA Y 522, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES ABROGADO, TODOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A SI EL INCULPADO PUEDE O NO OBTENER COPIAS DE AQUÉLLA, CUANDO LAS REQUIERA PARA EJERCER SU DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A LOS DATOS NECESARIOS PARA SU DEFENSA, DEBE RESOLVERSE A FAVOR DE LAS NORMAS PERMISIVAS, EN DEMÉRITO DE LA PROHIBITIVA."	XXVII.3o.9 P (10a.)	2907
Reglamento Interior del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, artículo 24.—Véase: "LAUDOS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. CARECEN DE VALIDEZ SI SON FIRMA-		

	Número de identificación	Pág.
DOS POR EL JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO INTERIOR, AL NO TENER DICHO FUNCIONARIO FE PÚBLICA NI HABER SIDO DESIGNADO PARA SUPLIR LA AUSENCIA DEL SECRETARIO GENERAL AUXILIAR DE LA SALA RESPECTIVA."	I.13o.T.109 L (10a.)	2999
Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 12.—Véase: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL."	2a. CXII/2014 (10a.)	1191
Reglas de Carácter General en materia de Comercio Exterior para 2010, 1.6.35.—Véase: "COMERCIO EXTERIOR. LAS CONTRAPRESTACIONES PREVISTAS POR LA REGLA 1.6.35 DE LAS DE CARÁCTER GENERAL EN ESA MATERIA PARA 2010, NO CONSTITUYEN DERECHOS, POR LO QUE LA UTILIZACIÓN DEL CONCEPTO 'DERECHO DE TRÁMITE ADUANERO' A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS PARA SU CÁLCULO NO AFECTA SU REGULARIDAD CONSTITUCIONAL."	2a. CXIII/2014 (10a.)	1189
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, reglas I.2.8.6. y I.2.8.7. (D.O.F. 4-VII-2014).—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 28, 42 Y 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 34 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO DE LAS REGLAS I.2.8.6. Y I.2.8.7. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL		

	Número de identificación	Pág.
PARA 2014, RELATIVOS A LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD ELECTRÓNICA Y ENVIARLA A LA AUTORIDAD A TRAVÉS DEL BUZÓN TRIBUTARIO."	III.2o.A.60 A (10a.)	3045
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículo 401.—Véase: "TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE."	I.4o.A.98 A (10a.)	3066
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, artículos 501 a 506.—Véase: "TRATO ARANCELARIO PREFERENCIAL. LA OBLIGACIÓN DE SOPORTAR DOCUMENTALMENTE EL ORIGEN DE UN BIEN CUANDO SE SOLICITÓ AQUÉL, SÓLO SE ACTUALIZA TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN CONSISTENTE EN LA VISITA A LAS INSTALACIONES DE UN EXPORTADOR O PRODUCTOR, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 506, PUNTO 1, INCISO B), DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE."	I.4o.A.98 A (10a.)	3066